



## **UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE**

**DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA**

**PROGRAMA DE DOCTORADO: “Europa, el Mundo Mediterráneo y su difusión  
Atlántica. Métodos y Teorías para la investigación histórica”**

**Tesis Doctoral**

### **La construcción de los Estados provinciales en el Río de la Plata Poder político, institucionalización y conflictividad Entre Ríos, 1820 - 1840**

**Tesista: Sonia Rosa TEDESCHI**

**Directores: Bartolomé YUN CASALILLA (UPO)  
José Carlos CHIARAMONTE (Director externo)**

**2015**



## **Agradecimientos**

Quiero expresar un sincero agradecimiento a personas que me han acompañado a lo largo de mi formación académica de posgrado y del desarrollo de esta investigación de distintas maneras, a riesgo de dejar injustamente a muchas sin mencionar.

A mis Directores de Tesis. Al Dr. Bartolomé Yun Casalilla, por responder a mis demandas académicas con prontitud y gentileza. Por proponerme desafíos teórico - metodológicos para que pudiera pensar y resolver problemas generales y específicos de mi estudio; recuerdo, por ejemplo, las ocasiones en las que departimos largamente sobre la importancia de las fronteras en la historia, un aporte central para el desarrollo de mi trabajo. Al Dr. José Carlos Chiaramonte, que es también mi director de investigación en Argentina, por su orientación hacia una reflexión más profunda y rigurosa, por su aguda crítica a mis avances, por ser permanente fuente de estímulo. Esta instancia en mi carrera académica es propicia también para expresarle mi gratitud por su generosa vocación de maestro a lo largo de tantos años, por su calidad humana, por ser el pilar de mi formación disciplinar.

A las personas con quienes compartí una rica experiencia académica y humana en la Universidad Pablo de Olavide. A mis profesores que impartieron los seminarios y las provechosas tutorías, particularmente al Dr. Manuel Herrero Sánchez -por su apoyo entusiasta y su interés por mi labor-. Al Dr. Igor Pérez Tostado por su inapreciable ayuda y solidaridad. Una mención especial a mis tutores de la tesina de investigación, Dres. Giovanni Levi y Pedro Pérez Herrero, fundamentales en el desarrollo de mi oficio de historiadora. A la Dra. Bethany Aram por su siempre cordial recepción en la UPO. A la Dra. Maria Laura Salinas, por apoyarme en mi decisión de empezar este Doctorado. A mis queridos compañeros de estudio: Rocío, Katia, Eleonora, Cecilia, Fran, Huemac, Cristóbal, Ariel, Tiago.

A la Dra. Marcela Ternavasio por su confianza, su apoyo intelectual y afectivo. A la Dra. Noemí Goldman, con quien comencé a pensar algunos de los temas desarrollados en esta investigación, por sus enseñanzas y su entrañable amistad.

A los miembros del Programa de Historia Argentina Siglo XIX con sede en el Instituto Dr. Emilio Ravignani, con quienes mantuve fructíferas discusiones sobre mi tema de investigación, especialmente al Dr. Roberto Schmit, por sus importantes sugerencias y críticas vertidas sobre mis primeros borradores del proyecto de tesis. A los miembros del Programa Interuniversitario de Historia Social Enfoque Regional y del Comité de Historia, Regiones y Fronteras (AUGM), en particular a las Dras. Ana Frega y Maria Medianeira Padoin, por los comentarios recibidos en distintas jornadas de trabajo y las conversaciones sobre la investigación que continuaban café mediante.

A las integrantes de mi equipo de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, con quienes debatí sucesivos avances y a mi equipo de la Cátedra de Historia Argentina por hacer menos difícil el trabajo de investigar y estar, al mismo tiempo, al frente de las clases. A la Prof. Lidia Acuña, por acogerme con generosidad y afecto en el Centro de Investigación que dirige.

A las Profs. Griselda Pressel y Nora Souto, a Beatriz Gómez y Enrique Rabe por su cálida amistad y su tiempo para escuchar las vicisitudes en la vida de una tesista.

A los directivos y personal del Archivo de Santa Fe, Archivo Gral. del Uruguay y Archivo Histórico de Rio Grande do Sul por su inestimable asistencia profesional. Al Director Prof. Damián Capdevila y auxiliares del Archivo de Entre Ríos por su colaboración y por hacer más gratos mis viajes a la ciudad de Paraná.

Agradezco el apoyo institucional y económico brindado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral para la realización de los cursos del Doctorado y de esta tesis, con un reconocimiento especial al Prof. Claudio Lizárraga, Decano de la FHUC, ferviente impulsor del estudio de las Humanidades.

Al personal de la residencia universitaria Flora Tristán: Juan, Alfonzo, Ana. A mis compañeras Eliani, Fernanda, Zoila, Maria, mi gratitud a Sofía, Alfonzo e Isabelita por

haberme recibido en su hogar con tanto cariño, a los vecinos del Barrio Las Letanías por las hermosas vivencias cotidianas en un rincón de las “Tres mil”.

A los Dres. Alejandro Álvarez Gardiol y Ricardo Venier, un homenaje personal a través de la poética de Juan L. Ortiz: Oh, la invencible luz de la vida...

Finalmente, dos dedicatorias que son una. La primera a mi padre Antonio que me dejó su amor y la alegría de su música, a mi madre Rosa a quien extraño mucho, a mi hermana Elda y a Elsa, tres queridas mujeres a quienes agradezco la atención de mi hogar durante mis ausencias por estudio. La segunda, a mi familia más próxima por brindarme amor, confianza y la compañía, mate en mano, durante muchas de las horas de estudio: a mi esposo Juan y a mis hijos Javier y Pablo quienes, al partir para mi primera estancia en Sevilla, me expresaron generosa y comprensivamente: “tu proyecto es también el nuestro”.

## Tabla de contenido

<b>Agradecimientos</b>	<b>2</b>
<b>Tabla de contenidos</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>8</b>
<b>CAPÍTULO I. Antecedentes historiográficos</b>	<b>22</b>
<b>I.1. La construcción del Estado en Latinoamérica: indagando en los nuevos debates</b>	<b>22</b>
<b>I.2. La historia de Entre Ríos: entre los legados historiográficos tradicionales y las nuevas perspectivas de análisis</b>	<b>37</b>
<b>CAPÍTULO II. Una región de América meridional entre la colonia y las primeras décadas independientes. Los “Entre – ríos”: ambiente, territorio, construcción política y social del espacio</b>	<b>45</b>
<b>II.1. Una aproximación a las dimensiones geográficas y ambientales</b>	<b>48</b>
<b>II.2. Los “Entre-ríos”: variables estratégicas del dominio colonial español</b>	<b>53</b>
<b>II.2.a. Las tierras de la “otra Banda” en la colonia temprana</b>	<b>54</b>
<b>II.2.b. El siglo XVIII: cambios jurisdiccionales y jerarquización territorial</b>	<b>55</b>
<b>II.2.c. Las Reformas borbónicas: nuevos cambios jurisdiccionales y ocupación estratégica en un área de frontera</b>	<b>57</b>
<b>II.3. El Río de la Plata independiente: Del poder revolucionario centralista a la nueva conformación política de los Estados provinciales. La autonomía entrerriana</b>	<b>59</b>
<b>II.4. Entre Ríos y sus áreas de frontera entre 1820 y 1840</b>	<b>67</b>
<b>II.5. Sociedad y economía entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX</b>	<b>74</b>
<b>II.5.a. El poblamiento</b>	<b>74</b>
<b>II.5.b. Las actividades económicas</b>	<b>80</b>
<b>II.5.c. Los circuitos económicos. Las comunicaciones</b>	<b>84</b>
<b><u>PRIMERA PARTE:</u> Configuración estatal: Poder político e institucionalización</b>	<b>90</b>
<b>Instituciones, soberanía y representación política</b>	<b>92</b>
<b>CAPÍTULO III. La “lengua constitucional”: establecimiento y dinámica de las regulaciones legales</b>	<b>95</b>
<b>III.1. Reglamentos y Estatuto.</b>	<b>97</b>

III.1.a. El derecho de Patronato.	106
III.1.b. La presentación del Estatuto: el Manifiesto y el juramento	108
III.1.c. Las disposiciones estatutarias: gobierno, representación, ciudadanía	109
III.1.d. La Justicia.	116
<b>CAPÍTULO IV. El acceso a los cargos públicos: la elección como vía legitimadora de la autoridad</b>	<b>120</b>
<b>IV. 1. Elecciones de diputados provinciales</b>	<b>121</b>
IV.1.a. Legislación electoral	122
IV.1.b. Las prácticas electorales	131
IV.1.c. Los lugares de las reuniones electorales. Las autoridades de mesa	133
IV.1.d. Elecciones de 1821, 1825, 1827 y 1829: Votantes y certificantes de actas	136
<b>IV.2. Las elecciones de gobernador</b>	<b>143</b>
IV.2.a. Elecciones antes del Estatuto	148
IV.2.b. Elecciones después del Estatuto	150
<b>CAPÍTULO V. Tipos de representación política: ¿Mandato imperativo o mandato libre?</b>	<b>166</b>
<b>V.1. La representación política interna: los diputados en el Congreso provincial entrerriano</b>	<b>167</b>
<b>V.2. La representación política externa: agentes diplomáticos, comisionados, diputados, encargados de negocios</b>	<b>180</b>
V.2.a. Diputados a Congresos y Convenciones Constituyentes	184
V.2.b. Diputados a reuniones para la firma de Tratados y Pactos	190
V.2.c. Encargados de Negocios	195
<b>CAPÍTULO VI. Distribución y ejercicio del poder político. La concesión de Facultades Extraordinarias a los gobernadores</b>	<b>197</b>
<b><u>SEGUNDA PARTE</u> Construyendo el Estado en un convulsionado contexto regional</b>	<b>206</b>
<b>Un orden político acosado: militarización, conflictos internos e impacto financiero</b>	<b>208</b>
<b>CAPÍTULO VII. Actores e instituciones en escenarios de conflicto</b>	<b>215</b>

<b>VII.1. La organización militar</b>	<b>215</b>
<b>VII.1.a. Antecedentes de origen colonial y revolucionario en el Río de la Plata</b>	<b>215</b>
<b>VII.1.b. La trama militar en Entre Ríos: aspectos organizativos y judiciales</b>	<b>219</b>
<b>VII.2. Construcción estatal, poder político y conflictos. Su dinámica</b>	<b>231</b>
<b>VII.2.a. Fronteras porosas: asedio, intrigas, acciones militares. 1822-1823</b>	<b>232</b>
<b>VII.2.b. Tierra pública e inversiones externas: tensiones rurales en torno a la propiedad y a la autoridad. 1824-1825.</b>	<b>248</b>
<b>VII.2.c. Convergencias en una elección disputada: poder local, regional y “nacional” en un contexto de guerra. 1825-1826.</b>	<b>252</b>
<b>VII.2.d. El ganado como botín de guerra: derivaciones económicas y políticas. 1827.</b>	<b>257</b>
<b>VII.2.e. Un nudo histórico: de la violencia armada y la larga controversia política a la negociación y el consenso. 1830-1832.</b>	<b>261</b>
<b>CAPÍTULO VIII Las finanzas públicas en tiempos de transformación política</b>	<b>266</b>
<b>VIII.1. La trama fiscal en Entre Ríos: legislación, organización y prácticas</b>	<b>268</b>
<b>VIII.1.a. La estructura fiscal: planta de empleados y mecanismos de funcionamiento</b>	<b>270</b>
<b>VIII.1.b. El sistema financiero provincial: Ingresos y Gastos</b>	<b>273</b>
<b>VIII.1.b.1. Los Ingresos</b>	<b>278</b>
<b>VIII.1.b.2. Variaciones de la política fiscal</b>	<b>297</b>
<b>VIII.1.b.3. Los Gastos</b>	<b>304</b>
<b>VIII.2. Las finanzas públicas de Entre Ríos: algunas comparaciones con otras experiencias fiscales rioplatenses del período</b>	<b>309</b>
<b>CONCLUSIONES FINALES</b>	<b>315</b>
<b>Apéndice: La historia que sigue... Un recorrido historiográfico sobre la localidad y la región: Entre Ríos entre 1832 y 1840.</b>	<b>334</b>
<b>ANEXO FINAL</b>	<b>346</b>
<b>Fuentes</b>	<b>404</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>408</b>





## INTRODUCCIÓN

La convicción de que la Historia tiene que ocupar un papel relevante en el tratamiento y discusión de los problemas de las sociedades actuales me condujo a elaborar, hace algunos años, una reflexión acerca de la construcción del poder político y la cuestión ciudadana con perspectiva histórica en Latinoamérica a inicios del siglo XXI.<sup>1</sup> En ella reconocía a la débil cultura de la legalidad como uno de los retos más importantes para las democracias latinoamericanas. Desde la conciencia de una realidad contemporánea que hunde sus raíces en un pasado signado por el hecho colonial, es posible hacer visible una multitud de actitudes, representaciones, decisiones y formas de afrontar las exigencias de la vida social pretérita que están aún vivas. Una realidad contemporánea que se puede explicar mejor si se la aborda en términos de proceso dotado de historicidad, una historicidad que permite comprender al poder político, la cuestión ciudadana y las instituciones en la restitución de su complejo devenir, fundados en formas estructurales que se fueron moldeando entre herencias y novedades, entre aciertos y desaciertos, en proyectos que se concretaron y otros que quedaron en el camino y a los que no hay que descalificarlos ni menguarlos en su importancia a la hora de examinar esa construcción política; una sociedad dinámica y vital que formula y reformula permanentemente en respuesta a contextos más amplios, relaciones sociales, necesidades coyunturales y va construyendo su propia historia.

En esa dirección, la interpelación a nuestro presente latinoamericano precisa incorporar análisis históricos sobre la construcción del poder político y sus relaciones internas desarrollada luego de las Independencias, las formas básicas del Estado republicano y la evolución de la representación política y el estado de Derecho, registrando en ese largo camino recorrido los índices de conflictividad y acuerdos sostenidos en los sistemas implementados. En este sentido, el conocimiento del proceso de construcción de los actuales Estados latinoamericanos ha experimentado, en las últimas tres décadas, importantes avances renovadores que pueden contribuir a esa interpelación y que están

---

<sup>1</sup> Tedeschi, Sonia "Latinoamérica Siglo XXI: una reflexión acerca del rol de la historia en el tratamiento de los problemas del presente" En Anexo Final.

insertos en los nuevos debates alrededor de la llamada globalización, la ciudadanía, el Estado nación, los regionalismos. A través de la crítica historiográfica y de nuevas interpretaciones sobre sus problemas rectores, dicho proceso se ha revelado como una construcción histórica para nada inamovible, con diferentes ritmos y características según los casos que se traten. Un resultado que contribuye a desmitificar visiones instaladas por dirigentes políticos e intelectuales del siglo XIX y principios del XX, que postulaban la existencia de estas naciones ya en el momento de quiebre colonial y las independencias.<sup>2</sup> Uno de los rasgos importantes de esos avances historiográficos es el de destacar la profundización del análisis desde enfoques descentralizados, a fin de desarticular los recortes territoriales de matriz nacional en que se pensaban ciertas explicaciones y que obturaban, en definitiva, el conocimiento y la comprensión integral de ese fenómeno. En efecto, las historias nacionales en su mayoría han estado signadas por ese rígido esquema de interpretación, el que también fue adoptado como referente por las historias configuradas a escala provincial y/o departamental. Obras que han remarcado ciertos sucesos referidos a la construcción del Estado, la Nación, la Provincia, explicando procesos generales con enfoque centralizado –centro/periferia-y opacando otros aspectos de la vida social en amplitud de relaciones que son imprescindibles en el análisis, propuestas que poseen, sin duda, una fuerte implicancia ideológica y que operaron por mucho tiempo como una auténtica “prisión historiográfica”.<sup>3</sup> En

---

<sup>2</sup> A fines del siglo XIX, una corriente historiográfica en Argentina -con exponentes tales como Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López- postulaba una conciencia nacional ya formada en 1810 que dio paso a la independencia de España. Postulado que coincidía con los esfuerzos de la dirigencia política de la época por conformar una comunidad nacional homogénea y fortalecida por vínculos de argentinidad de origen remoto. Iguales presupuestos cabían para México, Chile y el mundo andino. Sus herramientas conceptuales y sus narrativas se dirigían a descubrir en ese momento la manifestación de un destino ineluctable consagrado en cada Estado nación. Cf. Chiaramonte, José Carlos, 1991a. A principios de la década de 1840, se intentó sin éxito conformar un Estado con las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe junto a la República Oriental del Uruguay y el Estado de Rio Grande do Sul. En Guazelli, Cesar. *O Horizonte da Província: a República Rio-Grandense e os Caudilhos do Rio da Prata (1835-1845)*, Porto Alegre, Linus, 2013, Cap. 3. (Base Tese Doutorado 1998). Los planes de anexión de Cuyo a Chile y y de Jujuy a Bolivia, demuestran también que no existía un proyecto de nación argentina en la primera mitad del siglo XIX, sino varias opciones de construcción estatal.

<sup>3</sup> Así describe el historiador colombiano Germán Colmenares al efecto de las historias nacionales latinoamericanas de fines del siglo XIX sobre sucesivas generaciones de historiadores, las que reprodujeron esos cánones de interpretación por largo tiempo. En Malerba, Jurandir *La historia en América Latina. Ensayo de crítica historiográfica*, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2010, p. 86. Por su parte, Michael Keating resalta similares características en las historias nacionales europeas y su papel en la construcción de visiones rígidas sobre la formación de los estados-

un cambio del ángulo de observación, la historia regional, como alternativa analítica y práctica historiográfica intenta recuperar la importancia de las realidades locales, localizadas y localizables frente a la consagración tradicional de los centros de poder, las metrópolis, los polos de desarrollo. Sin desestimar estos centros y polos, se trata también de ponerlos en contacto con esas realidades y entender su dinámica de relación. A la vez, se busca superar la visión reduccionista basada en el fundamento geográfico o en la concepción de una entidad fija, cerrada y homogénea, introduciendo otras variables que enriquezcan la capacidad explicativa para ciertos estudios históricos. El estudio de áreas fronterizas, que incorporo en este trabajo específico, implica evidentemente una descentralización del enfoque.

De acuerdo a estos planteos previos y en procura de una nueva lectura del proceso de construcción estatal en el Río de la Plata, esta investigación reconoce la premisa de que no existió luego de la revolución de 1810 y en toda la primera mitad del siglo XIX, un Estado, un gobierno y una economía “nacionales” sino que, por el contrario, existieron varias opciones de construcción estatal, orientaciones y posibilidades de crecimiento. En este sentido, mi interés radica en el análisis de las etapas de formación de Estados provinciales desde 1820. El concepto de Estado provincial como forma histórica y particular del poder que he escogido es el de una nueva forma de entidad política organizada desde el núcleo de cada ciudad del antiguo virreinato y su dominio rural, asumido como soberano e independiente. La calidad estatal estaría reflejada en las Constituciones dictadas, afirmando una serie de prerrogativas en campos tales como justicia, finanzas públicas, comercio, defensa, relaciones interprovinciales, amonedación, regulación de pesas y medidas, ejercicio de Patronato, educación (Chiaramonte J.C., 1993, pp. 116-117). Para una mayor comprensión, ese proceso formativo debe enmarcarse en una nueva política pactista interprovincial que configurará, a partir del Pacto de 1831, una organización confederal. Estas problemáticas abiertas luego de la independencia

---

nación. Al mismo tiempo refiere a toda una revisión historiográfica sobre estas corrientes nacionalistas, en particular al cuestionamiento sobre el mito de Westfalia (Paz de 1648) que instaló el modelo de Estados soberanos, que muestran la posibilidad de diferentes resultados históricos y cómo gran parte de la historiografía del siglo XIX había ocultado esos resultados, decidida como estaba a elogiar el Estado-nación, Cf. Keating Michael, 2006, pp. 37-56.

de España han sido objeto de investigaciones recientes que las abordan desde distintos ángulos y para variados espacios regionales. Si bien el Estado de Buenos Aires todavía sigue siendo preponderante en cuanto a resultados de investigación y nivel de conocimiento, en la última década se ha avanzado en la indagación de otros Estados que revelan la complejidad del proceso y la necesidad, pendiente aún, de profundizarla desde otros planteos teóricos y empíricos y de arribar a obras síntesis a partir de una perspectiva comparada que muestre posibles generalizaciones y especificidades, vacancias de conocimiento, variaciones del tiempo histórico, nuevas periodizaciones, permanencias y cambios, etc.

En el marco de esas preocupaciones mayores, los problemas históricos que, concretamente, quiero abordar refieren al pasaje de una sociedad hispanocriolla extremadamente conflictiva hacia otra basada en mayores consensos y acuerdos. Este problema específico no puede considerarse aislado puesto que se sitúa en un tiempo histórico signado por transformaciones profundas compartidas por otros procesos sociales latinoamericanos y europeos, lo que potencia eventuales comparaciones regionales, de manera diacrónica y sincrónica.

En la necesidad de ahondar en la caracterización de ese pasaje, me propuse indagar en un proceso histórico regional, que atañe de manera central al Estado provincial en formación de Entre Ríos, durante la primera mitad del siglo XIX, en una dimensión temporal signada por la Revolución, la Independencia y los intentos de construcción estatal sobre bases legales y legítimas de poder. Los problemas históricos que se abordarán están insertos en una realidad histórica regional: el Litoral fluvial rioplatense. En la búsqueda de claves de interpretación de ese tránsito social se plantearán cuestiones de relevancia que corresponden a las variaciones de la cultura política en el Río de la Plata y al debate sobre la naturaleza de las entidades políticas y las formas de gobierno.

La elección de este tema está directamente relacionada a las inquietudes que han orientado mi propia trayectoria de investigación desde sus inicios, traducida en estudios previos sobre la construcción del Estado provincial en el Litoral rioplatense, específicamente sobre la experiencia de Santa Fe entre 1819

y 1838 bajo el régimen de un caudillo fuerte.<sup>4</sup> Trabajos propios y en colaboración examinaron aspectos tales como el desarrollo de las finanzas públicas santafesinas, la actuación del Cabildo, la estructura militar y los negocios particulares de su gobernador Estanislao López, bases y mecanismos de legalidad y legitimidad, políticas estatales en la frontera, relaciones interprovinciales; el tratamiento de estos temas por parte de la historiografía provincial también concitó mi atención y derivó en análisis sobre discursos, imaginarios y construcción de la memoria social.<sup>5</sup> En mis estudios sobre el proceso formativo del Estado santafesino, dos temas sobresalían en su relación con el Estado de Entre Ríos: por un lado, las disputas por el poder regional en sus dimensiones política y militar y por otro, las vinculaciones económicas y sociales con viejos antecedentes coloniales que se manifestaban a través de actividades productivas, circuitos comerciales, abastecimiento, contrabando, redes familiares, sociedades económicas, entre otras. Estos enlaces concitaron mi interés y fueron punto de partida del desarrollo de esta investigación. Por otra parte, evalué que esa experiencia previa de investigación sobre Santa Fe podía operar positivamente en la aplicación de posibles comparaciones puntuales de contraste que distanciaran la mirada sobre mi objeto de estudio y lo perfilaran mejor en algunos aspectos; en este sentido está prevista la observación en el nivel de sus relaciones interprovinciales, mantenidas durante el período de estudio, en términos de influencia, acuerdos y conflictos y en el nivel de

---

<sup>4</sup> Investigaciones realizadas en el marco de proyectos financiados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), dirección: José Carlos Chiaramonte, Sede: Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" (CONICET/UBA) además de los Proyectos CAI+D de la Universidad Nacional del Litoral.

<sup>5</sup> Trabajos en colaboración: Chiaramonte, Cussianovich, Tedeschi, 1993: pp. 77-116. Goldman N., Tedeschi S., 2005, pp. 135-158. Algunos trabajos de mi autoría: "Los últimos años de una institución colonial: el Cabildo de Santa Fe y su relación con otros espacios político-institucionales entre 1819 y 1832", *Revista Junta Prov. de Estudios Históricos de Santa Fe* (JPEH) Núm. LIX, 1994, pp. 409-429. "La estructura militar durante el gobierno de Estanislao López: función política, consolidación territorial y control del orden interno", *II Encuentro de Historiadores*, JPEH, 1995. *Política e instituciones en el Río de la Plata. El caso de Santa Fe entre 1819 y 1838*, Tesis V Maestría, 2003 (Dir.: José C. Chiaramonte. Tutor: Horst Pietschmann). "La vocación de memoria en los homenajes: 'justicia al mérito'", *Anuario No. 20, "Historia, Memoria y pasado reciente"*, 2da. Época, FHA, UNR, Escuela de Historia/Homo Sapiens, Rosario, 2004. "Política, prácticas y relaciones interétnicas en la frontera rioplatense (Santa Fe, 1820-1840)", 2008. "Representaciones del pasado argentino en la historiografía santafesina de las décadas de 1935 y 1970. Entre la Historia y la Ciencia Política" y "Discurso historiográfico y problemáticas históricas santafesinas: algunos ejercicios de interpretación sobre la obra de Juan Álvarez" en Suárez Teresa y Tedeschi Sonia (Comps) *Historiografía y sociedad: Discursos, instituciones, identidades*, Santa Fe, Ediciones UNL, 2009.

experiencia y cultura políticas, donde aparecerían distinto grado de estabilidad interna y distintos modelos de jefatura política y liderazgo regional. En tanto sea pertinente a ciertas temáticas abordadas en esta investigación, este ejercicio comparativo se practicará con otras entidades provinciales o situaciones de geopolítica regional.<sup>6</sup>

Además de mis inquietudes personales ponderaré, especialmente, la importancia de la experiencia entrerriana y la participación activa de sus líderes políticos en los debates entablados en torno a la forma de organización estatal de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, participación que dejó su fuerte impronta en el desarrollo histórico posterior de la sociedad argentina. En este sentido, existe una arista de interés especial en ese proceso, que será examinada en sus primeras instancias: la tendencia de la experiencia entrerriana a construir su autonomía partiendo de una dependencia de Santa Fe y de Buenos Aires y gestando lentamente un proyecto alternativo a este centro de poder. En efecto, la provincia lideró un movimiento militar encabezado por su gobernador Justo José de Urquiza al que se sumaron fuerzas de Brasil, Uruguay y Corrientes que culminó, en febrero de 1852, con la derrota y expulsión del poderoso gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. De resultados de estos sucesos, se generó una entidad política diferenciada, la Confederación Argentina; en 1853 se dictó la Constitución y Urquiza fue designado Director Provisional y luego Presidente de la Confederación entre 1854 y 1860. Con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina en 1860 siguieron definiéndose las bases de la Organización Nacional, proceso que cristalizará hacia 1880 con el gobierno personalista y liberal de Julio Argentino Roca bajo el significativo lema de “Paz y Administración”.

---

<sup>6</sup> La comparación histórica, fundamentalmente en su función de contraste, permite superar la estrechez de los horizontes particulares de investigación ofreciendo importantes aportes a la formulación de preguntas que, de otro modo no podrían haber sido planteadas, y a la detección de relaciones, regularidades, entre distintas realidades históricas a lo largo del tiempo o bien en su desarrollo contemporáneo. Tanto los planteos de Jürgen Kocka sobre la comparación histórica -posibilidades heurísticas, analíticas, descriptivas, paradigmáticas- como los de Maurice Aymard recuperando las propuestas de Marc Bloch y actualizándolas, han sido muy útiles para introducir la perspectiva comparada en esta investigación. (Kocka J., 2002: pp. 44-58, 208-210; 2003: pp 39-44) ; Aymard, Maurice “Introducción. ¿Qué historia comparada, hoy? en Bonaudo, M, Reguera, A y Zeberio, B, 2008: pp. 13-25.

***El proceso de construcción estatal en el Río de la Plata bajo el prisma del caso entrerriano: el tiempo histórico, los problemas y las estrategias de análisis.***

El proceso formativo del Estado provincial de Entre Ríos muestra analogías con otros procesos contemporáneos del mismo tipo pero, en sí mismo, constituye una de las experiencias más complejas en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX; una complejidad que se manifiesta no solo por las características internas del proceso sino por la fuerte influencia de situaciones políticas vecinas que ocasionan conflictos de distinta índole, por ejemplo la invasión lusitana a la Banda Oriental y su anexión al Reino de Portugal, Brasil y Algarves como Provincia Cisplatina en 1821, que reavivó el peligro de la apetencia expansionista portuguesa sobre el Río de la Plata por casi toda esa década.

Teniendo en cuenta el planteamiento conceptual del Estado provincial que es uno de los que orienta la investigación, podemos introducirle una variación: es Entre Ríos el que no se construye desde una *ex ciudad virreinal* sino que el proceso se organiza en torno a una provincia creada por el Supremo Directorio en 1814. Esta provincia se constituye en torno a dos Villas: un pueblo antiguamente dependiente de la ciudad de Santa Fe y separado de esta jurisdicción en 1813 al que la Asamblea Constituyente reunida en Buenos Aires lo nombra Villa del Paraná con Cabildo; una Villa de Nuestra Señora Inmaculada de la Concepción del Uruguay (en adelante, Villa del Uruguay) creada en 1783 con Cabildo, designada Capital de esa nueva provincia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Los cabildos de las Villas de Paraná y Concepción estaban conformados por un alcalde ordinario y cuatro regidores agregándose un Síndico Procurador o Personero de la Villa; se los llamaba *medio cabildos* por la jerarquía menor de la Villa. Comparando con el Cabildo de la ciudad de Santa Fe, éste tenía una estructura más amplia con dos Alcaldes ordinarios de 1º y 2º Voto, Procurador Síndico de Ciudad, tres regidores que tomaban las funciones de Defensor de Pobres y Menores, Alférez Real y Fiel Ejecutor, Mayordomo Receptor de Propios de Ciudad, Alguacil Mayor, Portero; se completaba con tres alcaldes de hermandad y cuatro alcaldes de barrio. Moutoukias, Zacarías "Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800", en Tandeter E. (Dir. De Tomo), pp. 373-376. Ravignani, Emilio (Ed.) 1937, Tomo I, pp. 52-53. Actas del Cabildo de Santa Fe, Acuerdos, fs. 29-30. Disponible en <http://www.santafe.gob.ar/actascabildo> (Consulta 30/10/2013). Diccionario RAE 1780 y 1817: Villa: Se llama hoy la población que tiene algunos privilegios, con que se distingue de la aldea, como vecindad y jurisdicción separada de la ciudad. *Oppidum*. Ciudad: El ayuntamiento, ó cabildo de qualquiera ciudad: y tambien los diputados, o procuradores en cortes que las representan. Disponible en <http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub> (Consulta 30/10/2013)

El conocimiento histórico disponible plantea la existencia de una sociedad intensamente conflictiva en la década de 1820 que presenta una situación de mayor estabilidad política en la década siguiente, enmarcada en el nuevo escenario político dominado por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. En efecto, la historiografía provincial de siglo XX, a la que se reconoce como de imprescindible consulta, ha reconstruido una larga cadena de acontecimientos en torno a figuras políticas instaladas en sucesivos gobiernos. En esa reconstrucción, se insiste en caracterizar a las fuertes disputas internas por el poder como situación anárquica y caótica, sin alcanzar a descifrar la lógica interna del conflicto ni hacer intervenir suficientemente la problemática derivada de la realidad histórica en la Cuenca del Plata, con intereses puestos en acto por entidades de distinta naturaleza política. Desde esas investigaciones se alcanza un consenso historiográfico que muestra al período 1821-1825 precariamente ordenado y al período 1826 y 1831, como lapso prácticamente desprovisto de reglas y sumamente anárquico. Posteriormente, el período 1832-1841 en el que la provincia estuvo bajo el gobierno del Gral. Dr. Pascual Echagüe fue caracterizado, por esa misma historiografía, como de paz, progreso, orden, estabilidad económica y político-institucional. A este actor político se le otorgó la primacía de ese orden y esa estabilidad, menguando o quizás no evaluando debidamente que en la etapa inmediata anterior a su asunción, a modo de hipótesis, existe una trama político-institucional de desarrollo dificultoso pero que sostiene una dimensión estatal como base de lo que vendría con Echagüe.<sup>8</sup>

Contribuciones historiográficas más recientes han renovado los problemas históricos y su tratamiento bajo otras perspectivas analíticas concentradas generalmente en la región oriental entrerriana. También los últimos aportes historiográficos producidos en ámbitos académicos del Uruguay y el Brasil son indispensables, en base a sus novedosos puntos de vista y avances en el conocimiento del proceso; también lo son por su evaluación del problema fronterizo, visto desde la perspectiva de las otras entidades políticas que interceden en nuestro objeto de estudio y porque permite un tratamiento del caso

---

<sup>8</sup> Algunos exponentes de esa historiografía son: Bosch, Beatriz 1978; Gianello, Leoncio 1951; Calvento, Mariano 1940; Teijeiro Martínez, Benigno 1910.



entrerriano en términos de fenómeno conjunto.<sup>9</sup> Es decir que no orienté la reflexión desde un modelo explicativo puramente interno a esa experiencia de construcción estatal sino que procuré hacer jugar la situación estratégica de Entre Ríos en la región, cuando los aspectos de su investigación lo permitían.

En la estrategia de investigación se ha fijado una periodización que comprende desde 1821 -con el ascenso de Lucio Mansilla al gobierno y la consecuente disolución de la República Entrerriana que fuera creada en 1820 por Francisco Ramírez- hasta 1831. En esa periodización observamos un momento inicial de profundo cambio en la propuesta político – institucional y en el equilibrio regional de poderes y luego de 1826, una alta inestabilidad política en la que se suceden 25 gobernadores entre propietarios, provisorios y delegados, lo que da lugar a variaciones del tiempo histórico.

Respecto a la historia que sigue, entre 1832 y 1840, se expone una proyección general en base a literatura secundaria correspondiente a obras del siglo XX y más recientes que presentan diferentes enfoques, hipótesis y explicaciones históricas acerca del grado de consenso y estabilidad política que parece identificar a esa etapa. En los textos seleccionados se realizaron algunos ejercicios de interpretación sobre el discurso historiográfico, las problemáticas históricas y la construcción de memoria colectiva. (Ver Apéndice al final)

Los problemas históricos planteados, los objetivos específicos y las hipótesis se orientan hacia una historia del poder y la organización política, sostenida en los hombres y mujeres que conformaron una experiencia social colectiva situada en una región americana hace casi 200 años. Esta importante cuestión de rescatar una historia humana con sus carencias, dificultades y logros para representarla en el relato histórico, se enfrenta con dificultades de distinto tipo. Entre ellas, la de aprehender el significado profundo de las elecciones realizadas y las decisiones tomadas por cada uno de los actores sociales en el

---

<sup>9</sup> Schmit, Roberto, 2004, 2003. Djenderedjian Julio, 2005 y “Buenos negocios en tiempo de guerra: el comercio de cueros en el Litoral según las Cuentas de Cipriano de Urquiza, 1816-1820” en *Anuario del IHES*, UNICEN, Tandil, No. 17, 2002, pp. 243-259. Historiografía de Brasil: trabajos de Fabio Ferreira, Joao Pimenta, César Guazelli. Historiografía de Uruguay: obras de Ana Frega, Gabriel Quirici, Inés Moraes, Carolina Vicario, Martha Campos de Garabelli, entre otros. Para el tratamiento de la frontera bajo nuevas líneas de reflexión cf. Nordman, Daniel (2006), pp. 154-171.

pasado, cuando disponemos de fuentes testimoniales y no testimoniales, mediadas por la pluma oficial, memorias fragmentadas, con omisiones deliberadas, plasmadas coactivamente, teñidas de prejuicios e intereses insondables, una información historiográfica desmembrada de su cuerpo original por la tarea técnica de la archivística, islas documentales a las que hay que interrogar y articular para dar sustancia e inteligibilidad a un proceso histórico. Actores sociales del pasado, aquellos que identificaré y destacaré por su importancia para mi objeto de estudio, reconstruyendo parcialmente algunas de sus historias personales y los otros, seres anónimos, que fluyen en las múltiples evidencias que otorgan las fuentes y que están ahí: integrando o desertando del ejército, produciendo en el campo, formando familia, desarrollando sus oficios en la ciudad, el campo o junto al río, viviendo en la frontera, cumpliendo o resistiendo a la ley, pagando o evadiendo sus impuestos, operando comercialmente, con sus pequeñas y grandes acciones de la vida cotidiana, a veces con percepciones y prácticas propias en su vida social muy distintas de aquellas en las que se basa el universo argumental de la ley o de lo que quieren imponer las disposiciones oficiales y los rígidos límites jurisdiccionales.

Teniendo en cuenta esa dificultad de aprehender significados, en esta investigación intentaré aproximarme a la lógica de la acción social, de la dimensión política de la acción social, de la actuación humana y su correlato en marcos organizativos de distinta naturaleza, las ideas, valores e instituciones de viejo y nuevo cuño, los pactos y las discordias, los intereses de individuos y de grupos, la sinuosidad de alianzas, las presiones externas...

En estas páginas se encontrará una diversidad de actores sociales con múltiples identidades, pertenencias y vinculaciones entre sí: líderes fuertes en la defensa de los derechos locales y regionales, los integrantes de la administración del poder como secretarios, ministros, letrados, asesores con diversa formación intelectual, funcionarios menores, los electores y los elegidos, los oficiales militares y soldados, los agentes económicos, las familias, mujeres y hombres que conformaron esa sociedad de principios del siglo XIX y que ayudaron en mayor o menor medida a sostener un Estado en formación basado en ciertas reglas de convivencia, tanto en sus relaciones internas como en las establecidas con otros grupos humanos contenidos en otras experiencias

estatales y sociales. Este planteo me conduce a la consideración de las relaciones sociales que estructuran a la sociedad. He ponderado el concepto de red social como una útil herramienta de análisis transversal de la acción social, que aporta a la inteligibilidad de los fenómenos históricos, sobre todo de aquellos cuya trama no es tan evidente ni mensurable. Las redes sociales se articulan mediante vínculos de distinto tipo: familiar, profesional, burocrático, político, económico, entre otros. En cuanto a los vínculos primarios con núcleo en la familia consanguínea, ellos siguen siendo un factor fundamental de cohesión como en la sociedad colonial y se enlazan a otros colaterales de amistad, compadrazgo, paisanaje, etc.<sup>10</sup>

En medio de conspiraciones, rebeliones y cambios políticos bruscos, en una época plena de incertidumbre, reclamos, ambiciones, estabilidad política oscilante pero también de incesante búsqueda de paz como “la primera necesidad del Estado”<sup>11</sup>, se planteó e implementó un proyecto de construcción estatal que intentó dar respuestas a ese convulsionado contexto post independiente, teniendo como base a una sociedad entrerriana que continuó funcionando en sus variables axiológicas, económicas, sociales, políticas. Este presupuesto nos coloca ante la naturaleza de la política en la que conviven el acuerdo y el conflicto como elementos constitutivos; en la dinámica política se movilizan tanto la vocación de organizar la convivencia social en base a entendimientos y conciliación como los conflictos originados por intereses y proyectos en pugna. En esa dinámica, lo político no se limita a lo institucional sino que interviene en todos los actos de la vida social y por ende, se construye en la interacción humana (Barriera D., 2002: pp. 188-190).

---

<sup>10</sup> Un concepto en términos relacionales que puede ser aplicado con alcance interpersonal, intra/intergrupar e intra/interinstitucional, un concepto dinámico en el que tanto significan, para el conocimiento del objeto de estudio, las adhesiones y solidaridades como las rupturas y enemistades. Red social aplicada a las relaciones de sujetos – actores que participan de acciones sociales o las interpretan en la que puede observarse una composición sinuosa de lealtades y pertenencias acorde con intereses, motivaciones y presiones. Bertrand M. Presentación “En lo social” en Bonaudo M, Reguera A., Zeberio B. 2008. Guerra, F. 2000, p. 117. Moutoukias Z., 2000. Yun Casalilla, B. 2009, Introducción.

<sup>11</sup> “La paz es pues la primera necesidad del Estado, y a ella solo debe anteponérsele su honor, que debe serle preferido”, Frase final del Mensaje del Gobernador León Solas a la Legislatura instruyéndola del estado político y administrativo de la Provincia, Recopilación de Leyes, Decretos y Circulares de la Prov. de Entre Ríos, Tomo I, 1821 a 1824 (RLDAPER), Uruguay, La voz del Pueblo, 1875.

Esta investigación se estructura a través de tres dimensiones de análisis: la construcción del poder político, la institucionalización y la conflictividad, como partes del proceso formativo del Estado entrerriano en la región histórica del Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX.

La tesis está organizada en ocho capítulos, seis de ellos distribuidos en dos Partes. En el Capítulo I, indagamos en nuevos debates sobre la construcción del Estado en Latinoamérica y en los legados historiográficos tradicionales y nuevas perspectivas de análisis sobre el proceso histórico entrerriano.

En el Capítulo II comenzamos examinando la configuración territorial. Algunas características geofísicas del área de estudio nos permitirán observar y explicar prácticas y relaciones sociales territorializadas. Partiendo de la noción de realidad regional construida históricamente, situamos a Entre Ríos dentro de las variables estratégicas del dominio colonial español y de las alternativas históricas del Río de la Plata revolucionario e independiente. Luego analizamos las áreas de frontera y sus posibilidades de interrelación con otras entidades políticas, el proceso de poblamiento y ciertos rasgos generales de tipo social y económico de esa sociedad sobre la que se construye el Estado provincial y que tienen su incidencia en las formas y desarrollo de ese proceso formativo.

En la Primera Parte abordamos la configuración estatal desde la estructura político-institucional, la soberanía y la representación política tratando de contar con elementos que nos aproximen al grado de estatalidad de la experiencia entrerriana alcanzado en la etapa de estudio propuesta. El Capítulo III nos coloca ante un tiempo de cambios donde es posible observar la coexistencia de viejos y nuevos principios ordenadores de la convivencia social, reconociéndose que en el discurso político opera significativamente el universo conceptual enunciado en la expresión Antigua Constitución. La nueva construcción estatal tiene como basamento a la soberanía con diversas nociones y manifestaciones y se sostiene sobre particulares mecanismos de legalidad y legitimidad. El establecimiento y la dinámica de regulaciones legales, en medio de intensos debates, configuran los marcos institucionales de ejercicio del poder. Este análisis conducirá, en los tres capítulos siguientes, a la observación de distintos campos de ejercicio de esa soberanía que se presentan, en la ley y en la práctica, como instancias en donde los poderes se disputan y a la

caracterización de la formación de la ciudadanía y la representación política. El Capítulo IV examina la vía legítima de acceso a los cargos a través de la elección como institución central del gobierno representativo, colocando el foco de análisis en las elecciones a diputados provinciales y en las de gobernador. En el Capítulo V estudiamos la dinámica representativa en el Río de la Plata y en particular en el estado provincial entrerriano, evaluando las teorías y prácticas acerca del mandato imperativo y el mandato libre. Esa evaluación se realizó sobre las diputaciones al Congreso provincial y sobre aquellas que operaban en el exterior de Entre Ríos en calidad de agentes diplomáticos: diputados a Congresos, Convenciones Constituyentes, Tratados, Pactos y los Encargados de Negocios. En el Capítulo VI, tratamos la vinculación estrecha del problema de la soberanía con la distribución del poder político. En esa vinculación analizaremos disposiciones legales, prácticas y conflictos en torno a los principios de limitación del poder invocados por los actores en el proceso de construcción de un nuevo orden político.

En la Segunda Parte nos ocupamos de establecer relaciones entre militarización, conflictividad interna y finanzas públicas en un contexto regional convulso. En el Capítulo VII, la conflictividad política y la militarización, como factores de peso en la construcción de poder local y regional, constituyen los ejes de investigación. En la apertura del Capítulo realizamos un análisis de la organización militar, sus antecedentes y funcionamiento para evaluar su gravitación en la construcción estatal. Partiendo de la noción de que el poder político se funda entre el acuerdo y el conflicto, estudiaremos sus manifestaciones en el desarrollo de algunos movimientos de acción colectiva profundamente militarizados. Las disputas y enfrentamientos localizados en áreas fronterizas nos introducen en la problemática misma de la frontera, que no solo es espacio físico sino espacio de relaciones sociales con su propia dinámica de construcción y desarrollo histórico. En el Capítulo VIII, investigamos sobre las finanzas públicas en tiempos de transformación política. Los enlaces entre la política y la economía nos permiten ver como se relaciona el grado de inestabilidad política con el estado superavitario o deficitario del fisco provincial, ofreciendo también la posibilidad de observar algunos rasgos del patrón fiscal y de las prácticas en un contexto conflictivo.



## **Capítulo I. ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS**

### **I.1. La construcción del Estado en Latinoamérica: indagando en los nuevos debates.**

En las últimas tres décadas, las producciones del campo historiográfico dedicadas a investigar sobre la construcción de los estados latinoamericanos luego de las Independencias, han revelado importantes avances en la explicación de sus problemas rectores. Un proceso de construcción del conocimiento histórico en torno a esa problemática que se vio acrecentado sensiblemente por la efervescencia de las conmemoraciones bicentenarias de revoluciones e independencias, por lo que cualquier síntesis que se quiera encarar no hará justicia seguramente a todos los aportes realizados sobre todo en la última década. No obstante estas limitaciones, es útil destacar algunos antecedentes existentes sobre temas relacionados con los propósitos ya enunciados de la investigación, lo que permite reconocer, aunque en líneas generales y no excluyentes, la tradición de conocimiento anterior, la importancia del diálogo interdisciplinar y la evolución de algunas de las nuevas propuestas.

La historia política en un diálogo más fluido con la historia de las ideas, la historia cultural y/o la intelectual y con préstamos conceptuales de otras disciplinas, ha derivado en novedosos resultados que pretenden desmitificar arraigadas visiones acerca del cambio social. Esa combinación intradisciplinar e interdisciplinar parece tender, aunque con altibajos, hacia una historia de la sociedad humana, considerando sus variables y especificidades y tratando de corregir la distorsión provocada por la influencia de ciertas corrientes historiográficas tradicionales. Éstas sostuvieron y lograron enraizar en la memoria colectiva una imagen de proyecto liberal fallido -fundamento llamado a ser indiscutible de la situación de atraso y penurias que padecen los países latinoamericanos y que se presenta a todas luces irremediable-, imagen sustentada en la incapacidad de modificar un proceso signado por la linealidad y condenado al fracaso y a la dependencia externa. Volviendo al planteo introductorio sobre los nuevos debates alrededor de la llamada globalización, la ciudadanía y el Estado nación –conceptos de gran actualidad en el debate contemporáneo-, notamos que los mismos están asediados por esa impronta de la Historia en la Memoria colectiva que ha quedado como fuerte remanente de

aquellas proposiciones tradicionales, sin por ello decir que hoy no quedan exponentes intelectuales que siguen fustigando desde esa perspectiva. Por el contrario, aún coexisten con las nuevas miradas hacia esos viejos problemas, posturas que alimentan valoraciones negativas del desarrollo estatal en su devenir histórico. Lo importante es ponderar la fuerza del nuevo pensamiento en orden a debilitar la barrera impuesta por la división jerárquica entre Estados nación exitosos –generalmente europeos o de antigua colonización inglesa- y Estados nación fracasados –latinoamericanos en su mayoría y sumidos en la nefasta herencia colonial española- división que es tributaria en parte de esas posturas tradicionales.<sup>12</sup> Una primera evaluación de la situación hace pensar por un lado en que no hay regreso a partir de esos debates y por otro, que el aporte historiográfico se tornará imprescindible para afianzar el desafío de una nueva identificación del conjunto social con su pasado; así, otras dimensiones de análisis otorgarán mayor claridad a las notas de ambigüedad todavía manifiestas y se encargarán de dilucidar qué queda de los referentes de Antiguo Régimen, cuáles son las nociones y prácticas aprehendidas de la llamada Modernidad que se localizan en cada contexto socio-político y cómo se interceptan recíprocamente lo viejo y lo nuevo. Propuestas que operarán directamente sobre la construcción social de la Memoria, afectando a las fórmulas consagradas y saberes cristalizados sobre la constitución y desarrollo de los lazos sociales.<sup>13</sup> En tal sentido, el Río de la Plata como región histórica durante la primera mitad del siglo XIX nos interesa particularmente, nos abre a ricas hipótesis e inferencias, nos induce a hallar respuestas a partir de algunos interrogantes articuladores ya planteados en la Introducción: ¿Cómo ha sido el pasaje de una sociedad hispanocriolla extremadamente conflictiva hacia otra de paulatino orden

---

<sup>12</sup> Una propuesta sobre la historia de la cuestión liberal toma en cuenta el impacto del viejo paradigma internacional de la inferioridad de América afirmado desde la ciencia natural en el imaginario social y en la existencia de una historia moral negativa, hija del despotismo español. Consecuentemente, las bases para el desarrollo de una constitución política liberal serían totalmente insuficientes. Annino, 2004.

<sup>13</sup> Para arribar a estas reflexiones nos hemos apoyado en algunos textos tales como: Artículos de Barragán Rossana, Ragas José y Méndez Cecilia en Irurizqui Victoriano, Marta, (Ed.) *La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador, Perú) Siglo XIX*, Introducción Biblioteca de Historia de América, CSIC, Madrid, 2005; Candau, Joel *Memoria e Identidad*, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 2001; Le Goff, Jacques *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Barcelona, Piados, 1991 (1ra. Ed en castellano); Cohen, Abner, 1979, pp. 55-82.



institucional, fortalecimiento estatal y control social? ¿Cómo se construye el poder político en una sociedad asediada por vertiginosos cambios y por fuertes influencias externas?

Dentro de los problemas históricos que nos preocupan y a la luz de estas últimas interpretaciones muy críticas de la historiografía nacionalista, el origen y desarrollo del Estado y la Nación en Latinoamérica se comprende como un proceso de construcción histórica no despegado de un contexto internacional complejo, como un fenómeno latinoamericano conjunto con problemáticas comunes pero también con especificidades regionales. Inserta en estos criterios, la cuestión de la legalidad y la legitimidad del poder en los gobiernos establecidos en Latinoamérica decimonónica cuenta con una serie de estudios relacionados con los distintos modelos de organización política, la ciudadanía, el sistema de partidos, el constitucionalismo, los procesos electorales, el caudillismo, el discurso político entre otros problemas. Las nuevas explicaciones en torno a estas problemáticas centrales, no solo desde lo institucional sino desde la conformación de una cultura política junto a sus manifestaciones en la práctica y sus vinculaciones con las estructuras sociales y económicas, constituyen un montaje que da cuenta de la dinámica de los procesos a lo largo del tiempo y en sus diferentes localizaciones.

Esa afirmación de la existencia de un estado nacional ya en las circunstancias revolucionarias fue tempranamente discutida en un examen sobre distintas formas de identidad política en el Río de la Plata: hispanoamericana, rioplatense, provincial, que no se corresponden con un sentimiento de nacionalidad preexistente a la Independencia. La reflexión acerca del problema fue extendida a otros países como México, Venezuela, Chile, incluido el caso particular de Brasil, advirtiendo sobre el uso anacrónico de ciertos vocablos como *pueblo*, *nación*, *estado* que obligan detenerse en los usos de época y en las filiaciones doctrinarias vigentes en los discursos sobre las que se asentaban las invocaciones a las autonomías y las diversas formas de integración política. En este sentido, estudios dedicados a observar específicamente el impacto de la Revolución Francesa en el Río de la Plata en la década de 1810, tomaron como objeto de estudio las prácticas discursivas de destacados revolucionarios a la vez que evaluaron las nuevas formas de sociabilidad política –al tipo de

sociedades secretas- a través de las cuales ellos canalizaban sus acciones. Es necesario también dar cuenta aquí de una línea “esencialista” que a través del estudio de la sociabilidad asociativa moderna en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX, intenta fundamentar la temprana aparición de una nueva representación de la colectividad como “sociedad nacional”. La misma ha sido cuestionada, entre otras cosas, porque el objeto de análisis se centra en el espacio urbano porteño y se le otorga a esas elites la capacidad de prefigurar la idea de nación que la Argentina buscaría encarnar al constituirse como tal en las representaciones por ellas acuñadas. Volviendo a esos estudios sobre el impacto de la Revolución de 1789, los mismos revelaron una influencia francesa en los propósitos de pedagogía cívica, en la nueva sociabilidad como vía de difusión de la modernidad política y en la prédica igualitaria matizada con la impronta local rioplatense: una dualidad en los conceptos que se pone en evidencia en discursos que transitan entre lo revolucionario y lo moderado, entre el interés político y los principios por convicción.<sup>14</sup>

Siguiendo estas líneas de reflexión, en los últimos años se ha desarrollado un importante trabajo en conjunto de investigadores iberoamericanos. El mismo fue motivado por la necesidad urgente de encarar un análisis histórico comparado e interdisciplinar de los conceptos políticos y sociales clave, entre 1750 - 1850 para Europa y América, a efectos de contrarrestar la obsolescencia de algunas categorías fundamentales utilizadas para explicar fenómenos acaecidos en ese lapso y configurar un Diccionario histórico político y social

---

<sup>14</sup> Véase Chiaramonte, José Carlos, 2000, pp. 33-71 y “Formas de identidad política en el Río de la Plata luego de 1810” en *BIHAAR*, 3ra. Serie, Núm. 1, Primer semestre de 1989, pp. 71-92; Goldman, Noemí *Historia y Lenguaje. Los discursos de la Revolución de Mayo*, Bs, Aires, CEAL, 2da. Edic. 2000. González Bernaldo, Pilar “La Revolución Francesa y la emergencia de nuevas prácticas de la política en el Río de la Plata revolucionario, 1810-1815” en *BIHAAER*, 3ra. Serie, No. 3, 1er. Sem. 1991, pp. 7-27. Goldman, Noemí “Revolución”, “nación” y “constitución” en el Río de la Plata: léxicos, discursos y prácticas políticas (1810-1830)” en *Anuario IHES*, UNICEN, No. 12, Tandil, 1997. Otras obras que estudian el impacto de la Revolución Francesa en América son: Krebs Ricardo, Gazmuri Cristian *La Revolución Francesa y Chile*, Sgo. de Chile, Edit. Univ. 1990; *Imagen y recepción de la Revolución Francesa en Argentina*, Bs Aires, Comité Arg. Bicentenario de la Rev. Francesa, GEL, 1990. La línea esencialista estaría representada por González Bernaldo, Pilar “La “identidad nacional” en el Río de la Plata postcolonial. Continuidades y rupturas con el Antiguo Régimen”, *Anuario del Inst. de Investigaciones Histórico-Sociales*, UNICEN, No.12, Tandil, 1997; de la misma autora *Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862*, Bs Aires, FCE, 2000. Una reseña crítica de Marcela Ternavasio a este libro en *BIHAAER*, No. 25, 1er. Sem. 2002, pp. 189-196.

iberoamericano que se constituya en obra de referencia.<sup>15</sup> Dadas las diferencias culturales y regionales en “Euroamérica” al decir de Francois Guerra, el enfoque comparativo ha sido evaluado como sumamente eficaz para descartar cualquier afirmación de homogeneidad en sus esquemas axiológicos e institucionales y además se lo inscribe, en tanto Historia Comparada intercontinental, junto a las nuevas proposiciones teórico-metodológicas como *Histoire croisée*, *Entangled history*, *Transnational history*, *Atlantic history*, *Global history*. Al respecto, estas nuevas perspectivas analíticas se han instalado en la agenda historiográfica hace un par de décadas generando intensos debates, aceptaciones y no pocas controversias acerca de sus delimitaciones epistemológicas y metodológicas, expuestos en diversos encuentros académicos, foros de discusión y publicaciones. La problemática de la transferencia multidireccional constituye uno de los ejes de análisis más importantes; su tratamiento excede el intercambio de bienes, personas e ideas desde cauces institucionales para involucrar a grupos sociales amplios que pueden o no estar comprendidos en una misma entidad política, acentuando el enfoque cultural.<sup>16</sup>

Continuando con las problemáticas centrales mencionadas, tres de ellas fueron investigadas en sus distintas experiencias para América Latina durante los siglos XIX y XX: federalismo, procesos electorales, ciudadanía política. Las formas históricas federales fueron estudiadas en contacto con la representación política y los idearios de nación en esos períodos seculares, imbricando la evolución histórica, las prácticas y la cultura política en diversas sociedades latinoamericanas. De esta manera se puso en cuestión la supuesta inmutabilidad

---

<sup>15</sup> Proyecto de Investigación Iberconceptos “El mundo atlántico como laboratorio conceptual (1750-1850). Bases para un Diccionario histórico del lenguaje político y social en Iberoamérica”, iniciado en 2004 está dirigido por Javier Fernández Sebastián (UPV-Bilbao), integrado por investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Perú y Portugal y vinculado a la Red Internacional History of Political and Social Concepts Group. Una publicación de este proyecto nos ha interesado especialmente: Goldman, Noemí (edit.), 2008.

<sup>16</sup> Yun Casalilla, Bartolomé “Estados, naciones y regiones en perspectiva europea. Algunas propuestas de historia comparada y trans-nacional”, *Alcores, Revista de historia contemporánea*, No. 2, 2006, pp. 13-35. Ciertos temas que contemplan estas perspectivas refieren a vocabulario político, revoluciones de independencia y crisis imperiales, modelos constitucionales, relaciones económicas y redes sociales en el mundo iberoamericano, mercados y objetos de consumo, entre otros.

del fenómeno, sostenida largamente en tradiciones intelectuales con base predominante en lo jurídico – institucional.<sup>17</sup>

La exploración de los procesos electorales decimonónicos en espacios políticos latinoamericanos se centró en su papel transformador y en las características de su desenvolvimiento, criticando premisas subvalorativas y viejos modelos interpretativos sobre las elecciones que oscilaban entre la simplificación, el estereotipo y la invalidación, producto de la aplicación extemporánea de paradigmas liberales consolidados a fines del siglo XIX y durante el siglo XX. Los resultados de estos nuevos debates matizan aquellas visiones de sociedades caóticas y sumidas en la violencia por las situaciones de guerra y confrontación armada en tanto nos muestran mecanismos legales y prácticas que, a la vez, tendían a dotar de un orden político institucional en tiempos de urgentes definiciones en este sentido, requeridas luego del quiebre colonial. En estos procesos electorales la posibilidad de hacer jugar en la explicación a otros actores sociales desplaza a los caudillos y caciques como los modelos más importantes de acción política y rescata mejor las lógicas de acción en orden a la creación de una cultura cívico-electoral y a la constitución de sistemas de partido. Y más aún, el estudio de sus mecanismos y prácticas nos proporciona indicios de cómo se construye el poder político en una sociedad de fuertes rasgos corporativos e interceptada por concepciones liberales.<sup>18</sup>

La problemática de la ciudadanía política en el proceso formativo de las naciones latinoamericanas incluye investigaciones desde distintas perspectivas.<sup>19</sup> El uso de categorías teóricas acuñadas por la Ciencia Política,

---

<sup>17</sup> Una obra pionera en la renovación del tema es Carmagnani, Marcelo (Coord.), 1993. La fase del primer federalismo analizada para los tres países, nos interesa pues revela una predominante confrontación entre tendencias autonómicas y centralizadoras en escenarios diferentes. Sobre la visión jurídico – institucional aludida, existe una numerosa bibliografía para el caso argentino, basada en la historia del derecho e historias constitucionales, por ejemplo los trabajos de Víctor Tau Anzoátegui, Carlos Sánchez Viamonte, José Rafael López Rosas.

<sup>18</sup> CF. Annino A., 2004; también Annino, Antonio (Coord.), 1995; Malamud, Carlos (Ed.) *Partidos políticos y elecciones en América Latina y la península ibérica, 1830-1930*, Papeles de Trabajo, Vol. I, Instituto Ortega y Gasset, Madrid, 1995. Para el caso argentino y dentro de estas premisas, se destacan Ternavasio Marcela, 2002; Sábato Hilda y Lettieri Alberto (Comps.), 2003; Sábato Hilda, Ternavasio Marcela, Privitellio Luciano, Virginia Persello, 2011.

<sup>19</sup> Trabajos de Francois Guerra proponen el estudio del proceso revolucionario como único, atendiendo a la imbricación constante entre los acontecimientos españoles y americanos. A la vez, se interesa por marcar el tránsito del Antiguo Régimen a la modernidad donde los actores sociales y políticos son distinguidos en sus modos de expresión y de relación, donde la

por parte de la historiografía dedicada a esta problemática, ha contribuido a develar la trama conformada por ideas y prácticas políticas, plasmadas en formas concretas de participación y organización (Sábato H, 1999). Por otra parte, la falta de correspondencia entre la realidad histórica del siglo XIX y el modelo cívico a implantar pensado por los intelectuales americanos fue otro problema puntualizado, advirtiendo que el proyecto explícito de toda la clase política de crear ciudadanos guiado por el liberalismo republicano, necesitó de mecanismos informales como el clientelazgo, el poder patrimonial, la corrupción, para ejercer un control efectivo sobre la sociedad. La racionalidad de los actores, en particular aquellos pertenecientes a estamentos bajos –el llamado “bajo pueblo”-, está siendo rescatada en tanto se resalta la utilización de los nuevos marcos políticos normativos para aprovechar intersticios de participación política y lograr beneficios de distinto tipo.<sup>20</sup>

Es de destacar que la preocupación por hallar cambios y continuidades en el proceso de construcción estatal latinoamericano ha ofrecido dispares resultados historiográficos a lo largo el tiempo y en los que los contextos de producción han sido muy influyentes.<sup>21</sup> En la actualidad y sin juicios extremos, se da lugar a una evaluación de las Independencias como ejes transformadores que evidencian distintos grados de impacto de lo político sobre los sistemas de poder y el cambio social, conjugando pervivencias coloniales y modificaciones dentro del proceso. Se advierte, además, que no hay nacimientos ni ocasos absolutos en la historia y en particular en este período de tránsito que nos ocupa, sino un juego de innovaciones y continuidades que se van interpenetrando e interpretando desde distintos modos. En este sentido, los usos y alcances de

---

ciudadanía es abordada en un doble registro: el cultural y el histórico. En esa línea, analizó también las transformaciones de la modernidad a partir del «espacio público» donde las formas de sociabilidad ocupan un papel importante. Por ejemplo, Guerra, Francois X, 1992; *Revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, Edit. Complutense, 1995; *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX*, México. F.C.E. 1998.

<sup>20</sup> Ver Pérez Herrero, 2001. Escalante Gonzalbo, Fernando *Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana*. México, El Colegio de México, 1992. Di Meglio Gabriel ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la revolución de mayo y el rosismo. Bs As., Prometeo, 2006.

<sup>21</sup> Escobedo Mansilla, Ronald “Cambio y continuidad en la sociedad hispanoamericana del Siglo XIX” en Bosco Amores, Juan et al *Iberoamérica en el siglo XIX. Nacionalismo y dependencia*, Pamplona, Eunate, 1995.

conceptos individuales y compuestos, naturalizados en el discurso de muchos profesionales de la historia, merecen revisarse y utilizarse con precauciones, sin caer en visiones anacrónicas, simplificadoras o teleológicas del proceso, por ejemplo: tradición y modernidad, antiguo régimen, absolutismo, ilustración, liberalismo, política antigua y política moderna, por citar los más relevantes.<sup>22</sup> Es que la ponderación de los modelos doctrinarios en circulación ha alimentado un debate no saldado y que transita por diferentes opiniones y argumentaciones, destacándose aquellas que afirman que el pensamiento ilustrado adquirió distintas características y resonancias en Europa y en América, como también que no hay un solo Liberalismo sino que hay distintas vertientes teóricas con sus aplicaciones y respuestas en cada rincón de Latinoamérica.(Annino A., 2004; 1995: Introducción). Por otra parte, la aparición de investigaciones que se centran en la permanencia del Derecho Natural y de Gentes en las relaciones interpersonales y entre las distintas entidades políticas ha puesto otro elemento de discusión a aquella mirada sesgada que contemplaba solo la filiación de las ideas independentistas en la tradición neoescolástica, ilustrada o liberal; esta postura, a la vez, tiene en cuenta las variaciones dentro del mismo lusnaturalismo y las interpretaciones y los usos dados en ese tiempo y lugar.(Chiaramonte, 2000).

Para el Río de la Plata, contribuciones pioneras se encargaron de advertir que la sociedad resultante a fines del siglo XVIII se había mostrado mucho menos renovada que su política y su economía y, si bien el orden tradicional permanecía intocado en sus bases, el influjo renovador lo sometió a un asedio constante logrando, en el corto plazo y a raíz del fin del pacto colonial, ponerlo en crisis (Halperin Donghi T., 1972: Primera Parte, Cap. I) El proceso desencadenado luego de la independencia, en la misma región histórica, fue objeto de análisis de diferentes tradiciones interpretativas sostenidas por intelectuales y por ciertos historiadores argentinos considerados fundadores de la historiografía nacional. Desde la literatura, la ensayística, la historiografía, se construyó una visión del período en la que primaba la anarquía política y social

---

<sup>22</sup> Fernández Sebastián, Javier "Política antigua/política moderna. Una perspectiva histórico conceptual" 2005, expuesto en <http://foroiberoideas.cervantesvirtual.com/foro> y editado en Jean-Philippe Luis (coord..) Dossier des Mélanges de la Casa de Velásquez, Nouvelle Série 35 (1), Madrid, 2005.

atravesada por un nivel de confrontación militar permanente. En una sociedad profundamente militarizada por las guerras civiles y de independencia se entendió que la organización política consensuada tenía pocas posibilidades de desarrollarse. En este contexto, se caracterizó a los caudillos “bárbaros” como cabezas de ejércitos conformados sobre una base clientelar predominantemente rural, disputándose el poder regional en un marco de excesiva violencia, obstaculizando alianzas duraderas e impidiendo la formación de la nación.<sup>23</sup> Otras reflexiones de fines del siglo XX, un tanto simplificadas acerca de una sociedad rioplatense polarizada socialmente y con escaso funcionamiento institucional real luego de 1820, no otorgaban una justa valoración a otras formas de organización locales dentro del proceso de construcción estatal argentino; el excesivo peso a favor de los liderazgos personales fuertes en esas interpretaciones puso una barrera al análisis del caudillismo como fenómeno complejo y opacó aquellas experiencias que mostraban liderazgos menos concentrados.<sup>24</sup> Desde el debate sobre el origen de la nación argentina, un cambio importante en la perspectiva predominante acerca de este fenómeno trasvasó la figura mitológica del caudillo rural rioplatense y dio lugar a pensar la problemática en un contexto social más amplio, buceando en la naturaleza histórica del grupo dirigente y en las conformaciones institucionales en que se insertaron estos jefes político militares.<sup>25</sup> Otros estudios en torno a la discusión sobre la sustancia, las características y modos de funcionamiento de los caudillismos desde otros modelos explicativos y comprobaciones empíricas, se

---

<sup>23</sup> En el siglo XIX Juan B. Alberdi, Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, ya en el siglo XX José Ingenieros, José Ramos Mejía entre otros, sustentaron esa visión.

<sup>24</sup> Entre las décadas de 1960 y 1990, algunos estudios persistieron en mostrar, aunque con matices muy interesantes en orden a la complejidad de todo el proceso histórico, estos rasgos de fondos en la sociedad rioplatense. Ver Halperin Donghi, Tulio “El surgimiento de los caudillos en el cuadro de la sociedad rioplatense posrevolucionaria” en *Estudios de Historia Social*, Año 1, Núm. 1, Bs As, FFyL, UBA, 1965, pp. 121-149; “En el trasfondo de la novela de dictadores: la dictadura hispanoamericana como problema histórico” en *El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas*, Bs As, Sudamericana, 1987, pp. 24-5, 28. Safford, Frank “Política, ideología y sociedad” en Bethell, Leslie (ed.) *Historia de América Latina*, Vol. 6, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 1991 (Primera edición en inglés, 1985). Lynch, John “*Caudillos en Hispanoamérica 1800-1850*”, Madrid, MAPFRE, 1993; “*Juan Manuel de Rosas 1829-1852*”, Buenos Aires, EMECE, 1997 (Original en inglés 1981).

<sup>25</sup> Véase Chiaramonte, J.C., “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del Estado argentino (1810-1852)”, en Hilda Sabato (coord.), 1999; “En torno a los orígenes de la nación argentina”, en Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez, Ruggiero Romano, *Para una historia de América, II. Los nudos (1)*, México, El Colegio de México/FCE, 1999; 1997; “Acerca del origen del Estado en el Río de la Plata”, *Anuario IEHS*, UNICEN, N° 10, 1995; 1986 b.

situaron en un espacio rioplatense contemplado en ruptura con los límites jurisdiccionales nacionales y permitieron incluir áreas como la Banda Oriental y el Altiplano donde se manifestó también el fenómeno. En ellos se rediscute imágenes estereotipadas de caudillos tanto en sus rasgos personales como en las formas de su acceso al poder, criticando fuertemente el sello monolítico de sus bases sociales asentadas en relaciones puramente clientelares nacidas en la estancia ganadera. (Goldman N., Salvatore R.(Comps), 2005). En este sentido y contra la imagen de la historiografía que sostuvo que el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, actuaba como un todopoderoso que manejaba sus territorios y sus poblaciones de manera discrecional, uno de esos estudios trata de ver los límites al desarrollo estanciero y la construcción de poder del caudillo, en particular la relación que a través de sus propiedades establece con la población de la campaña. En él se evidencia una negociación permanente de los estancieros con los actores sociales del mundo rural, en el cual querían imponer prácticas de nuevo cuño, garantizar la propiedad privada plena de la tierra, conseguir mano de obra y expandir la producción pecuaria en gran escala. La imagen tradicional del latifundio ganadero se ve matizada por esta multitud de pequeñas y medianas explotaciones en el interior de la unidad económica. En ese marco, dice el autor:

...la relación de Rosas con los pobladores rurales es más compleja que la denominación de una relación clientelar. La abundancia de tierras, la persistencia de prácticas antiguas para su uso, la escasez de trabajadores, la necesidad del Gobernador/estanciero de construir un consenso para garantizar el orden, las propias crisis políticas y la movilización rural, parecen estar limitando la fuerza del Patrón para definir los términos de esa relación.<sup>26</sup>

En los últimos años han aparecido importantes contribuciones a la historia socio-política rioplatense para el período que nos interesa y aplicada a estudios de caso provinciales, algunos de los cuales hemos escogido para comentar, de manera no excluyente.<sup>27</sup> Un rasgo común en estos trabajos es la indagación tanto en los actores sociales como en las nuevas organizaciones provinciales sin desagregar sus antecedentes coloniales y mostrando que el pasaje hacia la

---

<sup>26</sup> Gelman, Jorge "Un gigante con pies de barro: Rosas y los pobladores de la campaña" en Goldman N, Salvatore R, 2005, pp. 223-240.

<sup>27</sup> Las contribuciones citadas y comentadas a continuación son, en su mayoría, tesis doctorales defendidas en los últimos quince años y atienden a distintas realidades regionales: el Tucumán, área mediterránea, Cuyo y Litoral.



conformación de un estado provincial está fuertemente marcado por la acción de, por lo menos, dos agentes de cambio: el sistema representativo de formas liberales y la militarización.

En primer lugar, destacamos dos estudios sobre Mendoza. Beatriz Bragoni ofrece una perspectiva de análisis casi inexplorada en la historiografía argentina como lo es la de la familia y sus redes migratorias, matrimoniales, productivas y políticas a lo largo de un siglo. Las estrategias grupales e individuales han sido rastreadas teniendo como motor de búsqueda al universo simbólico del grupo –en este caso la familia González-, la construcción de lazos familiares y económicos, el rol de las mujeres en un contexto de violencia política e inestabilidad institucional, lógica facciosa y parentela, comportamiento político de sus miembros, disensos y acuerdos a su interior. Si bien no tiene por objetivo el tratamiento del sistema político-institucional de la provincia, es interesante observar cómo desde una biografía colectiva se puede entrever –a modo de prisma- las vicisitudes de la acción política mendocina en una larga duración, desde fines del siglo XVIII hasta fines del XIX.<sup>28</sup> Por su parte, Hernán Bransboin estudia la construcción estatal mendocina en el período confederal caracterizando sus bases de legalidad y legitimidad, el grado de ejercicio de la soberanía poniendo énfasis en la cuestión del Patronato y los conflictos jurisdiccionales que afectaban ese ejercicio, el impacto del faccionalismo en el sistema político y la compleja relación interinstitucional en el interior del sistema, sobre todo las tensiones con el régimen rosista. El tratamiento de las relaciones con las otras provincias y con la República de Chile revela la intersección entre los intereses políticos y económicos que las condicionan.

La transición política de una ciudad de la periferia del Imperio español desde las postrimerías del antiguo régimen colonial a los primeros pasos de un liberalismo sincrético y orgánico, siendo el Cabildo un punto de mira privilegiado en el análisis, es el propósito central del caso de Tucumán estudiado por Gabriela Tío Vallejo (Tío Vallejo, G., 2001). La importante cuestión de la representación política y su transformación es retomada en el capítulo sobre la

---

<sup>28</sup> Bragoni, Beatriz *Los hijos de la revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX*. Bs Aires, Taurus, 1999. Bransboin, Hernán, 2012, pp. 263-264. Agradezco al autor haber dispuesto de su tesis doctoral inédita.

revolución, la guerra, los procesos electorales y la militarización en Tucumán, tratando de detectar signos de adaptación y cambio institucional impelidos por estrategias de los individuos como sujetos sociales activos, vistas desde su puesta en práctica efectiva. El trazado rápido y agudo de algunas instancias del período permiten ver una transición donde se reformulan los campos de atribuciones, teñida por los efectos de su inicial y conflictiva superposición, donde es evidente la pervivencia de la legislación colonial yuxtapuesta con disposiciones de nuevo corte. Transición que se mueve con distintos ritmos internos marcados por la caducidad del Cabildo, el fortalecimiento de la Sala y un poder creciente del gobernador plasmado sobre todo en el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Esta investigación se ve complementada con los resultados expuestos en otro libro que trata sobre “los dueños de la tierra”, cuya autora es Cristina López. En él se explora la construcción social del espacio rural tucumano, atendiendo a tres aspectos: ocupación física del territorio con variables demográficas, naturales y culturales, además de la evolución de la organización jurídico – administrativa y los cambios en la percepción de los habitantes sobre su identificación con una comunidad territorial de referencia.<sup>29</sup> Una novedosa investigación de Claudia Herrera, aunque excede el período de nuestro interés, está abocada a un análisis comparativo entre Tucumán y Valencia en la segunda mitad del siglo XIX. En ella se examina la combinación entre estructuras políticas liberales basadas en el individuo y pervivencia de relaciones sociales con rasgos tradicionales, particularmente las clientelares; para ello se vale, entre otros recursos metodológicos, del estudio de redes de parentesco y estrategias matrimoniales. Es una interesante comprobación de que aún no existe separación entre esfera política y esfera social, en una sociedad que se presuponía moderna y liberal si se atiende al discurso político y a los enunciados legales; las formas de sociabilidad continúan basadas en lealtades personales y en mecanismos informales de reciprocidad (Herrera, C., 2003).

Por su parte, las investigaciones de Silvia Romano sobre Córdoba están motivadas por el interés de conocer los procesos de cambio ocurridos en la

---

<sup>29</sup>López de Albornoz, Cristina *Los dueños de la tierra. Economía, sociedad y poder en Tucumán 1770 – 1820* Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2003.

economía y la sociedad y su incidencia en la conformación de grupos dominantes, en la estructura de poder local y política de alianzas, dentro del marco de la organización del estado provincial. Una preocupación central radica en evaluar la modificación de la estructura productiva tras el proceso independentista y las posibilidades y condiciones de inserción de Córdoba en el modelo de articulación con el mercado mundial, signado por la centralidad de la expansión ganadera y el rol de peso de la Aduana de Buenos Aires en el desarrollo regional de la época. Las comprobaciones en el análisis político permiten caracterizar al funcionamiento del poder con una dinámica muy lenta de recambio, concentración urbana de base mercantil, persistentes rasgos corporativos, sinuosas lealtades y un sistema representativo y legal que de liberal tenía muy poco. En lo atinente a la justicia como forma cotidiana de ejercicio del poder político, la misma es parte del proceso de construcción y legitimación del estado provincial que se desarrolla de manera interdependiente tanto con la organización y control de la violencia como con la fiscalidad; en un balance final se destaca que la justicia de Antiguo Régimen tiene rasgos permanentes avanzado el período republicano. Aunque no se alcanza a dilucidar suficientemente las lógicas de las alianzas y disputas en el seno del grupo dirigente, estos estudios sobre Córdoba atienden bien a los vínculos manifiestos entre poder político, base material y marcos legales (Romano S., 2002).<sup>30</sup>

El caso de Corrientes, analizado por Pablo Buchbinder, está basado en la necesidad de explicar el pasaje de una situación provincial floreciente, entre 1820 y 1840, tanto en sus condiciones económicas como en su enorme influencia política en la región, a otra de marginación, decadencia y crisis económica, social y política experimentada luego de 1850 (Buchbinder P., 2004). Peculiaridades de la primera etapa son: un sistema representativo sin caudillos eternizados en el puesto sino por el contrario, una sucesión de gobernadores estrictamente cumplida según las prescripciones constitucionales. Un dificultoso control de la jurisdicción territorial provocado por condiciones geofísicas que interferían en la comunicación de las distintas circunscripciones departamentales

---

<sup>30</sup> Romano, Silvia "Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces de la campaña cordobesa en las primeras décadas del siglo XIX y la construcción del estado provincial autónomo" en Herrero, Fabián (Comp.) *Revolución, Política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810*, Bs Aires, Ediciones Cooperativas, 2004.

pero que la situación fronteriza de algunas agravaba esa dificultad y acentuaba desequilibrios en las jerarquías territoriales. La región sur de Corrientes constituía un área de campaña propensa a generar mayores posibilidades de movilidad social y obtención de recursos, dados sus contactos estrechos con los entrerrianos, orientales y riograndenses del Imperio brasileiro, a la vez que se generaban jefaturas político militares al tipo de caudillos menores al frente de formaciones milicianas bastante poderosas y que constituían una peligrosa combinación para la dirigencia capitalina.

En una obra colectiva de reciente aparición, se estudia a Buenos Aires desde 1821 en el que se conformó como Estado soberano e independiente hasta su federalización en 1880. En ese amplio lapso, distintos historiadores examinan un arco temático variado intentando una restitución de la especificidad de la historia provincial bonaerense que, en la historiografía tradicional, tendió a diluirse y confundirse con la historia nacional. A través del examen de procesos, actores y conflictos se buscó trazar nuevas periodizaciones, revisar interpretaciones y ofrecer otras nuevas con otros enfoques y perspectivas. Los temas abordados refieren al orden legal y la institucionalización, la sociedad, estado y economía, relaciones estatales con la sociedad indígena y con la iglesia, el problema de la tierra y el aparato militar; incursiona además en problemáticas relacionadas a la circulación de ideas, literatura y política, formación de opinión pública y espacios de sociabilidad para terminar con un aporte desde el arte y la arquitectura poniendo en relación lo urbano y lo rural. (Ternavasio M. (Dir.), 2013).

Un interés particular revisten los estudios realizados para la Banda Oriental, en tanto nuestro objeto de investigación desde un enfoque regional, la incluye por su relación con el proceso de construcción del poder político en Entre Ríos. Ante todo es necesario resaltar que la historiografía más tradicional y nacionalista tanto argentina como uruguaya y hasta el mismo imaginario social la han relegado del proceso histórico rioplatense luego de 1820 por una situación de ocupación portuguesa y de una pronta independencia a partir de 1828 como resultado de la guerra entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde nuestra experiencia, hemos podido observar que se han formulado etiquetas del mismo José Artigas como caudillo “argentino” o caudillo

“uruguayo” sin comprender que su figura es auténticamente rioplatense y que su actuación se explica en la historicidad de la región y no desde los Estados nación que se constituyeron posteriormente.

Las nuevas investigaciones sobre la Banda Oriental han renovado las perspectivas de análisis, los métodos y la lectura de fuentes poniendo en discusión la misma concepción nacionalista de la historiografía que también en Uruguay contó con importantes exponentes y que se agrega a lo planteado para el arco latinoamericano en nuestra introducción. Las autoras que seleccionamos ofrecen una variedad en el análisis teniendo en cuenta el enfoque regional y no la matriz nacional rígida. En este sentido, los importantes estudios encarados por Ana Frega profundizan sobre la revolución artiguista y la soberanía de los pueblos en una confrontación modélica con lo propuesto por el centralismo porteño de Buenos Aires; los sectores populares y la formación de identidades colectivas; el mundo rural en clave de orden social y construcción de liderazgos; la ocupación portuguesa y los proyectos independentistas de la provincia Oriental entre tantos otros temas. En ellos trasunta una historia social del poder revelando esa trama sinuosa de alianzas que construye poder político y no se acota en las elites sino que avanza hacia otros niveles sociales, permitiendo observar una jerarquización de poderes que va desde lo central hasta lo local. Las historiadoras uruguayas Ariadna Islas e Inés Cawen aportan a la renovación historiográfica desde otros enfoques. Islas trata la problemática de las fronteras en la región platina con una lectura cartográfica profunda e innovadora, colocando en foco las representaciones, los proyectos políticos y las pujas regionales por el territorio. Cawen indaga en las acciones políticas y la conformación político institucional de la Provincia Oriental en medio de tensiones facciosas y presión de poderes regionales.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Cf. Algunos trabajos con estos nuevos planteos y discusiones: Frega, 2007; Los trabajos de Ariadna Islas, Ana Frega e Inés Cawen en Frega, Ana (Coord), 2009, Caps. 1, 2, 4, 5, pp. 19-100, 131-216. Frega, Ana “La virtud y el poder. La soberanía particular de los pueblos en el proyecto artiguista” en Goldman N, Salvatore R (Comps) 2005, pp. 101-133; Frega Ana e Islas, Ariadna (Coords) *Nuevas miradas en torno al Artiguismo*, Montevideo, Dpto. Publicaciones de FHCE, UDELAR, 2001. Para la primera mitad del XIX, un aporte desde una perspectiva cultural de lo social es el de Barrán, José Pedro *Historia de la sensibilidad en el Uruguay*, Montevideo, Edic. de la Banda Oriental, 1989 (T. I: La cultura bárbara 1800-1860).

En este Capítulo pretendimos dar cuenta de antecedentes historiográficos que se vinculan a nuestro objeto de estudio y el modo de abordarlo, pero sobre todo de que nos reconocemos tributarios de éstos y otros aportes de investigación precedentes, que no tienen solo formato escrito publicado sino que una y otra vez se han discutido en reuniones académicas, foros digitales y hasta charlas informales entre simposio y simposio. Renovaciones historiográficas a las que atendemos pero también legados tradicionales para nada desdeñables que nos aportan conocimiento histórico, información, aparato erudito y tratamiento documental; renovaciones y legados que nos permiten realizar además el siempre indispensable análisis crítico del discurso historiográfico.

## **I.2. La historia de Entre Ríos: entre los legados historiográficos tradicionales y las nuevas perspectivas de análisis.**

### *Legados historiográficos tradicionales*

La consideración de los legados historiográficos de cualquier época debe tomar en cuenta las concepciones y formas de acercamiento al pasado, los intereses profesionales desplegados y las visiones y estadios de memoria colectiva generados, por citar algunas cuestiones. Examinaremos aquí de manera breve, los aportes de parte de la historiografía entrerriana del siglo XX, por lo menos una selección de los títulos más relevantes y difundidos que estudian el período histórico de nuestro interés. El conjunto de sus autores presenta elementos un tanto dispares en cuanto a formación académica, trayectoria profesional y producción disciplinar. Algunos, historiadores consagrados desde los ámbitos oficiales y académicos, realizaron trabajos de sólido soporte empírico al mejor estilo rankeano, con esfuerzos dirigidos a abarcar largos períodos o bien contribuir con pormenorizados estudios puntuales y más acotados en el tiempo. Otros desde su formación de periodistas, escritores y/o publicistas, escribieron crónicas minuciosas, muchas veces laudatorias, de hombres y sucesos. Las características de las obras van desde libros hasta artículos en colecciones académicas o bien opúsculos, apuntes y monografías reunidas luego en un solo volumen; tanto la prensa como la

radiofonía y las conferencias constituyeron vehículos de divulgación de sus propias investigaciones.<sup>32</sup> Obras que, en mayor o menor medida, son de consulta obligada para nuestra investigación, por la reconstrucción del proceso histórico local y el enorme trabajo de fuentes primarias que se ha realizado, con la advertencia de ponderar el contexto histórico de producción y las propuestas metodológicas correspondientes a cada una de ellas.

En los textos escogidos, podemos definir algunos rasgos comunes en los propósitos, estilos y escritura, a modo de aproximación a sus legados historiográficos. De todos ellos sobresale la intención de hacer una historia entrerriana autónoma ya desde la colonia y desmembrada del proceso común que la sujetó a Santa Fe desde la fundación de ésta en 1573 hasta 1814 en que el Directorio la declara provincia, podríamos decir una línea “esencialista” de la identidad y la historia provinciana. En este sentido, el determinismo geográfico del aislamiento “entre los ríos” fue un argumento para indicar la naturaleza peculiar de sus habitantes y su carácter independiente, rudo y valeroso.<sup>33</sup>

Por otra parte, hay una preocupación por reconstruir los momentos más importantes en la vida provincial del siglo XIX y su rol en las políticas “nacionales”, jugando entre un proceso interno de variadas aristas y su relación con acontecimientos de mayor proyección que emergen en la colonia y en el período independiente. El problema suscitado, en algunos casos, es la excesiva dependencia de sucesos provinciales respecto de una cadena de acontecimientos gestados en centros de decisión política externos como la misma Buenos Aires, que debiera ser revisada a fin de lograr una periodización propia. El montaje de una antigua tradición con estas bases fue una tarea compartida por el aludido grupo de historiadores y escritores pero también fue la

---

<sup>32</sup> Bosch, Beatriz 1984; 1991 (1ra.Ed. 1978); 1942; Urquiza Almandoz, Oscar, 1978; Vázquez, Aníbal, 1946; Sagarna, Antonio, 1946, pp. 251-286; Calvento, Mariano, 1940; Pérez Colman, César, 1936; Teijeiro Martínez, Benigno, 1910. Algunas referencias del perfil profesional: Beatriz Bosch (1911-2013) fue Profesora de Historia y Geografía, docente universitaria y miembro de la Academia Nacional de la Historia (ANH); Urquiza Almandoz (1932) profesor de historia y letras, docente, miembro de la ANH; Vázquez fue periodista y publicista municipal; Gianello (1908-1993) fue abogado, poeta, ensayista, ministro provincial. Sagarna fue Ministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Marcelo T. De Alvear; Pérez Colman (1874-1949) fue abogado, docente, periodista.

<sup>33</sup> Urquiza Almandoz por ejemplo dice: “... pero siempre agua, monte y cielo... y en medio de ese paisaje agreste, el hombre. Hombres y mujeres que en temerario desafío al destino se atrevieron a habitar la tierra virgen.” 1978, Introducción. En el Cap. II, Apartado II.1. ampliamos sobre esa visión determinista.

tónica general de la historiografía de provincias para el período tardocolonial y primera mitad del siglo XIX. Podemos corroborar esto, por ejemplo, con producciones de Corrientes y Santa Fe donde existe un afán marcado por demostrar las contribuciones provinciales a la organización nacional. Una contestación a la “historia nacional” homogénea y centralizada en Buenos Aires, realizada en un tono reivindicativo de la posición provincial que consideraba que, históricamente, les correspondía en la génesis de la República.<sup>34</sup>

Volviendo a la historiografía entrerriana y en esa línea de tradición y memoria colectiva, se observa el afán por construir próceres locales como objetos de culto, es el caso de los gobernadores Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza que son constituidos en hombres gloriosos, intachables y estandartes de la postura federal en contra del porteñismo calificado como nefasto. Merecen, a juicio mayoritario, el concepto de “vidas eminentes e ilustres” elevadas a ejemplos rectores de la sociedad local y nacional.<sup>35</sup> Se evidencian también apreciaciones valorativas de buenos y malos en la historia, con acciones juzgadas como providenciales y heroicas por el lado de los gobernadores citados o bien como traiciones e inmoralidades en el caso de sus enemigos. Es interesante este punto pues la polémica se desata en los textos y en algunas oportunidades se realizan contrastes con afirmaciones, por ejemplo, de historiadores de corte liberal positivista como Bartolomé Mitre o Vicente Fidel López, decanos de la historiografía nacional.

A efectos de ejemplificar sobre estos rasgos de la historiografía entrerriana, destacamos al menos dos cuestiones: la valoración del gobierno de Lucio Mansilla y de la influencia santafesina sobre las políticas entrerrianas. Sobre el primer punto, los historiadores más profesionales coinciden en señalar que la obra de organización fue progresista y de notable beneficio para Entre

---

<sup>34</sup> Para el primer caso: Leoni, María Silvia “La historiografía correntina en la primera mitad del siglo XX” y “Hernán Gómez, un historiador de Corrientes, Quiñónez, María Gabriela “Manuel Florencio Mantilla y la historiografía decimonónica argentina” en Maeder, Ernesto et al *Visiones del pasado. Estudios de Historiografía de Corrientes*, Corrientes, Moglia Edic. 2004. Para Santa Fe: Lassaga, Ramón “*Historia de López*”, Bs Aires, Imprenta de Mayo, 1881; Cervera, Manuel 1981, (1ra. Edición 1907); Busaniche, José Luis *Estanislao López y el federalismo del Litoral*, Bs Aires, Edit. Cervantes, 1927; Gianello, Leoncio, 1978; Suárez T., Tedeschi S. op. cit. 2009.

<sup>35</sup> “Mientras en la Banda Oriental se eclipsaba un astro (José Artigas) que irradió resplandores pirotécnicos, de las selvas entrerrianas surgió simultáneamente otro (Francisco Ramírez), que pasó por nuestra historia con la rapidez de un rayo, que encegueció los ojos, que iluminó la ruta y dejó huellas profundas e imperecederas” en Vázquez, A., 1946, p. 25.



Ríos y que el gobernador tuvo buen tino en la designación de sus asesores y ministros<sup>36</sup> Las argumentaciones contienen adjetivos tales como honesto, inteligente y pacificador de los espíritus en épocas de inquietudes, alzamientos y resistencias. Lo que se filtra en la enunciación de las bondades organizativas, es “la falla de origen” de su mandato por ser porteño y no natural de la provincia y por ser la revolución de septiembre de 1821 un camino irregular para su acceso al gobierno. El publicista Vázquez va más allá y afirma en un tono apasionado que Mansilla cometió inescrupulosa traición política contra Francisco Ramírez de quien había sido su asistente de confianza en sus luchas con José Artigas, fruto de su política maquiavélica. (Vázquez A. 1946: pp. 47-52). En cuanto a la renuncia de Mansilla al segundo mandato, hay opiniones diversas. En el caso de Bosch, resalta su condición de Restaurador del Orden y la paz –distinción otorgada por el Congreso provincial que alcanza su máximo punto al dimitir en febrero de 1824 como prueba de tacto político, ascendiente moral y genuino gesto democrático. Por su parte, Sagarna opina que su renuncia se debió a las dificultades que le creaba el sentimiento localista, la presión santafesina y la crisis casi inmanejable de la Banda Oriental. Calvento resume las dos posiciones anteriores quien, atendiendo a las mismas causas que Sagarna, agrega que la decisión responde a una patriótica y ejemplar sensatez, extraña a la época.<sup>37</sup>

Sobre el segundo punto: la influencia santafesina es considerada con características de tutela, presión amenazante y sin pudor, autoritarismo y especulación. Lo notable es que estas opiniones tienen otro sustento historiográfico nutrido por la memoria social heredada, por ejemplo en la valoración positiva y por momentos mítica del gobierno de Francisco Ramírez y en su muerte a manos de una partida santafesina mandada por López, que tuvo

---

<sup>36</sup> Así lo manifiestan en general: Sagarna, Calvento, Martínez, Bosch, Urquiza Almandoz.

<sup>37</sup> RLDAPER, T. I, p. 361-2. Comunicación de Lucio Mansilla a la Legislatura renunciando al cargo de Gobernador para el que ha sido electo: “...Una triste experiencia nos enseña que todos los hombres tenemos una inclinación cuasi irresistible a conservar eternamente el mando, una vez que hemos sido elevados, o nos hemos elevado nosotros mismos a él; y también la experiencia nos ha hecho ver, que esto no es compatible con la libertad, ni puede dejar de producir disturbios, partidos, guerras civiles y carnicerías. Pongamos con tiempo un dique a este mal. Yo no conozco otro que el ejemplo; él es el modo más seguro de conducir a los hombres a aquel punto en que se deben colocar. Acostumbremos a los pueblos a ver bajar de su silla al primer magistrado sin violencia y a éstos a que no la esperen para hacer lugar a sus sucesores...”. Bosch B.1978, pp. 86-87 y 1942, p. 86; Sagarna, A., 1946, p. 258. Calvento, M, 1940, pp. 62-63.

como colofón el corte de su cabeza, embalsamamiento y exposición sobre una pica en la plaza mayor de la ciudad de Santa Fe. Este hecho criticado y hasta tomado como afrenta personal por muchos historiadores y ciudadanos entrerrianos aún en la actualidad, tiñó el punto de vista a la hora de examinar la influencia santafesina. Beatriz Bosch al respecto es clara en la posición tomada: “... ¡Macabro desenlace! La insensibilidad de López brinda cual trofeo la faz sangrienta del compañero de luchas de apenas un año atrás... una escena de barbarie.” (Bosch, B. 1978, p. 69). Si confrontamos estos planteos con el tratamiento del mismo episodio de parte del historiador santafesino Manuel Cervera, notamos que hay una suerte de justificación de la decisión tomada. Al destacar la defensa que el caudillo santafesino hacía de su provincia, transcribió completo el oficio de López al gobernador sustituto Méndez y al Cabildo donde fundamenta la exhibición pública de los restos de Ramírez en tanto sirva a la perpetua memoria y escarmiento de aquellos que, en el futuro, “intenten oprimir a los heroicos y libres santafesinos”.<sup>38</sup>

Para describir el período 1826-1831, la historiografía local comparte la denominación de “anarquía” política. El énfasis está puesto en la sucesión de gobernadores como reflejo de la puja intrarregional por el poder con la participación activa de los “criminales” emigrados en el Estado Oriental y la incondicional sumisión de algunos de estos gobernantes a la influencia del “simulador” Estanislao López lo que progresivamente fue concretando la entrega de la provincia de Entre Ríos a las directivas de Santa Fe. Hacia 1832, con la llegada de Pascual Echagüe a la gobernación, se inició una etapa prolongada de diez años que fue evaluada historiográficamente como de tranquilidad interna y organización sin perjuicio de calificar al santafesino Echagüe como un extraño a la provincia, un sumiso servidor de López, incondicional de Rosas y proclive a instaurar tal como éste en Buenos Aires, un poder cada vez más concentrado hasta llegar a obtener la suma del poder público. Estas evaluaciones

---

<sup>38</sup> Cervera, Manuel, 1980, vol. II, pp. 600-601. Vázquez a pesar de considerar que Mansilla arrasó las instituciones de la República entrerriana, justifica que su administración trajo una estructuración institucional definitiva y permanente; también y no obstante a que la influencia santafesina se presenta según el autor, preeminente y con dominio absoluto recoge unas palabras del historiador santafesino Manuel Cervera que sostiene que las ideas de López van más lejos que los estrechos límites de una ambición provincial, aspirando al beneficio de todas las provincias. Vázquez, Aníbal, 1946, pp. 60-65.

historiográficas –sobre las que nos explayaremos en el Apéndice- muestran evidencias que no ocultan, sin embargo, una imagen de Echagüe forjada por sus propios contemporáneos y que puede ser sintetizada en dos expresiones de época: “ídolo de Entre Ríos” e “Ilustre Restaurador del Sosiego público”. (Calvento M., 1940: pp. 89-100, 130-164.)

Esa visión historiográfica más tradicional que recogimos en las citadas obras publicadas en el siglo XX, precisamente entre 1910 y 1980, no se despega de las argumentaciones de contribuciones muy recientes y, por el contrario, refuerzan algunas de esas premisas tratando de rescatar a los “federales olvidados” de la “patria chica”. A través de los ensayos biográficos de Bartolomé Zapata, Felipe Rodríguez, Ricardo López Jordán, Pedro Espino y Cipriano de Urquiza, realizados por profesionales ligados a la archivística, vuelve la impronta de la identidad autónoma entrerriana moldeada en las acciones de segundas líneas de jefes con la intención de incentivar un espíritu patriótico localista. Sin dejar de resaltar la transcripción documental tan útil e importante que sirve de sostén a los propósitos de los trabajos, comprobamos que estas escrituras de la historia local abrevan en las mismas bases tradicionales de aquellas obras del siglo XX, agravadas por la falta de una contextualización adecuada y sin aprovechar al ensayo biográfico como un prisma a través del cual observar y explicar el funcionamiento social de la época. (Bascourleguy Graciela (Coord.), 2007).

#### *Nuevas perspectivas de análisis.*

Otros estudios más recientes han renovado los problemas históricos y su tratamiento desde otras perspectivas de análisis, aunque concentrados mayormente en la región oriental de Entre Ríos, sobre la margen occidental del río Uruguay y con un recorte temporal entre 1770 y 1850. Investigaciones relativas al período intersecular, han hecho posible el conocimiento de aspectos sustanciales del desarrollo histórico de esa región oriental, que son útiles como antecedentes para abordar el período posterior a 1820 en lo atinente a la formación del estado provincial entrerriano. Los avances han consistido en mostrar ciertas facetas en la conformación de espacios de poder locales en torno al acceso a la tierra, atendiendo a la política borbónica de poblamiento estratégico y los conflictos jurisdiccionales originados –especialmente los

eclesiásticos-, incluyendo historias familiares y constitución de redes de relaciones. En esta línea, se indaga en las estrategias emprendidas por comerciantes y hacendados en el contexto de la guerra revolucionaria a fin de consolidar fortunas personales e introduciendo nuevas prácticas de negociación y comercialización que suplían en parte a aquellas implementadas por los mercaderes coloniales, si bien en una coyuntura de excepción y llevadas a cabo con sumo riesgo. Estos cálculos también contemplaban el establecimiento de contactos con el poder político, necesarios para avizorar éxitos en sus operaciones en tanto obtención de información, provisión de mano de obra y otros recursos. El caudillismo formado en la cantera de las guerras de independencia es abordado en otro trabajo aplicando conceptualizaciones de la antropología política y profundizando sobre el sostén de los nuevos liderazgos en instituciones tanto formales como informales.<sup>39</sup>

Otras investigaciones, con enfoque de frontera rural, permite observar la dinámica de los movimientos migratorios y los patrones de desarrollo socio-económico; la vida cotidiana y las actividades económicas en contexto de guerras y algunas aproximaciones al estudio de lo político en la región, con una interesante y necesaria reconstrucción de las familias notables del lugar y la afirmación de sus posiciones políticas y socio-económicas, a tal punto que es desde esa área fronteriza donde se gestan liderazgos como el de Justo José de Urquiza. En el marco de las propuestas más actuales sobre elites y notabilidad, la mirada analítica está puesta en revelar las interacciones sociales que sostienen el poder de los líderes trascendiendo su acción individual; una manera opuesta al interés de la historiografía entrerriana más tradicional por construir próceres locales de actuación providencial, según ya hemos mencionado. Por

---

<sup>39</sup> Barral, Maria Elena "Las parroquias del suroriente entrerriano: los alcances del regalismo borbónico", ponencia en *1ras. Jornadas de Historia Social de la Justicia*, Rosario, 2010; Djenderedjian, Julio, 2008, pp. 639-668, versión revisada y actualizada de "Da locum melioribus. Política imperial, procesos de poblamiento y conformación de nuevos espacios de poder en las fronteras rioplatenses tardocoloniales como raíces de la insurgencia revolucionaria", Ponencia // *Jornadas de História Regional Comparada y I Jornadas de Economía Regional Comparada*, Porto Alegre, Brasil, 3/6/OCT 2005; 2002, pp. 243-259. Biondino, Claudio "El levantamiento "patriótico" de Bartolomé Zapata en 1811 ¿Caudillismo tradicional o forma de expresión del poder local entrerriano entre el orden colonial y la revolución? en *Memoria Americana* 14, 2006, pp. 9-35. Román, César "Conflicto, poder y familia en la génesis de un sector socialmente dominante: el caso del oriente entrerriano. Fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX." Ponencia en *IX Jornadas Escuelas/Departamentos de Historia*, Córdoba, Argentina, 24 /26/SET 2003.

otra parte, se explora la importante cuestión del impacto de las estrategias fiscales y los variados medios de pago y monedas vigentes sobre los negocios de importación y exportación en Entre Ríos, particularmente desde 1830 y con mayor atención desde 1840. Las comprobaciones sobre el cambio de eje del tráfico comercial de cabotaje, desde el río Paraná hacia el río Uruguay, demuestra la consolidación del oriente entrerriano en la economía provincial y las expectativas de beneficios más amplias a partir de un vínculo más estrecho con las plazas de Buenos Aires y Montevideo (Schmit, Roberto, 2004, 2003).

## **Capítulo II. UNA REGIÓN DE AMÉRICA MERIDIONAL ENTRE LA COLONIA Y LAS PRIMERAS DÉCADAS INDEPENDIENTES. LOS “ENTRE - RÍOS”: Ambiente, territorio, construcción política y social del espacio.**

El abordaje del problema histórico enunciado se propone desde la descentralización del análisis de matriz nacional hacia otro con enfoque regional. A través de sus distintas dimensiones de análisis, consideramos al proceso histórico desarrollado en los “Entre – ríos” como parte de una realidad histórica regional con sus especificidades: el Litoral fluvial rioplatense como una región localizable en América meridional, construida históricamente, atravesada por la temporalidad y conectada a un proceso mayor que involucra a otras conformaciones regionales. Por lo tanto, consideramos que la explicación de la emergencia de la experiencia entrerriana debe ser aprehendida en el transcurso de *una historia en marcha*, tal como lo propone Pierre Rosanvallon. (Rosanvallon P., 2002, pp. 123-133).

Este estudio introductorio tiene como objetivo analizar fenómenos de existencia real en su distribución espacial y en su articulación entre lo material, lo político y lo social, por tanto el enfoque regional está aplicado con esa función operativa. Tenemos en cuenta que la sociedad humana no es una realidad estable sino que se estructura en forma dinámica y permanente con la interacción de individuos y de colectivos, a través del tiempo y el espacio. Un tiempo o dimensión temporal que tiene su propio tiempo interno con riqueza de combinaciones y con variados ritmos según la intensidad y densidad de las acciones; consecuentemente esta noción de lo temporal permite identificar momentos de ruptura y medir cambios y duraciones.<sup>40</sup>

Consideramos al *espacio* como construcción social y como acumulación de experiencias, de acciones sociales territorializadas y localizadas en diferentes momentos. Un espacio que involucra también a lo percibido e interpretado por los hombres y mujeres que viven y circulan en él. En ese espacio intervienen los

---

<sup>40</sup> . Bagú, Sergio: Tiempo, realidad social y conocimiento, propuesta de interpretación, Siglo XXI, 1984, Cap. IV El tiempo de la realidad social, pp.106-117. Mata, Sara “Hacer Historia Regional: Temas, Enfoques, Posibilidades”, 1ras. Jornadas Internacionales Historiografía Reg., Resistencia, Chaco, 2006. Fernández Sandra, Dalla Corte Gabriela (Comps.) 2001. Introducción y capítulo de Terradas i Saborit: “La historia de las estructuras y la historia de la vida. Reflexiones sobre las formas de relacionar la historia local y la historia general”; Barros C., Aguirre Rojas C. (Eds.) *Historia a Debate*, América Latina, Sgo.de Compostela, 1996, Cap. Historia Regional, pp. 205-245.

actores sociales en sus dimensiones individuales y colectivas, el medio geográfico ambiental –que sin ser determinante puede ser condicionante-, los recursos económicos, la dinámica poblacional, las instituciones, los grupos de poder, la producción y los mercados, la costumbre, las leyes y las prácticas, las identidades étnicas, la cultura material y simbólica.<sup>41</sup> En cuanto al territorio seguimos los aportes de la antropología jurídica: un territorio es tal a partir de una acción política sobre una porción de tierra y sus habitantes. La configuración y ejercicio de la jurisdicción decidida por agentes políticos relacionan suelo, población y autoridad y diseñan dispositivos de control y legitimación de la posesión (Stopani, A., 2005, pp. 74-79). También está asociado a hábitat como espacio real, simbólico y mítico donde las sociedades organizan y desarrollan su modo de vida, satisfacen sus necesidades materiales y espirituales.<sup>42</sup>

En el proceso socio-político que nos interesa investigar, la problemática fronteriza es un elemento constitutivo de suma importancia para comprender la construcción del poder político provincial y regional. Para su abordaje, utilizamos una noción de *frontera* contenida en los atributos generales del concepto *espacio* explicados precedentemente, pero destacada por su propia dinámica de construcción y desarrollo histórico. La pensamos como espacio vivo de interacción social con diversas manifestaciones: acuerdos, intercambios, tensiones, conflictos, litigios y no una simple línea inmutable de separación jurisdiccional. Consideramos que las nociones de “frontera natural” convertida en frontera política, (Sahlins P. 1990: p. 1433, 1451), fronteras internas y externas,

---

<sup>41</sup> Santos, Milton, *O espaço e método*, Sao Pablo, Nobel, 1985, pp. 5-20, 22, 31. En esa territorialización el movimiento social –presente en cada acción social- se fija en un espacio y un tiempo; en cuanto al concepto de localización Santos lo concibe como un movimiento social aprehendido en un punto geográfico o lugar; por lo tanto, las variaciones de los movimientos sociales van cambiando el significado de ese lugar. Los autores D. Hiernaux y A. Lindon desarrollan estos conceptos de Santos en “El concepto de espacio y el análisis regional”, Secuencia, Rev. Historia y Cs Sociales, México, Inst. Mora, No. 25, 1993, p. 104. Alain Morel, desde la sociología rural, ya había propuesto la noción de espacio social en un interesante trabajo sobre las relaciones sociales en una aldea de la Picardía francesa, analizadas en distintas escalas geográficas y en términos de identidad, percepción, representación. Morel, A. “L'espace social d'un village picard”, *Études rurales*, 1972, Vol. 45, No. 45, pp. 62-80. Acceso: [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rural\\_0014-2182\\_1972\\_num\\_45\\_1\\_1711](http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rural_0014-2182_1972_num_45_1_1711)

<sup>42</sup> Lo conceptual relativo a territorio y jurisdicción en Darío Barraera en *Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político*, Santa Fe, 1573-1640, Min. Innovación y Cultura Prov. de Santa Fe y Museo Histórico Provincial, 2013, p. 38. El territorio como *hábitat*, en Krotz, Enrique (Eds.) *Antropología jurídica. Perspectivas socio culturales en el estudio del derecho*, México, Anthropos, UAM Iztapalapa, 2002, pp. 203, 253.

fronteras móviles, fronteras en términos de representación, jerarquización de derechos, contigüidad, (Nordman D. 2006: pp. 154-171) son herramientas pertinentes para el análisis.<sup>43</sup>

En este capítulo se desarrollan algunas características geofísicas y ambientales del área de estudio, como también ciertas instancias del proceso de ocupación y poblamiento que nos proporcionan la base para observar y explicar relaciones y prácticas sociales territorializadas. Si bien el objeto de estudio tiene un marcado sesgo político es necesario conocer los rasgos generales de tipo social y económico de esa sociedad sobre la que se construye el Estado y que tienen su incidencia en las formas y desarrollo de ese proceso formativo; rasgos destacados en clave histórica que procuran esclarecer, por ejemplo, los diversos intereses puestos en juego, las alianzas y las enemistades, la base fiscal, las interconexiones económicas de la región que repercuten en la política, los vínculos sociales puestos en acto, aspectos que aparecen a lo largo de la investigación. Por otra parte, situamos a los “Entre – ríos” dentro de las variables estratégicas del dominio colonial español y planteamos las sucesivas alternativas en su dependencia jurisdiccional, en las que concurren la política colonial española y las derivaciones de la revolución y la independencia a fin de entender mejor las formas institucionales legadas, las influencias políticas de otros centros de poder, los conflictos internos y externos. En este sentido, el objetivo de este capítulo tiene también una función operativa a efectos de aportar al conocimiento del proceso histórico regional y la interpretación de problemas centrales que atraviesan la construcción estatal entrerriana en el período estudiado.

---

<sup>43</sup> “Natural frontiers provided a concrete goal within Richelieu’s overall policy around which specific diplomatic aspirations and military strategies were organized. Mountains and rivers were not limits that enclosed a French space, separating it from the other, but obstacles to be conquered –and passageways to be controlled- by establishing strongholds beyond them. As such, the idea of natural frontiers helped determined short and long-term policy decisions”. Sahlin, Peter “Natural Frontiers Revisited: France’s Boundaries since the Seventeenth Century” *American Historical Review*, Vol. 95, No. 5, 1990, pp. 1423-1451 (1433). Areces, Nidia *Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del Dr. Francia*, Asunción, CEADUC, 2007, Cap. 1 “Regiones y Fronteras. Apuntes desde la Historia”.



## II.1. Una aproximación a las dimensiones geográficas y ambientales.

Diversas contribuciones historiográficas tradicionales como también ciertas manifestaciones literarias han abonado una concepción de entidad fija y cerrada sobre Entre Ríos basada en determinismos geográficos. Los historiadores Leoncio Gianello, Beatriz Bosch, César Pérez Colman, Juan Bautista Ghiano, han adherido a la figura del “continente” entrerriano. Un “continente” pensado en términos de configuración aislada por los dos grandes ríos Paraná y Uruguay que ha prefijado la evolución de esa sociedad y ha forjado la naturaleza particularista y localista del “hombre entrerriano”. En la vasta, reconocida y difundida obra del poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz, nuestra mirada desde lo historiográfico descubre a esos conceptos representados en su lenguaje poético.<sup>44</sup> Lo que continúa es una aproximación a las dimensiones geográficas y ambientales en clave regional que, unidas a otras variables, aportan a la explicación de la investigación general.

Las tierras de los “Entre-ríos”, elevadas a varios metros por sobre el nivel de las pampas vecinas y del caudal de los grandes ríos Paraná y Uruguay, combina llanuras con suaves ondulaciones decrecientes hacia el sur –las llamadas lomadas o “cuchillas”- en ese entonces cubiertas de bosques, pastizales y montes achaparrados. Son terrenos surcados por casi un centenar de cursos de agua además de lagunas y bañados, rodeados por arbustos leñosos y restos de selva en galería. De clima subtropical cálido en la franja norte, bordeada por los arroyos del Guayquiraró y el Mocoretá, va derivando en templado húmedo hacia el sur, con precipitaciones abundantes. Estas condiciones naturales eran inmejorables para la cría de ganado vacuno y caballar, con muy buenas pasturas naturales y sitios denominados rinconadas u “horquetas” que estaban limitados por agua y eran aptos para amansar y retener

---

<sup>44</sup> *Si el sauce eternamente se va, hojeando sus pececillos, siempre, en una cita de ríos que no pueden verse...Pero es mi “país” únicamente, el sauce que sobrenadaría, hoy sobre las direcciones del limbo? No es, asimismo, el laúd de líneas de ave y de líneas que apenas se miran el Uruguay “de plumas” y el Paraná “de mar”...?* Ortiz, Juan Laurentino (Juanele) *Obras completas*, Centro de Publicaciones UNL, 1996, Apartado “En el aura del sauce”, Fragmento del Poema “Entre Ríos” pp. 578-579. Hay una relación a lo largo del poema entre sauce y laúd: el movimiento del follaje del sauce se asemeja a una confluencia de corrientes; el laúd trae la forma del instrumento para mostrar un territorio encerrado entre los ríos Paraná y Uruguay. Notas de Sergio Delgado al poema, pp. 915-916.

rodeos de animales. La margen occidental del Paraná medio hacia Santa Fe se corresponde con tierras bajas y anegadizas, con un curso de agua plagado de depósitos aluviales modificados permanentemente por el régimen regular de crecidas y bordeado de algunas pequeñas ensenadas; hacia el interior se extiende una planicie con algunas depresiones en torno al río Salado, predominando el bosque y monte bajo de espinillos. En contraste, la margen oriental se distingue por sus “terrazas altas con afluentes” que declinan sensiblemente al llegar al delta del Paraná, multiplicándose su caudal en arroyos y pequeños canales. El río Uruguay tiene caudalosos tributarios en su ribera Oeste como el río Gualeguaychú y en la Este, el Cuareim, Arapey, Queguay, Dayman y Negro. Después de correr por pronunciados desniveles del terreno que originan saltos y rápidos, el Uruguay se expande a la altura del Dayman y cobra una anchura considerable con numerosas islas aluvionales de diversos tamaños que le imponen una dinámica fluvial diferente. La costa occidental en el curso medio del río Uruguay presenta mayor declive que la paranaense y la costa opuesta -hacia la Banda Oriental- continúa en suave planicie de origen sedimentario extendiéndose hasta las primeras estribaciones de las Cuchillas del Queguay y de Haedo; ambas orillas están bordeadas por numerosos bancos y barras de arena y grava.

Las características del curso medio de ambos ríos a la altura de Santa Fe/La Bajada o Villa del Paraná y de Villa del Uruguay/Paysandú (Banda Oriental) y los rasgos geomorfológicos de las respectivas áreas circundantes permiten considerarlas como encrucijadas naturales de tránsito<sup>45</sup> que facilitaban la movilidad y vinculación de sus pobladores a través de actividades y lazos de distinta naturaleza. Algunos testimonios de viajeros, funcionarios y comerciantes dan cuenta de la peculiaridad de estos pasajes. A mediados del siglo XVIII, entre Santa Fe y la Bajada el río tenía un ancho de tres leguas, pudiéndose emplear en tránsito normal y sostenido una hora por cada legua, según los cálculos de

---

<sup>45</sup> Cervera, Felipe *Del desarrollo histórico de las sociedades. El caso Coronda – Gálvez*, Ediciones de la Cortada, Santa Fe, 1997, p. 14. El autor toma el concepto elaborado por Pierre George atraído, dice, por su posible fecundidad en el análisis de la organización social.

Fray Pedro José de Parras.<sup>46</sup> Hacia 1785 los capitulares santafesinos, por su parte, consideraban que:

...aunque en la Bajada y esta ciudad media el río Paraná no embarazan sus caudalosas aguas para ser bien y prontamente asistidos aquellos habitantes y por ser tan fácil su tránsito a éstos y aquellos naturales que en dos o tres horas se ponen de una en otra banda a nado con un solo caballo, a más de la frecuente diaria comunicación que se franquean con las embarcaciones...<sup>47</sup>

En los primeros años del siglo XIX, el comerciante británico John Parish Robertson arribó a la Bajada en viaje de negocios desde Buenos Aires a Asunción, dejando su particular impresión del lugar en una de sus célebres cartas:

Encontré el puerto de la Bajada situado al pie de una barranca altísima, pero suavemente inclinada. La villa, distante del puerto, está en lo alto y de aquí deriva su nombre Bajada de Santa Fe...estaba rodeada de mataderos y corrales... Al avanzar, me apercibí que había entrado en un país completamente diferente del que media entre Santa Fe y Buenos Aires. Allá todo era chato, monótono, con leguas y leguas cubiertas de cardos de 8 pies de altura, dejando solamente el espacio necesario para el caballo, a través de una densa, oscura e interminable maraña. Aquí en Entre Ríos, el país es ondulado, verde, regado por numerosos y tortuosos arroyos y de vez en cuando sombreado y aún adornado por bosques de algarrobo. Los hatos de ganados eran más grandes, los caballos más lindos, los campesinos más atléticos, que en la banda occidental del Paraná.<sup>48</sup>

El cruce entre la Banda Oriental y los “Entre – ríos” era una vía de negocios legales e ilegales. En el pase del Uruguay se combinaban actividades realizadas por comerciantes con licencia, patrones de barcos registrados y también por contrabandistas de ganado y mercancías como José Luis Alvino, hombre apañado por el Alcalde de Hermandad Manuel Troncoso que era permanentemente vigilado en el partido de Las Mulas y Feliciano. Ese tránsito rápido a través de las islas como las de San Francisco y Sandú o Ypausandó, entre Villa del Uruguay y Paysandú fue bien aprovechado por emigrados políticos como veremos más adelante, por ladrones y esclavos en fuga, blancos de la persecución de las autoridades. Ya más al sur, la comunicación entre Gualeguaychú con Sto. Domingo Soriano o con Mercedes estaba mediada por

---

<sup>46</sup> Parras, P. J. de *Diario y derrotero de sus viajes, 1749-1753*, Bs. As., Solar, 1943, p. 148. En el antiguo sistema español, la legua equivalía a 5.572,7 metros, Cf. Diccionarios Real Academia Española 1803, 1817 y 22ª Edición 2001.

<sup>47</sup> Caputo M., Manavella A. “El antiguo orden cuestionado: abolición de privilegios y fragmentación territorial. Santa Fe de la Vera Cruz, 1776-1785”, en *IV Encuentro de Historiadores*, JPEH Santa Fe, 2003, p. 21.

<sup>48</sup> Carta de Parish Robertson citada por Urquiza Almandoz, 1978, pp. 63-64.

una distancia mayor de casi 8 leguas, en un tránsito combinado de agua y tierra que presentaba variados obstáculos sin perjuicio de que existiera cierta circulación de personas, bienes y mercancías.<sup>49</sup>

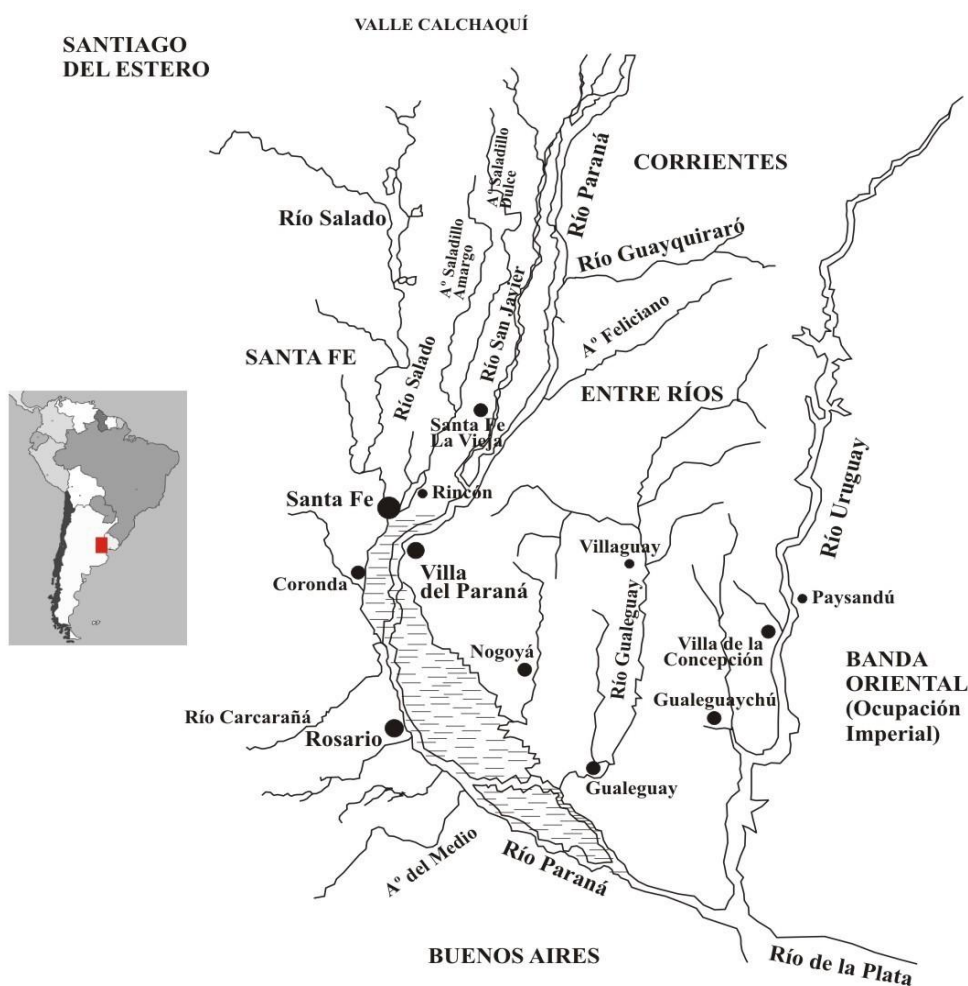
En el sistema hidrográfico interior, se destaca el río Gualeguay que corre de norte a sur dividiendo aguas hacia las cuencas del Paraná y el Uruguay y desemboca en el delta paranaense, lugar donde en 1783 se fundó la Villa de Gualeguay. Este río está bordeado por un sistema de lomadas, en el que sobresalen la Cuchilla de Montiel sobre la margen derecha y la Cuchilla Grande en la opuesta, una lomada que llega al norte hasta los esteros correntinos. Esta área central se distinguía por una formación natural, la llamada Selva de Montiel, un monte de difícil acceso y constituido en frontera interna dentro de la jurisdicción, refugio de soldados desertores, de perseguidos de la justicia, de los marginados sociales estigmatizados por las autoridades coloniales y pos independientes como “vagos y malentretenidos”. Un monte que también ofrecía abundantes recursos económicos como la caza de animales y la recolección de frutos y leña aprovechando su gran variedad de flora y fauna. En las últimas estribaciones de la Cuchilla de Montiel, se organizó el pueblo de Nogoyá en torno a la capilla instalada en 1782 por el cura Fernando Quiroga y Taboada.<sup>50</sup> (Ver Mapa No. 1)

---

<sup>49</sup> AGPER, Gobierno Serie I, Carp. 5, Leg. 4 A, Fs. 1674, 1703, 1708.

<sup>50</sup> Prieto M. R. “Las inundaciones en el río Paraná durante el período colonial. Impacto socio-cultural y estrategias adaptativas” en *Rev. JPEH*, Sta Fe, 2010, No. LXVIII; Iriondo M., Kröhling D. *Cambios ambientales en la cuenca del río Uruguay Desde dos millones de años hasta el Presente*, UNL, 2005. Ramonell Carlos et al, “Geomorfología del cauce principal” en Paoli C. y Schreider M. (Eds) *El río Paraná en su tramo medio. Contribución al conocimiento y prácticas ingenieriles en un gran río de llanura*, UNL, 2000, T. I pp. 177-180, “Los variados documentos producidos en las 35 décadas anteriores al siglo XX coinciden en mostrar que algunas características del río tales como patrón morfológico de islas y bancos de cauce... no difirieron mucho de las que se sucedieron en los últimos cien años”, p. 179. Reyes, J. M. *Descripción geográfica del territorio de la Rep. Oriental del Uruguay*, Montevideo, Mége, 1859, Cap. III.

## Mapa No. 1 Área de estudio



Elaboración propia en base a: Álvarez, Juan Ensayo sobre la historia de Santa Fe, Buenos Aires, 1910; Cervera, Manuel Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe 1573-1853, Tomo I, UNL, 1979, 2da. Edición; Bosch, Beatriz Historia de Entre Ríos, Buenos Aires, Plus Ultra, 1991

El río Gualaguay separa longitudinalmente el territorio en dos regiones internas confinantes con los ríos Paraná y Uruguay respectivamente, reticuladas por cursos de agua de distinta magnitud: la occidental, a la que consideramos como de antigua colonización, con una mayor presencia de vecinos santafesinos y la oriental, en las que las acciones de poblar y poner en producción fueron encaradas más tardíamente por vecinos de Buenos Aires y la Banda Oriental – muchos de ellos propietarios ausentistas-, por lo tanto un área de nueva colonización. Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, una corriente pobladora importante proveniente de Yapeyú se canalizó por el norte, a través de las tierras bañadas por el río Guayquiraró y el arroyo Mocoetá. Tanto el

pueblo de San Antonio de Salto Chico creado en 1769 como las estancias de San Gregorio, Mandisoví y Yerúa –impulsados por la Tenencia de Gobernación de las Misiones- permitieron el establecimiento de criollos e indígenas guaraníes. Desde 1822, estas dos regiones con particularidades propias de desarrollo histórico – social tuvieron denominaciones administrativas específicas: el Departamento I Principal con cabecera en la Villa del Paraná y el Departamento II Principal con cabecera en la Villa del Uruguay, cada uno de ellos subdividido en 4 departamentos subalternos.

## **II.2. Los “Entre-ríos”: variables estratégicas del dominio colonial español.**

En América, el proceso de conquista y colonización emprendido por la Corona de España respondió a planificaciones precisas de apropiación y consolidación territorial. En abril de 1573, el Capitán y Justicia Mayor Juan de Garay partió desde la ciudad de Asunción por el río Paraná aguas abajo, junto con poco más de un centenar de hombres, en su mayoría criollos e indígenas guaraníes. El viaje se inscribió dentro de una estrategia de poblamiento de la administración virreinal del Perú para terminar con la incomunicación del Paraguay, asegurar núcleos de población estable, apropiarse de mayores recursos y mano de obra, abrir caminos de vinculación y consolidar jurisdicción. En una carta al Consejo de Indias en 1582, Garay afirmó que el comienzo de esa campaña de conquista y colonización fue originado “...por el calor que yo puse en decir que abriésemos puertas a la tierra y no estuviésemos cerrados...”<sup>51</sup> La formación de una red de ciudades a lo largo de esa vía fluvial se proponía “*abrir puertas a la tierra*”, consecuentemente tenía por lo menos dos objetivos claros. Uno de ellos era llegar al Río de la Plata y establecer la conexión atlántica entre el espacio colonial y la metrópoli; con ello también se intentaría suplantarse la lenta y costosa ruta que vinculaba a España con sus colonias, a través de Porto Bello sobre el mar de las Antillas, el cruce por el istmo del Darién, llegando a Lima por el Pacífico y desde allí a las ciudades del sur americano. El otro objetivo consistía en franquear una comunicación con los reinos de Chile y Perú por vía

---

<sup>51</sup> Juan de Garay al Consejo de Indias. Santa Fe, 20 de abril de 1582. En: Archivo General de la Provincia de Santa Fe (AGPSF), Boletín nº 4-5. Santa Fe. 1973, págs. 67/72.

terrestre a través de ciudades mediterráneas ya fundadas; de este modo, se evitaba el paso por el Gran Chaco dominado por los pueblos indígenas de mataguayos, maticos y guaycurúes que se resistían a la conquista y obstaculizaba cualquier intento de conexión entre estas áreas dispersas del Virreinato del Perú.

### **II.2.a. Las tierras de la “otra Banda” en la colonia temprana.**

El 15 de noviembre de 1573, Garay fundó la ciudad de Santa Fe a la vera del río de los Quiloazas que corría en el valle paranaense de inundación y en tierras de calchines y mocoretáes. El Acta de fundación<sup>52</sup> fijó una extensa jurisdicción “a los cuatro vientos” con 50 leguas de radio que incluía al Este, la otra Banda del río Paraná o los “Entre – ríos” como se la denominaba en tiempos coloniales, un territorio entre los dos grandes ríos Paraná y Uruguay hasta su desembocadura en el Río de la Plata, delimitándose al norte según la jurisdicción “hasta el cabo de los anegadizos y ríos chicos”, o sea entre los arroyos Ambrosio y San Lorenzo, afluentes del Paraná; un territorio donde circulaban pueblos indígenas nómades y seminómades con importantes desplazamientos regionales. El poblamiento español organizado en los “Entre-ríos” se potenció con el otorgamiento de suertes de estancias, encomiendas y derechos de vaqueo para algunos vecinos fundadores como los hermanos Juan y Cristóbal de Garay, Juan de Espinosa, Alonso Fernández Montiel, entre otros. A principios del siglo XVII, la Compañía de Jesús también obtuvo tierras por compras o donaciones en las que se establecieron estancias conectadas productivamente con las Misiones del Paraguay y la Vaquería del Mar, mediante el río Uruguay; este circuito económico propició el poblamiento en la costa del Alto Uruguay desde la reducción indígena jesuítica de Nuestra Señora de los Tres Reyes de Yapeyú, que cumplía funciones de puerto de tráfico misional. El ganado de vaqueo creció en abundancia, originando tensiones por su carácter de

---

<sup>52</sup> “... nombro y señalo por jurisdicción de esta ciudad: por la parte del camino del Paraguay y hasta el cabo de los anegadizos y ríos chicos, y por el río abajo, camino de Buenos Aires, veinticinco leguas más abajo de Sancti Spiritus, y hacia las partes de Tucumán, cincuenta leguas a la tierra dentro desde las barrancas de este río y de la otra parte del Paraná, otras cincuenta/...” Acta de fundación de la ciudad de Santa Fe, AGPSF, Fondo Gobierno, Tomo I.

importante recurso económico disputado entre los que tenían el derecho legal de vaquerías y aquellos de otras jurisdicciones que ejercían una saca ilegal: al norte, por las incursiones de pobladores de Corrientes o de las mismas Misiones Guaraníes, al sur por partidas de vaqueo provenientes de Buenos Aires.<sup>53</sup>

Hacia 1650, las autoridades santafesinas en consenso con vecinos y jesuitas decidieron el traslado de la ciudad unas 16 leguas más al sur, en la confluencia del río Salado y el arroyo Saladillo, tributarios del río Paraná. La implementación de esa estrategia territorial intentó solucionar problemas tales como ataques indígenas e inundaciones constantes que la incomunicaban. Aunque todos los problemas no pudieron subsanarse, el nuevo sitio brindó varios beneficios: mejor ubicación en los circuitos de intercambio favoreciendo las posibilidades de continuidad, fortalecimiento y reproducción de la elite principal, mayor control sobre las tierras de los “Entre-ríos” y bases más sólidas para la consolidación de un importante lugar de acción política y dominación colonial dentro de la red urbana rioplatense. Esta mudanza que culminó en 1660 no constituyó un hecho aislado, en la colonia temprana no fueron pocos los casos de traslado de ciudades en búsqueda de mejores condiciones humanas y materiales como por ejemplo Mendoza en la Capitanía General de Chile (1562), San Miguel de Tucumán en la Gobernación del Tucumán (1685), Santiago de los Caballeros en la Capitanía General de Guatemala (1527, 1543), entre otros.<sup>54</sup>

## **II.2.b. El siglo XVIII: cambios jurisdiccionales y jerarquización territorial.**

En 1721 el gobernador del Río de la Plata, Bruno Mauricio de Zavala deslindó jurisdicciones, recortando la de Santa Fe por la otra Banda hasta el

---

<sup>53</sup> Sobre tierras de estancia y acciones de vaqueo en los “Entre -ríos” ver Pérez Colman, César *op. cit.*, T. I, pp. 71-78; Bosch, Beatriz, 1978., p. 12. La Vaquería del Mar y la de los Pinares tuvieron origen en el ganado de las reducciones guaraníes destruidas por los bandeirantes en la primera mitad del siglo XVII, ganado reproducido y expandido por las márgenes del río Negro, margen este del río Uruguay y por la zona de las planicies de Rio Grande do Sul, en Areces, Nidia “La Compañía de Jesús en Santa Fe, 1610-1767. Las tramas del poder” en Areces Nidia y Suárez Teresa (Comps.), 2004, pp. 14-18. Calvo, Luis María *La Compañía de Jesús en Santa Fe. La ocupación del espacio urbano y rural durante el dominio hispánico*, Sta Fe, ECS, 1993 pp. 44-45, 60-62.

<sup>54</sup> Areces, Nidia “Las sociedades urbanas coloniales” En *Nueva Historia Argentina*, Bs As, Sudamericana, 2000, T. II La Sociedad colonial. Herrán Marta “Pasado y presente de una ciudad colonial: la Antigua Guatemala” en ERIA, Rev. de Geografía, No. 62, 2003, pp. 350-362.



arroyo Nogoyá y de allí toda la extensión hasta el Uruguay pasó a depender directamente de Buenos Aires. Esta sensible disminución de aquel espacio original dispuesto por Garay operó en la redefinición y sostenimiento de una política por parte del Cabildo santafesino, a lo largo del siglo XVIII, que buscaba frenar el avance territorial de otros Cabildos y reforzar dominios; prueba de ello fue una serie de acciones sobre la Bajada del Paraná, un lugar situado frente a Santa Fe con óptimas condiciones de puerto para el tráfico fluvial entre Buenos Aires y Asunción. Esas acciones le otorgaron cierta jerarquía como núcleo social y económico: formación de un centro concentrador de ganado, instalación de dos fuertes en la Bajada y Punta Gorda, designación de un Alcalde de Hermandad en 1733 y posteriormente, de comisionados para el control de la campaña. La Gobernación del Río de la Plata contribuyó también a jerarquizar esa área de poblamiento: en 1728 se ordenó la formación de una “compañía de milicias del Paraná”, a la vez se adjudicó una capilla al Pbro. Francisco Arias Montiel, elevada luego a parroquia, lo que aumentó el asentamiento espontáneo de pobladores.

La Bajada se fue afirmando como punto de referencia en la red poblacional y comercial santafesina; los primeros datos de población disponibles datan de 1745 con 125 familias hispanocriollas establecidas en el núcleo poblado y sus alrededores. También aportó apoyo militar en las “entradas” punitivas emprendidas por el Cabildo santafesino contra indígenas guaycurúes que, desde el Valle Calchaquí, invadían la frontera Norte provocando el abandono de estancias a orillas del Salado y el desplazamiento de pobladores de los Pagos de Rincón y Coronda hacia la otra banda del Paraná, el Pago de los Arroyos y San Pedro (Buenos Aires).<sup>55</sup> En la década de 1740, los mepenes, minuanes y charrúas acrecentaron la presión que venían ejerciendo ya desde el siglo anterior, sobre las propiedades de los vecinos santafesinos en los “Entre –

---

<sup>55</sup> Las paces firmadas con los jefes indígenas en 1734, la presencia organizada de milicias de frontera y el establecimiento de tres reducciones jesuíticas a partir de 1743 aseguraron un mayor control del territorio al occidente del Paraná. Caputo Marina, Manavella Analía “De Santa Fe la Vieja a Santa Fe de la Vera Cruz. Hacia una configuración territorial conveniente, 1640-1660” en Areces, N. (Comp.) 1999, pp. 183-204; Di Stéfano, Roberto “Un rincón de la campaña rioplatense colonial. San Pedro durante la primera mitad del siglo XVIII” en *Cuadernos del Instituto Ravignani*, No. 1, FFyL, UBA, 1991; Damianovich, Alejandro “Los inicios de la guerra ofensiva contra mocovíes y abipones: las campañas santafesinas de 1728 y 1729” en *Revista JPEH Sta Fe*, No. LVIII, 1992, pp. 153-172.

ríos” como también sobre importantes circuitos económicos de la región. El Cabildo realizó peticiones ante la Gobernación de Buenos Aires para dar fin a estas acciones perjudiciales. En respuesta a estas gestiones, entre 1749 y 1750 se ordenó una campaña armada dirigida por el Teniente de Gobernador de Santa Fe Antonio de Vera y Mujica; los indígenas fueron diezmados y muchos sobrevivientes acabaron en situación de servidumbre o reducidos, por ejemplo la Reducción de Cayastá con indios charrúas. Así, la expansión progresiva del poblamiento hispanocriollo en los “Entre-ríos” en la margen occidental del río Uruguay –el llamado Oriente entrerriano- se produjo en condiciones más seguras y estables, aunque con un elevado costo para la población indígena (Bosch B., 1978, pp. 15-20; Cervera M., 1979, T. I, pp. 485-493).

### **II.2.c. Las Reformas borbónicas: nuevos cambios jurisdiccionales y ocupación estratégica en un área de frontera.**

La política de reformular jurisdicciones e intensificar los controles fiscales por parte de la Corona española, como parte de un conjunto importante de reformas sobre sus posesiones americanas, se plasmó en el Río de la Plata con la creación del Virreinato en 1776 con capital en Buenos Aires y las Intendencias en 1782. Las reformas borbónicas proponían un enfoque más racional de la colonización, apoyado en una regeneración económica por medio del comercio en un mercado ampliado y del cultivo de la tierra. En las propuestas de los ministros ilustrados de Carlos III existían nociones tanto de cambio y reorientación hacia la prosperidad española como de progreso de la instrucción con un objetivo de utilidad pública de base pragmática. Nociones que se correspondían con los nuevos lenguajes de filosofía moral y economía política de amplia difusión en la época ya desde fines del siglo XVII.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Las reformas borbónicas han sido objeto de diversas valoraciones historiográficas en las últimas tres décadas. Las interpretaciones de la literatura especializada, sobre todo antes de los años '60, osciló entre los elogios extremos considerándolas como factor eminentemente modernizante y la dura crítica que la apuntaba como factor de mero afianzamiento real y retraso social. En las últimas tres décadas el estudio del impacto de estas reformas, tanto en España como en Hispanoamérica, ha enriquecido el debate y el conocimiento a partir de nuevas perspectivas de abordaje y tratamientos más equilibrados del asunto: nuevas periodizaciones y niveles de análisis, intensificación del uso de métodos comparativos e interdisciplinarios, diferenciaciones regionales, proyecciones de las reformas en el período posindependiente americano, etc. Susana Bandieri (comp.) 2010 (Trabajos de Gelman y Santilli, Sempat Assadourian y Palomeque, Jáuregui) ; Areces Nidia (Comp.) *La América española. Temas y*

En ese marco las autoridades en Buenos Aires aplicaron una renovada estrategia de control territorial y aprovechamiento productivo que otorgó prioridad a la reorganización institucional, las vías de comunicación, el poblamiento y el orden social de la región oriental entrerriana, sobre la costa del río Uruguay. Una política que generó un alto impacto demográfico y económico; a la vez se comenzó a dibujar un nuevo mapa de poderes locales, algunos de los cuales intervendrán en los conflictos después de 1820. (Djenderedjian J., 2008: pp. 641, 666-668). La demanda de esta nueva orientación política y económica en esta parte marginal de la América hispánica fue originada en factores de peso tales como la constante presión portuguesa desde el Brasil, la convergencia de distintos intereses de autoridades y vecinos de Corrientes, Montevideo, Buenos Aires, el contrabando, las disputas por tierras dadas las confusas delimitaciones y el insuficiente control judicial en las poblaciones dispersas. Sumado a ello el establecimiento de parroquias y la división de curatos también produjo tensas situaciones.<sup>57</sup> Para resolver estos conflictos, en 1782 fue enviado el comisionado Tomás de Rocamora quien acreditaba una importante experiencia en la campaña colonizadora de Sierra Morena junto a Pablo de Olavide hacia 1767.<sup>58</sup> Sus informes al Virrey insistieron en el descontrol de la población rural porque el Cabildo de Santa Fe no proveía de autoridades; para su solución, formuló un plan de fundación de cinco pueblos dotados de Cabildos y con el título de Villas, con autoridades y recursos militares: Gualeguay, Gualeguaychú, Arroyo de la China –luego Concepción del Uruguay-, además de Nogoyá y la Bajada del Paraná, que serían separadas de Santa Fe. El virrey Vértiz puso en práctica el plan, abrogándose la atribución de dar título de villa que había sido

---

*fuentes*, Rosario, UNR, 2007 (Trabajo de Gabriel Cori); Ortelli Sara, "Las reformas borbónicas vistas desde la frontera. La élite neovizcaína frente a la injerencia estatal en la 2da. mitad del siglo XVIII" en *BHAAER*, 2005, No.28, pp.7-37; Ruibal Beatriz "Cultura y política en una sociedad de Antiguo Régimen" en Tandeter E. (Dir.) 2000, pp. 413-444; Guimerá Agustín *El Reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar*, Alianza, Madrid, 1996; En un comentario personal, José Javier Ruiz Ibáñez se refirió al aspecto fiscal afirmando que ya los Habsburgo habían introducido cambios fiscales para financiar las guerras y que lo que ocurre con los Borbones es solo una normalización del crecimiento fiscal.

<sup>57</sup> Djenderedjian Julio, 2008; Schmit, Roberto, 2004, pp 39-44; Román, César, ponencia citada, 2003. El párroco de la Bajada Martiniano Alonso, protestó por los perjuicios pastorales y económicos ocasionados por la quita de una buena porción de su feligresía transferida a la parroquia de Gualeguay. AGN, Sala IX, 31-3-38, leg. 11, Fondo Justicia 1781, Exp. 214. Concurso de 11 curatos.

<sup>58</sup> Gelman, Jorge "Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana, Siglos XVIII y XIX" en *Historia Agraria*, No. 37, diciembre 2005, p. 469.

prohibida por las Leyes de Indias desde 1627 pero que en un contexto de reformas y de urgencias parecía permitido. (Djenderedjian J. 2008, p. 647)

La separación jurisdiccional fue protestada formalmente por los capitulares santafesinos, aduciendo que los Entre-ríos habían estado siempre bajo su jurisdicción y sus milicias habían tenido un papel activo en el plan santafesino de defensa contra los indígenas; tampoco dejaron de advertir que los vecinos santafesinos poseían tierras y estancias desde el siglo XVI y que la llegada de nuevos pobladores las pondrían en riesgo y ocasionarían grandes pleitos.<sup>59</sup> Vértiz revocó parcialmente su decisión y tanto la Bajada como Nogoyá siguieron dependiendo de Santa Fe. Las tensiones fueron en aumento, en particular se opuso resistencia al nombramiento, por parte del Cabildo santafesino, de Alcaldes de Hermandad y Jueces Pedáneos en la Bajada, Nogoyá y Gualeguay. Los capitulares argumentaron que la división jurisdiccional era provisoria por lo cual aún tenían derecho de nombramiento. No obstante, el frente de conflicto se agudizó para la institución capitular. La Bajada pidió separación, designación de Villa y creación de Cabildo propio a través de petitorios de vecinos quienes sostenían que el crecimiento poblacional y sobre todo comercial y artesanal había sido significativo. En la primera década del siglo XIX continuaron presentándose los mismos pedimentos al Virrey.<sup>60</sup> Como veremos más adelante, el cambio recién se concretará entre 1813 y 1814.

### **II.3 El Río de la Plata independiente: Del poder revolucionario centralista a la nueva conformación política de los Estados provinciales. La autonomía entrerriana.**

La crisis de la monarquía hispánica con los sucesos de Bayona, la presión británica sobre las colonias españolas en América para conseguir nuevos mercados a sus productos y la oposición entre criollos y peninsulares que se vio profundizada ante la disputa por los cargos burocráticos, fueron factores de peso que provocaron un vertiginoso proceso de cambios a nivel continental; una

---

<sup>59</sup> Cervera, M, 1981, Tomo I, p. 570.

<sup>60</sup> Urquiza Almandoz Oscar, op cit p. 215. El vecino y poderoso estanciero santafesino Francisco Candiotti apoyó los pedidos de separación jurisdiccional basados en el crecimiento de la Bajada, sobre todo el aumento del comercio al punto de que las tres cuartas partes de los productos que exportaba Santa Fe provenían de allí. Cervera M., 1981, Tomo I, pp. 569-576.

respuesta urgente fue la instalación de gobiernos provisorios en nombre del rey cautivo, Fernando VII. En consecuencia, en mayo de 1810 se formó una Junta en Buenos Aires, primera experiencia de autogobierno que inauguraría intensos debates acerca de la nueva organización política que debía regir en el Río de la Plata.<sup>61</sup> La adhesión a la revolución fue dispar en los Entre-ríos. La mayoría de los vecinos de la Bajada del Paraná manifestaron el apoyo a los sucesos de Buenos Aires; en la costa del Uruguay, luego de un acatamiento expreso por parte de los Cabildos –Guaaleguay, Guaaleguaychú y Arroyo de la China-, la opinión capitular cambió por influencias de los contrarrevolucionarios de la ciudad de Montevideo al punto de jurar obediencia al Consejo de Regencia instaurado en Cádiz, en medio de la ocupación de tropas españolas.<sup>62</sup> La mayor parte de los habitantes de la campaña oriental, en desacuerdo con la declaración montevideana de lealtad, partió en masa alrededor de su líder José Gervasio de Artigas y en octubre de 1811 cruzaron el río Uruguay para establecerse en la costa entrerriana. Sobre esta movilización y asentamiento de personas se fue estructurando la organización de la resistencia ante el español y ante el porteño por parte de las provincias litoraleñas, sometidas a la jurisdicción y poder de Buenos Aires, que derivará luego en la Liga de los Pueblos Libres.<sup>63</sup> Buenos Aires encabezó la tendencia centralista, reivindicando su condición de antigua ciudad y capital virreinal. La tendencia opositora liderada por José Artigas desde la Banda Oriental, resumió el carácter autonomista de las antiguas ciudades ex

---

<sup>61</sup> Desde 1810 a 1820 se sucedieron las siguientes formas de gobierno central todas residentes en Buenos Aires: Primera Junta Provisional de Gobierno, Junta Grande –con diputados de provincias-, Primer Triunvirato –septiembre de 1811-, Segundo Triunvirato –octubre de 1812-, Directorio –enero de 1814 a enero de 1820.

<sup>62</sup> El gobierno de la Primera Junta en Buenos Aires tuvo que enfrentar reacciones adversas en el Alto Perú, el Paraguay y Montevideo; a fin de sofocarlas se organizaron expediciones armadas con resultados no siempre exitosos a tal punto que no se pudo retener el Paraguay –que se independizó en 1811- y el Alto Perú, que luego de estar bajo dominio realista declaró su independencia en 1825 como República de Bolivia. Montevideo por su parte encaró una férrea posición de lealtad a España, viéndose complicar su situación por las apetencias del Imperio del Brasil que se plasmaron en sucesivas invasiones al territorio de la Banda Oriental del Uruguay; en 1828 declarará su independencia y en 1830 formulará su Constitución como República Oriental del Uruguay, proceso que fue inducido en gran parte por Gran Bretaña, interesada en abrir y consolidar mercados para su acrecentada producción.

<sup>63</sup> En esta relación no había pacto escrito. La Liga de los Pueblos Libres se constituyó de hecho, conformándose en su momento de mayor expansión –1815- por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. El reconocimiento de Artigas como Protector partió de los Cabildos y también de reconocimientos tácitos de las elites locales; por ejemplo el Cabildo de Corrientes declaró la autonomía de la provincia en abril de 1814 “bajo el sistema de la federación, con el General Artigas como Protector”. En Méndez Vives, *“Artigas y la Patria Grande”*, Montevideo, Tauro, 1972, p. 66.

virreinales como unidades socio-políticas territoriales también llamadas “provincias” que, sin embargo, aspiraban a unirse en un sistema confederativo.

Preocupados por la influencia de Artigas sobre el Litoral y particularmente sobre Entre Ríos, el Triunvirato porteño impulsó una medida en el seno de la Asamblea Constituyente para contrarrestar el peligro que tal situación significaba a sus intereses políticos. El 25 de junio de 1813 elevó al rango de villa al pueblo de la Bajada del Paraná y creó un Cabildo adepto de seis miembros de corta vigencia, con la misma jurisdicción de la Alcaldía de Hermandad. En septiembre de 1814, el Director Supremo Gervasio de Posadas dictó un decreto por el cual creaba a las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Consecuentemente con su nueva naturaleza, a Entre Ríos se le adjudicaron límites precisos y una ciudad capital en lo que era Villa del Uruguay.<sup>64</sup> A la vez, envió un ejército de ocupación para asegurarse la adhesión por la fuerza, pero el poder de Artigas consiguió consolidarse, captar a esas nuevas dos provincias para la Liga y extender su influencia a Santa Fe y Córdoba. Además de su largo enfrentamiento con Buenos Aires, Artigas debió intensificar la acción armada y la búsqueda de apoyos para enfrentar una nueva invasión de los portugueses a la Banda Oriental, a mediados de 1816.

Así, las grandes discusiones de la época sobre la organización política luego del quiebre colonial y sus formas variadas de centralismo, autonomismo, confederacionismo, constitución, monarquía americana, se desarrollaron en un contexto militarizado, provocado por las guerras revolucionarias y de independencia; si bien, tuvieron manifestaciones canalizadas en asambleas y congresos, lo cierto es que el campo de batalla también fue un escenario donde se trataron de dirimir las diferencias internas. Al calor de estas disputas, destacados jefes militares revolucionarios ascendieron al plano político, lideraron la resistencia y pretendieron consolidar al movimiento autonomista en toda la

---

<sup>64</sup> Decreto 10 de setiembre de 1814 firmado por el Director Supremo Gervasio Posadas: Art. 1° *El territorio de Entre-Ríos con todos sus pueblos, formará desde hoy en adelante una provincia del Estado con la denominación de Provincia del Entre-Ríos. Los límites de esta provincia, serán al Norte la línea que entre los ríos Paraná y Uruguay forma el río de Corrientes en su confluencia con aquel, hasta la del arroyo Aguarachay y este mismo arroyo con el Curuzú-Cuatiá, hasta su confluencia con el Miriñay, en las inmediaciones del Uruguay; al Este el Uruguay, y al Sud y Oeste, el Paraná.* En Registro Oficial de la Prov. de Corrientes, 1929, T. I, pp. 11-12.

región bajo el amparo artiguista, por ejemplo los Comandantes Generales Estanislao López en Santa Fe y Francisco Antonio Ramírez en Entre Ríos. A fines de la década de 1810, el proceso iniciado luego de la revolución culminaba con la profundización de reacciones contra el centralismo y un reordenamiento del poder regional, particularmente en el Litoral. La Constitución sancionada en 1819 por el Congreso Constituyente, que actuaba en concordancia con las políticas directoriales, fue rechazada por las provincias autonómicas debido al diseño estatal unitario que establecía. En el Norte, se proclamó la República del Tucumán dejando de ser dependencia del gobierno central y reuniendo en esa nueva entidad política a las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Por otra parte, la jefatura de Artigas estaba sumamente debilitada, afectada por defecciones en sus filas, agotamiento de recursos y disputas internas. Buenos Aires se propuso quebrar la resistencia del bloque cohesionado todavía por ese debilitado artiguismo y particularmente, restaurar su dominio sobre Santa Fe con nuevas invasiones armadas. Los combates de los santafesinos contra los invasores porteños arreciaron y se alzaron con importantes triunfos. Una División del Ejército del Norte, convocada para auxiliar al Directorio en su campaña contra Santa Fe, se sublevó en la Posta de Arequito el 8 de enero de 1820 y desobedeció la orden directorial. El conocimiento de la solicitud del Director Supremo Rondeau para que los portugueses instalados en la Banda Oriental intervengan y lo apoyen invadiendo al Litoral, hizo estallar la reacción armada de Santa Fe y Entre Ríos. La batalla en los Campos de Cepeda, el 1º de febrero de 1820, significó un contundente triunfo de las fuerzas del Litoral encabezadas por López y Ramírez sobre el ejército porteño. Un desenlace que cristalizó una nueva relación de fuerzas y fuertes efectos institucionales concretos, sin detenernos aquí en las derivaciones sociales y económicas que se presentaron. En efecto, sus consecuencias más importantes fueron la caída del poder central y la disolución del Congreso Constituyente que era concordante con la política emanada de ese mismo poder, hechos que originaron una crisis de poder político y la apertura de una nueva etapa en la organización política del Río de la Plata.<sup>65</sup> Un triunfo que no debe entenderse

---

<sup>65</sup> Halperin Donghi, Tulio, 1989, Vol. 3, 2da. y 3ra. Parte, pp. 47-140; Halperin Donghi, T, 1979 2da. Edición corregida, 2da parte, Caps. II, III, IV y Conclusión; Goldman Noemí (Dir.de Tomo),

como el único factor de tamaños cambios sino como remate de toda una década de fuertes controversias políticas. Así, en esta coyuntura desapareció la base de organización intendencial existente y en cada una de las provincias se dio paso a una nueva forma de entidad política: el estado provincial organizado.<sup>66</sup>

Las relaciones interprovinciales experimentaron un cambio sustancial, a partir de la implementación de una firme política de pactos, evaluados como instrumentos legales eficaces para sustentar un marco de convivencia, regular vínculos y lograr un compromiso de organización supraprovincial, aunque esta cuestión se dilató por largo tiempo. Luego de 1820, las provincias quedaron en condiciones económicas muy débiles, salvo Buenos Aires que conservó las rentas de Aduana de las Provincias Unidas luego de la caída del poder central. Esta realidad económica se combinó con una necesidad política de las autoridades porteñas cual era construir alianzas favorecidas por su asistencia financiera a los fiscos provinciales y sobre una base inicial de dependencia y subordinación que generó encontradas reacciones regionales. Esta asistencia podía ser registrada en la letra de los Pactos o bien materializarse mediante un convenio específico interprovincial. El Tratado del Pilar firmado entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe en febrero de 1820, fue el comienzo de la política pactista y marcó un hito jurídico en la historia rioplatense.<sup>67</sup> Sin embargo, la estrecha amistad iniciada entre Santa Fe y Buenos Aires por medio del Tratado de Benegas en noviembre de 1820, generó una tensión con la llamada “República de Entre Ríos”, situación que obligó a dirimir el liderazgo de la región. Francisco Ramírez, jefe supremo de esa “República” compuesta por Entre Ríos, Corrientes y Misiones, mostró un plan de perfiles propios que lo llevó a combatir y derrotar definitivamente al debilitado José Artigas. Fortalecido por estas circunstancias enfrentó a López en el campo de batalla, siendo vencido en Coronda y retirándose hacia Córdoba donde una partida armada santafesina le

---

1998, Tomo III, Caps I y III, pp. 41-69, pp. 103-118.

<sup>66</sup> Noemí Goldman hace notar que la denominación “provincia” deriva de una tradición administrativa española que así designaba a las Gobernaciones de Intendencia, aún vigentes en la década de 1810. Su persistencia no indica que la provincia autónoma fuera una prolongación de aquella provincia de Intendencia sino, por el contrario, detrás de esa vieja denominación se encuentra una entidad que se declara soberana e independiente a partir de la ampliación del papel político asumido por las ciudades ex virreinales. Goldman N., “Los orígenes del federalismo rioplatense (1820-1831)” en Goldman N. (Dir. de Tomo), 1998, pp. 105-106.

<sup>67</sup> *Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe*, T. II Docs. del T. I, 1969, pp. 22-25.



dio muerte. Al despejarse el horizonte político de serios rivales locales, la influencia de López en el Litoral se consolidó y perduró por largo tiempo. En Entre Ríos colaboró con el Cnel. Lucio Mansilla en una revolución que estalló el 21 de septiembre de 1821 y depuso al Gobernador Supremo Delegado Ricardo López Jordán, lugarteniente de Ramírez y líder proveniente del Oriente entrerriano, quedando en el gobierno hasta el 10 de febrero de 1824. Desde el proceso de organización política iniciado en 1821 hasta avanzada la década de 1830, esta influencia santafesina sobre Entre Ríos será prácticamente permanente.

Ahora bien, la cuestión de una nueva organización política que reuniera a las provincias fue un asunto pendiente que transitó por instancias de debates y enfrentamientos armados. El Congreso General Constituyente, reunido en Buenos Aires en 1824, fue lugar de encuentro de las dos tendencias predominantes en la concepción de la forma de gobierno que debía reunir a todas las provincias. Una, de dominio creciente en la reunión, propiciaba la unidad bajo la dirección de Buenos Aires subordinando a las autonomías provinciales; la otra impulsaba una organización política donde se respetaran la soberanía, libertad e independencia, pero vinculadas en confederación. La primera tendencia logró redactar una constitución, de corte eminentemente unitario, la que fue aprobada por el Congreso en 1826; la disposición de que los gobernadores provinciales serían elegidos por las autoridades “nacionales” causó especial irritación. Su envío a las provincias para que se expidieran sobre la misma, tuvo como resultado el rechazo de muchas de ellas y el progresivo retiro de sus diputados, como el caso de Entre Ríos que se pronunció además por un sistema de gobierno republicano, representativo y federal.

En cuanto a las relaciones exteriores, en el seno del Congreso se comenzó a debatir sobre la posibilidad de una guerra con el Brasil. El objeto de disputa era la Banda Oriental ocupada por fuerzas del Imperio desde 1816. Las tentativas diplomáticas fracasaron ante la inflexible posición brasileña. Algunos intentos por expulsar a los invasores, encarados por una facción oriental, buscaron auxilio de las provincias litoraleñas pero sin éxito. En abril de 1825 una expedición organizada en Buenos Aires al mando de Juan Antonio Lavalleja llegó a la Banda Oriental, obteniendo el apoyo de amplios sectores del campo

con Fructuoso Rivera a la cabeza; los dos jefes eran antiguos oficiales de José Artigas. A la par de las acciones armadas, se constituyó un Gobierno provisorio en La Florida con una Sala de Representantes. Se proclamó la libertad e independencia de la provincia Oriental respecto de Brasil y su incorporación a las Provincias Unidas. En octubre, el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata aceptó la integración de la Provincia Oriental, respaldándola por la fuerza. El Emperador Pedro I declaró la guerra en diciembre de 1825. El enfrentamiento bélico, que finalizó en 1828, trajo innumerables inconvenientes por el bloqueo al Río de la Plata de parte de la poderosa flota brasileña y por los enormes costos de la organización militar y las campañas. Por si fuera poco, las divisiones políticas internas y la presión de Gran Bretaña para terminar con las hostilidades y restaurar la circulación comercial, no hicieron más que apresurar decisiones a favor de un tratado de paz. Toda esta situación significó para Entre Ríos el agravamiento de su situación fronteriza y el peligro de una invasión como consecución de antiguos planes de anexión del Litoral al Imperio.

Mientras tanto, el Congreso sumamente debilitado, se disolvió en agosto de 1827. Pero ya había provocado con sus políticas un clima de extrema tensión en el territorio rioplatense al punto de favorecer una situación de guerra civil en algunas provincias del Interior -producto no solo de rencillas internas sino de las distintas tendencias políticas por la unidad o por la federación- y de crear un frente bélico con la vecina potencia imperial. No obstante este fondo de conflictos, una nueva reunión fue impulsada a efectos de seguir tratando las formas de organización política y sus bases constitucionales. En 1828 se reunió en Santa Fe la Convención Nacional y comenzó a sesionar con la herencia de la guerra con el Brasil. Su único resultado fue la autorización a Manuel Dorrego, nuevo gobernador de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores desde la disolución del Congreso, para que firmara el tratado de paz por medio del cual se declaraba la independencia de la Banda Oriental, en adelante República Oriental del Uruguay. Este desenlace provocó la embestida unitaria al gobierno porteño a la que se le sumó el descontento de los veteranos soldados que habían tenido la victoria en el campo de batalla y, sin embargo, se habían visto traicionados en el campo diplomático. El 1º de diciembre, el General Juan

Lavalle se proclamó gobernador de Buenos Aires y a los pocos días fusiló a Dorrego. El acceso ilegítimo de Lavalle al poder y los métodos violentos empleados sublevaron a las provincias. La Convención Nacional se declaró Soberana Representación Nacional, y antes de disolverse, condenó los hechos, organizó un ejército y nombró a Estanislao López como General en jefe del ejército de las Provincias Unidas quien fue secundado por el Comandante de milicias Juan Manuel de Rosas.<sup>68</sup> Las luchas en el Litoral se definieron para los federales pero en el Interior los partidarios de la unidad contrapesaron estas victorias con éxitos armados del General José María Paz —otro veterano de la guerra del Brasil al igual que Lavalle— sobre el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. En 1829, la Sala de Representantes de Buenos Aires eligió gobernador a Juan Manuel de Rosas y Santa Fe se afirmó como su columna de orden, procurando incidir sobre Entre Ríos para que se plegara a esta alianza. Esto se consumará en 1832, cuando se ponga límites a la inestabilidad institucional entrerriana e instale al frente del gobierno de esta provincia a la persona de confianza del Gob. López: su compadre y asesor político, Pascual Echagüe.

Ante el desplazamiento de los unitarios de Buenos Aires, la tendencia se rearmó en el Interior. A la constitución de la Liga Unitaria se contrapuso la Liga Federal formalizada en el Pacto de 1831 y preparó el terreno para la guerra. Pero un hecho inesperado auguró la temprana derrota unitaria. El General Paz fue hecho prisionero en mayo de 1831 y en noviembre, finalmente, Quiroga venció a Gregorio Aráoz de Lamadrid en la Ciudadela del Tucumán quebrando definitivamente a la Liga e impulsando a muchos unitarios al exilio hacia Chile, Bolivia y la República Oriental del Uruguay. Un nuevo equilibrio se puso de manifiesto en el Río de la Plata, bajo el influjo creciente del poderoso gobernador de Buenos Aires y con el liderazgo de López en el Litoral y Quiroga en el Interior. Equilibrio que empezó a resquebrajarse a partir de controversias suscitadas particularmente entre López y Rosas. Éste aducía que las provincias debían ordenarse en lo interno, previo a encarar una organización política y dictar una constitución que la reglara en su conjunto como era la postura sostenida por López. Sí le convenía a Buenos Aires una unión confederal como la que

---

<sup>68</sup> Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, Tomo I, Santa Fe, 1888, Actas de la Convención Nacional, Santa Fe, días 20, 21 y 26 de febrero de 1829, pp. 184-186.

sustentaba el vigente pacto donde el Estado más poderoso tenía la chance de dominar al resto, posición que finalmente triunfó.

Promediando los años treinta, Buenos Aires fue afirmando su influjo sobre las otras provincias. Las intervenciones de los caudillos federales que podían causar molestias a las políticas de Rosas se habían opacado. La muerte de Quiroga en Barranca Yaco en 1835 despejó el camino. En el concierto de la Confederación, la provincia de Entre Ríos comenzó a cobrar más importancia para los planes porteños. Con el gobierno de Pascual Echagüe, Rosas se aseguró un fuerte apoyo para su control en el Litoral en un período de suma debilidad y con el bloqueo de la armada francesa sobre el puerto. Entre 1839 y 1841, la actuación de Echagüe fue fundamental para sofocar el levantamiento de Genaro Berón de Astrada en Corrientes, impedir que Juan Lavalle en combinación con los unitarios residentes en Montevideo sometiera a Entre Ríos y sostener la defensa fronteriza del río Uruguay, muy permeable al paso de los enemigos de Buenos Aires. La sucesión en el mando por parte de Justo José de Urquiza en 1841 confirmó la alianza provincial con Rosas, continuando con la presión sobre la levantisca Corrientes y el fortalecimiento del área de frontera. Pero el bloqueo anglo francés sobre Buenos Aires perjudicaba tanto los intereses fiscales entrerrianos como los negocios particulares de Urquiza y su círculo. En 1845, este gobernador comenzó indagó sobre la posibilidad de llegar a la libre navegación de los ríos, medida que interesaba mucho a las potencias extranjeras bloqueadoras y al mismo Litoral; finalmente la alianza se concretó entre el Brasil que prestaría auxilio militar y financiero, el Uruguay, Corrientes y Entre Ríos logrando la caída de Rosas en Caseros, 3 de febrero de 1852.<sup>69</sup>

#### **II.4. Entre Ríos y sus áreas de frontera entre 1820 y 1840.**

Las *áreas de frontera* que involucran a Entre Ríos muestran múltiples posibilidades de interrelación con entidades de distinta naturaleza política (provincial, imperial, confederal), denotan permeabilidad, inestabilidad, competencia y litigios por el territorio. En 1822, el Estatuto Provisorio

---

<sup>69</sup> El proceso rioplatense analizado desde 1824 se basó en Gelman, Jorge (Dir. Coord.), 2010, Caps. La vida política y Argentina en el mundo. Goldman Noemí (Dir. de tomo), 1998, T. III, Caps. III y V. Halperin Donghi, Tulio, 1989, Cap. II, 2da parte, "La Política".

Constitucional de Entre Ríos impuso como límites político- administrativos a los ríos Paraná y Uruguay y a los arroyos Mocoretá y Guayquiraró, lindando al Oeste con Santa Fe, al Este con la Banda Oriental/Cisplatina y al norte con la jurisdicción de Corrientes. Los ríos como fronteras naturales se convirtieron en fronteras políticas, en objeto de especial atención para formular estrategias de defensa y control, consolidación, negociación, o bien como bases de planes expansionistas (Sahlins P., 1990: p. 1433). <sup>70</sup>

Luego de 1820, Entre Ríos continuó siendo muy importante para otros centros externos de poder, teniendo en cuenta su localización y características geográficas y productivas. En el orden económico, Entre Ríos era sumamente estratégico, pues vinculaba viejos y dinámicos circuitos mercantiles entre el Brasil, el Litoral y las provincias interiores con salida al Atlántico y al Pacífico. Además, en un contexto altamente conflictivo, ofrecía el territorio vital para cualquier acción bélica emprendida por las provincias rioplatenses contra el Imperio portugués pues tanto en su interior como en su frontera sobre el Uruguay, permitía la concentración de cuerpos militares, su manutención y mejor posicionamiento para las tácticas de defensa y ataque. También los unitarios lo ponderaron como una vía de entrada hacia Buenos Aires, con el objetivo de derrocar al régimen de Juan Manuel de Rosas.

Dada esa posición estratégica, las apetencias expansionistas de Buenos Aires, Santa Fe, el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay operaron de distinta manera para lograr predominio sobre el territorio. En el caso de Buenos Aires, en la sesión secreta del Congreso General Constituyente fechada el 18 de febrero de 1825, el diputado Gorriti reveló la posible existencia de un plan de incorporación de Entre Ríos y Corrientes al territorio bonaerense. En él habrían intervenido los diputados respectivos, entre ellos Lucio Mansilla por Entre Ríos, quien desmintió el hecho (Bosch B. 1978, p. 90).<sup>71</sup> En Santa Fe, el poder regional adquirido por su gobernador Estanislao López incluía a Entre Ríos como un compuesto indispensable para liderar las aspiraciones y demandas de las provincias del Litoral ante Buenos Aires: libre navegación de

---

<sup>70</sup> RLDAPER, T. I, p. 139, Estatuto Provisorio Constitucional de 1822, Art. 3ro.

<sup>71</sup> Ravignani E., *Asambleas Constituyentes Argentinas*, Bs As. T. 6to, pp. 1291-1292.

los ríos, participación de los beneficios de la Aduana porteña y autonomía política. El poder ejercido por López fue potencialmente expansionista. En 1822, dejó planteado en el Tratado del Cuadrilátero un reclamo sobre 50 leguas al norte de Entre Ríos en su límite con Corrientes que sería expuesto ante el futuro Congreso General Constituyente. En efecto, en 1824 instruyó al diputado ante ese Congreso para que presentara una demanda territorial ampliada sobre las tierras de los “Entre –ríos” fundamentándose en derechos históricos: las mismas habían pertenecido a la jurisdicción de su Cabildo desde la fundación de Santa Fe en 1573. Además, consideró que los sucesivos recortes jurisdiccionales practicados que culminaron en 1814, con la creación de la provincia de Entre Ríos por el Directorio porteño eran imposiciones arbitrarias que atacaban antiguos títulos posesorios (Teijeiro Martínez, B., 1910, p. 179). Si bien el pedido no prosperó, la injerencia de López sobre el proceso político entrerriano fue prácticamente permanente, en una suerte de ejercicio informal de esos derechos históricos que invocaba.

El Imperio portugués, por su parte, tenía aspiraciones de larga data sobre la frontera sur del Imperio español, las que dieron origen a no pocos litigios entre ambas Coronas. A fines del siglo XVIII, la antigua doctrina de las “fronteras naturales” había tomado impulso en Europa, especialmente en los casos de Francia y los Estados alemanes. En concordancia con ello el Ministro de Ultramar y Marina del Príncipe Regente de Portugal, Rodrigo de Souza Coutinho propuso una redivisión administrativa de las Capitanías en América lusitana fundamentándola en

“na neccesidade que há de formar dois grandes centros de força, um ao Norte e outro ao Sul, debaixo dos quais se reúnam os territórios a que a natureza dividiu tão próvidamente por grandes ríos, ao ponto de fazer ver que esta concepção política é ainda mais natural do que artificial”<sup>72</sup>

Con la llegada de la Corte de Juan VI a Río de Janeiro en 1808, la diplomacia portuguesa comenzó a planificar nuevas estrategias y acciones reavivando la idea de “frontera natural” imperial llegando al río Paraná por el Oeste y al Río de la Plata como límite sur. Estas decisiones implicaban el resurgir del llamado mito de la *Ilha do Brazil* alimentado por los cartógrafos

---

<sup>72</sup> Pimenta, J. P. G., 2002, Cap. 3, p. 90. Doc. de 1798 aprox.

portugueses desde el siglo XVI: un Brasil contenido entre las dos cuencas más grandes de América meridional, la del Amazonas y la del Plata (Pimenta J., 2002, Cap. 2; Islas A., 2005, pp. 7-9).

La revolución declarada en Buenos Aires en 1810 y los sucesos políticos que se desencadenaron precipitaron los planes imperiales en el plano político y en el plano militar. En lo político, las apetencias sobre el Río de la Plata en crisis se encaminaron por la vía dinástica. La princesa Carlota Joaquina, esposa de Juan VI, se postuló como Regente al trono de España y sus colonias hispanoamericanas apenas su hermano Fernando VII fue puesto en cautiverio, lo cual reforzaba el proyecto de unificación de las dos Coronas y consecuentemente el dominio de las colonias de ultramar de ambos imperios. Pese a los apoyos de algunos sectores revolucionarios americanos el proyecto no prosperó.<sup>73</sup>

En el plano militar y por una razón de contigüidad, la entrada hacia los dominios hispánicos se realizó por la Banda Oriental, territorio que sufrió sucesivas invasiones desde 1811 hasta llegar a una ocupación y anexión al Imperio en 1821 como Provincia Cisplatina. Esta incorporación fue ponderada por el Gral. Carlos Lecor dentro de la doctrina de “fronteras naturales”. Así lo hizo en su comunicación con el gobernador de Rio Grande del Sur:

“...e tem por está forma a nação portuguesa adquirido o novo Estado Cis Platino, o reino do Brasil a linha do limites que precisava marcada o sul pela mesma natureza...”<sup>74</sup>

Las acciones desestabilizadoras del Imperio hacia el gobierno de Entre Ríos se viabilizaron a través de la protección y apoyo a los emigrados políticos entrerrianos a la Banda Oriental/Cisplatina, sujetos que proyectaban y concretaban con intermitencia la invasión por la costa entrerriana del Uruguay, en la década de 1820. En 1823, un grupo de orientales opositores a la ocupación también evaluó la importancia de poder operar militarmente desde esa costa,

---

<sup>73</sup> Proclamação que circulava na América Hespanhola a favor dos direitos da Senhora Princeza do Brazil, D. Carlota Joaquina, en *Correio Brazilense ou Armazen Literario*, Londres, Lewis y Paternoster-row, 1810, Vol. IV, No. 23, pp. 366-375. Acceso: <http://books.google.com>

<sup>74</sup> APOA, Autoridades militares, Parte I, Correspondencia Gral. Lecor a Joao Carlos da Saldaña Olivera y Daun, Gobernador de la Capitanía de San Pedro de Río Grande del Sur, Montevideo, 25/8/21, Lata 175, maço 80, No. 487.

comenzando a gestionar tratados de alianza política y apoyo económico en las provincias del Litoral.

La guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil involucró al territorio entrerriano precisamente en la función por la cual era considerado estratégico en tiempos de conflicto: asiento del Ejército coordinado por Buenos Aires, pasaje de los cuerpos militares por las islas altas del Uruguay, refuerzo militar de las costas, organización del movimiento y mantenimiento de las tropas. (Urquiza Almandoz O., Tomo I, pp. 466-470). Los planes de invasión a Entre Ríos y Corrientes fueron planteados por el Marqués de Barbacena al Emperador Don Pedro I en 1825, los que contemplaban acciones de desestabilización de esos gobiernos e invitaciones a unirse y ser parte del Imperio.<sup>75</sup> A lo largo de la guerra, estos planes expansionistas siguieron en pie y se visibilizaron en los documentos cartográficos. Estos documentos como soportes de la representación territorial, como plantea Daniel Nordman en su estudio sobre fronteras, se convierten en poderosos instrumentos al servicio del poder; no son imágenes vacías de valores sino formas anticipadas de legitimación de la expansión.<sup>76</sup> Como evidencia contundente de esos planes expansionistas que se evaluaban en la Cancillería brasileña, el mapa realizado en 1827 cuando la guerra todavía no estaba resuelta representa la mítica imagen de la *Ilha do Brasil*, en su extremo meridional, con el límite oeste fijado en el río Paraná. (Mapa No. 2)

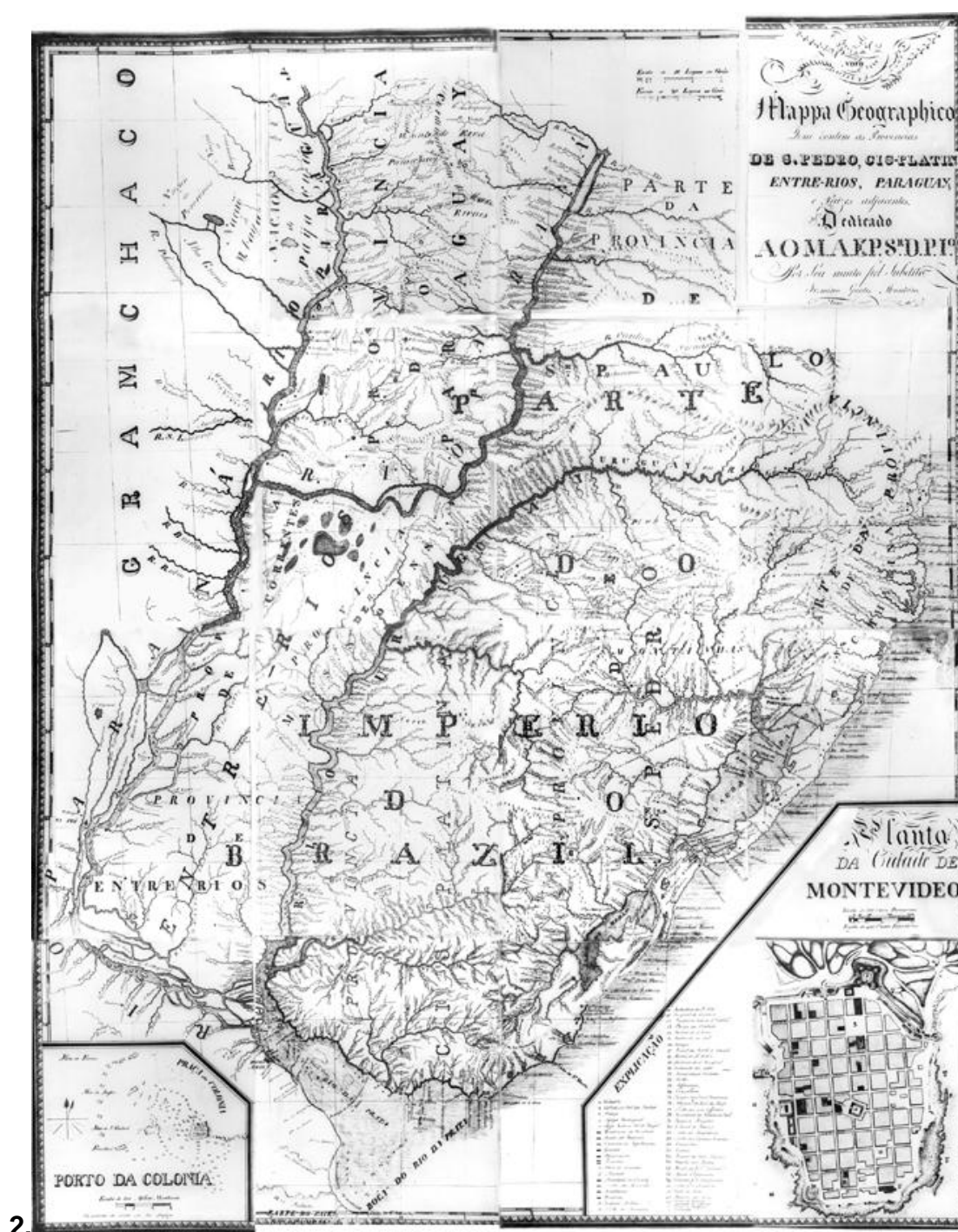
---

<sup>75</sup> Beverina, Juan *La Guerra contra el Imperio del Brasil*, Bs As, Editorial Luis Bernard, 1927, pp. 250-258.

<sup>76</sup> Nordman D., 2006, pp. 156-157. La cartografía como fuente de poder y conocimiento es abordada por Cecilia Cuesta Vélez quien aporta herramientas teóricas para su análisis y evidencias empíricas durante la colonia española en América, Cuesta Vélez C., 2005.



## Mapa No.



2. Novo Mappa Geographico que contem as Provincias de S. Pedro, Cisplatina, Entre Rios, Paraguay e Países Adjacentes. Fuente: Islas, Ariadna "En búsqueda de fronteras perdidas. Algunas notas sobre la construcción política de las "fronteras naturales" en la región platense sobre la lectura de viejos mapas (1600 ca.- 1853), Il Jornadas Historia Regional Comparada, PUCRS, Porto Alegre, 3/6/OCT/2005. La autora consigna que "Esta carta fue realizada en 1827, en el marco de la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio, y dedicada al emperador Pedro I. Nótese que ubica las fronteras del Imperio del Brasil sobre el Río Paraná, en cuanto parte de las letras que corresponden a esta denominación figuran sobre el territorio del Entre Rios, mientras que las otras provincias son indicadas como "países adyacentes", en una reformulación de la antigua imagen "isleña" del Brasil. La libre navegación de los ríos tributarios del Plata fue uno de los puntos discutidos, y finalmente establecidos, en la negociación del tratado que puso fin a la guerra, punto que Brasil reclamaría en tratados sucesivos.[96 x 73,3 cm; reproducción fotográfica, Argentina- Archivo General de la Nación. X, II-256]."

Entre 1831 y 1832, una nueva entidad política reveló intenciones expansionistas en el Río de la Plata. El plan del presidente de la República Oriental del Uruguay, Fructuoso Rivera, era anexar a Entre Ríos y conformar un nuevo Estado sumando a Corrientes y Santa Fe. Las misiones encomendadas por el presidente ante los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes fueron encabezadas sucesivamente por Evaristo Carriego, Eugenio Aberasturi y Francisco Lecocq. Las instrucciones formales dadas a los comisionados y sus cartas de presentación ante las autoridades, transmitieron el interés por establecer buenas relaciones en un marco pacífico y de entendimiento. Estas misiones, recibidas con suma desconfianza en sus lugares de destino, revelaron en la práctica otros propósitos tendientes a crear condiciones favorables a los planes de Rivera: explorar el clima político interior, quebrar a la Confederación intentando pactar separadamente con las provincias, vincularse a las facciones opositoras, promover la rivalidad dentro del grupo gobernante y desestabilizar políticamente a la región. Las tres misiones no tuvieron el éxito esperado. La alianza confederal respetó sus compromisos mediante acciones coordinadas por el propio Juan Manuel de Rosas (Vidaurreta de Tjarks A., 1963, pp. 507-555). Hacia el fin de la década de 1830, los unitarios exiliados por Rosas y apoyados por Rivera –reelecto presidente de la República Oriental- recrudecieron sus operaciones para dar fin al régimen instalado en Buenos Aires y terminar con la Confederación. Sucesivas campañas armadas cruzaron el río Uruguay e invadieron Entre Ríos para sentar allí sus bases militares y acosar a los gobiernos federales. Así, la región del Plata se vio sumida en una guerra a la que no le era ajeno el interés extranjero y donde reaparecía con nueva fuerza la apetencia de anexión territorial de Rivera.<sup>77</sup>

En cuanto a conflictos jurisdiccionales, el límite con Corrientes fue uno de los que más tardíamente se resolvió. A fines del siglo XVIII, las disputas entre los Cabildos de Santa Fe y Corrientes giraron en torno al problema fiscal que originaba la confusión de sus delimitaciones: el cobro de impuestos a los vecinos

---

<sup>77</sup> Salvatore, Ricardo "Consolidación del régimen rosista (1835-1852)" en Goldman N. (Dir. Tomo), 1998, Cap. IX, pp. 365-379. Ver más detalles de estos conflictos de la década de 1830 y principios de los '40 en el Apéndice, Apartado: *Entre Ríos Confederal. Relaciones interprovinciales y peligro exterior*.

de la frontera era requerido por ambas administraciones, generando negativas de pago y presentaciones a la justicia. (Cervera M., 1981, T. III, p. 568). En 1821, la administración de la República de Entre Ríos aspiraba a extender el dominio territorial de Entre Ríos a los pueblos correntinos de Santa Rita de la Esquina y Curuzú Cuatiá y de hecho, realizó algunas acciones con ese propósito. Una vez disuelta la República, el gobierno de Corrientes dictó varias leyes en defensa de su “derecho inmemorial” sobre esos pueblos, reafirmando la soberanía provincial en esa área fronteriza, recobrando sus comandancias y estableciendo receptorías impositivas mejor organizadas. En 1843 se firmó un Tratado provisorio para fijar los límites interprovinciales pero de dificultoso cumplimiento. Recién en 1881 una Ley nacional resolvió el problema.<sup>78</sup>

## **II.5. Sociedad y economía entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX.**

### **II.5.a. El poblamiento.**

La naturaleza heterogénea de los registros junto con la disparidad de variables utilizadas, la fragmentación de los datos y la presunción de subregistros de distinta índole dificultan, particularmente en la época colonial hasta 1820, las operaciones de análisis demográfico –evoluciones estadísticas completas, dinámica poblacional y migratoria- y su grado de confiabilidad. No obstante estas dificultades los datos recogidos, triangulados con otros aportes documentales e historiográficos, nos aproximan al conjunto humano establecido en la región informándonos sobre la estructura y estado de la base social en el período de nuestro estudio.

Hasta mediados del siglo XVIII, el proceso de poblamiento hispanocriollo en el Río de la Plata fue lento y discontinuo, acelerándose de manera notable en su último tercio debido al impacto de las reformas borbónicas. En efecto, diversas medidas impulsadas desde Buenos Aires favorecieron el aumento de los habitantes en ciertas áreas urbanas y rurales. Entre 1680 y el Censo general de 1778 ordenado por Carlos III, Buenos Aires y su campaña creció de 2.000

---

<sup>78</sup> Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, T. I 1821-1825, Corrientes, Imp. del Estado, 1929, Leyes del 27 y 29 de noviembre y 24 de diciembre de 1821, pp. 17-18, 54. Ravignani Emilio, *Asambleas Constituyentes Argentinas*, Bs As. T. 6to, 2da. Parte, pp. 254-255.

habitantes a 37.600, notándose un sensible aumento de población en Córdoba, Salta, Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero. En un contexto de decadencia de los centros mineros de Potosí como polos dinamizadores de la economía y de ascendente demanda europea de bienes especialmente pecuarios, el Litoral comenzó un ascenso económico muy importante. La implementación del “Reglamento para el comercio libre de España e Indias” en 1778 impactó en la ciudad – puerto, estimulando el comercio de importación y exportación, la circulación de nuevos bienes de consumo y la afluencia de metálico. Pero los beneficios no fueron uniformes para el resto del Virreinato, como bien destaca Juan Carlos Garavaglia. En Cuyo y el Tucumán, por ejemplo, ocasionó grandes desequilibrios por el impacto de la importación sobre las producciones locales al punto que, entre otros factores, provocaron la expulsión de pobladores hacia zonas potencialmente prósperas ligadas a la producción pecuaria de exportación. Estas zonas también recibieron a los indígenas migrantes de las desestructuradas Misiones luego de la expulsión de los jesuitas. Así, centenares de hombres solos o con familias se trasladaron hacia “las tierras de abajo” o sea el Litoral, movidos por la expectativa de incorporarse a tareas agrícolas y ganaderas, al sistema de transporte terrestre y fluvial, o como servidores y artesanos.<sup>79</sup>

En el período de entre siglos, las estimaciones parciales realizadas por funcionarios españoles y eclesiásticos omitieron prácticamente a los indígenas y a los africanos y mestizos que trabajaban en el campo, villas y pueblos. Siguiendo a Susana Frías sobre la tendencia al blanqueamiento de la población para el Litoral fluvial en este período, inferimos que esta aparente omisión o los valores casi irrelevantes hallados podrían ocultar una operación de ese tipo, en particular del grupo mestizo (Frías S. 1999, p. 118). En 1782, el recuento de población de Tomás de Rocamora sobre Entre Ríos estaría indicando dos cuestiones importantes: -un aumento del 60% de unidades familiares en la Bajada respecto de 1745 y la aparición de 83 familias de Nogoyá; -un incremento

---

<sup>79</sup> Frías, Susana “La expansión de la población” en *Nueva Historia de la Nación Argentina*, Academia Nacional de la Historia, Planeta, Bs As, 1999, T. II, 2da. Parte, Cap.III, pp. 115-121. Garavaglia, Juan Carlos y Moreno, José Luis *Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX*, Buenos Aires, Cántaro, 1993, Introducción, p. 13. Garavaglia, J. C., 1987.

notable en el área de nueva colonización correspondiente a las tres Villas, que hasta 1765 presentaba una ocupación rural lenta, llegando a 237 familias.

De acuerdo a las cifras de población aportadas por el comisionado Félix de Azara sobre la Intendencia de Buenos Aires entre 1789 y 1801, los habitantes de los Entre – ríos totalizan 11.600 repartidos en el área de vieja colonización con 4.500 y en la de nueva colonización con 7.100. Hemos agrupado esas cifras del modo siguiente: los Entre-ríos, Santa Fe y Corrientes, Buenos Aires, la Banda Oriental, las Misiones guaraníes y reducciones indígenas localizadas en cada uno de los anteriores agrupamientos. De la suma de 174.934 habitantes, el 17% le pertenece al primer agrupamiento, el 41% a Buenos Aires, el 17% a la Banda Oriental, el cuarto agrupamiento con 25% a indios misioneros y reducidos (Cuadros Nos. 1 y 2 en el Anexo Final). Para la época la ciudad de Santa Fe tenía entre 4.000 y 5.000 habitantes, Paysandú 565 y Soriano unos 2.270 incluyendo a Mercedes (Quirici G., 2005; Cervera M. 1981, T III, p. 141-142).

La composición étnica de la población incluía a indígenas y africanos. Los pueblos indígenas prehispánicos que habitaban y circulaban por el Litoral fluvial, pertenecían a distintas parcialidades nómades y seminómades cuyos medios de subsistencia eran la pesquería, caza, recolección y algunos sembradíos. Con la conquista y la colonización española, los modos de vida indígenas se conmovieron y desestructuraron, aunque siempre hubo lugar para desarrollar estrategias de supervivencia recreadas dentro de sus propias lógicas. En los “Entre – ríos” algunos indígenas fueron asignados a encomiendas, estancias y chacras, a transportes y cargas, incorporando así nuevas prácticas laborales; otros trataron dificultosamente de conservar sus prácticas culturales y su cohesión grupal en trashumancia, mientras que un gran número fue eliminado o puestos en reducción y servidumbre, mediante migraciones forzosas hacia Santa Fe, Corrientes y la Banda Oriental, constituyéndose en verdaderas operaciones de desarraigo. No poseemos datos confiables del poblamiento prehispánico. Para épocas posteriores –fines del XVIII y 1809- se dispone solo de registros parciales sobre asentamiento de familias indígenas de origen misionero y mestizas, sin definir cantidad, características y/o pertenencias a familias de origen español o criollo. En cuanto a los negros esclavizados, fueron destinados mayormente al trabajo en estancias. Por ejemplo, en 1803 la estancia El Carmen

y demás puestos, propiedad de Esteban J. García de Zúñiga en Gualeguaychú, sumaba 61 negros de esa condición entre hombres y mujeres, los que llegaban a formar unas 12 familias. En las estancias de Joseph de Urquiza –las administradas y las propias- también contaban con este tipo de mano de obra.<sup>80</sup>(Frías S. 1999; Urquiza Almandoz O., 1978, Cap. I; Bosch B., 1980, p. 4).

En ese contexto general, la ocupación del espacio en los “Entre-ríos” tuvo etapas de expansión y contracción, con asentamientos humanos que presentaron distinto grado de estabilidad y formalidad. La creación de las Villas en la región oriental, el ascenso económico del Litoral y la diversificación de actividades favorecieron el aumento de los índices demográficos en el período de entre siglos, puesto que al natural crecimiento vegetativo se le sumó la llegada de migrantes de distintas procedencia.<sup>81</sup>

Con el quiebre colonial y la revolución de 1810 se inauguró una década con importantes transformaciones en el Litoral. Las diversas situaciones bélicas militarizaron a la sociedad ocasionando perjuicios pero también ventajas en las ciudades, villas y campaña. Las intensas movilizaciones militares desplazaron a los hombres de sus actividades cotidianas resintiéndolos sensiblemente la actividad económica, no obstante, la necesidad de sostener a los ejércitos en sus lugares de asiento y tránsito hizo que se desarrollara cierta infraestructura de servicios y manutención. Tanto la convulsión revolucionaria como los conflictos que siguieron en la construcción de un nuevo orden político impactaron en el poblamiento, con diferenciaciones regionales en sus efectos. Las cifras disponibles para Entre Ríos en 1816 arrojan la cantidad de 18.597 habitantes (Urquiza Almandoz O., 1978, p. 38), sin tener certeza sobre la integración a esta cifra de indígenas, negros esclavizados y mestizos.

---

<sup>80</sup> Julio Djenderedjian realiza un exhaustivo análisis sobre el empleo de esclavizados en establecimientos rurales de los García de Zúñiga localizados en los Entre – ríos en “Optimizando recursos escasos en un área de frontera. La opción por la mano de obra esclava en grandes estancias entrerrianas de tiempos coloniales”, *Quinto Sol*, [online] 2011, vol. 15, n.2, pp. 1-27. Los García de Zúñiga, Esteban padre de Mateo –a quien veremos con gran protagonismo político en Entre Ríos en la década de 1820- y su hermano Pedro tenían estancias ganaderas en el oriente entrerriano, desde fines del XVIII, sus redes familiares se extendían hacia la Banda Oriental y Buenos Aires, en Djenderedjian Julio, 2005.

<sup>81</sup> Obras generales de consulta: *Enciclopedia de Entre Ríos*, 1978, Cap. 1: Arce, Facundo “El poblamiento. 1573-1776” y Cap. 2: Segura, Juan J. A. “El poblamiento. 1776-1810”; Pérez Colman, C., 1936, T. II, Cap. I. Eguiguren María S. Los británicos en el depto. Federación (ER) ponencia *XIII Encuentro de Geohistoria regional*, Chajarí, Entre Ríos, 1993, pp. 116-117.

Hacia 1820, la conformación de estados provinciales trajo cierta estabilidad y consolidación de centros urbanos. Los datos disponibles sobre población pertenecen al censo ordenado por Francisco Ramírez en Entre Ríos y Corrientes a fines de 1820. Las investigaciones basadas en esta fuente fijaron reparos en cuanto a su fiabilidad por la falta de registros uniformes y los vacíos de datos para algunas regiones que se suponían habitadas como las de la frontera común en confluencia del Guayquiraró y el Uruguay; podemos considerar también que las migraciones internas alentadas por el ascenso económico experimentado por el Litoral rioplatense, dieron origen a variaciones en el número de población y asentamientos, por lo tanto estamos ante una masa poblacional móvil y fluctuante. Atendiendo a estas limitaciones, el total estimado de habitantes sería de 20.056 en todo el territorio entrerriano, repartidos de la siguiente manera: 14.848 habitantes en el occidente hacia el Paraná y 5.208 en el oriente hacia el río Uruguay; en la Villa del Paraná se contabilizaron 4.282 habitantes y en la Villa del Uruguay, 1223. Tomando como referencia el río Gualeguay, tenemos dos cálculos ligeramente divergentes sobre el porcentaje de habitantes localizados a sus lados. Uno estudio ha calculado un 67% en las tierras del Oeste y el 33% restante al Este, concentrado principalmente sobre la costa del río Uruguay; mientras que el otro estudio más reciente da un 74% hacia el Paraná y un 26% hacia el Uruguay. De todos modos coinciden en que la costa del Paraná era la más densamente poblada (Urquiza Almandoz O., 1978, p. 41; Schmit R., 2004, p. 72) <sup>82</sup>

A efectos de referencia general comparativa, incluimos algunos datos de población para otras provincias rioplatenses –comprendiendo ciudad y campaña–. Por ejemplo, contamos con datos reconstruidos para Santa Fe con 15.000 habitantes entre 1816-1817; para Corrientes en 1820: 36.697; de 1822 para Córdoba con 78.199 y para Buenos Aires con un total de 118.646 habitantes. Es decir que Entre Ríos contenía una población bastante equiparada con Santa Fe aunque distribuida de manera diferente puesto que la jurisdicción santafesina

---

<sup>82</sup> A mediados de julio de 1823, una epidemia de viruela provocó muchas muertes. El gobierno obligó a vacunar a la población a fin de “proveer nuestra conservación”. A fin de ese año, la cifra de muertos, según la prensa, había alcanzado casi los 200. Cf. *El Correo Ministerial de Paraná*, No. 23, 6 de julio de 1823; periódico *La Cuchilla del Monte*, Nogoyá, 1823, en Andreoto, M. A., Vol. IV, 2009.

comprendía una angosta franja recostada sobre el río Paraná, con la ciudad y solo tres pueblos de campaña: Rincón, Coronda y Rosario. Por otro lado, era bastante pequeña en comparación con las otras provincias citadas. En 1826, el plan de reordenamiento territorial introdujo una nueva jerarquización urbana, las villas de Paraná y Uruguay fueron declaradas ciudades y los pueblos fueron denominados villas, más tarde se agregaron tres distritos rurales en el Departamento I Principal –Matanza, Tala y Feliciano- y tres en el Departamento II Principal –Gualeguay al este del mismo río, Lucas y Mandisoví-. Sobre esta nueva configuración territorial, el diputado al Congreso de Buenos Aires Lucio Mansilla calculó un total de 26.000 habitantes. Recién disponemos de un censo en 1849 donde la población alcanza los 47.736 habs. El siguiente censo de 1860 muestra claramente el importante crecimiento demográfico operado por la llegada masiva de inmigración europea, la cifra total es de 134.271.<sup>83</sup>

Un aspecto importante en torno al poblamiento y las migraciones en áreas de frontera puede apreciarse al analizar información matrimonial tomando el origen de los cónyuges e información censal. Para Soriano y Mercedes, Ana Frega analizó las uniones matrimoniales entre 1795 y 1810; tomamos sus gráficos comparándolos con los que elaboramos para Villa/Ciudad del Uruguay entre 1816-1832 y para Santa Fe 1820 y 1822. Los mismos muestran en el caso del origen de los esposos un porcentaje abultado de migrantes de diversas procedencias –regionales, americanas, europeas-, notándose que el origen de las esposas es mayoritariamente nativo de esos pueblos. (Gráficos Nos. 1, 2, 3 en Anexo final).

Podemos ejemplificar este movimiento migratorio en la Villa de Paysandú mediante el padrón de 1827, con un total de 1.211 habitantes: la información sobre antecedentes de residencia que proporciona el documento nos permitió calcular y visualizar una importante migración de naturales de la Villa del Uruguay entre 1820 y 1821, con una tendencia a la migración familiar de

---

<sup>83</sup> Maeder, Ernesto *“Evolución demográfica argentina desde 1810 a 1869”*, Bs. As, EUDEBA, 1969; Schmit, R., 2004, pp. 71-72. RLDAPER, T. II, pp. 189-190. Blondel J.J.M. *Almanaque político y de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año 1826*”, Ediciones de la Flor, Bs. As. 1969, p. 264.



hispanocriollos, hombres jóvenes solos y personas catalogadas como morenas, indias, chinas y pardas en su mayoría declaradas libres.<sup>84</sup>

### **II.5.b. Las actividades económicas.**

Desde fines del siglo XVIII y la década de 1840, las actividades económicas mostraron un sensible crecimiento del comercio, las artesanías y la producción ganadera y agrícola. En el período de entre siglos, el poblado de la Bajada del Paraná contaba con curtidurías, jabonerías, graserías, hornos de ladrillos y tejas, caleras, tiendas y pulperías, carpinterías, platerías, lomillerías, tahonas, entre otros establecimientos, un movimiento comercial y artesanal que le fue otorgando una dinámica propia y más separada de Santa Fe. En las Villas de la costa del Uruguay proliferaban las caleras, acopios de leña para exportación, almacenes, tahonas, ladrillerías, curtiembres. (Urquiza Almandoz O., 1978: pp. 148-165, 216). Tanto en la Villa del Uruguay como en la Bajada se registraba una concentración de comercio importador y exportador a través de sus puertos. Hacia 1790 comienza un proceso de diferenciación entre Santa Fe y Paraná, pasando ésta última a dominar el flujo exportador del Bajo Paraná hacia Buenos Aires. Las planillas de diezmos y alcabalas de Santa Fe indican claramente el crecimiento ganadero de Entre Ríos, mayor producción exportable y aumento de transacciones comerciales. Las cuantificaciones de piezas de cuero desde la Bajada a Buenos Aires aumentaron sensiblemente llegando hacia 1800 a una paridad con Santa Fe, ciudad - puerto que recogía cueros de Corrientes, Córdoba y Santiago del Estero (Wentzel, C., 1988).

Los migrantes hacia el Litoral se asentaron en las estancias al norte de Paraná y en torno a las Villas del oriente entrerriano, como mano de obra estacional o desarrollando actividad económica en pequeña escala. Sin dudas, los oficios ligados al río tuvieron un peso muy importante: boteros, cargadores,

---

<sup>84</sup> AGNU, Archivo General Administrativo, Padrón Paysandú 1821-1823-1827, No. 277. Los padrones de 1821 y 1823 solo consignan totales de habitantes y total de Receptoría; el análisis del rubro "Años de residencia en la provincia" para el padrón de 1827, permitió calcular y visualizar naturales de Concepción del Uruguay que se establecieron en Paysandú a principios de la década de 1820. De 156 naturales de Concepción: 56 declaran 7 años de residencia en la provincia, 13 declaran 8, 62 declaran 6 o menos, el resto 9 o más.

baqueanos, cazadores, pescadores con sus familias, postillones, patrones de barco, sirgadores, proliferaban en los puertos, islas y pasos fluviales.

Los autores Schmit y Djenderedjian afirman que en Entre Ríos, considerada como una sociedad rioplatense de frontera, la migración no fue del tipo “minero” o “militar” donde el rasgo saliente era la afluencia temporal o permanente de hombres solos, sino que por el contrario su dinámica social se conformó mayoritariamente por estructuras familiares simples o extendidas. En esa economía en crecimiento, los estancieros combinaron la cría de ganado con el comercio de cueros a la vez que se producía agricultura de subsistencia, explotación forestal y producción de carbón de leña tanto en las estancias como en las chacras próximas a los pueblos y Villas. El control de recursos, las nuevas posibilidades de importar y exportar, las buenas tierras para la ganadería fueron factores favorables para que muchos hacendados acrecentaran su poder local como el caso de Joseph de Urquiza que pasará de administrador de estancias a propietario y comandante de milicias en la Villa del Uruguay. (Schmit R., Djenderedjian J., 2010: pp. 663-672).

A mediados del XVIII se fundó la Villa de Salto y Paysandú se constituyó en un puesto de estancia y acopio del pueblo de Yapeyú, que fue creciendo en importancia; hacia 1796 se distinguía por la cría de ganado vacuno y caballar y en menor proporción el ovino. En cuanto a Santo Domingo Soriano fue integrado a la política borbónica de fronteras como foco de migración regional y de impulso de nuevos centros poblados como Mercedes. Para ese mismo año, Soriano contaba con una actividad similar a Paysandú aunque con más áreas de cultivo, (Quirici G., 2005; Frega A., 2007, pp. 25-28). Algunos registros judiciales de Soriano, de principios de la década de 1820, revelan el empleo de mano de obra conchabada en las costas del Río Negro, hombres provenientes de otras provincias del Río de la Plata como Santa Fe y Corrientes que estaban al servicio de establecimientos pecuarios.<sup>85</sup>

En Santa Fe y su campaña se criaba ganado vacuno y caballar, creciendo en importancia el ovino y el mular, se cultivaba maíz y trigo básicamente para subsistencia. Las curtidurías y la artesanía de la madera atendían a la importante

---

<sup>85</sup> AGNU, Archivo Judicial, Juzgado Letrado Santo Domingo Soriano, Caja 6 1821 – 1822.

demanda de un amplio mercado local y regional. En la ciudad, los censos nos informan del desarrollo de actividades tales como herrería, sastrería, platería, zapatería, carpinterías, tahonas, mueblerías.<sup>86</sup>

La antigua dependencia de Santa Fe había generado múltiples lazos sociales y económicos, sobre todo en el Occidente entrerriano. Muchos vecinos santafesinos ejercían el comercio y/o tenían allí posesiones provenientes en su mayoría de mercedes reales, herencias o adquisiciones por remate de Temporalidades de los Jesuitas, por ejemplo Larramendi, Diez de Andino, Troncoso, Vera y Mujica, Brain de Osuna, Crespo entre otros. Entre 1810 y 1813 la estancia entrerriana de Francisco A. Candiotti comprendía casi 90.000 has. en la zona de Arroyo Hondo sobre el Paraná; contaba 37.000 cabezas de ganado, mulas para el mercado de minas del Brasil y unos 40.000 caballos según testimonios dejados por el comerciante inglés John Parish Robertson. Por otra parte, se ha comprobado la existencia de redes mercantiles articuladas a través de los contratos de fianzas o compromisos formales de pago fiscal entre comerciantes de Santa Fe y de los Entre-ríos durante la etapa colonial infiriéndose una continuación de este tipo de vínculos a lo largo de la primera mitad del XIX.<sup>87</sup> En cuanto a la caracterización del tipo de establecimiento rural sobre la costa del Uruguay: al norte, había unidades económicas menores con pequeños productores, cría de ganado vacuno y caballar, cultivos de maíz, mandioca y trigo. A la altura de la Villa del Uruguay, predominaban labradores de trigo y maíz y modestos hacendados criadores de ganado ovino, vacuno, caballar y mular o sea que había más diversificación económica. En la zona sur próxima a Gualeguaychú se concentraban estancias de mayores proporciones, con importantes rodeos de vacunos; se realizaban transacciones con ganado en pie, cueros y sebo por el delta hacia el puerto de Buenos Aires. (Schmit R., 2004, pp. 97-100).

Las guerras revolucionarias trajeron consecuencias muy negativas para la producción rural entrerriana. Por un lado, la reducción de la mano de obra que proporcionaban los indígenas y negros esclavizados al ritmo de su incorporación a los ejércitos tropas como auxiliares hábiles en el manejo de la lanza y el

---

<sup>86</sup> AGPSF, Contaduría, Tomos 33, 36, 39, 47. Gob., T. 1, leg. 15, Censo Cuartel No. 3, 1823.

<sup>87</sup> AGPSF, Contaduría, Tomos 7, 8, 9. Varios Legajos de Escrituras de Fianzas.

caballo.<sup>88</sup> Por otro lado, el stock ganadero se contrajo sensiblemente por las demandas de los ejércitos patriotas y los saqueos derivados de su paso, calculándose para 1823 una existencia de 40.000 vacunos y 60.000 equinos, casi un 25% menos que a principios del XIX. Después de 1822 se tomaron algunas medidas para recomponer la situación que, sin tener un impacto inmediato, ayudaron a iniciar el repoblamiento de los campos: control de matanzas, prohibiciones periódicas de extracción hacia otras provincias, organización y mejoramiento de las invernadas del Estado, compra de ganado a Buenos Aires para consumo local y abastecimiento del ejército. En tiempos de guerra contra el Brasil los saqueos de ganado, desde Río Grande del Sur hacia la Provincia Oriental y desde allí a Entre Ríos y demás provincias litorales, contribuyeron a ese repoblamiento.<sup>89</sup> A principios de la década de 1830 el hinterland de la Villa del Uruguay mostró un importante crecimiento ganadero; entre los mayores productores de la zona hallamos a los Urquiza, Jorge, Barú, Barceló, Calvento, Alzaga, Elía, Zabala, Espiro y Sagastume. Estudios recientes concluyen que en la campaña de Entre Ríos se pasó de un predominio tardocolonial agrícola y pastoril a una franca hegemonía de los capitales ganaderos acrecentada desde 1840 y que combinaba cría, comercio e industria saladeril (Schmit R., Djenderedjian J., 2010, pp. 684-686; Schmit R., 2004, p. 100; Blondel J. 1826, p. 271)

Desde 1820, en tiempos de la República entrerriana, las labores agrícolas fueron especialmente estimuladas. Las autoridades departamentales se encargaron de exigir siembra de granos y plantaciones de frutales en sus distritos, proveyendo de utensilios de labranza; se trataba de combinar estas tareas con el servicio miliciano cuando no había actividad militar armada. Se incentivó el cultivo de trigo y la actividad molinera a fin de proveer de harinas para la elaboración de alimentos. En 1823, se tomaron tierras baldías asignándoselas a distintos pobladores como suertes de chacras para la agricultura. En 1829, el gobernador de Entre Ríos León Solas admitió que, pese a los intentos, la agricultura presentaba un desarrollo insuficiente. Será recién

---

<sup>88</sup> Halperin Donghi, Tulio, 1972, 2da. Parte, Cap. III La revolución en el país. Sobre alianzas entre indígenas y tropas artiguistas, cf. Díez de Andino, Manuel I., Diario, 2008, pp. 30-32.

<sup>89</sup> Aspecto tratado en Apartado VII.2.d. El ganado como botín de guerra: derivaciones económicas y políticas, 1827.

después de 1840 en que se registre aumento de áreas cultivadas y mayor rendimiento de cosechas. (Urquiza Almandoz O, 1978, pp. 123-131).

En cuanto a las actividades “industriales”, generalmente presentaban estructuras más bien artesanales. La cal fue un elemento necesario para las curtiembres y la construcción de viviendas, exportándose también a Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Asunción. En la costa del Paraná, su explotación se intensificó en los años tardocoloniales a cargo de importantes comerciantes: Camilo Idoate, Juan Garrigó, Salvador Ezpeleta, entre otros. Después de 1822, el Estado participará en su extracción a veces como arrendatario y otras como productor directo.<sup>90</sup> Desde la década de 1830, se introdujeron nuevas tecnologías en los saladeros como el de Santa Cándida, propiedad de Justo José de Urquiza, el que alcanzará una explotación intensiva diversificada: carnes y cueros salados, grasa, sebo, aceite, jabón, velas, hueso y ceniza, cerdas. Otro rubro era el de las maderas obtenidas en las islas de los grandes ríos y en el bosque de Montiel, desde donde se extraían variedades tales como sauce, ceibo, ñandubay, espinillos, talas y chañares, quebrachos y algarrobos; luego se exportaban a Buenos Aires, Montevideo y Santa Fe en la forma de postes, umbrales, horcones, piezas de carreta, tirantes, leña y carbón de leña.

### **II.5.c. Los circuitos económicos. Las comunicaciones.**

Los ríos como “caminos fluviales” y el sistema de postas articularon la región del Litoral fluvial tanto a su interior como hacia otras regiones americanas. La creación de la Real Renta de Correos, Postas y Caminos en 1767 mejoró notablemente el desplazamiento terrestre y una mejor organización territorial e institucional. El nodo Santa Fe de la carrera Chile-Perú-Córdoba se conectaba por la Bajada con dos carreras de Postas: hacia el norte por Esquina, Corrientes, Itapúa hasta Asunción del Paraguay y hacia el Este por la carrera del río Uruguay abriéndose a intercambios con mercados de Rio Grande del Sur, Banda Oriental y el atlántico. El camino de Postas desde Montevideo,

---

<sup>90</sup> RLDAPER, Tomo I, pp. 80 y 189. Ver desarrollo de explotación calífera en Ceruti, Carlos “Aportes a la historia de la Arquitectura regional. El yeso y la cal en Santa Fe y el Norte de Entre Ríos” en *IV Encuentro de Historiadores*, JPEH, Santa Fe, Impresos S.A., 2003.

consolidado entre 1828 y 1832, pasaba por San José, Santo Domingo Soriano, Mercedes, Paysandú y llegaba a Salto. Desde la Villa de Paysandú se cruzaba a la del Uruguay, cabecera de dos caminos alternativos: uno hacia el norte con destino a las Misiones y otro hacia el interior comunicando Gualeguay y Gualeguaychú. Un tortuoso recorrido transversal comunicaba ambas costas fluviales a través de la Selva de Montiel. En 1823, la reorganización de las Postas internas aseguró la comunicación entre las Villas y los pueblos de campaña. (Urquiza Almandoz, O., 1978, pp. 550-551).<sup>91</sup>

Por su parte, las autoridades del Imperio del Brasil estaban interesadas en asegurar la libre navegación por el río Uruguay y sostener el circuito comercial que permitía abastecer de productos, por ejemplo, a Río Grande, Santa Catarina, Matto Grosso, Paraná. Los puertos de Buenos Aires y Montevideo suplantaban en el circuito al de Río Grande, poco profundo y con fletes costosos.<sup>92</sup>

Hasta aproximadamente 1830, la dinámica comercial portuaria estará concentrada en la costa del Paraná. Esta dinámica se verá afectada por el bloqueo impuesto por la flota imperial brasileña al puerto de Buenos Aires durante la guerra de 1826-1828; luego del acuerdo de paz el movimiento comercial será restablecido. Entre los productos exportados se encontraban cueros al pelo y curtidos, sebo, lana, cerda, carbón, pieles de nutria, maderas, etc. Se importaba tabaco, yerba, vinos y aguardientes, frutos secos, herramientas, géneros, calzado y ropa, entre otros artículos. En el comercio de abasto, existía un tráfico bastante regular entre Santa Fe y Paraná a través embarcaciones y con registro periódico en la Aduana santafesina. El comercio mayorista y minorista era ejercido en establecimientos urbanos y rurales:

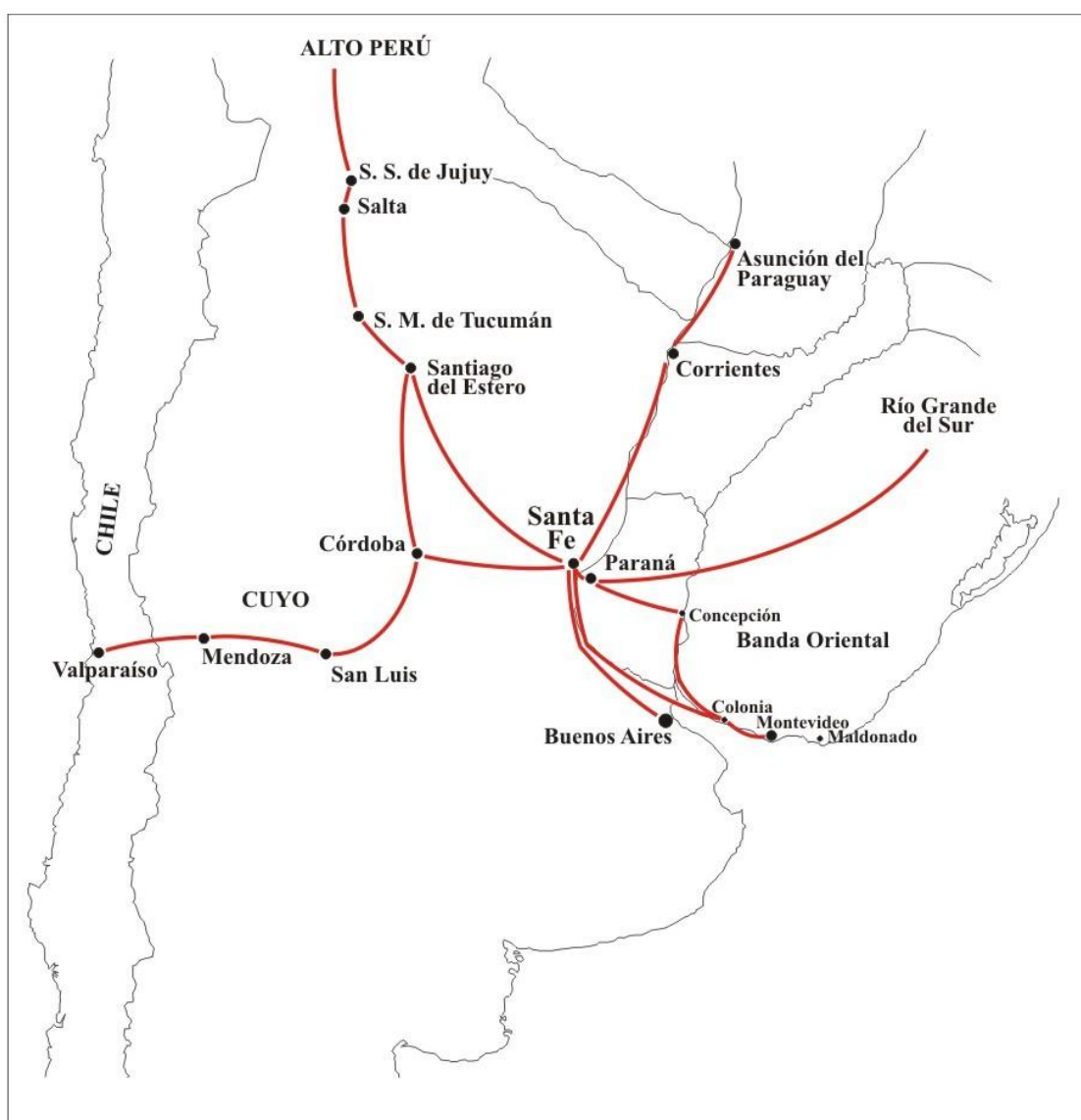
---

<sup>91</sup> Suárez Teresa, Tornay María Laura "Poblaciones, vecinos y fronteras rioplatenses. Santa Fe a fines del siglo XVIII" en *Anuario de Estudios Americanos*, EEHA, Sevilla, 2003, pp. 521-555; Millot J., Bertino M., 1991, Tomo I, pp. 170-171; RLDAPER, T. I, pp. 242-245.

<sup>92</sup> Chindemi, Julia. *Las tradiciones de frontera internacional en Río Grande del Sur: un análisis en la larga duración*, Tesis de Maestría, Univ. de Brasilia, 1999, Cap. I; Ferreira, Fábio "Comerciantes e estancieiros: a participação dos segmentos economicos orientais na expansao da fronteira luso-brasileira em direção ao Prata" Ponencia I Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Simposio No. 4, Montevideo, UDELAR, Dic/07

tiendas, pulperías y almacenes. (Schmit R y Djenderedjian J., 2010, pp. 689-691)<sup>93</sup> (Mapa No. 3).

**Mapa No. 3**



**Principales circuitos mercantiles durante el período estudiado. Elaboración propia en base a Areces, Nidia "Milicias y faccionalismo en Santa Fe, 1660-1730" en *Revista de Indias*, 2002, Vol. LXII, 226, p. 591.**

La llegada de extranjeros se vio incentivada por el ascenso económico del Litoral; algunos radicados en la región oriental de Entre Ríos procedían de Francia, Irlanda, Grecia, Italia y los Estados Unidos del Norte y se dedicaron fundamentalmente al comercio. En el caso de los británicos, introdujeron nuevas

<sup>93</sup> AGPER, Hacienda Serie V, Carpetas 2 y 4

formas de comercialización y aportaron más metálico en las transacciones. No solo en las ciudades sino también en el curso de los ríos y los caminos, al frente de flotillas y tropas de carretas, procuraban obtener lucros excepcionales.<sup>94</sup> Por ejemplo, en el río Paraná, citamos el caso de Juan Booth quien comerciaba tabaco y otros efectos de barco a barco sin pagar gravamen en ninguna aduana. O el caso de David Spalding, comerciante inglés radicado en Villa del Uruguay, quien exportaba cueros desde Montevideo por medio de sus apoderados comerciales; en enero de 1824 fue acusado de estafa fiscal a la receptoría local y se fugó a la Banda Oriental para finalmente ser detenido y sumariado en Entre Ríos. La política económica de Entre Ríos en la década de 1820 alentó la inmigración extranjera para establecer colonias agrícolas. En este marco, los británicos organizaron empresas colonizadoras trayendo a estas tierras a colonos ingleses, escoceses e irlandeses, cuestión sobre la que volveremos en el Cap. VIII.<sup>95</sup> Otros inmigrantes de origen genovés se establecieron en los puertos del Paraná para dedicarse al transporte y comercio fluvial, como patrones o dueños de embarcaciones, pulperos o tenderos. El puerto de la Villa de la Victoria, antiguo pueblo de La Matanza, se conectaba por el Paraná de las Palmas con Buenos Aires y por el Paraná Guazú con el río Uruguay y el puerto de Montevideo. Entre 1830 y 1841, los documentos de Hacienda registran las variadas actividades de estos extranjeros: Santiago Marchani, Angel Palestra, Antonio Luvi, Juan Gallino, entre otros (Chiara, G., 1988).

El contrabando era una práctica corriente desde la época colonial que se prolongó en el tiempo bajo similares mecanismos. Se estructuraba generalmente por medio de relaciones personales asociadas a la burocracia y el poder político locales, traspasaba fronteras y articulaba circuitos extensos. Por ejemplo a fines del siglo XVIII el comercio ilegal de miles de mulas se realizaba desde Santa Fe pasando por los Entre Ríos, seguía por el norte del río Negro hasta Río Grande do Sul, llegando hasta la Feria de ganados de Sorocaba,

---

<sup>94</sup> Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1825) firmado por Manuel García, representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el plenipotenciario británico Woodbine Parish, Halperin Donghi, T. 1989, Tomo 3, p. 153.

<sup>95</sup> Caso Booth: AGPSF, Contaduría, Resguardo, 1824. Caso Spalding: Archivo Artigas, Tomo 25, Doc. 1016, pp. 153-157.

Acceso: <http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas> (Consulta 18/8/2009). Procedencia de extranjeros en Tabla No. 1 en Anexo Final.



cerca de la Vila do Sao Paulo; un circuito ilícito que siguió utilizándose durante el siglo XIX pero sostenido por otros rubros. Otro circuito ilegal frecuente después de 1820 fue el delta paranaense; a través de la Isla del Pillo se organizaban sacas ilegales de ganado hacia San Pedro y Las Conchas, partidos del norte de Buenos Aires.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Gil, Tiago *Infiéis transgressores. Elites e contrabandistas nas fronteiras do Rio Grande e do Rio Pardo (1760-1810)*, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2007, p. 105. RLDAPER, T. I, pp. 318-319.



## **PRIMERA PARTE**

### **Configuración estatal: Poder político e Institucionalización**



## **Instituciones, soberanía y representación política.**

Las revoluciones hispanoamericanas han dejado de ser menospreciadas respecto de las grandes revoluciones del siglo XVIII. En este cambio de paradigma han intervenido producciones historiográficas renovadas en un largo trabajo de más de tres décadas, cuyos novedosos aportes se ven acrecentados por la intensa actividad de reflexión en torno a la evocación bicentenaria de las Independencias en estos comienzos del siglo XXI. Si bien reconocemos que existe todavía una visión de la historia independentista como fenómeno singular - con persistentes cargas emotivas, políticas e ideológicas-, que piensa a las revoluciones como gestas de liberación nacional y como pura reacción rebelde e intransigente, hacemos notar que desde esa renovación se discute fuertemente pero también se dialoga con esa visión histórica más restringida. Estas nuevas evaluaciones y comprobaciones tienen la importancia de avanzar en el conocimiento de la dinámica global de las revoluciones de independencias recuperando su dimensión atlántica, sus especificidades regionales, sus variadas bases sociales, las concepciones de soberanía, representación política, republicanismo, nueva institucionalización que nos interesa particularmente.

En la actualidad existe consenso sobre ciertos factores de peso que movilizaron los vertiginosos tiempos de cambio a nivel continental: la crisis de la monarquía hispánica con la invasión napoleónica y los célebres “sucesos de Bayona” en el año crucial de 1808; la presión británica por la vía militar, diplomática y comercial sobre las colonias españolas en América, a lo largo del siglo XVIII, para conseguir nuevos mercados a sus productos; la oposición entre criollos y peninsulares que se vio profundizada ante la disputa por los cargos burocráticos. Ante el dilema jurídico de la *vacatio regis* emergieron gobiernos criollos que, inicialmente, se instalaron en nombre del rey cautivo Fernando VII inspirados en las Juntas peninsulares y de manera progresiva fueron derivando en propuestas de independencia. Los pueblos de la América española, debatidos entre la sumisión realista y la guerra, entre la lealtad a España y la insurgencia, generaron sus propias respuestas ante el quiebre colonial en un contexto

compartido pleno de incertidumbre y convulsión.<sup>97</sup> Durante el decenio de 1810, varios interrogantes se encontraban en el centro de las discusiones y atendían a problemas medulares como la legitimidad de los nuevos gobiernos instalados y la representación política: ¿Quién gobierna? ¿Con qué leyes lo hace? ¿En nombre de quién se gobierna? ¿Cómo se plantea ahora la relación entre mando y obediencia?

Las diferencias entre centralistas y autonomistas consumieron los debates culminando con la caída del poder central y la disolución del Congreso General Constituyente. Distintas visiones intelectuales de índole positivista, en los fines del siglo XIX, interpretaron a la coyuntura de 1820 como el estallido de la anarquía con una falta de autoridad, vacío institucional y desorden social que prácticamente sumió a la sociedad rioplatense en un estado de naturaleza por largo tiempo.<sup>98</sup> Desde otras ponderaciones de ese momento histórico, lo que se revela como derivación del colapso del poder central y el poder constituyente en lo político y lo jurisdiccional es la desaparición de la base organizativa intendencial de matriz colonial dando paso, en cada una de las llamadas “provincias”, a una nueva forma de entidad política organizada: el Estado provincial, asumido como soberano e independiente. Este rearmado político reformuló los objetivos de estas provincias. Las nuevas prioridades eran la recuperación de las desquiciadas economías, el disciplinamiento de una sociedad atravesada por el desorden de las guerras y fundamentalmente la organización política bajo nuevos principios de autoridad. En el plano interprovincial se implementó una firme política de pactos que estructuraron las relaciones entre las nuevas entidades políticas.

---

<sup>97</sup> Sobre el proceso independentista en la América española ver Halperin Donghi, Tulio, *Historia contemporánea de América Latina*, Madrid, Alianza Edit. 2005, 6a. Reimp., Cap. 2. Bushnell, David “La independencia de la América del Sur española”, Cap. 3 de Bethell, Leslie (Ed) *Historia de América Latina*, Barcelona, Crítica, 1991, Vol. 5. 1o. Ed 1985 Cambridge Univ. De las innumerables publicaciones aparecidas en ocasión del bicentenario de la revolución e independencia, citamos una por ejemplo de esta renovación historiográfica: Bragoni Beatriz, Mata Sara (Comps.), 2008.

<sup>98</sup> Esa interpretación con variados matices se encuentran en los análisis políticos, historiográficos y/o ensayísticos de Domingo Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, entre otros. Un examen de estas posturas asociado al caudillismo se puede consultar en Goldman N., Salvatore R. (Comps), 2005, Introducción y capítulos de Pablo Buchbinder y Maristella Svampa.

El análisis de los rasgos de la estructura político-institucional y la dinámica política en la experiencia autonómica entrerriana, durante la primera etapa histórica de nuestro estudio, permitirá contar con elementos de aproximación a su grado de estatalidad. En esta Primera Parte examinamos diversos aspectos que están relacionados a bases estructurales, formalización y regulaciones político-institucionales, mecanismos de legalidad y legitimidad política. Concretamente, abordaremos los siguientes aspectos: el establecimiento y dinámica de regulaciones legales; nociones políticas de viejo y nuevo cuño; los mecanismos electorales que otorgan legitimidad de origen a las autoridades; la distribución del poder político.

### **Capítulo III. LA “LENGUA CONSTITUCIONAL”: ESTABLECIMIENTO Y DINÁMICA DE LAS REGULACIONES LEGALES.**

La “Lengua Constitucional” en términos de los contemporáneos tuvo varios caminos de difusión en América. Con antecedentes de la filosofía clásica y otros más cercanos del constitucionalismo en el siglo XVIII, la concepción de lo constitucional se ceñía a la posibilidad de constituir un gobierno legitimado por la soberanía popular, bajo un régimen representativo y con bases legales pero limitado por esas mismas bases, aventando así el peligro del despotismo asociado a regímenes absolutistas.<sup>99</sup> Entonces, en esta concepción se manifiestan al menos tres signos de profundo cambio: por un lado, el principio de legitimidad titularizado en el pueblo que desplazaba al principio sacralizado de legitimidad en que se basaba el poder de los reyes europeos, irremediabilmente fracturado con las revoluciones producidas en las ex colonias inglesas y en Francia; por otro lado, el ejercicio de la soberanía delegado por ese pueblo a sus representantes electos y finalmente, la limitación del poder que garantizaba un buen gobierno pero que conllevaba el problema central de la distribución del poder. Agregando más evidencias sobre su extensa y dificultosa construcción histórica, podemos decir que esa concepción –con variados matices de acuerdo a cada experiencia y a cada contexto- abrevaba en la filosofía política de los siglos XVII y XVIII, el constitucionalismo inglés, en los procesos constitucionales norteamericano y francés y en la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812, a la que recientes estudios bajo nuevos enfoques están ponderando con mayor justeza. Las nuevas propuestas fueron conocidas en América, de manera directa o indirecta; novedosos principios representativos y republicanos, formas de reparto del poder y mecanismos de legitimidad sostenidos en lo electoral, entre otros, circularon por distintas vías, fueron apropiados en distintos contextos, no resultando para nada homogéneos en sus nociones y uso.<sup>100</sup> Ahora bien, este

---

<sup>99</sup> De acuerdo con el *Diccionario de la Real Academia Española* de 1792, Constitución se definía como: “Ordenanza, establecimiento, estatuto, reglas que se hacen y forman para el buen gobierno y dirección de una República o comunidad; es del latino Constitutio, que significa eso mismo”. En ediciones posteriores de 1803, 1817, 1822, lo vemos enunciado de la siguiente manera: “cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobierna algún cuerpo o comunidad”.

<sup>100</sup> Según François X. Guerra: en tiempos de agitación política hay en los actores sociales una tendencia a tomar la palabra para justificar sus actos, lo que fue particularmente excepcional a principios del siglo XIX. Los adelantos en la alfabetización y la imprenta favorecieron la aparición de una gran variedad de escritos de distinto carácter y objetivos, destacándose entre ellos a la



lenguaje político no era totalmente novedoso sino que se nutría de profundas tradiciones como el Derecho Natural y de Gentes, fundamento de la ciencia política y social de la época y que contaba con antecedentes ya en la Antigüedad clásica. Al vocablo Constitución, componente destacado de ese nuevo lenguaje, se le unieron los derechos inherentes al ser humano e inalienables como libertad, igualdad, propiedad, seguridad, dotados de nuevos sentidos por el iusnaturalismo racionalista y recuperados por la filosofía política de la época, especialmente la del siglo XVIII.

Evidentemente, había una coexistencia de esas innovaciones en el lenguaje político con normas anteriores, a las que se les reconocía absoluta vigencia y conformaban la llamada “antigua constitución”. En este punto, es necesario decir que la antigua constitución reglaba a la vida social y política de la época, no solo incluía normativas escritas sino también consuetudinarias, prácticas y otras leyes sueltas que no integraban un cuerpo coherente. Básicamente remitía a la vigencia del derecho español escrito –público y privado- que había abrevado del Derecho Romano y del Derecho Canónico: Fuero Juzgo, Leyes de VII Partidas, Leyes de Castilla, Leyes de Indias, Ordenanzas de Comercio y Navegación, Ordenanzas de Bilbao y hasta la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, con sus modificaciones de 1783 (Chiaramonte, J.C. 2010, p. 331-361).<sup>101</sup>

Dentro de este marco, entre los habitantes del Río de la Plata y por ende, en las provincias del Litoral fluvial, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, circuló un lenguaje político con presencia de esos derechos naturales en nueva clave y de nociones de republicanismo asociadas a la implantación de un sistema

---

prensa. Guerra, F. X. *Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, Mapfre, España, 1992, pp. 149-150. También destacamos nuevos estudios sobre lo político desde lo conceptual y las lógicas institucionales que aportan al conocimiento de la historia política y cultural rioplatense, ver por ej. Chiaramonte, 2004; Goldman, N. (Ed.), 2008. Vocablo Constitución: pp. 35-49; Ternavasio, M. 2007, Introducción: 11-21 Cap. I: 23-44, Cap. IV: 99-126.

<sup>101</sup> Esta vigencia se constata, por ejemplo, en disposiciones económicas del Congreso provincial entrerriano y que se mencionan con más detalle en Caps. VI y VIII de esta Tesis. El historiador del derecho Abelardo Levaggi afirma que los principales elementos formativos del derecho argentino hasta la codificación después de 1860 son: el derecho castellano-indiano y el derecho patrio cuyas fuentes más importantes se pueden reducir a tres: el derecho español anterior y posterior a 1810, el derecho extranjero no español (francés, inglés, norteamericano) y las propias circunstancias y necesidades (soluciones vernáculas), “Supervivencia del derecho castellano-indiano en el Río de la Plata (siglo XIX)” en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, Anuario de Historia de América Latina ( JbLA ), N°. 22, 1985, p. 286.

reconocido en la región, proclamando la necesidad de un código regulador y mecanismos electorales de acceso a los cargos. Es necesario recordar aquí que estas tres provincias tuvieron estrecha relación con el sistema propiciado por José Artigas desde la Banda Oriental, en consecuencia también habrían recibido una importante influencia en la recepción de otros cuerpos constitucionales; baste decir que la misma Constitución de Cádiz, cuya aplicación o no dividió a la América española en bloque leal y bloque insurgente, se había jurado en Montevideo aunque prácticamente no se puso en vigencia.<sup>102</sup> Finalmente, estos elementos recibidos para instaurar una nueva organización política y una nueva legitimidad no fueron tomados al pie de la letra, sino que el propio contexto y las necesidades locales les fueron dando propia especificidad a los textos constitucionales producidos en estas provincias del Litoral.

### **III.1. Reglamentos y Estatuto.**

A fines de 1821, Lucio Mansilla accedió al gobierno de Entre Ríos como resultado de una acción violenta contra el Gobernador Supremo Delegado Ricardo López Jordán. El porteño Mansilla inició su carrera militar siendo cadete de las milicias urbanas organizadas en Buenos Aires para resistir las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y se destacó como Oficial en los ejércitos revolucionarios en la década siguiente. Hacia 1820 se unió al ejército de Francisco Ramírez para acabar con la influencia artiguista en la región. Estaba casado con Polonia Duarte y se encontraba ligado por lazos de amistad a miembros de poderosos grupos económicos de Buenos Aires.<sup>103</sup> Ricardo López

---

<sup>102</sup> José Artigas fue declarado Protector en estas provincias. En 1815 formó con ellas la Liga de los Pueblos Libres más la Banda Oriental del Uruguay, las Misiones y Córdoba. Su proyecto, alternativo al centralismo porteño, promovía la construcción de una república sobre pilares de virtud e igualdad, una sociedad con bases legales y éticas de cohesión y bajo el imperio de la ley, garantizada por una Constitución como resguardo del derecho popular. Proyectos de Constitución –federal y provincial-, diversos reglamentos y disposiciones puestos en práctica fueron ampliamente conocidos en la región. Véase Frega, Ana “La virtud y el poder. La soberanía particular de los pueblos en el proyecto artiguista” en Goldman N. y Salvatore, R. (Comps.) 1998 (2da. Ed. 2005), pp. 101-133. Sánchez Gómez, Julio “Montevideo y la Constitución de Cádiz” en prensa. Acceso: <http://www.campus.usal.es> Consulta: 28/8/2012.

<sup>103</sup> Datos biográficos de Lucio N. Mansilla: Teijeiro Martínez B., 1910, T. II, p. 11. Calvento, Mariano, 1940, p. 7; Moritán, S., 1945, p. 99. Miembro fundador de la Logia No. 44, creada en 1822 en la Villa de Concepción del Uruguay y a la que presidió por décadas. En 1831 se casó en segundas nupcias con Agustina Ortiz de Rosas, hermana de Juan Manuel de Rosas.

Jordán, natural de la Villa del Uruguay, era hermanastro de Francisco Ramírez, estaba casado con Josefa Cardoso, del pueblo de Nogoyá. Fue soldado del ejército patriota y comandante de milicias, adhiriendo tempranamente al movimiento artiguista para luego acompañar a Ramírez en su proyecto de construcción de un liderazgo regional, coincidente con la decadencia del jefe oriental Artigas.<sup>104</sup> Sus proyectos se oponían en tanto Mansilla, impulsor de la influencia porteña sobre Entre Ríos, contaba con fuerte apoyo de grupos políticos de la Villa del Paraná y en el caso de López Jordán, propiciaba una mayor autonomía de Entre Ríos junto con sectores ligados a familias fundadoras del Uruguay, entre ellas la de los Urquiza.

En la necesidad de formular un cuerpo legal de acuerdo a los nuevos principios ordenadores de la política, Lucio Mansilla valoró reglamentos previos del gobierno de Francisco Ramírez como base de la nueva Administración. El 29 de septiembre de 1820, Ramírez había creado por Bando a la República de Entre Ríos. Para organizar la gestión, mejorar el control y la distribución de autoridades políticas, militares, judiciales y de Hacienda, en suma, asegurar el dominio sobre todo el amplio territorio comprendido por Entre Ríos, Corrientes y las Misiones, dictó un Reglamento para el orden de sus Departamentos. Con ello decretó el cese formal de los tres Cabildos existentes en San Antonio de Gualeguay (en adelante Gualeguay), Villa del Uruguay y San José de Gualeguaychú (en adelante Gualeguaychú). En lo militar, dividió la jurisdicción en Departamentos regidos por comandantes con las más amplias atribuciones, quienes nombraban jueces mayores y menores para entender en causas de escasa importancia. Se dispuso que los Comandantes levantaran censos de los pobladores cada dos años y llevaran un registro de transeúntes cuya obligación para el libre desplazamiento era poseer un pasaporte y una licencia escrita; para la instrucción militar se asignó un campamento cerca de Gualeguay. En otro orden y tratando de recuperar hombres para el ejército, el Reglamento dispuso indultos para aquellos desertores que se presentaran espontáneamente. En cuanto al área económica, se creó el cargo de Ministro General de Hacienda que

---

<sup>104</sup> Datos biográficos Ricardo López Jordán: Calvento, M., 1940, T. II, p. 17; en Revista del Centro de Genealogía Entre Ríos, No. VIII, pp. 185-192. Archivo Ricardo López Jordán, Carp. 1, Leg. 1.

se ocupaba del cobro de las rentas y de su distribución, detallándose además el desenvolvimiento de cada ramo fiscal dentro de los registros que debía organizar. Una serie de recomendaciones pautaron el trabajo de los receptores de rentas de los pueblos, campaña y puertos. (Bosch, B. 1991: pp. 62-63; 1942: p. 60; Urquiza Almandoz O. 1978: pp. 326-327)

Pasada la agitación violenta del cambio de mando, fue necesario establecer rápidamente nuevas reglas pero, sobre todo, ejercer las atribuciones de gobierno con legitimidad y según las nuevas concepciones de la representación política. Mediante una Circular a las Comandancias departamentales, el gobernador provisorio convocó a la participación:

...solo falta que reunidos en Congreso los Diputados de los Pueblos elixan la persona que deba ocupar la silla del Gobierno; discutan sobre el arreglo interior de ella (la provincia) y finalmente, formen el código por el cual deban regirse. Para efectuarlo deberá V. dentro del tercero día de recibida ésta, hacer reunir en la plaza de ese pueblo á todos los abitantes de él y su jurisdicción para que libre y espontáneamente deleguen en su individuo su poder y su representación para los fines expuestos..<sup>105</sup>

Se pretendía nombrar legítimamente a la autoridad ejecutiva, discutir la organización interior de la provincia y formar el código por el cual regirse. La reunión de Diputados de los Pueblos en Congreso fue la vía para lograr estos objetivos. Lucio Mansilla fue electo gobernador el 10 de diciembre de 1821.

Una medida importante y aprobada por el Congreso provincial en febrero de 1822, fue la implementación de un Plan de División de los Departamentos provinciales<sup>106</sup> Tomando la antigua división departamental de la República entrerriana de Ramírez y basado en similares objetivos, dicho Plan fijó dos Departamentos Principales con cuatro Departamentos Subalternos cada uno, al

---

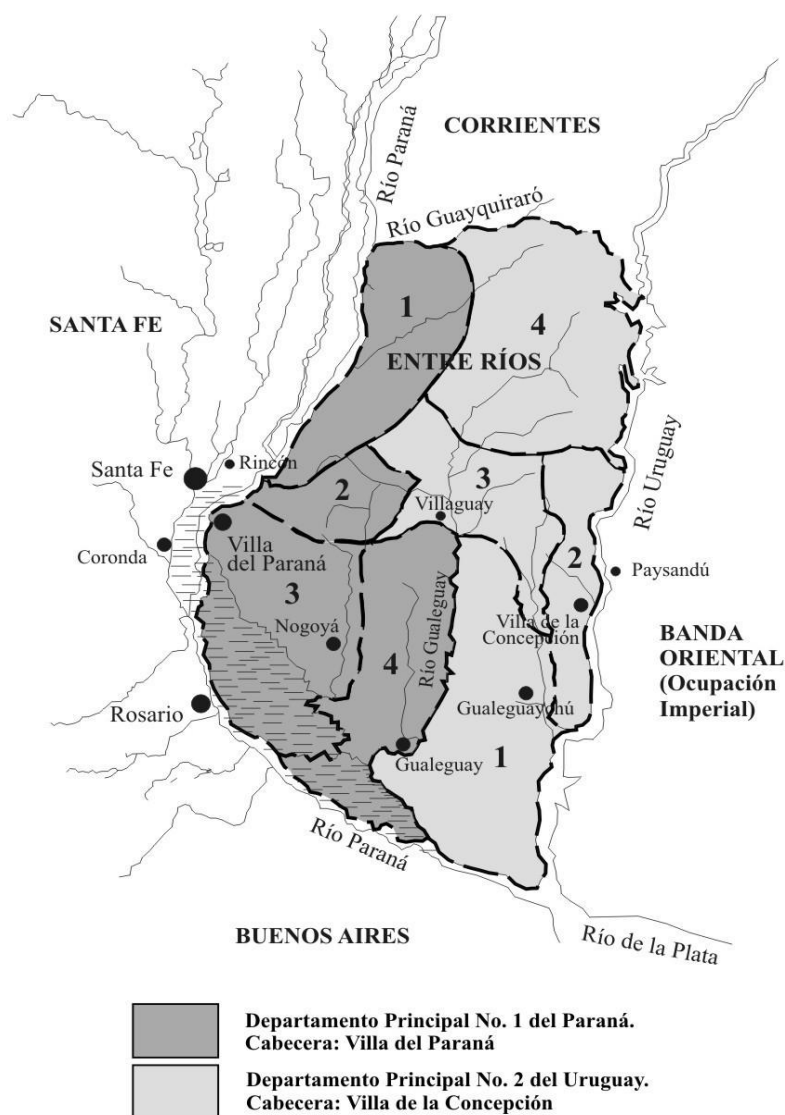
<sup>105</sup> AGPER, Libro 1º del Congreso de Entre Ríos, 1821-1824, fs. 5-6.

<sup>106</sup> RLDAPER, T. 1, pp. 89-101. *Dpto. Principal No. 1 del Paraná*. Cabecera: Villa del Paraná. Dptos. Subalternos: Dpto. No. 1: se compone de todo el territorio y poblaciones comprendidas desde el arroyo de las Conchas, Paraná arriba hasta el arroyo de la Mula. Dpto. No. 2: desde las Tunas hasta Maria Grande, incluso el Sauce, Espinillo, Quebracho y el Tala. Dpto. No. 3: desde el Paraná, Paraná abajo, hasta la barra de Nogoyá, y desde allí por sus fondos hasta las puntas de dicho Nogoyá, incluso el pago de D. Cristóbal. Dpto. No. 4: desde la barra del Nogoyá, Paraná abajo, hasta la barra de Gualeguay, y por sus fondos hasta dar con el arroyo de las Raíces.

*Dpto. Principal No. 2 del Uruguay*. Cabecera: Villa de la Concepción. Dpto. No. 1: desde la barra del Gualeguay, Paraná abajo, hasta la barra del Gualeguaychú, y por sus fondos hasta el Arroyo del Gená. Dpto. No. 2: desde la barra del Gualeguaychú, Uruguay arriba, hasta la barra del Yerúa, y por sus fondos, hasta las puntas del dicho Gualeguaychú. Dpto. No. 3: desde las Raíces hasta el Sauce de Luna; y desde los fondos de Villaguay hasta el Tigrecito. Dpto. No. 4: desde la barra del Yerúa, Uruguay arriba, hasta el Mocoretá; y por sus fondos hasta las Banderas, incluso el Chañar, Moreira, Las Yeguas y Ortiz. RLDAPER, T. I, pp. 91-92.

mando de Comandantes Generales y separados por el río Guauguay. El Dpto. Principal No. 1 del Paraná tenía cabecera en la Villa Capital del Paraná y el Dpto. Principal No. 2 del Uruguay, en la Villa del Uruguay. (Mapa No. 4).

**Mapa No. 4. Entre Ríos: Departamentos Principales y Subalternos 1822 <sup>107</sup>**



Elaboración propia en base a: Bosch, Beatriz *Historia de Entre Ríos*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1991

<sup>107</sup> En este mapa se marcan las distintas jurisdicciones departamentales solo a modo ilustrativo de acuerdo a lo determinado en el Plan de 1822. Cabe aclarar que estas jurisdicciones tal como se muestran en el mapa, no quieren representar entero dominio sino, por el contrario, los límites entre ellas fueron bastante difusos y en el caso de las áreas de frontera con otras entidades políticas externas, fueron vulneradas con bastante facilidad.

Como parte del Plan y a modo de Reglamento judicial, quedó establecido el número y clase de jueces departamentales con sus respectivas atribuciones. La creación de la Escribanía pública y de gobierno reflejaba también el afán por instaurar registros formales y sistemáticos de todas las acciones públicas y privadas. La creación de la Secretaría de Gobierno vino a cubrir un lugar de nexo entre el gobernador y la red de funcionarios pertenecientes a los Departamentos de Gobierno, Relaciones Exteriores, Hacienda y Guerra; a la antigua usanza de los lugares de privilegio de los Cabildos, se le asignó al Secretario un asiento en el Congreso o Sala de Representantes luego del Vicepresidente, pudiendo participar, a requerimiento de los Diputados o bien libremente, de las sesiones con voz pero sin voto. El primer Ministro Secretario fue el Dr. Pedro José Agrelo, completándose la unidad administrativa con dos Oficiales de despacho.<sup>108</sup>

El Estatuto Provisional Constitucional de Entre Ríos, sancionado y puesto en vigencia el 13 de marzo de 1822, luego de largas discusiones en el seno de ese Congreso, supuso un adelanto importante en la normativa provincial. Recién en 1861 se dictará una Ley de Elecciones específica.<sup>109</sup> Acorde a los resultados de nuestro análisis y a algunos testimonios de los contemporáneos que registraremos más adelante, lo instituido estatutariamente no fue una copia fiel de teorías puras y coherentes sino que estuvo marcado por una coexistencia de nuevos vocablos y nociones con tradiciones jurisdiccionales y disposiciones ambiguas e incompletas, percibiéndose algunos vacíos legales que fueron cubiertos a posteriori por leyes *ad hoc*.

Es de notar que el carácter de provisional o provisorio indicaba que no había proceso jurídico cerrado ni definitivo, que se estaba todavía en plena discusión sobre los sistemas políticos a fijar luego del quiebre colonial, en medio de la incertidumbre que generaba el proceso abierto de guerra independentista en Hispanoamérica. El término provisional no constituye una novedad local sino

---

<sup>108</sup> La Ley de creación de Escribanía pública fue dictada por el Congreso para facilitar la administración de justicia, asegurar los contratos de los “ciudadanos” y proveer los despachos oficiales. Se le encomendó al Escribano la formación de un registro público y depósito de documentos tales como contratos, ventas, poderes y testamentos, entre otros. RLDAPER, T. I, p. 119. Bosch Beatriz, 1942. p. 69. Creación Secretaría de Gobierno, RLDAPER, T.I. pp. 134-6.

<sup>109</sup> Estatuto Provisorio Constitucional de la Provincia de Entre Ríos, en RLDAPER, T. I, pp. 138-156. Ley Electoral de 1861, en AGPER Gobierno Serie VI “A”, Leyes y Decretos 1821 a 1910, Caja 7, Leg. 1.

un claro rasgo de época repetido en distintos cuerpos legales sancionados por los gobiernos centrales con sede en Buenos Aires en la década revolucionaria, luego por las soberanías provinciales en sus etapas iniciales<sup>110</sup>, no estando exentos de esta condición distintos reglamentos y constituciones sancionados en otros espacios hispanoamericanos que experimentaban la misma indefinición de sistema político y la expectación por los resultados de la guerra de Independencia.<sup>111</sup> Veamos, en este aspecto, como caracterizó la historiografía al período. Sobre el caso de los documentos legales provisorios emanados del poder central en Buenos Aires, esto que fue inicialmente visto como una incapacidad política es considerado por nuevos estudios como un verdadero estilo de gobierno: el Provisorio. El carácter de *provisionalidad permanente* fue extendido desde 1810 hasta la mitad del siglo XIX involucrando también a las provincias rioplatenses luego de 1820; en efecto, sus constituciones y estatutos fueron instrumentos de afirmación de su soberanía sin dejar clausurada la aspiración de conformar una unión supraprovincial en el futuro.<sup>112</sup> El carácter provisorio que les fue otorgado habilitaba a modificaciones prescriptivas y agregados *ad hoc*, atendiendo a la coyuntura, según el desarrollo de la realidad social y según el estado de las relaciones de poder. En este sentido, en 1828 el gobernador León Solas planteó ante el Congreso Provincial una modificación al Estatuto en lo referente al quórum del cuerpo; su fundamentación atendió a ese carácter provisorio en tanto

... en todos los Reinos y Repúblicas establecidas de tiempo inmemorial las L. L. (leges) se han ido formando sucesivamente según los sucesos y necesidades las han hecho precisas y urgentes, al paso que otras se iban derogando por haber pasado el tiempo de la ignorancia y que la inmoralidad iba destruyendo las

---

<sup>110</sup> Estatuto Provisorio de Santa Fe (1819); Reglamentos Provisorios Constitucionales de Corrientes (1821 y 1824); Estatuto Provisional Constitucional de Entre Ríos (1822). Ya avanzado el siglo XIX, todavía se discutía la condición de permanente o provisorio de las constituciones, en una persistencia de ambigüedad y tensión: “En 1846 el diputado Villegas, ante la tarea (...) de reformar el Reglamento Constitucional Provisorio, observó la contradicción de sentido que existía entre las expresiones “Constitucional”, que significa permanencia, y “Provisorio”, que da una idea de “cosa temporal”. Y solicitó que se formase “una constitución permanente de la provincia” en Goldman, Noemí “El concepto de ‘constitución’ en el Río de la plata (1750-1850)”, Revista *Araucaria*, Año 8, No. 17, Primer semestre de 2007.

<sup>111</sup> Por ej, en Buenos Aires los reglamentos de 1811 y 1817 más el estatuto de 1815; en Chile los reglamentos de 1811, 1812, 1814 y la Constitución de 1818; en Perú, el estatuto provisorio de 1821 sancionado por José de San Martín, fundamentando la condición provisorio en la espera de que se constituya autoridad central por la voluntad de los pueblos libres y se establezca una organización constitucional estatal permanente.

<sup>112</sup> Provisorio: véase Verdo, Geneviève, 2006, pp. 513-514; Provisionalidad permanente: Chiaramonte, 1997, p. 159 y ss.

costumbres groseras y causas por que se establecieron: ello es cierto que aun en el día se conoce la necesidad de su reforma tanto en el Código Civil como en el Criminal, todos los sabios modernos declaman justamente contra ellas; así pues no será extraño que conforme se presenten algún resquicio de luz al Gobierno lo ponga en consideración de la Legislatura de la Provincia para que con sus conocimientos se desarrolle y vaya poco a poco este nuevo Estado acopiando materiales que con el tiempo reunidos pueden formar sus leyes y organizar un nuevo reglamento o Estatuto propio y útil a esta provincia. RLDAPER, T. II, pp. 445-446.

Algunas investigaciones dedicadas a la historia entrerriana se han referido al origen del Estatuto Provisional de 1822 con evaluaciones y opiniones divididas. Por un lado, se ha afirmado que el gobernador santafesino Estanislao López de gran influencia sobre Lucio Mansilla, actuó en la redacción y brindó su consentimiento a la sanción, en un momento de estrechas relaciones de cooperación. Otra posición historiográfica que compartía esa situación de consentimiento desde la autoridad santafesina, agregaba que la verdadera influencia había sido la del Ministro de Gobierno de Buenos Aires Bernardino Rivadavia, quien había encarado una serie de reformas modernizadoras de la Administración encabezada por Martín Rodríguez, sustentada con ideas liberales; siguiendo la opinión de estos historiadores, el Secretario del Congreso provincial entrerriano y luego Ministro Secretario de la administración Mansilla, vinculado a Rivadavia, el Dr. Pedro José Agrelo, pudo ser su redactor.<sup>113</sup> Otras versiones indican que, a pedido de Mansilla, su autor fue Casiano Calderón, diputado del Congreso provincial que presentó el proyecto puesto a discusión y que Juan Bautista Alberdi<sup>114</sup> había considerado al Estatuto de Entre Ríos como una adaptación de la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, redactada por los congresales constituyentes de 1819 en Buenos Aires y con fuerte carácter unitario conservador.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, sin perjuicio del consentimiento dado por el gobernador López a su sanción y a partir de una confrontación con el Estatuto de Santa Fe de 1819, desestimamos la injerencia

---

<sup>113</sup> Leoncio Gianello, 1951, pp. 272-273. Leoncio Gianello y Antonio Sagarna adhieren a la última posición sobre la influencia rivadaviana. Las reformas en Buenos Aires se concentraron en el período 1821-1824, coincidente con el gobierno de Lucio Mansilla en Entre Ríos.

<sup>114</sup> Autor de "Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", publicadas en 1852 y que constituyeron el modelo para la Constitución Argentina dictada en 1853. En *Obras completas de Juan Bautista Alberdi*, Buenos Aires, Imp. Tribuna Nacional, 1886, Tomo V Fuentes del Derecho Público Provincial se refiere al tema. También se cita esta cuestión en Bosch, B. 1991, p. 79.



de López o sus asesores en su escritura, teniendo en cuenta las notables diferencias entre ambos documentos; el Estatuto de Entre Ríos no solo lo dobla en cantidad sino que se distingue también por su calidad prescriptiva y su complejidad, al lado del cual el cuerpo legal santafesino parece prácticamente rudimentario. El otro interrogante es ¿Quién o quiénes fueron los redactores? Sabemos, en general, que muchos intelectuales formados en universidades europeas o americanas como Chuquisaca, Córdoba o San Felipe en Chile, participaron vivamente en los debates políticos sobre las formas de gobierno y de nueva representación a través de diferentes vías, entre ellas la prensa, los Congresos y Asambleas, las asesorías letradas de los gobernadores y los cargos representativos o administrativos de distinta jerarquía.<sup>115</sup> El Escribano Casiano Calderón fue quien mocionó ante el Congreso para que se tratase el proyecto de Constitución,

...cuyo bosquejo se ofreció a presentar sobre los apuntes que tenía hechos para el efecto.<sup>116</sup>

Junto a Calderón, inferimos una posible intervención de Pedro Agrelo, abogado graduado en Chuquisaca, de quien destacamos su experiencia de Constituyente en la Asamblea de 1813 en Buenos Aires y su labor en la prensa porteña y entrerriana. En 1816, como Editor de *El Independiente*, aseguraba que

... una nueva lengua se ha introducido en todas las clases... (lo que permitía a las naciones entenderse por) haberse hablado durante veinticinco años por el órgano de la revolución (*francesa*)..<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Véase García de Saltor, Irene “Apuntes sobre los pueblos de la república. Caudillos y caudillos letrados. Adeodato de Gondra, Felipe Ibarra y Celedonio Gutiérrez”, en Sara Mata y Nidia Areces (Comps.) *Historia Regional. Estudios de casos y reflexiones teóricas*. Salta, CEPIHA, 2006, pp. 153 a 168. Podemos citar también a Pascual Echagüe, ministro y diputado de Santa Fe (Década de 1820) y gobernador de Entre Ríos (1832-1841); José María Paz, militar y gobernador de Córdoba (1829-1831); José García de Cossio, asesor del gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, entre otros. Ver Cocca Aldo *Los estudios universitarios del General Paz*, Cuadernos de Historia Argentina y Americana, Centro de Historia Mitre, Buenos Aires, 1946. Funes, José María (Dir.) *Papeles del General Echagüe*, AGPSF, Santa Fe, 1919.

<sup>116</sup> AGPER, Libro 1º del Congreso de Entre Ríos, 1821-1824, acta del 16/2/1822.

<sup>117</sup> *El Independiente*, Buenos Aires, 22/9/1816, el paréntesis y la cursiva pertenecen al original. Citado en Ternavasio, Marcela, 2007, p. 23. Las aclaraciones de la autora dan pautas de la formación y lecturas de Agrelo: dice que la última afirmación en el párrafo no era propia del Editor sino del abate De Pradt –crítico de la restauración monárquica y del sistema colonial español- de quien Agrelo era traductor y difusor de sus obras. Convencido al igual que De Pradt que la revolución francesa había creado la necesidad de hacer nacer constituciones por todas partes, sostenía que a través de distintas vías de recepción se habían formado “los espíritus y los han habituado a otras concepciones”.

Siguiendo con este ejercicio especulativo, podríamos fundamentar esa inferencia en la cercanía al círculo rivadaviano que Agrelo compartía con Mansilla<sup>118</sup>. Finalmente, no es un dato menor para cimentar esta posición el hecho de que al Estatuto, poco antes de su sanción, se le haya agregado en Apéndice las disposiciones con origen en dicha Asamblea de 1813: el Reglamento de Libertad de Imprenta –promulgado en 1811 y reconocido por la Asamblea- con algunas adaptaciones, el Reglamento de Educación y Ejercicio de los Libertos que fue complementado por el artículo estatutario No. 108 <sup>119</sup> y por la Ley del Congreso provincial sobre prohibición del tráfico de esclavos del 11 de marzo de 1822. De esa Asamblea también anexaron la declaración de uso de pabellón nacional en lugares públicos y a la que le agregaron la confección de un propio Sello provincial con las inscripciones “Provincia de Entre-Ríos” y “Unión, Libertad y Fuerza”.

Respecto a las consideraciones realizadas por Juan Bautista Alberdi acerca del Estatuto como adaptación de la Constitución de 1819, podemos acordar en general con ellas por nuestras propias comprobaciones y también afirmar que existen en el Estatuto disposiciones coincidentes con el Reglamento de Seguridad Individual de 1811, el Estatuto Provisorio de 1815 y el de 1817 sancionados por gobiernos centrales con sede en Buenos Aires. Estas afirmaciones se pueden ver corroborar en las mismas expresiones de los diputados en el Manifiesto público que anunció el Estatuto entrerriano ante los pueblos y habitantes de la provincia <sup>120</sup>:

Nosotros no hemos hecho más que recoger y acomodar á nuestras exigencias y circunstancias el resultado principal de las meditaciones de hombres superiores a nosotros, que han sido sancionadas desde mucho antes de ahora, promovidas

---

<sup>118</sup> Pedro J. Agrelo fue redactor de "La Gazeta de Buenos Aires"(1811) y El Independiente (1816), Presidente de la Asamblea Gral. Constituyente (1813) Redactor, junto a Domingo de Oro, del periódico entrerriano El Correo Ministerial (1821-1823). Profesor Cátedras de Economía política (1824) y Dro. Natural y de Gentes (1825-1829). Fiscal de Estado en Buenos Aires entendiendo en relaciones Iglesia y Estado (1834), cf. Chiaramonte, 1997, pp. 486-496.

<sup>119</sup> Art. 108 del Estatuto de 1822: La Provincia reconoce y ratifica todas las disposiciones que dió la Asamblea General del año 13, prohibiendo el tráfico de esclavos al territorio de la Union, y dando por libres á todos los que nacieren en él de la esclavatura existente desde el 31 de Enero de dicho año en adelante, los cuales se cumplirán religiosamente con las reformas y ampliaciones que se les harán, conforme á las circunstancias actuales por el Reglamento que so, agregará por apéndice de este Estatuto.

<sup>120</sup> RLDAPER, T. I, Manifiesto, pp. 136-138, en el Anexo Final.

y respetadas por las naciones y pueblos, cuya opulencia y engrandecimiento emulamos.<sup>121</sup>

Lo que hemos localizado son artículos tomados de manera prácticamente exacta o similar de esta Constitución de 1819 en lo referente a las Secciones: Formas de elección de diputados, Atribuciones del Congreso, Formación y sanción de las leyes, Naturaleza del Gobierno, Atribuciones del Gobierno, Derechos de la provincia, Derechos particulares, Reforma del Estatuto, Providencias Generales. No existe ninguna igualdad o similitud entre el Poder Judicial instituido en 1819 y el del Estatuto. El Reglamento de Justicia sancionado tres semanas antes por el Congreso Provincial<sup>122</sup>, fue ratificado constitucionalmente, adicionado como Apéndice y complementado con algunos artículos estatutarios sobre mecanismos de elección de alcaldes y jueces.

### **III.1.a. El derecho de Patronato.**

Es de notar que los articulados que refieren al ejercicio de Derecho de Patronato en la constitución de 1819 no son considerados en el Estatuto, haciendo solo mención a que la Provincia queda sujeta en lo espiritual y eclesiástico al Gobierno Episcopal de Buenos Aires. El Derecho de Patronato fue una prerrogativa del Estado sobre la Iglesia que, luego del cese del orden colonial, fue reasumido por los gobiernos centrales de Buenos Aires y luego de 1820, por los distintos Estados provinciales<sup>123</sup>; la justificación de esta reasunción

---

<sup>121</sup> Al respecto, Noemí Goldman ayuda a esclarecer estas expresiones desde la historia del lenguaje político: “El debate sobre la cuestión constitucional adquirió la forma de una disputa sobre cómo debía establecerse la correspondencia con los modelos. En este sentido, reconocer el carácter “mediador” de la cultura rioplatense... requirió pasar de una problemática de las influencias doctrinales a una de la traducción, al constatar que la apropiación de los modelos se presentaba bajo las formas de la “imitación”, la “adaptación” y la “combinación”. Asimismo, esta cultura se relacionó, por un lado, con las concepciones de lenguaje de la época y, por otro, con la indeterminación del sistema político” Goldman, Noemí “Formas de gobierno y opinión pública, o la disputa por la acepción de las palabras (1770-1830)” en Sabato H., Lettieri A., 2003, pp. 55-56.

<sup>122</sup> RLDAPER, T. 1, pp. 93 a 101. Reglamento 10 de febrero de 1822, aprobado por el Congreso Provincial junto con el Plan de división departamental de la provincia que formalizaba jurisdicción.

<sup>123</sup> El derecho de Real Patronato -con antecedentes medievales- fue otorgado por el Papa a los reyes de España en 1508, para ejercerlo en todas las iglesias y diócesis que se instalaran en tierras americanas, dado el compromiso de evangelización de las tierras de ultramar. El derecho consistía en que los reyes podían presentar ante autoridades religiosas a las personas que deseaban ver investidas de cargos eclesiásticos: obispos, canónigos y párrocos. Luego se les otorgó el derecho de cobro y administración de los diezmos para el sustento de la Iglesia. Lo central era que los reyes por hacerse cargo de la evangelización y de la creación y dotación de las iglesias, obtenían el derecho a decidir la erección de cualquier estructura eclesiástica y a

se basaba en que tal derecho había sido considerado como inherente a la soberanía en tiempos de los Borbones y, a partir de la época independiente, se estaba en condiciones de ejercerlo.

Siguiendo al parecer una tendencia secularizadora como la manifestada por Rivadavia en Buenos Aires, el gobierno de Mansilla suprimió los diezmos en febrero de 1823, reemplazándolo por donaciones voluntarias con fines religiosos, lo que fue puesto formamente a consideración de los diputados y aceptado de manera inmediata.<sup>124</sup> Si bien se abolía el diezmo, se lo reemplazaba por donaciones de particulares administradas por el Comandante y el Juez del Departamento correspondiente formados en Comisión, con el fin determinado de aportar a la Fábrica del Templo de la respectiva Villa o Curato cabecera, tal como veremos en el Cap. VIII. Es decir que el Estado seguía incidiendo en el soporte económico del culto y en ocasiones designaba curas interinos y propietarios dado que las relaciones con el Vaticano estaban cortadas desde la declaración de la Independencia<sup>125</sup>; se dependía del Gobierno Episcopal de Buenos Aires según había quedado estipulado en el Estatuto de 1822, pero en épocas de sede vacante, los gobiernos se atribuían la potestad de nombrar. En el gobierno posterior de León Solas sí se verá una aplicación de reformas parecidas a las implementadas por Rivadavia en Buenos Aires, sobre todo lo atinente al control de sacerdotes de órdenes regulares y su pase al clero secular, como también la prohibición del establecimiento de conventos y casas monásticas. Una causa de esta reacción pudo ser la alta politización del clero regular luego de 1810 en el Río de la Plata. Sus miembros se identificaron y actuaron activamente en el seno de distintas facciones; a la vez, su importante despliegue pastoral en el campo les permitía una mayor libertad y la posibilidad

---

presentar el personal destinado a servirla, empezando por los obispos, pieza clave de todo el sistema. El Patronato se ejercía en varios niveles, los reyes como depositarios del derecho eran los Patronos y, por delegación, los Virreyes se convertían en Vicepatronos. Cf. Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris *Historia de la Iglesia argentina, Desde la conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Grijalbo, 2000, Cap. I, apartado 1.

<sup>124</sup> RLDAPER, T. I, pp. 250-251, 256-257.

<sup>125</sup> AGPER, Gobierno, Serie IX, Mazo 1, Caja 1, Legajo 2. Comunicación de León Solas, 1824.

de entrar en contacto con los jefes locales y vecinos habilitados para la milicia.<sup>126</sup>

### III.1.b. La presentación del Estatuto: el Manifiesto y el juramento.

El Estatuto fue precedido por el Manifiesto dirigido a los “conciudadanos” firmado por los propios diputados del Congreso provincial. Sus aspectos más salientes traducen la necesidad de dar forma a la administración. La noción de administrar para la época se correspondía al acto de gobernar, de “cuidar la hacienda, la república”<sup>127</sup>, refiriéndose por un lado a la economía y por otro, no a la forma republicana de gobierno sino al vocablo república asociado al concepto de Estado, tal como se lo concebía en la filosofía política del siglo XVI: “un conjunto humano con un cierto orden y una cierta modalidad de mando y obediencia” (Chiaramonte J.C., 2004, p. 22) Por lo tanto, lo que se buscaba era regular las formas en que esa administración funcionaría y por ende, ese gobierno, lo que supone las *acciones* que efectúan pero también los *efectos* de esas mismas acciones sobre ese conjunto de hombres y mujeres, sus vidas y sus actividades (Barriera D., 2010, p. 13)

Por otra parte, se dejó asentada la intención de restaurar el orden, la dignidad y la libertad que, según sus apreciaciones, habían perdido en el período anterior tan conflictivo de la “República de Entre Ríos”, experiencia política liderada por Francisco Ramírez. Esta vocación de restituir la autoridad política en contextos violentos de redefinición política tanto en lo que atañe a las instituciones como a liderazgos, sería canalizada a través de un conjunto

---

<sup>126</sup> Bosch, B, 1978, p. 91. En Buenos Aires, el Ministro Rivadavia incluyó dentro de los sectores afectados por las reformas liberales y secularizadoras a las órdenes regulares, les confiscó sus bienes y sometió a todo el personal eclesiástico a las leyes de la magistratura civil. Con esto buscaba atenuar la progresiva relajación de la vida conventual acentuada con la politización que impuso la Revolución al interior del clero. En Ternavasio, Marcela “Las reformas rivadavianas en Buenos Aires y el Congreso General Constituyente (1820-1827) en Goldman N. (Dir.), Tomo III, cap. V, pp. 175-176. Para el caso de Santa Fe en 1815, hay antecedentes de expulsión de un grupo de frailes involucrados con los proyectos porteños de sojuzgamiento de la región en oposición a las aspiraciones autonómicas santafesinas. En López Rosas, J. R., 1968.

<sup>127</sup> Diccionarios Real Academia Española, edic. 1817 y 1822: se le agregaba en latín *gubernare*, *dirigere*. Darío Barriera considera de necesidad reflexionar sobre los sentidos otorgados por una comunidad al léxico asociado a cualquier experiencia y/o ámbito de conocimiento, en este caso el poder político; por ello, se interna en un interesante recorrido sobre voces referidas a la praxis política como: *institución*, *administración*, *gobierno*. Barriera, Darío G. (Dir.), 2010, Introducción, pp. 11-15.

normativo explícitamente encuadrado en el “espíritu constitucional tan generalizado en estos últimos tiempos”, conjunto que no era invento según aseguraron y que, por el contrario, tuvo en cuenta que no parecía haber ruta nueva alguna que descubrir en esta materia. Unido a esto, demostraban las expectativas de que su cumplimiento traería una paz inalterable y en consecuencia, prosperidad y adelantamiento para la sociedad. La reunión de las leyes en un cuerpo coherente pretendía además evitar la multiplicación y superposición de normas que solo traían confusión e ineficacia en su implementación. Estas nociones de Constitución están reflejadas en otros Manifiestos precedentes a cuerpos constitucionales de la época.<sup>128</sup>

En una minuta de comunicación adicional, el Congreso dispuso la publicación del Estatuto y su solemne juramento el día 25 de mayo, fecha conmemorativa de la revolución de 1810 y la posterior constitución de la Primera Junta Provisional en Buenos Aires. Pero los Diputados se mostraron preocupados porque aún no se había jurado la formal independencia del Río de la Plata respecto de la antigua metrópoli y de todo otro poder extranjero, como ya había sucedido en las otras provincias, máxime en tiempos en que todavía la presencia realista era fuerte en Quito y el Alto Perú y no se había producido una victoria concluyente sobre ella. Aprovechando esta circunstancia, agregaron a la fórmula del juramento una declaración expresa acerca del sostén, promoción y defensa de la Independencia, que excedía el provincialismo y extendía la mirada al contexto mayor del proceso político rioplatense.<sup>129</sup> Este juramento fue pospuesto para el 16 de junio a causa de una conspiración gestada por jefes militares partidarios de Ricardo López Jordán, el gobernador depuesto por Mansilla en 1821. (Bosch, 1991: p. 80).

### **III.1.c. Las disposiciones estatutarias: gobierno, representación, ciudadanía.**

A partir del Estatuto, tal como lo establecía el artículo 1º, se constituyó un “formal Estado y Gobierno representativo independiente” que era parte

---

<sup>128</sup> Sobre el Manifiesto del Deán Funes precedente a la Constitución de 1819, cf. Verdo, Geneviève, 2006, pp. 526-527, 531-532; Manifiesto del Gob. López precedente al Estatuto Provisorio de Santa Fe, 1819. AGPSF, *Papeles de Estanislao López*, T. 1, (1804-1819), 1ra. Serie, Santa Fe, 1976. Documento: 26 de agosto de 1819.

<sup>129</sup> RLDAPER, T. I, pp. 157-159.

integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dejando abierta la posibilidad de una reunión supraprovincial que podía adoptar la forma de un Congreso “Nacional”. Esta declaración no fue aislada sino coincidente con las formulaciones de los demás Estados provinciales, creados luego de la supresión del Directorio y la caída del Congreso Constituyente en 1820, en las cuales fijaban las prerrogativas inherentes a la condición de soberanía que se adjudicaban y el interés por mantener algún vínculo de tipo confederal. Un primer análisis del texto nos confirma la circulación de ciertos principios liberales y del constitucionalismo republicano, no estando ausentes distintas premisas del derecho natural, especialmente en la sección dedicada a los derechos particulares y la subsistencia de antiguas normas del derecho español y del derecho revolucionario. Lo liberal, según estudios sobre historia conceptual, tenía una ambigüedad en el uso que lo remitía a antiguos significados morales y a otros en nueva clave política.<sup>130</sup>

La Administración del Estado quedó compuesta por un Congreso de Diputados Representantes con facultades legislativas, un gobernador electo por el Congreso como “Poder Ejecutivo” y Jefe Superior militar que duraría 2 años y por los Jueces y Tribunales de Justicia.<sup>131</sup> La Villa Capital del Paraná quedó como sede de las autoridades legislativas y ejecutivas, estando los Jueces repartidos en distintos pueblos. Es importante advertir que, para los diputados, se instauró la condición de inmunidad por la cual no podían ser arrestados ni procesados durante su asistencia a la Legislatura salvo en actos criminales, tampoco molestados por sus discursos y opiniones. Esta condición de inmunidad no es un aporte original de los redactores sino que tiene antecedentes en la Constitución francesa de 1791 y en la de Cádiz 1812, más aún esa instauración en el Estatuto de Entre Ríos reproduce casi literalmente un artículo de la citada

---

<sup>130</sup> Fabio Wasserman afirma que, en la colonia el término liberal era mayormente empleado para calificar a un sujeto como pródigo, generoso o dadivoso aunque mesurado. Sin perder esa connotación, la revolución le incorporó motivos políticos e ideológicos que lo dotaron de mayor densidad conceptual. Es posible que la vaguedad del término, sumada a las valencias positivas del mismo, provenientes de su uso en clave moral, haya facilitado su circulación. En Wasserman, F. “Liberal/Liberalismo”, en Noemí Goldman (Ed.), 2008, pp. 67-82. Otros trabajos que intentan clarificar usos de este vocabulario político son Goldman, N. “¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo?” y Fernández Sebastián, Javier “El historiador ante la conmemoración histórica. *República y Liberalismo desde la historia conceptual*” *Jornada Internacional de Debate Los Historiadores y la Conmemoración del Bicentenario*, Parque España, Rosario, 2006.

<sup>131</sup> Estatuto Provisional de 1822, Sección 1ª, arts. 4 a 7.

Constitución de 1819.<sup>132</sup> Por otra parte, el Cuerpo representativo se reservó el derecho de expulsión decidido por voto unánime así como el de recibir y aceptar renunciaciones de sus miembros.

De manera notable en la opinión de la prensa porteña, concretamente en “El Correo de las Provincias”, la experiencia entrerriana era auspiciosa en tanto presentaba división de poderes y ejercía una representación debidamente legitimada por la obediencia y el respeto de la población:

ENTRE RÍOS. Es también una de las que contrajeron la unión o alianza cuadrilátera. Después de haber sido despedazada por la guerra civil de la que la hicieron teatro las aspiraciones, las intrigas y el desorden: después de que se prestó inocente a derramar su sangre por intereses depravados, de algunos intrigantes, expurgados todos, su misma ignorancia y proximidad al estado de naturaleza, la ha puesto en actitud de formarse.

Sin obstáculos que vencer, nada de aristocracia, pues no conoce clases; sin un sistema de sociedades de regulares, de que a otras naciones y provincias les cuesta tanto trabajos y esfuerzos el libertarse; sin una multitud de empleados que recargan a la sociedad con su desocupada vanidad y lujo, se la ve salir de la nada para establecerse bajo formas e instituciones, aunque provisionales; pero bastante regulares. Tiene divididos los poderes y una representación que ha obtenido el respeto y obediencia debidos. Empiezan ya los entrerrianos a gustar del imperio de las leyes y las formas sociales.<sup>133</sup>

El sistema institucional concebido como aceptable y reconocido en el Río de la Plata pos independiente, según se desprende de esta página periodística, debía tener la capacidad de anular las acciones políticas del poder militar, mantener los límites establecidos para los poderes asegurando su ejercicio libre e independiente y evitar la usurpación o confusión de funciones porque lesionaba no solamente derechos inalienables de los ciudadanos sino la propia supervivencia del sistema. Una tarea propagandística que era impulsada desde Buenos Aires hacia el Interior e incluso Montevideo, hasta donde llegaba la venta de ejemplares de este periódico, para mostrar a Entre Ríos como un ejemplo de orden, adelantamiento y paz interior en contraste con los perjuicios que habían traído los enfrentamientos civiles y militares de la década de 1810.<sup>134</sup> Como ya señalamos, los gobiernos de Lucio Mansilla y Martín Rodríguez mantenían muy buenas relaciones. La estrategia porteña, puesta en práctica para captar y

---

<sup>132</sup> Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica de 1819, Sección III, art. 27.

<sup>133</sup> *El Correo de las Provincias*. Reproducción Simil-Tipográfica, No. 1, 19 de noviembre de 1822, fs. 9076-9077. Redacción: Fortunato Lemoyne.

<sup>134</sup> Cf. *El Correo de las Provincias*, No. 1 del 19 de noviembre de 1822, No. 10 del 20 de febrero de 1823, No. 11 del 27 de febrero 1823. Fs. 9076-9077, 9203-9204, 9213-9214.



mantener la alianza con Entre Ríos, era muy visible en esas ponderaciones públicas, en la influencia ejercida sobre su administración y en los importantes préstamos otorgados a su Tesorería, sobre los que nos referiremos pormenorizadamente en los Caps. VII y VIII.

Examinando el extenso articulado del Estatuto, podemos observar cómo se plasmaron las bases legales y legítimas del poder político, los procedimientos electorales, las condiciones de ciudadanía, la formalización de la jurisdicción, la estructura de gobierno con cargos, requisitos y atribuciones, el establecimiento de derechos particulares, entre otras cuestiones. Un Cuerpo legal con derechos y obligaciones, con atributos y privilegios para el *ciudadano* constituido en el nuevo sujeto político, vocablo del nuevo lenguaje reiteradamente expuesto en esta llamada Ley Fundamental. ¿Con qué se llenaba de sentido al ciudadano en una sociedad marcada por lo estamental? Pues, trasladándole las características coloniales del vecino sobre todo en las prácticas, tal como lo han comprobado otros estudios al respecto sobre el mismo período para áreas iberoamericanas.<sup>135</sup> La condición de vecino, constituida como forma identitaria reconocida por el propio sujeto y por el resto del conjunto social, alcanzaba a todo aquel que poseía casa y arraigo en una comunidad, ciertos privilegios y obligaciones y al que se lo asociaba a conductas virtuosas, a sanos y rectos principios. La ciudadanía se perdía si se era deudor del erario y era suspendida en aquellos que se encontraban bajo proceso judicial. La condición de ciudadano no alcanzaba a los dementes, los esclavos y los niños que no tuvieran la edad de 18 años cumplidos. Esta barrera etaria era el punto de inflexión en la capacidad de consentir, de contraer una obligación con uso de razón y poder de discernimiento que había determinado la legislación entrerriana, no siempre coincidente en otras legislaciones hispanoamericanas e incluso del mundo

---

<sup>135</sup> Por ejemplo, en Sábato, Hilda (coord.) 1999, los trabajos sobre México y el Río de la Plata lo demuestran. En el Epílogo de este libro, Gonzalo Sánchez Gómez destaca que la categoría *ciudadano* en su forma inicial no apunta en la América hispana a una comunidad de iguales (como fue la usanza a partir de la Revolución francesa) sino a un campo de privilegios, de vínculos corporativos y por lo tanto de jerarquías.

occidental.<sup>136</sup> Esa capacidad se podía proyectar en distintos aspectos de la vida social, por ejemplo los pactos y contratos civiles y ciertos derechos políticos.

La categoría de ciudadanía por naturalización también estaba contemplada. Si bien los antecedentes se remontan al derecho romano, la carta de naturaleza otorgada por el rey era un mecanismo concreto conocido y aplicado en España y todos sus dominios. Después de la revolución la Asamblea General de 1813, inspirada en la Constitución gaditana, estableció el derecho de una ciudadanía peculiar distinta de la española, propia de quienes habían nacido en América o se habían hecho dignos “a la gratitud americana” por servicios efectivos prestados a la causa general de la revolución y la independencia; un derecho que se solicitaba de manera intencional y voluntaria.<sup>137</sup> En Entre Ríos, el Estatuto de 1822 en la Sección 12º que estipulaba las condiciones generales de ciudadanía, estableció la competencia del gobierno en el otorgamiento de tal privilegio –así lo llamó- tanto a españoles como a los demás extranjeros; ser ciudadano naturalizado habilitaba al voto activo. En el caso del voto pasivo, recién podían ejercer el derecho a ser elegido luego de cumplir 10 años de la obtención de la carta, dando lugar a excepciones si algún mérito particular lo permitía.<sup>138</sup> El antecedente legal emanado de la Asamblea de 1813 fue reconocido para acreditar antigüedad de ciudadanía y poder ampliar derechos políticos a españoles que habían demostrado capacidad administrativa y adhesión a los intereses revolucionarios y autonómicos. Tal es el caso del catalán Juan Garrigó, al que la Asamblea le había otorgado su carta en 1813 por

---

<sup>136</sup> Según Samuel von Puffendorf, uno de los teóricos más reconocidos del derecho natural, “para poder dar claro consentimiento se requiere el uso de la razón en el sentido de que uno comprenda el asunto de que se trata, si es justo para uno y si uno puede cumplirlo; y luego, una vez analizados estos puntos, si uno puede o está en condiciones de indicar su consentimiento con los signos o medios suficientes. De ello se deduce que las promesas o pactos de los niños... sean nulos”. “...en cuanto a los niños, por lo general no se puede definir con exactitud, cuánto tiempo dura esa debilidad de criterio, que les impide contraer una obligación ya que su poder de discernimiento se alcanza en algunos casos muy pronto y en otros, más lentamente. Este aspecto deberá observarse en las actitudes diarias de cada niño. Y no obstante ello, en la mayoría de los Estados las leyes civiles han fijado ciertos límites de tiempo.” Puffendorf S., 1980, T. I, Cap. IX, pp. 109-111.

<sup>137</sup> Salvatto, Fabricio y Banzato, Guillermo “Poderes locales y gobierno central ante el cambio de régimen en Buenos Aires: Cartas de ciudadanía, cargos públicos y práctica de oficios, 1812-1815” VII Jornadas de Historia y Cultura de América, 25/26/JUL/13. Acceso: [http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art\\_revistas/pr.2518/pr.2518.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2518/pr.2518.pdf) (Consulta 14/7/2014).

<sup>138</sup> Sobre este importante tema, en Santa Fe se legisló más tarde haciendo intervenir al Gobernador y a la Junta de Representantes en el otorgamiento. Registro Oficial Provincia de Santa Fe, La Revolución, 1888, Tomo I, pp. 174, 188-189.

los servicios prestados a la causa revolucionaria y por el adelanto experimentado en sus empresas comerciales e industriales. En efecto, Garrigó firmó un documento de adhesión al gobierno patriota, en tiempos en que se desempeñaba como Alcalde de Hermandad de la Bajada del Paraná; además, contribuyó con hombres y recursos a la campaña al Paraguay comandada por Manuel Belgrano y ejerció la función de Comisario de Guerra en el ejército revolucionario que combatía a la flota española en el río Paraná. Instalado en la Bajada del Paraná desde 1809, era un vecino acaudalado, poseía establecimientos de cal y productos de la tierra con una expansión comercial regional importante.<sup>139</sup> Todos estos precedentes sumado a que había sido Secretario del Congreso provincial en 1821 y electo diputado por la provincia para discutir el Tratado del Cuadrilátero, fueron suficientes para que el Congreso entrerriano, en junio de 1822, considerara cumplidos los 10 años de obtención de la carta de ciudadanía y habilitara a Garrigó a ejercer el voto activo y pasivo. Además de su adhesión política, se ponderó su residencia estable, consecuente arraigo y reputación social reconocida. Es decir que la calidad de *ciudadano* se asentaba, de manera importante, sobre atributos de vecindad.<sup>140</sup>

En 1822, una ley específica de naturalización fue aprobada por los diputados provinciales reunidos en Cuerpo. En su articulado se enfatizó sobre la necesidad de que sean los jueces del distrito de residencia los que corroboren los servicios prestados a la causa provincial por aquellos extranjeros pretendientes de ese derecho; contrariamente al proyecto de ley elevado por el gobernador, los diputados prescribieron de manera tajante que los nuevos ciudadanos solo podrían acceder a empleos de segundo rango y nunca a las diputaciones de la Legislatura. En 1826, la flexibilización de esta norma fue originada por la escasez de personas idóneas para el funcionariado de segunda

---

<sup>139</sup> Arce, Facundo "Don Juan Garrigó" en Investigaciones y Ensayos, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, Nos. 6 y 7, 1969, pp. 89-97.

<sup>140</sup> En su estudio sobre Mendoza, Hernán Bransboin analiza la cuestión de la naturalización en oportunidad de un conflicto suscitado por el enrolamiento de los chilenos en las fuerzas provinciales sin ser ciudadanos mendocinos. En el discurso de los funcionarios, Bransboin hace notar muy bien que la esfera determinante para establecer la ciudadanía es el juicio de la comunidad, a la que se pretende pertenecer, sobre la reputación del individuo. No se remite al ciudadano moderno, sino que en realidad estipula la vecindad de un sujeto y, por lo tanto, "las obligaciones y derechos" a los que los vecinos están sujetos. Bransboin, H. Tesis Doctoral inédita citada, 2012, pp. 263-264.

clase. Por tanto la carta de ciudadanía no se consideró imprescindible para ocupar cargos de este tipo. Esta flexibilización solo fue circunstancial pues la Ley Fundamental de 1822 no podía tener variaciones definitivas.<sup>141</sup> Un caso notable fue el del francés Juan Lanús. En 1825, su petición fue tratada por el Congreso; los diputados se informaron de que el peticionante ya tenía carta de naturalización extendida por el Congreso Constituyente de Buenos Aires, pero el otorgamiento no fue dado por este antecedente sino por haberse corroborado “su patriotismo y decisión por la causa de la Libertad contra los opresores”, constatado en sus auxilios contra los contrarrevolucionarios de Montevideo en 1811 y su honradez como funcionario de Hacienda de la Caja del Uruguay. Por ello se le expidió carta como ciudadano americano en la provincia de Entre Ríos, “americano por el país de su adopción y perteneciente a la sociedad americana”. En 1831 se destacan dos casos recomendados por el Gobierno provincial. Al español José María Uzin y al inglés Guillermo Taylor - Alcalde de Cuartel de Gualeguaychú y nombrado Representante de la Honorable Asamblea General- se les concedió el título de Ciudadanos, incorporándose a

la sociedad americana... reconociendo la soberanía de las Provincias reunidas en Congreso General y la de Entre Ríos, no obedecer otras autoridades que la que emanan de ella y resistir con las armas cualquiera agresión que se intente contra ella por cualquiera otra Nación Extranjera..

Los diputados consideraron que las cartas eran un “testimonio del aprecio que se merecen todos los extranjeros virtuosos que sean inequívocamente por la Libertad y Felicidad de América”, los declaró ciudadanos americanos en la provincia de Entre Ríos y los constituyó en la posesión de sus derechos y prerrogativas.<sup>142</sup> Una forma de identidad política que recuperaba la americanidad tan presente en el período de guerras de independencia y que con el proceso desatado por los autonomismos de principios de los años ´20 había sido desplazada por la provincial y la rioplatense (Chiaramonte J.C., 1989, pp. 71-92). Podemos inferir que esa recuperación de la identidad americana en sentido de hispanoamericana tiene el objetivo de distinguirse de la identidad lusoamericana a partir de la guerra librada contra el Brasil.

---

<sup>141</sup> RLDAPER, T. I, p. 182, 323-326. T. II, p. 101-102. AGPER, Libro 2 del Congreso de Entre Ríos, Decreto, fs. 36-37.

<sup>142</sup> AGPER, Libro 2 del Congreso de Entre Ríos, fs. 18-19 y Libro 4, fs. 97, 111-112.

La noción de vecino, ciudadano pero también la de *súbdito* subsiste en ciertas relaciones políticas de dependencia, recuperando un imaginario imperial no totalmente suprimido por el proceso independentista. En 1828 Pedro Barrenechea, gobernador delegado de León Solas, no se atribuyó potestad de decidir sobre una demanda del Congreso Provincial en tanto

...no está suficientemente facultado por VE para resolver en un caso tal como el que se presenta hoy como **sudito** que depende del Ejecutivo pide orden oficial a VE para resolver con acierto... así es que siempre solicito instrucciones, pero hoy se bé en la necesidad de segundar su solicitud a VE y de este modo marchar siempre con acierto y buena adición con que toda vez lo hizo en obsequio de su Patria y bien general de ella...<sup>143</sup>

### III.1.d. La Justicia.

Retornando a la letra del Estatuto las Providencias generales, enunciadas al final, destacan una cuestión muy interesante que también estaba presente en el reglamento judicial de febrero de 1822: la continuación de la vigencia de leyes generales que hasta ese momento regían en tanto no estuviesen revocadas, alteradas ni contradijeran al Estatuto, afirmaba la vocación de “Estado independiente” y establecía la supremacía estatutaria. Es decir que la decisión local en el campo normativo se afirmaba por sobre toda otra reglamentación de origen colonial o revolucionario, constituyéndose en un fuerte indicio de soberanía e independencia del estado provincial entrerriano, al menos en teoría<sup>144</sup>. Más aún en 1826, sesionando el Congreso General Constituyente en Buenos Aires, los diputados con Fray Francisco Álvarez a la cabeza recomendaron al gobernador León Solas, cumplir con disposiciones emanadas de ese Congreso “siempre que ellas dejen a salvo las atribuciones de la Ley fundamental de la Provincia”.<sup>145</sup>

El Reglamento de Justicia de febrero de 1822 dictado por el primer Congreso constituido, que fuera agregado al Estatuto, designó al gobernador como Justicia de última instancia, con la atribución de nombrar a los jueces y

---

<sup>143</sup> AGPER, Gobierno Serie I, Carpeta 16, Leg. 3, f. 103. El Gob. Delegado Pedro Barrenechea al Gob. Delegado León Solas, Paraná, 30/10/1828. (Subrayado nuestro)

<sup>144</sup> El Estatuto de Santa Fe (1819) y la Constitución de Córdoba (1821) realizan la misma salvedad.

<sup>145</sup> RLDAPER, T. II, pp. 105-106.

conmutar penas o indultar penas capitales. Además, estableció número y clase de jueces, facultades, alcance de los juicios de 1º y 2º Instancia en causas civiles, ejecutivas y criminales y sus respectivos procedimientos.<sup>146</sup> La base de la administración de justicia conservó rasgos coloniales con las denominaciones de funcionarios, las funciones elementales de justicia y la capacidad de los Alcaldes para disponer de partidas armadas de vecinos o milicianos en caso de que fuera necesario al cumplimiento de sus facultades.<sup>147</sup>

Los cambios más notorios, expresados estatutariamente, tuvieron que ver con los requisitos para el nombramiento, el modo de elección, la duración en el cargo y algunas funciones correspondientes a los nuevos tiempos políticos. Para ser Alcalde era menester ser del fuero común, excluyendo a militares veteranos y en servicio, con 25 años de edad, ciudadanía americana, vecino, hacendado o con capital propio, profesión y oficio útil, en suma, las mismas características pedidas para quienes aspiraban a ser Diputados del Congreso provincial con lo cual se jerarquizaba el cargo equiparándolo a un representante político. El nombramiento era realizado por el propio gobernador, por el término de dos años, coincidente con el período del “Poder Ejecutivo”. Una Ley anterior de enero de 1822, sujeta al Estatuto que estaba previsto formularse, sostenía que los modos populares de elección de los Alcaldes, según se acostumbraba, no siempre garantizaban el acceso a personas comprometidas con el orden y la libertad por lo cual se lo autorizaba al gobernador para efectuar los nombramientos. El pasaje de una elección popular, de la que no conocemos aún sus características, a una elección sujeta a la máxima autoridad del gobierno implica el control de quienes impartirían justicia e inferimos que tendrían un incidencia como autoridades de mesa en los actos electorales de diputados... un control de individuos que se trasladaría a un control en todo caso del proceso electoral en que estos funcionarios presidirían los actos y habrían de asegurar la calidad y cumplimiento de requisitos de los representantes al Congreso.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Para cada una de las dos Villas se designaron un alcalde Mayor y cuatro alcaldes de cuartel, alcaldes de Hermandad para la campaña en cada Departamento. RLDAPER, “Plan de división de los Departamentos de esta Provincia de Entre Ríos”, T. I, pp. 91-92, 89-101.

<sup>147</sup> Zorraquín Becú, Ricardo *La justicia capitular durante la dominación española*, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, 1947, pp. 19-32.

<sup>148</sup> LEY disponiendo que mientras se dicta el Estatuto Constitucional, el nombramiento de los Alcaldes Ordinarios y de Barrio los haga el Gobernador de la Provincia. “...Siendo entre todo

Por otra parte, el Reglamento de febrero ya advertía que en causas civiles y criminales se debía acompañar el dictamen de un letrado y en el caso de juicios ejecutivos de bienes, se solicitaba la intervención de peritos de tasación. De todos modos, pese a que en el art. 91 del Estatuto se establecía la delegación del ejercicio de los tres poderes en representantes y magistrados siempre que lo ejercieran en la forma dispuesta y con independencia recíproca, no podríamos aún visualizar a la Justicia como el tercer Poder del Estado independiente del Ejecutivo y de la Legislatura en los años que comprende este estudio. Legalmente el Ejecutivo ejercía la última instancia en materia judicial criminal de 2da. Instancia y militar, además de sugerir consulta de parte de los jueces ante dudas de aplicación de la jurisdicción civil o criminal. Las disputas internas por el poder, en un contexto regional convulsionado, fueron motores centrales de inestabilidad política. Ante este contexto y en la necesidad de fortalecer a la autoridad Ejecutiva, el cargo de gobernador fue dotado varias veces de facultades extraordinarias lo que implicó también un avance en el campo de la justicia, aspectos que analizamos en el Capítulo VI.<sup>149</sup>

¿Cómo se consideran a los jueces y alcaldes? “Ciudadanos que en servicio público emplean los talentos y usos”, “funcionarios públicos que cumplen las leyes y sostienen ilesos los derechos de los ciudadanos”<sup>150</sup> De modo que estos jueces y alcaldes eran agentes de un servicio público, no tenían

---

preciso precaver los abusos introducidos en las elecciones populares, en las que regularmente han sido electos para estos cargos los hombres más enemigos de la libertad de América, arrogándose ellos mismos un voto que no tenían ni podían tener por la Ley, prevalidos de la prudencia y moderación característica de los hijos del país. Por todo lo cual, y para evitar los referidos abusos de un modo indirecto, consultando los derechos de los ciudadanos y la mejor administración de justicia, ha acordado el decreto siguiente: Hasta tanto se dicta el Estatuto Constitucional que disponga el modo y forma de hacerse en lo sucesivo la elección de Alcaldes Ordinarios y de Barrio, el Gobernador de la Provincia queda autorizado para su nombramiento a los sujetos más aptos a su juicio para el desempeño de sus respectivas funciones por su capacidad, patriotismo y decisión por la causa del orden y de la libertad que se ha restablecido, de modo que los ciudadanos sean oídos y despachados en justicia lo más breve que sea posible en sus demandas particulares...” RLDAPER, T. I, p. 63, Paraná, 9/1/1822.

149 Estatuto Provisional de 1822, Sección 8ª, Art. 81: Confirma ó revoca, con arreglo á las ordenanzas, y la calidad de por ahora, conforme á la reserva de los artículos 69 y 74 de esta Sección, las sentencias de los reos militares pronunciadas en los Tribunales de su fuero. Reglamento de Justicia de 1822, Art. 46: Confirmada la sentencia, se pasarán los autos al Gobierno Superior, sin cuyo último cúmplase, no se ejecutará pena alguna en la Provincia. RLDAPER, T. II, pp. 252-253: Decreto Creación de Juzgados del Crimen, emitido por el Gob. Mateo García de Zúñiga en uso de facultades extraordinarias. Para un análisis en clave de independencia de la justicia respecto del Ejecutivo, pero para un período posterior al de esta investigación, Cf. Pressel, Griselda, 2010, pp. 201-206.

<sup>150</sup> RLDAPER, T. III, pp. 293-294.

atribuciones de declarar inconstitucionalidad de las leyes ni de examinar la constitucionalidad de un acto administrativo o legislativo, como sucedía por ejemplo en Estados Unidos de América. Según estudios constitucionalistas, los debates sobre estas atribuciones estuvieron presentes en la Convención Constituyente de Filadelfia. Si bien en la Constitución de 1787 la potestad de control estaba implícita, fue a partir de 1803 cuando el Presidente de la Corte Suprema, John Marshall, dictó una sentencia aplicando la Judicial Review con lo cual, en adelante quedó establecido el control de constitucionalidad de las leyes basado en el principio del control judicial. Esta atribución le otorgó poder político a los jueces y en consecuencia, un poder de sustancia análoga al Ejecutivo y a la Legislatura.<sup>151</sup>

Pero la importancia de esta cuestión en orden a caracterizar la naturaleza de la organización político-institucional entrerriana amerita, en una futura investigación, profundizar un poco más en los aportes del derecho comparado y fundamentalmente en un análisis exhaustivo de las mismas prácticas judiciales.

---

<sup>151</sup> Vanossi, Jorge “La Corte Suprema: ¿Tribunal o Poder?” en *Universidad*, No. 79, Santa Fe, UNL, 1979, pp. 559-583. Puppio, Agustín F. “Los sistemas de control de constitucionalidad contemporáneos: configuración, rasgos fundamentales y perspectivas” en Molero Martín-Salas M.P., Martín Sánchez M., Díaz Revorio, J (Coords.) *Reflexiones sobre Justicia constitucional en Latinoamérica*, Vol. 139 Colec. Estudios, Univ de Castilla La Mancha, 2013, pp. 35-68. Acceso: [http://books.google.com.ar/books?id=y\\_48AgAAQBAJ&pg=PA7&dq=judicial+review+vanossi&hl=es&source=gbs\\_toc\\_r&cad=3#v=onepage&q=judicial%20review%20vanossi&f=false](http://books.google.com.ar/books?id=y_48AgAAQBAJ&pg=PA7&dq=judicial+review+vanossi&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=judicial%20review%20vanossi&f=false). (Consulta: 4/11/2014).



#### **Capítulo IV. EL ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS: LA ELECCIÓN COMO VÍA LEGITIMADORA DE LA AUTORIDAD.**

La determinación de la política entrerriana de constituir un “Gobierno representativo”, hecha explícita en el Estatuto Provisorio de 1822, tiene que explicarse en el desarrollo de la cultura política y en las posibilidades de concreción no solo a partir de los fundamentos de esa constitución sino también de los mecanismos que se implementaron para darle carácter representativo. Dicha explicación cobra sentido en el campo de la representación política, con sus propiedades, contradicciones, decisiones de base legal o índole pragmática y sus efectos; nuestro propósito específico aquí es examinar la elección como vía legitimadora de autoridad y sus mecanismos de implementación.

La legitimidad como fundamento jurídico de titularidad del poder y como requisito alcanzado por la existencia de consenso o adhesión por parte de la comunidad política es un atributo del nuevo sistema político representativo.<sup>152</sup> Según Bernard Manin, la institución central del gobierno representativo es la elección. El acto de elegir es la fuente de legitimidad política.<sup>153</sup> La elección de los representantes que otorgaba legitimidad de origen desplazó, entonces, al principio de la herencia en esa función y descartó al sorteo general como dispositivo de selección, muy usual en las sociedades antiguas y medievales. Por otra parte, ese principio de consentimiento que fuera formulado en Roma dentro del dominio del derecho privado y extendido a lo público en la tradición medieval y en las teorías racionalistas del derecho natural con sus variaciones en tiempo y espacio, implicaba el grado de consenso necesario para garantizar obediencia a los gobernantes por él ungidos; una implicación que afectaba directamente a las condiciones de gobernabilidad. El vehículo de ese principio fue la elección, sostenido teóricamente en los derechos inherentes al ser humano e inalienables como la libertad y la igualdad y en el derecho de elegir a sus gobernantes y dictar sus propias leyes. Esta convención que daba sustento legítimo al poder político, fue reglamentada en sus alcances y procedimientos

---

<sup>152</sup> Bobbio Norberto, Mateucci Nicola, Pasquino Gianfranco, *Diccionario de Política*, Tomo L-Z, 20º. Edición en español, México, 2000.

<sup>153</sup> Manin, B. 1998, pp. 108-109. Añade Manin: "Esta creencia de que el consentimiento constituye la única fuente de autoridad legítima y la base de la obligación política fue compartida por todos los teóricos del derecho natural, desde Grocio a Rousseau, Incluyendo a Hobbes, Pufendorf y Locke."

para lograr un proceso electoral válido. Un proceso que, generalmente, presentaba en su desarrollo no pocas tensiones entre la ley y la praxis.<sup>154</sup>

El papel y las características de los procesos electorales decimonónicos en los espacios políticos latinoamericanos fueron objeto de largos debates académicos, partiendo de la revisión de premisas tradicionales y subvalorativas que afirmaban que las elecciones allí practicadas estaban llenas de anomalías y por lo tanto se las consideraba inválidas; estos planteos fueron consecuentes con la aplicación extemporánea de paradigmas liberales consolidados a fines del siglo XIX y en el siglo XX. Farsa electoral, fachada representativa, falta de real competencia por el poder eran elementos que integraban las viejas matrices interpretativas. Los resultados obtenidos, desde las nuevas reflexiones y enfoques, rescatan las lógicas de los procesos relacionadas a la creación de una cultura cívico-electoral y a la constitución de sistemas de partidos. Sin lugar a dudas, los procesos electorales tienen enormes potencialidades para dar respuesta a los interrogantes abiertos en torno a la construcción del poder político. Se reconocen a estos mecanismos como ciertos indicios de la imbricación entre la tradición de “constitución antigua” y el cambio propuesto desde las concepciones liberales.<sup>155</sup> A fin de observar la disputa, el acuerdo, la reproducción del poder político a través de las elecciones, se necesita estudiar más las prácticas en perspectiva comparada por varias razones: para medir mejor su relación con la norma, para observar cambios y permanencias en la cultura política como también decisiones pragmáticas, de coyuntura o respondiendo a cuestiones estructurales.

#### **IV.1. Elecciones de diputados provinciales.**

Luego de la revolución de 1810 y ante la caducidad de la monarquía, se hizo necesario dotar de legitimidad al nuevo poder. Las elecciones periódicas

---

<sup>154</sup> Manin, B. 1998. pp. 7, 55 a 64. Cap. II El triunfo de la elección, Apartado: El triunfo de la elección: consentir el poder en vez de ocupar cargos. Chiaramonte, J. C. 2002, pp. 21-43.

<sup>155</sup> Cf. Sábato H, Ternavasio M, de Privitellio L, Persello A. V. 2011; Annino A. 2004 y 1995; Sábato H. y Lettieri A. (Comp.), 2003. En el mismo sentido, los trabajos compilados por Carlos Malamud en 1995 usan la comparación de las experiencias político-electorales de España y América Latina, aplicando conceptos de la Ciencia Política, Malamud, C. (Ed) *“Partidos políticos y elecciones en América Latina y la península ibérica, 1830-1930”*, Papeles de Trabajo, Vol. I, Inst. Ortega y Gasset, Madrid, 1995.

fueron el mecanismo adoptado para conformar las juntas de gobierno y congresos; se contaba en la práctica con los antecedentes de las elecciones de capitulares instauradas durante la colonia en la América española, si bien este tipo de elecciones se asentaba sobre mecanismos jerárquicos y de cooptación.<sup>156</sup> En estos comienzos del régimen representativo la normativa tuvo sus bases en disposiciones españolas como la Ordenanza de 1809 que reglaba la elección de diputados a Cortes de Cádiz. Las mismas fueron recogidas por los Estatutos revolucionarios de 1815 y 1817 y difundidas en la jurisdicción rioplatense. La dinámica política en términos de estructura institucional y de representación política que nos interesa abordar para Entre Ríos tuvo también esas influencias, concretamente en los mecanismos de acceso a los cargos de diputados en la periodización escogida, entre 1821 y 1831. El Congreso provincial se fue conformando mediante actos eleccionarios siguiendo pautas estatutarias, las que experimentaron algunas modificaciones y precisiones posteriores. Estos acontecimientos políticos periódicos debieron transformar la vida cotidiana de los habitantes de los pueblos y campaña; a través de la reunión en lugares públicos, el acto electoral tuvo visos de ritual en el que las tradiciones, lo simbólico, el nuevo lenguaje político, las prácticas urbanas y rurales confluyeron, entre otros elementos, para dotar de sentido a una instancia fundante de esa sociedad política.

#### **IV.1.a. Legislación electoral**

¿Cuáles fueron las reglas electorales establecidas en Entre Ríos en 1822? En principio, se fijó una elección de tipo indirecto para Diputados; en ella podían participar con derecho de voto pasivo y activo, los ciudadanos como sujetos de representación, noción que remite a la antigua representación de *vecino* como ya lo advertimos oportunamente. Es de destacar que se inhabilitaba

---

<sup>156</sup> Como antecedente en los Entre-ríos, el Libro del Cabildo de la Villa de San José de Guleguaychú entre 1787–1811 muestra suficientes evidencias de esta forma de elección capitular. Obispado de Guleguaychú, Inst. “Sedes Sapientiae”, Transcripción Libro de Acuerdos, 2010.

para el voto pasivo a los militares de cuerpos de veteranos y que estuvieran en servicio activo.<sup>157</sup> (Sábato, Ternavasio, De Privitellio, Persello, 2011).

La modalidad del voto variaba según los contextos y las propias experiencias históricas locales. En algunas provincias rioplatenses, esa definición por voto directo o voto indirecto suscitó interesantes debates y argumentaciones. En Buenos Aires, la Ley electoral de 1821 instauró el voto directo. La Comisión redactora de la Ley destacó particularmente esa innovación como remedio al faccionalismo de la década anterior producido, según su opinión, por las elecciones indirectas. En su argumentación para suprimir los colegios electores, se apoyaba expresamente en las teorías políticas de autores europeos que defendían el voto directo como Benjamín Constant; en la prensa se ponderaba este avance en la representación política citando a las experiencias inglesa y estadounidense como ejemplos a seguir.<sup>158</sup>

El Estatuto santafesino de 1819 implantó el régimen de voto directo para los diputados a la Representación provincial que fue respetado en la práctica. Lo mismo se estableció en el Reglamento provisional de Salta de 1821 y en la Carta de Mayo, puesta en vigencia en San Juan en 1825. Hacia 1824, la Sala de representantes de Salta debatió en torno a la elección de diputados al Congreso Constituyente en Buenos Aires, circunstancia que solo interesa aquí para esclarecer las nociones de las distintas modalidades de voto que circulaban en el seno de la Sala salteña. Los defensores del voto directo consideraban que esta forma expresaba claramente la voluntad general de la Provincia, detractando al voto indirecto porque los elegidos resultaban del arbitrio y la voluntad de terceros que, raramente, conformaban la voluntad de los “principales delegantes”. Los

---

<sup>157</sup> RLDAPER, T. I, Comunicación del 28 de octubre de 1821.

<sup>158</sup> Ternavasio, M. 2002: pp. 86-89. Esta obra contiene una cita del periódico El Centinela, diciembre de 1822: “Diferentes leyes de elecciones se han dictado en el curso de la revolución; más solamente una, esto es la que actualmente rige, sancionada en el año de 1821, es la que ha puesto al pueblo en el pleno goce de su derecho de elegir, porque según dicha ley ninguna voluntad intermedia se interpone entre la del pueblo y el cuerpo representativo –quiere decir que la elección es directa como en los Estados Unidos- Este gran paso dado a favor de la mayor seguridad y acierto en las elecciones populares ha puesto al pueblo a cubierto de las pretensiones de los facciosos recopilados en las Juntas Electorales, para hacer o la voluntad de sus patronos, a quienes podían venderse porque eran pocos, o cuando mucho favor se les haga, la suya propia con abandono total de la voluntad de sus comitentes.” Para las fundamentaciones sobre las ventajas del voto directo, Constant, Benjamin, Principios de Política en *Escritos políticos*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, Cap. I De la acción humana, p. 39 y Cap. V De la elección de las asambleas representativas, pp. 45-58.

defensores del voto indirecto criticaban a la modalidad directa porque alimentaba el faccionalismo, experiencia al parecer contraria a la registrada en Buenos Aires; la elección de segundo grado tenía la virtud de asegurar “el voto más recto y sano de la parte sensata que no se contaminó con las facciones” y por ello era recomendable. En cambio, el Reglamento constitucional de Corrientes de 1824 implantó el régimen de voto indirecto. Igualmente el de Córdoba de 1821, modalidad que se mantuvo en sus sucesivas reformas; en este Reglamento se estableció la forma indirecta en dos grados: el primero de las Asambleas Primarias para designar electores quienes se reunían en la capital provincial como Asamblea Electoral para poner en práctica el segundo grado: la elección de los diputados a la Sala de Representantes.<sup>159</sup>

En otros sistemas político-institucionales de Iberoamérica, el voto se articuló predominantemente en torno a elecciones indirectas de segundo y hasta tercer grado para los representantes. La Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que conservaba el influjo de la Constitución gaditana de 1812, fijó la elección indirecta de diputados en su art. 16, modalidad que recién en 1857 se cambiaría a directa. También en 1824, en el Imperio del Brasil se promulgó una Constitución que instituyó la misma forma de voto a diputados a la Câmara Nacional, modificándose este régimen a voto directo en 1881.<sup>160</sup>

En el Estatuto de Entre Ríos, al igual que en otras constituciones contemporáneas, el voto femenino no fue prohibido explícitamente ni tampoco hubo reclamos para que se lo instaurara. Antonio Annino lo hace notar como un rasgo del voto decimonónico y lo justifica basándose en los aceptados cánones

---

<sup>159</sup> La Carta de Mayo fue una declaración de derechos del hombre inspirándose en las cartas de los Estados de América del Norte; no era una constitución ni organizaba o reglamentaba poderes de gobierno los que habían sido creado y regulados por actos legislativos y ejecutivos desde 1820, pero fue un documento de base para afrontar nuevos tiempos políticos, Dana Montañó, Salvador *Las primeras constituciones de las provincias de Cuyo*, Best Hnos., 1938, p. 100. Para Salta: Marchioni, Marcelo, “Cabildos, territorios y representación política. De la Intendencia a la provincia de Salta (1810-1825)” en *Cuadernos de Trabajo*, Centro de Inv. Históricas, Dpto. Humanidades y Artes, Serie Investigaciones, Nº 15. UNLan, Lanús, 2008; para Córdoba, Romano, Silvia “Las nuevas fuentes de legitimación del poder y sus protagonistas en la configuración del sistema republicano y representativo en la provincia de Córdoba (1821-1855)” en César Tcach (coord) *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea*, Córdoba, Edit. UNC-CEA, 2010, pp. 15-35, Acceso: <http://historiapolitica.com>, Dossier. (Consulta 22/8/2012).

<sup>160</sup> Graham, Richard “Formando un gobierno central: las elecciones y el orden monárquico en el Brasil del siglo XIX” en Annino, A. 1995: pp. 356-364.

sociales de la época en que las mujeres eran parte del *cuerpo* familiar, supeditadas a la potestad del *pater familiae*, quien ejercía la representación del grupo (Annino, 2003: p. 48). Por otra parte, recordemos que la suspensión de ciudadanía tenía por límite los 18 años cumplidos, consecuentemente a partir de esa edad se ponía en acto el ejercicio de derechos particulares y políticos con ciertas excepciones. Este límite de edad no se correspondía con el impuesto para alistarse al ejército mediante la leva que era de 15 años; o sea que la capacidad para el servicio militar se diferenciaba de la capacidad para ejercer un derecho político que, en esencia, se pensaba como un derecho que requería un grado mayor de madurez y poder de discernimiento por la importancia del asunto.<sup>161</sup> Estos requisitos de edad presentaron variaciones provinciales fundamentadas en persistencia de legislaciones anteriores o coyunturas políticas que hacían necesario ampliar el universo de los votantes. Por ejemplo, en Corrientes se mantuvo la edad de 25 años, según permitía el Estatuto revolucionario de 1815; en Buenos Aires la Ley electoral de 1821 instauró un voto amplio sin exclusión por criterios asociados a profesión, niveles de riqueza o de instrucción, pudiendo votar todos los hombres libres; respecto a la edad de habilitación para votar bajó de 25 a 20 años. El Reglamento de elecciones de Tucumán, sancionado en 1826, adoptó este mismo límite de edad o desde que se contara con la condición de emancipado.<sup>162</sup>

Los candidatos a Diputados debían satisfacer los siguientes requerimientos: 25 años cumplidos, ciudadano natural o americano, vecino con capital u oficio, fuero común y sin dependencia de servicio o sueldo del gobierno, es decir un sujeto de representación que era definido entre otras cosas, con un criterio censitario y de independencia tanto de las corporaciones como de otro poder dentro del Estado.<sup>163</sup> El principio de rotación y alternancia en los cargos

---

<sup>161</sup> RLDAPER, T. II, pp.198-199. En 1827 se baja a la edad de 14 años, T. II, p. 246.

<sup>162</sup> Corrientes: Reglamento Constitucional 1824; Buenos Aires: Ternavasio, 2002: p. 84; Abbate, Georgina La participación política en la construcción del orden: representación política y elecciones (Tucumán en tiempos de Alejandro Heredia, 1832-1838) en Mata Sara, Areces Nidia (Comps) *Historia Regional. Estudios de caso y reflexiones teóricas*, Salta, UNSA, 2006, pp. 181-198

<sup>163</sup> La relación entre diputados y fueros fue objeto de una ardua discusión en el Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires en 1824. El diputado Gorriti adujo que los representantes no debían gozar de fueros especiales para evitar la influencia que harían siempre estas prerrogativas inherentes a los cuerpos de la sociedad y para que no se dicten leyes parciales. En Ravignani, Emilio *Asambleas Constituyentes Argentinas*, T. 3ro, p. 995.

que, en la teoría política, garantizaba una apertura del círculo del poder evitando posibles enquistamientos fue una condición relativizada legalmente, permitiendo la reelección perpetua de los diputados “mientras gusten los pueblos reelegirlos”.

En cuanto a la importante cuestión de la representación territorial, que reflejaba el reparto del poder político en la jurisdicción, es conocido que en las Salas o Congresos provinciales rioplatenses, hubo criterios variables para su fijación; éstos no tenían que ver precisamente con el principio racional de la soberanía del número que implicaba una igualdad política para todos, existente solo en la teoría. En efecto, esa distribución era uno de los elementos que podía distanciarse de las leyes fundamentales y estar sujeto a modificaciones, por ejemplo en función de necesidades políticas y/o intereses económicos. Es así que la ciudad podía tener primacía en detrimento de la campaña, como en Santa Fe o lo contrario como sucedió en Tucumán y Salta o bien, cambiando de manera alternada de acuerdo a las necesidades de ciertos proyectos políticos como en Buenos Aires. (Sábato, Ternavasio, De Privitellio, Persello, 2011: pp. 52-53)

La organización territorial de las elecciones quedó establecida según el Plan de División de los departamentos provinciales de 1822. La representación territorial contempló un diputado por cada pueblo principal para conformar la Sala: uno por la Villa Capital de Nuestra Señora del Rosario del Paraná, uno por la Villa principal del Uruguay, uno por el pueblo de Nogoyá, uno por el pueblo de Gualeguay y uno por el pueblo de Gualeguaychú, en total 5 diputados.

En 1828, el Congreso sancionó una Ley duplicando el número de representantes por cada pueblo, fundado en la necesidad de dar a la Sala

...mayor aumento de luces y más fuerza moral; como igualmente remover obstáculos que se han presentado repetidas veces en sus deliberaciones...

En la composición de la Sala del año 1829 se comprueba la existencia de 10 diputados pero en 1831, ante las dificultades para cumplir la ley de duplicación, se la derogó retornando a 5 diputados, la original composición numérica de la Sala.<sup>164</sup> Si bien hay paridad representativa entre los cinco

---

<sup>164</sup> RLDAPER, T. II, pp. 424-425; T. III, pp. 287-288.

núcleos urbanos principales, las diferencias están dadas al momento de integrar la Junta electoral en cada uno de los cinco distritos; los electores, elegidos popularmente como era de costumbre y habilitados para la diputación si cumplían los requisitos, representaban por mayoría a las Villas y pueblos principales, teniendo sus propias jurisdicciones de campaña una representación menor. Puntualizamos aquí que la noción de *pueblo* refiere a lo grupal y cada diputado representará al estamento villa o pueblo como cuerpo o comunidad política, pueblo como cuerpo moral, con clara entidad corporativa. Nótese que para la experiencia entrerriana los pueblos están equiparados en la representación a las Villas/Ciudades, lo cual implica que comienza una reformulación del antiguo ordenamiento estamental hispano cuando la Villa/Ciudad tenía preponderancia por sobre los otros pueblos. (Chiaramonte et al., 1995; Chiaramonte en Sábato, H. (Coord..) 1999: pp. 114-116).

La representación territorial en la fase de asamblea primaria, establecida en el Art. 19º del Estatuto, mostró una desigualdad entre jurisdicciones departamentales y entre ámbito urbano y rural. Así fue que el Departamento I Principal del Paraná sumaba 18 electores - Villa del Paraná 4 y su campaña 4, Pueblo de Nogoyá 3 y su campaña 2, Pueblo de Gualeguay 3 y su campaña 2-. El Departamento II Principal del Uruguay sumaba 15 electores -Villa del Uruguay 4 y su campaña 6, Gualeguaychú 4 y su campaña 1-. Si bien el Departamento I era el más poblado, estas diferencias no tendrían que ver con la densidad demográfica ni con la soberanía del número, quizás sí con el mayor peso político del grupo de Paraná, al menos para principios de la década del '20. Si consideramos que los ordenamientos provisionales revolucionarios de 1815 y 1817 establecían el número de electores según el total de población, con un elector por cada 5.000 habitantes, este criterio no se aplicó en el Estatuto entrerriano teniendo en cuenta las cifras disponibles del Censo general de 1820.<sup>165</sup> Estas circunscripciones electorales basadas en divisiones departamentales no eran coincidentes con la división administrativa colonial del “partido” o con circunscripciones religiosas como “parroquia” o “curato” que

---

<sup>165</sup> Estatuto provisional de 1815 y Reglamento provisorio de 1817, en sus Cap. IV, art. 3 “En cada sección darán su voto los sufragantes por tanto número de electores cuantos correspondan al total de la población, de suerte que resulte un elector por cada cinco mil almas...”. Las cifras del Censo de 1820 ya registradas en el Capítulo II, apartado II.5.a.



aparecían en otros documentos legales o se ponían en práctica en otras provincias.<sup>166</sup> En la práctica, notamos que solamente para la Villa Capital de Paraná las secciones electorales se constituyeron sobre la división cívico-militar colonial de cuarteles.

El mecanismo de convocatoria presentaba la siguiente secuencia: el Congreso provincial con los diputados salientes ordenaba al gobernador el llamado a elecciones por renovación legal bianual o para reemplazo de diputados que, por distintas razones, abandonaban el Cuerpo; según el Estatuto, la citación la giraba el gobernador por medio de una Circular a los Comandantes Departamentales. El Acta de la elección debía contener la especificación de votos, el resultado por mayoría basada en la pluralidad de sufragios y las firmas tanto de electores como de autoridades de la Junta; esta Junta Electoral según el art. 30 del Estatuto automáticamente quedaba disuelta una vez comunicada y verificada la elección. Sin embargo, como ocurrió en 1826, la necesidad de tratar asuntos urgentes a quórum completo provocó una excepción a esa disposición estatutaria; en efecto, ante la renuncia de un diputado y la demora en convocar a elecciones por parte del gobernador, el Congreso habilitó por decreto a los electores que habían hecho la última elección para que procedan a designar un nuevo representante.<sup>167</sup> Continuando con los procedimientos electorales, el Diputado electo recibía el Acta más los certificados de electores dándole aviso al Comandante para que el Gobierno conozca lo acontecido. Esta documentación oficiaba de credencial para la ceremonia de asunción quedando en manos del Congreso la verificación de cumplimientos legales, la aprobación, impugnación o rechazo. Así, se reservaba

---

<sup>166</sup> Cf. Tio Vallejo G., 2001, pp. 246-249, Ternavasio M. "Nuevo régimen representativo y expansión de la frontera política. Las elecciones en el estado de Buenos Aires: 1820-1840" en Annino, 1995, p. 82. En Salta, la denominación curato fue paulatinamente abandonada y reemplazada por la de departamento pero la participación e injerencia de los clérigos en los procesos electorales y su presencia en los cargos electivos permitieron por algún tiempo asimilar al departamento con el curato y a la ciudadanía con la feligresía, en Marchioni, M. 2008. Apartado: Ciudades y Cabildos en la conformación territorial y política de la Provincia, acceso: <http://historiapolitica.com>, Dossier, 30/8/2012. La parroquia como circunscripción eclesiástica asimilada a circunscripción electoral tiene antecedentes en la Constitución de Cádiz de 1812 Sección III que circuló en el Río de la Plata, esa misma denominación se registra como sección electoral en el Estatuto Provisional de 1815; el curato está contemplado con esa función en el Estatuto Provisional de 1817 y en la Constitución de 1819 dictada por el Congreso Constituyente en Buenos Aires.

<sup>167</sup> RLDAPER, T. II, pp. 161-162, 165-168.

la última instancia de legitimación del electo, un espacio en que los gobernantes, pretendieron incidir, en ciertas ocasiones, sin resultado positivo.<sup>168</sup>

Algunos de los requisitos que aparecen más evidentemente controlados fueron: el cumplimiento de la pluralidad de votos de electores para definir el resultado electoral, la condición de fuero común necesaria para habilitar la elección del diputado, la prohibición de tener servicio a sueldo dependiente del Gobierno y algunas cuestiones formales como falta de documentación acreditativa de los electores.

En 1822, se anuló la elección de Lucas Antonio Mansilla como diputado por Gualeguay por contravención del Estatuto en su Art. 26, dado que no había obtenido la pluralidad de votos; ordenada nuevamente la elección, Mansilla fue electo sin objeciones para el período 1823-1824 renovando su cargo en el bienio siguiente.<sup>169</sup> En 1826, un diputado electo por el Uruguay no pudo asumir por ser deudor del Estado, razón por la cual se le suspendió la ciudadanía según la norma estatutaria. En 1829 Gerónimo Mendieta, electo por Gualeguay, fue rechazado con el argumento de ser servidor a sueldo del Gobierno. No obstante, asumió luego de que el gobierno aclarara debidamente que no recibía asignación por ser Maestro de Posta de la carrera del Uruguay sino para gastos de funcionamiento. Por su parte, Diego Miranda electo por Gualeguaychú vio demorada su incorporación puesto que el acta electoral no iba acompañada por el certificado de los electores emitido por el Comandante militar.<sup>170</sup>

En 1824, se propuso la cancelación del requisito de fuero común, fundándose en la necesidad de disponer de algunos aforados que podrían ser útiles a la discusión por sus “luces”. Finalmente, no se consideró “prudente hacer novedad” modificando el Estatuto y quedó su tratamiento para más adelante sin que se volviera sobre el tema en los Acuerdos del período estudiado.<sup>171</sup> Sin embargo, esa flexibilización de requisitos, considerada y formalmente no aceptada en 1824, fue empleada en la práctica. Prueba de ello fue que el Deán Francisco Dionisio Álvarez, con experiencia de Secretario del Congreso entre

---

<sup>168</sup> RLDAPER, T. III, pp. 21-30, 70-71.

<sup>169</sup> RLDAPER, T. III, pp. 203-204.

<sup>170</sup> RLDAPER, T. III, pp. 27, 32-33, 69, 145. AGPER, Libro 1 Bis Congreso de Entre Ríos, f. 40

<sup>171</sup> AGPER, Libro 1º del Congreso de Entre Ríos, 1821-1824, f. 244.

1823 y 1824, integró el cuerpo representativo en 1826 por el término de tres meses, para luego incorporarse a la Secretaría de Gobierno provincial. En ese mismo año, la elección del Reverendo Padre Fray José Manuel Funes como diputado por Gualeguaychú<sup>172</sup>, fue convalidada sin objeciones y su cargo duró por todo el bienio. Desde 1828, el control sobre la condición foral eclesiástica fue más estricto. Por ello, el propio Congreso rechazó en pleno a los diputados electos Juan José Castañer –Presbítero y Vicario del Uruguay- y José Leonardo Acevedo –Presbítero en el Dpto. 3 del Departamento Principal I-. En sus motivos, los diputados del Congreso privilegiaron la atención de los curatos y de sus feligreses por parte de los sacerdotes.<sup>173</sup>

En Santa Fe, los diputados no podían tener fuero eclesiástico en tanto la pertenencia a la iglesia impedía mezclarse en negocios seculares; no obstante, los curas participaron de las instituciones civiles como representantes, como asesores institucionales y como diplomáticos. En 1828 el cura Nicasio Romero, elegido diputado por el Departamento de Coronda, al momento de jurar y ante el requerimiento expreso de la Junta, solicitó el allanamiento de su fuero al Cura de la Iglesia Matriz lo que le fue concedido; esa variación fue suficiente para su aceptación. Al parecer ese renunciamento no hizo que la incompatibilidad desaparezca aunque es posible que otorgara cierta garantía de acción política sin el peso del fuero religioso. Romero hizo su juramento *in verbo Sacerdoti* con lo cual le daba un valor muy alto a su asunción, comprometiendo en la labor su condición de tal.<sup>174</sup> Por su parte, en Corrientes esta cuestión de diputados aforados eclesiásticos no fue una preocupación, por el contrario en el Reglamento constitucional provisorio de 1824, Sección III Asambleas Electorales, art. 12, se estableció que el diputado al Congreso provincial habría de ser del fuero común o eclesiástico secular.

---

<sup>172</sup> RLDAPER, T. II, pp. 101-102, 156-157. La Junta Electoral que eligió a Funes redactó las Instrucciones para su labor en el Congreso Provincial, AGPER, Gob. Serie V, Caja 1, Leg. 13, 419-423.

<sup>173</sup> RLDAPER, T. II, pp. 379-383.

<sup>174</sup> Esta fórmula completa, común en la colonia y en el siglo XIX, era “*in verbo Sacerdoti tacto pectore*” o sea “bajo palabra de sacerdote con la mano en el pecho”. Agradezco la información a Roberto Di Stéfano.

#### **IV.1.b. Las prácticas electorales.**

El impacto de los actos electorales en la vida cotidiana de las villas, los pueblos y el campo pudo transcurrir entre la indiferencia y la curiosidad de algunos sectores y la participación activa de otros. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo acercarnos al grado de pulsión electoral? Los preparativos de la convocatoria, las movilizaciones, las representaciones del acto en el imaginario popular, las disputas por candidaturas, la recepción de los resultados son estadios del proceso electoral cuya indagación nos puede informar sobre la riqueza de esa experiencia y acercarnos a vívidas imágenes. Pero esa indagación necesita no solamente de evidencias que emanen del gobierno sino esencialmente de la prensa, pasquines, padrones electorales, memorias, documentos no oficiales que arrojen cifras concretas de sujetos habilitados o que refieran a una sociabilidad política organizada, a detalles comiciales o a posibles tensiones y conflictos por porciones de poder que no se ven reflejados en la producción escrita de los funcionarios. La insuficiencia o inexistencia de estas evidencias para las experiencias políticas en estudio implicó una lectura más densa de las fuentes oficiales y aún así, una ponderación bastante dificultosa del acto de votar. La búsqueda de testimonios periodísticos ha resultado nula; las páginas de El Correo Ministerial no registran nada de estos eventos eleccionarios y del periódico El Grito Entre – riano, de corta aparición durante el año 1827, no han quedado rastros. Un silencio de voces en el debate público que sí están presentes en otras realidades históricas, testimonios conservados que permiten aproximarse mejor a esa pulsión electoral demostrado esto en estudios específicos como los de Buenos Aires.<sup>175</sup> La identificación parcial del universo de participantes y la detección de redes de relación operantes en la votación proporcionaron algunos elementos para reconstruir la movilización social que sostenía esta institución central del gobierno representativo.

¿Qué nos dicen las actas electorales? Si bien las regulaciones en materia electoral importan en tanto es el marco legal en que se ciñe la legitimación de acceso a cargos, es necesario introducirnos en las prácticas de estos actores y

---

<sup>175</sup> Andreeto, M. A., 2009, Vol. IV, p. 20. La prensa política abundó en Buenos Aires ya desde la revolución y se multiplicó en las décadas siguientes. El Centinela, El Argos, La Argentina, El Argentino, El Lucero, El Nacional, La Espada argentina fueron canales de lucha facciosa y movilización electoral.

observar el grado de formalización y de cumplimiento de estas instancias tan importantes para la vida política de la época. Los testimonios documentales son escasos, aún así el hallazgo de dos tipos de actas electorales nos permiten analizar momentos clave del proceso: la instancia preestatutaria de elección combinada indirecta -o de segundo grado- y directa de diputado al Congreso provincial y la instancia de elección indirecta de Diputado en una reunión de electores, en plena vigencia del Estatuto. Examinaremos las elecciones de diputados de 1821, 1825 y 1827, además de las de electores para crear una Comisión Eventual encargada de revisar remoción de diputados en 1829.<sup>176</sup> Si bien esta última elección es de distinta naturaleza que las anteriores, nos da pautas para observar otra fase de la convocatoria bajo el principio de soberanía popular para remover o ratificar a los diputados por los propios electores “mandantes” y por ello es importante incorporarla al análisis.<sup>177</sup>

La elección de 1821 en la Villa del Uruguay, cabecera del Departamento II Principal, combinó la elección indirecta en los distritos rurales como Palmar, Arroyo Grande, Tala, Costa del Gualeguaychú, Las Moscas, Villaguay y Mandisoví con la elección directa de “la parte más sana y principal de este pueblo”. De igual modo en la Villa de San Antonio de Gualeguay, con un representante rural por su antiguo pago colonial de Tala, la Costa del Nogoyá, Las Raíces, y las Biscachas sumados todos a “los ciudadanos del pueblo”, o sea los de la Villa. Con la intermediación en el campo y el voto directo urbano se instalaba una desigualdad en la naturaleza del voto, haciéndonos presumir que la fuerza de jefes rurales operó en esta instancia para poder controlar la designación de electores.<sup>178</sup>

Como ya planteamos, la sanción del Estatuto implicó un cambio sustancial en la representación política: se relegó el voto directo de diputados por el

---

<sup>176</sup> AGPER, Libro 1 del Congreso de Entre Ríos, 1821-1824, fs. 5-10, 13-18, 21-22, 25-26, 37-42; Gob, Serie I, Caja 1, Leg. 15, f. 468; Serie V, Caja 1, Leg. 13, fs. 424-432 y Caja 17, Leg. 6.

<sup>177</sup> La elección de 1829 fue analizada con mayor profundidad en el Apartado *La representación política interna: los diputados en el Congreso provincial entrerriano* de este mismo Capítulo. Lo que nos interesa en esta parte es su examen como acto eleccionario.

<sup>178</sup> Lorenzo Berdun (Palmar), Domingo Benítez (Arroyo Grande), Domingo Ruidiaz (Tala) Casado con Petrona Berdun, natural de Montevideo, 45 años en 1820, oficio labrador (Censo Tala y Libro Matrimonios Concepcion) Eugenio Suárez (Costa de Gchú) Juan Vicente Echeverría (Las Moscas) Marcelino Peláez (Gchú) José Sebastián González (Villaguay) Juan Rodríguez (Mandisoví) Lucas Antonio Mansilla (Nogoyá) Juan Simón González (Raíces) Miguel Gerónimo Mendieta (Tala) Eduardo González (Biscachas)

indirecto, tal como vemos en las elecciones de 1825 y 1827 y en 1829 con la creación de la Comisión eventual revisora de mandatos.

Según hemos observado tanto el Gobierno, a través de sus Circulares de convocatoria, como los agentes partícipes necesarios en la cadena de instancias electorales -por ejemplo los comandantes y las autoridades de la mesa- realizaron frecuentes recomendaciones a los votantes acerca de la “delegación libre y espontánea de su poder y representación en un individuo digno de su confianza” y de la necesidad de cumplir con las formalidades estatutarias. En estas manifestaciones, el principio consagrado de la libertad se combinaba con un modo de relación que tradicionalmente regía en la vida social, el de la confianza, la *bona fides*, la fidelidad en la palabra dada.<sup>179</sup> Generalmente, a la lectura de la Circular de convocatoria le seguía lo siguiente:

... enterados todos y penetrados del orden de la justicia, procedieron a prestar uno a uno sus respectivos sufragios...<sup>180</sup>

La expresión “el orden de la justicia” alude al orden que, como valor, está asociado íntimamente a la justicia y es el Estado a través de la norma que custodia ese orden, garantiza sus condiciones de posibilidad, en este caso atendiendo a la legitimidad de origen de las autoridades.<sup>181</sup>

#### **IV.1.c. Los lugares de las reuniones electorales. Las autoridades de mesa.**

La celebración de la elección, como nuevo vehículo de la representación política, se realizó tanto en espacios públicos como en sitios institucionales y religiosos. Uno de los lugares de reunión fue la plaza, tradicional punto nodal en la trama física del pueblo rural, la villa o la ciudad hispanoamericana; lugar donde se organizaba la vida de sus habitantes como centro político y religioso, lugar de encuentro social, de transacciones comerciales, lugar del mercado y la

---

<sup>179</sup> Viola, Francesco, "Derecho de gentes antiguo y contemporáneo". *Persona y Derecho*, UNAV, 2004, No. 51, p. 169. El autor lo menciona como un aspecto del *ius gentium* romano, con gran carga ética. Acceso: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1089610> Consulta 20/8/2014.

<sup>180</sup> AGPER, Libro del Congreso 1º. de Entre Ríos, 1821-1824, fs. 5 y 6.

<sup>181</sup> Passerin d'Entreves, A. 2001, pp. 95-268. 3ra. Parte: El Estado como autoridad, Cap. I El valor del orden.

fiesta pública, centro de disputas y consensos acrecentado en esta función en la época pos independiente. En la llamada Sala de gobierno de Gualeguay que bien pudo ser la antigua Casa del Cabildo, la puerta de la Iglesia en Gualeguaychú, la Casa escuela de primeras letras en el Uruguay se palpitaba el acto soberano de elegir a los representantes: lugares de circulación y reunión públicas, de poder político, de simbolismo religioso y confluencia de creyentes y ciudadanos, o asociados a la educación como herramienta de ilustración.

Los Comandantes militares recibían a los electores para “hacer Junta” y les otorgaban un certificado que acreditaba su condición, convirtiéndose así en agentes centrales que legitimaban el primer paso del acto electoral. También los Alcaldes urbanos y rurales tenían un papel importante que se sumaba al resto de sus incumbencias. De acuerdo a la Instrucción para Alcaldes de Santa Fe en 1810, que alcanzaba todavía a los Entre – ríos como jurisdicción santafesina, estos funcionarios desempeñaban funciones de policía y atendían demandas judiciales de menor grado, observándose especialmente la “calidad” de las personas involucradas al considerar las denuncias y emitir fallo. Ejercían un control social sostenido para mantener el “orden y tranquilidad” a través de distintos mecanismos, reportando a las autoridades superiores. Tenían injerencia directa en el terreno de las relaciones privadas: eran mediadores en conflictos familiares y tenían potestad para recoger niños huérfanos o abandonados, entregándolos en guarda al Juez de Menores.<sup>182</sup> Como ya lo hicimos notar, estos administradores de justicia podían disponer de fuerza armada a los efectos de facilitar el cumplimiento de sus facultades. Además, era de tradición que los Alcaldes tuvieran a cargo diversos mecanismos de control social: la formación de padrones, la supervisión de la movilidad de los habitantes en el distrito, la investigación sobre personas sospechosas y/o notadas de viciosas y sin ocupación. En su nueva función política, los Alcaldes recibían los certificados de los electores departamentales con asistencia de un secretario, organizaban y presidían la reunión de la Junta Electoral que tenía la misión de elegir al Diputado al Congreso provincial o Sala de representantes por ese distrito. Esta intervención en las elecciones fue requerida ya a los agentes judiciales de

---

<sup>182</sup> Arce, Facundo “Los Alcaldes de Barrio en Santa Fe a través de la Instrucción de 1810” en *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, Santa Fe, UNL, 1960, Num. 101-102, pp. 303-317.

Buenos Aires y de otras provincias durante la década revolucionaria de 1810 y siguientes, correspondiente a los nuevos tiempos políticos.<sup>183</sup> De modo que los funcionarios a cargo de la organización de la elección constituían autoridades locales las que, dadas sus funciones y atributos, podían ejercer eventuales presiones sobre el desarrollo del acto; es conveniente recordar que sus designaciones corrían por cuenta del gobernador lo que permitiría dar lugar a algún tipo de restricción en la libertad del acto o manipulación electoral. La figura del Secretario, cuando existió, fue asociada a la función de Escribano escrutador tal como se la concebía estatutariamente en otras administraciones como Corrientes.

Teniendo en cuenta la ausencia de padrones electorales, lo que era bastante común en otras experiencias provinciales, las autoridades de cada mesa efectuaban la selección de los votantes según su criterio y su influencia. En las elecciones preestatutarias de 1821 la constitución de las mesas fue heterogénea en su composición: en el Uruguay el Alcalde Mayor Francisco Fernández y el Coronel Juan Florencio Perea como presidente y secretario respectivamente que fueran elegidos al comenzar el comicio; el Comandante Laureano Márquez y el Secretario Ventura Martínez en Gualeguay; el Alcalde ordinario y Comandante interino José Ignacio González como única autoridad en Gualeguaychú; el Comandante Justo Hereñú y tres miembros más sin datos de sus cargos: Juan José Fernández, Manuel Basaldúa y Francisco Amarilla; en la Villa del Paraná, el Alcalde Mayor Ordinario Juan Bautista Escobar, el Alcalde del Cuartel 2 Ciriaco Quintana, el del Cuartel 3 José Pérez y el del Cuartel 4 José Soler quienes nombraron al Secretario del acto Juan Eugenio Melara. Las únicas autoridades que emitieron voto encabezando el acta fueron, en este orden, Escobar, Quintana, Pérez y Soler. El voto o la certificación de acta podían ser registrados de manera directa o bien se concretaba a través de sujetos que firmaban “a ruego” de otros, presumiblemente por no saber firmar o por encargo o por pedir prestado el nombre para votar por uno u otro candidato teniendo en cuenta que el propio firmante a ruego podía ser uno de éstos, tal como veremos

---

<sup>183</sup> Ver Estatuto Provisional dictado por la Junta de Observación, Buenos Aires, 1815; Sección V, Cap. II, III, IV. Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado, dictado para las Provincias Unidas de Sudamérica en Tucumán por el Congreso Constituyente, 1817. Sección V: Cap. II y Cap. IV.



en la elección de 1821 en la Villa del Paraná.<sup>184</sup> De modo que podemos distinguir a estos sujetos de la siguiente manera: “votantes / certificantes de ruego” y “firmantes a ruego”, modalidad frecuente fundamentalmente en las elecciones preestatutarias.

En 1825, la elección de diputado por Gualeguay por parte del grupo minúsculo de 5 electores fue presidida por el Alcalde Mayor Félix Lascano, quien nombró como Secretario del acto a José Gómez. En 1827, el acta que analizamos corresponde a la elección de 5 electores por Gualeguaychú; el Alcalde Mayor José María Lacunza fue acompañado en el acto por dos vecinos, también llamados socios de la elección, Leoncio Martínez y Juan González de Cossio. Los tres emitieron su voto, solo que en primer lugar votaron Lacunza y González de Cossio siendo su lista de 5 candidatos la que triunfó en la elección. En 1829, para la conformación de la Comisión eventual del Uruguay se constituyó la mesa por el Alcalde Mayor Domingo Fructuoso Calvo y Manuel Cortéz, presidente y secretario electos a pluralidad de votos por el “pueblo reunido”.

#### **IV.1.d. Elecciones de 1821, 1825, 1827 y 1829: Votantes y certificantes de actas.**

El acta electoral con la sucesión de firmas o la lista prolija de sufragios individualizados solo captura el instante de la emisión del voto, siempre que la elección hubiera sido efectivamente realizada.<sup>185</sup> Sin padrones electorales, es difícil conocer los rasgos de los que acudieron a las votaciones y más aún, saber de las motivaciones, presiones o intereses de los movilizadores. El camino para tratar de allanar esta dificultad fue la elaboración de una Tabla de identificación de los 318 participantes en las elecciones que son materia de nuestro análisis, entre funcionarios, votantes, candidatos, certificantes, votantes/certificantes de ruego y firmantes a ruego, firmantes de actas utilizando fuentes variadas de

---

<sup>184</sup> Es el caso del Alcalde del Cuartel 4 José Soler no solo firma por 40 personas sino también que es elegido diputado por la Villa capital en la elección preestatutaria de 1821.

<sup>185</sup> Para Brasil, José Murilo de Carvalho analizó las elecciones de segunda mitad del XIX. En circunstancias de suma violencia y con el fin de cumplir de cualquier manera con el acto electoral legitimador de las bancas parlamentarias, se labraba el acta *a punta de pluma* como si el acto hubiera sucedido. José Murilo de Carvalho *“El desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil”*. México, FCE, 1995, p. 17. Citado en Tesio, Maria Eugenia, 2007, p. 33.

rastreo (Tabla No. 1 en el Anexo Final) <sup>186</sup> De las actas disponibles hemos clasificado la información de las personas identificadas que intervienen en el acto electoral respecto a edad, procedencia, vinculaciones familiares, parentesco ritual por compadrazgo o testimonio religioso, inserción social, actividades económicas, relación con el Estado, antecedentes institucionales o sea previos a la elección y proyecciones institucionales, los cargos posteriores a la elección. El objetivo de esta clasificación es la observación del grado de cumplimiento de las normas, base social de la elección y posibles diferenciaciones por regiones, carreras institucionales previas, incorporación al circuito del poder o de la administración, etc.

Por lo que se ha estudiado del proceso electoral santafesino, existe una explícita convocatoria a votar a “vecinos” sanos, hábiles, capaces. En este aspecto, se retrotraen a las normas electorales de la década de 1810, que privilegiaban a los vecinos principales excluyendo a la “parte inferior” del pueblo, considerada sin suficiente instrucción ni capacidad para participar en estas decisiones relevantes. En la práctica, las autoridades de mesa seleccionaban a los votantes quienes generalmente pertenecían a sectores ligados a la estructura estatal por trabajo asalariado, objetivos comerciales, carreras burocráticas, políticas, militares.<sup>187</sup> Si hacemos la relación entre total de habitantes estimados en los espacios políticos entrerriano y santafesino y los sufragantes, el porcentaje a que se llega es de poco más del 2%. <sup>188</sup>

El 3 de noviembre de 1821, el gobernador provisorio Lucio Mansilla dictó un Bando prohibiendo toda comunicación con López Jordán y sus fuerzas. En

---

<sup>186</sup> Se registraron 318 participantes de los cuales se identificaron con dispar aproximación el número de 213 o sea un 67 %. Ante la aparición de homónimos en los censos, se los descarta del análisis al igual que aquellos cuyos nombres y apellidos son muy comunes y no se los puede asociar con otros individuos o familias mediante la unidad censal. Para Santa Fe tenemos elaborada una Tabla de clasificación del mismo estilo, con 326 participantes de las elecciones de diputados de 1828, de los que hemos identificado 216 o sea un 66% del total. Está previsto realizar un estudio comparativo de procesos electorales utilizando ambas Tablas como parte de las fuentes historiográficas que sostendrán la investigación.

<sup>187</sup> Elecciones de 1821 y 1828 en Santa Fe: AGPSF, T. II A, Varios Documentos, 1817-1852.

<sup>188</sup> Solo a modo indicativo: tomando las únicas cifras de población disponibles para Santa Fe y su jurisdicción estimadas para 1816-1817, -15.000 habitantes- el número total de participantes en la elección de diputados de 1828 para el 85% de las secciones electorales fue 326 lo que significaría poco más del 2%. El censo de 1820 en Entre Ríos registró 4.284 habitantes para la Villa del Paraná; la elección de diputado por dicha Villa en el año 1821 presentó 108 votantes: 2,5% del total de habitantes.

ese documento público hizo referencia a las elecciones de diputados electores, ya convocadas para conformar la Asamblea que nombraría al gobernador propietario. Su art. 4º mostró con elocuencia la preocupación de Mansilla por lograr una afluencia considerable de votantes:

Art. 4º Deseoso que el Gobierno propietario que se elija merezca la aprobación general, indudables signos de su sosegada permanencia y benéficos frutos de felicidad en su legal y reglada administración, interpele a los sensatos y buenos ciudadanos se esmeren en concurrir al acto cívico de la elección de Diputado elector, para que recaiga en individuo que llene sus esperanzas, y el concepto de legitimidad, nada decoroso cuando los representados se abstienen de asistir bajo pretextos que solo guardan analogía con sus intereses e ideas privadas.<sup>189</sup>

Las bajas proporciones eran comunes en otras provincias e incluso en otros espacios latinoamericanos. El caso de la ciudad de Buenos Aires en 1833, como momento de gran efervescencia electoral muestra, por ejemplo, una afluencia de aproximadamente 4.000 votantes sobre una población de 60.000 habitantes. Relación que ameritaría una mayor indagación a fin de poder estimar las razones de tan bajos porcentajes (Sábato, Ternavasio, De Privitellio, Persello, 2011: pp. 70-95)

De acuerdo a los datos registrados en la Tabla de Identificación podemos realizar las siguientes interpretaciones. Los candidatos electos cumplen con los requisitos de diputados: edad, natural o americano, vecino, fuero común y sin dependencia de servicio o sueldo del gobierno; en la elección preestatutaria de 1821, este último requisito es obviado en uno de los electos que ejercía el cargo de Alcalde al momento de la elección. Se los denomina en algunos casos *beneméritos* ciudadanos en una referencia ambigua entre el sujeto tradicional y el invocado en las nuevas teorías.<sup>190</sup>

Tanto los funcionarios como votantes y/o certificantes de Actas de todas las elecciones analizadas oscilan entre los 20 y los 66 años con una sola excepción de 18 años. En las elecciones de 1821 se registran un votante de 18 años Justo José de Urquiza, comerciante del Uruguay; tres votantes en Paraná entre 20 y 22 años, los comerciantes Francisco y Bentura Soler, hermanos del

---

<sup>189</sup> RLDAPER, T. I, pp. 25-27.

<sup>190</sup> Durante la etapa colonial temprana, se denominaba *Beneméritos* a conquistadores y primeros pobladores cuyos servicios en la conquista y colonización española ameritaban su reconocimiento social y privilegios por parte de la Corona. Areces, Nidia "Las sociedades urbanas coloniales" en Tandeter E. (Dir.), 2000, p. 159.

Alcalde José Soler, diputado electo y un carrero Miguel Segovia del Cuartel de ese mismo Alcalde. Por último, el comerciante Juan Simón González, elector por el Partido de Las Raíces que vota en Gualeguay, con 24 años. Estos sujetos pueden considerarse emancipados dadas estas características; recordemos que para esta elección preestatutaria, si los códigos de referencia en esta elección de 1821 eran como se presume los Reglamentos revolucionarios de 1815 y 1817, entonces la edad del ciudadano pleno sería 25 años o estar emancipado.

Las procedencias de los funcionarios y votantes o certificantes, o sea su lugar de origen o “Patria”, varían según sea el Departamento I Principal (Villa del Paraná cabecera departamental, Villa de Gualeguay, Villa de Nogoyá) o el Departamento II Principal (Villa del Uruguay cabecera departamental y Villa de Gualeguaychú). En el Dpto. I Principal, el censo de Paraná en 1820 no revela la procedencia por tanto tuvimos que triangular fuentes para poder cubrir mínimamente este aspecto. Predominan los españoles europeos con 11, 3 santafesinos, 2 portugueses, 1 salteño, 1 montevideano y 1 paraguayo. En Gualeguay se revela la presencia de miembros de familias de más viejo arraigo – fines del XVIII-, 2 montevideanos y 2 americanos de los Estados Unidos del Norte, uno de ellos con más de 30 años de residencia en el lugar. En el Dpto. II Principal solo contamos con datos del Uruguay: 2 naturales del Uruguay, 4 montevideanos, 5 españoles europeos, 2 portugueses, 3 de Buenos Aires, 1 de Mendoza, 1 santafesino, 1 santiagueño, 1 paraguayo, 4 votantes europeos naturales de Francia, Irlanda, Iroya/Grecia, Italia (así se lo menciona en el censo).

En esta elección de 1821 se observa un período de transición entre la República de Entre Ríos y la nueva entidad política inaugurada con el gobierno de Lucio Mansilla: los Comandantes militares, encargados de entregar la Circular y recibir conforme el Acta, intervinieron activamente en las disputas por el poder regional con Ramírez contra Artigas – 1820 – (el santafesino Barrenechea y Laureano Márques) para luego integrar la estructura militar de Entre Ríos bajo el gobierno de Mansilla; no son agentes totalmente leales puesto que se registran vinculaciones con los conspiradores contra Mansilla en 1823 -por ejemplo, el santafesino Justo Hereñú-. Participaron socialmente como testigos de

casamiento en sus lugares de residencia; adquirieron propiedades del Estado y contribuyeron con préstamos al fisco.

Detengamos el análisis en los Alcaldes y Secretarios del Dpto. I Principal: el interior de la jurisdicción representado en Nogoyá muestra sujetos de familia arraigada local, abastecedores de ganado al pueblo y con proyección institucional en cargos de Alcaldes y Comandantes. En los correspondientes a la elección en la Villa del Paraná, el más antiguo centro urbano del territorio, estos funcionarios son santafesinos o españoles europeos, relacionados matrimonialmente con antiguas familias santafesinas, sus unidades censales registran la presencia de negros esclavizados y agregados, estaban dedicados al comercio de pulpería y tienda, con casa y solares en la Villa y prestaban dinero al Estado. Los dos Secretarios de Paraná tienen una jerarquía social distinta. Uno era notable de la Villa, español naturalizado, terciario dominico, vinculado por matrimonio a una familia de antigua raigambre santafesina, propietario de establecimiento calífero y productos de la tierra. Se distinguió por los servicios al ejército revolucionario en la década de 1810 y se desempeñó como Alcalde de Hermandad. Posteriormente a la elección fue designado miembro del Tribunal de Comercio de Paraná y encargado de recoger préstamos particulares. El otro, con casa en la Villa y poseedor de un esclavo, logrará en 1826 el cargo de Escribano.

Los Alcaldes del Dpto. II Principal, de origen oriental o natural de Gualeguaychú estaban dedicados al comercio, emparentados con familias de notables locales y con proyección institucional en cargos de justicia comercial y del crimen. El único Secretario identificado era oriental de Montevideo, con vínculos de paisanaje observados a través de parentesco ritual, a partir de 1822 se desempeñará como Secretario de Comandancia Departamental y Comisionado ante las máximas autoridades portuguesas en la Provincia Cisplatina.

Los votantes y firmantes del poder de la Villa de Gualeguay son 30 contando con datos de 14 de ellos. La mayoría pertenecía a familias de viejo arraigo en la Villa; un oriental de Montevideo y dos americanos de los Estados Unidos del Norte, éstos sin datos de ocupación pero que “por buen concepto y probidad” entran en la terna de Alcalde Mayor para 1822-1823, logrando uno de

ellos el puesto. La información sobre actividades económicas es escasa, se registran un abastecedor de ganado, un médico, dos comerciantes. Los naturales locales registran terrenos comprados y también otorgados por el Estado, estancias con peones en la jurisdicción y también en Arrecifes, provincia de Buenos Aires lo que se explica por la proximidad de Gualaguay al delta del Paraná y su mejor comunicación con los partidos del norte de Buenos Aires. No hallamos antecedentes institucionales pero sí proyecciones institucionales importantes entre 1822 y 1829: ternados para Alcaldes y Alcaldes Mayores en su mayoría además de diputados por Gualaguay ante el Congreso Provincial y uno designado Maestro de Postas. Esta elección tiene la particularidad de agregar firmantes para el poder del diputado electo que no siempre coinciden con los que han emitido el voto; entre estos que son 12 identificamos a 5, todos de familia de viejo arraigo en la Villa sin prácticamente datos económicos, solo un par de registros sobre abastecimiento de carne y sobre bienes en litigio por divorcio sin especificarse cuáles. Los dúos de firmantes a ruego y votantes de ruego son 7 pero no se han podido identificar lo que, de ser posible, contribuiría a esbozar alguna cadena clientelar u otro tipo de relación.

Los certificantes de la Villa del Paraná son 108. Se ha desdoblado el análisis entre certificantes que firman por sí y certificantes de ruego con un solo firmante a ruego, José Soler, que era comerciante, Alcalde de Cuartel y finalmente fue Diputado electo. Dentro del primer grupo de 66 se identificaron 47, varios emparentados por matrimonio con familias notables de Santa Fe, Banda Oriental (de los Santos, Seguí, Andino, Querencio), de Paraná (Mármol, Pondal, Antelo) de Villaguay (Crispín Velázquez). Sus actividades económicas son básicamente en el comercio (30) y algunos oficios como barbero, carpintero, sastre, molinero, labrador y comerciante calafetero; 30 de ellos poseen negros esclavizados, agregados, peones, criados, sirvientes y conchabados en distinta cantidad. La información relevada sobre propiedades indica posesión de terrenos, casas, solares, tiendas en Paraná. Entre ellos, 5 son prestamistas del Estado y 4 de ellos presentan antecedentes de cargos de Alcaldes. Sus proyecciones institucionales entre 1822 y 1832: se encontraron 9 votantes que serán miembros del Tribunal de Comercio, ternas de Alcaldes, Alcaldes, Vistas de Aduana, Procurador de Ciudad, Fiel Ejecutor Inspector de carne,

Administrador de Correo, Ministro de Gobierno; entre los 9, 4 desempeñan entre dos y tres cargos que evidencian carreras institucionales. El grupo de Soler está compuesto por 42 certificantes de ruego, identificados 24 y de estos 11 corresponden al mismo Cuartel a cargo de Soler. Las ocupaciones del total de identificados muestran en un 42 % a carreros o carreteros y labradores, un 30% de comerciantes y el resto en distintos oficios como zapatero, quintero, carpintero, herrero, sombrerero, sastre y hospitalero. De los 24, 3 poseen esclavos y peones y 1 es prestamista del Estado. No registran antecedentes institucionales y solo uno de ellos alcanza el cargo de Alcalde en 1826.

En cuanto al perfil socio económico e institucional de los funcionarios y votantes o certificantes identificados, podemos hacer la siguiente síntesis separándola en Departamento I Principal (de vieja colonización) y Departamento II Principal (de nueva colonización).

-En el Departamento I Principal, los funcionarios están dedicados al comercio, la hacienda y la importante producción calífera, con agregados y esclavos en sus unidades censales, prestamistas del Estado, tienen antecedentes en justicia y cargos militares en el ejército revolucionario notándose proyecciones institucionales como Alcaldes y miembros de Tribunal de Comercio. Entre los votantes se distinguen miembros de viejas familias arraigadas en los pueblos del interior como Gualeguay y Nogoyá, con actividades económicas ligadas al abasto de ganado y a la producción pecuaria en estancias no solo en jurisdicción entrerriana sino en los partidos del norte de Buenos Aires. No hallamos antecedentes capitulares pero sí proyecciones importantes en las ternas de Alcaldes o en cargos efectivos Alcaldes, Maestro de Postas y en dos diputaciones provinciales. En la Villa de Paraná, se registran miembros vinculados por paisanaje –regiones españolas-, por matrimonio o parentesco ritual a familias notables principalmente de Santa Fe, con oficios y comercio, propiedades de casas, terrenos y solares en la Villa, ligados al sostén del fisco como prestamistas, con antecedentes de cargos de justicia y con proyecciones como funcionarios del Estado y Alcaldes. El grupo de certificantes de ruego con un solo firmante a ruego –José Soler- que es a la vez Alcalde de Cuartel, comerciante y diputado electo en la elección de 1821 tiene una base del 70% compuesta por artesanos y labradores, siendo el 30% restante formado por

comerciantes; la mitad de los identificados en la red Soler pertenecen a su mismo Cuartel. No registran antecedentes institucionales y solo uno de ellos alcanza el cargo de Alcalde unos años más tarde. Lo inferimos como un caso de relación clientelar sostenida por el ejercicio de su cargo de justicia o sea autoridad máxima de barrio y por otra parte, el apoyo de su mismo gremio de comerciantes.

-En el Departamento II Principal los funcionarios están dedicados a la hacienda y el comercio, vinculados a familias notables locales; se integran en administraciones de Comandancia y funciones de comisionados. Muchos de los votantes están vinculados por paisanaje –orientales, griegos, franceses- y por matrimonio o parentesco ritual con familias notables locales instaladas en la época de fundación de las Villas del Uruguay y Guaqueguaychú. Sus actividades económicas están ligadas al comercio local, de importación y exportación, proveedores y prestamistas del Estado, labradores, hacendados, unos pocos artesanos. Registran establecimientos con ganado vacuno, caballar y lanar, con esclavos y peones. Tanto funcionarios como votantes exhiben antecedentes capitulares desde fines del siglo XVIII hasta 1811 como también proyecciones institucionales de gran variedad: ternas de Alcaldes, Alcaldes Mayores y de Hermandad, Juez Comisionado, miembros de Tribunal de Comercio, Contadores de Receptoría, Administrador de Rentas, Secretarios de Gobierno y Comandancias. Es de notar que entre los votantes de la elección de Comisión Eventual revisora de mandatos existen muchos miembros de redes familiares fuertes constituidas por matrimonio y compadrazgo (En Guaqueguaychú: Aguilar-Lacunza-Mosquera-Cossio-León-Lamas-Gutiérrez. En el Uruguay: Ramírez-López Jordán-Britos; Sagastume-Irigoyen-Urquiza; Sagastume-Urdinarrain-Olivera; Calvento-Urdinarrain-Urquiza). Existen miembros de sociedades económicas: Monteros-Urquiza-Baraño, Antivero-Hugo, Aguilar-Lacunza.

#### **IV.2. Las elecciones de gobernador**

En el proceso de construcción estatal en Iberoamérica y por ende en el Río de la Plata consentir el poder, como principio moral aceptado por la sociedad, refuerza la función del derecho natural en estos tiempos pos



independentistas y desplaza al argumento centrado en lo retórico con el que se intentó, reiteradamente, degradar a este principio en el marco de los procesos electorales de la época. En este sentido, Chiaramonte planteó que el consentimiento viene a cumplir

... la satisfacción de una real necesidad de los seres humanos de legitimar su actuación en la observancia de principios con que la sociedad regula las relaciones entre sus miembros de manera de impedir el uso anárquico de la fuerza para la resolución de los conflictos.

En cuanto al acceso al gobierno el mismo autor recordó, en orden a las doctrinas contractualistas de la época, que ya Denis Diderot en su *Encyclopédie* había planteado que la autoridad no era natural sino que podía derivar de un acto de usurpación mediante la fuerza o violencia o de un acto de consentimiento, representado en este caso por el mecanismo legal de la elección. (Chiaramonte, 2008: pp. 4 y 8)

En el discurso político de las administraciones entrerrianas, el acceso al cargo de gobernador por medio de las elecciones debía cumplir con el requisito de la aprobación general. Era sobre esta base donde se crearían condiciones para que el elegido guiara y ejerciera el buen gobierno y lograra el orden y la paz interior. Es de notar que la noción de magistrado paternal y benéfico fue recuperada expresamente por los mismos contemporáneos, es decir que el gobernador adoptaba rasgos del *pater familias* radicado en el imaginario colectivo de Antiguo Régimen. En ciertos casos la llegada del elegido fue atribuida al “dedo de la providencia”, evaluado por lo mismo como redentor de una sociedad sumida en el caos. Un ejemplo de ello fue Lucio Mansilla quien en 1821 comunicó la novedad de su acceso al gobierno a las autoridades de Buenos Aires y Corrientes, dotando a su intervención de “providencialidad y deber sagrado”.<sup>191</sup> Notablemente, las intervenciones del gobernador de Santa Fe Estanislao López en la política interna de Entre Ríos fueron evaluadas del mismo modo, fundamentalmente por el grupo de Paraná, el que contaba con su apoyo y adhesión frente a sus permanentes disputas con el grupo del Uruguay.<sup>192</sup> Este tipo de justificaciones eran muy utilizadas en la época por ciertos actores

---

<sup>191</sup> Sagrado: relacionado a Dios y al culto divino, considerado por ello venerable (RAE, Academia Usual 1817, <http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub> (Consulta 28/11/2013).

<sup>192</sup> AGPER, Gobierno, Serie III, Carp. 2-A, 1, fs. 16-18. Correo Ministerial, No. 21, 2/5/1823.

políticos cuando llegaban al máximo cargo por medio de acciones militares o aspiraban a un segundo mandato, o bien requerían poderes extraordinarios, muy visibles por ejemplo en Tucumán y Santa Fe durante la primera mitad del siglo XIX.<sup>193</sup>

Esta es una noción arraigada en la sociedad rioplatense que muestra suficientes evidencias en distintas experiencias provinciales. Estanislao López se adjudicó el papel de garante del código moral de la sociedad santafesina y sus mismos gobernados declamaron la encarnación de la Provincia en su figura, dotándolo así de una fuerza inmaterial poderosa. En Buenos Aires, los publicistas del régimen de Juan Manuel de Rosas pusieron énfasis en la misión providencial que él encabezaba con el fin de instaurar un orden político fundado en la obediencia a las leyes. En general, la historiografía tradicional reforzó esta idea en términos de atributos virtuosos del gobernante con el objetivo de elevar a estos jefes en un altar de héroes inmaculados, paladines de la organización nacional y ejemplos para las futuras generaciones. (Tedeschi, 2003: pp. 10 y 171; Myers, 1995: p. 78)<sup>194</sup>

Las reglas electorales estatutarias para el acceso al cargo de gobernador confiaban al Congreso, en su composición saliente, la elección de aquel que cumpliera las calidades de ciudadano natural de la Unión, con 35 años de edad cumplidos y que no fuese diputado de ese Congreso. Es decir que el candidato podía haber nacido en cualquier punto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no necesariamente en Entre Ríos. En agosto de 1826, a instancias de Justo José de Urquiza Presidente del Congreso entrerriano y diputado por el Uruguay, se sancionó una Ley modificatoria, en términos de Ley Fundamental de la Provincia, que fijaba para el candidato la condición de natural de la provincia con 30 años cumplidos. La nueva condición de natural de Entre Ríos se enmarcaba, en parte, en las públicas manifestaciones realizadas contra los porteños que ocupaban cargos públicos y que eran de larga data.<sup>195</sup> La votación

---

<sup>193</sup> García de Saltor, Irene *La construcción del espacio político. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX*. Tucumán, FFyL, UNT, 2003. Tio Vallejo, G. 2001, Tedeschi, S., 2003.

<sup>194</sup> Manifiesto Estatuto de Santa Fe, 1819. RLDAPER T. I, p. 9.

<sup>195</sup> RLDAPER, T. II, p. 187. Bosch, Beatriz, 1978, cap. V. El descontento contra los porteños por parte de jefes de la costa del río Uruguay tenía origen en el apoyo que los porteños brindaban a los gobiernos sustentados en fracciones políticas de la costa del Paraná como el de Mansilla y

en el Congreso era pública y se requería al menos 4 votos sobre 5 para efectuar la elección, de no lograrse esta mayoría la decisión la daría un elemento de política tradicional que para ciertos casos está aún vigente en Argentina: la suerte.<sup>196</sup> En el análisis sobre la elección de diputados al Congreso provincial hicimos notar que el principio de rotación y alternancia en los cargos fue relativizado legalmente dado que, por el Estatuto, se permitía la reelección perpetua “mientras gusten los pueblos elegirlos”. En el caso del gobernador, este principio se ajustó más al objetivo de garantizar una apertura del círculo del poder evitando posibles enquistamientos, según sostenía la teoría política de la época; en efecto, el Estatuto estableció por el Art. 67 de la Sección 7º que el cargo duraba dos años, podía ser reelecto solo una vez y con votos unánimes. En caso de ausencia, enfermedad o muerte, el Congreso tenía la obligación de elegir un provisorio para completar el bienio. Una disposición a la que se recurrió, en realidad, como un arreglo temporal en situaciones de asonadas militares que exigían deposición del titular Ejecutivo; consecuentemente, la designación provisoria abría la posibilidad de destrabar situaciones de extremo conflicto. En cuanto a sus atribuciones, el gobernador fue asimilado al antiguo Teniente de Gobernador, máxima autoridad en las ciudades dependientes de las Intendencias borbónicas, al unir el mando político y militar junto a las funciones de Justicia en última instancia.

Sabemos que unido al principio de consentimiento, el derecho de rebelión o legítima resistencia se aplicaba contra la autoridad que hubiese devenido en tiranía. La unidad del cuerpo político era uno de los ideales que sostenía el andamiaje de la sociedad de entonces, no solo en el Río de la Plata sino en América y el mundo atlántico. Un ideal que venía de la tradición de Antiguo Régimen y del que las nuevas teorías no renegaban sino, por el contrario, defendían a la vez que rechazaban toda disidencia u opinión alternativa, llegando al punto de criminalizar a los opositores. Todavía el nuevo sistema

---

por medidas del Congreso General Constituyente que eran resistidas como la imposición de moneda de Buenos Aires.

<sup>196</sup> La Constitución argentina, reformada en 1994 y aún vigente, contempla el sorteo para establecer los senadores que deben renovarse en el primer y segundo bienio luego de una instancia en que se modificó el número de senadores por distrito. En Entre Ríos, la ley electoral vigente dispone que, en caso de empate y en el caso de diputados y senadores provinciales, se acuda al sorteo para definir la situación (Caso Gualaguaychú)

representativo no había dado cabida, en su lógica de competencia, a la canalización de la diversidad política y el disenso como lo hará ya avanzado el siglo XIX con la creación del sistema de partidos.<sup>197</sup> Como veremos en distintas instancias de esta investigación, esas expresiones de resistencia evaluadas como atentatorias de la unidad del cuerpo político, serán enarboladas recurrentemente por facciones de lealtad muy sinuosa durante toda la década de 1820 y principios de la siguiente.

La revolución militar de 1821 encabezada por Lucio Mansilla fue justificada por sus mismos mentores y ejecutores en un acto necesario para terminar, según manifestaron, con el despotismo y la tiranía de Ramírez y su sucesor. Tal como lo explica Antonio Sáenz en su curso sobre Derecho Natural y de Gentes dictado en Buenos Aires entre 1822 y 1823, caer en una tiranía daba derecho a redimirse de ella, de todos modos la fuerza y el temor no generaban derecho ni legitimaban las usurpaciones.<sup>198</sup> Como veremos, en la sucesión de asonadas militares desde 1821 en Entre Ríos los jefes triunfantes buscarán, sin excepciones, el amparo legal y la legitimidad del voto de los representantes. Éstos eran quienes tenían que consentir el poder, pero este consentimiento podía tener sus variantes: que el Congreso en su conjunto fuera sospechado de hacerlo bajo presión o que lo confesara públicamente como ocurrió en la segunda asunción de Vicente Zapata en 1827; también era motivo para encontrarlo cómplice de un acto de ilegalidad, es decir que no se había comprobado un consentimiento libre sino obtenido por amenazas y prepotencia del jefe triunfante, tal lo que se planteó en el conflicto con el electo Pedro Espino en 1831.

---

<sup>197</sup> Cucchi, Laura "Opinión pública, legitimidad y partidos. Miradas sobre el adversario político en Córdoba a finales de los años 70 del siglo XIX" en *BIHAAER*, No. 38, 2013, pp. 78-107; Polastrelli, Irina "Los revolucionarios se juzgan a sí mismos. Los Procesos de Residencia de 1813 y 1815 en el Río de la Plata". [http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/viiij\\_polastrelli.pdf](http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/viiij_polastrelli.pdf) (Consulta 16/8/2014).

<sup>198</sup> RLDAPER, T. I, pp. 2-5. Sáenz Antonio, Instituciones elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes (curso dictado en la Universidad de Buenos Aires en los años 1822-23) Fragmento. Citado en Chiaramonte, 1997, Doc. No. 55 del Apéndice Documental, p. 513.

#### IV.2.a. Elecciones antes del Estatuto.

El antecedente inmediato anterior al proceso que analizamos lo constituyó la elección de la máxima autoridad ejecutiva de la República Entrerriana, a fines de 1820. Su creador Francisco Ramírez era natural de la Villa del Uruguay; dado que se había abrogado la condición de gobernador sin sustento legal pero con la fuerza de sus éxitos militares, convocó al vecindario para que se eligiera de forma directa al Jefe Supremo de esa nueva entidad política, mecanismo que lo dotaría de legitimidad de origen. Por Bando público se dispuso la organización de mesas electorales en cada pueblo presidida por el Comandante militar, el Alcalde Ordinario y el Oficial de mayor graduación. En los fundamentos de la convocatoria, Ramírez manifestó la necesidad de que los beneméritos habitantes expresaran por medio del voto directo y libre quien debía regir a la República, subrayando especialmente que *“mi interés es el suyo y de ninguna otra cosa he sido tan celoso como de sus derechos naturales”* (Vázquez A. 1930, p. 65). La relación entre el consentimiento vehiculado a través de la elección y los derechos naturales se establece claramente en esta afirmación de Ramírez; no es más que expresar un principio de acción política contenido en el derecho natural, fundamento de la ciencia política y social de la época.

Francisco Ramírez fue electo en el alto cargo, si bien estaba sumamente fortalecido por el desenlace triunfal en Cepeda y la firma del Tratado del Pilar, al parecer no obtuvo unanimidad pues desde Corrientes se adujo que se le fue impuesto violentamente. Lo que queda evidenciado es la necesidad de legitimar su autoridad por medio del voto directo, luego de haberse instalado en la conducción de Entre Ríos por sus acciones y méritos militares. (Bosch B., 1978: p. 63. Vázquez A., 1930, p. 72)

Al partir en campaña militar, Ramírez delegó la Jefatura Suprema de la República de Entre Ríos en Ricardo López Jordán. Luego de la muerte violenta de Ramírez, el Delegado emitió una proclama pública fechada el 31 de julio de 1821; en ella anunció que propondría un armisticio a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba -provincias contra las que se había enfrentado Ramírez- hasta la reunión de una asamblea de representantes para elegir al que debía ocupar la silla del Gobierno. Estanislao López y Martín Rodríguez presionaron al Delegado

con una serie de demandas y resarcimientos por la guerra provocada por Ramírez pero, fundamentalmente, pidieron la disolución de la República; a la par fomentaron una serie de levantamientos en distintos pueblos de Corrientes, Misiones y Entre Ríos que debilitaron su posición de Jefe Supremo. Por estos acontecimientos la elección de representantes a la Asamblea solo se cumplió parcialmente sin arribar a su objetivo. La revolución de setiembre de 1821, apoyada por Estanislao López disolvió la República, permitió la llegada al gobierno de Lucio Mansilla y la emigración de López Jordán y sus jefes aliados hacia la Banda Oriental ocupada por los portugueses.<sup>199</sup>

Mansilla se proclamó gobernador Provisorio, llamó a elecciones a diputados para nombrar a la autoridad ejecutiva, discutir aspectos organizativos de la provincia y establecer un código por el cual regirse, como oportunamente planteamos. Los diputados electos conformaron el Congreso Provincial que se instaló por primera vez el 6 de diciembre de 1821; el juramento de reconocimiento del Cuerpo como Representación de la provincia fue cumplido por todas las autoridades, oficialidad y vecindario, tomándose el compromiso de obediencia y cumplimiento de todas sus disposiciones. Dos días más tarde, el Cuerpo eligió a Ricardo López Jordán como gobernador, acto que fue considerado por López como un alzamiento en contra de sus directivas y una entronización de “un amigo del despotismo”; es difícil dilucidar el motivo de tal decisión por parte del Congreso, lo cierto es que López envió un oficio a Mansilla, sobradamente elocuente sobre cuál era el desenlace de su preferencia:

... No, Señor Gobernador Provisorio del Entre Ríos. Si la suprema ley de salvar a la patria legalizó su movimiento militar el 23 de setiembre y ulteriores deliberaciones y medidas *con previo acuerdo mío* aún no estamos descargados de deberes tan respetables y preferentes... El bien general es el norte de nuestras empresas, para ese digno sostén ostentamos espada; la aguja magnético-política debe ser la unión de sentimientos a labrarle, *no hay que pararse en los modos y fórmulas legales, que aunque ellos son conducentes cuando hay ilustración, espíritu público, virtudes cívicas, son de incalculables desventajas cuando aquellas se hacen servir para la cábala y política sin buena fe a las ideas del que preside*, las de todos, como que solamente tiene ojos para guiar a unos asociados ciegos por principios, y absoluta falta de conocimientos en la ardua materia y marcha escabrosa en la dirección de los negocios públicos, formación de leyes y códigos de la mejor administración tanto más peligrosa

---

<sup>199</sup> Archivo Ricardo López Jordán, Carp. 1, Leg. 1, f. 2; Papeles de López. Vol. II (1820-1822), Doc. No. 323. Bosch B., 1978, pp. 70-74. Análisis de la revolución del setiembre de 1821 en Cap. VII, apartado VII.2.a.

cuando son críticas las circunstancias que nos rodean, resultando sospechoso por su manejo y desvíos de la exigencia de circunstancias.

En el colofón de este oficio instó a la disolución del Congreso por supuestos vicios insanables de su instalación y por sus sospechosas decisiones.<sup>200</sup> Finalmente, el 10 de diciembre el Cuerpo se retractó y dictó una Ley que determinaba que la Administración del Estado se expediría en adelante por ese mismo Congreso cuya tarea era elegir al gobernador. En uso de esta facultad, nombró a Lucio Mansilla como gobernador y Jefe Superior militar y político de la provincia de Entre Ríos por el término de dos años; era natural de Buenos Aires y contaba con 32 años. El Cuerpo recibió el juramento de la máxima autoridad provincial en presencia de la Plana Mayor militar, demás autoridades y vecinos reunidos para el acontecimiento.

#### **IV.2.b. Elecciones después del Estatuto**

Cumplido su bienio, Mansilla fue reelegido el 1º de febrero de 1824 por votos unánimes como lo permitía la normativa pero renunció al nombramiento lo que fue aceptado por el Congreso Provincial. Entre otras razones, manifestó que los pueblos debían acostumbrarse a ver bajar de la silla al primer Magistrado, sin violencia. Una argumentación quizás relacionada a las dificultades que se le presentaron durante su mandato; en efecto, como veremos más adelante, su gobierno fue jaqueado por invasiones desde la Banda Oriental y rebeliones internas asociadas a la oposición liderada por López Jordán; no faltaron conspiraciones como la de 1823 alentada por Estanislao López en virtud de disidencias generadas por la política interprovincial y regional de Mansilla.<sup>201</sup>

León Solas fue el próximo gobernador electo por el Congreso Provincial de manera unánime, tenía 37 años y era natural del Dpto. Nogoyá dependiente del Dpto. I Principal con sede en Paraná y del que había sido Comandante por disposición de Mansilla. Sus antecedentes militares revelan su participación en la

---

<sup>200</sup> Oficio de E. López a L. Mansilla del 9/12/1821, transcripto en Teijeiro Martínez, B., 1910, T. II, Tercer Período 1822-1860 La organización provincial, p. 76. *Destacado nuestro en cursiva.*

<sup>201</sup> RLDAPER T. I, pp. 29-32, 35-39, 358-364. Análisis de estos conflictos en Cap. VII, apartado VII.2.a.

expedición revolucionaria al Paraguay y en las filas de Artigas.<sup>202</sup> Una serie de evidencias confirman una relación de cooperación recíproca entre Solas, Estanislao López y su Delegado Pascual Echagüe.<sup>203</sup> Su condición de nativo habría logrado atenuar las protestas antiporteñas; además su antigua pertenencia al ejército de Ramírez y su inicial adhesión a López Jordán permitió otro tipo de acercamiento con este Jefe y los emigrados al punto que, durante este mandato, dictó una amnistía general. López Jordán obtuvo dos ascensos - Teniente Coronel y Coronel de Caballería-, fue nombrado Comandante del Departamento II Principal y se le concedió un campo situado entre los arroyos Pachi y Sandoval.<sup>204</sup>

Cumplido el bienio, el 15 de diciembre de 1825 se produjo la elección de un nuevo gobernador que recayó en López Jordán, con votación dividida con tres votos a su favor sobre cinco. Los diputados por la Capital –Juan Bautista Escobar- y por Gualeguay –Lucas Mansilla- votaron por Vicente Zapata; los diputados por el Uruguay –Manuel Urdinarrain, uno de los amnistiados por Solas en 1824-, por Gualeguaychú –José Vicente Chilavert- y por Nogoyá –Juan José Fernández- votaron por Ricardo López Jordán. Al no cumplirse la mayoría de cuatro votos que disponía el Estatuto de 1822, debía repetirse la votación hasta obtenerse la proporción legal y sino recurrir a la suerte. Luego de dos repeticiones sin cambios en el resultado, se recurrió al sorteo, saliendo favorecido Ricardo López Jordán. La noticia desató una fuerte manifestación de disconformidad con el nombramiento y reclamo de reelección de Solas, representada en tres petitorios. Los mismos contaron con el apoyo de Estanislao López. La elección se anuló y Solas se mantuvo en el gobierno. Los enfrentamientos armados entre las tropas de López Jordán y de Solas

---

<sup>202</sup> León Solas n. 1787. Soldado en el ejército revolucionario de Belgrano al Paraguay. En 1814 se incorporó a las filas de José Artigas y en 1817, se pasó al ejército invasor porteño que lo combatía. En 1820, se sumó al ejército de Ramírez contra Artigas. Jefe de Caballería del ejército del Gob. interino R. López Jordán. Nombrado comandante de Nogoyá luego de la revolución de 1821; en marzo de 1823 lo designó Gobernador Delegado. Solas también perteneció a la Logia No. 44. Datos en Calvento Mariano, 1940 pp. 15-16, 81-82; Teijeiro Martínez, B. 1910, p. 174.

<sup>203</sup> Algunos ejemplos de esta relación: compromiso de Solas para pagar a la brevedad la deuda contraída con Santa Fe por el Tratado del Cuadrilátero, acciones recíprocas de devolución de desertores, transacciones con ganado, recepción y manutención de prisioneros portugueses en la cárcel santafesina, coordinación de postas, en Funes, J.M. 1950, T. I, pp. 32, 42-45, 59-61.

<sup>204</sup> RLDAPER, T. I, pp. 366-367, 373. Funes José María (Dir), 1950, pp. 32, 42-45, 57-61. Archivo Ricardo López Jordán, Carp. 1, Leg. 1, fs. 3-4, 6-7. Calvento Mariano, 1940, p. 84.



provocaron la intervención de un mediador enviado por el Presidente Bernardino Rivadavia desde Buenos Aires y ambos depusieron sus pretensiones.<sup>205</sup> Por una nueva elección del 4 de abril de 1826, el Congreso Provincial designó gobernador provisorio a Vicente Zapata, radicado en Nogoyá, de 45 años. Notablemente la condición provisorio respondía a que, dada la situación de extremo conflicto, se había aceptado que quien fuera autoridad competente, Rivadavia o el Congreso Constituyente, resolvería a quien correspondía el gobierno.<sup>206</sup> El Congreso Provincial fue renovado, el 4 de julio accedió al cargo de Diputado por el Uruguay Justo José de Urquiza; bajo su influjo y presidencia se dictaron disposiciones muy importantes como la Ley modificatoria para designación de gobernador, imponiendo el requisito principal de ciudadano nativo; por otra parte, se elevaron al rango de ciudades a las Villas “Capitales” del Paraná y del Uruguay y como Villas a los demás pueblos.<sup>207</sup> Un giro importante en orden a asegurar la no concurrencia de candidatos nacidos fuera de la provincia para el máximo cargo y por otro lado, un reconocimiento explícito de la importancia del centro urbano más importante del Oriente entrerriano que competía desde hacía décadas con Paraná.

Con las comentadas circunstancias eleccionarias comenzó un período en el que el Estatuto dejó de aplicarse de manera estricta no solo por el uso de prórrogas no prescriptas sino también porque prácticamente no hubo cumplimiento del bienio de gestión, una serie de asonadas y levantamientos originaron una inestabilidad política que duró hasta 1832 con el ascenso al poder de Pascual Echagüe.

Zapata continuó interinamente hasta febrero de 1827. La solución que se esperaba desde Buenos Aires se dilató por las vicisitudes de la guerra contra el Brasil, quizás porque el gobierno entrerriano ofreció amplia colaboración al ejército de las Provincias Unidas lo que no generaría motivos para reemplazarlo (Gianello, 1951, pp. 287-288).<sup>208</sup> Después el Congreso Constituyente cayó en el

---

<sup>205</sup> Análisis de este conflicto en Cap. VII, Apartado VII.2.c.

<sup>206</sup> Vicente Zapata fue Capitán de la III Cía del Regimiento Nogoyá a las órdenes de Solas en 1821, Tnte Coronel y Comandante del Dpto. Subalterno de Nogoyá en 1824, Comandante Gral. del Dpto. I Principal en 1826. Guzmán Carlos, *Historia Genealógica de la Familia Guzmán Ubach- Zapata Icart*, Bs. As., Dunken, 2013, pp. 153-154. RLDAPER, T. II, pp. 73-87, 140-144.

<sup>207</sup> RLDAPER, T. II, pp. 187, 189-90.

<sup>208</sup> RLDAPER, T. II, pp. 203-208.

descrédito y entró en el camino de la disolución culminando con la renuncia de Rivadavia, por lo cual nunca se emitió una resolución al respecto. El acercamiento de Zapata a las políticas porteñas ocasionó fuerte oposición y revueltas en la campaña de Maria Grande, Villaguay, Tala y La Matanza, especialmente por la implantación de papel moneda de Buenos Aires para circular en la provincia.<sup>209</sup> La legitimidad de origen del gobernador, aunque haya sido en condición provisoria, fue puesta en cuestión dado que algunas de sus decisiones políticas y económicas no satisfacían los intereses de ese importante grupo, por lo tanto se debilitaba su legitimidad de ejercicio.

En esta coyuntura tan inestable, el Congreso Provincial se encontró ante el problema de un posible vacío institucional. La renuncia intempestiva de Zapata originó una serie de gestiones y ruegos persistentes para su continuación y ante la inevitabilidad del hecho, le fue admitida con la condición de que permaneciera en el cargo hasta el momento en que se posesionara el próximo elegido. La designación recayó en el rico estanciero y Comandante del Departamento II Principal Mateo García de Zúñiga, natural de Gualeguaychú y con 32 años –requisito de edad que se ajustaba ahora a la Ley Fundamental de agosto de 1826 propiciada por Urquiza- quien se mostró sumamente renuente a aceptar el nombramiento aduciendo que no había paz interior que garantizara el ejercicio de tan eminente puesto.<sup>210</sup> Los opositores presionaron al Congreso Provincial con una petición considerada por el Cuerpo como arbitraria, quebranto de la ley de la Provincia y contraria a toda máxima del sistema republicano aceptado en todas las provincias de América. Además de privar de todo empleo público a los porteños, se pedía la asunción del nuevo gobernador con quien estaban muy conformes y la separación de algunos diputados ligados al problema del papel moneda; no sería comprensible totalmente esta petición si no se tuviera en cuenta que el electo pertenecía al grupo del Uruguay y había sido, entre 1824 y 1825, un participante activo de la resistencia a la política de tierras de León Solas. Pese a sus objeciones, el Congreso removió al más discutido de los diputados, Román Fernández, pero lo más importante fue que atendió lo

---

<sup>209</sup> En el Cap. VIII, Apartado 1.b.2., *Lineamientos de la política monetaria*, analizamos en detalle aspectos referidos a la implantación de la moneda papel de Buenos Aires.

<sup>210</sup> RLDAPER, T. II, pp. 218-225.

referido al nuevo gobernador e insistió en su designación. Luego de renunciar tres veces García de Zúñiga finalmente aceptó, en términos de respuesta al clamor de sus compatriotas y de sacrificio en obsequio a su país, posesionándose del cargo el 1º de marzo de 1827.<sup>211</sup> Ese “ritual de la renuncia” fue un mecanismo habitual de presión de las autoridades ejecutivas hacia las Legislaturas en pos de diversos objetivos relacionados generalmente al acceso y distribución del poder, en particular con la ampliación de facultades a los gobernadores. Existen claras evidencias de la reproducción de este mecanismo y sus bases argumentales en otras experiencias provinciales como Buenos Aires en tiempos de Juan Manuel de Rosas, Santa Fe con Estanislao López y Corrientes con Pedro Ferré.<sup>212</sup> Una semana más tarde el Congreso Provincial otorgó las facultades extraordinarias al gobernador por el lapso de receso del Cuerpo, según ordenaba el Estatuto; lo cierto es que ese lapso que legalmente era de 2 meses fue excedido largamente pues recién el 11 de julio el Congreso reabrió su período de sesiones retomando sus atribuciones.<sup>213</sup>

El ascenso de García de Zúñiga fue producto de un cambio en la estrategia de oposición de la antigua facción de emigrados y sus apoyos internos. Las amnistías para los emigrados y el reintegro de sus bienes embargados por Mansilla, dispuesto por Solas facilitaron el retorno y progresivo fortalecimiento del grupo ligado a Ricardo López Jordán.<sup>214</sup> En ese marco, la aceptación de las reglas constitucionales y las negociaciones en ese marco fueron un rasgo importante en esa nueva estrategia. Desde la legalidad de su puesto el nuevo gobernador, con acompañamiento del Congreso Provincial, reposicionó a Entre Ríos respecto de las políticas porteñas; tengamos en cuenta algunos indicios en ese sentido: se decretó la no admisión de la moneda de cobre de Buenos Aires para pagos fiscales por su notorio descrédito<sup>215</sup>; se rechazó la Constitución sancionada por el Congreso Constituyente con sede en

---

<sup>211</sup> Bosch, B., 1947, p. 134. RLDAPER, T. II, pp. 227-228, 292-293.

<sup>212</sup> Ternavasio, M. “Entre la deliberación y la autorización. El régimen rosista frente al dilema de la inestabilidad política” en Goldman N., Salvatore R. (Comps.) 1998, p. 171. ROPSF, 1888, T. 1, pp. 293 y 298. Diario “El Federal. Lex Populi, Lex Dei”, Santa Fe, No. 19, 22/1/1831, p. 4, col. 2.

<sup>213</sup> RLDAPER, T. II, pp. 241-242, 294-298. Estatuto de 1822, Secc. 2º, Art. 9º incumplido.

<sup>214</sup> Oficio del 31 de marzo de 1824, citado en Calvento Mariano, 1940, p. 84.

<sup>215</sup> RLDAPER, T. II, pp. 243-244. Ver aspectos relacionados en Cap. VIII, Apartado 1.b.2., *Lineamientos de la política monetaria*

Buenos Aires, de corte unitario <sup>216</sup>; además, ante el presidente Rivadavia, se reclamaron los cinco buques del Imperio fondeados en el puerto de Gualeguaychú, luego de la victoria del Almirante Brown en la batalla de Juncal, como botín de guerra.<sup>217</sup>

A principios de junio de 1827, un decreto de García de Zúñiga prohibió incursiones de vaqueo al territorio de la Provincia Oriental, usufructuadas tanto por militares como por particulares.<sup>218</sup> Esta prohibición fue el detonante de rebeliones militares, sin perjuicio de que otras motivaciones de origen político las hubieran sostenido. El foco opositor fue encabezado por oficiales de alto rango del Departamento I Principal que pidieron la deposición de García de Zúñiga respaldados por la fuerza de las armas. La presión ejercida provocó que el Congreso atendiera el pedido, dejando registrado en sesión la situación violenta a la que se lo sometía<sup>219</sup>. Pese a que el diputado Urquiza sostenía al gobernador cuestionado, se votó por tres veces y ante el empate entre Vicente Zapata y Ricardo López Jordán se decidió por la suerte, según estaba previsto estatutariamente en la Sección 7º, Art. 64, de lo que resultó la elección de Zapata como Provisorio desde octubre de 1827, amparado en la influencia de Estanislao López. Algunas decisiones posteriores a su designación rebelaron inclinación hacia el grupo de Paraná y un desplazamiento de jefes militares del grupo del Uruguay.

A casi tres meses de la asunción, Zapata pidió relevo del mando e inmediatamente el Congreso saliente eligió a León Solas como autoridad ejecutiva. Pero fue arrestado, en junio de 1828, por oficiales de alto rango de la guarnición Paraná quienes hicieron una presentación al Congreso Provincial fundamentando los hechos. Los mismos se basaron en sospechas de malversación de fondos públicos y en un nombramiento ilegítimo. Dos elementos sustentaban, a juicio de los militares, tal ilegitimidad: por un lado, que el Congreso había concretado la elección en medio de violencia, amenazas y coacción armada propiciadas por el mismo Solas; por otro lado, porque la

---

<sup>216</sup> RLDAPER, T. II, p. 235-236.

<sup>217</sup> RLDAPER, T. II, pp. 233-234.

<sup>218</sup> RLDAPER, T. II, pp. 291-292. Las rebeliones de setiembre de 1827 en Cap.VII, Apartado VII.2.b.

<sup>219</sup> Archivo de la Legislatura, fs. 38 y 39.

cantidad de votos reunidos no cumplían con lo dispuesto por la Ley fundamental. Así, el derecho a resistencia fue justificado en buena parte por la falta de consentimiento libre y por el incumplimiento del Estatuto; simultáneamente estos oficiales, en su carácter de hombres de armas, declararon la alta sumisión y respeto a las resoluciones que fuera a tomar el Congreso a partir de su denuncia por una elección considerada mala y atentatoria. Como remate de la presentación, los oficiales expresaron que la deposición que impulsaron estaba librada, “según las máximas del sistema adoptado”, a cualquier simple ciudadano. En este punto confluye el principio político de rebelión, proveniente del derecho natural, con el uso del vocablo ciudadano como nuevo sujeto de la representación invocado en las nuevas teorías y que se abroga, en este caso, la validación o no de las normas implementadas. Un dato significativo en el complejo proceso de construcción de la relación entre habitante de Entre Ríos y el Estado en formación. El Congreso dio lugar a la petición y se procesó a Solas. El 28 de junio se procedió a elegir un gobernador Interino hasta el esclarecimiento de los hechos, recayendo en Vicente Zapata quien aceptó obligado por “el bien general, la gratitud y el influjo de amigos poderosos”; en un proceso muy dinámico, un grupo disidente de la guarnición de Paraná que apoyaba a Solas, acusó de arbitrarios a los oficiales que propusieron la deposición, encarceló a Zapata y pidió restitución de Solas en su cargo. El Congreso anuló las acusaciones, sin que se haya expedido la comisión investigadora designada *ad hoc*, reponiéndolo como gobernador hasta completar el bienio.<sup>220</sup>

A mediados de diciembre de 1829, el mandato de León Solas llegó a su término. El Congreso Provincial eligió al Sargento Mayor del Cuerpo Cívico de Paraná, Pedro Pablo Seguí “por la suerte”, lo que indica que fue una votación dividida sin conocerse otros candidatos. En principio, Seguí aceptó pero inmediatamente presentó su renuncia, por lo cual el Cuerpo practicó nuevamente la elección que recayó en León Solas. Un año más tarde, se reiteró un alzamiento armado encabezado por Ricardo López Jordán y otros jefes del grupo del Uruguay. Desde su Cuartel General en marcha hacia la Capital no

---

<sup>220</sup> RLDAPER, T. II, pp. 395-403, 407-422. Cansanello, Oreste C. “Ciudadano/Vecino” en Goldman, N. (Edit.), 2008, p. 30.

dejaron de peticionar por escrito ante el Congreso, fundamentando el pedido de cese del mando de Solas en sus agresiones a las leyes de la Provincia, la arbitrariedad en el uso del fondo público y en la seguridad individual; nuevamente el cuestionamiento de la legitimidad de origen fue uno de los planteos más poderosos, en tanto se consideraba que el gobernador había accedido al cargo por la intriga y la fuerza. Solas no se resistió a los cuestionamientos, dejó en el gobierno a su Delegado el santafesino Pedro Barrenechea, Comandante del Departamento I Principal y se refugió en Santa Fe (Bosch B. 1978: 117-118). Los diputados en medio del inminente arribo de López Jordán y sus fuerzas a la Capital, nombraron gobernador Provisorio a Barrenechea con el beneplácito de Estanislao López; a fin de frenar la acción del ejército alzado, los diputados anticiparon una comisión para parlamentar con esos jefes. En estas circunstancias de presión armada, el Ejecutivo provisorio se mostró debilitado en su poder y sin capacidad de decisión, delegando en el Congreso la iniciativa de conducir y afrontar la violencia de la situación. Finalmente, Barrenechea renunció y el Congreso en un doble movimiento aceptó la renuncia y eligió gobernador a López Jordán el 22 de noviembre de 1830, por unanimidad de sufragios. Su llegada al poder fue sospechada de poseer apoyo unitario desde la República Oriental del Uruguay; en efecto, Estanislao López alertó sobre esta posibilidad y se pronunció contra la deposición de un gobernador legítimo como era Solas. López Jordán, en oficio a López, justificó su acción fundándose en la arbitrariedad y el despotismo de Solas y ratificó que las relaciones de paz y amistad con Santa Fe no iban a variar.<sup>221</sup>

El Estatuto fue invocado en el acta eleccionaria al tomar en cuenta que la designación era provisoria y estaba destinada a completar el bienio de Solas. El control militar del territorio fue prioritario para mantenerse en el poder político, por lo cual los puestos clave de las Comandancias fueron confiados a Pedro Espino en el Departamento I Principal y a Justo J. de Urquiza en el Departamento II Principal. El pedido de un empréstito de 5.000 pesos al

---

<sup>221</sup> Mediante un oficio, López felicitó al Congreso Provincial por lo acertado del nombramiento de Barrenechea y por haber restablecido la tranquilidad pública. En *Gaceta Mercantil de Buenos Aires*, 29 de noviembre de 1830. El oficio de López Jordán a E. López en Periódico *El Universal de Montevideo*, No. 405, 13 de diciembre de 1830. Ambos oficios citados en Teijeiro Martínez B. 1910, pp. 259-260.

comercio capitalino para gratificar a las tropas fue aprobado por el Congreso pero tuvo mucha dificultad de cumplimiento; una desobediencia fiscal que estaría relacionada al desconocimiento de autoridad por parte del sector prestamista de Paraná. Por otra parte, su salida en campaña militar de observación y vigilancia originó la designación de Pedro Espino como Delegado, mientras durara su ausencia.<sup>222</sup>

La estrategia política de Santa Fe incorporó exitosamente a la figura de Espino para tentarlo con un levantamiento contra López Jordán. El entonces Delegado recurrió al Congreso planteando por oficio que la elección del gobernador no había sido enteramente libre sino condicionada por las bayonetas y el imperio de la espada. Las mismas acciones de la autoridad ejecutiva, a juicio de Espino, cimentaban el sistema de la tiranía, por ello solicitó al Congreso un nuevo nombramiento o en su defecto ratificar al “benemérito Cnel. Barrenechea” argumentando que la salud pública y la salvación del país estaban en peligro. Los diputados atendieron la petición, usaron la figura de derogación del cargo de gobernador que fuera asignado a López Jordán y el 10 de diciembre de 1830 nombraron de urgencia a Barrenechea como gobernador provisorio; un conceptuoso oficio de la nueva autoridad ejecutiva a Estanislao López le informó las novedades y le reiteró su entera gratitud. La noción de derogación del cargo fue asociada a la nulidad insanable de todos los actos que de él emanaron con anterioridad, un desconocimiento retroactivo que implicaba socavar las bases legítimas de esas decisiones por estar erigidas sobre la fuerza de la rebelión.<sup>223</sup>

Los éxitos militares de Espino contra López Jordán le originaron una recompensa expresa de Barrenechea, representada en un ascenso militar a Coronel y en su designación como titular de un nuevo cargo de gran poder militar como lo era el de Inspector y Comandante General de Armas de la Provincia, todo aprobado por el Congreso Provincial. Espino utilizó su cargo para erigirse en juez del accionar de funcionarios públicos estrechamente ligados al gobernador y a Estanislao López al punto de producir detenciones en nombre del respeto de las leyes fundamentales vigentes, la conservación del tesoro

---

<sup>222</sup> RLDAPER, T. III, 105-112, 192-210, 212-221. En el Cap. VIII, Apartado *La deuda pública interna: préstamos y suplementos*, nos referimos detalladamente al préstamo de 5.000 pesos.

<sup>223</sup> RLDAPER, T. III, 225-229, 259. Oficio de Barrenechea a López del 11 de diciembre de 1830 transcripto en Teijeiro Martínez B., 1910, p. 263.

provincial y el crédito público, como en el caso del Secretario de Gobierno Calixto Vera. La detención fundamentada fue comunicada al Congreso, aceptada y justificada, ordenando una comisión investigadora de los cargos imputados. En este ámbito de presión sobre la Administración, Barrenechea adujo problemas de grave enfermedad y pidió por tal razón el nombramiento de un gobernador provisorio, recayendo el cargo en Espino. Una designación que fue manifiestamente desconocida por Estanislao López, quien alentó a la oposición para que restituyera a Barrenechea (Bourlot R, 2007: p. 135). El Congreso no aceptó y resolvió, fundamentándose en el Art 60º del Estatuto, que el electo completara el bienio inconcluso. Barrenechea finalmente renunció en forma definitiva a sus aspiraciones.<sup>224</sup> López y el gobernador Rosas desde Buenos Aires interpusieron quejas por el entorno supuestamente unitario de Espino y los peligros que este sostén representaba al sistema federal que estos líderes promovían, pero sobre todo se quejaron por su acceso al gobierno ya que habría sido provocado por acciones de fuerza. Esta invalidación del cargo por poderes externos a la provincia implicó el desconocimiento de la investidura del gobernador provisorio de Entre Ríos y la consideración del Congreso como cómplice o consentidor de un acto considerado ilegal. El poder regional de López y el apoyo de Rosas a estos planteos no fueron ignorados por las cabezas de la Administración entrerriana. Para despejar toda clase de dudas, se ensayó una salida novedosa en términos de representación política: el Poder Ejecutivo anunció la convocatoria a una Asamblea General compuesta por un mayor número de diputados electos directamente, paralela al Congreso provincial, para decidir sobre estas controversias. Si bien el Congreso se manifestó conforme, advirtió que se le debía fijar claramente a la Asamblea su objeto específico, de modo de evitar que se extendiera en el tratamiento de otras cuestiones para las que no estaba facultada.<sup>225</sup> Este nuevo cuerpo representativo, conformado por 30 diputados de todos los pueblos de la provincia, se instaló en la Capital el 7 de noviembre de 1831 bajo la presidencia de Valentín Denis, la vicepresidencia de José Comas y como Secretario a Francisco Soler y formuló una Declaración al gobernador Espino que parecía contestar a las inquietudes de López y Rosas:

---

<sup>224</sup> RLDAPER, T. III, pp. 273-277, 311-318, 336.

<sup>225</sup> RLDAPER, T. III, pp. 341-344



“...El Presidente de la H. Asamblea pone en conocimiento de S.E. Sr. Gobernador que esta Asamblea ha dispuesto se publique por bando, la declaratoria de no ser de la intención de la Provincia separarse jamás de las de la República, y conservar con ellas la misma amistad y buena armonía como Provincias hermanas; así mismo que el sistema de la Provincia en orden del Gobierno es el de Federal y que lo sostendrá a la par de los demás...”<sup>226</sup>

Finalmente, la Asamblea General dictaminó que el nombramiento de Espino no fue ilegal considerando que, si bien el Congreso no había procedido con todas las formalidades necesarias, se había actuado con las facultades extraordinarias conferidas por el pueblo.

Sin embargo, la Asamblea avanzó más allá de su objeto específico. En un Decreto del 19 de noviembre de 1831 imposibilitó al Congreso Provincial para modificar o derogar ninguna ley constitucional como ya había ocurrido, por los males que había traído a la provincia en los últimos tiempos; la Asamblea se colocó por encima del Congreso y resolvió derogar todas las variaciones al Código que se habían realizado. El eje de la discusión fue la vigencia del Estatuto original y que, en todo caso, la reforma estatutaria tenía que ser encarada por ese Cuerpo o bien por otra Asamblea igual o más numerosa. El Art. 3º del Decreto dispuso que el gobernador, provisoriamente y hasta esa reforma, se sujetara a residencia cada bienio, ante una Asamblea General y Extraordinaria. De este modo, se retomó la institución jurídica del Juicio de Residencia, con antecedentes en el derecho romano y el castellano y que en la América española colonial fuera aplicado dentro del marco del derecho indiano, por la cual todo funcionario público debía dar cuenta de su desempeño y responder a eventuales cargos formulados ante un Juez de Residencia. La propuesta de este juicio por parte de la Asamblea cambió sustancialmente la autoridad que llevaría adelante el juicio; así, desde el ámbito de la justicia se pasó a un ámbito de representación política electiva: los funcionarios rendirían cuentas ante los representantes elegidos por el pueblo, depositarios de la soberanía popular. No era por cierto una total novedad pues, durante la década revolucionaria, los juicios de residencia se mantuvieron aunque con una modificación importante impuesta en la Asamblea Constituyente de 1813. Ese Cuerpo, acorde con las nuevas teorías de la representación política, invocó a la “voluntad de los pueblos” y dispuso que la conducta de los funcionarios debía

---

<sup>226</sup> RLDAPER, T. III, p. 348. AGPER, Libro de Acuerdos del HC de Entre Ríos, T. 4, fs.110, 118.

ser juzgada por los representantes de ese pueblo que les confió el depósito sagrado de su autoridad. En el caso de algunas constituciones provinciales contemporáneas, esta institución ya estaba incluida en sus articulados, por ejemplo Córdoba (1821), Corrientes (1821 y 1824), Catamarca (1823); en las dos constituciones correntinas la autoridad del juicio era el Juez de Residencia respondiendo al antiguo procedimiento colonial.<sup>227</sup> En el período que analizamos posteriormente, no hallamos evidencias de aplicación de ese juicio de residencia establecido por la Asamblea General de Entre Ríos.

La Asamblea General comunicó el fallo sobre Espino y el Decreto a los gobernadores Rosas y López; operando como un poder suprainstitucional ordenó al Congreso que publicara oportunamente las respuestas de dichos gobernadores y luego se disolvió. López no aceptó ese fallo e insistió en el acceso de Espino al poder mediante la fuerza y en su entorno conformado por hombres enemigos de la causa de los pueblos, o sea hombres de la facción unitaria.<sup>228</sup> Esta fue una circunstancia de gran presión sobre las autoridades entrerrianas que dinamizó el proceso político institucional, al punto de ocasionar un movimiento de piezas en el tablero institucional. En efecto, Espino aduciendo la necesidad de practicar controles de pillaje en la campaña partió en campaña nombrando un gobernador delegado en la persona de Toribio Ortiz. Un levantamiento de oficiales del Cuerpo Cívico apoyado por fuerzas santafesinas desconoció a Espino lo que fue comunicado al Congreso Provincial.<sup>229</sup>

En un solo día, el 13 de diciembre, los diputados decidieron una serie de medidas que mostraron la densidad del cambio. Primero aprobaron la medida y los fundamentos de los oficiales, asumieron el Poder Ejecutivo en una evidente ruptura constitucional y se declararon en sesión permanente. Ese acto contundente revelaba, según manifestaron, la recuperación de la libertad como

---

<sup>227</sup> González Alonso, Benjamín "El juicio de residencia en Castilla, origen y evolución hasta 1480" en *Anuario de historia del derecho español*, 1978, No. 48, pp. 194-195, Acceso: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251346> (Consulta 23/5/2014). Mariluz Urquijo, José "Los Juicios de residencia en el derecho patrio" en *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, Bs. Aires, 1953, VIII, No. 36, pp. 1648-1662.

<sup>228</sup> RLDAPER, T. III, pp. 365-367.

<sup>229</sup> AGPER, Libro 4 del Congreso de Entre Ríos, fs. 117-118. 8 de diciembre de 1831: firman Manuel Antonio Andrada, Marcelino Martínez, Dionisio Sosa, José María Rochi, Antonio Rodríguez, Juan Campi, Juan Francisco Rodríguez, Diego García, Luis Gómez, Julián Domínguez, Antonio González, Silvestre Caraballo, Matías Navarro, Francisco Varela, Antonio Arredondo, Silvestre Salas, José Antonio Barquero.

Cuerpo. El nombramiento de Espino fue considerado ilegal no solo por haber sido forzoso sino también porque se había incumplido con el Estatuto, por ejemplo al permitir que un candidato que no tuviera los 35 años hubiese accedido al cargo. Este punto observado implicó el acatamiento de aquella derogación, por parte de la Asamblea General, de las variaciones realizadas al Código; recordemos que en agosto de 1826 el Congreso había decretado la baja de la edad a 30 años como requisito para gobernador. Los diputados intimaron a Espino a licenciar a todas las fuerzas milicianas y veteranas y posteriormente lo destituyeron. Así el control del aparato militar por la institución legislativa, ahora encaramada en la primera magistratura, fue un indicio de dominio de la situación interna, no obviándose claro está que la acción coactiva de las armas apoyada por López influía fuertemente sobre este posicionamiento del Cuerpo y sus decisiones ulteriores. En este sentido, nombraron a Toribio Ortiz como gobernador interino, un salteño avecindado en Paraná desde 1818 y con 39 años de edad, vinculado por matrimonio a los de la Torre y Vera Muxica, una familia notable santafesina de arraigo colonial. Las órdenes recibidas por Ortiz de parte de los diputados se orientaron a estimular la persecución de Espino solicitando auxilio militar a Santa Fe, el que fue provisto prontamente encabezado por el Cnel. Pascual Echagüe. Espino huyó a la República Oriental del Uruguay acompañado por jefes aliados y llevándose su hacienda. Rosas le hizo saber a su aliado López su satisfacción por un desenlace que era ejemplar para quienes quisieran atentar contra las legítimas autoridades.<sup>230</sup> (Bourlot R., 2007: pp. 139-143). El Congreso, fortalecido por el apoyo externo y por el encauce constitucional interno que había tenido el asunto, dictó duras medidas para aplacar los estertores de la resistencia interna con serias intenciones de escarmiento. El Capitán Manuel Febre denunció a Francisco Hernández, vecino de las Isletas, por denigrar al Congreso e instar al fusilamiento de sus miembros, causantes a su juicio de los males que aquejaban a Entre Ríos; el Cuerpo representativo en su carácter de “primera autoridad de la Provincia” ordenó al gobernador que dispusiera prisión y juzgamiento a Hernández, promoviendo un castigo aleccionador.<sup>231</sup>

---

<sup>230</sup> RLDAPER, T. III, pp. 370-380. Barreto, F. 1928, Carta de Rosas a López, 5/2/1832, p. 39.

<sup>231</sup> RLDAPER, T. III, pp. 384-386.

La huida de Espino y la designación de Ortiz descomprimieron las tensiones. Su interinato duró poco más de dos meses. El Congreso provincial evaluó que estaba en condiciones de elegir gobernador en plena libertad; en sesión del 22 de febrero de 1832 eligió por unanimidad de 5 votos al “Coronel y Comandante General de Armas de la Provincia de Santa Fe” Pascual Echagüe, santafesino de 35 años, invitándolo a recibir el cargo con todas las formalidades constitucionales. El electo había cursado estudios en el Colegio de Monserrat y luego en la Universidad de San Carlos en Córdoba donde se graduó de Doctor en Teología en 1818; fue funcionario de gobierno de primera línea, diputado provincial, agente diplomático y destacado militar del ejército santafesino durante el gobierno de Estanislao López. Era miembro de la familia Echagüe y Andía, de origen vasco navarro instalada en Santa Fe desde fines del siglo XVII, varios de cuyos integrantes fueron el sostén político del gobernador santafesino durante sus 20 años en el cargo. Pascual estaba casado con la santafesina Manuela Puig Troncoso perteneciente a la élite local. Las familias de López y Echagüe Puig estaban relacionadas por el parentesco ritual del compadrazgo, un vínculo que no era de uso recurrente por parte de Estanislao López sino establecido preferentemente con este grupo familiar.<sup>232</sup>

Ortiz fue notificado del nombramiento por una copia del Acta acompañada de una nota dirigida al gobernador López para que manifestara su voluntario consentimiento y permiso, a fin de que Echagüe acepte el cargo. El intercambio epistolar reveló las intensas negociaciones entre las autoridades de ambas provincias. En principio, el electo en medio de sobrados agradecimientos renunció fundamentando ser ciudadano de Santa Fe y Jefe dependiente de su gobierno, lo que bastaría para hacer desistir al propio Congreso entrerriano. La respuesta de López indicó que habiendo cooperado para liberar a Entre Ríos del usurpador Espino no podía permitir tal designación por dos razones poderosas: por un lado, no quería alimentar maledicencias que afectaran su reputación

---

<sup>232</sup> Funes, José María (Dir.), 1950, pp. 19 y ss. Quinodoz, María Marta, La descendencia de Pascual Echagüe. Familias Funes y Zavalla en Revista del Centro de Genealogía de Entre Ríos, No. V, 2007. Libro de Bautismos 1814 a 1832, Archivo de la Catedral de todos los Santos, Santa Fe.

personal acusándolo de aspirar a dominar a una Provincia hermana y por otro lado, no quería comprometer lo acordado en el Pacto Federal sobre el respeto a la independencia de los pueblos, Pacto que ambas provincias habían firmado en enero de 1831. Asimismo, si prestara su consentimiento sería contradictorio con su respeto a las libertades públicas y pondría en peligro la tranquilidad interior de Entre Ríos.

Tanto Echagüe como López recibieron sendas cartas del Congreso Provincial entrerriano, en términos de súplica y pedido encarecido, para que se aceptara la designación. Los diputados apelaron a diversos argumentos para alcanzar el consentimiento: los vínculos sagrados e indisolubles que unían a ambos pueblos; la elección hecha en un ciudadano de la “República Argentina” con capacidad, virtudes sociales y calidades acorde a la Ley –con lo cual se tomó la letra estatutaria original de nativo de la Unión y no la modificatoria de 1826-; su condición foránea que lo excluía de la exaltación de las pasiones que atormentaban a la sociedad entrerriana; la necesidad de hallar paz interior pues desde 1823 todo era precario y azaroso. El peso de la apelación cayó sobre el gobernador López. Los diputados afirmaron que la amistad de Santa Fe garantizaría la gobernabilidad de Entre Ríos con Echagüe como primer magistrado por tanto, insistieron en pedir su permiso en nombre de sus sentimientos humanos y filantrópicos; en el remate del oficio se ponderó su buena reputación pública adquirida a costa de tantos sacrificios y se lo asoció a esa noción de figura redentora de una sociedad sumida en el caos: su consentimiento sería el único paso “para salvar a Entre Ríos de una catástrofe espantosa”. En el imaginario político no solo de los santafesinos sino también de las elites del Litoral, se le adjudicó una misión providencial para acabar con situaciones fuera de control. Las actuaciones concretas de López, tanto en la administración interior de Santa Fe como en las políticas interprovinciales, cimentaron la expansión regional de su poder; así, sus éxitos militares como jefe de las fuerzas federales frente a la Liga Unitaria, su habilidad política en las relaciones interprovinciales y su liderazgo indiscutible en su provincia donde, después de 1830, comenzó un giro hacia un poder supremo con amplias facultades, alimentaron ese imaginario.

Las cartas suplicantes de los diputados revelan una incapacidad de la propia sociedad entrerriana para superar el descontrol político interno, lo cual nos hace inferir una aproximación a la figura del Protector, conocida en la región cuando se conformó la Liga de los Pueblos Libres liderada por José Artigas. La incorporación de Echagüe al gobierno entrerriano inauguraba un sistema donde la garantía de gobernabilidad que ofrecía Santa Fe se asemejaba a una tutela política, solicitada voluntariamente por el Congreso Provincial.

El desenlace de esta situación fue rápido. En sus respuestas al Congreso ambos jefes santafesinos se prodigaron halagos recíprocos. López dejó en libertad a Echagüe para tomar la decisión y lo desligó de toda obediencia debida al gobierno santafesino como militar y como ciudadano en caso de aceptar. Echagüe, haciendo uso de esta libertad e implícito consentimiento, admitió la designación en términos de *primer sacrificio* tributado al pueblo entrerriano. Invocando las formalidades estatutarias, el Congreso Provincial le tomó el juramento de estilo el 1º de marzo de 1832. Pocos días más tarde el gobernador fue investido con facultades extraordinarias plenas mientras durara el receso estatutario del Cuerpo.<sup>233</sup> (Capdevila J.D., 2007: pp. 161-162)

---

<sup>233</sup> RLDAPER, T. III, pp. 388-402.

## **Capítulo V. TIPOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA: ¿MANDATO IMPERATIVO O MANDATO LIBRE?**

La elección como institución central del gobierno representativo nos coloca ante una cuestión crucial en una sociedad que sigue siendo corporativa: la caracterización del vínculo entre el titular de la soberanía y el que la ejerce en su nombre. ¿Cómo opera el principio de la libertad en este vínculo? ¿Acaso se puede ejercer esa representación de manera autónoma respecto de la voluntad del elector? ¿Cuál es el compromiso que asume el representante ante la delegación de poder y representación de los vecinos/ciudadanos?

Estos interrogantes nos introducen en el análisis de tipos de representación política con referentes en la “antigua constitución” o en pautas liberales, en las permanencias, cambios, adaptaciones y combinaciones de la política, que nos interesa ver en tiempos posteriores a la independencia en el Río de la Plata. En este análisis distinguimos la representación por mandato imperativo y la representación por mandato libre o libre deliberación, observando su uso y vigencia tanto en la dinámica institucional interna como en aquella que implica las relaciones con otras provincias. El mandato imperativo, proveniente del derecho privado medieval, convertía a los diputados en la expresión colonial de apoderados de los pueblos, de la cual el Procurador de ciudad es un caso, con la revocación del cargo si incumplía las estrictas instrucciones recibidas por parte de los poderdantes. En cambio, el mandato libre o libre deliberación, implicaba un tratamiento de los asuntos sin estar ajustados a los mandatos previos de los electores, propiciando intervenciones independientes de los representantes.

Esa distinción y su coexistencia nos colocan en las intersecciones entre la tradición y el cambio con las tensiones que esto naturalmente conlleva. En efecto, la discusión central en el Río de la Plata, que avivó tempranamente la dinámica de congresos y asambleas desde los inicios de la década revolucionaria de 1810, consistió en plantear dos formas opuestas de concebir la representación política que arrastraban tras de sí profundas diferencias referidas a la imputación de soberanía y comprometían seriamente el arribo a consensos. Una de ellas era la que sostenían los “pueblos” o sea las antiguas ciudades, devenidas luego de 1820 en provincias, que defendían su calidad soberana y su

capacidad autónoma de gobierno; desde esta concepción los diputados a congresos serían sus representantes sujetos a mandato. La otra era la sostenida por los partidarios de una organización político - institucional centralizada en términos de soberanía nacional y por consiguiente indivisa, bajo el liderazgo de Buenos Aires haciendo pesar su antiguo rango de capital virreinal. Los diputados a los congresos serían de la Nación y no de los pueblos o provincias con lo cual eran liberados de los mandatos que traían; un argumento inspirado en el principio representativo nacional expuesto por el Abate Emmanuel Sièyes en la Constituyente francesa de 1789 y que puede resumirse en uno de los conceptos proclamados por él: *“El diputado lo es de la nación entera: todos los ciudadanos son sus comitentes”*. Si triunfaban estos planteos en el espacio rioplatense, los pueblos o provincias quedarían imposibilitados de expresar su consentimiento o no a las leyes y otras decisiones que emanaran de dichas reuniones políticas, una situación que las tornaba indefensas ante la posibilidad de ver lesionados sus derechos locales. (Carré de Malberg, 1948: pp. 890-913, 961-966; Chiaramonte, 1997: pp. 165-169, 219-225).

### **V.1. La representación política interna: los diputados en el Congreso provincial entrerriano.**

Durante la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de las constituciones y leyes electorales de las provincias rioplatenses no establecieron nada sobre este vínculo entre representantes y representados lo cual infiere un impulso a la libre representación, por ende no atada a mandatos. Valgan como ejemplos de lo antedicho: el Estatuto de Santa Fe (1819), -la primera constitución provincial puesta en vigencia en el Río de la Plata-, la Constitución de la República de Tucumán (1820), la Ley electoral dictada en Buenos Aires (1821), el Estatuto de Entre Ríos (1822) –ejemplos que, luego, analizaremos más en lo referente a este aspecto de la representación política-, los Reglamentos provisorios constitucionales de Corrientes (1821 y 1824).

Poco sabemos sobre las prácticas políticas en torno al mandato en el interior de los recintos representativos provinciales, por lo cual esta parte de la investigación atiende especialmente a esa importante vacancia de conocimiento. En el estudio de algunas experiencias políticas en ese lapso, se ha notado que



la libre deliberación en las Salas de representantes desplazó al mandato imperativo dejando, sin embargo, a este tipo de representación circunscripto a los comisionados o agentes diplomáticos que tenían la misión de tratar con otras provincias o a los diputados para integrar Congresos. En efecto, estos agentes recibían órdenes, reglas y advertencias precisas para tener en cuenta en las deliberaciones de las asambleas donde ejercían la representación de toda la provincia. Recién en el Acuerdo de San Nicolás de 1852, en que se abre una nueva etapa política luego de la derrota de Juan Manuel de Rosas, esta forma de representación antigua y corporativa será anulada explícitamente. (Chiaramonte, en Sábato, H. (Coord..) 1999: p. 115) <sup>234</sup>

En Santa Fe, los Poderes expedidos por los diferentes distritos junto a las credenciales eran instrumentos habilitantes para el cargo de representante o diputado provincial. Estos Poderes muy generales, que reproducían casi una misma fórmula, autorizaban a actuar en el seno de la Sala con amplias facultades orientados en el “beneficio de la provincia”. <sup>235</sup> En ellos no hay registro de instrucciones hechas a los diputados en defensa de intereses particulares de las jurisdicciones a las que representaban; por el contrario, se los estimulaba a promover, discutir, sancionar a favor del mejoramiento del estado de toda la Provincia. Según los Poderes otorgados en los distritos rurales, los derechos que competían a sus habitantes se activaban cuando eran puestos en ejercicio junto con los demás, desdibujándose en el funcionamiento de la Sala santafesina

---

<sup>234</sup> Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, 31/5/1852, art. 6º: 6ª – El Congreso sancionará la Constitución Nacional, a mayoría de sufragios; y como para lograr este objeto sería un embarazo insuperable, que los Diputados trajeran instrucciones especiales, que restringieran sus poderes, queda convenido, que la elección se hará sin condición ni restricción alguna; fiando a la conciencia, al saber y el patriotismo de los Diputados, el sancionar con su voto lo que creyesen más justo y conveniente, sujetándose a lo que la mayoría resuelva, sin protestas ni reclamos.

<sup>235</sup> AGPSF, Tomo 1 – A, Varios Documentos, Elección de diputado del Rosario, febrero de 1828. PODER. “Sea notorio a todos los habitantes de la Provincia como los infrascriptos vecinos de la Villa del Rosario, usando de nuestras facultades, damos nuestro poder tan general y bastante como de derecho se requiere y sea necesario para que más valga al Señor Secretario Don Pedro Larrechea nuestro Diputado para que sea incorporado por su competente Credencial a la Junta de Representantes, poniendo en ejercicio los derechos que más competen con los demás promueva, discuta y sancione lo que considere conducente a mejorar el Estado de la Provincia. Y será habido por tan firme como si nosotros mismos lo discutiéramos y sancionásemos, pues para lo expuesto, lo que ello fuese anexo le conferimos poder amplio y absoluto que no por falta de cláusula aunque requiera especial deje de tener cumplimiento o efecto cumplido. Y aseguramos por la fe y por la palabra de honor el valimiento y firmeza de lo que en esta razón se practicase en testimonios de lo cual lo otorgamos y firmamos en esta Villa del Rosario de los Arroyos, el primero de febrero del año mil novecientos veinte y ocho. Firmado: Juan Manuel Aldao, Manuel Alcácer y Santiago Correa”.

lo que podía llegar a ser una representación del distrito electoral que nombró al diputado.<sup>236</sup> Aquí parecería que la elección en sí misma había agotado el derecho de participación del “pueblo” en ejercicio de su soberanía, puesto que no se visualiza la posibilidad expresa de revocar cargos ni tampoco existen registros de ello. Estaríamos entonces ante un mandato libre, apenas restringido por una advertencia asentada en los Poderes, bastante laxa por cierto, de procurar el beneficio de la provincia y el bienestar general, que instruiría implícitamente sobre la conveniencia de no generar o aceptar disposiciones que atenten contra los intereses provinciales y sus habitantes. Consideraciones que se verían confirmadas en 1822 por una exposición del diputado por el Departamento santafesino del Rosario, Juan Francisco Seguí, referida a un conflicto suscitado por la conducta supuestamente arbitraria de un diputado. En ella menciona, por una parte, la carencia absoluta de instrucciones para actuar en la representación y por otro, la necesidad de que el cuerpo político procurase actuar en unidad de opinión.<sup>237</sup>

En Buenos Aires, la legislación electoral de 1821, emanada del gobierno de Martín Rodríguez bajo el liderazgo de su ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia, abandonó de hecho el mandato imperativo y con ello se despojó del carácter de apoderados a los representantes. En Tucumán, la Sala de Representantes fundada en 1823 y a la que se accedía a través de elecciones directas casi regulares, se compuso de diputados que actuaban prácticamente sin la sujeción del mandato imperativo (Chiaramonte, Ternavasio, 1995; Macías, 2010).

En Entre Ríos, las actas electorales disponibles no registraron instrucciones precisas para el diputado electo al Congreso provincial, solo una escueta fórmula en el cierre fijaba el otorgamiento de poder y facultades generales, lo que hacía presumir que estábamos ante la misma caracterización

---

<sup>236</sup> Uno de los más vehementes opositores al funcionamiento del Mandato Imperativo en la Constituyente de 1789, el diputado Bertrand Barère, expresó que “la potestad legislativa sólo empieza en el momento en que queda constituida la asamblea general de los representantes”. Así Barère consideraba que en el momento de la elección, las bailías no podían dictar instrucciones a sus representantes porque esa potestad no existe en las circunscripciones electorales y menos en los diputados individuales.

<sup>237</sup> AGPSF, Tomo 1 – A, Varios Documentos, folio 225.

del caso santafesino.<sup>238</sup> No obstante, algunas importantes evidencias revelaron la vigencia del mandato imperativo en la representación política interna con ciertas particularidades. Hacia 1823, la Legislatura dirigió al gobernador dos oficios, uno “en nombre de sus comitentes” y otro como “Honorable comitente”, enunciando a la figura de comisarios o mandatarios propia de un acuerdo contractual de tipo privado.<sup>239</sup> En 1825, el Congreso provincial evaluó la petición del pueblo y suburbios del Uruguay solicitando la separación del diputado por el Uruguay, Anselmo Jurado, sin razones manifiestas aunque en términos muy injuriantes. A juicio del Cuerpo, era necesario que “en uso de sus derechos” sean consultados también los distritos rurales que habían elegido a ese diputado; así, el mandato tenía origen en el conjunto del distrito electoral: pueblo y campaña. Finalmente Jurado fue separado y reemplazado mediante elección por Manuel Antonio Urdinarrain, hacendado y militar.<sup>240</sup> En 1829, a través de un Manifiesto a los habitantes de la provincia, el gobernador León Solas transmitió su visión crítica acerca del funcionamiento del Congreso Provincial; por este Manifiesto se instó a deliberar a los Pueblos para convalidar o rechazar su solicitud de remoción total de los diputados provinciales; los pueblos eligieron electores y formaron Comisiones eventuales para emitir dictamen.<sup>241</sup>

Entre 1826 y 1827, la Junta Electoral de la Villa de Gualeguaychú y sus distritos –localizados en el Departamento II Principal– otorgó instrucciones precisas a Fray José Manuel Funes, su representante en el Congreso Provincial. De todos modos, le permitieron cierto margen de autonomía aclarando que podían considerarse modificaciones “al menos que lo exijan el sostén de la independencia, derechos naturales o intereses nacionales”, “a no ser que se demuestre ser de absoluta necesidad para la defensa común”.

Las instrucciones, firmadas por los electores Pedro Ceballo, Juan Aguilar, Ramón Crespo y Francisco Nadal por el pueblo, por Eugenio Echasarreta por la campaña y rubricada por Facundo Nadal como secretario, fueron distribuidas en

---

<sup>238</sup> Las actas consultadas corresponden a las elecciones analizadas en el Apartado anterior incluido en este capítulo.

<sup>239</sup> RLDAPER, T. I, pp. 253-254; 315-317.

<sup>240</sup> RLDAPER, T. II, pp. 52, 54-55. AGPER, Libro 1 Bis del Congreso de Entre Ríos, fs. 25-26.

<sup>241</sup> Manifiesto de León Solas. AGPER, Gobierno 1, Caja 17, Legajo 6, fs. 171 a 241. Solo se encuentra anexa al expediente la actuación de la Comisión eventual formada en el Uruguay.

un articulado dividido por asuntos de Política, Economía, Guerra y Justicia, totalizando la considerable cantidad de 34 artículos.<sup>242</sup>

Las preocupaciones principales plasmadas en las instrucciones de los electores de Gualeguaychú a Funes atravesaron problemas de gran importancia para el proceso político de construcción estatal, la vida social y la economía de la provincia de Entre Ríos, sin limitarse al interés departamental y sin dejar de considerarlos dentro de la realidad política rioplatense.

¿Cuáles son los asuntos privilegiados en ellas? La reafirmación de la vocación de “Estado independiente” ya estipulado en el Art. 1 del Estatuto de 1822 y la promoción de relaciones interprovinciales sobre bases de paz y cordialidad encabezaron el escrito, alineándose luego una serie de artículos que atendían a cuestiones internas candentes como el rechazo a las situaciones de “anarquía” política que habían tenido su más cercano antecedente en las disputas por la gobernación entre León Solas y Ricardo López Jordán, casi al punto del choque armado. Independencia, paz y orden en la política pero también claras alusiones al respeto de rasgos básicos de un régimen republicano: por un lado, salvaguardar la división de los tres poderes de cualquier medida o práctica que llevara a una concentración en uno solo traspasando sus respectivos límites y por otro lado, proporcionar la debida información de los asuntos públicos que se haría a través de la prensa provincial gratuita a todos los ciudadanos.

La economía no estaba fuera de la óptica de estos electores. Sus instrucciones se remontaron a diversas situaciones bélicas sufridas en el Río de la Plata o en la misma provincia ya desde 1810 y su impacto en la economía entrerriana. Las guerras de revolución y las civiles, en la distinción misma de los electores, habían traído muchos perjuicios a sus habitantes fundamentalmente en la existencia de ganado. En este sentido, debía solicitarse un empréstito importante entre 500.000 y 1.000.000 pesos efectivos a bajo interés con garantía

---

<sup>242</sup> Instrucciones que la Junta Electoral de la Villa de Gualeguaychú y sus Distritos da a su Representante en el Honorable Congreso Provincial, R.P. Fray José Manuel Funes, en AGPER, Gobierno, Serie V, Caja 1, Leg. 13. Si bien estas instrucciones que no tienen fecha están catalogadas en la Caja documental de 1827 suponemos, luego de contextualizarlas, que las mismas pudieron ser dadas al momento de ser elegido Funes en julio de 1826 y desagregadas del acta electoral.

del patrimonio provincial compuesto por terrenos, ganados, derechos aduaneros, considerado necesario para recomponer el stock ganadero y, en consecuencia, repoblar las estancias de aquellos que hubieran tenido pérdidas justificadas legalmente. La fuerza de trabajo también fue un factor a defender al requerir una ley que no permitiera el desplazamiento de hombres y/o familias fuera de la provincia salvo por decisiones espontáneas, entendiendo que tendrían consecuencias lesivas a las posibilidades económicas de la provincia. Quizás, el envío de una formación militar compuesta por jefes, oficiales y 200 Dragones con sus respectivas familias, con destino a la provincia de Buenos Aires como parte del convenio interprovincial firmado en noviembre de 1823 obraba como un antecedente negativo al respecto y como un excesivo acercamiento a Buenos Aires de parte del grupo de Paraná, postura que el grupo del Uruguay siempre resistió. (Calvento, 1940: 76-77).<sup>243</sup> El progreso en las actividades pastoriles, agrícolas, industriales y comerciales también fue recomendado como promoción y afirmación del crecimiento económico. En este sentido, la propuesta de concesión de excepciones, goces y privilegios a los pobladores que hicieran mérito en ese progreso se la vinculaba a posibles aumentos de la población y de la producción general. El levantamiento de un censo con datos de sexo, edad, naturaleza, ocupación y capital, pese a que no está fundamentado, proporcionaría información necesaria para delinear políticas económicas.

La importante cuestión del orden social fue abordada al pedir aplicación efectiva de las leyes para aprehender a reos y vagos y en caso de no haberlas, dictar las disposiciones necesarias. Cárceles de corrección, empleo de estos sujetos en trabajos públicos, promoción de buenas costumbres y de buena convivencia entre los reconocidos como ciudadanos y aquellos que no tenían este privilegio fueron parte de lo instruido a Funes.

---

<sup>243</sup> RLDAPER, T. I, Convención ajustada en la Villa de Concepción del Uruguay 9/11/23, pp. 331-333. La Convención especial acordada entre el Sr. Gobernador de ER y el Comisionado del Exmo. Gobierno de Buenos Aires cerca de los del Norte comprendía los artículos siguientes: 1-El Sr. Gobernador Mansilla remitirá al servicio del Estado de Buenos Aires 200 dragones con sus mujeres e hijos, jefes, oficiales, armas, monturas luego que lleguen al Arroyo de la China los transportes con víveres que al efecto remitirá el gobierno de Buenos Aires; 2- A su vez, promete aumentar esta fuerza según lo permitan las circunstancias de Entre Ríos; 3- Permitirá en su Provincia banderas de reclutas si el gobierno de Buenos Aires tuviese a bien valerse de este arbitrio para engrosar su ejército; 4-El gob. de BA suministrará a la Provincia de ER por estos servicios 30.000 pesos.

La guerra había traído perjuicios económicos individuales. Los electores, citando una resolución del Gobierno central revolucionario difundido en el periódico La Gazeta del 25 de noviembre de 1810, reclamaron al gobierno correspondiente el pago de los sueldos de las milicias entrerrianas que engrosaron al ejército revolucionario en distintas instancias entre 1810 y 1819 y de aquellas que intervinieron en la guerra del Orden, como llamaban a los sucesos de setiembre de 1821 que permitieron el acceso al poder de Lucio Mansilla. Propusieron también el Montepío militar para las viudas de oficiales y soldados muertos en esas guerras y el abono de suplementos hechos por Entre Ríos a las tropas acantonadas y en tránsito a los dos sitios de Montevideo de la década de 1810. Por otra parte, se recomendó que el territorio provincial no sea sometido a terreno de guerra e introducción de tropas de otras provincias o bien del Gobierno de la República con sede en Buenos Aires, considerando el perjuicio económico que implicaba pero quizás también evaluando que esto hacía peligrar la soberanía provincial. Es necesario recordar que, a fines de 1825, el Ejército de Observación enviado por Buenos Aires se instaló a la vera del Arroyo del Molino, próximo a la Villa del Uruguay, a fin de organizar una eventual campaña contra el Brasil; Tomás de Iriarte en sus Memorias registra por un lado la escasa colaboración en hombres por parte de la provincia de Entre Ríos –lo que ameritaría una comprobación empírica-, atribuida a la persistente aversión entrerriana a los porteños y por otro lado, los perjuicios causados por gran número de desertores que se dedicaron a causar desórdenes y robos en los pueblos y establecimientos de la costa del Uruguay.( Urquiza Almandoz O., Tomo I, pp. 466-470)

Una época de alta inestabilidad en la región hacía necesario disciplinar e instruir a las milicias provinciales, dotarlas de los mejores hombres y ordenar de manera uniforme sus tácticas militares para lograr mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos internos. Los electores instruyeron a Funes sobre estas necesidades remarcando que los Departamentos eran la base para organizar esa tarea de reforma militar.

La Justicia y la educación también fueron materia para instruir. A la Justicia se le pidió prontitud, claridad e imparcialidad en su administración teniendo en cuenta el principio consagrado de la igualdad ante la ley. En cuanto

a la educación, se advirtió sobre la necesidad de su perfeccionamiento en tanto afirmaba la “civilización” de la sociedad.

Partiendo de la riqueza testimonial de este documento, lo interesante es indagar en las respuestas concretas que generaron estas instrucciones a través de medidas y disposiciones tanto del Congreso provincial como del gobernador. Observando el período de actuación de Funes como representante de Gualeguaychú es de notar que algunas de ellas tuvieron cierto grado de cumplimiento mientras Justo José de Urquiza se desempeñaba como Presidente del Congreso y Mateo García de Zúñiga como gobernador –líderes políticos del Departamento II Principal de donde provenían esas instrucciones-. En diciembre de 1826, Funes y Urquiza habían formado parte de una comisión sobre política monetaria en la que coincidieron en el voto y opinión (Bosch, 1978: pp. 102-104). Podemos suponer que lo instruido formó parte de las preocupaciones de un grupo de liderazgo proveniente de la costa del Uruguay, que se pronunció en contra de la política emanada de Paraná y reconoció más de una vez la vigencia de reglas estatutarias incontestables en un régimen representativo, algunas de cuyas evidencias las tratamos en el Cap.IV, inciso 2b.

Si bien no encontramos, por ejemplo, registros sobre empréstitos de la magnitud de lo solicitado o levantamientos censales, sí confirmamos una serie de medidas relacionadas con el texto elaborado por los electores: 1- por Resolución del Congreso se ordenó el regreso a Buenos Aires de las tropas organizadas en un Regimiento de Caballería de línea, destinadas a las Misiones por el Gobierno de la República con sede en Buenos Aires y que estaban acantonadas en Gualeguay; según se argumentó la causa fue la alarma y descontento general manifestado en la población. El dictamen se completaba con la aclaración de que no se permitiera más el desembarco de ninguna otra fuerza; 2-el pedido de perfeccionamiento de la educación se concretó a través de una ley del Congreso que dispuso la fundación de dos escuelas, una en Paraná y otra en el Uruguay, para educar e instruir a la juventud en el sistema lancasteriano de gran predicamento para la época; 3- dos Decretos y adicionales firmados por el gobernador García de Zúñiga en uso de facultades extraordinarias atendieron a la reforma militar, con profundos cambios que alcanzaron a las fuerzas veteranas y de milicias en su composición,

funcionamiento, custodia del poder político y refuerzo eventual en la tarea de los jueces.<sup>244</sup>

En su estudio sobre el nexo entre herencia colonial y liberalismo en México, Antonio Annino afirma que las instrucciones otorgadas al Procurador colonial de ciudad son una expresión de una idea de soberanía territorial. En esa etapa de dominación imperial, el Procurador representaba una soberanía territorial que en la misma legislación colonial aparecía autónoma de la soberanía regia (Annino, A., 1992: p. 72.)

Las características de las instrucciones que hemos analizado nos acercan elementos para reflexionar sobre una transformación de la soberanía territorial a partir de 1820 con la aparición de las nuevas formas de entidad política en formación que se asumen como soberanas e independientes. De la soberanía del “pueblo” o “ciudad” se pasa a una soberanía territorial radicada en la jurisdicción provincial puesto que las facultades de los diputados están orientadas al beneficio de la provincia y sus habitantes, no limitándose a intereses departamentales a lo que se agrega la propia percepción del Congreso entrerriano en tanto se define como “Honorable comitente”. Parafraseando al Abate Sièyes: *“El diputado lo es de la provincia entera: todos los ciudadanos son sus comitentes”*

La concepción de la representación política para la época también surgió en la decisión de León Solas de comunicar públicamente algunas acciones de reclamo ante el Congreso Provincial por su deficitario funcionamiento, y en particular, sobre uno de los diputados por no cumplir con su obligación de integrar el Cuerpo; como colofón del Manifiesto de 1829 requirió la deliberación de los Pueblos para apoyar o rechazar su pedido de remoción total de los diputados provinciales. En una larga exposición, Solas explicó algunas instancias pasadas de conflicto interno en las que procuró resaltar sus antecedentes de conducta respetuosa a los magistrados, mantenimiento del orden y ejercicio responsable de su alta función, al estilo de la “probanza de méritos y servicios”

---

<sup>244</sup> RLADPER, T. II, p. 186, Ley del 22 de agosto de 1826; pp. 191-192, Resol. del 1º de setiembre de 1826; Decretos y adicionales: pp. 246-252, 16 de marzo de 1827 y pp. 270-279, 1 y 2 de junio de 1827.



muy usual en la antigua administración colonial. El eje de la crítica se centró en la falta de cumplimiento de sus obligaciones de Juan Bautista Escobar, diputado por Gualeguaychú, por inasistencia al Congreso, máxime en tiempos en que debían atenderse urgentes asuntos de Estado con acuerdo de todos los diputados. Uno de esos asuntos consistía en responder al auxilio militar solicitado por la Convención reunida en Santa Fe para conformar el Ejército federal, comandado por su aliado y protector Estanislao López; con estas acciones se pretendía derrotar al partido unitario instalado violentamente en la gobernación de Buenos Aires, pues se temía la expansión de esa tendencia en el resto del territorio rioplatense.<sup>245</sup>

Escobar, quien residía habitualmente en Paraná y había sido diputado por esa Villa durante el bienio 1824 – 1825, no había cubierto las expectativas tanto de sus electores como del gobierno en orden a facilitar la integración del Congreso. Solas se encargó de resaltar esta situación en el Manifiesto:

...la Villa de Gualeguaychú lo nombró en consideración á ser un vecino capaz de poder mantenerse como siempre, sin tener que retirarse a otra vecindad distante, y que estubiese pronto para quando se reuniese la Corporación.....

...quando su nombramiento fue baxo la seguridad de que residiendo en esta Ciudad no daría motivo á retardar los asuntos que podían ofrecerse al Gobierno y Provincia en la reunión de la Sala...<sup>246</sup>

En setiembre de 1828, con el pretexto de charquear unas reses en Villaguay, Escobar salió de Paraná pero para dirigirse en realidad a las Misiones con sus hijos para atender los negocios particulares. Por esta razón no concurrió a integrar el Congreso por el término de 7 meses, ni tampoco a la convocatoria a sesión extraordinaria que se realizó. Según Solas, el diputado Escobar no pidió licencia al Congreso ni cumplió con la Ley de Pasaportes del Gobierno al desplazarse fuera de la provincia, lo que constituyó una acción ilegal. Su pedido de remoción fundamentado en esto y en el incumplimiento de obligaciones fue resistido por el Congreso, al parecer por interpretar que lo solicitado por el gobernador era un avance sobre las atribuciones de otro poder del Estado; es más, el cuestionado diputado fue recibido nuevamente en el seno

---

<sup>245</sup> Cf. *Representación Nacional en Santa Fe, 1828-1829, 1928*, pp. XLIV-XLV.

<sup>246</sup> Manifiesto, pp. 186 y 200.

del Cuerpo con el nombramiento de Vicepresidente.<sup>247</sup> Basándose en el planteo de que esa resistencia corporativa desconocía lo establecido en el Estatuto sobre la composición y funcionamiento del Congreso, Solas extendió en el Manifiesto el pedido de remoción a todos los diputados y pidió opinión sobre el asunto a los “Pueblos” de Entre Ríos. La deliberación general se convocó sobre el principio de la soberanía popular y en el atributo del pueblo para retirar los poderes a sus diputados. En octubre de 1828, por otros asuntos el mismo Solas había expresado:

...los mismos electores cuando se reúnan en nombre de los Pueblos puedan nombrar otros diputados que sustituyan a los actuales, ó bien a petición de los mismos ó por causas que tengan, por ser propio de la soberanía de los pueblos deliberar sobre lo que les sea más conveniente á su utilidad...<sup>248</sup>

El 11 de abril de 1829, en medio de este conflicto de poderes y poco antes de redactar su Manifiesto, Solas fue más preciso en su mensaje a la Legislatura al pedir la remoción de Escobar:

(Según) las leyes y las prácticas constantes todo poderdante es árbitro en retirar los poderes á quien los había confiado cuando lo tenga por conveniente y transferirlos á quien lo tenga por oportuno. Esta regla es tan cierta y necesaria en su práctica a todos los pueblos, que en el caso de no seguirse se abre la puerta a muchos males; y sucedería en el día a esta Provincia si tratase de retirar los poderes al Diputado que está en la Convención [*Nacional reunida en Santa Fe desde 1828*], y esta estableciese que la Provincia no tiene facultad para mudar cuando gustase, su representante, de donde resultaría que este, bajo de este antecedente se consideraría abrigado de la autoridad y haría lo que dictase su capricho en bien o mal de la Provincia, como sucedió a los SSDD de las Provincias en el espresado Congreso Constituyente de Buenos Aires [*de 1824 a 1827*].

Bajo de estos antecedentes el espresado Sr. D. Juan Bautista Escobar, está mudado por causa justa por haber perjudicado al despacho de muchos asuntos pendientes, á los SSDD que se reunieron y al estado actual de los asuntos de guerra... bajo cuyo antecedente y constante el Gobierno, en que la soberanía está en los pueblos, no puede reconocer el espresado D. Juan Bautista Escobar por diputado de Gualeguaychú por evitar los resultados del agravio... contra sus comitentes...”<sup>249</sup>

El 10 de mayo de 1829, el Alcalde Mayor Domingo Fructuoso Calvo convocó al pueblo del Uruguay para deliberar sobre lo expuesto en el Manifiesto. Los ciudadanos/vecinos reunidos eligieron 5 electores para formar una Comisión eventual que tratara el asunto. El 7 de junio de 1829 dicha Comisión, comunicó

---

<sup>247</sup> RLDAPER, T. III, p. 21. AGPER, Libro 1 Leyes, Acuerdos y Decretos del HC de Entre Ríos, fs 10, 80-81.

<sup>248</sup> RLDAPER, T. II, pp. 436-437.

<sup>249</sup> RLDAPER, T. III, pp. 22-23. Aclaraciones nuestras entre corchetes.

públicamente su dictamen, en los términos comentados que siguen. Basados en el principio de justicia universal y en los principios del gobierno representativo, republicano y federal que había adoptado la provincia, creyeron necesario oír las voces de los diputados acusados de infringir la ley, dado que su prescindencia podría conducir a una resolución prematura e ilegal. Luego de evaluar como difuso y vehemente al Manifiesto, los comisionados entendieron que era un asunto grave pedir la remoción de los diputados, considerados como *“ciudadanos y apoderados de los pueblos”*, a quienes se les debía garantías representativas. Si se pretendía que los Pueblos sean Jueces de sus representantes entonces los comitentes debían escuchar las razones de los acusados, para fallar con justicia, con imparcialidad sopesando las causas de uno y de otro, máxime cuando la denuncia involucraba a dos poderes del Estado; manifestaron que no hacían más que regirse por las leyes de la naturaleza misma, verdades eternas nunca desmentidas ni contrastadas. Un artículo del Estatuto, el 107 de la Sección 11º Derechos Particulares, en el que Solas había apoyado su argumentación, fue recogido por los comisionados para fundar mejor el pedido de recibir el descargo y la defensa de los diputados acusados: *“todos los miembros de la provincia tienen derecho para elevar sus quejas y ser oídos hasta de las primeras autoridades de ella”*. Luego de enumerar una serie de consecuencias funestas para los diputados, en caso de ser juzgados y condenados sin descargo, remataron el escrito con la siguiente frase:

...Consecuencias Señores á la verdad funesta que solo puede ser ideada por el despotismo, difundirse por la superstición y adoptarse y sostenerse por solo los tribunales (que ya no existen) de la Inquisición.”

La importante cuestión de la división de poderes estaba en discusión: los comisionados afirmaron que no permitirían que el Poder Ejecutivo se constituyera en juez y parte resolviendo sobre la remoción de los diputados, pues con ello daría el último golpe a las garantías y a las libertades. Fundamentándose en la razón, la justicia y las fórmulas representativas produjeron su dictamen en 8 artículos que fue aprobado unánimemente por todos los presentes al acto público, los que reproducimos de manera comentada: el gobierno entregará el manifiesto al Congreso Provincial el que hará el descargo correspondiente; mientras tanto el mismo Gobierno ordenará que en

todos los departamentos se haga el nombramiento directo de individuos de probidad e imparcialidad que no tengan empleos o cobren sueldos de la provincia: dos por la ciudad de Paraná y uno por cada uno de los distritos rurales Matanza, Nogoyá, Gualeguay, Tala y Feliciano –o sea el Departamento I Principal-; dos por la ciudad del Uruguay y uno por cada uno de los distritos rurales de Gualeguaychú, Gualeguay, Lucas y Mandisoví –o sea el Departamento II Principal-, cada uno de estos individuos, munido de credencial firmada por el Alcalde y tres vecinos, pasará a reunirse junto con los demás en Comisión eventual en Lucas por ser este lugar más céntrico y distante de la sede del gobierno y del Congreso; teniendo a la vista el descargo de los diputados emitirá su fallo el que será comunicado al Congreso y a los Pueblos. Esta propuesta de representación territorial electoral no se ajustaba a la estatutaria de 1822 dado que por un lado, ya se había producido una nueva jerarquización urbana y rural y por otro, se restringió a la vez que se igualó la representación en los dos ámbitos. La Comisión eventual disminuyó en la mitad al voto en las ciudades y a todos los distritos rurales se les asignó el mismo piso representativo de 1 elector. La suma de electores daba supremacía de 7 por el I Principal sobre 6 por el II Principal. Del total de 33 electores en 1822 se bajaba sensiblemente al número de 13.

Luego de estos críticos episodios, la mayoría de los diputados objetados por León Solas se mantuvo en sus cargos. El único diputado separado del Congreso fue José Miguel Romero, representante de Nogoyá; según el acta proveniente del Departamento I Principal, Romero había faltado a las leyes y eso era causa de revocación; otro testimonio que hace inferir que la deliberación popular para remover o ratificar a cada diputado por sus electores “mandantes” se concretó. Por su parte, Juan Bautista Escoba no solo siguió desempeñando su cargo sino que llegó a presidir el Congreso en julio de 1829 y recibió, como única sanción, la suspensión del pago de su sueldo como diputado por los meses en que estuvo en las Misiones sin integrar el Cuerpo.<sup>250</sup> Resultados que fueron aceptados por el demandante “Poder Ejecutivo” según se desprende de las actuaciones posteriores que lo involucraron con el Congreso Provincial. A la

---

<sup>250</sup> RLDAPER, T. III, pp. 39, 70-71.

vez, se puso en práctica la ley de duplicación de representantes sancionada en 1828, largamente reclamada por el “Poder Ejecutivo” para dar agilidad a las discusiones y resoluciones del Congreso.<sup>251</sup>

## **V.2. La representación política externa: agentes diplomáticos, comisionados, diputados, encargados de negocios.**

En estos tiempos de grandes cambios políticos, conflictos latentes o explícitos y situación de provisoriedad, el manejo de las relaciones interprovinciales era crucial para rearticular a los estados provinciales rioplatenses en formación, reformulando viejos vínculos, defendiendo derechos locales y no cejando en encontrar una organización supraprovincial que los reuniera. Este asunto de gran interés político fue canalizado de manera formal a través de comisionados de distinta jerarquía. Tanto los Congresos y Convenciones constituyentes celebrados como los Pactos de alianza contaron con la representación de diputados de distintas provincias dotados de carácter diplomático, generalmente asentado así en sus designaciones, y con mandatos expresos sobre la posición que debían defender en sus deliberaciones.<sup>252</sup>

Ese carácter diplomático de los diputados nos coloca ante la naturaleza de estas entidades políticas reconocidas a sí mismas como soberanas e independientes y por tanto, sujetos de derecho internacional. (Chiaramonte, 1993: 118-119). Justamente, la noción generalizada de congreso, pacto o alianza entre dos o más provincias para la época se resumía en la expresión “*asociación parcial de Estados*”. Una expresión utilizada en 1824 por parte del Congreso Provincial cuando adicionó instrucciones a sus Diputados al Congreso Constituyente a reunirse en Buenos Aires:

... Si desgraciadamente el Congreso General no tuviese efecto, o se disolviese luego de reunido, están facultados los Diputados de Entre Ríos para

---

<sup>251</sup> RLDAPER, T. II, pp. 424-425.

<sup>252</sup> En Santa Fe, se compartían ciertos códigos de organización reconocidos por las otras administraciones provinciales tendiendo a afirmar relaciones de convivencia en vistas a un futuro vínculo más durable entre las provincias. En el caso de la creación de Secretario de la Sala de Representantes, el Gobernador expresó que “... se le dará entero crédito para todos los Tribunales y Jueces de esta provincia, puesto que aún las de fuera y sus respectivos diplomáticos no exigen otra solemnidad y se respetan recíprocamente.” AGPSF, Notas y Comunicaciones del Cabildo, Tomo IV, 1819-1832, fs. 92-93.

tratar con las demás Provincias, que están legalmente autorizadas para igual caso, la formación de una asociación parcial de Estados, dando cuenta inmediatamente al Congreso Provincial, para ratificar o reformar su acuerdo...Las provincias que de este modo se unan deberán ser precisamente limítrofes con Entre Ríos, y si no pudieran serlo todas, una al menos, debiendo serlo las otras entre sí... Se recomienda muy particularmente se pongan todos los medios para que entre en este acuerdo el Estado de Buenos Aires.<sup>253</sup>

Estas menciones nos vuelven a situar en el proceso iniciado hacia 1820 con la construcción de estados provinciales y la necesidad siempre latente de reunirse en alguna entidad supraprovincial, objetivo al que se podía llegar desde diversos derroteros. No había una única fórmula ni una única estrategia sino, por el contrario, los caminos abiertos eran variados.

El Derecho de Gentes, no solo como relativo a la ciencia jurídica sino como fundamento de la ciencia política y social de la época, regulaba las relaciones recíprocas entre los Estados del mundo occidental. Uno de sus teóricos más reconocido e influyente, Emmer du Vattel, sostuvo que las condiciones suficientes para la existencia de la nación eran su soberanía e independencia “*es decir, que se gobierne a sí misma, por su propia autoridad y leyes*”. El polifacético venezolano Andrés Bello, en su importante obra jurídica sobre los principios del *Derecho de Gentes* y luego sobre *Derecho Internacional* como nueva denominación, recurrió frecuentemente a la doctrina de Vattel y de otros como Hugo Grocio, Samuel Puffendorf, von Martens, entre otros, estableciendo un ejercicio jurídico comparado de gran valor. Justamente en la última obra citada, Bello expresa:

La cualidad especial que hace a la nación un verdadero cuerpo político, una *persona*, que se entiende directamente con otras de la misma especie bajo la autoridad del derecho de gentes, es la facultad de gobernarse a sí misma, que la constituye independiente i soberana... Toda nación, pues, que se gobierna a sí misma, bajo cualquiera forma que sea, i tiene la facultad de comunicar directamente con las otras, es a los ojos de éstas un estado independiente y soberano.<sup>254</sup>

Los Estados provinciales se sometieron voluntariamente a ese derecho que respetaba, confirmaba e incluso legalizaba su soberanía. (Passerin d'Entreves, A, 2001: Cap. VIII).

---

<sup>253</sup> RLDAPER, T. I, 420-421. Expresión utilizada en las Instrucciones del HCP de Entre Ríos a los Diputados al Congreso General Constituyente reunido en Bs Aires, fechadas el 15/7/24.

<sup>254</sup> Bello, A. 1886, p. 31. Acceso: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-completas-de-don-andres-bello-volumen-10-derecho-internacional/> (Consulta 26/11/ 2013)

Sabemos que las relaciones diplomáticas entre reinos, naciones, Estados, tienen remotos antecedentes desde la Antigüedad. El antiguo Código español de las Siete Partidas reconoció estas antiguas prácticas de relacionamiento y dejó sentada cierta preceptiva acerca de sus características y de los derechos que les asistían a los mensajeros o emisarios. Con el tiempo la institución diplomática se fue convirtiendo en un derecho de las naciones para vincularse según sus intereses y en una necesidad para mantener y afirmar el equilibrio político, tal fue uno de los objetivos fundamentales de lo establecido en el Congreso de Paz de Westfalia de 1648. Estas reglas de Derecho de Gentes se irán profundizando en sus alcances y protocolos, especialmente desde el siglo XIX. El Congreso de Viena de 1815 y sus modificaciones en el Congreso de Aquisgrán de 1818 definieron con mayor precisión las clases de Agente Diplomático, aunque todas ellas ejercían la representación del Estado acreditante. Tanto el envío de agentes diplomáticos como su aceptación y recepción era facultad de Estados soberanos (Bello, A., 1886: pp. 155-156).<sup>255</sup> En el Río de la Plata, el periódico porteño *El Censor* publicó en agosto de 1816 un artículo con el objeto de instruir sobre esa clasificación, contemporáneamente a los intensos debates sobre el problema de la representación política en el seno del Congreso Constituyente reunido en Tucumán (Chiaramonte, 1997: Doc. No. 38, pp. 401-406). Estas preceptivas tuvieron amplia circulación y fueron adoptadas por las administraciones provinciales en el Río de la Plata, en su carácter de soberanías particulares.

El mecanismo de elección de estos representantes al exterior de las provincias y el otorgamiento de instrucciones tenían directa correspondencia con el equilibrio de poderes político- institucionales. Si el Poder Ejecutivo era fuerte y concentrado, las posibilidades de abrir la designación a la Legislatura era por lo menos restringida. En provincias de caudillos con amplias facultades las legislaturas o congresos provinciales ocuparon generalmente el lugar de la consulta, el acompañamiento de las políticas del gobierno y la legitimación de sus acciones. Entre 1818 y 1838, Santa Fe muestra algunas alternativas en este

---

<sup>255</sup> De la Escosura, P. 1853, pp. 152-155.

Acceso: [http://books.google.com.ar/books/about/Diccionario\\_universal\\_del\\_derecho\\_espa%C3%B1ol.html?id=dEkfsduRyX8C](http://books.google.com.ar/books/about/Diccionario_universal_del_derecho_espa%C3%B1ol.html?id=dEkfsduRyX8C) Consulta 19/11/2013.

sentido en tanto, en la elección de sus diputados a Congresos y reuniones interprovinciales, Estanislao López –quien se mantuvo esos 20 años en su cargo- tuvo directa injerencia y última opinión. Su intervención fue creciendo a medida que su poder se iba convirtiendo en supremo. En la década de 1820, las instrucciones, a cargo de una comisión *ad hoc* formada generalmente por letrados y funcionarios del gobierno, pasaban indefectiblemente a vista del gobernador para su visado y adición de lo que creyera conveniente. Las actuaciones del diputado y el estado de los debates eran comunicados a la Legislatura la que esperaba informes instructivos del gobernador para expedirse.<sup>256</sup> Los comisionados o diputados destinados a la concertación de tratados interprovinciales fueron nombrados por el mismo gobernador; en algunos casos el privilegio de una relación de confianza pareció marcar estas designaciones, adquiriendo visos de enviados personales.<sup>257</sup> A juicio de la autoridad provincial santafesina, estos comisionados no presentaban incompatibilidad con el ejercicio de cargos públicos; podían ser de modo simultáneo Secretario de Gobierno y miembro de la Junta, Oficial Mayor de la Secretaría o Comandante de Armas o bien Ministro. El Pacto Federal de 1831, acordó la formación de una Comisión Representativa para que tratara la organización de un Congreso Constituyente en el ámbito de la confederación. El Diputado que integraría a la misma por Santa Fe fue nombrado por López a través de un decreto, quien redactó además las correspondientes instrucciones.<sup>258</sup> A modo de contraste, observamos lo que ocurrió con la elección e instrucciones de diputados a Congresos y Pactos en Mendoza y en Corrientes, provincias en las que se desarrolló una experiencia diferente de construcción política alejada del fenómeno caudillista y con poderes más horizontales. El primer caso, la Sala de Representantes tenía centralidad en el sistema institucional provincial lo que expresaba la cohesión de la elite política y económica. Para el Congreso de 1824-1827, con sede en Buenos Aires, se estableció por ley la elección directa para diputados cuyo resultado fue aprobado por la Sala. Para la Convención Nacional de 1828, reunida en Santa Fe fueron elegidos por la Sala, la que impartió en ambos casos las instrucciones

---

<sup>256</sup> ROPSF, 1888, T. I., p. 144.

<sup>257</sup> ROPSF, 1888, T. I, pp. 49-50.

<sup>258</sup> ROPSF, 1888, T. I, p. 214.



correspondientes; a la hora de designar representantes a los pactos o alianzas, la Legislatura efectuó los nombramientos y los instruyó. En cuanto a Corrientes, la misma revelaba características similares, con una notable estabilidad institucional y una sucesión de gobernadores que respetó la imposibilidad constitucional de reelección luego de tres años en el cargo. Los diputados al Congreso y a la Convención fueron nombrados por la Legislatura dictándole las correspondientes instrucciones.<sup>259</sup>

### **V.2.a. Diputados a Congresos y Convenciones Constituyentes**

En la representación política externa, el Congreso provincial entrerriano tuvo competencia en el nombramiento e instrucciones a los diputados a los Congresos constituyentes, según lo ajustado por el Estatuto en su Art. 43. La calidad del candidato fue una cuestión importante a evaluar, dándose en general preeminencia a la condición de notabilidad, formación intelectual, antecedentes administrativos y políticos, lealtad a los intereses provinciales y regionales, principalmente en tiempos de guerra.

Luego de la frustrada convocatoria a un Congreso general en Córdoba en 1820, Buenos Aires retomó la iniciativa de conformar una instancia colectiva de carácter constituyente. En diciembre de 1824, el Congreso comenzó a sesionar teniendo como sede la ex capital virreinal; estaba compuesto por diputados de las provincias, electos proporcionalmente al total de habitantes, criterio que permitió una evidente mayoría de representación porteña y una predominancia unitaria. Los diputados electos por Entre Ríos en marzo de 1824 fueron dos: el

---

<sup>259</sup> Bragoni, Beatriz "Entre la invención republicana y la fuerza de la costumbre. A propósito de la advertencia de Carlos Segreti a la edición de las actas de la Legislatura de Mendoza, 1820-1827" en *Carlos A. Segreti. In Memoriam. Historia e historias*, Vol. 1, Córdoba, CEH "Prof. Carlos Segreti", 1999, pp. 75-76; 81-83. Dos análisis del proceso de construcción política en Mendoza y Corrientes respectivamente, durante el período confederal, comprueban sus particularidades alejadas del modelo caudillista que se pretende generalizar para el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Bransboin, Hernán "El ejercicio del poder político en la Mendoza 'Federal' 1831-1852", *Cuadernos de Historia*, Serie Economía y Sociedad, No. 11, CIFFyH, UNC, Cba, 2009, pp. 33-57; Buchbinder, P. 2004, Cap. 1. Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, Imprenta del Estado, 1929, Tomo I, Leyes de abril 1824, agosto- noviembre 1828 y febrero 1829, Acceso: [www.hcdcorrientes.gov.ar/Leyes-desde-el-año-1821-1919.xls](http://www.hcdcorrientes.gov.ar/Leyes-desde-el-año-1821-1919.xls). *Representación Nacional en Santa Fe*, 1828-1829, 1928, p. 330. Ravignani, Emilio *Asambleas Constituyentes Argentinas*, T. 6to. 2da. Parte, p. 157. Instrucciones al diputado por Mendoza para el Pacto de San Miguel de las Lagunas.

ex gobernador Lucio Mansilla y Evaristo Carriego –emparentado con la familia Vera y Mujica de Santa Fe, formado en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, militar y funcionario <sup>260</sup>-. En 1826, el Deán Francisco Dionisio Álvarez, Cipriano de Urquiza –formado en el Colegio San Carlos en Buenos Aires, con antecedentes capitulares y administrativos importantes- y Casiano Calderón –redactor del bosquejo del Estatuto de 1822 y con antecedentes de Contador General y Escribano provincial- fueron los elegidos para integrarse al Congreso en reemplazo de los anteriores. En las instrucciones ya citadas de los electores de Gualeguaychú a Fray Funes, su representante en el Congreso provincial, se le recomendó garantizar los intereses de Entre Ríos en el Congreso General Constituyente, mediante la elección de un diputado patriota, talentoso e inscripto en la causa general de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que para estos años se debatía en la guerra contra el Brasil. <sup>261</sup>

La dinámica del debate en el seno del Congreso Provincial en las preliminares de los Congresos o durante el funcionamiento de estas importantes reuniones fue particularmente intensa, demostrando la importancia que le otorgaban a sus intervenciones y decisiones. Máxime cuando su contexto estaba cargado de tensiones de diversa índole: las disputas entre los grupos de Paraná y del Uruguay por el control del gobierno, las tendencias opuestas entre centralismo y federalismo que se discutían en la sociedad rioplatense y las alternativas propias de una circunstancia bélica que comprometía a su propio territorio, en particular el área de frontera con el Imperio del Brasil.

En esta efervescencia política y militar, el Congreso provincial instruyó debidamente a sus diputados al Congreso Constituyente, con especial detenimiento en uno de los asuntos más ríspidos de la agenda: el sistema de gobierno que debía regir para las Provincias Unidas. Asunto que agitaba las más profundas diferencias entre centralismo y autonomismo, tendencias opuestas que habían signado la década revolucionaria tanto en sus vehementes expresiones discursivas como en los duros enfrentamientos armados y se prolongaban en estos nuevos tiempos de construcción de espacios político

---

<sup>260</sup> RLDAPER, T. I, pp. 387, 404-405. Guzmán, Carlos A. *Los Vera Muxica. Las raíces navarro - aragonesas*, Inst. de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Bs As, 2003. Carriego, Susana <http://www.hispagen.es/encuentro1/carriego.pdf> (Consulta 20/09/2012)

<sup>261</sup> AGPER, Gobierno, Serie V, Caja 1, Leg. 13.

institucionales con la dicotomía gobierno de unidad y gobierno federal. El Congreso Constituyente consideró de necesidad pedir la opinión de todas las provincias, a través de sus Juntas o Salas de Representantes, para definir las bases constitucionales comenzando por la cuestión central y más polémica: la forma de gobierno. La Ley del 21 de junio de 1825 así lo reglamentó. El Congreso provincial determinó que el camino para formar opinión era el pronunciamiento de los habitantes entrerrianos para luego dictaminar en consonancia con él o sea que era una opinión vinculante. En esta instancia la naturaleza del vínculo entre el titular de la soberanía y sus representantes surge al modo contractual del mandato imperativo.

Convocados por una Ley provincial del 23 de enero de 1826<sup>262</sup>, todos los departamentos crearon una Comisión eventual en cada Villa o pueblo representados en el Congreso para escoger entre la forma de Unidad, la forma Federal y la forma mixta de Unidad-Federación, a cuyo efecto brindaba algunos lineamientos de las tres posturas, encuadradas explícitamente en los principios republicanos. Este testimonio directo permite conocer el pensamiento político de los representantes provinciales y su conocimiento sobre otros modelos políticos vigentes en la época. ¿Cuáles eran las nociones básicas aportadas sobre los distintos sistemas en esta Ley? ¿A qué referencias teóricas y prácticas se acudía para aportar claridad a las propuestas? :

**Gobierno de Unidad:** Por este se rigieron las Provincias de la unión hasta el año 20, en que ellas mismas lo proscribieron. Su esencia o naturaleza es que un Gefe nombrado por el Congreso General mande todo el Estado y todas las Provincias; siendo de sus atribuciones poner en todas ellas Gobernadores y todos los demás Empleados así civiles como militares, á su arbitrio; pagándose todos de los fondos generales del Estado.

La asociación de esta forma de gobierno a aquella directorial de la década de 1810, con su impronta centralista tan duramente cuestionada por las posturas autonomistas, no era una expresión de ingenuidad política sino que justamente tenía el fin de rememorar tiempos en que la sujeción a Buenos Aires se parecía mucho al sistema colonial, aunque la metrópoli hubiera cambiado y el intento de preeminencia de la antigua capital virreinal se hiciera, en buena medida, por el camino de la expedición armada en nombre de la revolución.

---

<sup>262</sup> RLDAPER, T. II, pp. 108-110.

**Gobierno Federal:** Esta clase de gobierno no es rigurosamente el que abrazaron las Provincias después del año 20, en que cada una se concentró en sí misma; pues en este Gobierno debe existir un Congreso General, que trate de las mejoras y adelantamiento de todo el Estado, y que dé Leyes generales y elija un Gefe que lo gobierne; pero sin mezclarse en lo económico de las Provincias, quienes tienen facultad en sus juntas o Congresos, de elegir sus Gobiernos y demás Empleados así civiles como militares, darse leyes y formarse sus peculiares constituciones; debiendo sí cooperar a la conservación del Estado en general, prestándose a su defensa en caso de Guerra y concurriendo a su vez á sus gastos. **Este Gobierno es el de Norte – América** (*resaltado en el original*).

El año 20, con la caída del gobierno central y del Congreso Constituyente de tendencia mayoritariamente unitaria, era percibido como profundo momento de cambio y consecuente disgregación a la que había que superar con un sistema de gobierno que congregara a las provincias respetando su carácter soberano. La asimilación al sistema de gobierno norteamericano implicaba el conocimiento y la ponderación de otras experiencias contemporáneas.

**Sistema misto de unidad y federación:** Este consiste en que, guardando la forma de Unidad en cuanto a tener un Gefe supremo, que entienda en todo lo de las Provincias, estas conserven sin embargo sus Juntas o Congresos aunque no legislen, siendo incumbencia de estos velar sobre los derechos y atribuciones de sus Provincias, sobre la observancia de las Leyes, y reclamar ante las autoridades nacionales de su violación e inobservancia. También conservan el derecho de elegir una terna de sujetos de su seno provincial ó de fuera para Gobernante, sujetando la preferencia al Gefe del Estado, con otras más regalías, que por menos principales se omiten. También que sean generales ó para todas las Provincias los fondos del Estado, y con ellos se cubran todas sus necesidades.<sup>263</sup>

Este sistema trataba de conciliar las tendencias enfrentadas, destacando a los cuerpos representativos provinciales con la capacidad de resguardo de los derechos de esas entidades políticas y de reclamar ante situaciones de ilegalidad o inconstitucionalidad en la aplicación de las leyes generales.

La Ley del 23 de enero de 1826, por otra parte, quiso asegurar en cada Comisión la presencia de las más altas autoridades locales como núcleo fuerte de decisión. El Comandante como presidente más el Alcalde Mayor, el párroco, dos Alcaldes del distrito y 8 individuos nombrados por estas autoridades tuvieron a cargo la deliberación con la recomendación de no invitar a ninguno que no sea vecino y que no cubriera condiciones y calidad para Representante; el hecho de ser empleado del Gobierno no implicó impedimento para su incorporación. Las corporaciones eclesiástica y militar, la justicia como servicio público garante del

---

<sup>263</sup> RLDAPER, T. II, sobre las tres clases de Gobierno General, pp. 110-112.

derecho de los ciudadanos, tal como se la definía en el ámbito institucional entrerriano<sup>264</sup> y los vecinos notables invitados constituyeron una comisión representativa territorial que parece revertir, en cierto modo, en la antigua modalidad de participación ampliada que era el cabildo abierto colonial.

El Congreso provincial presidido por Justo José de Urquiza resolvió por unanimidad de votos el sistema Republicano Representativo Federal; en sus fundamentos no olvidó manifestar que había obrado con fidelidad a los deseos de sus representados, asentados en las actas de todos los departamentos. Este mandato expreso no fue observado por uno de sus diputados en Buenos Aires. Según la denuncia del gobernador Solas en su Manifiesto de 1829, Casiano Calderón hizo pública una declaración en el periódico La Gaceta de Buenos Aires, por la que defendía el sistema de Unidad y la Constitución unitaria de 1826 a la vez que instó a algunos miembros notables de la sociedad entrerriana, como José Miguel Romero y José Joaquín Sagastume entre otros, para que lo secunden en esta postura. Finalmente, la Constitución de 1826 fue proclamada bajo la unidad de régimen. Entre Ríos la rechazó el 3 de marzo de 1827 mediante una ley provincial, lo mismo sucedió con la mayoría de las provincias. Los fundamentos del rechazo pusieron de manifiesto por un lado, la imposibilidad de aceptar una constitución que no se correspondía con la voluntad de los comitentes expresada en las comisiones eventuales convocadas por el Congreso Provincial a principios de 1826; por otro lado, se aplicó el principio de consentimiento por el que los estados provinciales optaban por unirse o separarse de una asociación política, en este caso las Provincias Unidas del Río de la Plata. En este sentido, en mayo de 1827 comenzó a circular un texto para la discusión, referido a las bases de un posible Tratado de alianza ofensiva y defensiva, entre las provincias que unánimemente habían expresado su desaprobación a la Constitución unitaria: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, agregando a ese posible Tratado a la “Banda Oriental”, que era el objeto de la guerra en curso con el Brasil. En su articulado el Tratado ratificaba esa desaprobación, proponía una unión confederal a la que se invitaba a integrar a

---

<sup>264</sup> AGPER, Libro 1 Bis Congreso de Entre Ríos, f. 43.

las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Tucumán y convocaba a un Congreso para organizarse bajo la forma federal, un Tratado sin evidencias de haber sido firmado y ratificado pero que, sin duda, preparó el terreno para una futura reunión. Así, la respuesta adversa a la Constitución, el retiro de los diputados provinciales y la posibilidad de que se abra un Congreso paralelo provocó la disolución del Congreso en Buenos Aires y sumió en una crisis al proceso de construcción estatal rioplatense.<sup>265</sup>

En este proceso dinámico entre los discursos y la guerra, el cuarto intento de organización habría de caber en la Convención de 1828. Estanislao López había logrado concentrar a los delegados provinciales en Santa Fe dada su acrecentada influencia regional. Impulsada por Córdoba, la idea inicial de reiterar un Congreso Constituyente fue reemplazada por una reunión de tipo preliminar que sentara las bases para ese Congreso. Sopesando que la guerra con el Brasil todavía estaba en etapa de definiciones, era pertinente elegir un Poder Ejecutivo Nacional provisorio con delegación de asuntos de paz, guerra y relaciones exteriores sin perjuicio de que este asunto bélico se mantuviera en la competencia transitoria del gobernador de Buenos Aires, el federal Manuel Dorrego, designado Encargado de las relaciones exteriores por medio de acuerdos interprovinciales que así lo habían facultado. En cuanto a la instalación de la Convención, los diputados entrerrianos entendieron que era una opción casi inmediata al fracaso del anterior Congreso Constituyente y por ello no enfriaba el debate, al contrario se mantenía viva la posibilidad de discutir formas de reunión de las Provincias Unidas en una sola entidad política. Por ello se abocaron a elegir al representante por Entre Ríos, nombrando en ese carácter al conspicuo abogado y funcionario santafesino Juan Francisco Seguí, muy allegado al grupo de Paraná. De todos modos, el peligro del enfrentamiento y la profundización de las divisiones estaban en el horizonte. Las instrucciones por Ley mostraron incertidumbre sobre el desarrollo de la Convención y el posible éxito de la misma. Cautelosos y previsores, los representantes remarcaron la defensa del sistema Republicano Representativo Federal como base de una futura Constitución y la función del diputado en sostener esta postura como

---

<sup>265</sup> RLDAPER, T. II, pp. 108-112, 182-183, 235-236, 323. Manifiesto Solas, pp. 189-191. Ravignani, E. 1937-1939, Tomo 4to. pp. 3-5 y Tomo 6to. 2da. Parte, pp. 167-171.

también los derechos provinciales y sus autoridades legalmente constituidas, rechazando toda presión que pudiera implementarse para forzar votos reñidos con la voluntad de los pueblos entrerrianos.<sup>266</sup> La organización de las Provincias y el conflicto con el Brasil fueron los asuntos que concentraron la atención en Santa Fe. En setiembre de 1828, los comisionados ante el Imperio, Manuel Moreno y Pedro Feliciano de Cavia, llegaron a Santa Fe para rendir cuentas de su misión y presentar el Tratado de Paz para su consideración en el pleno de la Convención, constituida en “Representación Nacional”. El Tratado fue autorizado para su ratificación pero el fin de la guerra, ganada en el campo de batalla y perdida en los escritorios de la cancillería de Río de Janeiro con la interesada mediación de Inglaterra, haría retornar a los militares exitosos que se vieron traicionados por la diplomacia. Este y otros motivos abrieron un período de convulsión política y económica en el interior del Río de la Plata, replanteándose entonces el papel de la Representación Nacional y la política pactista entre las provincias iniciada en 1820.<sup>267</sup>

#### **V.2.b. Diputados a reuniones para la firma de Tratados y Pactos.**

La formulación de alianzas o pactos entre entidades de igual o distinta naturaleza política en términos diplomáticos, es decir desde las condiciones soberanas de los contratantes, generó un espacio propicio para relacionarse, negociar, plantear controversias no siempre saldadas. Las negociaciones emprendidas por los representantes, en carácter de Agentes Diplomáticos, abarcaron una amplia variedad de temas de contenido político, económico, militar, fiscal, entre otros. En tiempos de convulsión política interna y/o peligros de conflicto con Imperios y Estados extranjeros, se plantearon alianzas “ofensivas – defensivas” sobre bases de amistad, confraternidad, confianza y cooperación. De acuerdo a la normativa del Derecho de Gentes, especialmente en lo relativo a las misiones diplomáticas, las provincias rioplatenses adoptaron y adaptaron mecanismos, atributos y formalidades de esta importante tarea

---

<sup>266</sup> RLDAPER, T. II, pp. 340-341, 352, 363-366, 442-443,

<sup>267</sup> Pagani Rosana, Souto Nora, Wasserman Fabio “El ascenso de Rosas al poder y el surgimiento de la Confederación (1827-1835) en Goldman N. (Dir.) 1998: Cap. VII. *Representación Nacional en Santa Fe, 1828-1829, 1928*, pp. XXXVIII-XLV, 18-19.

pública. En principio, para ejemplificar estas características podemos citar evidencias que ofrecen tanto Tucumán como Buenos Aires. En 1830, la Sala de Representantes de Tucumán facultó al gobernador Francisco Javier López a enviar un Agente Diplomático plenamente autorizado para celebrar tratados con Córdoba o cualquier gobierno de la “República”; se encargó además de proveer fondos para la ejecución de esa tarea. En 1834, el gobernador de Buenos Aires Juan José Viamonte decretó la creación de un Registro Diplomático que comprendía todas las negociaciones con los gobiernos provinciales y extranjeros desde 1810 en adelante; en cumplimiento de esta medida quedaron registrados Tratados, Convenciones y Armisticios con distintas provincias rioplatenses y con otros Estados e Imperios como Colombia, Chile, la Santa Sede, Inglaterra y Brasil; mediante este trato diplomático se equiparó en términos de naturaleza soberana a todas las entidades políticas que concertaron estas relaciones formales. Años más tarde Florencio Varela, intelectual opositor a Juan Manuel de Rosas y exiliado en Montevideo, aporta otras negociaciones que habían sido omitidas en ese Registro, entre ellas las de Buenos Aires con el Príncipe Regente de Portugal en 1812, refiriéndose a las relaciones diplomáticas en general como elementos de sociabilidad.<sup>268</sup>

Un examen sobre los tratados y convenciones que firmó el gobierno de Entre Ríos entre 1822 y 1839, junto con diversos documentos de las gestiones y negociaciones, revela la adopción de mecanismos diplomáticos según el Derecho de Gentes.<sup>269</sup> En efecto, el carácter de Tratado está empleado dentro de esas prescripciones:

(Según Riquelme): Es un compromiso solemne, contraído por dos ó más naciones, sobre cosas ó intereses públicos. Cuando este compromiso se refiere a intereses permanentes ó de duración ilimitada se denomina *Tratado*, cuando determina intereses pasajeros o hechos que solo han de verificarse una vez se llama *Convenio*.

---

<sup>268</sup> Digesto Jurídico de la Provincia de Tucumán, Decretos del 8 y 22 de julio de 1830. Registro Diplomático del Gobierno de Buenos Aires, Bs. Aires, Imprenta del Estado, 1835, Índice. Varela, Florencio (Comp.) “Tratados de los Estados del Río de la Plata y Constituciones de las Repúblicas Sud-americanas”, Biblioteca del Comercio del Plata, Tomo IV, Montevideo, 1848, pp. 1-2. Acceso: <http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31822009491432#view=1up;seq=706>

<sup>269</sup> Tratados consultados en Ravignani, E. 1937-1939, Tomo 6to. 2da. Parte, pp. 151-236: Cuadrilátero (1822), con Barón de la Laguna (1822), con Misiones (1823), con la Provincia Oriental (1823), con Buenos Aires (1823), con Corrientes (1827), con Buenos Aires (1827), con Corrientes (1830), Pacto Federal (1831), con Santa Fe y Corrientes (1834), con Corrientes (1839). Convenio interno (1824) entre los Comandantes Solas y Espino.



(Según Vattel): llamado en latín *faedus*, es un Pacto que se hace entre altas potencias ó á perpetuidad ó por un espacio de tiempo considerable, con el designio del bien público... Esta materia es indudablemente una de las más importantes que las relaciones mútuas de las naciones y sus negocios recíprocos pueden ofrecer; y convencidas las más prudentes de la mala fe con que los cuerpos políticos cumplen por lo general las obligaciones naturales que la humanidad les impone han procurado asegurarse por medio de Tratados todas las ventajas y auxilios que la Ley Natural les aseguraría si no fuese por los perniciosos consejos de “una errada y falsa política” <sup>270</sup>

El agregado eventual de un Tratado secreto o reservado como parte del tratado público implica que conforman un solo cuerpo inescindible. Aún teniendo en cuenta esto, en el caso del Cuadrilátero de 1822 y el Pacto Federal de 1831, cada una de sus partes secretas o reservadas recibió ratificación por separado. En cuanto a la posibilidad de celebración de Convenios, también se observan esos lineamientos prescriptivos cuando refieren a intereses pasajeros o puntuales, sin prolongación en el tiempo; en la política interna fueron un instrumento para resolver conflictos entre los grupos de Paraná y el Uruguay, por ejemplo, en términos de deposición de armas, paces y amnistía. En las relaciones exteriores, el convenio se ponderó como alternativa cuando hubo que discutir durante la reunión Cuadrilátera los montos de indemnización de Entre Ríos a Santa Fe por auxilios militares, lo que finalmente se registró mediante un Tratado secreto dentro del texto del Tratado público Cuadrilátero. También se firmaron convenios con Buenos Aires para contratar empréstitos.

La condición de los contratantes, cuestión que nos interesa particularmente en tanto define la naturaleza de los estados provinciales en formación que participan, se asienta en la independencia de las provincias concelebrantes las que se reconocen explícitamente en recíproca libertad, independencia, representación y derechos, sentando las bases de una relación en igualdad de términos. Esa condición es la que se somete a verificación previa para impulsar estos acuerdos diplomáticos. Por ejemplo, en 1822, reunido el congreso del Cuadrilátero, se rechazaron las credenciales del diputado y cacique del territorio de las Misiones que se encontraba anexo a la provincia de Corrientes, porque no conformaban una “provincia independiente”, es decir que

---

<sup>270</sup> Según Patricio de la Escosura, así entienden la ciencia de los Tratados tanto Martens, como los discípulos de Grocio, Leibnitz, Vattel, Albericus centilis, Wolf, Puffendorf, Rutherford, Burlamaqui, entre otros. 1853, pp. 155.156.

la condición soberana e independiente era indispensable para legitimar la participación en estas reuniones interprovinciales. Pero en el art. 15 del mismo Tratado se dispuso que el territorio de las Misiones quedara libre para formar su Gobierno y para reclamar la protección de cualquiera de las provincias firmantes. En 1823, el Gobierno de Entre Ríos celebró una Convención de alianza ofensiva – defensiva con el territorio de las Misiones y envió con plenos poderes a su diputado Evaristo Carriego, Teniente Coronel y Comisario de Guerra, al pueblo de San Miguel. La contraparte estuvo representada por el Comandante General de la “Provincia” de Misiones, D. Félix Aguirre, con acuerdo y consentimiento del Cabildo y Corregidor del Pueblo, jefes y demás oficiales de la guarnición. Misiones no había formado aún su gobierno y no tenía independencia sino que estaba bajo un régimen de protección alternando entre Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, siempre interesadas en intervenir en ese régimen dado su situación estratégica como territorio enclavado en la frontera con el Paraguay y el Brasil. Lo importante aquí es que se trataba de una Convención de menor jerarquía que el Tratado del Cuadrilátero pero que gozaba de formalidades; en su art. 5 queda claro que Misiones no puede hacer la guerra ni entrar en pactos o compromisos hostiles sin convenirlo con Entre Ríos su aliada que, por otra parte, era contratante cuadrilátera. Misiones se acopla a ese Tratado por extensión de su alianza con Entre Ríos, no es independiente, ni soberana.<sup>271</sup> Por otro lado, la calidad de soberanía de Entre Ríos la habilitó a firmar un Tratado con el gobernador de la provincia Cisplatina, Barón de la Laguna, del que damos mayor cuenta en el Capítulo VII, Apartado VII.2.a.

A los Agentes diplomáticos se les otorgó credenciales, diplomas o poderes por parte de los gobiernos a quienes representaban, con carácter de plenipotencia aunque no absoluta sino subordinada a la ratificación de lo concertado; los mismos fueron revisados en sus condiciones de admisibilidad, reconocidos y canjeados de manera recíproca por las partes contratantes. Se le dictaron instrucciones a las que se debían ajustar, recomendándosele emplear toda la sagacidad política para sostenerlas en el debate. En el transcurso de las

---

<sup>271</sup> Patricio de la Escosura, 1853, p. 154 citando al Derecho Público Internacional de Antonio Riquelme (Madrid, 1849) afirma que un gobierno que no es soberano sino feudatario no tiene facultades para tratar con otros Gobiernos ni por consiguiente nombrar diputados en carácter de Agentes Diplomáticos.

reuniones el Agente Diplomático enviaba frecuentes informes a su gobierno respectivo en los que transmitía los pormenores del debate y evacuaba eventuales consultas.<sup>272</sup>

La ratificación de tratados por instituciones representativas como el gobernador y la Sala de Representantes o Congreso Provincial se cumplió en los plazos estipulados; luego de este trámite imprescindible se canjeaban los Tratados en carácter de versión definitiva. La ratificación era la forma solemne convalidar lo acordado.

En Entre Ríos, la designación del diputado enviado a celebrar un pacto o *“asociación parcial de Estados”* era de competencia del gobernador según el Art. 75 del Estatuto Provisorio, acordando instrucciones con el Congreso provincial y dando un poder que debía canjearse con los de otros enviados como modo de confirmar la legitimidad de su función representativa y habilitarlo a integrar las conversaciones; una excepción en las designaciones fue la del propio gobernador Vicente Zapata en el Pacto de Unión y Amistad con Buenos Aires en octubre de 1827, a quien el Congreso Provincial lo autorizó a cumplir en persona con la misión diplomática. La intervención principal del Congreso Provincial de Entre Ríos en las ratificaciones implica un mecanismo de control por sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, desde el gobierno de Pascual Echagüe esta potestad de la Legislatura aparentemente se perdió.

---

<sup>272</sup> Damos el ejemplo de Casiano Calderón, electo para representar a Entre Ríos en el Tratado del Cuadrilátero. “En la Villa del Paraná a 5 de enero de 1822, hallándose reunidos en la Sala de Sesiones los Sres. que componen el Honorable Congreso Entrerriano, de unánime conformidad acordaron conferir al Sr. Diputado D.Casiano Calderón electo para concurrir con los demás de las Tres Provincias a la ciudad de Santa Fe, el poder amplio general y tan bastante cual por derecho público se requiere a nombre y representación de todos los ciudadanos comprendidos en los Departamentos entrerrianos, prestando voz y caución de rato et grato de cuanto en razón de este poder obrase, discutiese, deliberase y sancionase a pluralidad de sufragios, concerniente al objeto principal de acordar las bases sólidas y legales en que descanse una paz duradera, la mejor armonía y correspondencia en todo el orden de relaciones públicas con que se ligan recíprocamente las Provincias entre si al logro de proporcionarse su interior y exterior prosperidad, para cuyos loables fines, lo anexo y concerniente al objeto de allanar cuantos obstáculos se presenten a la realización de la paz, le facultaron completamente con prudente sujeción a sus instrucciones y reservando la ratificación de los tratados al Gobierno y este Honorable Congreso; ordenándose autorizase esta copia del acuerdo original para que le sirva de suficiente título a la legitimación de la personería pública del Sr. Diputado referido” RLDAPER, Acuerdo del Congreso Paraná, 5 de enero de 1822.

Los comisionados o diputados en carácter de Agentes diplomáticos, fuera del mencionado gobernador Zapata, eran funcionarios de alto rango como Casiano Calderón y José María Echeandía o militares de carrera, adscriptos a la Logia Masónica George Washington de la Villa del Uruguay como los orientales Nicolás de Vedia, Pedro Barrenechea y Juan Florencio Perea.

### **V.2.c. Encargados de Negocios**

Otros importantes agentes intermediarios fueron los Apoderados o Encargados de Negocios de las provincias “cerca del Gobierno de Buenos Aires” que configuraban una de las clases de agente diplomático contemplada en el Congreso de Viena de 1815. En este marco, los Encargados de Negocios, con cargos bien remunerados y amplia cobertura de viáticos, portaban credenciales, poder e instrucciones generalmente desde los “Ejecutivos” a los que informaban periódicamente de las tareas realizadas; no eran designados para ocasiones puntuales sino que se les confería la función sin límite de tiempo, que en la práctica se traducía en uno o dos años. Podían constituirse en avanzada de la gestión de convenios preferentemente económicos con un margen de negociación más flexible o bien celebrarlos ad referendum de su gobierno y Salas de Representantes. El dinero recibido era derivado a la Tesorería provincial en su totalidad o en forma parcial cuando parte del beneficio era destinado a compras de diversos bienes con autorización y pago de deudas oficiales contraídas en Buenos Aires (Chiaramonte, Cussianovich, Tedeschi, 1993: p. 99). Las rendiciones e informes de sus tareas debían ser presentadas de manera periódica. Normalmente eran personas de confianza de quienes lo designaban, no siempre eran naturales o residentes de la provincia que representaban pero sí garantes de peso e influencias antes las autoridades porteñas. Para ejemplificar, Santa Fe tuvo en la década de 1820 a Juan Francisco Seguí, que hizo valer sus contactos personales con Francisco de la Cruz, Ministro de Guerra de Buenos Aires, para lograr préstamos en dinero e insumos militares con el fin de defender las fronteras.<sup>273</sup>

---

<sup>273</sup> AGPSF, Contaduría, Tomo 134, legajo 20.

En la administración entrerriana se sucedieron Encargados de Negocios, con propio peso intelectual, político y/o económico. Lucio Mansilla nombró en 1822 a su Secretario de Gobierno, Dr. Pedro J. Agrelo, persona muy cercana tanto a Martín Rodríguez como a sus Ministros García y Rivadavia. En el acta de nombramiento<sup>274</sup>, Mansilla destacó que el nuevo Encargado de Negocios estaba dotado de instrucciones y conocimientos convenientes para promover y afirmar las relaciones públicas de ambas provincias y que la elección radicó en sus sanos sentimientos por la causa de la libertad. Durante su gestión no solo se mantuvo en su cargo público de Secretario sino que fue compensado con suplementos extraordinarios por los servicios prestados, viabilizados por Ley provincial. Agrelo afianzó su relación con las autoridades porteñas al punto de renunciar en marzo de 1823 como Encargado de Negocios y asumir, al año siguiente, como profesor titular de la cátedra de Economía política en la Universidad de Buenos Aires, formando parte entonces de toda una transformación cultural y educativa impulsada por el Ministro Rivadavia.<sup>275</sup> Para suplantarlo, Mansilla designó a su amigo Félix Castro, un importante comerciante porteño y fuerte inversor ganadero en Santa Fe, ligado a intereses británicos y al grupo Costa, acreedor del fisco entrerriano. Castro habría usado su lugar de privilegio para cobrarse una deuda importante como proveedor del ejército por medio de un convenio firmado con Buenos Aires en noviembre de 1823.<sup>276</sup> El fin del mandato de Mansilla no supuso su alejamiento de la administración entrerriana, por el contrario, sus antecedentes y sobre todo el acercamiento a las autoridades porteñas, lo que era bien ponderado por el grupo de Paraná, lo habilitaron a su nombramiento como Comisionado ante Buenos Aires función que cumplió hasta agosto de 1825.<sup>277</sup>

---

<sup>274</sup> AGN, Div. Nacional, Sección Gobierno, Sala V, Cuerpo X. Tomo 5-4-5, Carta de Mansilla a Martín Rodríguez, Paraná, 21 de junio de 1822. RLDAPER, T. I, p. 185

<sup>275</sup> RLDAPER, T. I pp. 231-232, 257-258, 279, 287-288.

<sup>276</sup> Galmarini, H, 1974, p. 38. La información sobre la condición de proveedor y acreedor de Castro en Moritán S. 1945, p. 77.

<sup>277</sup> RLDAPER, T.I, pp. 379-380, 398; T. II, pp. 55-56. La relación entre las actividades de Castro y el fisco entrerriano la ampliamos en el Cap. VIII.

## Capítulo VI. DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DEL PODER POLÍTICO. LA CONCESIÓN DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS A LOS GOBERNADORES.

Las facultades extraordinarias otorgadas a los distintos “Poderes Ejecutivos” en sistemas hispanoamericanos posrevolucionarios fueron ponderadas muy negativamente por la historiografía, especialmente la dedicada al Derecho. Los calificativos recurrentes remiten a vicio enquistado, falla, defecto, anomalía de los regímenes republicanos que se pretendieron instaurar en tiempos de definiciones políticas e institucionales. Incluso se sostiene que las Salas de Representantes se sometieron mansamente a la voluntad y coacción de los Ejecutivos, siendo esta concesión extraordinaria una clara decisión favorable a la concentración unipersonal del poder; también se las ha caracterizado como una usurpación de poder, un acceso ilegal por parte de los gobernadores sin consentimiento de las Legislaturas.<sup>278</sup>

En general, predomina la idea de que constituyeron una violación a la Constitución y por lo tanto una atribución ilegal. ¿Era una violación en el sentido de infringir la Ley, de romperla o traspasarla? Entendemos que esa Constitución que se dice violar tiene un uso y un sentido de parte de esta historiografía que concuerda claramente con los nuevos modelos constitucionalistas liberales más puros. Ahora bien, el otorgamiento de las facultades extraordinarias recoge pautas de aquella “Constitución antigua” vigente, más precisamente, toma la forma de la dictadura romana como institución legítima de excepción basada en casos de peligro público. Ésta es distinta de la tiranía, considerada una forma de gobierno arbitraria y corrupta ya por filósofos clásicos y que conservaba este sentido en documentos de la época.<sup>279</sup>

---

<sup>278</sup> Para el Río de la Plata Cf. Ottolenghi Mauricio, 1945, T. XXIII, pp. 53-56; Tau Anzoátegui, V., 1961, pp. 66-105. Levaggi, Abelardo “Constitucionalismo argentino 1810 -1850” en *Iushistoria*, Revista Electrónica, Universidad de El Salvador, Facultad Cs. Jurídicas y Facultad Filosofía, Historia y Letras, Bs Aires, octubre 2005, pp. 23-24. Acceso: [www.salvador.edu.ar/juri/reih/index.htm](http://www.salvador.edu.ar/juri/reih/index.htm) (Consulta 3/7/11).

<sup>279</sup> Passerin D’Entreves, A., 2001. 2da. Parte: El Estado como poder. Cap. I: Gobierno de hombres y gobierno de leyes. Pp. 95-96. El autor menciona a El Político y las Leyes de Platón, destacando que el filósofo distingue formas puras y formas corruptas de gobierno siendo la tiranía, gobierno arbitrario de un solo hombre, la forma peor. El filósofo Jean J. Rousseau considera a la modalidad de dictadura, remitiéndose a su uso *de iure*, dado dentro de la República romana para casos de peligro público, en *El Contrato Social*, Madrid, Sarpe, 1985, Libro IV, Cap. VI, p. 187.

Cabe preguntarse, en este punto del análisis, si la letra del Estatuto Provisional de 1822 posibilitaba explícitamente la ampliación del poder mediante este instrumento, o lisa y llanamente lo prohibía. La observación sistemática de evidencias y su triangulación entre distintos corpus han permitido localizar las alternativas de la discusión del proyecto de estatuto; en esas instancias, relevadas desde las actas legislativas, quedaron fuera algunos artículos, otros fueron reformulados y la mayoría aceptados y confirmados. Notablemente el art. 88<sup>a</sup> del proyecto consideraba la posibilidad de dar facultades extraordinarias en casos de “difíciles circunstancias”:

Art. 88<sup>a</sup>. Todas estas disposiciones relativas a la seguridad individual no pueden tener muchas veces un efecto tan cumplido como se propone en un estado de guerra como la presente, en que convulsionados los pueblos, sin subsistencia los Gobiernos, exaltadas las pasiones, armados de ambición y venganza por los partidos los hombres más ignorantes y criminales, y amagada la causa pública de caer bajo de funestas anarquías, falta bajo todos respectos la seguridad pública, y es preciso que los Gobiernos marchen al paso de peligros inminentes y de una naturaleza terrible. Por consiguiente y mientras desaparecen como lo esperamos tan complicadas y difíciles circunstancias, el Gobierno podrá de acuerdo con el Congreso proceder al arresto de uno o muchos individuos toda vez que se crea prudentemente comprometida por ellos la tranquilidad, el orden y la seguridad de la Provincia, ocupando (¿?) sus papeles para tomar luces y conocimiento seguro sobre los hechos que se temen y separarlos por tiempo de ésta a otra Provincia del territorio, sin una estricta sujeción a estas disposiciones de modo que se disipen todos los temores y se ahorren a ellos mismos mayores males, evitándoles llegar a unos extremos peligrosos para el público. Pero jamás podrá autoridad alguna excederse con este pretexto a imponer pena corporal de infamia, ni expatriación sin sujetarse vigorosamente a las declaraciones hechas para estos casos. A la paz general, y constitución de la Nación, serán todas de sacratísima observancia y cesarán aquellas facultades extraordinarias del Gobierno, sin que jamás pueda en adelante suspenderse la seguridad individual en todas ni algunas de sus partes, sino precediendo de bandos y publicaciones más solemnes para la debida precaución de los habitantes y que la autoridad no proceda en su descuido y buena fe por sorpresa y rastreros engaños.<sup>280</sup>

Sometido a debate entre los diputados, se tomó la decisión de suspenderlo y solo aplicarlo cuando las medidas tomadas por el gobierno para restablecer la tranquilidad pública fueran insuficientes.

En esta Villa Capital del Paraná a los cuatro días del mes de marzo de mil ochocientos veintidós años, juntos y congregados los S.S. Diputados de la Prov. los que abajo firman y en esta sesión ordinaria por la mañana se tomó en consideración la Sección 9<sup>a</sup>. que debe ser la 11<sup>a</sup> en el estatuto reformado y después de discutidos los 14 artículos que la forman quedaron todos aprobados y sancionados, excepto el 88<sup>o</sup> que queda por ahora en *suspense* para hacer uso de él según las circunstancias lo exijan en adelante, si las providencias que se toman por el gobierno para la tranquilidad de la provincia no hubiesen alcanzado

---

<sup>280</sup> AGPER, Libro del Congreso de Entre Ríos, 1/87, 22/2/22, f. 132.

a ¿concretarse? a la publicación de la constitución. En consecuencia, separado dicho artículo, seguirá la numeración en el orden siguiente 96, 97...<sup>281</sup>

La versión oficial editada en el Registro de Leyes y Decretos no menciona ninguna de estas dos instancias, tácitamente este instrumento tiene naturaleza legal, se lo considera viable ante situaciones de emergencia pero no oportuna su incorporación a la letra del Estatuto; la no eliminación y la determinación de dejarlo en suspenso indicaría la habilitación del poder ampliado con criterio pragmático, sujeta a una ley no escrita como rasgo de la “antigua constitución” y atendiendo al contexto.

La seguridad individual, entonces, será una cuestión de las más sensibles para los diputados. De aplicarse, el arresto de individuos que comprometían el orden de la provincia tenía que realizarse de consuno con el Congreso y además, ante la posible previsión del gobierno de suspender la seguridad individual por la gravedad de ciertos sucesos, los diputados exigirían comunicar a la población por medio de bandos para no proceder de mala fe o a base de engaños. Una protección explícita de los derechos particulares que iba en consonancia con los resguardos estatutarios establecidos en la Sección 11ª pero se puede ir más allá, relacionando estas decisiones precautorias del Congreso con la necesidad de frenar el avance del Ejecutivo en materia de seguridad individual y por ende, en materia de justicia lo que hubiera conformado la “suma del poder público”.<sup>282</sup>

Como tiene directa incidencia en las alternativas de distribución del poder nos interesa indagar sobre las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso Provincial a ciertos gobernadores, su lógica y el funcionamiento de las instituciones mientras duraba esta concesión excepcional. Se examinó el período 1822 – 1831, en un total de 9 años registramos lapsos discontinuos que significaron casi 2 años de gobierno con facultades extraordinarias. Las concesiones se hicieron a Lucio Mansilla en 1821, a León Solas en 1825 y 1830,

---

<sup>281</sup> AGPER, Libro del Congreso de Entre Ríos, 1/87, 1821-1824, acta del 4/3/1822, f. 144. (Destacado nuestro en cursiva)

<sup>282</sup> La Sección 11ª sobre derechos particulares muestra similitudes con el Reglamento de Seguridad Individual dictado por el primer Triunvirato en Buenos Aires, 1811; este Reglamento en sus fundamentos aclaraba que: “Todo ciudadano tiene un derecho sagrado á la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil, y principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad individual”.



a Mateo García de Zúñiga en 1827, a Pedro Barrenechea en 1831 quien traspasa esas facultades a su gobernador delegado José Ignacio de Vera. En este análisis, retomamos la perspectiva comparada con los sistemas políticos establecidos en Mendoza y Santa Fe que, como ya planteamos, presentaban experiencias diferenciadas de construcción política. En 1825, con un papel central de la legislatura mendocina y sin un dominio personalista del “Poder Ejecutivo”, las luchas internas provocaron intentos por suprimir garantías individuales y otorgar la suma del poder público, los que se vieron frustrados debido a la firmeza de la Sala; en toda la década siguiente hubo un período de casi dos años donde se delegaron las facultades fundamentándose en la guerra civil y duros enfrentamientos con el gobernador sanjuanino Martín Yanzón. En Santa Fe, el régimen caudillista giró hacia un poder supremo en la década de 1830 con el otorgamiento permanente de facultades extraordinarias y la absorción de áreas relativas a la justicia y la policía. Esta concesión se transformó en suma del poder público en la década de 1840 hasta que fue expresamente prohibida en la Constitución santafesina de 1856 (Bragoni, B., 1999: p. 77; Bransboin, H, 2009: pp. 40-43, 2012: pp. 46-49; Tedeschi, S, 2011).

Comenzando con esa indagación en la experiencia entrerriana, en primer lugar consideramos los fundamentos del otorgamiento del Congreso, de la puesta en custodia del “depósito sagrado de las leyes” en manos del gobernante.<sup>283</sup> Las amenazas a la seguridad y a la salud pública, el orden y la tranquilidad comprometidos fueron motivos claramente manifestados por los diputados; es más, la gravedad de ciertas situaciones ameritaba, a juicio de los diputados, la capacidad de rápida y enérgica expedición dada al gobernante sin ser obstaculizado por la continua intervención del Congreso. Es decir que el peligro público fue una causa principal pero no única. En efecto, las facultades extraordinarias fueron delegadas para contraer empréstitos que descomprimieran el déficit fiscal o cuando el Congreso entraba en receso legal pautado estatutariamente y por ello podía dictar decretos, obrar “en bien de la provincia” y eventualmente atender amenazas externas.

---

<sup>283</sup> RLDAPER, Tomo I. pp. 315-317

Los diputados del Congreso realizaron fuertes recomendaciones sobre su uso. Evitar el exceso de autoridad, observar exactamente las leyes establecidas, convocar a los diputados ante la aparición de circunstancias que obliguen a disposiciones impracticables o inoportunas fueron algunas de ellas.

En cuanto a las formas de funcionamiento de las instituciones durante la vigencia de facultades extraordinarias, es de destacar la delegación de FE al gobernante durante recesos legales del Congreso pero también durante períodos de sesiones normales. Notablemente, en el caso de un gobernador delegado que fuera designado por el propietario debido a razones de fuerza mayor se les traspasaba esas facultades, lo que era aceptado por el Congreso sin objeciones. Lo que no ocurre en otras provincias como Santa Fe en que el gobernante no trasladaba esa concesión a su Delegado.

Un aspecto importante a observar es el registro de uso de facultades por parte del Gobierno y si se corresponde o extralimita el objeto de otorgamiento. Se localizaron 4 informes correspondientes a sendos períodos de goce de la concesión. En 1821, Lucio Mansilla describe profusamente su actuación en el marco de poder ampliado y lo hace a través de su Mensaje a los diputados en la apertura de sesiones.<sup>284</sup> En 1825 y 1830 presentó informe León Solas –cada uno en períodos distintos de mandato-. En 1827 el que informó fue Mateo García de Zúñiga. No se registran informes de Barrenechea y de su delegado Vera que correspondan a 1831; como veremos más adelante, el cese de esta concesión fue conflictivo y posterior a ella, fue designado otro gobernador en la persona de Pedro Espino. En ocasión de concesión para asuntos explícitos, los informes revelan que el gobernante se ajustó a esos marcos de acción; es de notar que las facultades dadas a León Solas durante el receso legal del Congreso y por las cuales debía cumplir las resoluciones del Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires, fueron informadas casi en su totalidad, exceptuándose solo una que refería a la Toma de Razón de las propiedades públicas y a formar un estado de las rentas de la Provincia y su inversión.<sup>285</sup>

---

<sup>284</sup> Los Mensajes de apertura de los gobernadores salientes están contemplados como obligatorios en el art. 71 del Estatuto de 1822. RLDAPER, T. I, Mensaje del Gobierno a la Legislatura evaluando el estado político de Entre Ríos, Paraná, 3/2/24. Mansilla, pp. 345-351.

<sup>285</sup> RLDAPER T. II, pp. 29-31, 33-34.

En un análisis general y haciendo un contraste entre las medidas tomadas y las informadas, prácticamente la mayoría de ellas aparecía en la rendición ante los diputados; se exceptuaron algunas medidas de orden económico como el establecimiento de derechos que es una función del Congreso. Algunos asuntos de peso sobre los que se tomaron decisiones fueron sujetos a aprobación posterior del Congreso: firma de Tratados interprovinciales, reglamentaciones de comercio, también cambios radicales en la organización y control de los territorios como son la supresión de comandancias generales y creación de nuevas autoridades centralizadas. Un par de decretos fueron emitidos en condición de provisoriedad, aclarando “por ahora y hasta nueva resolución”; los mismos fueron informados y aprobados por los diputados.

Por último, en el marco de esta concesión de amplitud del poder se generó un conflicto importante entre el gobernador y el Congreso referido al acatamiento de su cese. En diciembre de 1830 se le otorgaron facultades extraordinarias al gobernador Pedro Barrenechea fundamentándose en la grave situación provocada por el grupo de Ricardo López Jordán con apoyo de Juan Lavalle, que pretendía derrocarlo y acceder al poder, hechos que están enmarcados en los conflictos entre la Liga Federal de la que Entre Ríos formaba parte y la Liga Unitaria; el Congreso mantuvo sus sesiones mientras duró la concesión excepcional. En el interín, Barrenechea debió salir en campaña militar para contener los ataques de López Jordán y Lavalle, delegando el cargo de gobernador en José Ignacio de Vera a quien traspasó las facultades extraordinarias con acuerdo del Congreso. Luego de esa campaña y a causa de una enfermedad Barrenechea no reasumió y Vera continuó en el cargo tomando decisiones de importancia en el aspecto fiscal. Llegado el mes de junio de 1831, los diputados consideraron que los motivos que habían fundamentado el otorgamiento habían desaparecido, por lo que se revocaban las facultades extraordinarias. Vera no acusó recibo de la revocación y el Congreso de manera recurrente requirió su acatamiento.<sup>286</sup> El proceso posterior muestra una persecución de funcionarios políticos del gobierno de Vera, especialmente sobre el Secretario Calixto de Vera que era hermano de José Ignacio quien es hecho

---

<sup>286</sup> RLDAPER, T. III, pp. 304-311.

prisionero y enjuiciado por defraudación al fisco. Vera cesó en el gobierno, Barrenechea quiso reasumir pero el Congreso invocando el art. 57 del Estatuto que preveía reemplazo del gobernante por enfermedad, nombró un gobernador provisorio hasta el fin del bienio previsto para Barrenechea en la persona de Pedro Espino, Coronel e Inspector General de Armas.

El análisis hasta aquí nos ha mostrado a un sistema de organización política compuesto por un Congreso provincial, un gobernador y una administración de justicia, por lo que vimos, no constituida como Poder del Estado; en este sistema no existía el Cabildo. Otras provincias como Santa Fe, Corrientes, Tucumán por citar algunas, tuvieron un período de coexistencia de las instituciones con rasgos republicanos y las instituciones capitulares de naturaleza colonial, con relaciones bastante inestables entre sí (Tio Vallejo, 2001: Cap. IV; Tedeschi, 1993: pp. 409-429; Reglamento Provisional de Corrientes de 1824). Durante el período colonial, Entre Ríos estuvo bajo jurisdicción del Cabildo de Santa Fe. Ya hemos planteado que a fines del siglo XVIII la acción pobladora y colonizadora de la Corona fundó las villas del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú escindidas del dominio santafesino, instaurando respectivos Cabildos los que fueron suprimidos por Francisco Ramírez en 1820. En Paraná a mediados de 1813, el gobierno central del Directorio elevó al rango de villa al pueblo de la Bajada del Paraná y creó un Cabildo adepto de seis miembros que duró apenas unos meses. Estos son los antecedentes de la figura capitular en la experiencia entrerriana que, por cierto, no tenían el arraigo y tradición de los otros Cabildos rioplatenses instalados ya en la colonia temprana. Sin embargo, en octubre de 1829, el Congreso creó dos cargos de

...Defensores Generales de Menores y Pobres en lo criminal y civil que no tengan especiales”, uno con sede en la Capital Paraná y el otro en Concepción del Uruguay... Las funciones, honores, exenciones y prerrogativas son los declarados por las Leyes a los que ejercen tan honroso empleo concegil en las municipalidades de los Pueblos Americanos...<sup>287</sup>

Al poco tiempo se estableció una Ley fijando tarifas de Derechos de Propios de Ciudad. A partir de 1830, a fin de organizar su cumplimiento, se crearon dos Juntas de Propios para funcionar en la Capital y en el Uruguay, con

---

<sup>287</sup> RLDAPER, T. III, pp. 86-87.

dos síndicos procuradores de ciudad y recaudador del ramo de propios con exigencia de fianza <sup>288</sup> . Los tribunales de comercio instituidos por el Congreso Provincial en mayo de 1823 fueron abolidos y en su lugar se crearon dos cargos de diputados de comercio para entender en causas mercantiles, inspirada esta medida en el Art. 9 de la cédula de erección del Consulado de Buenos Aires en 1794; se aclaró especialmente que la regla para la sustentación y determinación de los pleitos serían cédulas de consulado, ordenanzas y leyes españolas antiguas como las de Bilbao, Indias y Castilla.<sup>289</sup> Es decir que los cargos de matriz colonial que fueron creados en 1830 estaban vinculados a la justicia comercial y a la recaudación de derechos de ciudad y se regían por pautas de la “antigua constitución”. No se retornó al Cabildo como corporación sino que fueron cargos sueltos controlados por el Ejecutivo y los diputados. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar los intentos de restauración de antiguas formas de administración colonial en Entre Ríos en tiempos en que lo capitular era considerado inveterado e inútil, resabio colonial, obstáculo de los nuevos sistemas y origen de tumultos y resistencias al nuevo orden y se sucedían las supresiones en todo el Río de la Plata? En efecto, luego de la revolución y la independencia, los Cabildos como cuerpos alcanzaron funciones militares y en algunos casos generaron actividad política facciosa y competencia con las Salas de Representantes, los que fueron motivos explícitos o implícitos para ordenar su desaparición en algunas provincias. <sup>290</sup> Para hallar una respuesta a nuestro interrogante se necesitaría una indagación mayor sobre la relación institucional entre autoridades constituidas, tribunal cesante y nuevos funcionarios.

---

<sup>288</sup> RLDAPER, T. III, pp. 92-94, 123-124, 139-140.

<sup>289</sup> Sobre creación de Tribunales de Comercio que funcionarían en las villas del Paraná y del Uruguay: RLDAPER, T. I, pp. 273- 278. El Correo Ministerial del Paraná, No. 22, 5 de junio de 1823. AGPER, Hacienda IX, Subserie A, Carp. 1, Leg. 19, 1826, fs. 134-135. RLDAPER, Tomo III, pp. 148-150.

<sup>290</sup> Entre 1820 y 1828 se suprimen los Cabildos de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca y San Luis. En 1832 los de Santiago del Estero y Santa Fe, quedando el de Jujuy hasta 1838. En Sáenz Valiente, José María *Bajo la campana del Cabildo. Organización y funcionamiento del cabildo de Buenos Aires después de la Revolución de Mayo (1810-1821)*, Bs Aires, Editorial Kraft, 1952, p. 453.



## **SEGUNDA PARTE**

### **Construyendo el Estado en un convulsionado contexto regional**





## **Un orden político acosado: militarización, conflictos internos e impacto financiero.**

La investigación de la construcción estatal en Latinoamérica luego de las Independencias no solo implica considerar las teorías políticas circulantes, los sistemas políticos institucionales propuestos y aquellos implementados, las formas de la legalidad y la legitimidad del poder entre otros ejes problemáticos sino también examinar el papel central que tuvieron las fuerzas militares y las guerras desatadas para dirimir posiciones, papel que indudablemente condicionó ese proceso formativo en tanto se asociaba prácticamente a la estabilidad o inestabilidad alcanzadas en las llamadas “jóvenes repúblicas”. En el Río de la Plata la guerra, con sus incesantes requerimientos de hombres y recursos, provocó una ampliación de los efectos de ese proceso abierto por la política hacia 1810. Una guerra que, en muchos análisis historiográficos del período, aparece separada entre guerras internas e independentistas con el afán de aportar claridad al proceso desde una tajante clasificación, pero que no hace más que desmembrar una situación de violencia y militarización social sostenida en el entramado de la liberación de la opresión colonial y la simultánea emergencia de proyectos y poderes regionales en disputa que seguirán confrontando en las décadas siguientes, incluidos los conflictos con el Imperio portugués y luego del Brasil.<sup>291</sup> En esta parte introductoria nos interesa remarcar antecedentes y elementos de un contexto violento y militarizado al que no escaparían los problemas centrales sobre conflictividad política y sobre finanzas públicas analizados en esta Segunda Parte.

En la comprensión de ese mundo convulsionado de las guerras es tan importante el conocimiento y análisis de aspectos institucionales del ejército y de aquellos específicos de la disciplina militar, como el de los efectos producidos en los mismos combatientes, en las vidas de los hombres y mujeres que se vieron afectadas profundamente por la situación guerrera. Las ciudades y campañas por las que el ejército se desplazaba, se asentaba o convertía en escenario de la lucha sufrieron el impacto, no homogéneo por cierto sino teniendo en cuenta las

---

<sup>291</sup> Aspectos ya planteados en el contexto histórico de esta investigación. Cf. Capítulo II, Apartado II.3. Fradkin, Raúl “Las formas de hacer la guerra en el Litoral rioplatense” en Bandieri Susana (Comp.), 2010, p.168.

variaciones regionales del mismo que han merecido muchas investigaciones. En un clima mezclado de efervescencia política, expectativas, incertidumbre y descalabros de diverso tipo, se abrieron posibilidades de movilidad social en la que se reinventaron las estrategias de supervivencia e inserción colectiva no solo en las elites sino en los sectores populares e incluso étnicamente diferenciados por la vía del alistamiento miliciano.

La confrontación armada en la década revolucionaria tuvo efectos dinamizadores de las economías bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, se renovaron prácticas mercantiles ajustadas a los tiempos de la guerra y con no pocos beneficios para aquellos que, como Cipriano de Urquiza en Entre Ríos, aprovechaban buena información, contactos políticos y control de recursos (Djenderedjian J. 2002: pp. 243-259). Las necesidades de las tropas en los lugares de asiento y tránsito en cuanto a alimentación, atención sanitaria, vestimenta y armas, propiciaron la creación o mejoras de una infraestructura local de servicios y producción, tales como fundiciones, fábricas y compostura de armas, hospital militar, comercio minorista, almacenes y depósitos, preparación de alimentos, confección de vestuarios, de monturas, lomillos y aperos de cuero, trabajos de carpintería, transportes terrestres y fluviales. En 1810, la Expedición Militar al Paraguay pasó por Santa Fe donde recogió donaciones y demandó bienes y servicios; así, Agustín Dacosta y José Echevarría vieron reactivado su comercio proveyendo de yerba, carne y tabaco al consumo del ejército mientras que armeros, carreteros o herreros como Francisco Ocampo, Laureano Tarragona, Isidoro Martínez, recibieron una paga en metálico por sus servicios.<sup>292</sup> Atendiendo a tareas operativas para el ejército, se originó una mayor demanda de peones al cuidado de ganado para raciones, de caballos y mulas para monta y carga. Muchos hacendados que antes de la revolución hacían sus transacciones ganaderas en el Alto Perú o en la Banda Oriental, debieron reorientar los circuitos hacia zonas de menor conflicto bélico o bien sustituir esas operaciones por el abastecimiento al ejército, logrando ventas más regulares sin trasladar a los animales, convirtiéndose algunos de ellos en

---

<sup>292</sup> Elda González "Paso de Belgrano por Santa Fe" en *Anuario Inst. Inv. Históricas*, FFyL, UNL, Año 4, No. 4, Rosario, 1960, Apéndice: AGPSF, Contaduría, T. 15, docs. 98, 100, 113, 124.

abastecedores monopólicos. Los gastos militares generales fueron atendidos por partidas presupuestarias transferidas por los gobiernos centrales a los lugares de asiento; el derrame de metálico en regiones del Interior y el Litoral activó, en distinta medida, las economías locales y mercados conexos. ((Tio Vallejo G. 2001: pp. 189-210; Halperin Donghi 1972: pp. 93-120).

La militarización afectó muy negativamente a las personas y a los bienes públicos y privados por medio de distintas acciones: la rapiña, los castigos públicos, la exhibición triunfal de la muerte del enemigo, las violaciones y las quemas de poblados y establecimientos productivos; la expoliación de las Cajas locales para atender gastos militares sin posibilidades ciertas de restitución y tantos excesos cometidos. También la confiscación de bienes de aquellos considerados enemigos o tibios adherentes y las exacciones al comercio y a los hacendados bajo atropellos y amenazas eran moneda corriente. En La Rioja, las listas de cesión de ganado para el Ejército Auxiliar del Perú en 1818 son una muestra de la disponibilidad forzosa de los arreos de haciendas particulares; un año más tarde, se registró la entrega obligada de cosechas enteras de maíz y ganado mular para abasto y movilidad del ejército patrio.<sup>293</sup>

Esta evaluación sobre los efectos negativos de la militarización nos coloca ineludiblemente ante un estilo de relación social impregnado de extrema(s) violencia(s) y brutalidad que no fue privativo de un bando, de una facción o de una sola región de la América revolucionaria, como ocurre en fin con todas las guerras a las que se enfrentó y se enfrenta la humanidad. Un aspecto central de lo que hoy los historiadores están comenzando a analizar en términos de Cultura de la Guerra cuyo significativo avance luego de la revolución dejó profundas huellas en las relaciones políticas y sociales de las siguientes décadas.<sup>294</sup>

---

<sup>293</sup> Archivo del Brigadier Gral. Juan Facundo Quiroga, tomo I (1815-1821) Documentos para la Historia Argentina, nro 24. Instituto Ravignani. Bs As, UBA, 1957, docs 58 y 78.

<sup>294</sup> Obras que refieren a Cultura de la guerra y a la violencia como fenómeno social: Lorenz, Federico (Comp.) 2015, Introducción y Caps. 5, 6 y 7. Ansaldi W. y Giordano V. (Coords.), 2014, pp. 15-70. Rabinovich, Alejandro, *Ser soldado en las guerras de independencia. La experiencia cotidiana de la tropa en el Río de la Plata (1810-1824)*, Penguin RH GEA, 2013. Acceso: [https://books.google.com.ar/books?id=obwRAAAQBAJ&dq=sumarios+militares+de+la+independencia&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.com.ar/books?id=obwRAAAQBAJ&dq=sumarios+militares+de+la+independencia&source=gbs_navlinks_s) (Consulta 13/02/2014). Garavaglia, J. C., Pro Ruiz, J., Zimmermann, E., 2012: Prólogo de J.C. Garavaglia, Comentarios de J. Pro Ruiz y E. Zimmermann, Caps. de A. Rabinovich y de R. Fradkin.

Estudios realizados sobre guerra y violencia en México, Colombia y Venezuela durante las revoluciones de independencia caracterizan y evalúan este fenómeno social, marcando la brutalidad multiplicada sobre los habitantes en el marco de una acentuada polarización.<sup>295</sup> En el Río de la Plata las evidencias de las múltiples caras de la violencia con que se manifestaron los conflictos inundan los documentos de época; a los de La Rioja ya mencionados agregamos algunos ejemplos en el Litoral. En 1812 las expediciones de las escuadrillas realistas, que partían desde la base naval de Montevideo, surcaron el río Paraná provocando saqueos de bienes en los pueblos ribereños como San Pedro, San Nicolás y San Lorenzo. En el caso de las tropas artiguistas por Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe sus incursiones solían convertirse en una serie de depredaciones de todo tipo y abusos de autoridad, tolerada o muy difícil de controlar por parte de sus jefes. Los comerciantes ingleses John y William Parish Robertson relataron en sus célebres cartas el modo de operar de esos soldados en tierras correntinas, destacando los crueles tormentos sufridos en 1815 por el comerciante francés Pedro Quesnay, con fines de robo. En Santa Fe, la correspondencia entre propietarios santafesinos y administradores de las posesiones en Entre Ríos revelaba la ferocidad de estas tropas y la preocupación ante posibles ataques a sus establecimientos.<sup>296</sup> En el Derecho Natural y de Gentes, aún teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos teóricos, las reglas referidas a la guerra imponían límites a su alcance y desenvolvimiento. Los males de la guerra debían ser atenuados por moderación, clemencia y respeto al sentido de humanidad que suponía no infligir al enemigo agravios o rigores injustos e innecesarios.<sup>297</sup> Dentro de esta lógica, el vecino y comerciante, Francisco Antonio de la Torre y Vera Muxica, denunciaba el saqueo

---

<sup>295</sup> Landavazo Marco A. "Guerra y violencia durante la revolución de Independencia en México" en *Tzintzu*, N° 48, 2008, pp. 15-40. Thibaud, Climent, 2005, pp. 339-364, <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/thibaud.pdf> (Consulta 16/02/ 2014).

<sup>296</sup> J.P. y W.P. Robertson, 2000, Vol I. Cartas III y XI; Lamprech, Rachel Os "dóceis" de Corrientes. As guerras de independência no litoral rioplatense e a política popular (1810-1820)" en V Jornadas AUDHE, Montevideo, 2011. AGPSF, Colección Diez de Andino, Leg. No. 22. 1818, Cartas entre José de Zubiaur y Manuel Diez de Andino; López Rosas, José Rafael, *El pronunciamiento federal de Santa Fe*, Extensión Universitaria, UNL, 1968, pp. 20-21, 28, 32-33 y "La guerra fluvial de los santafesinos" en *Santa Fe, aquel rostro*. Municipalidad de Santa Fe, 1997, pp. 49-54.

<sup>297</sup> Vattel, Emmer de, 1834, T. II, Libro III, De la Guerra, Cap. IX pp. 148-155, Cap. X, pp. 155-158; Puffendorf, Samuel, 1980, p. 262 (1ra. edición, Cambridge, 1682).

y la apropiación de sus propiedades haciendo notar que no se respetaban los derechos naturales más básicos, con especial referencia al de propiedad:

“... Es bien público en ésta (*Santa Fe*) los servicios que tengo hechos al Estado en la causa pública, así como mis intereses como con mi persona, también es notorio el premio con que me han satisfecho: éste ha sido el de haberme injustamente tenido por contrario al sistema de los Orientales o al menos por sospechoso; como a tal según infiero se me ha tratado y por ello se me han confiscado mis bienes (y aún los de mis dos hijos menores) que tenía en aquella Banda (*Entre Ríos*), sin haberme oído, ni tampoco precedido alguna de aquellas solemnidades de **derecho natural** indispensables, que reclaman **los derechos del hombre social**: algunos de ellos se han vendido y otros se apropiaron al Estado; como también juzgo fui saqueado con la mayor inconsideración el 30 de marzo, sin que mis hechos públicos fuesen suficientes, al menos para acreditar mi imparcialidad”.<sup>298</sup>

Estas formas violentas fueron usuales en la invasión portuguesa a la Banda Oriental entre 1811 y 1812. Según el testimonio de José Artigas, las compañías militares al mando de Manoel dos Santos Pedroso quemaron campos, cometieron robos y saqueos, torturaron y mataron a habitantes de los pueblos costeros del río Uruguay como Bethleém y Arroyo de la China, llegando fronteras adentro del Entre – ríos hasta el pueblo de Gualeguay donde produjeron los mismos efectos.<sup>299</sup>

En lo que refiere a documentos militares, los partes de batalla son testimonios privilegiados de la forma brutal de los enfrentamientos. Los partes firmados por Estanislao López patentizan la crueldad de la lucha librada en la batalla del Gamonal -2 de setiembre de 1820-, entre santafesinos y porteños:

...La acción de ayer es imposible detallarla; sí podré decirle que ha sido el golpe más terrible que han sufrido los porteños de cuantos han llevado en nuestra provincia. En más de diez leguas que se ha perseguido, no se ven más que cadáveres. Tal mortandad consterna aún al corazón más duro. Ha sido tal la persecución que, parándose los caballos de cansados, tanto de los porteños como de la gente nuestra que los perseguía, dejaban los caballos y a pie disparaban ellos y los nuestros a pie los perseguían, encarnizados en matarlos...<sup>300</sup>

---

<sup>298</sup> AGPSF, Cuaderno 1º. Acuerdos del Cabildo de Santa Fe, 1817. (Resaltado nuestro). Para esta época se contaba con los Estatutos de 1815 y 1817 ya mencionados en el Cap. III de esta Tesis que establecían de manera idéntica en su Sección 1ra. Del Hombre en Sociedad, Cap. 1, Art. 1 que “Los derechos de los habitantes del Estado son, la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad”, volviendo a referirse a derecho de defensa de la persona y propiedades en la Sección Séptima Cap. I Sobre la seguridad individual.

<sup>299</sup> Archivo Artigas, Tomo 6, Doc. 112, p. 194. Oficio de José Artigas al Gobierno de las Prov. Unidas del Río de la Plata, Cuartel General de Salto, 24 de diciembre de 1811. Acceso: <http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas>

<sup>300</sup> Papeles de López Imp. Oficial, Sta Fe, 1976, Vol. I, Docs. No. 239, 241, 243.

Los datos fríos del accionar de la maquinaria militar, el análisis de los conflictos políticos de la época y de la fiscalidad debemos pensarlos en el marco de la extraordinaria conmoción social, los impresionantes actos de violencia y destrucción, la terrible experiencia humana que representan en su desarrollo, lo que nos coloca también ante una paradoja: ¿cómo una sociedad que transita por esa experiencia, continúa proyectando su organización política, formando familias, sosteniendo relaciones, produciendo y comerciando...? Un interrogante que sobrevuela casi permanentemente en nuestra investigación.

\*\*\*

El desarrollo de la Primera Parte nos introdujo en problemas centrales de las aspiraciones soberanas e independientes de estas nuevas entidades políticas nacidas con la caída de un debilitado poder central en el Río de la Plata y en medio del debate y la confrontación entre dos tendencias opuestas acerca de los legítimos sujetos de imputación de soberanía. Una confrontación que no se agotó como sabemos en esa coyuntura de 1820. Tulio Halperin Donghi describe un cambio sustancial en el estilo de convivencia política de una manera elocuente:

...."Dentro de cada provincia, así como en la relación interprovincial, la hostilidad y la tensión son elementos insuprimibles del equilibrio que ha surgido en 1820; quien quiera sobrevivir en él debe saber utilizar también esos elementos en su provecho, pero de este modo no hará sino acentuar la fragilidad, la inestabilidad que le obligan a incluir en su arsenal político recursos tan discutibles" (Halperin Donghi, 1972: p. 403).

En el estudio de la experiencia entrerriana dentro de un contexto rioplatense posrevolucionario, vimos emerger viejos y nuevos principios ordenadores de la política a partir del análisis de las diferentes vertientes teóricas, del uso del vocabulario político y de las propias prácticas sociales referidas a la representación política, la institucionalización, la distribución del poder en un marco formal de rasgos republicanos. Pero no es posible comprender el proceso en su conjunto, especialmente el de la construcción del poder político, si soslayamos el carácter confrontativo y violento de la discusión política local y regional que vimos fluir en las páginas precedentes, un carácter

plasmado en ciertas formas de acción colectiva asentadas en facciones de variable conformación, en formas de sociabilidad donde se combinan lealtades personales e intereses locales y regionales, alianzas sinuosas donde tercian las interesadas presiones de potencias extranjeras; este es un carácter del proceso que tiene su correlato en las propias vicisitudes por las que atraviesa la cuestión fiscal.

En esta Segunda Parte, examinamos primeramente los antecedentes coloniales y revolucionarios de la organización militar en el Río de la Plata y luego la organización, composición y funcionamiento del ejército y las milicias en Entre Ríos. Partimos de la noción de que en la naturaleza de la política conviven el acuerdo y el conflicto como elementos constitutivos, que se ponen en acto en torno a prácticas tales como negociación, resistencia, cooperación, reciprocidad. En tal sentido, examinamos la conflictividad política y la militarización como componentes en la construcción del poder político local y regional, entendiendo al primero como parte de la cultura política de la época y en cuanto al segundo como un agente de cambio en el pasaje hacia una conformación de estado provincial.<sup>301</sup> La importante cuestión del impacto de la estabilidad / inestabilidad en las finanzas públicas cierra esta Segunda Parte, tratando de poner de relieve los grados de correspondencia entre el comportamiento fiscal y el ritmo de los cambios impuestos por la política, teniendo en cuenta los índices de conflictos y acuerdos en la primera etapa de la periodización propuesta para esta investigación.

---

<sup>301</sup> Al respecto, Pierre Vilar cree que en vez de factor que se relaciona más con un modelo matemático, es mejor hablar de *componentes* de una situación, de “elementos más bien de naturaleza sociológica que se combinan en relaciones siempre recíprocas, aunque variables, en los *orígenes*, en el *desarrollo* y en la *maduración* de las situaciones”. Conferencia “Penser historiquement”, 1987.

Acceso: [http://atelierpierrevilar.net/assets/files/PVILAR\\_conferencia\\_pensar\\_historicamente.pdf](http://atelierpierrevilar.net/assets/files/PVILAR_conferencia_pensar_historicamente.pdf) (Consulta 20/09/2012).

## **Capítulo VII: ACTORES E INSTITUCIONES EN ESCENARIOS DE CONFLICTO.**

### **VII.1. La organización militar.**

#### **VII.1.a. Antecedentes de origen colonial y revolucionario en el Río de la Plata.**

En América española, las reformas borbónicas en el campo militar fueron motivadas principalmente por el creciente predominio marítimo y colonial de Inglaterra sumado a la vieja disputa entre España y Portugal por las posesiones al norte y al oriente del Río de la Plata. En este marco conflictivo, la unificación militar de la metrópoli española y sus colonias fue un intento por mejorar la defensa de los territorios americanos y con ese objetivo se tomaron importantes decisiones ya desde los Tratados de Utrech y a lo largo de todo el siglo XVIII. En este sentido, la creación de unidades regulares –compañías, batallones, escuadrones, regimientos- dotadas de planas mayores y servicios de guarnición fue acompañada de Reales Ordenanzas sobre formaciones, financiación y mantenimiento lo que contribuyó a su eficiencia funcional. Los ejércitos de dotación como unidades fijas en las principales ciudades americanas, las tropas ofensivas de refuerzo procedentes de España –llamadas veteranas- y las milicias en sus distintas modalidades conformaron los tres nuevos colectivos militares. En el caso de las Milicias se distinguieron dos clases territoriales regladas compuestas por los varones de cada jurisdicción entre 15 y 45 años: la urbana con milicianos del vecindario y oficiales “patricios”, dividida en tercios y compañías por oficios; la rural asignada a ciudades menores y territorios de frontera, formada por los vecinos de la campaña, sus peones y dependientes.<sup>302</sup> En el Derecho de Gentes se contemplaba esta convocatoria dentro de la obligatoriedad de todo ciudadano de servir y defender al estado según su capacidad, un sentido de defensa común de la sociedad que constituía todo un principio de la asociación política.<sup>303</sup>

---

<sup>302</sup> Marchena Fernández, Juan, *Ejército y milicias en el mundo colonial americano*, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 91-195. Allan Kuethe realiza un análisis del impacto del régimen de milicias con sus variaciones regionales, “Las milicias disciplinadas en América” en Kuethe, Allan y Marchena Juan (Eds.) *Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia*, Barcelona, Univ. Jaume I, 2005, pp. 101-126.

<sup>303</sup> Vattel, Emmer de, 1834, T. II, Libro III, De la Guerra, Cap. II, pp. 11-12.



El fuero militar o conjunto de prerrogativas legales y judiciales fue aplicado también a las milicias para agilizar el alistamiento de jefes, miembros de las elites locales. El establecimiento de privilegios y exenciones era otro instrumento de captación de hombres para la oficialidad: permiso para portar armas, exención de desempeño obligado de oficios públicos, de embargo y prisión por deudas, etc. Para esos jefes, la ventaja de estar eximidos de la justicia ordinaria significaba cierta protección oficial sobre el ejercicio de actividades económicas, posibilitando el control social hacia sus peones de hacienda, aparceros y arrendatarios y hasta el enfrentamiento exitoso de posibles reclamos de éstos por injusticias o malos tratos. Los abusos de los oficiales en este sentido dieron pie a la Corona para dictar la Real Cédula de 1802 en la cual se disponía que las causas mercantiles y delitos civiles se excluyeran de la justicia militar (Marchena J. 1992: pp. 108-109).<sup>304</sup>

En el Río de la Plata, las Ordenanzas de 1789 firmadas por Carlos IV fueron puestas en vigencia por el virrey Marqués de Avilés; en ellas las Milicias continuaron siendo tropas de reserva por leva forzosa ante emergencias, por ejemplo amenazas de invasiones extranjeras o de los malones indígenas sobre poblaciones hispanocriollas. En 1791, otra Real Ordenanza les confirió una oficialidad veterana y una Instrucción de armas a cargo de una Asamblea de expertos militares. En 1801 el Rey dictó el "Reglamento para milicias disciplinadas de Infantería y Caballería del Virreinato de Buenos Aires". En él se establecieron nuevas compañías milicianas de ciudad y frontera formadas por varones entre los 16 y 45 y se incluyeron nuevas disposiciones sobre el servicio, concentraciones y revista de tropas, formas de designación de oficiales, sueldos durante el servicio activo, etc.<sup>305</sup>

Ahora bien, pese a las mencionadas medidas borbónicas, Buenos Aires no había podido consolidar fuerzas milicianas eficaces para la defensa de eventuales ataques extranjeros. La demanda sostenida de tropas hacia las áreas de frontera asediadas por los indígenas y las rebeliones comuneras en el Alto

---

<sup>304</sup> Abásolo, Ezequiel, 2002, Cap. II, p. 121-122.

<sup>305</sup> Bidondo, Emilio "Las tropas del Río de la Plata bajo la influencia de la legislación militar borbónica" en *Investigaciones y Ensayos*, Academia Nacional de la Historia, No. 32, Bs. As, Enero-junio 1982. Cervera, Federico "Las milicias santafesinas" en *Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe*, Comisión Redactora, Tomo III, Libro I, pp. 120-121

Perú dejó a la Capital sumamente desprotegida. La ambición inglesa por estas posesiones españolas de ultramar se tradujo en planes de invasión con fuertes intereses militares y comerciales, en una coyuntura donde el bloqueo dispuesto por Napoleón la privaba de importantes mercados. Apreciando la debilidad defensiva de la ciudad se produjeron dos invasiones, en 1806 y 1807. Para poder resistir, el virrey junto al Cabildo creó diversos cuerpos de milicias de Caballería e Infantería, Húsares, Patricios, Arribeños, Tercios de Gallegos, de Vizcaínos, Andaluces y Cántabros, Batallón de Indios, Pardos y Morenos, Granaderos, etc.<sup>306</sup> Finalmente, los invasores fueron expulsados pero esta experiencia trajo consecuencias muy importantes para toda la región, entre ellas, el contacto con el comercio inglés y sus mercancías que comenzó a romper monopolios económicos en la sociedad rioplatense hasta lograr progresivamente la libertad de comercio; por otro lado, el acrecentamiento del poderío militar, más independiente de la administración colonial española, sumado a las posibilidades de movilidad social para los alistados en las milicias, la elección de jefes por parte de la tropa que entablaba un nuevo vínculo con los subalternos y el recambio en los liderazgos que hasta entonces habían descansado en grupos gobernantes tradicionales.(Halperin Donghi, T. 1989, pp. 22-32; Goldman N., 1998, pp. 31-36).

La instancia revolucionaria inauguró un período de intensas luchas armadas en todo el territorio ex virreinal; la necesidad de sofocar a los focos contrarrevolucionarios obligó a los sucesivos gobiernos centrales a organizar expediciones armadas más profesionalizadas, aprovechando la llegada de militares con conocimiento y experiencia en las guerras europeas. Las expediciones para imponer la revolución se dirigieron hacia distintas áreas críticas como el Paraguay, Alto Perú y Montevideo, a la vez que desde Cuyo como frente andino de conflicto se preparaba el Ejército, al mando de José de San Martín, para atacar a los españoles instalados en Chile y luego, de tener éxito, planear por mar la liberación del más importante bastión español en América del Sur, el Perú. En cuanto a las fuerzas de mar que operaban contra

---

<sup>306</sup> En *Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino*, Comando en Jefe del Ejército, Círculo Militar, Buenos Aires, 1972, Las invasiones inglesas y las nuevas milicias.

los españoles realistas de Montevideo, eran muy precarias y se complementaban con la acción de marinos dotados de patentes de corsos.<sup>307</sup>

Las formas de reclutamiento y disciplinamiento nos proporcionan numerosas evidencias de la organización militar vigente, del impacto demográfico, ventajas y desventajas económicas, resistencias y desconocimiento de autoridad, grado de profesionalización, afirmación del orden social y otras variables, de allí la importancia que ha cobrado actualmente la elaboración de estudios específicos sobre estos aspectos dentro del proceso de construcción estatal. En general, el ejército revolucionario, basado en estructuras heredadas de la colonia, incorporó pautas nuevas de profesionalización, mantuvo una organización y recluta estable con soldados y oficiales instruidos y pagos; a modo de ejército de reserva, la convocatoria o leva forzosa de milicianos fue una constante, medida también por la persistencia de lógicas clientelares en su reclutamiento, los perjuicios de sus formas arbitrarias y por el alistamiento de personas sin aptitudes militares. Este montaje militar sobre el que se articulaba la capacidad de mando de sus jefes se proyectó más allá de 1820 con variantes regionales. A partir de la creación de los Estados provinciales en el Río de la Plata, la formación y actuación de sus ejércitos tuvieron inevitablemente antecedentes en la experiencia revolucionaria e independentista. De hecho, en todas las provincias en mayor o menor grado, la guerra dejó sus señales: en sus organizaciones militares y cargos jerárquicos, en las tácticas guerreras, en las funciones profesionales pero también en sus contactos con la política y las relaciones con potencias extranjeras.<sup>308</sup>

---

<sup>307</sup> Los corsarios eran aventureros al mando de buques mercantes armados en guerra y con patente de sus respectivos gobiernos que los habilitaban a perseguir embarcaciones de potencias enemigas; gozaban de respaldo legal y debían informar acerca de sus operaciones y capturas. En cuanto a la flota patriota, en 1811 se creó una primera formación de tres naves a vela y recién en 1814 se reforzó con la compra de viejas naves mercantes adaptadas para el combate pero todavía precarias. En De Marco M.A. *Corsarios argentinos. Héroes del mar en la Independencia y en la guerra con el Brasil*, Bs. As. Emecé, 2005, pp. 15-16, 84-85 y 216-217.

<sup>308</sup> Para elaborar este párrafo se consultaron: Tio Vallejo G., 2001, pp. 189-210; Halperín Donghi T. "Militarización revolucionaria en Buenos Aires 1806-1815" en *El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica*, Bs As, Sudamericana, 1978; Marchena Fernández, 1992; Andújar Castillo, F. "Las élites de poder militar en la España Borbónica. Introducción a su estudio prosopográfico" en *Actas del I Simposium Internacional del Grupo P.A.P.E., "Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia una nueva historia institucional"*, Granada, 1996. Contreras Gay J. El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento durante el Antiguo Régimen" en *Studia Historica. Historia Moderna*, No. 14, Salamanca, Edic. Universidad,

Es importante destacar que gran parte de las autoridades, cuerpos y funciones previstos en las Reales Ordenanzas fueron recogidas tanto por Estatutos revolucionarios dictados por el gobierno central de Buenos Aires como por las constituciones provinciales, permaneciendo prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XIX. Cargos como los del Comandante Militar o Comandante de Armas o el Comandante General de Frontera figuraron dentro de la estructura militar con funciones específicas: el primero estaba a cargo de núcleos poblados importantes, debía mantener la organización, dotación, insumos e instrucción de los cuerpos militares en cada distrito; el segundo tenía la responsabilidad de sostener la línea de frontera con la distribución de las tropas veteranas y la reunión de milicias en caso de urgencias. Lo mismo ocurrió con la organización miliciana básica dispuesta por las Reales Ordenanzas citadas que persistió, aunque con adecuaciones regionales, hasta 1853 en que la primera Constitución de la Confederación Argentina realizó importantes modificaciones. Recién a principios del siglo XX muchas normas militares procedentes de la colonia fueron reemplazadas en el marco de la modernización del Ejército impulsada por el Gral. Pablo Riccheri y por el nuevo papel de la institución como uno de los vehículos de construcción de la nacionalidad argentina, construcción en la que se buscaba reemplazar tradiciones hispanas coloniales en casi todos los órdenes.<sup>309</sup>

#### **VII.1.b. La trama militar en Entre Ríos: aspectos organizativos y judiciales.**

¿Cuáles son los hilos de la trama militar en Entre Ríos en esta primera etapa de constitución del Estado provincial? La pregunta nos pone ante la indagación de un caso que se presenta muy complejo por las vicisitudes políticas, los conflictos armados y los cambios vertiginosos en materia de alianzas. Para ello se observarán, de manera general, algunos aspectos como la organización y estructura militar, distribución de las tropas, reclutamiento, justicia militar, desertiones, sistema de retiros.

---

1996. Salvatore R. "Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de Rosas" en *BIHAAER*, Tercera Serie, No. 5, 1er. Semestre de 1992.

<sup>309</sup> Antonio Vallecillo sostiene que las Ordenanzas de 1789 se mantuvieron al menos hasta 1850, en su obra *Ordenanzas de S.M. para el Régimen, Disciplina, Subordinación y Servicio de sus Ejércitos*, Madrid, 1850, T. I, p. VIII, citado en Bidondo E., pp. 205, 211-213..

## *La organización militar*

La organización militar tenía en el gobernador a su Jefe Superior militar, siguiendo las características del antiguo Teniente de Gobernador. Las atribuciones se extendieron al nombramiento de todos los empleados militares, a la prevención de conspiraciones, aplacamiento de tumultos, rechazo de invasiones extranjeras y confirmación o revocación de sentencias de reos militares pronunciadas por los Tribunales propios de ese fuero. Asimismo, se procuró una acción combinada y de cooperación entre los Comandantes y los Alcaldes Mayores y de Hermandad, a fin de lograr mayor eficacia en los procesos judiciales. A fines de 1821, el Congreso ascendió en la carrera de las armas a Lucio Mansilla creando por Ley el cargo de Coronel de Infantería que se convertía en el grado máximo dentro de la estructura militar provincial.<sup>310</sup>

La red de funcionarios militares operaba dentro de los marcos departamentales, ramificada en ciudades, villas, pueblos, fuertes. Los dos Departamentos Principales contaban con Comandantes Generales además de Secretarios y Escribientes que contribuían al orden administrativo. Los nombramientos de estos dos altos cargos fueron acompañados por proclamas del gobernador que ordenaba obediencia y reconocimiento de vecinos y habitantes hacia los militares designados.<sup>311</sup> El poder del Comandante era muy amplio en su distrito; estaba encargado de recibir, difundir y hacer cumplir las disposiciones generales que provenían del Gobierno.

Estos jefes de alto rango, junto con sus partidas armadas, tenían la obligación de realizar visitas a la jurisdicción de su mando, encomendándosele especialmente las áreas fronterizas. Este tipo de misiones estaba extendido en otras administraciones provinciales pero con características propias según sus proyectos estatales, sus problemas y sus necesidades locales y regionales. En Entre Ríos, la visita como forma de acción política ligada a la defensa y afianzamiento del territorio, con particular atención en sus confines, era practicada no solo por funcionarios militares sino también por el gobernador y funcionarios de Hacienda, como veremos en el próximo Capítulo. Estos

---

<sup>310</sup> RLDAPER, T. I., pp. 50-51.

<sup>311</sup> RLDAPER, T. I, p.28. AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, Correspondencia entre Comandancia y Secretaría de Gobierno/Gobernador, f. 1703.

desplazamientos de control estaban formalizados, organizados y concretados con repetición periódica y se constituían en un vehículo para hacer visible la autoridad y legitimar posesión, sobre todo en tiempos de fronteras amenazadas y de inestable dominio (Stopani, A. 2005, pp. 74-79). Hemos estudiado a estos dispositivos en la administración santafesina, comprobando su importancia como parte de las políticas estatales en las fronteras en asuntos como el control demográfico, la organización de actividades económicas, la fiscalización impositiva, el control social, la negociación con los indígenas o la preparación de acciones violentas para restaurar o consolidar el dominio territorial.(Tedeschi, S., 2008).

Por otra parte, los Comandantes militares y sus funcionarios Contralores debían enviar comunicaciones regulares a los Ministros Generales de Hacienda, relativas a sueldos, asignaciones, consumos y demás gastos de la tropa. Esos funcionarios ya existían dentro de la estructura administrativa colonial y cumplían la tarea de veedores y/o inspectores de los caudales públicos y su uso, a fin de garantizar pagos y provisiones, evitar fraudes fiscales o dispendios inútiles. La reglamentación de las funciones del Contralor incluía mecanismos formales tales como planillas de distribución de raciones; libro de recepción de artículos de consumo, nombres de abastecedores, cantidad y distribución de provisiones; registro de reses de auxilio; Estado del número de plazas para fijar número de raciones, rendición a los Ministros quienes tenían que cotejar planilla y documentación accesoria para confirmar la correspondencia entre una y otra. Ante dudas acerca de procedimientos, los Comandantes y Contralores solicitaban instrucciones precisas a la Capital.<sup>312</sup>

Los Comandantes de los Departamentos principales y subalternos oficiaban de controles fiscales al exigir a negociantes y pulperos de las villas y campaña, las correspondientes guías de transacciones a efectos del pago de impuestos en la Capitanía del Puerto y Resguardo o en su defecto, respetar las exenciones previstas por el Gobierno.<sup>313</sup> Además, cumplían la importante función

---

<sup>312</sup> AGPER, Hacienda, Serie I, Carpeta 5, Legajo 4. RLDAPER, T. I, pp. 338-339. Para funciones de Contralor siglo XVIII, Diccionario de la Real Academia Española, Academia Usual, años 1780, 1783, 1791.

<sup>313</sup> Otras atribuciones de los Comandantes para destacar: conceder licencias interiores de paso – atribución colonial reafirmada por la administración de Francisco Ramírez- y licencias exteriores

política de intervenir en la organización del proceso electoral, que ya hemos analizado.

### *La paga*

Los distintos integrantes de la estructura militar regular y milicianas recibían paga por mensualidad. En base a lo consultado entre 1822 y 1831, los comandantes de los Departamentos Principales percibían sueldos equiparados además de cierta cantidad mensual para gastos reservados. La costa del Uruguay requería esfuerzos mayores para custodia y vigilancia; a aquellos oficiales y soldados celadores que ejercían esas funciones se les recompensaba con pequeñas partidas mensuales. El rubro Mesas de Oficiales absorbía gastos de comidas diarias en las guarniciones de Artillería, Caballería e Infantería. Para la fuerza de Marina, de la cual no hemos hallado mayores precisiones, se nombró un Teniente encargado. En cuanto a los milicianos puestos en actividad, ya sea por invasión del territorio o conmociones internas, durante el tiempo que duraba el servicio recibían la misma paga que los soldados regulares. Los sueldos podían tener aumentos, sufrir reducciones o adeudarse todo de acuerdo al estado de las arcas fiscales, cuestión que analizaremos mejor en el Capítulo VIII.<sup>314</sup>

Las listas de empleados pagos del Estado sirviendo al Ejército en Paraná pertenecen al ramo de armería, herrería y personal de campaña. Para el primer caso, armeros y tiradores de fuelles y para el segundo caso, herreros; ambos ramos incluían empleados de barracas para taller y almacenamiento; por su parte, la reunión y cuidado de caballada hizo necesario contar con capataces y peones empleados en el ejército. En cuanto al Hospital Militar, la planta estaba

---

de paso por negocios particulares confirmadas por el Gobernador; controlar evasiones fiscales; administrar donaciones particulares con destino a las parroquias. Los Comandantes Subalternos elevaban a su Superior y éste al Gobernador, la propuesta y nómina de los vecinos que podían ser marchamadores o sea despachantes de la Aduana. Desde las Comandancias se distribuían ejemplares del periódico El Correo Ministerial y se conectaban con las Postas. En el caso de la circulación de comisionados de otras provincias para efectuar Tratados, los mismos eran escoltados de forma permanente por una partida militar supervisada por la Comandancia. AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1674-1675, f. 1688, fs. 1690-1693, f. 1703, f. 1708, f. 1729, f. 1750.

<sup>314</sup> RLDAPER, T. I, disposiciones del 14 de enero y el 1º de agosto; pp. 222-223; 235; 105; 128-129; 196; 200; 211-212; 222; 233-234. AGPER, Gobierno I, carpeta 5, f. 1673. RLDAPER T. II, pp. 238-239, T. III, pp. 82-84.

compuesta por cirujanos, médicos y Sargentos de Sala. El Lanchón del Estado estaba a cargo de un Patrón de barco y marineros.<sup>315</sup>

### *Las unidades militares: distribución y jerarquías*

Sabemos que los cuerpos que componen el Ejército y las milicias presentan una pluralidad de denominaciones cambiantes en el tiempo que hacen sumamente dificultosa una reconstrucción de esa estructura militar. Las listas formales de los distintos cuerpos no representan la totalidad de efectivos ni el conjunto de la fuerza armada. Son formaciones que pueden variar año tras año en su cantidad, en su conformación y en su localización (Fradkin R., 2012, pp. 321-322). Teniendo en cuenta esta advertencia decidimos hacer, a modo de ensayo y de acuerdo a la documentación disponible, una reconstrucción parcial de la organización militar para un año de alta inestabilidad política, el de 1823. La misma nos permitió visualizar puntos de distribución de las tropas, cantidad aproximada de efectivos movilizados e infraestructura existente para mantenimiento y demás servicios a los soldados.

Los datos del año 1823 revelaron que las cabeceras de los dos Departamentos Principales constituyeron el asiento de las tropas más numerosas.<sup>316</sup> En el caso de Paraná, las listas de las formaciones nos muestran una Plana Mayor del Ejército con un Teniente coronel, tres Capitanes y cuatro Ayudantes. Las divisiones eran: La Escolta del Gobernador, el Batallón de Infantería con tres Compañías más una Compañía de Granaderos, Batallón de Artillería con dos Compañías, Primer Escuadrón de Dragones del Paraná con dos Compañías, y, en caso de emergencias, piquetes provisorios de Infantería y de Dragones; también se contaba con Húsares de la Muerte con dos Compañías<sup>317</sup> y la Compañía de Músicos del Ejército. En San José de Feliciano

---

<sup>315</sup> AGPER, Gobierno I. Carp. 5, f. 1726 Corrida de baguales. Hacienda Serie I, Libros de copias de comprobantes y Libros Mayores de Contaduría Gral. Las listas de las formaciones armadas en Gobierno, Serie XI C, Asuntos militares 1820-1896, Carps 8 a 15 (1822-1832).

<sup>316</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1677 y 1680. Se relevaron listas de revista y correspondencia entre Comandancias y Gobernador. AGPER, Gobierno Serie I, Carpeta 5 y Serie XI, Cajas 10 y 11, Varios legajos.

<sup>317</sup> La Escolta del Comandante fue creciendo en número y organización. Al elevarse las plazas de 40 a más de 60 se la transformó en Escuadrón y se le adjudicó el nombre de Húsares de la Muerte a fin de "alagar el entusiasmo de los soldados". Además, se agregaron cargos de Alférez dentro de la plana de oficiales y dinero de socorro semanal, producto de partidas de financiamiento especiales. AGPER, Gobierno I, Carp. 5, fs. 1713, 1714, 1715, 1716.



se encontraba la 1ª. Compañía del Departamento Subalterno 1º. del Primero Principal y en Nogoyá, la guarnición estaba formada por Fuerzas Veteranas. En Gualeguay había una guarnición de Dragones del Paraná y en la Matanza, una Compañía de Milicias correspondiente al Dpto. Subalterno 3º del Primero Principal. En el Oriente entrerriano, la Villa del Uruguay era sede del Batallón de Infantería con dos Compañías, más una Compañía de Granaderos y Cazadores, un Batallón de Caballería con dos Compañías, Escolta de Dragones del Uruguay, un Piquete de Dragones del Palmar, tres Compañías de Milicias de Caballería, un Cuerpo de Artillería, una Plana Mayor de Plaza más la Escolta y los Edecanes del Gobernador.<sup>318</sup> En Gualeguaychú, la guarnición local y un piquete de Infantería, en Villaguay una Compañía de Milicias y finalmente en Mandisoví, un Piquete de Caballería como pequeña guarnición. Los Comisarios Generales y Sargentos Mayores de Plaza se encargaban del abastecimiento y control; los artículos para la guarnición, como pertrechos de guerra y vestuario, eran entregados bajo recibo; comprendían artículos tales como cananas, tercerolas, pólvora, ponchos, chiripas y camisas de distinta talla. De acuerdo a las cifras obtenidas en la información relevada, podemos estimar una base militar de alrededor de 1.700 entre oficiales y soldados incluidos milicianos. Estimación por cierto incompleta pues en algunos documentos se mencionan otras divisiones que no aparecen en las listas de revista ni en los Estados generales de la Fuerza, por ejemplo Milicias del Arenal, Auxiliares extranjeros, milicia del partido de la Mula, etc. Asimismo, se hacen menciones a indígenas y negros de infantería en la composición de las guarniciones pero no se hallaron formaciones de tipo étnico como en otras provincias. Por ejemplo, en Santa Fe, existen registros de Compañías de Dragones Guaraníes, de Lanceros de la Reducción del Sauce, de Pardos o de Morenos Libres. En Buenos Aires, los negros libertos fueron reclutados en los Batallones de Cazadores por orden del Gob. Martín Rodríguez.<sup>319</sup>

---

<sup>318</sup> El término Edecán recién aparece en el Diccionario de la RAE, Academia Usual, año 1791. Allí se lo define como: el Oficial militar cuyo oficio es transmitir las órdenes del Jefe al cual está asignado a sus divisiones. Es una voz francesa modernamente introducida pero admitida ya por el uso común en la milicia española. Antes se los llamaba Ayudantes. Se comprobaron designaciones de edecanes hasta 1832, RLDAPER, T. III, pp. 285, 295, 413.

<sup>319</sup> AGPSF, Contaduría, Tomo 21, 1816-1820, Legs. 1 a 4. Bechis, Marta "Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX" en Goldman N, Salvatore R, 2005 (1ra. Ed 1998), pp. 293-317.

Por otra parte, la carencia de fuerza marítima obligó a solicitar auxilios a otras provincias para garantizar la vigilancia del río Paraná; los saqueos a embarcaciones por parte de salteadores o “piratas” perjudicaban al tráfico comercial y tornaba a esa vía de comunicación totalmente insegura. Por ejemplo, en marzo de 1822 una carta de Mansilla al Gobierno de Buenos Aires planteó esa carencia y para cubrirla, pidió una vigilancia en el curso del río que bien se podría realizar, según manifestó, aprovechando el transporte de cal de las canteras del Paraná a Buenos Aires con destino a obras públicas; las partidas de cal enviadas eran un medio de pago de vestuarios y granadas proporcionados por el Gob. Martín Rodríguez.<sup>320</sup>

Una cuestión para nada menor en el funcionamiento de la maquinaria militar era lograr el reconocimiento de los liderazgos por parte de las mismas tropas y por ende, garantizar obediencia. Las comunicaciones de nombramientos de oficiales interinos en las Compañías de Milicias solían describir el grado de aceptación de la tropa en esa instancia. Hay evidencias de que se mantenía la elección de oficiales por los soldados, que era de práctica en la década de 1810 dentro de las milicias revolucionarias; la autoridad de los oficiales se cimentaba en estos actos eleccionarios –de los que conocemos bastante poco aún- donde se pronunciaba el consentimiento de los subordinados. La garantía de

---

Goldberg, Edith “Coraje bantu en las guerras de la independencia” en *Revista del CESLA*, No. 7, Varsovia, 2005, pp. 197-217. Acceso: <http://www.redalyc.org/pdf/2433/243320976010.pdf> .

<sup>320</sup> AGN, Sala X, 5-4-5, Documentación de Entre Ríos. Carta de Mansilla al Gobierno de Buenos Aires, Paraná, 31 de marzo de 1822. Luego de plantear la preocupación por la muerte de patrones de barco y marineros en Punta Gorda y la Vuelta de Obligado, posiblemente a causa de los “piratas de río” manifestó: “...Este Gobierno se haya destituido de toda fuerza marítima en que poder contener otros males de común perjuicio al comercio y seguridad de los transeúntes de las provincias y ha creído de su deber anoticiarlo a Ud. para que como puede haga salir a cruzar y observar el río en todas las direcciones hasta este punto algunos lanchones, cañoneras y faluchos de los estacionados en esa Bahía. Hay la ventaja de que siendo buques de cubierta ellos pueden hacer a un tiempo el servicio de conducir los materiales de cal y otros cualesquiera artículos de los que ese gobierno necesita para las obras públicas que medita según Ud. me ha instruido antes...” El Gobierno de Buenos Aires le contestó el 15 de abril de 1823: “...estamos haciendo diligencias para limpiar el Paraná de piratas tanto en embocaduras como arroyos interiores... no estaría por demás el que si tiene algún buque de fuerza aún cuando no sea más que un lanchón hiciese practicar las mismas diligencias al menos hasta Punta Gorda...”. Carta de Mansilla al Ministro Secretario de Guerra de Buenos Aires –21 de abril de 1822- comunicando el pago de artículos con partidas de cal.

obediencia también habría necesitado de cuadros que intermediaran con la tropa llana.<sup>321</sup>

La escasez del erario influenciaba en las políticas y estrategias oficiales de distribución de las tropas. En junio de 1823, el Gobierno decidió la disminución de destacamentos, privilegiando solo los sitios más necesarios de vigilancia y control y dotándoselos de socorros extraordinarios. A estos acantonamientos de tropas se le sumaba el grupo de “vichadores”, hombres especialmente escogidos para obtener información por canales informales.<sup>322</sup> La guarnición de la Plaza de Gualeguaychú quedó compuesta, según disposición de Mansilla, por 25 hombres con la recomendación de que no se traspasaran estos límites dado el estado de escasez financiera; los cueros y sebo derivados del ganado consumido deberían quedar acopiados como propiedad del Estado hasta que se decida su venta y destino. Las Receptorías pequeñas, en ocasiones, se veían comprometidas a financiar gastos militares, lo que quedaba registrado en las cuentas fiscales. Por ejemplo, la Receptoría de Victoria tuvo que hacerse cargo de gastos de la guarnición y otros extraordinarios, del sueldo del Comandante y a su vez hacer entregas de dinero al Gobierno y al Comandante de Nogoyá a modo de auxilio.<sup>323</sup>

### *El reclutamiento*

La franja etaria de la convocatoria variaba dependiendo de las circunstancias. En tiempos de guerra, se llamaba al servicio a los varones muy jóvenes de 15 años hasta los de 60 años. En tiempos un poco más estables, se llamaba desde los 20 a los 60 años y se contemplaban más exenciones al

---

<sup>321</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1685 y 1686. “Los individuos de la Compañía quedaron gustosos con esta determinación”. F. 1706 “... los oficiales fueron electos por aclamación de los que forman la Compañía de Auxiliares extranjeros...”. Raúl Fradkin analiza la movilización por las guerras de independencia y el desafío que esto supuso para las relaciones de autoridad, configuración de nuevos actores y liderazgos. El foco del análisis está puesto en los comandantes como líderes territoriales y los mecanismos eleccionarios durante la década de 1810. Fradkin, Raúl O. “¿Elegir los Comandantes? Los desafíos de la guerra y el gobierno de los pueblos en el Litoral rioplatense” en Lorenz, F., 2015, pp. 111-135.

<sup>322</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1703, 1723, 1767, 1768, 1771.

<sup>323</sup> AGPER, Hacienda II, F, 1822. Carpeta 1 Legajos 1 y 2; 1823. Carpeta 1 Legajos 1 y 6. Al tratar a la milicia nacional en el caso valenciano, Manuel Chust observa que los Ayuntamientos están comprometidos en el abastecimiento de las tropas y ve en esta disposición una reminiscencia de la reglamentación militar de Carlos III, en la cual, los justicias de cada pueblo tenían obligación de dar agua, sal, aceite, comida y alojamiento al ejército. En Chust, Manuel *Ciudadanos en armas 1834-1840. La milicia nacional en el país valenciano*, Institución Valenciana de Estudios e Investigación, Valencia, 1987.

servicio teniendo en cuenta situación familiar, enfermedad, situación de retiro militar, entre otros.<sup>324</sup>

La leva de gente para el servicio del Estado podía adquirir la forma de recluta forzosa o voluntaria, en sentido amplio el método comportaba distintos grados de arbitrariedad (Contreras Gay, J. 1996, p. 151) Esta manera de incorporar hombres al ejército tenía diversos mecanismos; uno de ellos aparentemente formalizado era el siguiente: orden de reclutamiento del Gobierno, con número y “clase” necesarios, al Comandante de los Departamentos principales, quienes exigían a su vez a los Comandantes de los llamados Departamentos Subalternos el hacer efectivo el reclutamiento. A la llegada de las formaciones principales a los pueblos de campaña, se les incorporaba la milicia reunida por los jefes locales en el lugar y que era armada en el momento. Ante urgentes circunstancias, hasta los labradores en plena cosecha eran reclutados y solo la falta de armamento ponía límites a la hora de sumar combatientes.<sup>325</sup>

Ante la rebelión de diciembre de 1823 promovida por enemigos políticos desde la Banda Oriental y que analizaremos con mayor profundidad en Apartado siguiente, el Comandante del Dpto. I Principal, León Solas, ordenó por Bando la convocatoria a las milicias en la Villa del Paraná, a la antigua usanza colonial: con reunión en la plaza al tiro de cañonazos y expreso carácter obligatorio a todos los hombres habilitados. A la vez encomendó a los Comandantes Subalternos de Gualeguay y Gualeguaychú que se le incorporen con todas las milicias a su mando en el estado en que se hallaran; el capataz de caballadas del Estado también debió acudir para proveer de monta.<sup>326</sup> ¿A qué se apelaba

---

<sup>324</sup> En 1826, el Gobernador Zapata dispuso esta ampliación de la edad ante las noticias de que el desembarco y desplazamiento de un destacamento brasileño amenazaba el poblado interior de Mandisoví. En 1832, apenas llegado Pascual Echagüe al poder, se reglamentó el enrolamiento de cívicos para la Capital. RLDAPER, T. II, pp. 198-199; T. III, pp. 427-428.

<sup>325</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1679 y 1760. RLDAPER.T. III, p. 38.

<sup>326</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1758 y 1761. Bando de León Solas, 17/12/1823. “Por cuanto el gobierno de la provincia ha recibido partes indudables de haber pasado el río Uruguay el caudillo anarquista Ereñú seguido como de 100 forajidos el día 14 del presente en que sorprendió al Comandante del Palmar con 10 o 12 soldados y siendo muy posible que haya tomado la dirección a este Pueblo contando tal vez con ocuparlo por la misma razón de no ser esperado, deseando tomar todas las medidas para evitar tal desgracia he venido a mandar. 1-Al tiro de dos cañonazos y toque de generala todo hombre capaz de llevar armas sin excepción alguna se presentará en la Plaza, de donde no podrá retirarse hasta que se le ordene. 2-Toda casa de trato de cualquier género que sea permanecerá cerrada hasta que se hayan hecho

para motivar a los milicianos en la lucha? Analicemos la arenga de Solas a sus hombres, antes de iniciar la marcha desde el Campado de Nogoyá. La Proclama estaba dirigida a los “Compañeros” voluntarios a los que se reclamaba obediencia. Resalta así varias condiciones: una acción colectiva en la que la jerarquía aparece diluida en tanto todos se acompañan, más luego, el reclamo de obediencia deja claro que hay una disciplina que debe respetarse; por otro lado el carácter expreso de voluntario despejaría de arbitrariedad el reclutamiento y predispondría a la tropa miliciana a hacer suyos los objetivos de la campaña y mejorar su participación. En el documento además se identifica al enemigo con el desorden, la anarquía y el bandidaje, representando una amenaza no solo a las vidas, los bienes y la libertad de los pobladores sino a la propia supervivencia de las autoridades legítimamente constituidas. El énfasis está puesto también en advertir que la falta de reacción reproduciría las pasadas desgracias de las cuales el actual Gobierno se había empeñado en liberar al pueblo entrerriano, una manera de recordar los efectos benefactores de la revolución de septiembre de 1821 sobre la población. En los párrafos finales de la proclama se destaca que el valor de los milicianos se nutre de la importancia de lo que están defendiendo: familia, hogar, Patria, honor e intereses.<sup>327</sup>

La condición de servicio voluntario fue transformándose en obligatoria ante la necesidad de frenar las distintas formas de evasión de los convocados. Aquellos alistados como milicianos en un departamento migraban a otro, evadían así el registro y se convertían generalmente en refugiados vagantes y sin ocupación. Entre 1829 y 1832, la obligatoriedad de la milicia, las reglamentaciones más precisas del servicio y la pena de prisión por desobediencia fueron medidas que tendieron a asegurar el refuerzo del ejército, evitar alteraciones del orden público y sedentarizar a la población.<sup>328</sup>

Cabe aquí una pregunta ¿Quiénes son los reclutas? No tenemos elementos aún para caracterizar socioeconómicamente a los milicianos, para observar la posible activación de redes clientelares en la leva, tampoco para evaluar la capacidad reclutadora del Estado, la finalidad precisa de las levas

---

retirar a las suyas a los estantes y habitantes que concurriesen a la plaza. 3-Los contraventores a esta disposición sufrirán la pena arbitraria que el Gobierno tenga a bien aplicarles...”

<sup>327</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1777-1779.

<sup>328</sup> RLDAPER, T. III, Decretos del 23/6/1829 y del 11/4/1832.

milicianas, la duración efectiva del servicio y los modos de instrucción militar, asuntos promovidos por los nuevos estudios sobre la Cultura de la Guerra que abren una línea interesante de investigación.

### *La justicia militar*

La cuestión de la justicia específica, con sus fueros, tribunales y tipificación de delitos constituye uno de los pilares de la institución militar. Los Consejos de Guerra “para veteranos y cívicos” tenían la atribución de tratar los excesos de los soldados y sus conductas contrarias a un cuerpo disciplinado, por ejemplo, desertiones, contrabando, robo, participación en grescas y fusilamientos no autorizados, motines, sedición. Las proclamas de indultos de penas impuestas por esos Consejos pasaban al dictado de los Comandantes correspondientes pero solo en carácter condicional, puesto que el gobernador tenía la atribución estatutaria de confirmar o revocar, indultar o conmutar la pena, extendido también a causas civiles. Esta prerrogativa tenía larga tradición histórica, estaba contemplada en los antiguos códigos españoles, los Estatutos revolucionarios y en la Constitución de 1819, tomada luego por el Estatuto Provisorio de 1822 de manera prácticamente literal, similitudes a las que ya aludimos en el Capítulo III, inciso 1. La misma se ejercitaba como una gracia concedida por la autoridad, replicada prácticamente en todas las constituciones provinciales de la época (Abásolo, E. 2002, pp. 125).<sup>329</sup>

En cuanto a las desertiones como actos reprobables que merecían sanciones disciplinarias, el Derecho de Gentes los caratuló como signos de infidelidad y traición a la autoridad.<sup>330</sup> Los estudios actuales sobre la Cultura de la Guerra no agotan el análisis de ese fenómeno en la comisión de un delito o un acto de rebeldía sino que la consideran una práctica, dada en un contexto donde el combate y la movilización armada se volvían parte de la vida cotidiana. En ellos se analizan distintas variables que inciden en el flujo de desertores: factores tácticos y estratégicos, tipo y ritmo de las operaciones militares, desarraigo de los soldados, percepciones y compromiso con la guerra, configuraciones identitarias, tramas de pertenencias y relaciones, etc. (Rabinovich A., 2011, pp.

---

<sup>329</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1683 y 1684. RLDAPER, T. II, pp. 327-329.

<sup>330</sup> Vattel, Emmer de 1834, T. II, Libro III, De la Guerra, pp. 21 y 122.

33-56). Cabe pensar que Entre Ríos no escapaba a esta dinámica. La desertión era ponderada como un agravio a la subordinación militar y una traición, por lo cual el Consejo de Guerra producía un sumario y dictaminaba el castigo. Si se disponía pena de muerte, la misma se realizaba públicamente a manera de escarmiento. Algunos testimonios muestran que era usual la circulación de Bandos solicitando paraderos, el envío de partidas armadas de búsqueda, las capturas violentas, el refuerzo de vigilancia fronteriza para evitar el pasaje a otras provincias. En general, los Tratados interprovinciales rioplatenses como los del Cuadrilátero, los acuerdos bilaterales de 1827 y algunos preliminares al Pacto Federal establecieron mecanismos de restitución recíproca de desertores. La frontera entre Corrientes y Entre Ríos, a lo largo del río Guayquiraró, era muy vulnerable, lo mismo las zonas de islas a la altura de Santa Fe y la Villa de Paraná. En 1824, en plena vigencia del Tratado del Cuadrilátero, el Gob. Solas avisó al gobernador delegado santafesino que dos soldados de su Escolta, Santos Zepeda y Lorenzo Aguirre habían vadeado el río Paraná y escapado a esa ciudad, solicitando colaboración en su captura. Más adelante, ya en el contexto de la guerra del Brasil con las Provincias Unidas, se elaboraron listas de desertores del llamado Ejército Nacional que circulaban o eran aprehendidos en territorio entrerriano.<sup>331</sup> Sobre los perjuicios de esta circulación en las poblaciones ribereñas, basta recordar lo que describió Tomás de Iriarte en sus Memorias sobre esta situación.

#### *Sistema de retiro del servicio militar activo*

Los pedidos de retiro del servicio activo, con antecedentes al menos en la década revolucionaria, fueron formalizados a través de solicitudes dirigidas al Gobierno. El énfasis puesto en los méritos cosechados tanto en defensa de la causa americana como en la defensa de la causa provincial precede a las motivaciones concretas de los pedidos como por ejemplo padecimiento de enfermedades o secuelas de heridas en combate y atención de padres ancianos o hermanos huérfanos menores. Las cédulas de retiro expedidas por el gobernador incluían generalmente el goce de uso de uniforme y fuero militar. Entre los años 1826 y 1828 –en plena guerra contra el Brasil- las evidencias

---

<sup>331</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1705, 1725, 1732, 1741 y 1742. Gobierno Serie III, Caja 4, Legs. 9 y 14. AGPSF, Gobierno, Tomo I, No. 16, Notas Varias. f. 251.

muestran reiterados pedidos de excepción o de baja del ejército, solicitados por madres y padres, invocando su situación de carencias y la necesidad de que sus hijos retornen por ser su único sostén económico.<sup>332</sup>

## **VII.2. Construcción estatal, poder político y conflictos. Su dinámica.**

En este apartado analizamos una selección de movimientos de acción colectiva profundamente militarizados que se produjeron entre 1821 y 1832, denominados por sus contemporáneos como revolución, conspiración, revuelta, rebelión. En su origen y desarrollo intervinieron intereses de distinta naturaleza y proyectos en pugna, en función de los cuales los actores sociales desplegaron diversas prácticas en torno a resistencia, negociación, mediaciones, acuerdos. Nuestro objetivo es realizar una caracterización, con distinto grado de desarrollo según el caso, partiendo de la observación de móviles, intereses, redes sociales, organización, estrategias, modalidad de las acciones, expansión territorial.

Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales en la comprensión de este proceso conflictivo y su incidencia en la construcción del poder, retomamos nuestro planteo sobre la red social y las múltiples pertenencias de los individuos que se relacionan. La dificultad está en saber en nombre de qué pertenencia actúan y cual es la identidad de grupo que ponen en juego. Entre éstas, los vínculos primarios familiares de fuerte permanencia en la sociedad pos independiente pueden adoptar rasgos nuevos desde que la misma conflictividad política provoca en ciertos casos divisiones, rivalidades y fuertes discrepancias que afectan su equilibrio interno (Halperín Donghi T, 1972, pp. 394-404). En esta época convulsionada, cobran importancia los lazos personales con intenciones políticas y aquellos creados a partir de la emergencia de formas asociativas institucionalizadas como las logias que abren el juego político y renuevan el sentido de las estructuras relacionales.<sup>333</sup> La red de sociabilidad

---

<sup>332</sup> AGPER, Gobierno XI (A), Carpeta 1, Solicitudes militares; Serie XI, Legs. 6 a 9. Solicitudes.

<sup>333</sup> González Bernaldo P. "La 'sociabilidad' y la historia política" en *Nuevo Mundo Nuevos*, BAC, Biblioteca de autores del Centro, 2008; Art. Cit. *BIHAAER*, 1991, pp. 7-27. En el tratamiento de las acciones colectivas, la comprensión de sus significados políticos más vastos y complejos demanda mayor conocimiento de las formas de vinculación social, de los intereses grupales y derechos personales puestos en juego y de la transacción de recursos, servicios,



masónica es un campo relacional que, sin dudas, incide en la estructura y mecanismos de construcción del poder político. A lo largo de este estudio, hemos advertido la existencia de dos logias: la No. 44 George Washington creada en 1822 en la Villa del Uruguay –en la que se inscriben Mansilla, Solas, Perea, de Vedia, Barrenechea, entre otros- y la Sociedad Secreta de Caballeros Orientales de Montevideo.<sup>334</sup> La profundización en el conocimiento de sus objetivos, composición, principios básicos, reclutamiento y expansión nos daría un marco diferente de referencia sobre los discursos y las acciones de los actores vinculados y por ende, una mayor riqueza en el análisis, tarea que excede a esta instancia de la investigación.

Toda reconstrucción de configuraciones sociales en términos relacionales se enfrenta a problemas derivados del complejo proceso de movilidad social, de la sinuosidad de pertenencias y lealtades en el espacio y en el tiempo acorde con móviles, intereses, influencias, presiones, de la disponibilidad de fuentes confiables y suficientes, etc. Las redes parciales que pudimos visualizar en estos movimientos de acción colectiva están conformadas por un número acotado de individuos, generalmente de actuación saliente, sin poder por ahora ahondar en su densidad y en la composición de base –vecinos, soldados y milicianos, sectores populares, etc.-

#### **VII.2.a. Fronteras porosas: asedio, intrigas, acciones militares. 1822-1823.**

Los movimientos colectivos del período se originan y desarrollan en un contexto regional signado por las alternativas de la ocupación brasileña a la Banda Oriental y sus resistencias como también por el papel preponderante de

---

contactos, información. En este sentido, un estudio pormenorizado de la sociabilidad informal y formal asociativa, concretamente de las logias masónicas, ayudará a trascender la superficie de la dinámica facciosa brindando señales de cómo estas prácticas intervienen en la acción política, crean clima de confianza o sospecha, median en los conflictos, constituyen marcos de referencia de acciones y discursos.

<sup>334</sup> En comunicación epistolar, el investigador Rubén Darío Gil Muñoz me informó sobre la creación de la Logia No. 44 y las dificultades de conocer sus actuaciones en profundidad dada la incautación, sustracción y/o quema de archivos masónicos producida en distintas instancias: desmembración y desaparición de los archivos de la Confederación Argentina luego de la guerra contra el Estado de Buenos Aires, 1862; intervenciones federales conservadoras al gobierno de Entre Ríos a mediados del siglo XX, entre otras. Sobre su composición, Gil Muñoz planteó una posible membresía en la No. 44 de Francisco Ramírez y de la familia López Jordán de lo cual posee algunos indicios aún insuficientes.

la provincia de Santa Fe en el Litoral rioplatense, acaudillada por Estanislao López.

La invasión a la Banda Oriental y su anexión al Reino de Portugal, Brasil y Algarves como provincia Cisplatina en 1821 puso en peligro al Río de la Plata. Los primeros Pactos interprovinciales lo dejaron explícito. En el Tratado del Cuadrilátero de 1822, adicional reservado, se estableció una liga ofensiva

“...contra españoles, portugueses y cualquiera otro poder extranjero que haya invadido o invada, dividido o divida la integridad del territorio nacional o particular de las cuatro provincias”.

Estas previsiones tenían en cuenta al menos dos problemas: las expediciones realistas enviadas desde el Virreinato del Perú a Jujuy y Salta en el marco de una guerra de independencia todavía no acabada y los viejos proyectos de expansión del Imperio portugués sobre la región del Plata.

El Barón de la Laguna, Carlos Federico Lecor, fue designado como Gobernador y Capitán General del Estado Cisplatino.<sup>335</sup> La organización militar en el nuevo Estado, sobre la base de los ejércitos portugueses que habían llegado en 1816, tuvo como prioridad reforzar las fronteras con las provincias del Plata. Escuadrones de la Legión de San Pablo y compañías milicias de Río Grande, Porto Alegre y Río Pardo se acantonaron en la Línea del Uruguay. (Iran Ribeiro, J. 2005, Cap. 3). En Montevideo, se mantuvo la División de Voluntarios Reales como fuerza de ocupación, al mando de Alvaro da Costa Souza. En setiembre de 1822, Don Pedro, hijo de Juan VI, declaró la independencia del Brasil respecto de su metrópoli. Este hecho encendió las disputas en el interior del Ejército entre leales al rey de Portugal –Souza y los Voluntarios- y leales al Imperio del Brasil como Carlos Lecor originándose una serie de enfrentamientos. Estas diferencias fueron aprovechadas para avivar los planes de liberación de la ocupación imperial, sostenidos y organizados por el cabildo montevideano y la Sociedad Secreta de Caballeros Orientales.<sup>336</sup> Algunos cabildantes, varios

---

<sup>335</sup> El portugués Carlos Federico Lecor se casó en 1818 con Rosa María Josefa Herrera de Basabilbaso, de familia noble montevideana. Ana Frega registra las numerosas uniones de portugueses con familias notables de la Banda Oriental; sugiere que estos vínculos habrían sido promovidos por las propias autoridades lusitanas para afincarse y afirmar su dominación, en Frega A., 2007, pp. 62 y 336.

<sup>336</sup> Campos de Garabelli Martha, 1978., Vol. II, pp. 5-23. La Sociedad de Caballeros Orientales habría sido fundada en 1819 con algunos antecedentes de funcionamiento en 1816; en 1822

integrados a esta Sociedad, intentaron alianzas políticas y apoyo económico con los gobiernos del Litoral rioplatense, en particular con Entre Ríos evaluando la importancia de poder operar militarmente desde la costa del río Uruguay. En 1822 ya habían iniciado conversaciones ante el gobernador Martín Rodríguez. Con los mismos objetivos, se enviaron misiones ante Mansilla, encabezadas por el comerciante Pablo Zufriategui –miembro de la Sociedad- y por Juan Antonio Lavalleja por intermediación de su tío Andrés Latorre.<sup>337</sup> A la par, desde la prensa porteña se generó una visión por la cual los procesos en la región comenzaban a diferenciarse: fin de la anarquía y comienzo de relaciones pactadas en el Río de la Plata, resistencia y revoluciones en el Brasil.<sup>338</sup> Pese a las conversaciones y firmas de tratados entre la Comisión Oriental enviada para tal fin y los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, el auxilio como veremos no se pudo concretar.

El ascenso al gobierno del porteño Lucio Mansilla en septiembre de 1821 se produjo como resultado de una acción violenta contra el gobernador interino Ricardo López Jordán de la República de Entre Ríos. Los actores que la encabezaron le dieron la denominación de *revolución* con una connotación positiva, asociada a la idea de cambio benéfico, orden, libertad y en oposición a toda tiranía y despotismo. En los festejos anuales por este acontecimiento se le dio la misma jerarquía que a las conmemoraciones de la revolución del 25 de mayo de 1810 –llamadas Fiestas Mayas-, asumiendo que ambas habían iniciado un mismo camino de regeneración política, ligadas por una comunidad de objetivos, principios y valores.<sup>339</sup>

En esa revolución, el apoyo de Estanislao López a pedido del propio Mansilla fue clave tanto en las definiciones políticas como en el desarrollo de las acciones armadas. En tiempos de fuerte liderazgo, este apoyo se transformaba, según propias manifestaciones del caudillo santafesino, en misión para restaurar

---

retomó sus sesiones para dedicarse fundamentalmente a favorecer los proyectos y acciones en contra de la dominación portuguesa.

<sup>337</sup> Campos de Garabelli Martha, 1978. Vol. II, pp. 247-250. AGNA, Sala X, 5-4-5, Carta de Latorre a Mansilla, 16/10/22. AGPER, Gobierno Serie I, Carp. III, Leg. 7.

<sup>338</sup> El Correo de las Provincias, 1960, Periódico No.2, 1/12/22. Corresponsal en Montevideo.

<sup>339</sup> Wasserman, Fabio "Revolución" en Goldman N.(Edit.) 2008, pp. 159-174. Conmemoraciones de 1822 y 1823 en RLDAPER, T. I, pp. 118, 197-198, 301-302.

el orden público y la defensa del código moral en la región, sin fijarse en formas ni en costos.

En las instancias preparatorias, López se trasladó a la Villa del Paraná y envió oficios a ciertos jefes invitándolos a la adhesión:

“... me hallo accidentalmente al frente de los negocios públicos de la provincia de Entre Ríos... (invitándolos a) decidirse por la causa de la paz, justicia, unión y orden, que debe fijarse en la absoluta ruina de los supremos ambiciosos que restan, sin escarmentar en el funesto fin del sanguinario Ramírez” (Bosch B., 1942, pp. 16)

Las comunicaciones de López desde la Villa a su gobernador delegado Juan Luís Orrego se sucedieron en los días inmediatos al hecho<sup>340</sup>; las mismas demuestran su interés y poder de decisión sobre los acontecimientos, por ejemplo, el día 2 de octubre escribió:

“...por aquí vamos..., ordenando lo conveniente al restablecimiento del orden alterado y quietud de los habitantes. Hoy despaché una fuerza en persecución del Supremo interino y demás ilusos que le siguen. Ya tenemos puesto el pie en tierra e influjo en el orden público, las ventajas generales y particulares deben calcularse con principios tan satisfactorios”.

La fuerza militar instalada en la Villa se componía de 2.000 hombres en combinación con las de Santa Fe. A fin de consolidar la situación, se dispuso el refuerzo de tropas, la permanencia de los batallones de santafesinos en el Escuadrón de Caballería “Libertadores de Entre Ríos” y una distribución ampliada de toda la fuerza que para noviembre sumaba 2.477 hombres: 583 en la costa del Uruguay, 983 en la Villa del Paraná, 74 en Espinillo, 87 en el Tala, 750 en Nogoyá.<sup>341</sup> En este cuadro de ocupación armada, López logró imponer a santafesinos como Comandantes de dos lugares sumamente estratégicos: José Ignacio de Vera en la Villa del Paraná y Pedro Barrenechea en la Villa del Uruguay (Bosch B., 1942, pp. 16-17)

Derrotado y proscrito por las autoridades entrerrianas, López Jordán emigró a la Provincia Cisplatina, junto con un grupo importante de aliados. Mansilla pidió neutralidad al Barón de la Laguna y un compromiso de los

---

<sup>340</sup> AGPSF, Papeles de López, Vol. II, Documentos 330, 332 a 335.

<sup>341</sup> RLADPER, T. I, pp. 9-10, 28.

Comandantes de la Línea del Uruguay de no intervenir ni apoyarlos.<sup>342</sup> Por la isla de San Francisco el grupo cruzó a Paysandú, un refugio que se convirtió en base activa de su resistencia y de sus aspiraciones por recobrar el poder. En efecto, durante los años 1822 y 1823, se producen cuatro acciones colectivas de importancia en las que participan emigrados y/o sus adherentes y se movilizan intereses locales, regionales, “nacionales” e imperiales.

### *La invasión de mayo de 1822.*

En la invasión a Entre Ríos participaron los emigrados con asiento en Paysandú y Santo Domingo Soriano, que recibían protección portuguesa a pesar de la neutralidad declamada por Lecor.<sup>343</sup> La estructura interna del movimiento opositor a Mansilla estaba constituida por antiguos colaboradores de Artigas y luego de Ramírez y López Jordán que sostenían la restitución de éste último en el gobierno: el Jefe de Caballería Gregorio Piris, el Coronel oriental Anacleto Medina, Francisco Berdum, el santafesino Juan José Obando ligado a Mariano de Vera –gobernador desplazado por Estanislao López en Santa Fe y hermano de José Ignacio de Vera-. Algunos eran oficiales del derrotado ejército de Ramírez, escapados de su destierro en un fuerte del sur de Córdoba para sumarse a la invasión. Otros militares mencionados son Britos, González, Elía y García, de los cuales no tenemos datos de identificación. Uno de los más activos era el estanciero de La Matanza, Coronel Eusebio Hereñú, de sinuosa lealtad ya desde la autonomía provincial en 1814, había demostrado acercamiento a López Jordán y tenía aspiraciones de afirmarse como líder local; su hermano Pedro Tomás en cambio se pronunció leal al gobierno entrerriano y ofreció información para facilitar su captura. Justo José de Urquiza se había unido a los emigrados, su hermano Cipriano –cuñado de López Jordán- había sufrido confiscación de bienes y persecución por parte de Mansilla, a causa de su colaboración estrecha

---

<sup>342</sup> AGPER, Gobierno I, Serie I, Carp. 2, Leg. 7 F. 685-687. Serie III, Carpeta 2 – A, Leg. 1, fs. 1-2, 5-6, 10-11.

<sup>343</sup> Frega, Ana, 2007, p 336. AGPER, Gobierno I, Leg. 7, Subleg. C. F. 782. Gobierno III, Carp. 2-A, Leg. 1: En Salto y Paysandú, el comando estaba a cargo de Sebastián Barreto Pereira de Pinto. A fines de 1821 Obando se asiló en Santo Domingo Soriano y de allí pasaba con frecuencia a Gualaguaychú. En Soriano estaba apostada la Comandancia de la Armada portuguesa al mando del Capitán de Fragata Jacinto Roque de Sena Pereira.

con Ramírez (Schmit Roberto, 2004, p. 255).<sup>344</sup> En cuanto a apoyos internos, si bien inferimos colaboraciones en las Villas y campaña poco podemos precisar al respecto.

La estrategia de ataque se dividió en tres zonas: la Villa del Uruguay como puerta de ingreso, la Villa Capital del Paraná en la que se planeaba asesinar al gobernador y la Selva de Montiel donde concentraban los apoyos internos. Este plan había sido anticipado a Mansilla por el Comandante de Gualaguaychú, Mateo García de Zúñiga, en virtud de informes recibidos de la vigilancia. El gobierno reforzó la Villa del Uruguay con tropas de Caballería e Infantería y rechazó el foco de la acción armada. La misión Piris – Obando hacia la Villa Capital fue frustrada. En consecuencia, los objetivos de la invasión no fueron alcanzados.

Anacleto Medina se acogió al indulto ofrecido pero fue apresado y enviado, al igual que Obando, a la cárcel del Cabildo santafesino<sup>345</sup>. Piris fue ejecutado a modo de escarmiento. A Tadea Jordán, madre de Ricardo López Jordán, se la encarceló por sospechas de colaboración (Calvento M. 1940, p. 37) González, Britos, Berdum, García y Elía junto con parte de la tropa, escaparon a Paysandú; su necesidad de recursos para movilizarse podía originar un cambio de destino hacia Corrientes por lo cual las comandancias de Curuzú y Esquina fueron alertadas por el Gob. Juan José Blanco. La búsqueda de Hereñú implicó la movilización de partidas desde El Palmar hasta el Rincón de Nogoyá y la isla del Pillo pasando por la Selva de Montiel donde el prófugo era encubierto por oficiales desleales. La captura fracasó y poco tiempo después se confirmó su pase hacia la Banda Oriental. El Congreso Provincial, por su parte, se pronunció en contra de la acción de los emigrados dictaminando que “sus personas, bienes y relaciones” quedaban fuera de la Ley y a disposición del Gobierno.<sup>346</sup>

---

<sup>344</sup> Oficio del Gob. Juan B. Bustos a Mansilla, Córdoba, 1/5/1822 y oficio de Pedro Hereñú a Mansilla en AGPER, Gobierno Serie I, Carp. 3, Leg. 4, fs. 156-158 y Leg. 7, Subleg. E., f. 785.

<sup>345</sup> AGPSF, Papeles de López, Vol. II, doc. No. 410.

<sup>346</sup> AGPER, Gobierno I, Carp. 3, Leg. 3, f. 724. Oficio de Blanco a Mansilla, Goya, 10/6/22. Carp. 3, Subleg. F, Comunicados de los Comandantes Contreras y Cáceres, fs. 788-790, 792. RLDAPER, T. I, p. 181.

### *El intento de invasión de noviembre de 1822.*

Un grupo de emigrados intentó nuevamente el ingreso a la Villa del Uruguay. El más destacado de los rebeldes fue Eusebio Hereñú. La organización de la invasión se hizo en combinación con el Gral. Sebastián Barreto Pereira de Pintos, subalterno del Comandante José V. Fonseca de la Legión de San Pablo y Comandante de la Línea del Uruguay.<sup>347</sup> La amenaza de invasión de la frontera obligó al envío de refuerzos armados. Para solventar su desplazamiento se requirió de recursos extraordinarios, por lo cual se pidió un empréstito al común de 6.000 pesos. Esta importante concentración de fuerzas desalentó la invasión. Los informes de los “vigías políticos” apostados en la Villa del Uruguay y Mandisoví circularon entre los Comandantes Jacinto Guedes, Barreto Pereira y Bento M. Ribeiro, alertando a Lecor sobre una posible ofensiva hacia la Cisplatina. Las noticias recibidas sobre contactos previos entre Mansilla y Lavalleja contribuyeron a aumentar ese alerta.<sup>348</sup>

Los auxilios operativos del ejército imperial a los emigrados habían sido comprobados en acciones menores desde fines de 1821, coordinados por Barreto Pereira quien además alentaba las constantes incursiones para robar caballos en la Villa del Uruguay y Nogoyá. Las protestas de Mansilla ante Lecor, Barreto Pereira y Bento M. Ribeiro habían sido infructuosas.<sup>349</sup> La formalidad de un Tratado parecía ser la vía para frenar con auxilios e incursiones, teniendo en cuenta además que los pedidos de apoyo a Buenos Aires para controlar a los emigrados no eran atendidos. Por estas razones, Mansilla propuso a Lecor la firma de un Tratado de paz y amistad. A través de las gestiones de dos orientales, el Comisionado Sgto. Mayor Juan Florencio Perea, Secretario de

---

<sup>347</sup> Octubre 1822: Lavalleja le confirma a su tío Andrés Latorre los planes de Hereñú y los auxilios que recibe de los jefes imperiales con anuencia de Lecor, Campos de Garabelli M., 1978, Vol. II, pp. 242-243, 260, 268-269, 272.

<sup>348</sup> AGNA, Sala X, 5-4-5, A, Latorre a Mansilla 16/10/22; Mansilla a M. Rodríguez 10/1/23. APOA, Autoridades militares, Parte I, correspondencia, Lata 176, maço 88. Noticias del refuerzo militar en la Villa del Uruguay, oficios entre Guedes de Oliveira, S. Barreto Pereira de Pintos, Bento Manoel Ribeiro, 19/11/1822.

<sup>349</sup> Mansilla en sus Memorias cuenta que el Gral. Pereira Pita habría mandado cuadrillas hasta el pueblo de Nogoyá, 40 leguas al oeste de la costa del Uruguay, a robar caballos para monta, en Moritán S., 1945, p. 64. Oficios entre Lecor, Barreto Pereira, Ribeiro y Mansilla discutiendo por estos auxilios en AGPER, Gobierno Serie III, Carp. 2-A, Leg. 1, fs. 24-25, 40-45.

Comandancia en Entre Ríos y el letrado Nicolás de Herrera, Secretario de Lecor, el 11 de diciembre de 1822 se firmó un Tratado.<sup>350</sup>

La aceptación de Lecor revelaba varios propósitos: lograr cierta paz en la línea del Uruguay, debilitada por el desvío de tropas hacia Montevideo para bloquear la ciudad y neutralizar acciones de su adversario Costa Souza y por el incipiente movimiento contrario a la ocupación que planeaba levantar la campaña. (Campos de Garabelli, M, 1978, pp. 226-228, 240-241, 307); asegurar la libre navegación de la flota imperial por el río Uruguay y mantener el circuito comercial hasta Rio Grande, Santa Catarina, Matto Grosso; garantizar bienes y actividades de aquellos sectores económicos aliados –comerciantes y estancieros orientales-, indispensables aliados para consolidar su poder en la Cisplatina y obtener ayudas financieras (Ferreira, F., 2007). Los ejes centrales del Tratado giraron en torno al compromiso mutuo de no proteger a aquellos “caudillos” y personas refugiadas en uno y otro lado que conspirasen contra el orden y la tranquilidad pública, mantener neutralidad y respetar los bienes, haciendas y personas de los pueblos ribereños del río Uruguay. Este Tratado fue rechazado por Buenos Aires, interpelando a Mansilla por la atribución unilateral tomada y recordándole que estaba invalidado a partir de compromisos previos asumidos en el Tratado del Cuadrilátero; por otra parte, implicaba de hecho un reconocimiento de la ocupación portuguesa que el gobierno de Martín Rodríguez no estaba dispuesto a aceptar. (Bosch Beatriz, 1978, Cap. III). El asunto tomó estado público a través de la prensa. Intempestivo e impolítico, así fue calificado por los periódicos porteños pues no condecía con los esfuerzos del movimiento libertario oriental. La prensa oficial de Entre Ríos y algunas cartas anónimas publicadas defendieron el Tratado con un análisis estrictamente local: frenar los males generado por la desinteligencia de los jefes de los cuales los habitantes de la margen del río Uruguay podían dar testimonio, lograr la tranquilidad y el buen orden en una sociedad que acababa de salir del “despotismo más cruel”.<sup>351</sup>

---

<sup>350</sup> RLDAPER, T. I, pp. 226-231.

<sup>351</sup> El Correo de las Provincias, Periódico extraordinario, 9/1/1823, No. 9 13/2/1823, No. 11, 27/2/3, 1960, Fs. 9131-9132, 9191-9292, En este último número, reproducción de un artículo de El Correo Ministerial de Paraná, del 11/2/23 y carta firmada por *El Honor Ofendido*.



Los móviles de las invasiones de 1822, que según la historiografía solo se explicarían en base a la política local entrerriana, tendrían concurrencia con un plan general de desestabilización general de la región del Litoral, en directa relación con el impulso dado a la política de pactos interprovinciales; la ruptura de la implementación de estos mecanismos formales de relación pretendió modificar el mapa del poder y las alianzas. Las evidencias indican que, de manera simultánea, se pretendieron cambios radicales en distintos Estados provinciales. Los planes de invasión a Entre Ríos, en distinto grado de concreción y con la colaboración operativa de fuerzas imperiales del Brasil en su afán expansionista, intentaron acabar con la influencia de Buenos Aires y con la jefatura del porteño Mansilla, restaurando a López Jordán como gobernador. La firma del Tratado del Cuadrilátero en enero de 1822 fue particularmente irritante pues obligó a resarcir económicamente a Santa Fe por las invasiones de Francisco Ramírez y por los servicios militares prestados a Mansilla en la revolución de 1821. Además, en la parte Reservada se disponía la separación de aquellos oficiales que adherían a López Jordán y que, por tres años, no se los incorporase a la carrera militar.

En agosto de 1822, se produjo el motín de Gregorio Tagle contra el gobierno de Martín Rodríguez y su política secularizadora y pactista, pero fue reprimido. En Santa Fe, la conspiración contra Estanislao López en septiembre de 1822 tenía como fin quebrar su creciente poder regional y reemplazarlo en el gobierno, pero fue desarticulada; el grupo conspirador se conformó con miembros de la elite local santafesina, contando con colaboración de opositores a Mansilla y apoyo financiero del grupo de Tagle.<sup>352</sup> Por otra parte Mansilla tenía conocimiento, desde octubre de 1822, de una posible invasión paraguaya entrando por los pueblos de las Misiones y en connivencia con los oficiales imperiales, lo que agregó motivos de alarma y justificó aún más el refuerzo

---

<sup>352</sup> López Rosas José R., *De la discordia a la melancolía (crónica santafesina)*, Santa Fe, Fondo Editorial de la Prov. de Santa Fe, 1986, pp. 121-125. El autor, según información oficial y judicial, afirma que los conspiradores eran: Juan José Obando (ex hombre de Mariano Vera) y Anacleto Medina –operan desde la prisión en Santa Fe–; Juan Antonio García y Manuela Rafido desde Entre Ríos; los miembros de familias notables santafesinas: Cosme y Anselmo Maciel, Urbano de Iriondo y Manuel Denis que dan apoyo financiero; Ramón y Manuel Yedros, Antonio Piedrabuena, el platero Francisco Veliz y el soldado Manuel Acosta, todos éstos de Santa Fe.

armado sobre el Oriente entrerriano.<sup>353</sup> En el caso de las acciones conspirativas e invasoras en Entre Ríos y Santa Fe, habrían contado con la protección y anuencia del gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Su iniciativa de reunir a un nuevo Congreso Constituyente en la capital de su provincia se había visto frustrada, a partir de lo acordado en el Tratado del Cuadrilátero, lo que debilitó sensiblemente su posición política en el conjunto de las provincias rioplatenses.<sup>354</sup>

### *La conspiración de abril de 1823.*

Las gestiones de la Comisión Oriental -integrada por Román Acha, Luís Eduardo Pérez y Domingo Cullen- con el gobierno santafesino tuvieron como fruto la firma de un Tratado en marzo de 1823. Por él, Santa Fe aseguraba el auxilio en cuestiones estratégicas, provisión de hombres y armas; además, los fondos públicos y bienes del Estado eran ofrecidos como garantes de subsidios y préstamos obtenidos para solventar la campaña de liberación, otorgados con intereses usurarios. Un cobro de servicios militares que, como hemos visto, se había convertido en una importante vía de ingresos a las empobrecidas arcas fiscales de la provincia.<sup>355</sup>

---

<sup>353</sup> AGNA Sala X 5-4-5, Oficio de Mansilla a M. Rodríguez, Paraná, 7/12/22 "...dos Comisionados del Paraguay existen cerca del Jefe de la Línea fronteriza, Brig. Barreto, asegurándose que hay en aquel país 4.000 hombres prontos a marchar sobre estas Provincias, nota que cualquiera que sea el objeto de la misión, es siempre de temerse una correspondencia extraordinaria entre ambos jefes...AGPSF, Papeles de López, Vol. III, doc. 441.

<sup>354</sup> Halperin Donghi, T. 1989, 231-234. Ternavasio, M. "Las reformas rivadavianas en Buenos Aires y el Congreso General Constituyente (1820-1827)" Goldman N. (Dir.) 1998, T. III, pp. 176, 182. El Tratado del Cuadrilátero, art. 13º disponía que no dado el estado de indigencia y devastación de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes no era útil "...su concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba, menos conveniente a las circunstancias presentes nacionales, y al de separarse la de Buenos Aires, única en regular aptitud respectiva para sostener los enormes gastos de un Congreso, sus empresas marciales y en sostén de su nascente autoridad, quedan mutuamente ligadas a seguir la marcha política adoptada por aquella en el punto de no entrar en Congreso por ahora, sin previamente reglarse, debiendo en consecuencia la de Santa Fe retirar su diputado de Córdoba", en *Historia de las Instituciones*, 1969, pp. 29-31.

<sup>355</sup> Santa Fe aseguraba también gratificaciones especiales a sus oficiales y tropa, *Historia de las Instituciones*, 1969, T. II, pp. 32-34. En enero de 1823, el Gobierno santafesino había solicitado al Cabildo montevideano un tratamiento arancelario equiparado al que se le otorgaba a Buenos Aires en esa Aduana, por ejemplo por introducción desde Santa Fe se gravaba un 26% y desde Buenos Aires un 4%; en cuanto a los impuestos por extracción: 26% contra solo ½%, Marta Campos sugiere que el plan de liberación tenía un interés económico por parte de Santa Fe: aprovechar ventajas aduaneras, uso de buenos puertos de ultramar, activación del comercio, en Campos de Garabelli M, 1978, pp. 343-344.

Este pacto ocasionó severas divergencias entre López y Mansilla quien había sido invitado a sumarse al Tratado. El gobernador entrerriano estaba muy comprometido con Buenos Aires cuyo gobierno no aprobaba estas tratativas de acción conjunta, también lo estaba con el Barón de la Laguna por medio del Tratado de 1822. Estos compromisos lo mostraron reticente a entablar negociaciones con los orientales y colaborar con los planes de liberación. Para aclarar ciertos aspectos, Mansilla conferenció en Santa Fe con López a fin de no romper relaciones y argumentar sobre las dificultades que creía tener para luchar contra el Imperio. Pero la desconfianza creció entre ambos gobernadores a causa de sospechas por parte de López sobre actos conspirativos y alianzas secretas de Mansilla con Buenos Aires.

Los diputados orientales se mostraron contrariados por esta falta de apoyo y al parecer habrían integrado una conspiración para derrocar a Mansilla mientras éste se hallaba en Buenos Aires. La prensa porteña se hizo eco de estos sucesos, publicó la noticia señalando la posible instigación de santafesinos y de los comisionados orientales. Éstos últimos negaron su participación y se defendieron de las acusaciones en oficios al Cabildo de Montevideo. Según sus argumentos, los propósitos de estas manifestaciones periodísticas eran desautorizarlos ante los gobiernos del Litoral y obstaculizar los auxilios monetarios que se estaban gestionando en Buenos Aires. En efecto, el comisionado Echevarriarza, encargado de la recaudación confirmó que los prestamistas –entre ellos los fuertes comerciantes y financistas del grupo económico Costa- habían paralizado las operaciones de empréstito ante las tensiones entre López y Mansilla.<sup>356</sup>

Las investigaciones disponibles indican que en la conjura participaron Juan Francisco Seguí, Ministro Secretario de López, el oriental Nicolás de Vedia, Ministro de Mansilla, los jefes orientales Manuel Lavalleja, Juan Vázquez Feijóo, jefes locales como Ramón Olivera, Manuel Urdinarrain y Justo Hereñú, primo de Eusebio, algunos oficiales de Milicias como Justo José de Urquiza y

---

<sup>356</sup> El Correo de las Provincias, No. 17, 1960, p. 9276. Diario El Centinela, Buenos Aires, No. 36 Acceso: [https://archive.org/stream/elcentinela00unkn\\_0/elcentinela00unkn\\_0\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/elcentinela00unkn_0/elcentinela00unkn_0_djvu.txt) Consulta 7/1/2015. AGNU, Libros del ex Archivo General Administrativo, Libro 1362, Docs. No. 1781, 1786, 1805, 1806, 1821.

Santos Calvento y un diputado del Congreso el oriental Andrés Latorre –antiguo compañero de armas de Eusebio Hereñú- (Bosch B., 1978, p. 78, Calvento M., 1940, pp. 70-73).

La conspiración fue desbaratada y se aplicó una ley marcial de excepción para implantar el orden público: un Consejo de Guerra de Oficiales de graduación presidido por el Comandante León Solas se reunió para levantar sumario a los implicados independiente de su condición cívica o militar. Las sospechas sobre la instigación de López para el derrocamiento originaron un momento de máxima tensión entre ambos gobiernos. A la vez, la pertenencia de algunos conspiradores a la Villa del Uruguay ya daba indicios de disensos en el interior de la administración que luego se verán confirmados por la rebelión de diciembre del mismo año.

El Consejo de Guerra sentenció con diversas penas a los principales conspiradores: Latorre, Vázquez Feijóo, Olivera, Hereñú y Urquiza. Otra investigación disponible agrega en estas sentencias a Seguí, Manuel Lavalleja, Domingo Cullen y Luis Eduardo Pérez, pero ellos no se encuentran en el fallo.(Teijeiro Martínez B., 1910, Cap. IV). Andrés Latorre fue expulsado del Congreso por sus pares, cumpliéndose el derecho que les otorgaba el Art. 11 del Estatuto. La red del complot habría tenido importantes ramificaciones locales de las cuales el examen de los sumarios daría algunos indicios.<sup>357</sup> De todos modos, las sentencias quedaron anuladas por Mansilla, en nombre de las facultades extraordinarias que le había otorgado oportunamente el Congreso y sus atribuciones estatutarias. Las fiestas del 25 de mayo fueron el marco simbólico para la concesión de los indultos.

Promediando el año 1823, dos cuestiones de peso obligaron a replantear la posición de las autoridades entrerrianas sobre la firma de un Tratado con la Comisión Oriental: la falta de cumplimiento del Tratado de 1822 por parte de Lecor, que continuaba apañando a los emigrados y acosando a la costa del Uruguay, y la pertinaz presión del gobierno santafesino para lograr la concurrencia de Entre Ríos en la liberación del pueblo oriental. Mansilla fue

---

<sup>357</sup> RLDAPER, T. I, pp. 265-268. AGPER, Gobierno Serie III, Caja 2-B, Legs. 11 A y 11 B. El Correo Ministerial, No. 22, 5/6/1823.

elocuente ante la Legislatura: pese a los agravios conspirativos sufridos la prioridad era asegurar la paz con Santa Fe aún a riesgo de irritar a los porteños. El Tratado entre Santa Fe, Entre Ríos y la Diputación de Montevideo representada por Luís E. Pérez se firmó en la Villa de Paraná el 4 de agosto y fue aprobado por el Congreso Provincial.<sup>358</sup> De todos modos, la campaña dependía del financiamiento y no se podía calcular su puesta en marcha. La conveniencia de no descuidar la frontera Este ante una posible nueva invasión de emigrados hizo que el gobierno y el Congreso, en permanente sesión extraordinaria, se instalaran en la Villa del Uruguay mientras se reforzaba la defensa del poblado y la campaña con las dos compañías veteranas locales.<sup>359</sup> Este traslado conjunto duró casi tres meses, se supone que su reunión en la Villa garantizaba rapidez de decisiones, mayor vigilancia y demostración de autoridad en tiempos de alianzas sinuosas, aún a riesgo de estar en el mismo escenario del conflicto (Nordman D., p. 159).

Los pormenores de este acuerdo y el cambio de sede del gobierno entrerriano fueron comunicados a Lecor y Herrera por Juan Florencio Perea, devenido en un doble agente. Volcado a la causa imperial, propuso un plan para frenar los empréstitos gestionados en Buenos Aires, dificultar la recluta de las tropas de santafesinos mediante sobornos y agitar a la oficialidad entrerriana de la Villa del Uruguay donde decía tener un fuerte ascendiente. Una comisión compuesta por Lecor, el Síndico del Estado Cisplatino Tomás García de Zúñiga, el Brigadier Márques de Sousa y el Secretario Herrera emitió un informe al Presidente de la Provincia de Río Grande do Sul. En él se proponía la aceptación del plan de Perea y todo recurso posible para detener la campaña de Entre Ríos y Santa Fe.<sup>360</sup> Notablemente, el documento vuelve a mostrar la aspiración de incluir en el Imperio a las provincias del Litoral:

“...en el caso que las combinaciones de Perea tuviesen el éxito prometido de que resultaría probablemente la incorporación espontánea de las provincias de Entreríos, Corrientes y Misiones al Imperio del Brasil quedando en tal caso el gran río Paraná como límite y barrera meridional del Imperio, cuyas

---

<sup>358</sup> APOA, Autoridades militares, Parte I, correspondencia, Lata 177, maço 89, oficios entre Mansilla, Nicolás de Vedia y Lecor. RLDAPER, T. I. pp. 299-300, 304-314.

<sup>359</sup> RLDAPER, T. I, pp. 293-294. 330-331.

<sup>360</sup> AGNU, Fondo Ex Archivo y Museo Histórico Nacional: 1820-1832. Caja No. 15. 24 y 28/8, 6/9/1823.

ventajas serían de incomparable valor para el engrandecimiento y seguridad futura de la Nación Brasileira.”

La inconveniencia de una guerra con el Imperio fue planteada por el gobierno de Buenos Aires a través de la misión de Juan García de Cossio a Santa Fe y Entre Ríos. La misma sostuvo que el Tratado con la Comisión Oriental era inválido pues no respetaba los términos del Cuadrilátero y que la expedición debía suspenderse hasta la reunión de un Congreso General. Una serie de evaluaciones sobre el potencial de las fuerzas brasileñas y la posible concurrencia de las fuertes legiones de Río de Janeiro hacían pensar en el fracaso de cualquier campaña por desalojarlas. En el caso posible de una derrota de las provincias litorales las consecuencias serían funestas: refuerzo del plan de dominación de la Cisplatina, ocupación de Entre Ríos, aislamiento de Corrientes, debilitamiento de la política pactista iniciada en el Río de la Plata y la instalación de un estado de anarquía que tendría una consecuencia aún más grave cual era el no reconocimiento de la independencia por parte de otros Estados. La misión fue exitosa pues hizo desistir a los signatarios del Tratado de realizar la campaña. Por otra parte, las facciones portuguesas enfrentadas por la independencia del Brasil habían iniciado negociaciones para saldar sus diferencias; el pacto del 18 de noviembre determinó el retiro de Da Souza con sus tropas hacia la metrópoli europea y el fortalecimiento de Lecor que ocupó Montevideo. Estas circunstancias eran adversas para emprender cualquier ofensiva. La crisis financiera entrerriana agravada por los costos de la inestabilidad política fue paliada con un préstamo extraordinario de 30.000 pesos; se acordó además un refuerzo de su parque de artillería y el envío de un auxilio militar por medio de oficialidad y 200 soldados Dragones con sus familias con destino a la provincia de Buenos Aires.<sup>361</sup>

### *La rebelión de diciembre de 1823.*

A finales de 1823, un nuevo frente conflictivo se abrió en la frontera Este. Los jefes imperiales volvieron a cooperar en la organización de la campaña de los emigrados, proveyéndole unos 300 hombres de caballería a la fuerza

---

<sup>361</sup> RLDAPER, T. I, pp. 331-333, 405-420. AGPSF, Gobierno, T. 2 ½ Leg. 4, fs. 1007-1016. En 1823, una ley de la legislatura de Buenos Aires creó un ejército regular para defender la frontera sur de los ataques indígenas. Este destino dificultaba el reclutamiento por lo que es probable que los Dragones de Entre Ríos se hayan derivado a los fuertes fronterizos.

combinada encabezada por López Jordán y Eusebio Hereñú. El cruce se hizo por Paysandú mientras en el pueblo de Salto, un cantón militar a las órdenes del General Pereira Pita y del Comandante Bentos M. Ribeiro ofrecía apoyo operativo y obsequios a la oficialidad del ejército entrerriano destacado en las costas del río, para que defeccionen y colaboren con la invasión. La Villa del Uruguay fue asediada y finalmente ocupada tras el pase del Capitán Pedro Espino y sus compañías a las filas invasoras (Moritán S. 1945, p. 86. Calvento M., 1940. p. 77).

La toma de la Villa fue narrada por Mansilla en un Manifiesto a los ciudadanos, haciendo notar el incumplimiento de los jefes imperiales de reglas básicas del Derecho de Gentes:

“Una costa inmensa, que presenta en todas partes pasó a la ribera opuesta del río Uruguay, no puede ser guardada enteramente, ni es necesario que lo sea cuando se reposa en la confianza de que el derecho de gentes será respetado por los que ocupan la otra parte, como lo ha sido por la nuestra. Así no le fue difícil sorprender los destacamentos situados en el Palmar y Mandisoví, y arrojarse sobre la villa del Uruguay aumentada ya su fuerza con los amigos de Espino que se le unieron en el Palmar, su antigua residencia. Es muy aflictivo Ciudadanos deciros que fue tomada sin resistencia...”<sup>362</sup>

Espino era un militar de carrera, perteneciente a la antigua elite capitular de la Villa e importante estanciero con fuerte ascendiente sobre jefes locales como Manuel Márquez y Manuel Brito, su cuñado. (Bourlot R., 2007, pp. 109-110, 120-121) Por medio de una Circular del 20 de diciembre, instó a los Comandantes departamentales a sumarse a su causa. En ella justificó su adhesión a la entrada de emigrados en el rechazo del envío de Dragones a Buenos Aires acordado con García de Cossio a cambio de mayor endeudamiento y dejó claro que su propósito era deponer al gobernador; en el remate de la Circular quiso despejar toda duda acerca de la legitimidad que debía tener todo gobernante: *“yo no aspiro a mandar y despacharé las fuerzas portuguesas a su destino y me sujetaré en todo a las deliberaciones del Congreso”*. Algunos autores coinciden en agregar que en el fondo de la protesta y adhesión de Espino se encontraba la oposición de un proyecto de Mansilla para anexar a Entre Ríos al territorio de Buenos Aires, sin precisar evidencias.<sup>363</sup>

---

<sup>362</sup> El Correo Ministerial, Documento suelto anexo al No. 24. 16/1/1824.

<sup>363</sup> Nuestra investigación recién encuentra indicios de este plan en febrero de 1825, cf. Cap. II, Apartado II.4.

Otras demandas de Espino se canalizaron por vía de la justicia. Ante el Alcalde de Hermandad de la Villa exigió, entre otras cosas, que se considere nulo el gobierno pues su elección había sido entre batallones y por la fuerza, que el Cnel. Lucio Mansilla sea despojado de su mando político y militar, que se elija un nuevo gobernador por vía de los diputados y que la sede del Congreso se constituya en el centro de la provincia.<sup>364</sup>

Mansilla planificó dos vías para recuperar la Villa y expulsar a los rebeldes: una diplomática y otra militar. La misión negociadora del diputado provincial Manuel Fernández solo pudo cumplir parcialmente sus instrucciones: si bien Hereñú se fue de la Villa, quedó Espino decidido a resistir. El gobernador, contestando a la Circular de Espino, lanzó una Proclama que anunciaba la batalla: había que impedir la usurpación del poder por parte de “un proscrito, desertor y traidor” liderando a unos forajidos sin patria, una turba de asesinos vendida al extranjero, movilizada por promesas de saqueo. Mansilla reunió a más de 600 hombres bajo el mando del Comandante del Dpto. 1º Principal, el Coronel de Caballería León Solas. El Coronel ordenó por Bando la reunión de fuerzas en la Villa del Paraná y encomendó a los Comandantes Subalternos de Gualeguay y Gualeguaychú, que se le incorporen con todas las milicias a su mando. Sin embargo, todo quedó en aprestos de batalla. Los contactos entre Solas y Espino se encaminaron por una vía de diálogo, sin conocerse con certeza los motivos de este cambio de relación, pero indudablemente marcaba el poder político alcanzado por Solas. Espino se dirigió a Solas como un “paisano” y “americano entrerriano” expresándole su aval si eventualmente era designado en el gobierno. Ambos se entrevistaron en el campamento del Molino y acordaron un convenio para resolver el conflicto, en términos de capitulación de Espino. Con la recuperación de la Villa del Uruguay, Mansilla le concedió a Espino “perdón y olvido” a cambio de información sobre sus compromisos con los jefes imperiales, pretensión que no se habría visto satisfecha. (Bourlot R. pp. 118-120)<sup>365</sup>

---

<sup>364</sup> AGPER, Gobierno Serie I, Caja 5.

<sup>365</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, fs. 1758 y 1761, 1777-1779.



### **VII.2.b. Tierra pública e inversiones externas: tensiones rurales en torno a la propiedad y a la autoridad. 1824-1825.**

Desde fines del siglo XVIII, las tierras realengas del territorio al S y SO de los Entre – ríos fueron especialmente codiciadas por vecinos y hacendados porteños –tanto de Buenos Aires como de Montevideo- para su explotación económica. Como era usual en tiempos coloniales, en esta área de nueva colonización se obtuvieron tierras por mercedes reales, compra por remate, moderada composición o derechos adquiridos por larga ocupación.<sup>366</sup> Las confusas delimitaciones, los dudosos títulos de propiedad y los acaparamientos especulativos de terrenos originaron pleitos, algunos de largo plazo, entre particulares o entre éstos y las autoridades virreinales. Esta situación continuó en las décadas post independientes, profundizada por la situación bélica que agregó otros problemas con la propiedad, como los embargos y confiscaciones sin distinción de bandos.

Promediando la década de 1820, se volvió a plantear el interés de multifacéticos agentes económicos de Buenos Aires por obtener tierras públicas en ventajosas condiciones. Varias razones impulsaron al Gob. León Solas a celebrar un contrato con Pascual Costa en representación de capitales porteños: abundancia de tierras fiscales mayormente improductivas, necesidad de crear trabajo y fijar mano de obra, situación crítica de la economía y, particularmente, del fisco entrerriano. Pascual Costa integraba el poderoso grupo económico Costa de Buenos Aires, encabezado por su hermano Braulio. Otros miembros del grupo eran reconocidos comerciantes y financistas como: Félix Castro, Juan Pedro de Aguirre –Ministro de Hacienda y Economía de Buenos Aires-, Nicolás y Tomás de Anchorena, Pedro Trápani, Sebastián Lezica, Guillermo Parish Robertson, entre otros. Esta asociación tenía representantes en las provincias rioplatenses y sólidos contactos americanos y europeos, especialmente con instituciones bancarias y sociedades económicas de Londres. Sus principales actividades económicas comprendían la explotación de minerales en la sierra de

---

<sup>366</sup> Más detalles sobre la ocupación del espacio en Cap. II, Apartados II.1. y II.2.c. Sobre formas de acceso a la tierra Cf. Banzato, Guillermo “La herencia colonial. Moderada composición y remates en Buenos Aires 1780-1822” en Blanco G. y Banzato G. La cuestión de la tierra pública en Argentina: a 90 años de la obra de Miguel Ángel Cárcano, Rosario, Prohistoria, 2009, pp. 57-73. Sobre denuncias y compras de tierras realengas, pedidos de mensura y tasación, litigios: AGPER Fondo Gobierno, Serie VIII, Caja 1 A Legs. 1 a 26.

Famatina en La Rioja con capitales mixtos –Cía. Famatina Minning Company-, negocios mercantiles, inmobiliarios y financieros.<sup>367</sup>

En la estrategia del gobierno entrerriano, la posibilidad del contrato debía potenciarse con medidas previas de regularización, puesta en orden de la propiedad y control social de la campaña. A fines de julio de 1824, el Congreso Provincial volvió a legislar sobre un asunto que ya tenía sanción del año anterior pero sin cumplimiento efectivo: fijar plazos a los poseedores de campos para que presenten sus títulos legítimos de posesión en un plazo de 90 días; su inobservancia representaba la cesión de los terrenos al Estado. Además Solas encargó un informe a todos los Comandantes sobre la existencia de campos baldíos propiedad del Estado, incluidos aquellos que quedaron para el fisco por la muerte de los poseedores sin herederos; a la par les pidió perseguir a los vagos y ladrones rurales.<sup>368</sup> Evidentemente, estas medidas reflejaban las amplias expectativas que se generaban a partir de la venta de tierras al Grupo Costa, entre ellos los necesarios réditos fiscales.

Las acciones promovidas por la Ley de julio y la Circular a los Comandantes revelaron distintos aspectos relacionados a la propiedad. Había tenencias legalizadas por escribanía o por medio de títulos legítimos obtenidos por compra de tierras realengas a las autoridades españolas o de tierras públicas a autoridades posrevolucionarias, casos éstos que fueron reconocidos o convalidados por el gobierno provincial; otras tenencias eran justificadas por ciertos pobladores en nombre de derechos por “posesión inmemorial” y prescripción con presentación y aval de testigos, derivados del derecho consuetudinario. Otras situaciones de tierras en propiedad o en usufructo eran sumamente precarias, desde hacía larga data o bien generadas por acontecimientos bélicos. Por ejemplo, se carecía de títulos legítimos por asentamiento informal, por pérdida de documentación debido a las guerras, por permisos de ocupación otorgados como reconocimiento de servicios militares;

---

<sup>367</sup> Galmarini Hugo, 1974. Chianelli, T. 1977, p. 88. Sobre la relación de Félix Castro como acreedor del fisco entrerriano, proveedor y Encargado de Negocios de Entre Ríos ante Buenos Aires ver Cap. V, apartado V.2.c. y Cap. VII.

<sup>368</sup> Ley del 27/7/1824: Libro LAD del HC, pp. 29-30, RLDAPER, T. I, pp. 421-425, Ley 27/07/24 y Circular sobre vagos y ladrones de la campaña. AGPER, Gobierno, Serie IX, Mazo 1, Caja 1, Leg. 2, Circular 28/7/24 a los Comandantes de Departamentos Principales y Subalternos.

las mensuras de terrenos denunciados ante los antiguos Cabildos y ante jueces territoriales eran inexistentes o de deficiente trazado, lo que dificultaba determinar la ubicación y extensión de campos fiscales en condición de baldíos. Entre agosto de 1824 y febrero de 1825, los informes del Alcalde de Hermandad de la Matanza, José Albarenque de ocupación labrador y de los Comandantes de Gualeguaychú, Mateo García de Zúñiga y del Dpto. I Principal Ricardo López Jordán, expusieron en general esta situación en términos de gran obstáculo para la misión y posibles manifestaciones de descontento. En el informe de García de Zúñiga se hizo notar que aún habiendo un Reglamento sobre mensuras desde 1782 -refiriéndose a la Real Ordenanza de Intendentes- las mismas no se habían practicado, que emprender esa tarea podía aumentar los litigios y las tensiones rurales, sobre todo en algunas situaciones que eran particularmente sensibles como la de los campos de labradores que se veían perjudicados por la actividad pastoril en terrenos colindantes sin delimitación precisa. (Schmit, R. 2008, Cap. III; Urquiza Almandoz O. 1978, pp. 499-502)<sup>369</sup>

El contrato fue aprobado por el Congreso Provincial el 2 de agosto de 1824. En él se dispuso la venta de terrenos del Estado divididos en suertes de estancias que variaban su precio –de notable baratura- según la distancia que tuvieran a los puertos en ríos navegables.<sup>370</sup> En un término de dos años se esperaba poblar y poner en producción las tierras las que serían debidamente escrituradas. Al momento de la firma, la sociedad representada por Costa estaba en franca expansión rural. Además de la adquisición de tierras fiscales, el plan inversor contemplaba la de particulares. La conexión en Buenos Aires era

---

<sup>369</sup> AGPER, Gobierno, Serie VIII, 1 A, 1 B, 2; 2 A Leg. 5, f. 23, Leg. 15, f. 69. Leg. 22, pp. 191-197. Censo de la Matanza, 1820, p. 1. En 1869, Mateo García de Zúñiga, residente en Montevideo, consultó a su abogado Dr. Adolfo Pedralvez sobre los títulos de sus tierras de Campo Florido otorgados por el gobierno español en 1806 y que recibiera de herencia. Los mismos fueron presentados en 1825 y convalidados por el Gob. Solas. Su duda era si podían ser anulados por el Gob. Urquiza quien lo había hecho objeto de persecución política, viéndose obligado a emigrar a la República Oriental del Uruguay en 1854. Pedralvez contestó: "...el convenio hecho con las autoridades del gobierno español es completamente válido y debe ser respetado porque no es justo ni posible según derecho, volver a vender y obtener segundo precio de lo que se ha vendido y cobrado anticipadamente al precio de entonces. Entiendo que por punto general en el Entre Ríos, en Buenos Aires y aquí (en la ROU) se respetan los títulos del tiempo del gobierno español como los más antiguos y al igual que los otros otorgados por los distintos gobiernos sucesivos". Arch. García de Zúñiga, Paquete 23, Correspondencia familiar.

<sup>370</sup> RLDAPER, T. I, pp. 426-429. Contrato celebrado el 30 de julio y aprobado por el Congreso Provincial el 2 de agosto de 1824, AGPER Libro de Leyes, Acuerdos y Decretos del HC, 1/87, p. 31. Por cada suerte de estancia de tres leguas frente por tres leguas fondo se pagaban 150 pesos cercana al río y entre 90 y 60 pesos las más distantes de cursos navegables.

Lucio Mansilla, Encargado de negocios de Entre Ríos e interlocutor directo de los potenciales inversores. Otras conexiones locales destacadas eran: el francés naturalizado Juan Lanús –contador de la Caja del Uruguay- y el vecino notable de Paraná, Juan Camps, designados por Pedro Trápani como sus apoderados para compra de tierras, en igual función se hallaba Mariano Aráoz de Lamadrid, vecino de Gualeguay, que actuaba en nombre de Félix Frías.<sup>371</sup> A principios de 1825, Lanús se convirtió en agente de negocios de la sociedad Costa y emprendió la misión oficial de mensurar los campos baldíos, junto con el agrimensor Francisco Mesura y el Comandante del Dpto. I Principal Pedro Barrenechea como Juez de mensura, acompañados de fuerza armada.

Las tareas de la comisión pronto se vieron obstaculizadas por partidas rurales hostiles. En el fondo del problema, estaba el rechazo a la Ley que conminaba a los propietarios a presentar títulos en tan corto plazo y a los términos del contrato celebrado con porteños, a la baratura con que se ofrecían las tierras y a las mensuras arbitrarias; a esto habría que agregar ciertos rumores que circulaban sobre los beneficios particulares obtenidos por Solas y Mansilla a partir de la firma del contrato.<sup>372</sup> Antiguos vecinos de la zona entre el arroyo Clé y el río Gualeguay protestaron por los abusos de la comisión: Leonardo Millán – ex Comandante de Gualeguay y diputado al Congreso durante 1824-, Pedro Ezeiza, Teodoro Soto entre otros hacendados. La vía legal de protesta ante los Alcaldes del lugar o la canalización de reclamos al gobierno a través de las comandancias no dieron resultados. En mayo de 1825, se reunieron más de 100 hombres –de los que no tenemos ningún dato de identificación- en el pueblo de Gualeguaychú. La reunión fue encabezada por el Comandante Mateo García de Zúñiga y por el Comandante de Cívicos, Justo José de Urquiza para manifestar su descontento.<sup>373</sup> Ante tal demostración de resistencia se paralizaron las mensuras. Los hacendados se mantuvieron en armas y habrían logrado cooptar a otros jefes militares para sostener la protesta

---

<sup>371</sup> AGPER, Gobierno, Serie VIII, 2-A, Leg. 2, fs. 14-16, Leg. 6, fs. 25-28; Leg. 20, fs. 143-145.

<sup>372</sup> El art. 5 del contrato establecía la separación de una suerte de estancia en el Rincón de Pérez para Lucio Mansilla, no está claro si es una donación, pago en comisión u otro concepto.

<sup>373</sup> Ambos Comandantes pertenecían a ricas familias del oriente entrerriano dedicadas a la producción rural desde fines del siglo XVIII y de hecho, ellos mismos estaban insertos en ese tipo de actividad, ver Cap. II, Apartado II.V. Los García de Zúñiga, sus lazos familiares se extendían hacia la Banda Oriental y Buenos Aires, en Djenderedjian Julio, 2005

como el Comandante Laureano Márquez que finalmente podríamos considerar exitosa. En septiembre de 1825 el Congreso Provincial dispuso por Ley que toda venta de terrenos y otros bienes del Estado debían hacerse en pública subasta y al mejor postor, con lo cual descomprimió la situación. Esta nueva legislación canceló prácticamente el contrato con Costa y sus representados, dejando abierto el camino a largos pleitos entablados por sus descendientes después de 1860. (Chianelli T., 1977, pp. 91-95; Ruiz Moreno, M. pp. 69-72).<sup>374</sup>

En el transcurso de este movimiento de resistencia se puso en evidencia la coexistencia de distintas tradiciones jurídicas y de prácticas viejas y nuevas en torno a la propiedad, con un trasfondo de tensiones latentes o explícitas. Su dinámica demostró cierta organización, acción sostenida y franco ascenso de la inconformidad, pudiéndose identificar distintas etapas como advertencias al gobierno, reclamos judiciales, partidas de hostigamiento, violencia armada. El conflicto se localizó básicamente en la jurisdicción del Departamento II Principal, sobresaliendo los móviles económicos e intereses particulares en el discurso de los pedimentos e informes, pero es posible ver una disputa política ante la sospecha de lucro personal de ciertas autoridades a partir del contrato. De acuerdo a los escasos datos disponibles y prácticamente limitados a los jefes visibles, las redes de relaciones en la protesta estuvieron compuestas por actores que revestían al menos en algunos casos una doble pertenencia: ligados a la producción rural y a la función militar de primer rango. O sea que más que hacendados o militares son jefes territoriales de largo arraigo y con variados atributos sociales. En el caso de las redes puestas en acto por el contrato encontramos a funcionarios provinciales de primera línea que devienen en nexos locales para ejecutar el plan inversor de estos porteños e ingleses.

#### **VII.2.c. Convergencias en una elección disputada: poder local, regional y “nacional” en un contexto de guerra. 1825-1826.**

La elección de gobernador de Entre Ríos a fines de 1825 suscitó un conflicto interno de importantes proporciones en un contexto que, por sus

---

<sup>374</sup> RLDAPER, T. II, pp. 58-59.

características, le agregó mayor complejidad. En Buenos Aires, las sesiones del Congreso General Constituyente se consumían en arduos debates sobre el sistema político institucional que debía organizar al conjunto de las provincias, mientras tanto se estaba gestando el conflicto bélico con Brasil. A partir de mayo de ese año, se originó una serie de medidas y preparativos militares que incluían la contribución de hombres y recursos por parte de las provincias para engrosar el llamado “Ejército Nacional”. La base de asiento, operaciones y organización de las campañas estaría en el estratégico territorio de Entre Ríos, conectada con el cuartel oriental de Salto como uno de los pasajes clave de las tropas.<sup>375</sup> En diciembre, la declaración de guerra a las Provincias Unidas por parte del Emperador Pedro I, precipitó las acciones. Los ejércitos provinciales de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Montevideo quedaban, por Ley del Congreso General, bajo el mando del Comandante de la Línea del Uruguay, Martín Rodríguez. Esta subordinación y la contribución de tropas propias destinadas al cuidado del orden interno generaron resistencias en el Congreso provincial, en el Gobierno y en las cabeceras de Comandancias, demostradas de varias maneras.<sup>376</sup>

El centro de la discusión en ese conflicto interno fue la elección realizada por los diputados el 15 de diciembre, a favor de Ricardo López Jordán.<sup>377</sup> Los días subsiguientes a la elección se caracterizaron por la intensidad en debates y negociaciones. A través de tres petitorios sucesivos con 730 firmas de vecinos de la Capital y la jurisdicción del Departamento I Principal, se planteó el reclamo de reelección del gobernador saliente, Solas.<sup>378</sup> Los petitorios siguieron distintas vías de presentación ante el Congreso provincial. El primero fue gestionado a través del diputado por la Villa Capital de Paraná. El segundo fue entregado al gobernador Solas. El tercero fue avalado por cuatro Alcaldes de Barrio de la

---

<sup>375</sup> *Partes oficiales y documentos relativos a la guerra de la independencia argentina (campaña del Brasil)*, 1903, pp. 100-104. Acceso:

[https://archive.org/stream/partesoficiales00arggoog/partesoficiales00arggoog\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/partesoficiales00arggoog/partesoficiales00arggoog_djvu.txt)

<sup>376</sup> RLDAPER, T. II., pp. 41-45, 99-100, 120-124. Registro Nacional Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires, Imprenta de los Niños Expósitos, 1825, Libro1ro. pp. 31-33 y Libro 2do. Pp. 14-15. Teijeiro Martínez, B. 1910, pp. 204-205.

<sup>377</sup> El análisis de esta elección en Cap. IV.2. Apartado IV.2.b. “Elecciones después del Estatuto”.

<sup>378</sup> Estos documentos solo están mencionados en las Actas del Congreso sin más detalles, lo que impide tanto conocer mejor las razones expuestas por los vecinos como afirmar que esa cifra de 730 represente un total de personas, la que podría verse reducida ante la posibilidad de repetición de los firmantes en cada uno.

misma Villa y entregado en el recinto por el Ministro Secretario de Santa Fe Dr. Juan Francisco Seguí -lo que reflejaba el directo apoyo de Estanislao López- y por Celedonio José del Castillo –antiguo Ministro de Mansilla-, en carácter de “Apoderados del pueblo”. Ambos expusieron y defendieron la posición de los peticionantes del Departamento I Principal en el seno del mismo Congreso, provocando la anulación de la elección y la continuación de Solas en el cargo.<sup>379</sup>

Dos meses más tarde, en febrero de 1826, Ricardo López Jordán convocó a sus soldados para hacer respetar su elección que, a su juicio, era totalmente legal. La reunión se realizó en el Campo del Molino cerca de la Villa del Uruguay designándose a Justo J. de Urquiza como Secretario de las actuaciones. A la convocatoria acudieron también los Comandantes Mariano Contreras y Mateo García de Zúñiga con 350 vecinos de Gualeguaychú. Solas se acantonó en Nogoyá con las tropas departamentales preparándose para el enfrentamiento armado.

En el Molino, como ya vimos, se encontraba apostado el Ejército de Observación con destino al Brasil. Su Comandante Martín Rodríguez informó sobre los acontecimientos a las autoridades políticas en Buenos Aires y mientras tanto, inició gestiones de pacificación, aunque infructuosas. Rodríguez y los ministros del Presidente de las Provincias Unidas, Bernardino Rivadavia, evaluaron la situación de la guerra en marcha y la disputa política como una concurrencia que ponía en riesgo la organización y funcionamiento de las bases militares instaladas en Entre Ríos, el alistamiento de las tropas y el desplazamiento de las expediciones hacia la Provincia Oriental.<sup>380</sup> (Teijeiro Martínez B. pp. 200-206)

---

<sup>379</sup> Calvento, M. 1940, 90-95. RLDAPER, T. II, pp. 77-87.

<sup>380</sup> En efecto, en esta etapa inicial de la guerra, se sucedían distintas formas de resistencia al reclutamiento y servicio militar como pedidos de baja o excepción, violentos amotinamientos y desertiones de soldados, especialmente de las provincias como también la desobediencia de sus oficiales con respecto a las jerarquías del “Ejército Nacional”. Además eran tiempos en que se emprendía operaciones complejas de desplazamiento de compañías del “Ejército Nacional” hacia la Provincia Oriental, cruzando el río Uruguay a través del Paso de Salto. Dada la importancia de sus objetivos -consolidar el cuartel general de Dayman y movilizar las tropas hacia las últimas estribaciones de la cuchilla de Haedo- no se podía comprometer su éxito con estas rencillas políticas. Los partes de Rodríguez desde los cuarteles del Molino, Dayman y San José reflejan el seguimiento y la preocupación por el asunto. *Partes oficiales y documentos relativos a la guerra de la independencia argentina (campana del Brasil)*, 1903, pp. 105, 116

Con el fuerte respaldo recibido por militares y vecinos, López Jordán envió una carta al Diputado por Paraná, el Pbro. Francisco D. Álvarez, en la que sostuvo la defensa de las leyes y las formas constitucionales juradas, denunció la acometida tumultuaria de Solas para retener la gobernación y aconsejó al Congreso Provincial que se tomaran en cuenta los arts. 58 y 59 del Estatuto. Estos artículos establecían los mecanismos a adoptar como salida a situaciones excepcionales: toma provisoria del gobierno por parte del Diputado por la Villa Capital y nueva convocatoria a elecciones. La otra vía de reclamo fue canalizada ante el Congreso en Buenos Aires, cuyos diputados designaron una comisión que tratara el asunto.<sup>381</sup> El reconocimiento del Congreso como posible autoridad arbitral en el conflicto es una decisión que, inferimos, podía obrar como una forma de presión ante el Congreso provincial para atender aquel reclamo y evitar la injerencia externa; es posible también que esta vía intentara sustraer del campo de las negociaciones a la discutida autoridad militar de Rodríguez.

Rivadavia encargó una misión de pacificación a un prestigioso militar formado en las guerras de independencia, el Coronel Manuel de Escalada. Las instrucciones otorgadas tenían un doble carácter. Las públicas recomendaron interpelar a ambas partes en conflicto, señalar las consecuencias negativas de tal situación para el desempeño de las Provincias Unidas en la guerra contra el Brasil y advertir, particularmente, que la provincia quedaba totalmente vulnerable ante una posible invasión brasileña. Las instrucciones reservadas le indicaron explorar las opiniones de ciertos personajes sobre los sucesos, como Mateo García de Zúñiga y el gobernador de Santa Fe. Era importante también observar la recepción de una propuesta de solución por parte de los dos jefes contendientes: renovar todo el Congreso provincial, duplicar el número de diputados y proceder a otra elección. En esta misión, las relaciones personales de Escalada con los nuevos diputados electos por Entre Ríos ante el Congreso en Buenos Aires, el Pbro. Álvarez y Cipriano de Urquiza parecen haber sido efectivas en la consecución de la misión. (Bosch, B., 1956, pp. 43-52).

---

<sup>381</sup> RLDAPER, T. II, pp. 134-135. Ravignani E., *Asambleas Constituyentes Argentinas*, Bs As. T. 2do., p. 899.



Finalmente, el conflicto se solucionó mediante un convenio entre López Jordán y Solas, avalado por la Presidencia y aceptado por el Congreso Provincial: ambos renunciaron a sus pretensiones de gobierno, depusieron las armas y se comprometieron a acatar la nueva elección. El Congreso mantuvo independencia de lo sugerido por la Presidencia; sin renovarse ni duplicarse en su composición, eligió a Vicente Zapata el 4 de abril. El Pbro. Álvarez fue designado en la importante función de Secretario de Gobierno.<sup>382</sup> En realidad, esta salida pactada significó el inicio de una tregua pues hacia el final de la década el conflicto volvería a resurgir con creces, en un contexto de guerra interior e influencias políticas externas.

En este conflicto de naturaleza política convergieron diversos intereses locales, regionales, “nacionales”. Las amnistías y devolución de bienes confiscados a los emigrados no borraron las viejas disputas entabladas entre los grupos de Paraná y del Uruguay en torno a la ocupación del gobierno y el ejercicio del poder político; la discusión se centró en las formas de acceso al cargo, en el reclamo de legalidad y en la violencia que anunciaban los actos armados. La administración santafesina intervino a favor del grupo de Paraná con un representante de alto rango político. El gobernador López, actor destacado en la puja por el poder regional, buscó influir y arbitrar en el Estado vecino, habida cuenta también de su interés expansionista y de sus pretendidos derechos históricos sobre la jurisdicción entrerriana. La afectación del desarrollo de la guerra contra el Brasil “nacionalizó” el conflicto. A fin de darle solución se intervino en varias etapas de negociación, primero los más altos funcionarios del Ejército Nacional y de los Ministerios, luego la Presidencia con el envío de la misión de Escalada, mientras la institución máxima de las Provincias Unidas se mantuvo informada y expectante por el desarrollo de los acontecimientos.

Las acciones se concretaron a través de distintas modalidades: los discursos en el Congreso, los petitorios del vecindario, la expresión tumultuaria, los alardes militares que emulaban a aquellos tan usuales durante la colonia, la mediación externa. Las redes internas que sostienen a cada uno de los jefes tienen en su base a los comandantes militares sujetos bajo su respectiva

---

<sup>382</sup> RLDAPER, T. II, pp. 138-147.

autoridad departamental, a los vecinos que se manifiestan en peticiones legales o acudiendo a los alardes y posiblemente otros subalternos de cuya actuación los documentos disponibles no dan cuenta. La misión externa de conciliación es un dispositivo político-militar que se vería facilitado por vinculaciones personales locales para alcanzar su objetivo.

En el caso de los tipos de representación presentes, los Apoderados aparecerían solo como voceros de los petitorios en el recinto del Congreso, aunque descansando en personas influyentes y con preparación legal. En cuanto al enviado de Rivadavia, actuó como comisionado con instrucciones generales pero con cierta flexibilidad de negociación desde lo instruido reservadamente. El clero secular, integrado a la representación política local y “nacional” en la figura del Presbítero Álvarez, asumió el papel de vehículo de la legalidad estatutaria, de mediador en el plan de la misión Escalada y de respaldo político en la fase inicial de la gestión de Zapata.

#### **VII.2.d. El ganado como botín de guerra: derivaciones económicas y políticas. 1827.**

En las dos rebeliones de setiembre de 1827 podemos distinguir motivaciones económicas y un cuestionamiento de autoridad que termina con la deposición del gobernador. Esta nueva situación de convulsión no se sustrae del estado de la guerra contra el Brasil y la situación económica general de las provincias litorales.

Como sabemos el stock ganadero en las provincias del Litoral, especialmente el vacuno, había sufrido una gran merma a causa de las guerras revolucionarias y de los enfrentamientos interprovinciales. Los establecimientos santafesinos se vieron afectados por la guerra librada contra Buenos Aires y por las incursiones indígenas desde el Valle Calchaquí. La campaña oriental, ocupada por los imperiales desde 1816, sufrió constantes arreos de ganado para abastecer a los saladeros de Río Grande del Sur. La campaña entrerriana, según los datos disponibles, poseía entre 1823 y 1825 solo un 25 % del stock

ganadero existente en los primeros años del siglo XIX.<sup>383</sup> La guerra contra el Imperio era una oportunidad para repoblar las diezmadas haciendas, cuestión que la historiografía tradicional no subrayó suficientemente y que queremos hacer notar. En efecto, desde su inicio las campañas del Ejército Nacional a la Provincia Oriental no solo importaron acciones militares sino también saqueos de ganado que se trasladaba, en gran parte, por el Paso de Paysandú y se distribuía en Corrientes y Entre Ríos, llegando el beneficio a varios establecimientos ganaderos de Santa Fe y Buenos Aires. A mediados de 1826, en el marco de las negociaciones de paz, el Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio, Vizconde de Inhambupe, planteó ante el enviado por Gran Bretaña Lord Ponsonby su preocupación por la vulnerabilidad de la frontera riograndense expuesta, por todas partes, al robo de ganado y al fomento del contrabando. Estas quejas llegaron hasta el Ministro George Canning, corroboradas por Ponsonby quien afirmaba que “los bonaerenses han levantado ganados de Río Grande por valor de 120.000 libras” (López D’Alesandro, F., 2011, pp. 217-244).<sup>384</sup>

El gobierno de Entre Ríos había organizado sus propias vaquerías en territorio oriental otorgando permisos a militares y particulares. La vaquería era una antigua práctica colonial que consistía en la expedición de caza de ganado vacuno cimarrón. Los Cabildos eran los autorizados para otorgar licencias de vaqueo y registrar a los beneficiados con ese usufructo. En estas vaquerías de la década de 1820, el ganado arreado no era justamente cimarrón; según los informes recibidos en Nogoyá “... cada vaca o novillo traído de la Banda

---

<sup>383</sup> Schmit R., 2004, p. 100. El estado de la ganadería en el Litoral expuesto en Cap. II, Apartado II.5.b. *Las actividades económicas*.

<sup>384</sup> La investigación de Fernando López D’Alesandro, 2011, que aborda el factor económico en el desarrollo de la guerra contra el Brasil representado en el saqueo de ganado y repoblamiento de las estancias litorales, nos ha sido útil para elaborar parte de la introducción a estos conflictos. Carta privada del Ministro Plenipotenciario Lord Ponsonby al Embajador inglés en Río de Janeiro, Sir Robert Gordon, Bs As, 6/1/1827: “...Los brasileiros se han llevado en ganado de la Banda Oriental, por valor de varios millones de esterlinas, con los que han enriquecido a las provincias adyacentes y a varios de sus súbditos” en Herrera, Luis Alberto de *La Misión Ponsonby*, (Documentación) Tomo II, 1930, p. 133. Cartas del Vizconde de Inhambupe a Lord Ponsonby, Río de Janeiro, 10/6/1826; de Lord Ponsonby a George Canning, Río de Janeiro, 19/8/1826. Herrera, L. A., T. II, pp. 41 y 61. AGPER, Gobierno, Carpeta 11, Oficio M. García de Zúñiga a Vicente Zapata, 24/11/1826, citado en López D’Alesandro, F., 2011, p. 233.

Oriental, tienen por lo regular dos y tres marcas...”<sup>385</sup> . El objetivo de esta práctica era proveer de ganado a las guarniciones locales, a los poblados del Departamento II Principal y a establecimientos particulares, muy afectados por el asiento del Ejército Nacional, por la recepción de prisioneros brasileños y por los perjuicios del bloqueo al puerto de Buenos Aires tanto en el comercio como en la recaudación fiscal local.<sup>386</sup>

Durante el año 1827, los arreos habían cobrado gran magnitud. Esta circulación de animales robados contribuía a obtener algunos recursos fiscales de un lado y otro de la frontera. La Caja Receptora de la Villa de Paysandú fijó un impuesto por cabeza, por otra parte el gobierno entrerriano puso a disposición canoas del Estado para el traspaso tarifado.<sup>387</sup> Estos importantes arreos podían ser producto de vaquerías permitidas o clandestinas. Las partidas sin autorización habían proliferado. Los controles de licencias y registros eran dificultosos. El gobernador García de Zúñiga decretó el cese de las vaquerías fundamentándose en la ilegalidad en que se incurría e imponiendo duras penas como la confiscación de los animales, quitas de armas y monta, prisión de los responsables.<sup>388</sup> Esta prohibición, según los estudios disponibles, fue el detonante de rebeliones militares tres meses después. Sin embargo, inferimos que este móvil económico no sería el único y que se habrían sostenido por otras motivaciones de origen político que no conocemos en profundidad.

Aquellos oficiales perjudicados en sus beneficios particulares manifestaron su descontento. Los Comandantes de departamentos subalternos del I Principal y encargados de esas vaquerías, Capitanes Tomás Cóceres y Jacinto Palomero, sublevaron a sus milicias. Declarados fuera de la ley a instancias del diputado Justo José de Urquiza, se reunieron en la Selva de Montiel para resistir. Manuel Urdinarrain y Ricardo López Jordán fueron

---

<sup>385</sup> AGPER, Gobierno, Carpeta 11, Informes desde Nogoyá, 16/10/1826, citado en López D’Alessandro, F., 2011, p. 233.

<sup>386</sup> La grave situación fiscal de estos años por la guerra contra el Brasil se expone en Cap. VIII.

<sup>387</sup> Libro de la Receptoría de Paysandú, Receptor Eugenio Aberasturi, para la cuenta y razón del ganado que se extrae hacia Entre Ríos. La entrada por esos derechos –habría sido de un peso por cabeza- sumó por agosto y setiembre de 1827: 2.278 pesos. Entre enero y febrero, la cantidad aumenta a 20.123 pesos. Entre los que realizan esa extracción se encuentran el estanciero Salvador Barceló establecido en la villa del Uruguay, Juan Aldao, Federico Campbell. AGNU, AGA, 1827-1828, No. 318.

<sup>388</sup> RLDAPER, T. II, pp. 291-292.

autorizados por García de Zúñiga y el Congreso Provincial a combatirlos con sus tropas. El movimiento fue sofocado. Cóceres y Palomero fueron degradados de sus cargos militares. Inmediatamente, se abrió otro frente de conflicto en Paraná. Los Mayores Blas Martínez y Juan Ignacio Reyes lograron la deposición de Mateo García de Zúñiga, por medio de actos de fuerza. (Bosch Beatriz, 1978, p. 110. Calvento Mariano, 1940, pp. 14, 19, 97).

El Congreso Provincial, después de tres reñidas votaciones, eligió a Vicente Zapata. Los sublevados de Paraná consiguieron que Cóceres y Palomero retornaran a sus cargos, León Solas sea nombrado General de Armas y el santafesino Pedro Barrenechea, su estrecho colaborador, reemplazara a López Jordán como Comandante Departamental (Bosch B., 1978, p. 111). La instalación de Zapata vuelve a ser un resorte de descompresión a la situación de conflicto, amparada por la influencia de Estanislao López y las gestiones que en su nombre realizó el General oriental Fructuoso Rivera, luego de una reunión celebrada en Santa Fe. García de Zúñiga había demostrado con sus políticas una resistencia a las políticas porteñas de curso bastante autónomo y convenía al poder regional de López, restaurar el dominio de los grupos de Paraná.

Esta reconstrucción muy general de los sucesos de septiembre de 1827, nos permitió realizar algunas observaciones en torno a las jefaturas, las alianzas y los influjos externos en un marco de gran beligerancia. Las acciones militares se concentran en la sede del poder político, la Villa Capital y la resistencia lo hace en un territorio prácticamente incontrolado como Montiel. Los Comandantes Departamentales se constituyen en cabeza de la protesta por razones económicas y del conflicto político. Sus grados militares pertenecen a segundo rango –Capitán y Mayor- por lo cual cabe preguntarse por las redes profesionales que integran, los contactos con altos mandos, sus bases militares y niveles de obediencia, cuáles fueron las alternativas de la acción colectiva y las razones de la efectividad en consumir el objetivo político de deponer al gobernador. Según Beatriz Bosch, la revuelta por vaquerías habría derivado en el levantamiento que depuso al gobernador; si bien estos sucesos socavaron el gobierno de García de Zúñiga, es una conexión que merece comprobarse con mayor evidencia. Solo sabemos que Cóceres y Martínez eran militares del mismo Departamento subalterno 2º del I Principal, en el Tala; el primero fue

Capitán del Escuadrón de Milicias y el segundo, Capitán Comandante en 1822, ambos habían participado en la resistencia a la moneda papel de Buenos Aires, unos meses antes. Es decir que existe un vínculo profesional previo que se pondría en acto en estas oposiciones armadas por ellos lideradas.

Por otra parte, el gobernador López asocia a Fructuoso Rivera en las operaciones tendientes a influir en los acontecimientos. Ambos se encontraban en plena organización de la campaña para recuperar las Misiones Orientales ricas en ganado –en territorio de Río Grande del Sur-; este plan era alentado por el gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego, como una vía para definir exitosamente la guerra por medio de la lucha y no en los recintos de la diplomacia. La participación de Rivera en la campaña y como vocero de López en Paraná indica la integración a estas redes de un líder de una de las facciones orientales. Rivera había sido desplazado de los cuadros militares de la Provincia Oriental por acusaciones de insubordinación de parte de Juan Antonio Lavalleja y de complicidad con los imperiales; por ello intentaba recobrar poder en alianza con Santa Fe y Buenos Aires. (Halperín Donghi, T., 1989, pp. 254-255).

#### **VII.2.e. Un nudo histórico: de la violencia armada y la larga controversia política a la negociación y el consenso. 1830-1832.**

La resolución de la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil tuvo consecuencias de gran impacto en la región del Plata. Unitarios y federales dejaron el enfrentamiento discursivo en el recinto del Congreso General y lo expusieron en otro escenario, el campo de batalla. En las luchas armadas entre la Liga Federal y la Liga del Interior de signo unitario no estuvieron ausentes otros intereses más amplios. En efecto, los exiliados unitarios radicados en la República Oriental del Uruguay con el apoyo del Presidente Fructuoso Rivera quien, como recordamos tenía fuertes aspiraciones de expansión territorial sobre el Litoral, intervinieron con distintas modalidades para desestabilizar aún más la situación regional. Dentro de ese contexto convulsionado se sucedieron en Entre Ríos los alzamientos armados en contra de la autoridad provincial constituida, con importantes derivaciones en su política interior y en la correlación de fuerzas en el Río de la Plata.

Las elecciones de gobernadores de Pedro Barrenechea, Ricardo López Jordán, Pedro Espino, Toribio Ortiz y Pascual Echagüe se sucedieron entre noviembre de 1830 y marzo de 1832, en un contexto de creciente tensión, cruentas luchas y arduas negociaciones. Las mismas fueron analizadas ya en términos de mecanismos eleccionarios, cumplimiento de reglas estatutarias, bases de legitimidad, principio de consentimiento, derecho de rebelión, alternancias pactadas, etc.<sup>389</sup>

Este proceso denso y vertiginoso demostró la variedad de alianzas puestas en juego. En noviembre de 1830 la facción liderada por Ricardo López Jordán, que pedía la destitución de León Solas, contó con la adhesión de jefes militares de trayectoria como el Tnte. Cnel. Felipe Rodríguez –Comandante de Lucas y antiguo subalterno de Francisco Ramírez-, Eduardo Villagra –hacendado y Comandante de Gualeguaychú-, Justo José de Urquiza, Pedro Espino, Miguel Acevedo y Pedro Alzamendi. El grupo unitario radicado en Mercedes (ROU) les había proporcionado apoyo financiero, entre ellos Martiniano Chilavert, Francisco Pico, Salvador María del Carril. Mientras tanto en Colonia del Sacramento, Lavalle iniciaba aprestos bélicos para unirse a los insurgentes especulando con una victoria de López Jordán. Esta acción conjunta contra el gobierno constituido en Paraná provocó la intervención de Estanislao López y el empleo de una estrategia clave para el quiebre de la alianza invasora: captar exitosamente a Pedro Espino alimentando sus ambiciones personales. En la batalla de Puntas del Obispo, derrotó a López Jordán quien, con los Urquiza y parte de sus tropas, se refugió nuevamente en la República Oriental; otros de sus oficiales y soldados se dispersaron hacia el interior en la Selva de Montiel o marcharon hacia Corrientes. Semejante victoria de Espino le fue retribuida con ascenso de grado y un cargo militar que controlaba toda la estructura militar provincial. Las haciendas de campaña de López Jordán y los Urquiza fueron embargadas.

En marzo de 1831, se produjo otra invasión con vías simultáneas de penetración en distintos puntos del territorio provincial. Urquiza se desplazó desde Mandisoví al norte hacia la Villa del Uruguay. Luego López Jordán incursionó desde Paysandú con el mismo destino que Urquiza. Otras fuerzas se

---

<sup>389</sup> Análisis de estos procesos eleccionarios en Cap. IV, Apartado IV.b.2. Elecciones después del Estatuto.

concentraron en Villaguay al centro dirigidas por el jefe local Crispín Velásquez y por Felipe Rodríguez. El ingreso de las tropas de Juan Lavalle se produjo al sur, costa de Gualeguaychú. El ejército alistado en Entre Ríos, con Barrenechea y Espino en los puestos máximos de comando, contaba en caso de ser necesario con partidas armadas de Santa Fe y Buenos Aires, siendo un signo esto de que el reciente Pacto firmado estaba en absoluta vigencia. La correspondencia mantenida entre Rosas, López y su delegado Pedro Larrechea dan cuenta del seguimiento de los sucesos en Entre Ríos y de los aprestos militares con compañías de caballería y escuadrillas navales. (Barreto F., 1928, pp. 10-15). La protección de la estratégica Villa del Paraná estuvo a cargo de compañías santafesinas de infantería pertenecientes al Regimiento de Pardos y Morenos. Una sucesión de derrotas militares acabaron por rechazar definitivamente a las tropas invasoras. La de la Batalla de Puntas del Clé fue clave para desarticular el plan de López Jordán, Lavalle y los jefes militares aliados. El 22 de marzo se firmó el convenio de Arroyo del Ceibo entre Espino y representantes de Lavalle que puso fin al conflicto, con la garantía de la provincia de Corrientes en función de sus compromisos formales celebrados en 1830 con las signatarias del Pacto Federal.<sup>390</sup> (Bosch, B., 1978, pp. 117-123; Teijeiro Martínez B., 1910, Cap. VIII, Barreto F., 1928, pp. 13-14).

Luego de la derrota, Justo J. de Urquiza se refugió en Nogoyá. Según las Memorias del Deán Juan José Álvarez, el Presbitero del pueblo José Leonardo Acevedo le habría prestado ayuda canalizando un pedido de indulto a Estanislao López a cambio de una entrega voluntaria de Urquiza, afirmaciones de Álvarez que repite el historiador Teijeiro Martínez pero que no han podido ser confirmadas con otras evidencias. La prisión de Urquiza en Santa Fe fue, en realidad, una instancia de diálogo con el caudillo santafesino que tuvo sus derivaciones prácticamente inmediatas tanto en la resolución del conflicto como en la política interior entrerriana y su proyección regional. En oficio del 16 de enero de 1832, Estanislao López avisó del suceso al gobernador Juan Manuel de Rosas:

Aquí lo tengo a Don Justo Urquiza en clase de detenido y se manifiesta conforme con todo. He hablado largamente con él, después de haberle inspirado

---

<sup>390</sup> RLDAPER, T. III, pp. 192-225, 259-300.



la mayor confianza para que se explicase con franqueza sobre el origen del movimiento de Don Ricardo de acuerdo con Lavalle, en combinación con Rivera, trataba de pasar al Entre Ríos con doscientos hombres, con pretexto de la deposición de Solas; para cruzar este plan se convinieron en anticiparse a darles ellos el golpe; efectivamente, activaron todas las medidas y consiguieron el objeto; más cuando se preparaban a completar su obra dando con Lavalle como lo habían convenido, les ganó de mano Espino haciéndoles la contra revolución, que no les dejó más lugar que para seguir a protegerse de la misma fuerza, que sin esta circunstancia hubiesen destruido. De este modo tuvo ya que aparecer ligado con Lavalle para poderse vengar de la felonía de Espino. En este sentido seguía trabajando cuando Don Mateo García le mostró una carta suya en que le decía que lo viese a Urquiza para que se separase y desde aquel momento lo verificó, retirándose al Estado Oriental, donde ha permanecido, hasta que se trató de destruir las aspiraciones de Espino, quien lo solicitó para que lo ayudase, y vino en efecto; pero con un fin muy contrario; pues luego que se le ocasionó la dislocación y fuga de las Puntas del Obispo... Después de esto se vino a Nogoyá, desde donde pasó a ésta y se conserva, como ya he dicho antes. A mi modo de ver el mozo es ingenuo y de un carácter franco, y por lo mismo mantengo solamente detenido hasta que se haya nombrado Gobierno en Entre Ríos, que entonces le permitiré volver a su casa, si usted no tiene reparo en esto. (Bosch, B. 1984, pp. 19-20).

Después de las distintas alternativas, que hemos analizado tanto en los procesos eleccionarios como en el campo militar, se llegó a un acuerdo que llevó a Pascual Echagüe al gobierno de Entre Ríos. Como bien afirma José Carlos Chiaramonte, en esa instancia las partes en pugna tuvieron que resignar pretensiones. La alianza que impulsaba Rosas en el Litoral solo se podía consolidar con una concesión de mayor autonomía a la provincia mientras que la facción que había originado los levantamientos armados consiguió lugares de privilegio y poder real otorgados por el nuevo gobernador con la condición tácita de poner distancia de sus apoyos unitarios. En efecto, en reconocimiento a su liderazgo, Justo José de Urquiza fue designado como Comandante del Departamento II Principal controlando los hombres y tierras de la franja oriental donde se había gestado y desarrollado la resistencia política en toda la década del '20; fue ésta una base de poder local desde donde proyectó su carrera política de manera ascendente hasta llegar a Presidente de la llamada "Confederación Argentina". La incorporación de Cipriano de Urquiza fue parte de esta estrategia de Echagüe: fue designado Secretario de Gobierno, Comandante sustituto, más tarde Jefe de Policía y gobernador interino. Los bienes de Justo y Cipriano ya habían sido desembargados. El control de la Selva de Montiel también fue de importancia, por lo cual mantuvo a Crispín Velásquez en la comandancia de Villaguay –un jefe militar muy allegado a los Urquiza-. Estas importantes concesiones en el nuevo mapa del poder y de la administración se

complementaron con medidas económicas patrocinadas por Echagüe y que beneficiaron al comercio del Alto Uruguay, a los negocios e industrias de la zona, en particular la del saladero. Las designaciones de Pedro Barrenecha como Comandante del Departamento I Principal y de Toribio Ortiz como Ministro de todos los ramos ajustaron su alineamiento con López.<sup>391</sup> (Chiaramonte J.C. 1986b, pp. 193-194; Schmit R., 2004, p. 169)

Este acuerdo desplazó por mucho tiempo de la escena política a antiguos jefes como Solas y Hereñú –refugiados y aislados en sus estancias-, López Jordán y Espino –exiliados en pueblos orientales-; al final de los ´30, algunos intentarán rearmarse contra la autoridad de Echagüe en alianza con la facción unitaria que continuaba apañada en la República Oriental del Uruguay con distinto éxito. (Capdevila J.D. y Bourlot R. en 2007 en Bascourleguy G. (Coord.), pp. 102-104, 145-146)

En esa larga oposición entre los grupos de Paraná y el Uruguay, la cuestión se resolvió con la intervención política de la alianza confederal, triunfante en su enfrentamiento con la Liga Unitaria. En esta coyuntura, se generó un nuevo equilibrio en el Río de la Plata sostenido por un trípode de bases desiguales: Juan Manuel de Rosas, Estanislao López y el caudillo de La Rioja, Facundo Quiroga. Consideramos que la salida al largo conflicto en Entre Ríos fue viable por la fortaleza de las provincias coaligadas, quizás sin ese compromiso ofensivo – defensivo otro hubiera sido el resultado de las armas y otros los destinos de los liderazgos en la región. En ese marco, el bienio 1830-1832 se convierte en bisagra del proceso de construcción estatal entrerriana. Luego de años de disputas internas entre ambos grupos, el acuerdo político al que se arriba permite reconducir a esa sociedad hacia una cierta estabilidad y nuevo posicionamiento en el sistema confederal recientemente inaugurado. Se alcanza el consenso unido al principio de consentimiento no solo de los sectores tradicionalmente levantiscos sino de aquellos otros que percibieron que la paz era la primera necesidad del Estado, declamada en 1824 por Solas ante el Congreso y que en esta coyuntura reunía condiciones de posibilidad.

---

<sup>391</sup> RLDAPER, T. III, pp. 387-403.

## **Cap. VIII. LAS FINANZAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN POLÍTICA.**

Ciertos balances historiográficos sobre los procesos económicos y fiscales en el marco de la formación del Estado en Hispanoamérica hacen notar que, pese a la creciente producción sobre ese tema, aún son insuficientes las investigaciones de casos y más aún los trabajos de síntesis general que permitan conocer con más profundidad el impacto económico de las Independencias en esos procesos y sus variaciones regionales (Gelman J. (Comp.), 2006; Bandieri S. (comp.), 2010; Silva H. (Dir.), 2010; Prados de la Escosura L., 2009, Kacef O., Gerchunoff P. (Comps.), 2011). Dentro de ese consenso general sobre la necesidad de atender a esa insuficiencia de conocimiento en nuestras agendas de investigación, el estudio de la dimensión fiscal cobra sentido por su aporte a la explicación histórica del surgimiento y afirmación de los Estados provinciales en formación en el Río de la Plata, primera mitad del siglo XIX. Para estimar la calidad de esos Estados es indispensable evaluar el grado de ejercicio de las finanzas públicas como prerrogativa, lo que intentaremos realizar en la experiencia entrerriana. (Chiaramonte, 1993: pp. 116-117).

El Estado es origen de las normas que ordenan y reglan las relaciones sociales y económicas y en las que las preocupaciones fiscales constituyen uno de sus principales motores, pero también es importante su análisis dado que ese Estado que ordena y norma tiene un lugar en esa economía, tal como nos advierte Tulio Halperin Donghi en su célebre estudio sobre las guerras y las finanzas en los orígenes del Estado argentino (Halperin Donghi, T. 1982: pp. 9-10). Así, las finanzas públicas nos proporcionan un punto de vista desde el cual observar y analizar las transformaciones económicas post independientes relacionadas con las nuevas pautas de organización política, en las que juegan tanto los intereses locales como los regionales.

En este Capítulo intentamos una caracterización general del patrón fiscal, analizando la legislación, la política y las prácticas fiscales, las rentas públicas entrerrianas entre 1822 y 1832. Las normas y acciones políticas ligadas a la fiscalidad son elementos que intervienen en la configuración, ejercicio y

consolidación de la jurisdicción y que aspiran a satisfacer las necesidades materiales del nuevo estado. En este desarrollo tendremos en cuenta algunos cambios y continuidades con respecto a otros antecedentes administrativos, el grado de formalización institucional, los mecanismos organizativos en algunas prácticas localizadas, el análisis de las rentas fiscales por rubros y cantidades, aproximándonos al conocimiento de la dinámica fiscal no despegada de la estructura institucional que la sostiene y del contexto interno y externo, profundamente militarizado y con conflictos desatados o latentes. En este sentido, resaltamos nuestro principal interés por otra faceta de la fiscalidad cual es la de su relación con la estabilidad e inestabilidad política y su expresión en los estados superavitarios o deficitarios del fisco provincial, aspecto del análisis estrechamente ligado a lo expuesto en el Capítulo anterior.

La investigación de José Carlos Chiaramonte sobre las finanzas públicas del Litoral dedica una parte muy importante del análisis al rubro Deuda Pública de Entre Ríos, sobre la base de Estados Generales de Deuda. Roberto Schmit ha investigado con profundidad la sociedad, la economía y el poder en el Oriente entrerriano contribuyendo al tratamiento de las finanzas públicas de esa región entre 1830 y 1851 (Chiaramonte J.C. 1986; Schmit R. 2004). Atendiendo a ese tratamiento parcial de Chiaramonte y Schmit en cuanto a rubro, jurisdicción y período respectivamente, tratamos de cubrir una vacancia de conocimiento en la fiscalidad entrerriana -observada también en la historiografía tradicional que estudia a Entre Ríos-, con la reconstrucción y examen de estados contables periódicos. En tal sentido, presentamos una información sistematizada con representación gráfica y construimos conocimiento general sobre las finanzas de toda la provincia en el decenio mencionado.<sup>392</sup>

A fin de poder arribar a una mejor evaluación, realizamos una serie de comparaciones con otras experiencias fiscales contemporáneas de Estados provinciales rioplatenses en formación; su resultado se plasma en el punto VIII. B de este Capítulo. Ésta es una línea de investigación en perspectiva comparada que pretendemos profundizar en el futuro. Para realizar estos ejercicios comparativos hemos considerado algunas investigaciones realizadas sobre la

---

<sup>392</sup> Descripción de fondos documentales utilizados, en Anexo Final.

Provincia Oriental entre 1825-1828, sobre Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires para el lapso 1820 a 1852, de manera discontinua<sup>393</sup>; si bien se excede el período impuesto en esta investigación, esto permite conocer tanto las vicisitudes como la tendencia general de los números públicos en tiempos de construcción estatal provincial. En qué se fundamenta la elección de estos cinco ejemplos? Los mismos remiten a distintas experiencias político-sociales en el concierto rioplatense que comparten el mismo pasado colonial, con semejanzas y particularidades respecto a la organización política, los recursos materiales, las relaciones de poder interiores y exteriores, entre otros aspectos. De los cinco casos, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires importan especialmente dada la vinculación estrecha que gobiernos y sectores socio-económicos mantuvieron con Entre Ríos.

#### **VIII. 1. La trama fiscal en Entre Ríos: legislación, organización y prácticas.**

Desde la época colonial temprana, el sistema fiscal establecido en la América española instaló Cajas Reales principales en cada Virreinato, Audiencia o Capitanía General, que eran responsables de una serie de Cajas menores subordinadas. Promediando el siglo XVII y en el marco de esta organización administrativa, se implementó un mecanismo de sostén financiero denominado Situado, desde la Caja Real de Potosí –centro minero por excelencia en el Alto Perú- a la Caja de Buenos Aires; a través de él se enviaban remesas periódicas de pesos fuertes para afrontar los gastos de administración y defensa de la estratégica frontera sur imperial. A fines del siglo XVIII, instalado ya el Virreinato del Río de la Plata, más del 70% de las entradas de la Caja de Buenos Aires eran transferencias de la Real Hacienda de Potosí; ese metálico era derivado en parte a las debilitadas Tesorerías de las otras ciudades virreinales del Litoral y el Interior, para cubrir sus déficits. Luego del estallido revolucionario de 1810, el Alto Perú fue ocupado por los realistas y entró en un largo período de rebeliones, situación que interrumpió definitivamente el auxilio del Situado a la Caja porteña. Ante tamaña desarticulación financiera, tanto los gobiernos centrales como los Cabildos rioplatenses tuvieron que reorganizar la administración de sus finanzas

---

<sup>393</sup> Cf. “Un recorrido por otras experiencias fiscales rioplatenses del período”, en el Anexo Final.

y buscar otras fuentes de ingresos para cubrir, sobre todo, los gastos de las guerras.<sup>394</sup> Luego de 1820, los Estados provinciales en formación plantearon sus propias bases de reestructuración fiscal entre herencias coloniales y adecuaciones administrativas y rentísticas propias de gobiernos con rasgos republicanos en contextos generalmente conflictivos. Estas bases, en general, no contenían los principios fiscales de corte liberal que se habían establecido en la Constitución de Cádiz de 1812, de la que sí se habían tomado principios políticos tal como lo planteamos en los Capítulos III y IV. Esos principios fiscales sostenían, resumidamente, la legalidad de las cuentas públicas mediante la obligación de Presupuestos auditados y aprobados, el equilibrio fiscal, la generalidad tributaria por la cual se terminaban los privilegios y excepciones estamentales, y la proporcionalidad en las contribuciones según los ingresos.<sup>395</sup>

Como ya hemos señalado, el manejo de las finanzas públicas constituyó una de las prerrogativas inherentes a la condición de soberanía que se adjudicaban esos Estados a través de sus Constituciones. En el Estatuto Provisorio de 1822, sancionado en Entre Ríos, se realizaron distintas menciones en materia fiscal. Las atribuciones estatutarias otorgadas al Congreso consistían en legislar en materia económica, establecer derechos, imponer contribuciones temporales, pedir y recibir empréstitos sobre los fondos provinciales, solicitar estados y demás noticias referidas a rentas provinciales, crear y suprimir empleos, fijar sueldos, reglamentar sobre comercio interior y exterior, sobre pesas y medidas, teniendo la importante función de evaluar las cuentas generales del gobernador saliente.<sup>396</sup> El gobernador, por su parte, podía

---

394 Milletich, Vilma "El Río de la Plata en la economía colonial", en Tandeter, E. (Dir. Tomo) T. II, pp. 221-225. Esta transición de las finanzas públicas entre la colonia y la independencia, con especial énfasis en el papel del Situado puede observarse en el estudio de Samuel Amaral "Seguridad monárquica, inseguridad republicana: la modernización de las finanzas públicas en Buenos Aires, 1790-1821" en González Bernaldo de Quirós, P. (Dir.), 2015, 4ta. Parte, Cap. IX.

395 Francisco Comin, Daniel Díaz Fuentes, "La evolución de la hacienda pública en Argentina, España y México, 1820 -1940", ponencia XIV International Economic History Congress, Finlandia, 21al 25/8/2006). Acceso: <http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers2/Comin.pdf> (Consulta 30/4/2015). Constitución política de la Monarquía española, Cádiz, Imp. Real, 1812, Tít. VII, Cap. Único, De las contribuciones, pp. 112-117. Acceso: <http://bibrepo.uca.es:81/fondoantiguo/26031036/26031036.pdf> (Consulta 30/4/2015).

396 Durante la vigencia del Congreso General Constituyente en Buenos Aires de 1824, el Congreso Provincial entrerriano defendió la clase de gobierno federal que reuniera a las provincias rioplatenses, admitiendo un Congreso General para adelantamiento de la sociedad que diera leyes generales y eligiera a un Jefe de Gobierno, pero dejaba bien en claro que no tendría incumbencia en lo económico, quedando facultadas las Juntas o Congresos provinciales

proponer proyectos, medidas y reformas fiscales, inspeccionar el ramo de Hacienda y solicitar los debidos informes al Ministro. Los requisitos estatutarios de ciudadanía, retomando legislación anterior dictada por los gobiernos centrales, tenían en cuenta la situación de la persona con respecto al erario: si era deudor del fisco perdía la condición de ciudadano. Es de notar que tanto la estructura administrativa fiscal como algunos rasgos funcionales y disposiciones arancelarias reconocen antecedentes coloniales sin dejar de mencionar que el Reglamento de la República de Entre Ríos de 1820 tuvo también su incidencia.<sup>397</sup> En cuanto a la organización de las oficinas y dependencias, la Tesorería se localizaba en Paraná y las Receptorías fiscales desde 1824 en: Villa del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Tala, Victoria, Alcaraz, Mandisoví. Entre 1830 y 1835 se crearon otras dos: Feliciano y Concordia. (Urquiza Almandoz O., 1978: pp. 41, 326-327; Chiaramonte J.C., 1986: p. 181).<sup>398</sup>

#### **VIII.1.a. La estructura fiscal: planta de empleados y mecanismos de funcionamiento.**

La estructura fiscal estaba jerarquizada en rangos y funciones. Los funcionarios del Ministerio de Hacienda tenían distinto grado de responsabilidad y tipo de tarea: un Ministro General de Hacienda o un Ministro Tesorero o un Ministro Contador según las épocas, Oficiales subalternos, Inspectores y recaudadores de impuestos, Administradores en las Receptorías de pueblos, campaña y costa con sus respectivos Contadores y Oficiales de Tesorería más Comandante de la Aduana del Resguardo con sus dependientes. Las principales dependencias del Ministerio, ramificadas en las jurisdicciones departamentales,

---

para entender en este tema; defensa de una atribución que ya tenía estatutariamente el Congreso entrerriano y que implicaba dar los marcos legales para su desenvolvimiento, disponer de los resortes legislativos para la importante materia económica. En RLADPER, T. II, Exposición, 23/1/26. Pp. 110-112.

<sup>397</sup> Reglamento para el orden de sus Departamentos de la República Entrerriana y el orden militar, Corrientes, 29 de setiembre de 1820.

<sup>398</sup> RLDAPER, T. II, pp. 17, 130, 154, 181, 196.

mantenían una red de información por correspondencia sostenida por medio de los caminos de Posta internos, reorganizados en 1823.<sup>399</sup>

Los Ministros que se desempeñaron entre 1822 y 1832 fueron Celedonio José del Castillo y su hijo Vicente además de Casiano Calderón y Juan Garrigó, vecinos notables que junto con otros rotaban en el desempeño no solo de cargos administrativos sino también, como ya vimos, de representación política. De alguna manera iban construyendo conocimientos y experiencia al servicio de administraciones siempre escasas de personas idóneas para los funcionarios de segunda clase; recordemos que en 1826 esta situación de escasez obligó a flexibilizar las restricciones impuestas a los ciudadanos naturalizados para cubrir puestos públicos.

Algunos mecanismos de funcionamiento del área ministerial estaban animados por principios de racionalidad administrativa lo que habría coadyuvado a la progresiva elaboración de procedimientos formales, sujetos a normas y al cuidado con que debía tratarse la importante cuestión del financiamiento estatal. No afirmamos con esto que sus resultados fueron óptimos, teniendo en cuenta las dificultades de aplicación en una sociedad conflictiva y militarizada, sino que al menos fueron mejorando la situación. Consideraremos algunos pocos ejemplos. La Tesorería y demás dependencias estuvieron sujetas a un control periódico basado en un interés por coordinar, capacitar y controlar a fin de perfeccionar los métodos y procedimientos, persiguiendo efectos político-administrativos más eficaces y mayor orden fiscal. En efecto, para vigilar mejor la organización y funcionamiento rentístico, se ordenó un plan de visitas formales a la Tesorería, convocándose a una Comisión de Diputados para asociarse a estas inspecciones del Gobierno, formada generalmente por el Presidente y el Vicepresidente del Congreso provincial. A su vez el Ministro y Contador del área

---

<sup>399</sup> Esta modalidad de comunicación no solo era practicada por los funcionarios de la Hacienda pública sino que estaba extendida al resto de la trama del funcionariado provincial. AGPER, Gobierno Serie I 1788-1869, Correspondencia entre Comandancias Carps. 2 a 17 1822-1829. Gobierno Serie IX, Libros Toma razón de despachos, patentes y providencias militares, civiles y políticas 1824 – 1830. Hacienda Serie I, Carpeta 13, Leg. 9, RLDAPER, T. I, pp. 109-110, 175-177, 236-239, 388, 435-436; Relación de Postas, 1823, p. 242-245. T. II, pp. 32-33, 69.



cumplía con visitas a las receptorías y cajas menores, rindiendo informes sobre el estado de las cuentas.<sup>400</sup>

En el caso de renuncia del Ministro Tesorero, el Congreso le pedía una rendición de cuentas; en 1827, la rendición presentada por el renunciante Celedonio del Castillo fue acompañada de un pliego de reparos y objeciones por el propio Gobierno pero el Congreso afirmó que la mayor parte de lo planteado en el pliego era erróneo y que correspondía en cambio un reconocimiento por los servicios prestados por del Castillo (Urquiza Almandoz O., 1978: pp. 408-409). Ante la necesidad de hacer evaluaciones sobre el estado del equilibrio fiscal, el Congreso Provincial exigió al gobernador y Ministros la presentación de reportes actualizados de derechos, tasas y contribuciones al Estado, detalle de sueldos y asignaciones extraordinarias a pagar con sus planillas nominales.<sup>401</sup> Los padrones de casas de comercio y de industria con registro de su giro anual, fueron solicitados tanto en Paraná como en los distintos pueblos del interior a partir de 1822. Estos documentos pretendían establecer con justeza los impuestos aplicados a almacenes, tiendas, pulperías, curtiembres, jabonerías y hornos de cal y ladrillo, entre otros establecimientos.<sup>402</sup>

Desde enero de 1823 se estableció la entrega sistematizada de los Estados contables de los Administradores subalternos de pueblos a la Tesorería por trimestres, reemplazando las entregas mensuales pero manteniéndose la obligación de una planilla general a fin de año, con detalles de recaudación y

---

<sup>400</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 13, Leg. 9. Mensaje del Gobernador al Honorable Congreso: "Entre las verdades de que me ha convencido el manejo de la Provincia en los siete meses que la presido, es una bien sensible de que sus rentas, en el modo que se administran, padecen inevitablemente unos quebrantos considerables, por la falta de manos auxiliares de los empleados necesarios, y del método y reglamentación que no hay en su administración. Para ocurrir a estos males y tomar conocimiento exacto del estado de la Tesorería, haciendo en ella los arreglos y provisiones que demande su mejor orden, he dispuesto con esta fecha que el Sr. Ministro Secretario de Hacienda practique una visita formal de dicha Tesorería, en que el Tesorero rinda cuentas de la administración y presente un Estado general de todos los ramos de ella, con todos los documentos y justificativos arreglados de suerte que al proveerse las plazas que se necesiten, se pueda arreglar con acierto y método de cada uno, y un orden sencillo y seguro de administración para en adelante. Y a fin de que el Congreso tome en este delicado negocio un conocimiento inmediato, sobre que poder sucesivamente expedirse en las Resoluciones que demanden su aprobación, he acordado igualmente proponer a V.H. se nombre por su parte una Comisión, que se asocie en la visita al referido Sr. Secretario en todos los ramos que ella comprende, con cuyo arbitrio se procederá también con la brevedad que interesa...." Paraná, 4/6/22, Mansilla. Pp. 175-177.

<sup>401</sup> AGPER, Hacienda Series I, II, III, Carpetas 5 y 10. RLDAPER, T. I, pp. 82, 106-107.

<sup>402</sup> RLDAPER, T. I, pp. 78-79.

distribución por clases de impuestos; las evidencias halladas indican que esta sistematización, aún con unos pocos vacíos de información, fue cumplida. Luego el registro por Tesorería y Cajas menores se fue unificando en Libros Mayores, alternando o complementándose entre 1824 y 1832 con algunos estados mensuales, trimestrales, cuatrimestrales y anuales.<sup>403</sup>

### **VIII. 1.b. El sistema financiero provincial: Ingresos y gastos.**

#### *Las fuentes.*

Las posibilidades de explicación que proporcionan las finanzas públicas de la época están en directa relación con su estado documental, esto es si presentan un cuerpo coherente y completo, si existen series homogéneas o no, si hay registros simultáneos pero con distinto criterio, etcétera. Las razones pueden variar según las particularidades de las regiones históricas y la naturaleza del sistema político que administra. El registro contable era elemental y correspondía al sistema de partida simple, con asientos de entradas o salidas de dinero. Los libros principales de la contabilidad de la época eran: Libro Borrador, Libro Manual o Diario, Libro Mayor. De acuerdo a nuestra propia experiencia de investigación y a otros estudios sobre finanzas públicas provinciales, es posible que haya dos vías de registro fiscal -una oficial y otra paralela no contabilizada-, que existan gastos absorbidos por las Cajas menores sin aparecer en los Estados o Libros de la Tesorería General y que los ingresos y gastos asentados bajo un rubro correspondan a otros. Si seguimos la información asentada en la Recopilación Oficial de Leyes, Acuerdos y Decretos de Entre Ríos, por ejemplo sobre la Deuda pública, obtendremos las cifras solicitadas y acordadas por las autoridades provinciales, pero no constituyen todos los préstamos y por otro lado, el seguimiento de las remesas percibidas y de los cumplimientos de los plazos de entrega presenta sus dificultades por la dispersión documental. Ya se ha advertido en otras investigaciones sobre las

---

<sup>403</sup> RLDAPER, T. I, Mensaje del Gobernador Mansilla 1822, pp. 175-177, 236-239; T. II, Ley del 26 de agosto de 1826, pp. 184-185. AGPER, Hacienda Serie I y II A, Cajas de Paraná y del Uruguay, Carpetas de cuentas fiscales entre 1822 y 1831; desde 1832 y hasta 1838, en que relevamos información contable para una futura investigación, utilizamos exclusivamente Libros Mayores. En Hacienda Serie I se localizan estados anuales de 1822 a 1826, 1829, 1830, 1832.

cuentas fiscales del Litoral que el cómputo de empréstitos registrados oficialmente no presentaba total correspondencia con la deuda real. El hallazgo de expedientes sueltos pertenecientes a Contaduría de Entre Ríos permitió localizar referencias a préstamos o deudas de pago a empleados que no estaban asentados en dicha Recopilación, sobre algunos de los cuales hacemos referencia de manera ilustrativa (Chiaramonte J.C., 1986, p. 181; Chiaramonte J.C., Cussianovich E., Tedeschi S., 1993, pp. 79-80). De todos modos, para la caracterización general propuesta en este Capítulo, la reconstrucción realizada según los estados contables de las Series I y II A de Hacienda (AGPER), nos parece una base suficiente. Se utilizaron básicamente los Libros Mayores encuadernados y foliados pero ante la falta de éstos para algunos años utilizamos estados mensuales, trimestrales y cuatrimestrales y Libros Manuales de Receptoría complementarios. A fin de realizar algunas verificaciones de rubros se consultaron los Libros Mayores de Aduana, Libros de Caja, Copiadores de comprobantes de Cargo (ingresos o entradas) y Data (egresos o salidas)<sup>404</sup>, balances generales.

Por otra parte, destacamos la falta de planillas de Presupuesto para la década. ¿Qué importancia tienen los Presupuestos anuales o parciales para este tipo de estudios? Son instrumentos de política y negociación, permiten evaluar los arreglos institucionales en la política de gasto e inversión, hacer proyecciones sobre el comportamiento del fisco provincial además de efectuar contrastes entre lo presupuestado y las cuentas efectivas de Ingresos y Egresos. Solo en 1826 aparece un pedido de Presupuesto del Congreso al gobernador pero no hay indicios de su presentación o tratamiento.<sup>405</sup>

El análisis de las cuentas fiscales entre 1822 y 1832, se centrará, en particular, sobre las dos Cajas principales de Paraná y de Uruguay, debido a su peso sustancial en la conformación de las finanzas públicas entrerrianas como se observa en el Cuadro siguiente:

---

<sup>404</sup> Según José Canga Argüelles, los comprobantes de Cargo (ingresos o entradas) y Data (egresos o salidas) -como primeros documentos de contabilidad-, justificaban la entrada de dinero y los pagos por parte del erario. Canga Argüelles J.1968, T. I, p. 255. En este Capítulo preferimos consignarlos como Ingresos o Egresos.

<sup>405</sup> AGPER, Libro 1 Bis del Congreso de Entre Ríos, f. 37. RLDAPER T. II, pp. 102-103.

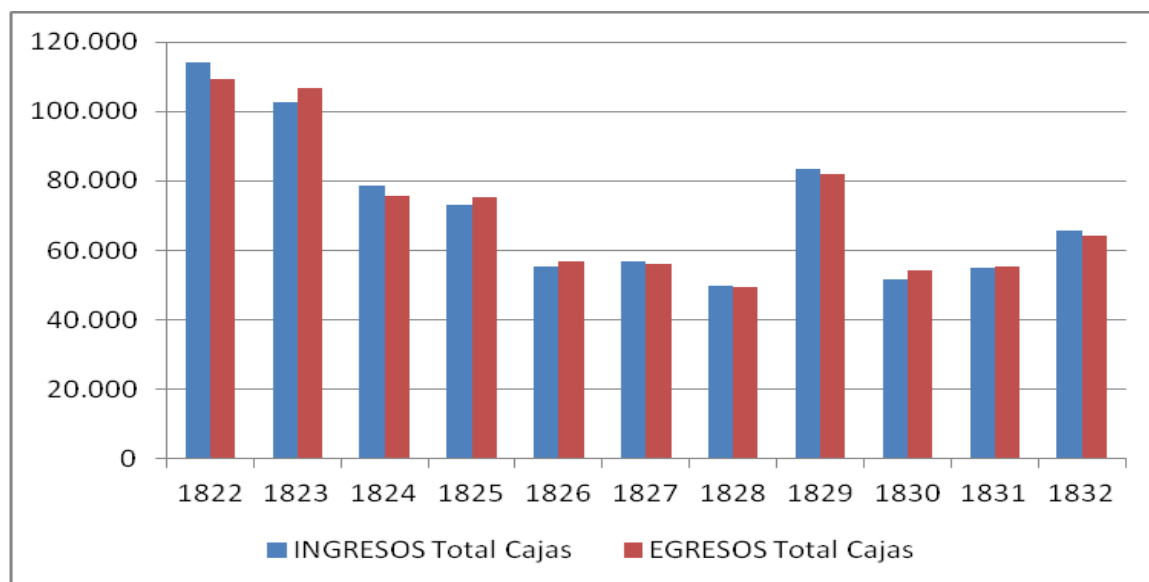
**Cuadro I. ENTRE RÍOS. INGRESOS y EGRESOS anuales. Total de Cajas con relaciones porcentuales de las dos Cajas principales: Paraná y Uruguay. 1822 – 1832.** <sup>406</sup> (En pesos fuertes).

AÑOS	CAJAS	INGRESOS	%	EGRESOS	%	Superávit	Déficit
1822	Total Cajas	114.220		109.395		4.825	
	Paraná-Uruguay	100.985	88	92.280	84		
	Diferencia	13.235		17.115			
1823	Total Cajas	102.718		106.817			4.099
	Paraná-Uruguay	97.287	95	95.024	89		
	Diferencia	5.431		11.793			
1824	Total Cajas	78.767		75.798		2.769	
	Paraná-Uruguay	72.164	92	68.230	90		
	Diferencia	6.603		7.568			
1825	Total Cajas	73.126		75.205			2.079
	Paraná-Uruguay	64.173	88	61.829	82		
	Diferencia	8.953		13.376			
1826	Total Cajas	55.476		56.777			1.301
	Paraná-Uruguay	54.079	97	47.508	82		
	Diferencia	1.397		9.269			
1827	Total Cajas	56.694		55.983		711	
	Paraná-Uruguay	47.182	83	46.756	83		
	Diferencia	9.512		9.227			
1828	Total Cajas	49.955		49.534		421	
	Paraná-Uruguay	41.291	83	41.079	83		
	Diferencia	8.664		8.455			
1829	Total Cajas	83.502		81.970		1.532	
	Paraná-Uruguay	67.723	81	67.374	82		
	Diferencia	15.779		14.596			
1830	Total Cajas	51.657		54.227			2.570
	Paraná-Uruguay	44.347	86	44.262	82		
	Diferencia	7.310		9.965			
1831	Total Cajas	54.962		55.479			517
	Paraná-Uruguay	45.600	83	45.264	82		
	Diferencia	9.362		10.215			
1832	Total Cajas	65.870		64.051		1.819	
	Paraná-Uruguay	49.780	76	49.082	77		
	Diferencia	16.090		14.969			

<sup>406</sup> Ingresos y Gastos: se asientan en la contabilidad como Cargo y Data respectivamente. Fuentes: Totales de Cajas en Chiaramonte J.C. 1986, p. 189. Totales de las Cajas principales elaborados en base a Cuadros A y A Bis. Las fuentes documentales utilizadas para la elaboración de todos los Cuadros y Gráficos de este Capítulo se encuentran detalladas en el Anexo Final.

En el Cuadro I se puede observar que la suma de ambas Cajas para cada uno de los años representa un alto porcentaje sobre el conjunto de las cuentas provinciales, correspondiendo las diferencias a las cajas menores o subalternas que manejan cifras ínfimas.<sup>407</sup> Todos los valores de los cuadros y aquellos que se mencionan en este Capítulo están expresados en pesos fuertes: 1 peso igual a 8 reales. Entre 1822 y 1831, los ingresos significan entre un 81 % y un 97 %; en cuanto a los egresos, entre un 82 % y un 90%. En 1832, esos porcentajes disminuyen siendo un 76% sobre los primeros y un 77% sobre los segundos lo que se corresponde con la mayor gravitación de la Caja subalterna de Concordia -sobre el río Uruguay-, en consecuencia con el incremento del tráfico comercial portuario, con bienes de importación del Brasil (yerba mate, tabaco, azúcar) y de ultramar. (Schmit, R., 2004, p. 209). Se aprecia la importancia de la Caja de Paraná respecto de la del Uruguay. Recordemos que Paraná era la sede de las autoridades políticas, del Ministerio de Hacienda y la Tesorería General, la que recibía y contabilizaba por ejemplo sumas prestadas por otras provincias en esa Caja.

**Gráfico No. 1. Entre Ríos. Totales Ingresos y Egresos de todas las Cajas. 1822-1832.**



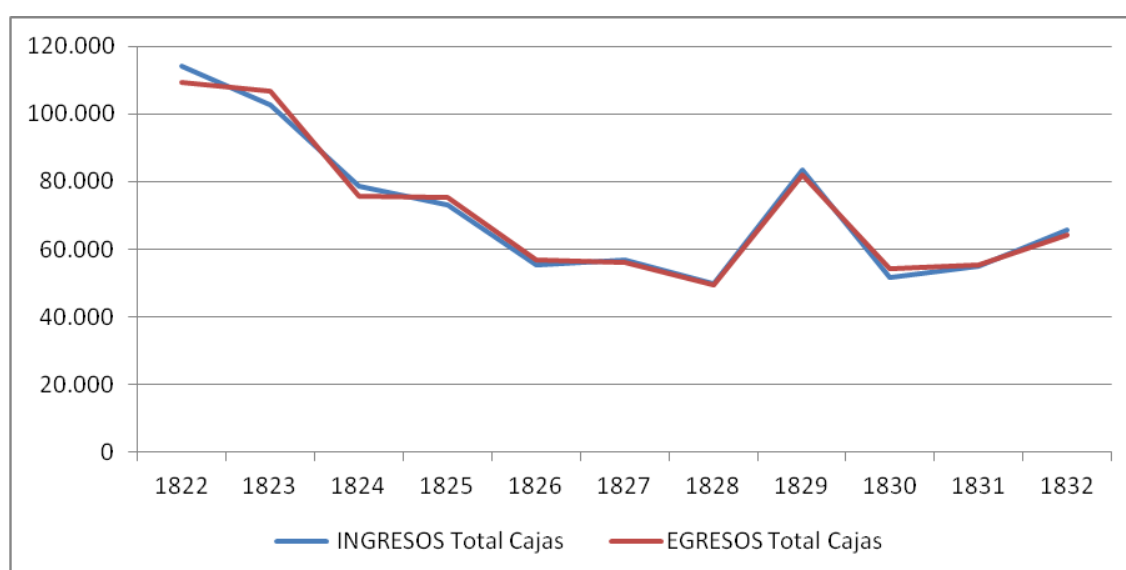
Años superavitarios: 1822, 1824, 1827, 1828, 1829, 1832.

Años deficitarios: 1823, 1825, 1826, 1830, 1831.

<sup>407</sup> Por ejemplo, la Caja de Victoria –antiguo pueblo de Matanza–: sus ingresos y egresos 1822-1830 oscilan entre 700 y 2.000 pesos. AGPER, Hacienda Serie II, Subserie F, Carpetas 1 a 4, 1822-1832.

Los años deficitarios coinciden con rebeliones internas, con el desarrollo de la guerra contra el Brasil y con los levantamientos facciosos de principios de la década de 1830. Los años 1828 y 1829, con similar contexto, muestran un escaso saldo favorable, prácticamente al borde del déficit. En el Gráfico No. 2, se visualizan mejor las fluctuaciones de ingresos y egresos de todas las Cajas comprobándose una correspondencia prácticamente total, sin superávits o déficits excesivamente marcados. En el Gráfico No. 3 se representa claramente el peso de las dos Cajas principales por sobre el total de las Cajas.

**Gráfico No. 2. Entre Ríos. Totales Ingresos y Egresos de todas las Cajas. 1822-1832.**



**Gráfico No. 3. Entre Ríos. Ingresos y Egresos de todas las Cajas de la Provincia y participación de las dos Cajas principales: Paraná y Uruguay. 1822-1832.**

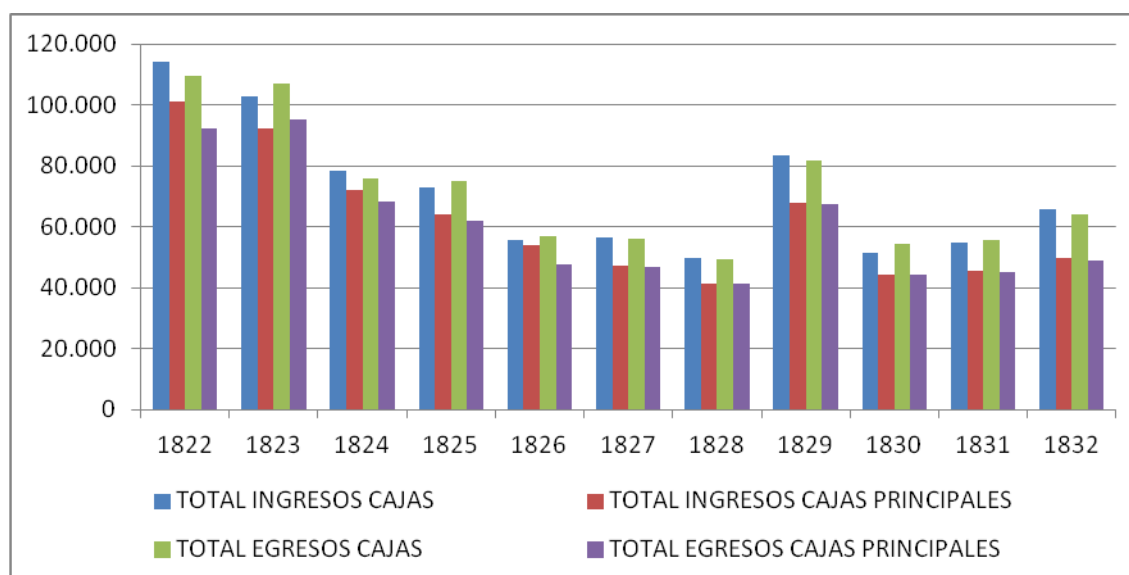


Gráfico realizado en base a Cuadros A y A Bis, en Anexo Final

En los 11 años estudiados, la suma de las dos Cajas siempre dio superávit. En cambio, la observación por separado muestra que la Caja de Paraná presentó superávits en 8 de ellos; fue deficitaria en el año 1824 y por escaso margen en 1828, estando al borde en 1827 y 1830. La Caja del Uruguay presenta saldo positivo en 9 años, siendo negativo en 1825 y apenas evita el déficit en 1829 y 1830.

En los apartados siguientes tratamos sobre los rubros más importantes que componen los ingresos y egresos fiscales y algunas variaciones de la política fiscal. Por medio de la representación gráfica y cálculos porcentuales observamos y analizamos los que consideramos de mayor peso: 1) aduana, préstamos y suplementos y depósitos, y su incidencia en los Ingresos de cada año de la serie temporal estudiada; 2) gastos militares, sueldos civiles, políticos y de hacienda, pago a prestamistas, y su incidencia en los Egresos de cada año.

#### **VIII.1.b.1. Los ingresos.**

Las arcas fiscales entrerrianas se nutrían de ingresos de distinta naturaleza, de los cuales los mayores volúmenes estaban conformados por gravámenes al comercio y crédito público de origen interno o externo. La contribución directa que gravaba propiedades y capitales, una imposición siempre sensible a resistencias por parte de los propietarios, no fue aplicada por lo cual el peso impositivo recayó mayormente en la actividad mercantil y en los bienes de consumo de la población. La relación sobresaliente entre impuestos al comercio e ingresos tornaba altamente inestable a la recaudación a causa de los episodios recurrentes de bloqueos y alteración tanto del tráfico mercantil como de las condiciones de producción en la campaña, generados por los conflictos bélicos de la época; a esto se sumaba la dependencia del puerto de Buenos Aires como intermediario en el intercambio ultramarino.

##### *Los ingresos aduaneros.*

La alcabala era un impuesto de Real Hacienda que continuó percibiéndose prácticamente en todas las provincias rioplatenses después de la Independencia. El mismo consistía en la aplicación de un porcentaje sobre el valor de las operaciones de introducción - *ad valorem*-. También existía la

alcabala sobre la venta o permuta de bienes entre particulares establecido en un 4% del valor del bien en cuestión<sup>408</sup>. Dado que en los estados contables este impuesto no se encontraba discriminado en sus dos modalidades, realizamos una consulta a los Libros Mayores de las Rentas de Aduana lo que permitió comprobar que el impuesto registrado como Alcabala correspondía mayormente a un ingreso aduanero.<sup>409</sup> Los impuestos denominados Entrada y Salida, derechos de ultramar, extracción e introducción de Sudamérica correspondían a las mercancías de importación o exportación por vía fluvial o terrestre, con distintos valores específicos por unidad según los productos y su procedencia. Se agregaban los cobros por anclaje o ancoraje cuyo valor se establecía según las toneladas de cada barco parado en puerto. Las guías o despachos de aduana, con pago de derecho, acreditaban legítima entrada y eran el instrumento para aplicar los impuestos sobre las introducciones y exportaciones.

#### *Otros ingresos*

El papel sellado, instrumento de origen colonial para la legalización de trámites, servía para formalizar documentos particulares como pasaportes y otros de orden administrativo, notarial, judicial, comercial. Su cobro era registrado en los Libros de Cuenta y Razón de la Tesorería o de las Receptorías interiores según los valores establecidos por una Ley de 1822, que vino a suplantarse al Reglamento dictado por Francisco Ramírez en tiempos de la República entrerriana. En agosto de 1830 una ley de Sellos específica para títulos de propiedad por compra o herencia de terrenos ordenó las distintas categorías y procuró regularizar la legalización de esas posesiones.<sup>410</sup> El fraude con sellos era frecuente en los contratos entre particulares, por ejemplo entre un agente económico habilitador y sus habilitados. A fin de evitar la evasión fiscal se publicaron Edictos estableciendo la obligación de contratos escritos y pago de sellado entre contratantes con el control del Tribunal de Comercio. Pero esta

---

<sup>408</sup> Novísima Recopilación de Leyes de España, Libro X, Título XII, Ley XI, editada en Códigos españoles, Madrid, 1872, Tomo 9, p. 344.

<sup>409</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 13, Leg. 16 Carpeta 21, Leg. 11.

<sup>410</sup> RLDAPER, T. III, 180-182. Estas regulaciones procuraban evitar litigios a causa de, por ejemplo, títulos confusos o transferencias ilegales. En casos judiciales anteriores, el Gobierno se habría expedido por solucionar estos conflictos, invocando los derechos de propiedad, seguridad y libertad ordenados por el Estatuto como bases del derecho natural y de la conveniencia pública. RLDAPER, T. I, pp. 50-51



reglamentación da también otros indicios sobre la protección al desarrollo de las producciones locales ante la especulación y las irregularidades cometidas por esos comerciantes, fundamentalmente el no respetar los plazos previstos en las transacciones tanto en la entrega de bienes habilitadores como en la exigencia de adelanto de las mercaderías comprometidas por los habilitados, lo cual traía desventajas, incertidumbre y perjuicios a los productores menores.<sup>411</sup>

El ramo de tiendas y pulperías tenía antecedentes de cobro durante la colonia; los comerciantes pagaban generalmente por trimestre adelantado el llamado derecho de compostura graduado según clase del comercio. Las multas por contravenciones eran ingresos muy menores; en el caso de las pesas y medidas usadas en los comercios y concordantes con las usadas en Buenos Aires y Montevideo, las visitas anuales intentaban corregir acciones fraudulentas y aplicar fuertes multas.<sup>412</sup>

Ante urgencias del erario, se crearon impuestos para ser aplicados a determinadas áreas de competencia estatal que necesitaban mejorar su funcionamiento; eran impuestos excepcionales y su recaudación se anunciaba en la prensa y por bandos públicos. En marzo de 1822, el Congreso dictó una Ley de creación de Escuela de Primeras Letras en la Villa Capital en cumplimiento de sus prerrogativas estatutarias sobre educación pública. Para cubrir sueldos, casa del maestro, edificio y útiles escolares, la Ley resolvió establecer un Nuevo Impuesto por remate extendido, en parte, a la cobertura de los gastos del Hospital y en principio por 3 meses. En esta oportunidad se gravaron los juegos de billar y de bolos, hornos, jabonería y curtiduría, también se vieron afectados con un 50 % más los impuestos por anclaje de barcos; el mismo fue sucesivamente renovado hasta 1829 cuando, al efectuarse una reforma fiscal fue suprimido pasando, por ejemplo, los gastos de educación pública a cargo de las nuevas Juntas de Propios de ciudad. Otros impuestos excepcionales lo constituyeron el Derecho de 2% de todo efecto cobrado y el Impuesto del 13 ½ % aplicado a productos del interior como cal, jabón, velas, harinas, arroz y demás víveres procedentes del exterior, según disposición de

---

<sup>411</sup> Libro del Congreso No. 1/87, 8/2/22, pp. 8-10. RLDAPER, T. I, pp. 292-293.

<sup>412</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 33, Leg. 10. RLDAPER, T. I, pp. 284-286; T. II, pp. 7-8.

1822, impuesto éste que no encontramos como ingreso discriminado. (Urquiza Almandoz O., 1978. 360-361)<sup>413</sup>

El diezmo de cuatropea y granos, como ya adelantamos, fue suprimido en 1823.<sup>414</sup> Con esta decisión, el gobierno buscó aliviar impositivamente a los hacendados y los labradores, “clases útiles y nobles del Estado” que, según se adujo, estaban padeciendo penurias económicas por plagas, reducción de los rodeos de ganado y decaimiento de la “industria general”; a la par, se continuó privilegiando los gravámenes al comercio y al consumo. En 1822 el diezmo supuestamente estaba vigente, pero no hallamos ese rubro en las planillas contables porque su cobro y administración eran de responsabilidad de autoridades locales. A fines de 1823, se formularon propuestas de los llamados Colectores de Diezmos, denominación referida a los responsables de recoger donaciones voluntarias para los templos, administradas por una Comisión integrada por el Comandante y el Juez departamental. El vecino Basilio Canavídez fue propuesto en ese carácter para coleccionar “lo que buenamente quiera entregarse”.<sup>415</sup> Evidentemente, este mecanismo colector no se correspondía, en este momento, con el arrendamiento anual en subasta pública al mejor postor y con fianza como garantía de pago, de tradición colonial.<sup>416</sup> La donación voluntaria nos estaría indicando la no exigencia de la décima parte de cosechas y procreo de ganado.

A partir de 1828 y dado que los aportes voluntarios eran insuficientes, se dispuso el pago de un cuartillo para la fábrica de iglesias aplicado a cada cuero vacuno de exportación, sin perjuicio de que sobre esta mercadería se fijara el impuesto establecido por extracción; esos cuartillos fueron recaudados y administrados directamente por los Mayordomos de Fábrica de las ciudades y

---

<sup>413</sup> RLDAPER, T. I, pp. 113-116, 225-256, 284-286. T. III, pp.139-140.

<sup>414</sup> Los diezmos se cobraron en la mayoría de las provincias por lo menos durante toda la primera mitad del siglo XIX; las finanzas públicas de Jujuy, Córdoba, Corrientes, Santa Fe reflejan la persistencia de este impuesto cobrado por Remate. Cf.: Delgado, Fanny “Estructura política, administrativa y económica del Estado provincial. Jujuy (1834-1852) en *Jujuy en la Historia*, UIHR, FHyCS, UNJu, 1993, pp.89-90; Romano S, 2002, p. 213; Chiaramonte J.C. Cussianovich G., Tedeschi, S. 1993, pp. 87-88; Chiaramonte, J.C., 1991a, pp. 151-152.

<sup>415</sup> AGPER, Gobierno I, Carpeta 5, f. 1756.

<sup>416</sup> Garavaglia, Juan Carlos y Prieto, María del Rosario “Diezmos, producción agraria y mercados. Mendoza y Cuyo, 1710-1830” en *BIHAAER*, Tercera Edición, No. 30, pp. 8-9. Las Leyes de Indias, Título I, Libro 16 y la Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1805, Tomo Primero, Libro I, Título 6. Acceso: <http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm> y <http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/novisimaRecopilacionT1.pdf> (Consulta 7/6/2015).

pueblos con supervisión del Alcalde y dos vecinos, sin pasar al registro de cuentas fiscales.<sup>417</sup> El diezmo como tal se restableció a partir de 1833 mediante una ley impulsada por el Gob. Echagüe donde se fundamentaba que era un derecho divino en cuanto a su sustancia; Echagüe tenía otra concepción de la relación entre estado e iglesia para nada secularizadora la cual, inferimos, provenía en parte de su formación como Doctor en Teología y de su carácter de Ministro de la Orden Tercera de San Francisco desde 1832. Según dicha ley, quedaba con todo vigor lo dispuesto en la Nueva Recopilación de Leyes de Indias en lo relativo al cobro de ese impuesto. Sucesivas leyes y comunicaciones de 1834, 1835 y 1837 continuaron reglamentando, sobre esa base, distintos aspectos de la percepción del diezmo de granos y cuatropea (Urquiza Almandoz O., 1978, pp. 355-357, 361).<sup>418</sup>

En lo que refiere a los rubros Depósitos y Hacienda en común, sus contenidos demuestran que los criterios de registro fiscal no siempre eran homogéneos tal como lo advertíamos al tratar sobre las características de las fuentes contables que utilizaríamos. Dentro de los asientos como Ingresos, el rubro Depósitos incluía una notable variedad de origen. Las sumas más importantes correspondían a: 1) Libranzas parciales correspondientes a ciertos préstamos otorgados, por ejemplo, por los gobiernos de Buenos Aires y Corrientes. 2) Remesas de los llamados “Fondos nacionales” administrados en Buenos Aires para cubrir gastos militares demandados por las “divisiones nacionales” en tránsito que participaban en la guerra contra el Brasil y para reintegrar ayudas que algunas Receptorías menores habían proporcionado a estos soldados. 3) Depósitos de Testamentarias que en algunos años se presentan muy abultados, como en 1829 en que la suma de 9.600 pesos por ese concepto representa casi el 80 % del rubro.<sup>419</sup> 4) Otras sumas depositadas

---

<sup>417</sup> RLDAPER, T. III, pp. 6, 60-62. La renta ó derecho que se cobra en las iglesias catedrales, parroquiales y otras para repararlas y costear los gastos para el culto divino, RAE, 2013: <http://web.frl.es/ntllet>, Diccionario 1817 Usual (Consulta: 6/4/2015)

<sup>418</sup> Su esposa Manuela Puig y Troncoso fue designada Abadesa de las Hermanas Terciarias. Archivo de la Comunidad Franciscana de Santa Fe, Libro de Elecciones de la Venerable Orden Tercera de Penitencia de Nuestro Padre San Francisco, Fols. 53 y 57. RLDAPER, T. IV, pp. 29-31, 94-96, 329-330, 339-342.

<sup>419</sup> José Carlos Chiaramonte afirma en su estudio sobre las finanzas públicas del Litoral que los depósitos de testamentarias podían constituirse en recursos de apropiación del estado bajo ciertas circunstancias. “Herencias de extranjeros fallecidos sin testar que, por el derecho de gentes, correspondían a sus familiares en el exterior. En el caso de súbditos de países con

provenían de pagos a cuenta de derechos, de fondos particulares destinados a fábrica y compostura de armamento y pequeñas entregas de las Receptorías menores. Como vemos, en él se incorporan contenidos referidos a impuestos al comercio y a préstamos internos y externos que en los estados contables figuran como rubros específicos o sea que existe un registro parcial desdoblado y por tanto obliga a incorporarlos a la observación de la composición de los Ingresos y del peso de ciertos rubros en las cifras totales anuales. El rubro Hacienda en Común comprendía donaciones y entregas generalmente de poco monto bajo listados nominales y sin indicar destino, adelantos del Rematador de Impuestos, además de fondos por compra de terrenos fiscales y por confiscaciones; por su poca incidencia no lo hemos incorporado al análisis.<sup>420</sup>

### *La deuda pública*

En Entre Ríos la exigua existencia de ingresos genuinos, esto es por impuestos, dificultaba fundamentalmente la implementación de las reformas administrativas y el sostén y movilización prácticamente continuos de los ejércitos y milicias. Para poder afrontarlas se pidieron préstamos al comercio y auxilios monetarios a otros gobiernos, una realidad financiera precaria que se repetía en general en los nuevos Estados americanos luego de la Independencia.<sup>421</sup>

En el período analizado la Caja de Paraná representaba las mayores cantidades depositadas por ser Villa / Ciudad Capital y residencia de las máximas autoridades provinciales junto a la Tesorería General que recibía de ordinario las sumas gestionadas ante otros gobiernos por parte de los

---

representación diplomática en Buenos Aires, podían ser reclamados a través de ellos. Como la mayoría parece ser de origen español, el estado de falta de relaciones con España posterior a la independencia y aún sin solución, hacía más factible la práctica de echar mano de esos fondos para aligerar el déficit fiscal”, Chiaramonte J.C., 1986, p. 182.

<sup>420</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Libros Mayores Años 1822, 1824, 1825, 1827, 1828, 1829. Carpeta 6, Legs. 1-3; Carpeta 13, Legs. 9 y 13; Carpeta 17, Leg. 10 Libro Manual con ingresos y gastos nacionales y Leg. 11; Carpeta 25, Legs. 4 y 6; Carpeta 30, Leg. 1; Carpeta 33, Leg. 6.

<sup>421</sup> Estudios realizados para el estado de Nueva Granada, primera mitad del siglo XIX muestran también esta escasez fiscal y búsqueda de recursos a través de crédito interno. Cf. Buendía, Williams “Rentas, crédito y moneda en la formación del estado: la provincia de Tunja durante la primera mitad del siglo XIX” y María Victoria Dotor “Los caudillos liberales de la salina de chita: políticas de financiamiento en Boyacá durante el siglo XIX” en Anuario Historia Regional y de las Fronteras, Univ Industrial Santander, Vol. 6, Setiembre 2001, pp. 323-391. López Bejarano, Pilar “Empréstitos de guerra/entramados de la acción. República de Nueva Granada 1839-1842” en Garavaglia J. C., Pro Ruiz J., Zimmerman E. 2012, pp. 89-121.

Encargados de Negocios; le seguía en importancia la Caja del Uruguay. En cuanto a los préstamos y suplementos del Común, la capacidad perceptiva de impuestos y las expectativas de conseguir contribuciones estarían relacionadas con la concentración demográfica y las actividades económicas desarrolladas en cada poblado y su área rural circundante. En este sentido y teniendo en cuenta el número de habitantes por villas y pueblos según el censo de 1820, esta capacidad y expectativa se concentraban en Paraná, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. La información censal de las dos ciudades indica un importante número de pulperos, tenderos, comerciantes introductores y/o exportadores y hacendados. Estas divisiones entre hacendados y comerciantes son relativas, sabemos que había actividades e inversiones diversificadas, podían ser hacendados y comerciantes a la vez; además, esas categorías no implican necesariamente que el volumen de sus negocios o bienes fuera parejo, sino que podían presentar muchas variaciones.

En períodos de urgencias económicas, era usual que las mismas autoridades contribuyeran con dinero o bienes personales a las arcas fiscales, para luego ser restituidos formalmente, a veces con el agregado de importantes intereses usurarios, como hemos visto registrado en Santa Fe y La Rioja (Goldman N. Tedeschi S., 2005: pp. 150-151)<sup>422</sup> En 1822, Lucio Mansilla pidió resarcimiento de gastos pagados con su propio dinero recibiendo 1.500 pesos para subsanar parte de sus “quebrantos particulares” originados por la revolución de septiembre; el pago de esa suma se fundamentó en un reconocimiento de los diputados a la restitución de derechos y al afianzamiento del orden y libertad del territorio entrerriano que, entendieron, eran los resultados de esa revolución. Durante su primer gobierno, León Solas solventó personalmente con 800 pesos las erogaciones de las visitas periódicas a los pueblos, siendo también restituidos.<sup>423</sup>

La Deuda pública interna y externa se componía básicamente de préstamos del comercio interior, suplementos en dinero, especie o servicios,

---

<sup>422</sup> En Santa Fe, el inventario post mortem de bienes del Gral. Estanislao López lo muestra como acreedor del Estado por préstamos en dinero y suplementos de ganado sobrevaluados. Lo mismo el caudillo de La Rioja, Facundo Quiroga, que realizaba préstamos en dinero, ganado y armas para las tropas.

<sup>423</sup> RLDAPER, T. I, pp. 116-117. T. II, P. 57.

suelos impagos y préstamos de otras provincias. En este apartado analizaremos algunos datos del endeudamiento entrerriano entre 1822 y 1832.

424

La importancia de la Deuda pública para el desarrollo estatal generó un especial cuidado de las autoridades. Las negociaciones de empréstitos dentro o fuera de la provincia por parte del Poder Ejecutivo adquirirían legitimidad mediante la aprobación expresa de los diputados o bien, como ya hemos visto en el Capítulo VI, otorgándole una facultad extraordinaria al gobernador para contraer ese tipo de obligaciones, en función de ese contrapeso y control entre Poderes del Estado como rasgo republicano. Estos mecanismos de legitimación podían ser demorados u obviados ante los apuros para sofocar levantamientos internos, no siempre bajo la condescendencia del Congreso. Podemos ejemplificar con dos casos. En 1828, el gobernador Solas decidió realizar una gratificación urgente a las tropas que lo apoyaron para su reelección a fin de frenar posibles venganzas contra los opositores y rindió la suma dos meses más tarde; los diputados aprobaron pero advirtieron que era necesario su consentimiento al contraer deudas de origen interno o externo. En 1830, el gobernador Barrenechea impuso una contribución forzosa de necesidad inmediata al comercio de Paraná para movilizar sus tropas, sin anuencia de los diputados.

Periódicamente, el gobernador requería al Ministro Tesorero y Administradores Subalternos de los Pueblos la presentación de una Razón de Deuda general; por su parte, el Congreso provincial solicitaba al gobierno los Estados de Deudas, a fin de evaluar su incidencia en los resultados parciales o anuales de las cuentas oficiales.<sup>425</sup> De todos modos, lejos se estaba de cumplir sistemáticamente con estos requisitos informativos, no se encontraron por ejemplo las presentaciones bianuales de las rentas públicas ante el Congreso que el Estatuto había dispuesto.

---

<sup>424</sup> Los préstamos citados en este punto desde la Recopilación Oficial fueron cotejados con los expuestos por Urquiza Almandoz y Miron Burgin; sin perjuicio de realizar útiles interpretaciones, estos autores clasificaron a los empréstitos contraídos por el gobierno de Entre Ríos solo con esta Recopilación sin verificar otras existencias de las que damos cuenta en este desarrollo. Cf. Urquiza Almandoz, 1978, pp. 380-400. Burgin, M. 1975, p. 179.

<sup>425</sup> RLDAPER, T. I, pp.130-131, 187. T. III, pp. 288-289.

### *La deuda pública interna: préstamos y suplementos.*

Los préstamos y suplementos proporcionados por comerciantes y hacendados se transformaban en instrumentos imprescindibles de sustento del fisco. Es posible que préstamos en dinero, originalmente pedidos con carácter voluntario, hayan devenido en forzosos ante la eventual reticencia de los vecinos, sobre todo en circunstancias de urgencias financieras. Como de los mecanismos de recolección solo tenemos información fragmentaria, no podemos comprobar esas posibles situaciones ni saber la distribución de la carga, si los prestamistas pusieron condiciones u objeciones, si los que no aportaron presentaron alguna justificación, si hubo alguna evaluación de la respuesta de los vecinos en términos políticos, es decir que se revelara explícitamente su adhesión o no al Gobierno, etc.<sup>426</sup> En cuanto a los suplementos, comprendían entrega de reses, velas, jabón u otro insumo para la tropa, artículos y papel para la Administración, entre otros. La norma de 1825 referida a compra de bienes y servicios a la provincia estableció la subasta pública, tratando de asegurar múltiples oferentes para abaratar los costos fiscales. Pero fue objetada por el gobierno dado que, en su opinión, la escasez del erario no podía afrontar ni los gastos más indispensables, por tanto se continuaría con el mecanismo de los suplementos.<sup>427</sup>

El mecanismo de devolución de préstamos y suplementos consistía generalmente en la extensión de documentos de crédito, con posibilidades de endoso, para pagar los tributos aduaneros o cualquier obligación fiscal, significando una toma de recursos genuinos por anticipado. En agosto de 1830, también se contempló la entrega de tierras del Estado para cubrir acreencias. (Urquiza Almandoz O., 1978, pp. 401)<sup>428</sup>.

En los pedidos de empréstitos al comercio interno, los comerciantes involucrados no solo eran vecinos de Entre Ríos, sino también de otros lugares de la región con intereses y negocios en las diferentes villas entrerrianas y, tal

---

<sup>426</sup> Una revisión de la documentación de Administración de Justicia relativa a Tribunal de Comercio, en AGPER, Hacienda Serie IX A, entre 1821 y 1827 no brindó ninguna información sobre exacciones sobre bienes, resistencias de comerciantes, sanciones por no cooperar, etc.

<sup>427</sup> RLDAPER, T. II, pp. 59-60.

<sup>428</sup> AGPER, Hacienda Serie IV, Carpeta 1. Hacienda Serie I, Carpeta 9, Leg. 25. RLDAPER, T. II, Acuerdo del Gobernador García de Zúñiga, pp. 257-258. T. III, p. 182.

vez, por favores políticos y/o beneficios económicos accedían a colaborar en caso de pedido voluntario; dentro del grupo de prestamistas no faltaban los extranjeros. A los nombres de los fuertes comerciantes santafesinos José de Echagüe -miembro del círculo estrecho del Gob. Estanislao López-, Lucas Requena, Juan Puyana y José Comas se le agregan los ingleses Jacobo Chapman y Ricardo Newton residentes en Paraná, el portugués Ramón da Olivera que en 1822 reclamó una compensación por auxilios a una guarnición en la Villa del Uruguay y Juan Garrigó como apoderado de dos vecinos de Buenos Aires que solicitaban restitución de mercadería confiscada en 1821 y de préstamos efectuados en 1818. En 1829, el Gob. Solas realizó solicitudes nominales de auxilio económico a Esteban Baxter, Mariano Ramos, José Comas y Antonio Crespo animando el espíritu patriótico: “por el amor que le deben a la Patria”.<sup>429</sup> Interesantes evidencias para continuar investigando a fin de reconstituir las redes comerciales locales y regionales y sus relaciones con los aparatos estatales.

Veamos los empréstitos registrados oficialmente. El 5 de noviembre de 1822 el Gobierno pidió autorización al Congreso para solicitar un empréstito de 6.000 pesos con el fin de solventar la visita del gobernador, escolta y ejército de refuerzo al acantonamiento de la Villa del Uruguay, en vistas a una posible invasión de los emigrados políticos. Una parte del mismo fue destinado a afrontar los altos ingresos del Encargado de Negocios ante Buenos Aires, Pedro Agrelo, en reconocimiento de los notorios servicios que venía prestando a la Provincia. A este Encargado, quien mantenía su sueldo de 1.100 pesos como Ministro Secretario de Gobierno, se le asignó una dieta mensual de 125 pesos, cobertura de viáticos más 700 pesos de dotación anual extraordinaria hasta su renuncia en marzo de 1823.<sup>430</sup> La suma del empréstito se repartió en el comercio de distintas poblaciones: 3.000 pesos en Paraná, 2.000 pesos en Uruguay, 600 pesos en Gualeguaychú, 400 pesos en Gualedguay. Los prestamistas recibirían, según la ley, un interés del 1% al mes, pagado cada dos meses y una letra endosable de la Tesorería por la suma prestada más réditos. Como muestra de la distribución de la carga, los datos disponibles indican que los prestamistas de

---

<sup>429</sup> AGPER, Hacienda, Serie IV. Solicitudes, Nos. 18 a 38, 86, 87. Serie I, Carpeta 33, Leg. 6.

<sup>430</sup> RLDAPER, T. I, p. 185. 231-232, 257-258.



Paraná sumaron 21 con entregas entre 50 y 350 pesos, la mayoría superó los 100 pesos; en Gualeguaychú fueron 20 con entregas de entre 8 y 75 pesos. En el mes de abril de 1823 el Gobierno adelantó el rescate de todas las Letras emitidas. Esta atención del Gobierno recibió su contrapartida pues la mayoría de los prestamistas cedió los réditos de la cantidad prestada a beneficio del Estado.<sup>431</sup>

El 3 de junio de 1823 se dispuso otro pedido de préstamos por la suma de 10.000 pesos. La justificación del gobernador se basó en la inesperada conspiración de abril y los gastos que demandó su sofocación (gratificaciones por información, movimiento de tropas, aumento de puestos de vigilancia y socorros militares extraordinarios) y que lo dejó sin recursos para financiar su inminente traslado a la Villa del Uruguay al mando de las tropas.<sup>432</sup> El Congreso provincial aprobó la ley que repartió el esfuerzo en el comercio de cuatro poblaciones: 5.000 pesos en Paraná, 3.000 pesos en Uruguay, 1.200 pesos en Gualeguaychú y 800 pesos en Gualeguay, manteniéndose iguales condiciones de interés de préstamos anteriores pero previéndose su restitución en un plazo de 8 a 10 meses. En diciembre de 1823 Mansilla solicitó un pedido por 1.336 pesos para atender urgencias del Estado, en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso le había concedido. El Tribunal de Comercio, encargado de la recolección, informó que algunos individuos convocados para el préstamo no habían podido contribuir y otros no completaron la suma requerida. Estos comerciantes se justificaron aduciendo que la fuerte retracción comercial los había perjudicado mucho, no obstante podemos considerar que esto se debía a la falta de reconocimiento de autoridad del gobierno de Mansilla debilitado por la rebelión de diciembre. La suma obtenida fue destinada por

---

<sup>431</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 9, Leg. 23. Carpeta 5 Ministro Tesorero y Contador Generales 1822, Leg. 4: Modelo de letra: A los seis meses de esta fecha se entregarán al tenedor de esta letra por la tesorería general de la provincia 306 pesos por otros tantos que ha suplido el Señor Don Francisco Soler, para las urgencias del Estado y cada dos meses será pagado entre tanto por la misma tesorería el interés de 1 % al mes sobre dicho principal, conforme al decreto del Honorable Congreso, que se copia a la vuelta, sin necesidad de más orden para todo pago, que su manifestación a los Ministros Generales de Hacienda, Paraná 7 de noviembre de 1822 Fdo. Mansilla. Otro oficio: Paraná, 19 de abril 1823. Nicolás de Vedia a los Ministros Generales de Hacienda: "Procedan a hacer el pago de las letras del empréstito extraordinario de 6000 pesos que hizo el comercio de la provincia y ordena lo conveniente para que se cumpla la resolución del gobierno en los otros pueblos de la provincia"

<sup>432</sup> RLDAPER, T. I, p. 280.

entero al “socorro, sustento y gastos extraordinarios de las tropas que expedicionaron al Uruguay” con el Comandante Solas. Al año siguiente, se solicitaron 500 pesos por préstamo interno voluntario entre los comerciantes de Paraná para mantenimiento de la guarnición militar local.<sup>433</sup>

En los convulsionados años de 1827 y 1828 las disputas por el cargo de gobernador suscitaron fuertes enfrentamientos internos entre distintas facciones, convulsión que era coincidente con la guerra contra el Brasil. Las finanzas públicas de Entre Ríos se encontraban en situación crítica, por el comercio prácticamente paralizado, la necesidad de movilización militar interna – especialmente los acantonamientos sobre la frontera interna de Montiel- y la imposibilidad de hacer frente a la totalidad de los sueldos civiles y políticos. El gobernador Zapata con acuerdo del Congreso Provincial dispuso el levantamiento de un préstamo en la provincia de 5.000 pesos, acordado por los diputados. En 1828, luego de haber sido restituido en el cargo el gobernador Solas levantó un empréstito forzoso de 4.000 pesos en Paraná, sustentándose en los fundamentos del art. 78 que lo facultaba a prevenir conspiraciones y sofocar tumultos. Las urgencias financieras causadas por los enfrentamientos facciosos de 1830 generaron el pedido de dos préstamos forzosos al comercio de la ciudad de Paraná. Uno de 500 pesos fue pedido por el Gob. Delegado Barrenechea en virtud de la crisis política y el movimiento de tropas para enfrentar el alzamiento militar de noviembre. El otro fue por 5.000 solicitado por el gobernador López Jordán para gratificar a las tropas asentadas en la Capital. Notablemente, este empréstito solo pudo ser recaudado en un 70 %; la reticencia al pago se manifestó en una lista de 20 comerciantes entre los que se contaban el escribano Juan Melara y los destacados agentes económicos de Paraná Francisco de la Puente, Salvador Ezpeleta y Sebastián Silva.<sup>434</sup> Podemos inferir que esta desobediencia fiscal estaba en consonancia con la falta de reconocimiento de autoridad del gobierno de López Jordán, el líder de la

---

<sup>433</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 9, Leg. 24, f. 26 y Relación de gastos No. 3 del 17 de diciembre de 1823. RLDAPER, T. I, p. 464

<sup>434</sup> Sus datos identificatorios están registrados en Tabla I, Elección Villa de Nuestra Sra. del Rosario del Paraná, 1821 en Anexo FINAL de esta Tesis.

costa del Uruguay que siempre estuvo en tensión, como sabemos, con los grupos de Paraná.<sup>435</sup>

Algunos préstamos asentados en papeles de Hacienda y no registrados en la Recopilación oficial suman la cantidad de 2.712 pesos. En 1826, se tomaron dos de 500 pesos pedidos al comercio en general y 912 pesos pedidos a listas nominales de determinados comerciantes por el Gob. Solas, dinero que fue invertido en gastos de visitas a departamentos, vigilancia de la frontera, socorro urgente de tropas; los prestamistas recibieron los correspondientes boletos pagaderos. En 1829, a solicitud de Solas se recibieron dos sumas del comercio de Paraná para afrontar gastos de movilización militar: en febrero, 300 pesos y en junio, 500 pesos.<sup>436</sup>

*La deuda pública externa: las obligaciones contraídas con otras provincias.*

Los préstamos externos tuvieron como fuente de otorgamiento a la provincia de Buenos Aires en su mayoría. Santa Fe y Corrientes fueron las únicas provincias con que se generaron obligaciones en dos oportunidades: 1822 y 1827. En enero de 1822, la firma del Tratado del Cuadrilátero trajo beneficios pero también endeudamiento. En su articulado secreto se estableció una compensación a Santa Fe para resarcir los perjuicios ocasionados por la invasión de Francisco Ramírez a su territorio; en este compromiso quedó involucrada la provincia de Corrientes, que formaba parte por entonces de la República de Entre Ríos. De este modo, el gobierno santafesino recibiría 2.000 cabezas de ganado vacuno y 1.200 caballos a cumplir en el término de dos años. Pero el servicio militar prestado por el gobernador López también fue reconocido con creces: los gastos de la expedición auxiliadora santafesina que participó en la revolución de septiembre de 1821, fueron calculados en 5.000 pesos pagaderos en seis meses y por fracciones de 1.000 pesos. Según la letra del Tratado, Corrientes se había visto beneficiada por esa revolución por lo cual quedó fijada su contribución de 1.500 pesos para completar la suma total de

---

<sup>435</sup> RLDAPER, T. II 342-344. AGPER, Hacienda Serie I Carpeta 24, Leg. 7. T. II pp. 347-348, 439-440. T. III, pp.191-192, 215-220. "Relación de los individuos comerciantes y capitalistas que no han suplido la entrega de las cantidades que a cada uno le corresponde en la distribución de los cinco mil pesos que debían existir por empréstito, Paraná, 4 de diciembre de 1830" en Urquiza Almondoz O, 1978, pp. 393 y 418.

<sup>436</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 21, Leg. 5 (marzo y noviembre); Carpeta 33, Leg. 6.

5.000. Pero el pago por parte de Entre Ríos no se cumplió sino parcialmente, datos contables de 1833 revelan que todavía se le adeudaba a Santa Fe la suma de 2.997 pesos pactada en el Cuadrilátero.(Chiaramonte J.C., 1986: p. 194). El endeudamiento entonces se produjo en la forma de pago de servicios militares, aunque formaran parte de estrategias políticas comunes entre provincias pues López también se vio beneficiado con el cambio de gobierno al afirmar su poder regional y al quedar instituido un gobierno al parecer fácil de influenciar. Corrientes por su parte prestó 7.000 pesos a la Tesorería entrerriana, lo que está omitido en la Recopilación Oficial. Esta suma, cuyo ingreso localizamos como Depósito en 1827, se correspondería con la ayuda en útiles y/o numerario a Entre Ríos, autorizada por Ley de la Legislatura correntina.<sup>437</sup>

En 1823, el Encargado de Negocios Pedro Agrelo gestionó partidas ante el Gobierno de Buenos Aires. El convenio se firmó el 1º de abril de 1823 entre el Gobernador y el Ministro de Hacienda bonaerense Manuel José García comprometiéndose éste último a girar dos Letras, una por 10.000 pesos y otra por 8.000 pesos pagaderas a los 30 y 60 días respectivamente. El Congreso lo aprobó en todas sus partes, tomando conocimiento de que el préstamo debía ser reembolsado por Entre Ríos en el término de dos años. En los fundamentos de aprobación, los diputados tuvieron en cuenta el mantenimiento del ejército, la paga de empleados y demás gastos públicos.<sup>438</sup> O sea que no estaba previsto volcar esa ayuda en los circuitos comerciales y productivos internos y con ello lograr un efecto dinamizador de la economía provincial, sino que su destino era solventar una vez más la escasez de las cuentas fiscales en atención a esos rubros. En 1823 y 1824 se registran dos intentos para conseguir fondos en Buenos Aires con destino a promover la ganadería pero no fueron concretados; suponemos, en el caso del último que fuera aprobado por los diputados, que la sustanciosa suma pretendida de 100.000 a 150.000 pesos habría sido difícil de reunir o bien que los eventuales prestamistas habrían evaluado las dificultades

---

<sup>437</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 25, Leg. 4 Libro de Fondos Particulares. Registro Oficial de la provincia de Corrientes, Ley del 2 de mayo de 1827.

<sup>438</sup> En el apartado anterior sobre deuda interna, planteamos que el préstamo solicitado al comercio el 5 de noviembre de 1822 fue de 6.000 pesos y que en abril de 1823 el Gobierno adelantó el rescate de todas las letras emitidas. Inferimos que la cancelación casi inmediata se relaciona con la inminencia del primer pago de este empréstito gestionado por Agrelo.

de cobrar los servicios de tan abultada deuda.<sup>439</sup> En noviembre de 1823, se realizó un convenio en la Villa del Uruguay con el comisionado Juan García de Cossio, luego de que éste lograra como sabemos la suspensión del Tratado con la Comisión Oriental. Al parecer formaba parte de un plan que contemplaba, en su etapa más ambiciosa, la restitución de Entre Ríos a la jurisdicción de Buenos Aires. El acuerdo consistió en la entrega de 30.000 pesos fuertes, pagaderos 10.000 en el acto, una suma igual al año de aprobado el convenio y los 10.000 restantes para cubrir el envío de una formación militar compuesta por jefes, oficiales y 200 Dragones con sus respectivas familias, con destino a la provincia de Buenos Aires, sin que conozcamos más precisiones sobre su localización.(Urquiza Almandoz O, 1978, pp. 384, 388-389. Chiaramonte J.C. 1986, p. 167. Calvento M. 1940, pp. 76-77). A fines de 1824, el Encargado de Negocios ante Buenos Aires Lucio Mansilla gestionó fondos para saldar deudas internas contraídas con comerciantes o por sueldos impagos además de dotar de vestuario a la tropa provincial. Se pactó la entrega de 10.000 pesos y mensuales de 1.500 pesos por el término de un año, contándose con el acuerdo del Ministro de Gobierno porteño Bernardino Rivadavia.<sup>440</sup>

No todas las remesas otorgadas por Buenos Aires arribaron de manera efectiva y concreta a las arcas entrerrianas. Comprobaciones realizadas por otra investigación para el período 1821-1824 permiten afirmar que la mitad de esas remesas no salieron de esa plaza sino que se ocuparon en el pago de mercancías compradas a comerciantes porteños, los que no solo se pagaban en metálico sino también en “especies” como partidas de cal para edificaciones o los preciados fardos de cueros provenientes de las estancias del Estado (Chiaramonte J.C. 1986, p. 167; Schmit R., 2004, p. 231). En efecto, los papeles del comerciante Félix Castro como Encargado de Negocios ante Buenos Aires – al que ya localizamos como integrante del grupo Costa y vinculado a intereses británicos- nos muestran que recibió numerosas libranzas de Letras y numerario en oro y plata del gobierno entrerriano como pago de vestuarios militares, armamento, productos ultramarinos y de Sudamérica; la factura por remisión de 2 cajones de medicina e instrumentos de cirugía para proveer a los hospitales de

---

<sup>439</sup> RLDAPER, T. I, Ley del 16 de diciembre de 1824.

<sup>440</sup> RLDAPER, T. I, pp. 405-420.

Entre Ríos comprados por Castro al inglés Thomas Whifield revela por un lado, una forma de operar de la red mercantil con el comercio británico y por otro el cobro de comisión por estas operaciones con las que se beneficiaba. Castro también obtenía privilegios como proveedor y como comprador de cueros del Estado en virtud de “los distinguidos servicios prestados a la Provincia.”<sup>441</sup>

Por otra parte, la deuda interna conformada por sueldos impagos iba en correspondencia con épocas de grandes erogaciones por situaciones bélicas y bloqueos a los puertos. En su mensaje de 1827 al Congreso Provincial, Vicente Zapata fundamentó su petición de incremento impositivo basándose en esta crítica situación:

“...Las grandes alternativas que por la guerra y otras causas bien notorias ha sufrido esta Provincia han reducido sus rentas casi hasta su nulidad poco menos. Lo que en el día se recauda en todas las administraciones no puede hacer frente a los gastos más necesarios. La deuda es enorme comparada con el ingreso y cada día se hace menos practicable el pago de ella y sostén de la multitud de empleados que hay. Bien podía el Gobierno proponer a V.H. la supresión de algunas plazas, pero en el día la política aconseja dejar correr este mal para evitar otros mayores...”<sup>442</sup>

La Tesorería buscó aliviarse con recortes a todos los empleados sin distinción jerárquica, pagando entre la mitad y dos tercios de sueldos, derivando esas sumas a ciertos gastos de preferencia como carne, leña y agua probablemente para los cuarteles. Esta medida generalmente se complementó con pagos reducidos de los servicios de otras deudas.<sup>443</sup>

**Cuadro II. ENTRE RÍOS. Total Ingresos de las dos Cajas principales y porcentajes de Aduana, Préstamos y suplementos, Depósitos. 1822-1832.**

	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
<b>TOTAL Ingresos</b>	100.985	97.287	72.164	64.173	54.079	47.182	41.291	67.723	44.347	45.600	49.780
<b>Aduana</b>	52 %	37 %	41 %	42 %	35 %	35 %	35 %	67 %	50 %	55 %	64 %
<b>Prést. y suplem.</b>	6 %	19 %	28 %	28 %	24 %	41 %	42 %	3 %	27 %	28 %	0,6 %
<b>Depósitos</b>	25 %	19 %	12 %	8 %	17 %	12 %	10 %	18 %	5 %	5 %	24 %
<b>Total</b>	<b>83 %</b>	<b>75 %</b>	<b>81 %</b>	<b>78 %</b>	<b>76 %</b>	<b>88 %</b>	<b>87 %</b>	<b>88 %</b>	<b>82 %</b>	<b>88 %</b>	<b>88,6 %</b>

Gráfico realizado en base al Cuadro B y B Bis en Anexo final.

<sup>441</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 9, fs. 11, 12, 15, 17, 20; Carpeta 13, Leg. 8.

<sup>442</sup> RLDAPER, T. II, pp. 349-350.

<sup>443</sup> RLDAPER, T. II, Comunicación 6/9/27 y Decreto del 9/11/27, pp. 324-325, 369-370.

Veamos lo que nos muestra el Cuadro II. El tráfico comercial a través de los principales puertos de la provincia estuvo obstruido o bien con un funcionamiento disminuido e irregular debido a los conflictos armados en la región –última etapa del liderazgo de José Artigas, enfrentamientos de Francisco Ramírez con el gobernador de Santa Fe, tensiones entre Ricardo López Jordán y Lucio Mansilla-. En 1821 los ingresos aduaneros de la Caja de Paraná sumaron 17.658 pesos, la resolución de los conflictos liberó la actividad portuaria lo que significó prácticamente la duplicación de los mismos en la misma Caja en 1822: 31.606 pesos; considerando la cantidad por ese rubro para ambas Cajas representa un 52 % de todos los Ingresos. Durante ese año se concretó una gran cantidad de operaciones de exportación con mercaderías retenidas por la coyuntura bélica y una introducción de mayores volúmenes proveniente de mercados externos. Luego de esta intensificación de entradas y salidas, en 1823 se retornó a valores menores pero sostenidos en ambas Cajas hasta 1828: entre 35 y 42 %. En 1829, el fin de la guerra con el Brasil y consiguientemente el fin del bloqueo al puerto de Buenos Aires, permitió un aumento sensible de ingresos aduaneros reflejado sobre todo en la Caja de Paraná, el porcentaje de ese año sobre el total de los Ingresos resulta un 67 %. En los últimos tres años analizados, la proporción retorna casi al valor de 1822 y sigue en ascenso: entre 50 % y 64%. Podemos atribuirlo a la importancia que tiene Concordia –a la altura de Salto en la Banda Oriental- no solo como Caja subalterna como ya notamos sino por la activación de su puerto, enclavado en un tramo del Uruguay muy favorable tanto por sus condiciones de navegabilidad como para la carga y descarga de mercaderías. Por otra parte, estudios realizados sobre la circulación mercantil del Litoral entre los años 1830 1832 señalan la dinámica propia que va adquiriendo la franja costera del río Uruguay con un significativo aumento de las exportaciones. El flujo mercantil entrerriano con Buenos Aires se va desplazando lentamente desde el río Paraná hacia río Uruguay pero será en los años '40 cuando esta franja logre un gran despegue económico. (Schmit R. 2004, pp. 136-139, 211; Rosal M., 1992).

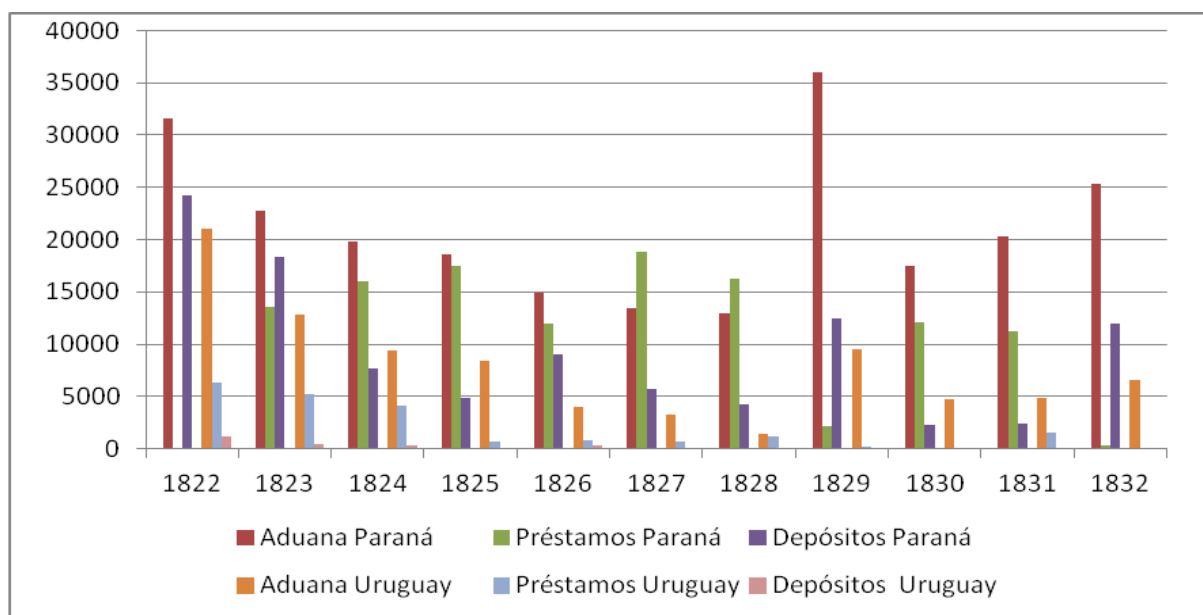
El rubro Préstamos y suplementos debemos combinarlo con el análisis del rubro Depósitos. El año 1822 muestra un escaso 6 % para el primero contrastando con un abultado 25 % del segundo que incluye entregas de

Corrientes y del Comisionado ante Buenos Aires por 3.500 pesos –casi un 15 % de ese 25%-, especulando con que tal vez estén asentados en Depósitos los préstamos, por ejemplo, del mes de noviembre. El trienio 1823-1826 presenta entre el 19 y el 28 % coincidentemente con las remesas gestionadas ante Buenos Aires y con aquellas proporcionadas por el comercio provincial aunque no están contabilizados dos préstamos que suman 1.412 pesos; el segundo rubro da entre un 8 y 19 % que incluye, para 1824, libranzas por 2.500 pesos del Encargado de negocios ante Buenos Aires. El bienio 1827-1828 sube significativamente entre 41 y 42 % con importantes préstamos del común, con un 12 % de Depósitos para 1827 que incluye según hemos comprobado el préstamo de 7.000 pesos otorgado por Corrientes y entregas de comerciantes. Recordemos que no todas las remesas porteñas ingresaban de manera efectiva a la Tesorería y que las entregas podían ser por etapas. En 1829, año en que los ingresos aduaneros mejoran sustancialmente, el porcentaje de empréstitos es prácticamente nulo pero sabemos que los dos pedidos del Gob. Solas que suman 800 pesos no estaban contabilizados; el elevado 18 % de Depósitos está compuesto casi en su totalidad por una Testamentaria. Los años 1830 y 1831 también registran empréstitos internos en tiempos de levantamientos y disputas internas: 27 y 28 % respectivamente, volviendo a caer en 1832 al 0,6 % cuando ya Pascual Echagüe está en el poder, aunque el 24 % correspondiente a Depósitos puede ocultar sumas prestadas. La Caja de Paraná presentó, para ciertos años, un porcentaje de préstamos superior a los ingresos genuinos pues incluía los asientos de los créditos externos; la Caja del Uruguay registró, a la inversa y para todos los años, un porcentaje mayor de ingresos genuinos sobre Préstamos.

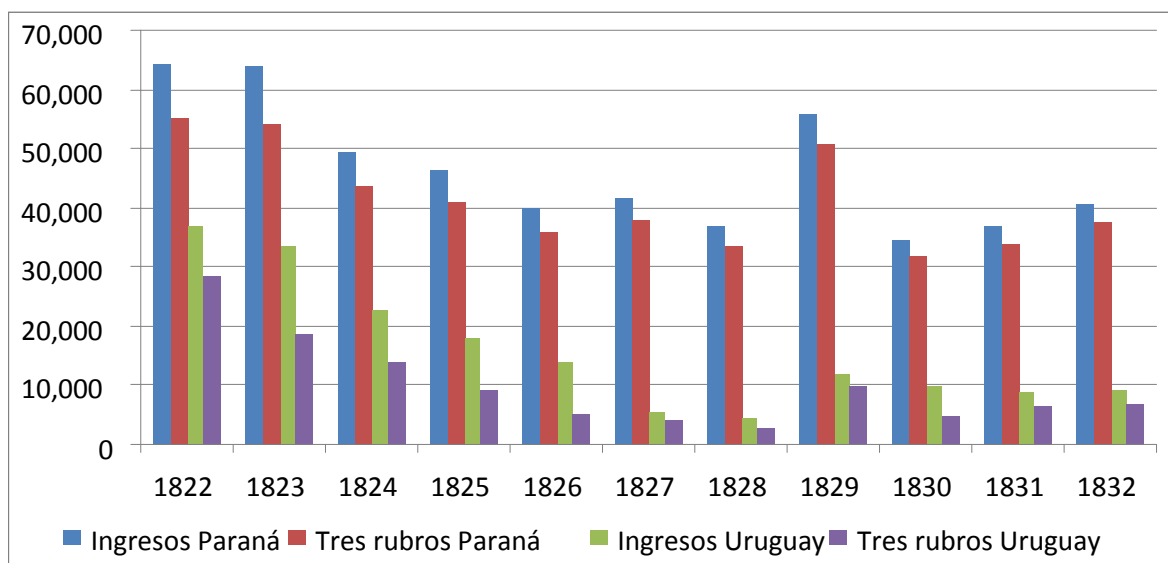
En el Gráfico No. 4 se visualizan las proporciones de los tres rubros para cada una de las dos Cajas: Aduana, Préstamos y suplementos, Depósitos. El Gráfico No. 5 muestra la incidencia de los tres rubros agrupados en los Ingresos de las dos Cajas principales.



**Gráfico 4. Aduana, Préstamos y suplementos, Depósitos de las dos Cajas principales. 1822- 1832.**



**Gráfico No. 5. Agrupamiento de los rubros de Aduana, Préstamos y suplementos, Depósitos y su incidencia en los INGRESOS de las dos Cajas principales. 1822-1832.**



### *Los Derechos de Propios y Arbitrios.*

La legislación de Indias declaró de competencia de los Cabildos el cobro y manejo de sus recursos, bajo la denominación de Propios y Arbitrios. Éstos abarcaban diferentes fuentes de ingresos, variaban en su aplicación es decir que lo que en un Cabildo era considerado como Propio, en otro podía ser Arbitrio. Las diferencias entre ambos radicaban en el lapso durante el cual el Cabildo

usufructuaba esa renta. Los Propios de ciudad se aplicaban regularmente y en el caso de los Arbitrios, en un plazo determinado con la posibilidad de renovarse.<sup>444</sup> Al suprimirse los Cabildos del Oriente entrerriano, las nuevas Receptorías reabsorbieron a estos impuestos para su uso local; en el caso de Paraná, luego de la abolición de su Cabildo en 1814, el procedimiento se habría repetido. A partir del 1822 y por las atribuciones concedidas estatutariamente, el Congreso provincial se encargó de fijar los ramos de Propios y sus montos. En la Planilla de tarifas de Derechos de Propios de 1822 y en la reformada de 1830 podemos conocer sus especificaciones: Introducción de ultramar, Introducción de Sudamérica, fábricas del Estado, anclaje de buques y otras menores relativas a juegos, reses para consumo o ganado en pie trasladado fuera de la provincia. (Urquiza Almandoz O., 1978, pp. 348-350).<sup>445</sup> La rendición de estos derechos no se integra a las cuentas de la Tesorería General sino que quedan en las receptorías. Comparando los valores de los rubros coincidentes entre la planilla de Derechos de la provincia y la de Propios para 1829 se puede observar que, en general, la imposición provincial es superior a la local. En tiempos de apremios económicos ocasionados por los conflictos internos, el gobernador con anuencia del Congreso, tomaba a título de préstamo una parte del ramo de Propios “cuya cantidad será abonada con preferencia a las primeras existencias”. León Solas y Pedro Espino, en los convulsionados años de 1830 y 1831, echaron mano a estos recursos para atender necesidades de armamento y movilizaciones del ejército en el territorio.<sup>446</sup>

### **VIII. 1.b.2. Variaciones de la política fiscal.**

La política fiscal tuvo sus variaciones signadas principalmente por el alto índice de conflictividad política interna y la guerra contra el Imperio del Brasil. Un Estado en formación influenciado por esta inestabilidad interna y por la presencia de la guerra trataba simultáneamente y con distinto éxito de consolidar la jurisdicción y controlar las áreas de frontera, aumentar los recursos fiscales,

---

<sup>444</sup> García García, Carmen *La crisis de las Haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845)*, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1996, Cap. I: Los ingresos locales, pp. 34-44.

<sup>445</sup> RLDAPER, T. I,

<sup>446</sup> RLDAPER, T. III, pp. 144, 147-148, 360-362. Nota de la Cámara al Poder Ejecutivo.

promover el comercio, proteger y promover las producciones locales, consolidar la base ganadera de su economía, evitar evasiones fiscales.

### *Las oscilaciones arancelarias*

Los derechos fiscales fueron reformados casi inmediatamente al arribo de Mansilla al gobierno, siendo las introducciones de ultramar las más gravadas, en especial los géneros, calzado, vestimentas y artículos de pertrecho naval; también se vieron beneficiados, con respecto a los de ultramar, productos provenientes de Sudamérica y especialmente de las Misiones. En cuanto a los impuestos a las extracciones de la provincia, éstos fueron bastante menores con respecto a los anteriores aplicados durante la República de Entre Ríos. (Urquiza Almandoz O. 1978: pp. 329-330). Pasado más de un año, algunos productos fueron elevados en su gravamen con interés proteccionista para artículos locales: la harina, que venía generalmente desde Estados Unidos al puerto de Buenos Aires, el arroz y las galletas, velas, cal y jabón importados. Con el mismo interés se prohibió exportar sebo en rama; asimismo, para evitar la falta de respaldo en metálico del circulante se prohibió la extracción de plata sellada.<sup>447</sup> En ocasiones y a fin de favorecer temporalmente el intercambio comercial entre provincias vecinas, el Gobierno decretaba la introducción y extracción libre de derechos de diversa mercadería. O bien, en ocasión de conflicto suspendía toda relación comercial, como ocurrió por ejemplo en momentos de máxima tensión entre el Gob. Mansilla y el Gob. López luego de la conspiración de 1823 y las disidencias en torno al Tratado con la Comisión Oriental: paralizó el comercio de abasto con Santa Fe realizado por los botes de la carrera y todo tráfico entre las dos provincias. La respuesta de López a esa decisión nos muestra otra evidencia de la coexistencia entre nociones de la “antigua constitución” y las ilustradas:

“... son medidas que están en contradicción no sólo con el derecho de gentes, sino a las luces del siglo, y a la conducta ilustrada que anteriormente ha hecho tanto honor al Señor Gobernador del Entre Ríos.”<sup>448</sup>

---

<sup>447</sup> RLDAPER, T. I, pp. 13-16, 21-22, 124, 200-201, 225-226, 318-319.

<sup>448</sup> RLDAPER, T. I, Disposiciones de 3 de junio y 30 de noviembre 1823. La primera alude al comercio con las Misiones luego de firmarse un tratado que implicaba además una alianza ofensiva y defensiva. La segunda corresponde a la exoneración de derechos sobre caballos llevados a la Banda Oriental siempre que se retornara ganado a Entre Ríos; para evitar fraudes se les exigió una fianza que se levantaría una vez hecha la transacción. En cuanto a la suspensión del tráfico comercial con Santa Fe, ver Bosch B., 1942, p. 33.

Luego de los enfrentamientos internos o de atravesar las vicisitudes de la guerra contra el Brasil, las arcas del Estado quedaron debilitadas por lo que se resolvió sumar a otras especies al pago de derechos, hecho que ocurrió con la exportación de ganado en pie vacuno, caballar y mular legislado en octubre de 1827. Al finalizar ese conflicto bélico, se volvieron a discutir los derechos de tránsito. Entre 1828 y 1829, esos gravámenes fueron liberados para las mercancías de ultramar y de las provincias rioplatenses que, desde los pueblos entrerrianos fueran redistribuidas con destino a Corrientes, las Misiones y la Provincia Oriental, a fin de no encarecer los productos ni desalentar el comercio.

449

Además, el Congreso Provincial estableció la Planilla de Tarifas de derechos de entrada y salida que se cobrarían en las aduanas de Entre Ríos desde 1830 a partir de una propuesta de León Solas. Según sus apreciaciones se desprende que desde 1825 se había enfrentado a la introducción fraudulenta con derechos recargados en un concepto erróneo de política tributaria, por lo cual los derechos de ultramar se tornaron más moderados; procurar más introducciones con un control simultáneo sobre el contrabando parecía más beneficioso a los intereses del Estado. Esta Planilla es la más completa en cuanto a la formalización, selección y organización de rubros en contraposición a la documentación fragmentada hallada hasta el momento.<sup>450</sup>

#### *Controles y medidas para la recuperación del stock ganadero*

Diversas medidas tendieron a controlar el tráfico y cuidar la reproducción del ganado. A fines de 1821 el Congreso provincial sancionó la ley de permiso de extracción mular para territorios de los portugueses; el comercio de mulas para su uso en las minas de oro y piedras preciosas del Brasil ya se realizaba desde la época colonial y constituía un mercado muy importante para los ganaderos del Litoral. Las periódicas prohibiciones de matanzas de yeguas o de extracción de caballos y de vacas como comercio exterior tuvieron como objetivo mantener el número de rodeos y regular el stock no solo para el consumo sino

---

<sup>449</sup> RLDAPER, T. II, pp. 349-350. T. III, pp. 55-59.

<sup>450</sup> RLDAPER, T. III, pp. 64-65, 88-90.

también para asegurar la disponibilidad de estos animales en las tareas pecuarias y la caballada a los ejércitos provinciales en épocas conflictivas cuando sus movilizaciones eran muy frecuentes. En 1831, la reglamentación sobre los establecimientos saladeriles prohibió la faena de vacas. En lo referente al abasto de carne a las poblaciones, los impuestos subían o bajaban o las extracciones fuera de la provincia eran suspendidas o reducidas, en la medida en que se relacionaban las existencias y el nivel de consumo.<sup>451</sup>

*Control del fraude al fisco: conexiones institucionales, cooperación interprovincial, vigilancia fronteriza.*

El comercio clandestino defraudaba notablemente a los fondos públicos y generaba protestas de los comerciantes que cumplían impositivamente. Los distintos gobiernos durante el período de nuestro estudio dictaron reglamentos y medidas concretas para evitar el contrabando; con el mismo objetivo se pactaron relaciones de cooperación fronteriza con otras provincias en tiempos de relativa paz, por ejemplo con Santa Fe.<sup>452</sup> La ley de 1821 referida al tráfico de mulas fijó controles de ventas con la intervención de los comandantes principales de Paraná y Uruguay, quienes debían asegurar el pago del impuesto en la Receptoría local y fijar los lugares permitidos de paso fluvial en una frontera que era como ya vimos muy permeable<sup>453</sup>; el artículo final establecía beneficios tributarios a todo aquel denunciante de extracciones clandestinas. A efectos de un mejor control tributario, desde 1823 se instaló una Oficina de Rentas y destacamento militar en la Isla del Pillo al oeste de Gualeguay y a orillas del río Paraná; esta isla era paso obligado para cruzar mercaderías y ganado en pie hacia la ciudad de Buenos Aires y sus Partidos del Norte.<sup>454</sup>

La situación de guerra con el imperio brasileño propició un incremento del comercio clandestino que involucró especialmente a las costas del río Uruguay. Así lo hace notar Roberto Schmit quien, en base a documentación diplomática brasileña, destacó que ese comercio en zonas fronterizas empleaba

---

<sup>451</sup> RLDAPER, T. II, pp. 440-441. 465-466. T. III: pp. 101, 157-159, 324-325.

<sup>452</sup> Papeles de López, Vol. II, doc. 415: En octubre de 1822, Estanislao López recibió a los contrabandistas Fabián Cardozo y Juan Eustaquio Ayala, interceptados con cargamentos de cueros de bagual, nutria y crin, sin licencia alguna. Los mismos fueron apresados en la Villa del Paraná y remitidos a Santa Fe por el Gob. Mansilla por convenio de reciprocidad en esta materia.

<sup>453</sup> RLDAPER, T. I, p. 341.

<sup>454</sup> RLDAPER, T. I, pp. 318-319.

embarcaciones pequeñas de ingleses y americanos para concretar intercambios lucrativos en medio del conflicto (Schmit R., 2004, p. 137). Luego del sofocamiento de las revueltas de enero de 1827, el gobierno entrerriano decidió extremar recaudos sobre la defraudación de la renta para afrontar los gastos bélicos. Existía una preocupación no solo de sancionar a los que no pagaban sino reconocer explícitamente a los que cumplían con los impuestos. Tanto Vicente Zapata como el nuevo gobernador García de Zúñiga decretaron sendas reglamentaciones para paliar la evasión, estableciendo acciones penales por falta de guías, manifiestos y permisos, multas por errores de romaneo y destino de lo decomisado; la obligación de denunciar y aprehender a los contrabandistas por parte de vecinos y funcionarios administrativos y militares iba acompañada de recompensas derivadas de los decomisos. Pero no solo existía la preocupación fiscal sino la de los propietarios ganaderos que veían menguar sus rodeos por abigeato y por el comercio ilegal hacia la Provincia Oriental y el sur del Brasil.<sup>455</sup> Hacia 1830, se sancionó un Decreto Ley de Aduana que contempló procedimientos de registro y archivo en todas las aduanas provinciales, funciones de Capitanes y Vistas de Aduana y diversos recaudos para combatir las transacciones clandestinas, todo lo cual fue mejorándose a través de otros decretos complementarios sucesivos.<sup>456</sup>

#### *Lineamientos de la política monetaria*

En Entre Ríos no se emitió moneda propia en el período; el metálico disponible se componía básicamente de monedas de oro y plata que circulaban desde el período colonial hispánico, especialmente las de plata de la Ceca potosina. En 1823, el gobierno de Entre Ríos admitió la moneda de cobre circulante en Buenos Aires que hasta 1827 todavía se utilizaba; la misma por sus valores pequeños facilitaba los circuitos de intercambio del menudeo (Schmit R., 2004, pp.224). A fines de 1825 se permitió la circulación de papel moneda (17 pesos por onza oro en su valor nominal), emitido por el Banco Nacional recientemente creado por el Congreso en Buenos Aires y distribuido a través de

---

<sup>455</sup> RLDAPER, T. I, pp. 39-41. T. II, , Dcto del 21/2/27, pp. 225-256. Dcto y Adicionales del 26/4/27, pp. 253-257. Pressel, Griselda "Estrategias comerciales – negocios ilegales en tiempo de guerra. El matrimonio Chilotequi en el oriente entrerriano a mediados del siglo XIX", *Scientia Interfluvius*, Vol. II, Número 2, 2011, pp. 9-10.

<sup>456</sup> RLDAPER, T. III, pp. 136-138, 269-270, 284-285, 289-291.

sucursales en toda la región lo cual suscitó, un año más tarde, un agudo conflicto interno. En el Interior y en el Litoral rioplatense incluyendo a la Provincia Oriental, hubo fuerte resistencia a su aceptación. Uno de los principales motivos radicaba en la creciente depreciación del papel moneda por el colapso financiero originado por la guerra con el Brasil, que mal suplía la escasez de circulante acrecentado luego de la Independencia.<sup>457</sup> En Entre Ríos, diputados del Congreso Provincial como Justo José de Urquiza y José Manuel Funes habían analizado en comisión la conveniencia de esta circulación y la aconsejaban porque consideraban que tenía suficiente garantía. La Ley fue dictada el 19 de diciembre de 1826, al menos mientras durara la guerra contra el Brasil, en medio de otras medidas que indicaban la grave situación monetaria que sufría la provincia; en efecto, la falta de moneda de cobre dificultaba las transacciones al menudeo lo que provocó la prohibición oficial de su extracción; esto fue complementado con una disposición que ordenaba imprimir pesos moneda de un real. Una Ley del Congreso Provincial, que avalaba la decisión del gobernador Vicente Zapata, intentó terminar con el rechazo al uso del papel moneda, estableciendo fuertes multas pero esta presión, sumada a la creciente depreciación que llevó su valor nominal a 50 pesos por onza oro hizo insostenible su curso monetario. Ricardo López Jordán, en su carácter de gobernador delegado de Zapata, advirtió al Congreso Provincial sobre el descontento general que habían provocado tales decisiones. Descontento que terminó en revueltas lideradas por los comandantes departamentales de campaña. Las demandas excedieron la cuestión monetaria y llegaron a pedir la expulsión de todos los porteños que tenían cargos en el gobierno, una demanda que en otros tiempos ya había sido planteada y ahora volvía a resurgir. Las consecuencias concretas de la revuelta por la imposición fiscal fue la derogación de la Ley que autorizaba la circulación de papel moneda porteño el 13 de enero de 1827 y como ya vimos oportunamente, la renuncia del gobernador Zapata y el

---

<sup>457</sup> Irigoin Ma. Alejandra "La fabricación de moneda en Buenos Aires y Potosí y la transformación de la economía colonial en el Río de la Plata (1820-1860) en Irigoin Ma. Alejandra y Schmit Roberto (Eds.), 2003, pp. 65-68. González Demuro Wilson "La guerra en los papeles. El impacto económico de las luchas por la independencia en la prensa oriental entre 1824 y 1829" Ponencia I Congreso Latinoamericano y 4tas. Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, 5-7 diciembre 2007.

nombramiento en el alto cargo de Mateo García de Zúñiga.<sup>458</sup> Casi dos meses más tarde, evaluando el descrédito de la moneda de cobre en Entre Ríos y las alteraciones en su emisión por parte del Banco de Buenos Aires, el Congreso Provincial declaró de libre aceptación o rechazo a dicho medio como cambio o pago. El gobierno provincial sin embargo dispuso que no recibiría cobre para pagos fiscales, es decir que esa moneda solo quedó para transacciones comerciales.<sup>459</sup>

*Producciones domésticas y colonización extranjera.*

Luego de 1820, la inmigración y la colonización agrícola comenzaron a evaluarse como herramientas de fomento y transformación económica en los Estados provinciales en formación, especialmente Buenos Aires y Entre Ríos. Estos planes se vieron favorecidos por un mercado bursátil londinense ávido de invertir sus enormes excedentes en América y por las buenas relaciones entre Gran Bretaña y las Provincias Unidas a través del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825. Recordemos también que eran tiempos de estrecha vinculación política entre el gobierno porteño y el entrerriano lo que hacía que para ciertos asuntos se marchara en consonancia y cooperación. En este marco, se impulsaron novedosas experiencias colonizadoras para alentar a las producciones domésticas e introducir nuevas técnicas y hábitos de trabajo más estables en el mundo rural entrerriano. Así, en 1825 Juan de Almagro, fuerte hacendado con establecimientos en Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, hizo una propuesta a las autoridades provinciales para instalar una colonia agrícola con familias extranjeras en campos de su propiedad y aparentemente con su propio capital. El Congreso aceptó el proyecto disponiendo una serie de franquicias por 10 años: liberalización de derechos de exportación de sus productos agrícolas y de industria y de los de introducción de herramientas y útiles de trabajo, exención de contribuciones y de prestaciones militares; sumado a esto se les otorgaba el goce de los derechos de ciudadanía a perpetuidad. En el mismo año la empresa River Plate Agricultural Association presidida por John T. Barber Beaumont propuso un plan colonizador con inmigrantes ingleses, escoceses e irlandeses. Los comerciantes porteños Félix Castro y Sebastián

---

<sup>458</sup> RLDAPER T. II, pp. 187, 195, 197, 199, 208-209, 214-215. Schmit R., 2003, pp. 264-266.

<sup>459</sup> RLDAPER, T. II., Decreto del 12/3/27, p. 243, Acuerdo de 13/3/27, p. 244. p. 295.



Lezica se asociaron como accionistas de la empresa y, junto con James Brittain, conformaron una Junta directiva en Buenos Aires -con bastante autonomía de la sede en Londres- y efectuaron compras de terrenos privados en Entre Ríos. El ofrecimiento de exenciones por parte del gobierno entrerriano fue similar al hecho para Almagro y la empresa se puso en marcha. En 1826, el contingente se instaló en la calera de Barquín sobre el área fronteriza del río Uruguay, entre los arroyos Palmar y Yeruá. Pese a la buena recepción oficial de los proyectos, que es lo que nos interesa marcar en cuanto a la orientación de la política económica, tanto el de Almagro como el de Beaumont no prosperaron por diversas razones. En el caso de la River Plate A. A., al parecer convergieron la mala administración local y empresarial y el acceso al gobierno del grupo antiporteño del Uruguay que comenzó a interponer dificultades al desenvolvimiento de la colonia.<sup>460</sup>

### **VIII.1.b.3. Los gastos**

#### *Los gastos militares.*

En el total de egresos de toda la serie temporal que analizamos, los gastos militares sobresalen del resto y se componen básicamente de: sueldos militares –Comandantes, oficiales, contralores, compañías de soldados de todos los Departamentos principales y subalternos y piquetes de ronda y vigilancia-, gastos de la Comisaría General del Paraná<sup>461</sup>, asignaciones semanales por comisión para los oficiales, abasto a las tropas de reses en pie, carne, yerba mate, tabaco, vestuarios, armas, compostura de armas, caballada y monturas, servicios a los cuarteles, gastos de movilización, entre otros.

La paga militar se organizaba a través de listas de prest y Estado general de la fuerza que contenían asistencia mensual, licencias tomadas, número de efectivos y cualquier otro detalle que formalizara la pertenencia y el desempeño

---

<sup>460</sup> RLDAPER, T. II, pp. 53-54; Gallo, Klaus “Argentina en el mundo” en Gelman J. (Coord y Dr.) Argentina, 2010, pp. 124-126; Djenderedjian J., 2008a, pp. 216-224; Chianelli T., 1980, pp.44-65; J. A. B. Beaumont, London, J. Ridgway, 1828, pp. 115 y 163. (Consulta 30/4/2015) Acceso: <http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/libros-digitalizados-de-viajeros-al-rio-de-la-plata-siglo-xix>

<sup>461</sup> Estos gastos comprendían: dirección y gastos de las fábricas del Estado incluida las de armas, provisión de almacenes, abasto y raciones de carne, maíz, sal entre otros productos tanto al Hospital como a las guarniciones militares. RLDAPER, T. I, pp. 290-291.

en la estructura militar.<sup>462</sup> Pero sabemos que en la composición de las guarniciones no todas las divisiones aparecen en las listas de revista ni en los Estados generales de la fuerza, especialmente de compañías de milicianos que son pagas, con lo cual presumimos que hay otra vía informal de registro de sueldos y por lo tanto estamos manejando cifras incompletas. Por otra parte, inferimos otras formas de pago a oficiales, soldados y milicianos que no respondían a salarios regulares en metálico, a partir del conocimiento del caso del aparato militar santafesino para el mismo período: artículos de consumo, cueros, algún ganado-, exención de derechos, otorgamiento de licencias de paso de ganado, entrega de parcelas de terrenos confiscados o baldíos, etc.<sup>463</sup>

### *Sueldos civiles, políticos y de hacienda*

Toda la planta civil, política y de Hacienda estaba asentada en planillas mensuales generalmente visadas por el gobernador o ministros. Los sueldos de Hacienda y resguardo comprendían cargos y empleos de Ministros, oficiales de Contaduría, Capitán de puerto y dependientes de Aduana. Los civiles y políticos correspondían a diputados, Secretario del congreso, escribanos, secretarios, Ministros, médicos del Hospital, Mayordomo de fábricas del Estado, imprenta, capataz de invernada y peones de las Estancias del Estado.

La ponderación de las necesidades más urgentes de abastecimiento hizo que desde mediados del año 1827 se abonaran medios sueldos de los administrativos, dando preferencia a los pagos de carne, leña, agua y servicios de correo que suponemos fueron imputados al rubro militar. A partir de 1830, una evaluación de las arcas fiscales dictaminó la necesidad de economizar sobre las remuneraciones. El Congreso provincial formuló dos leyes al respecto: suprimió las dietas de los diputados, que desde 1821 eran de 70 pesos mensuales fundamentándose en que dichos cargos debían constituir un servicio

---

<sup>462</sup> AGPER, Hacienda Serie I. Libros de copias de documentos comprobantes de la provincia y Libros Mayores o de Caja, expedido por la Contaduría General de Paraná y por la Tesorería General. Las listas de las formaciones armadas en AGPER, Sección Gobierno, Serie XI C, Asuntos militares 1820-1896, Carpetas 8 a 15 (1822-1832)

<sup>463</sup> AGPSF, Contaduría, Tomo 45. Schmit afirma que ante la escasez del erario, los servicios militares bajo el precepto de servicios a la patria abrían una negociación de servicios a cambio del reconocimiento de derechos propios de los "ciudadanos" que otorgaba a los grupos subalternos, por ejemplo, el asentamiento en usufructo sobre tierras fiscales. Schmit R., 2004, pp. 181-186.

gratuito dada la escasez del erario; por otro lado fijó rebaja en todos los sueldos en lo Civil, Hacienda y Guerra. En 1832, se reconsideró la gratuidad del cargo de diputado y por ley se restablecieron los 70 pesos mensuales.<sup>464</sup>

Como ya advertimos, los sueldos impagos de la administración de los cargos administrativos y militares conformaban parte de la deuda pública. A lo largo del período se sucedieron numerosos pedidos de pago de sueldos atrasados y de ajuste de sueldos.<sup>465</sup> En 1830, el gobierno decidió suspender los pagos de deudas atrasadas aunque ya estuvieran ordenados por el gobierno.<sup>466</sup>

#### *Pago a los prestamistas y suplementistas*

Este rubro de los egresos correspondía al pago de las obligaciones con prestamistas y suplementistas particulares, en sumas de metálico pero preponderantemente en la aceptación de documentos de créditos para el pago de cargas fiscales. Este tipo de devolución no siempre se concretaba en Letras enteras, la Tesorería irá regulando las sumas pagando a veces por mitades o terceras partes y si eran endosos, en quintas partes.<sup>467</sup> No pudimos detectar si las eventuales entregas de tierras como pago a los acreedores quedaron asentadas en numerario dentro de los estados contables.

**CUADRO III. ENTRE RÍOS. Total Egresos de las dos Cajas principales y porcentajes de Gastos militares, Sueldos civiles, políticos y de hacienda, Pago a prestamistas. 1822-1832.**

	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
<b>TOTAL Egresos</b>	92.280	95.024	68.230	61.829	47.508	46.756	41.079	67.374	44.262	45.264	49.082
<b>Gastos militares</b>	35 %	56 %	51 %	55 %	52 %	61 %	63 %	51 %	75 %	55 %	53 %
<b>Sueldos</b>	10 %	12 %	17 %	23 %	26%	23 %	19 %	25 %	17%	17%	24 %
<b>Pago préstam.</b>	5 %	16 %	26 %	17 %	15 %	12 %	14 %	20%	3 %	11 %	16 %
<b>TOTAL</b>	<b>50 %</b>	<b>84 %</b>	<b>94 %</b>	<b>95 %</b>	<b>93 %</b>	<b>96 %</b>	<b>96 %</b>	<b>96 %</b>	<b>95 %</b>	<b>83 %</b>	<b>93 %</b>

Gráfico realizado en base a Cuadros C y C Bis en Anexo final.

<sup>464</sup> RLDAPER, T. I, pp. 51-52, T. II 324-325, T. III pp. 75-76, 79-84, 455-456.

<sup>465</sup> AGPER, Hacienda Serie XI A Caja 1 1820-1863, Legs 6 a 12. Gobierno, Serie I, Carp. 5, f. 1745. Hacienda Serie I y Contaduría Gral., carpetas 10, 13, 16, 21. RLDAPER, T.I, pp. 236-239

<sup>466</sup> RLDAPER, T. III, pp. 127-128.

<sup>467</sup> RLDAPER, T. III, pp. 48-49, p. 427.

Los gastos militares comprenden entre el 51 y 75 % entre 1823 y 1832, correspondiéndose con sucesos altamente conflictivos analizados en el Cap. VII.2. El porcentaje de 35% para 1822 no refleja todos los gastos militares realizados. Hemos comprobado que en la Caja de Paraná el rubro Varios Gastos del Estado suma 34.537,1 pesos, conteniendo gran variedad de egresos con registros mezclados que inferimos tiene un fuerte componente militar – recordemos las movilizaciones a causa de las invasiones en la frontera Este-. En primer lugar esta comprobación nos coloca ante una situación de insuficiente sistematización y discriminación de las cuentas lo que luego de 1823 se empezará a corregir; en segundo lugar, ese 35% se abultaría si realizáramos una indagación en el interior del rubro Varios Gastos, pero preferimos por ahora tomar en cuenta solo la cifra asentada bajo la denominación oficial de Gastos Militares.

Los sueldos civiles, políticos y de hacienda muestran entre 1822 y 1826 un crecimiento sostenido del gasto teniendo en cuenta que la estructura estatal se va complejizando y se incorporan más empleados: del 10% al 26%. La disminución de 1827 que todavía regía en 1828 denota el pago de la mitad de los sueldos dispuesta ese año: un 23 % y para 1828 un 19 %. Al año siguiente sube a 25%, cuando las finanzas públicas se ven mejoradas por la cantidad de ingresos fiscales y teniendo en cuenta que en ese año se duplica el número de diputados. Para 1830 y 1831 disminuye al 17 % en ambos años cuando las dietas de los diputados son suprimidas, se rebajan los sueldos y se suspende el abono de sueldos impagos. En 1832 el aumento al 24 % indicaría ese regreso al pago de mensuales a los diputados más el abono de sueldos impagos y algunos ajustes de sueldos. Vale para todo el período la posibilidad cierta de que algunas remuneraciones sean abonadas sin registro o por otras vías. Sería el caso de los sueldos del gobernador que no aparecen en las planillas, salvo algunas sumas menores así consignadas en la Caja del Uruguay, por ejemplo, en 1823 cuando Lucio Mansilla fijó temporalmente su residencia en esa Villa para comandar directamente las acciones contra los exiliados en la Banda Oriental derivando luego en las rebeliones de fines de ese año que ya analizamos.<sup>468</sup>

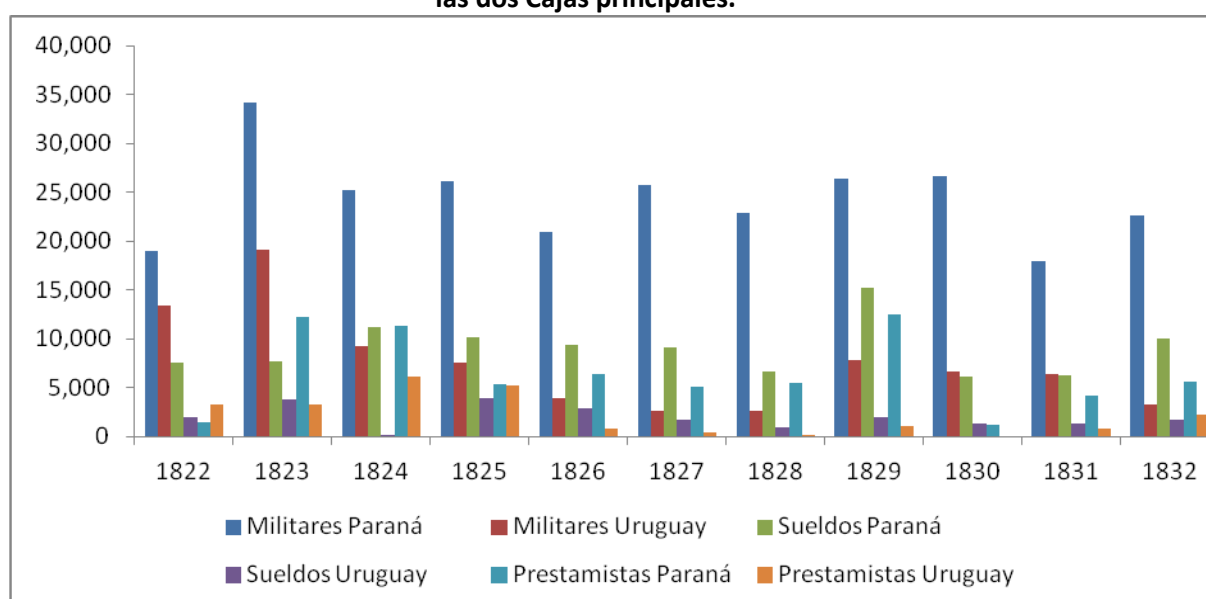
---

<sup>468</sup> RLDAPER, T. I, pp. 293-294.

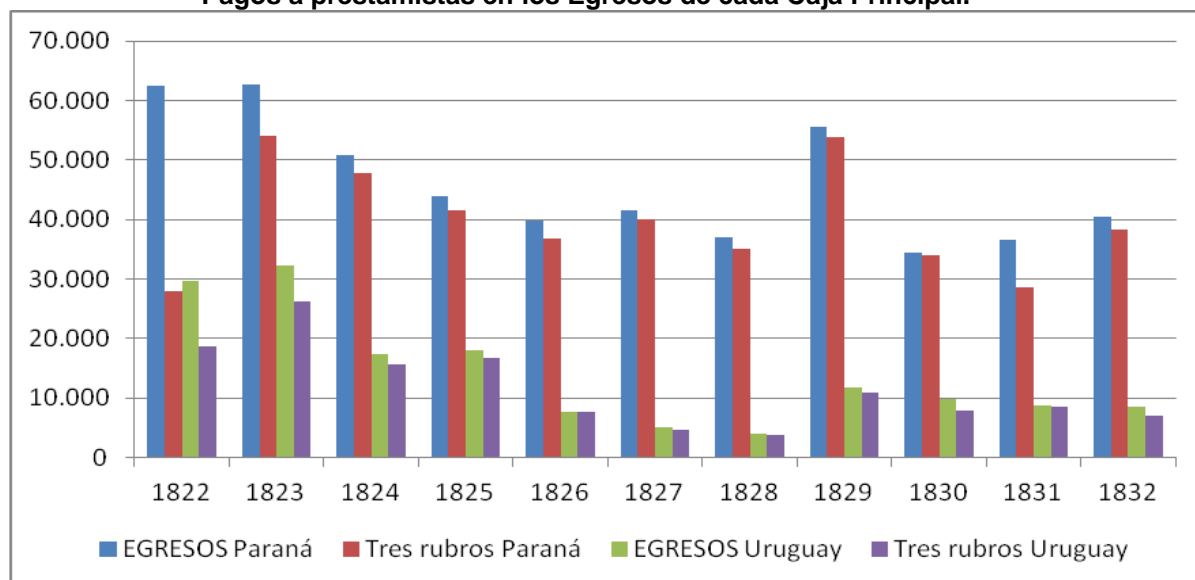
El pago a prestamistas es muy bajo en 1822: un 5 %, pues los préstamos tomados son más que los pagados. La suba de 1823 coincide con el rescate de las Letras emitidas por el empréstito de noviembre de 1822: un 16 %. Al año siguiente sube el pago al 26 %, recordemos que Mansilla gestionó fondos ante Buenos Aires para saldar deudas con comerciantes y sueldos impagos. Entre 1825 y 1828 los porcentajes van entre 12 y 17 %, privilegiándose los gastos militares ocasionados por el conflicto con el Brasil y la inestabilidad política del cuatrienio. Como vimos, el alza de ingresos de 1829 permite atender estas deudas internas con lo cual el porcentaje se eleva al 20 %, sin perjuicio de que en agosto de ese año se vuelve al descuento de derechos solo con la mitad o tercera parte de las Letras que se presentan. El 3% de 1830 contrasta con el 75 % de los gastos militares registrado el mismo año. El bienio 1831-1832 muestra una suba progresiva de los ingresos fiscales y una disminución de gastos militares en un 22 a 25 % aunque estos siguen siendo la mitad de los egresos: la paga a prestamistas asciende a un 11% y un 16% para cada uno de esos años.

En el Gráfico No. 6 se visualizan las proporciones de los tres rubros para cada una de las dos Cajas: Gastos militares, Sueldos civiles, políticos y de hacienda, Pago a prestamistas. El Gráfico No. 7 muestra la incidencia de los tres rubros agrupados en los Egresos de las dos Cajas principales.

**Gráfico No. 6: Gastos militares, Sueldos civiles, políticos y de hacienda, Pago a prestamistas, de las dos Cajas principales.**



**Cuadro No. 7 Incidencia de los Gastos Militares, Sueldos civiles, políticos y de hacienda, Pagos a prestamistas en los Egresos de cada Caja Principal.**



## VIII.2. Las finanzas públicas de Entre Ríos: algunas comparaciones con otras experiencias fiscales rioplatenses del período.

Desde 1820, según lo muestran estudios realizados para otros Estados provinciales en formación, las finanzas públicas se sostuvieron con rentas originadas básicamente en impuestos indirectos y préstamos destinados en su mayoría a gastos militares. El impacto de los conflictos armados se manifestó en una recaudación fiscal frecuentemente deprimida, en fuertes endeudamientos internos y externos, en abultadas erogaciones sobre los fondos públicos, en obstáculos para el normal desarrollo de las actividades socio-económicas. Esta situación tuvo continuidad hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX en que se produjo una reorganización general del fisco y sobre todo a la tributación. La misma se basó en nuevos cuerpos legales provinciales, dentro del marco mayor de la Constitución de 1853 y de la Confederación Argentina.<sup>469</sup> Se exceptúa de

<sup>469</sup> Estas transformaciones fiscales en la Confederación argentina fueron analizadas en detalle por Claudia E. Herrera, en "Rupturas y continuidades en los sistemas fiscales: Antiguo régimen y Estado liberal en Argentina y España". Rey Tristán, E y Calvo González, P. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, SET/2010. Univ. Santiago de Compostela, Centro Interdisciplinario Gumersindo Busto, CEEI, España pp.42-59, Cursos e Congresos; 196. Acceso: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00529124/document> (Consulta 30/4/2015)

esta última consideración a la Provincia Oriental que, en 1829, se constituirá en otra entidad política, la República Oriental del Uruguay.

Si comparamos las cuentas de Entre Ríos con las de otras experiencias provinciales ya mencionadas<sup>470</sup>, podemos establecer algunas comparaciones que nos proporcionan ciertas similitudes y diferencias. En primer lugar, la base contable conservó en gran medida las formas coloniales. En cuanto a las variaciones fiscales producidas, éstas concordaron con políticas proteccionistas para algunos productos, así como con ciertas necesidades del Estado derivadas muchas veces de las invasiones indígenas y/o de los conflictos armados y de otras vicisitudes socio-políticas tanto internas como externas.

El patrón monetario empleado era generalmente el peso fuerte que se mantuvo por todo el período contemplado. La emisión de papel moneda en algunas provincias fue esporádica y de circulación mayormente restringida a sus jurisdicciones. Salvo el papel moneda y la moneda de cobre introducidos por el Banco Nacional de Buenos Aires, en medio de la experiencia bélica contra el Brasil y que fueron rechazados y/o desacreditados para su circulación tanto en el interior como en el litoral rioplatense. El tema de las emisiones monetarias provinciales es de por sí muy interesante y bastante poco explorado como problema de conjunto en el Río de la Plata. En efecto, hay numerosos vacíos de conocimiento acerca de las conexiones monetarias entre las provincias y su evolución a lo largo del siglo XIX, la influencia de los cambios en los precios de las monedas y las diversas estrategias fiscales en los precios y rentabilidades de los negocios, investigaciones que permitirían evaluar el impacto de estas relaciones en cada región a la vez que componer una de las bases por la que se sostienen no solo los circuitos económicos sino también las alianzas políticas del período y el grado de estatalidad alcanzado (Schmit, R.: 2006; Gelman J. (Comp.) 2006).

En lo relativo a la presentación de Presupuestos no constituiría una norma de cumplimiento sistemático tanto en Entre Ríos como en los casos analizados, salvo en Buenos Aires que por lo menos lo tenía dispuesto en las reformas de 1821 y fue cumplido con bastante periodicidad desde 1830.

---

<sup>470</sup> Cf. "Un recorrido por otras experiencias fiscales rioplatenses del período" en el Anexo Final.

Si nos detenemos en el rubro Ingresos, observamos que la Aduana suministra la mayor parte de los recursos genuinos en casi todas, pero Buenos Aires resalta tomando en cuenta los volúmenes altísimos especialmente de la entrada marítima; distinto es en las finanzas orientales en situación de guerra, pues los puertos de Montevideo y Colonia estaban bajo control portugués y no se podía recaudar por aduana obligando a las autoridades a implementar impuestos directos sobre propiedades y giros comerciales. La retención de las rentas aduaneras por parte de Buenos Aires originó los reclamos de las otras provincias, entendían que las mismas eran un patrimonio a repartirse entre todas. Desde 1822, la solución provisoria que acalló en cierta forma dichos reclamos fue la entrega de auxilios y subvenciones periódicas a modo de parcial redistribución de esos recursos, aunque Buenos Aires seguía reservándose la regulación de su uso. Esta cuestión central en las relaciones interprovinciales fue tratado más específicamente en la investigación que utilizamos para analizar las finanzas públicas santafesinas. Y estas afirmaciones nos llevan a los préstamos realizados desde la Caja porteña a las otras administraciones. Si bien la cifra de remesas a las provincias, según cálculo realizado sobre las cuentas de esa Caja es baja<sup>471</sup>, de ella se desprenden dos cuestiones. Primero, este auxilio no hacía prácticamente mella en su masa fiscal pero para las ahogadas tesorerías receptoras eran sumas que paliaban déficits y podían mejorar las relaciones con sus acreedores internos en tanto se usaran para devolución de préstamos, como vimos en el caso entrerriano y también fue evidenciado para Santa Fe. En segundo término, Entre Ríos es la primera en la lista de beneficiadas dentro del 1.6% derivados de los ingresos de la Caja porteña para el trienio 1822-1824. En las cifras de ese trienio podemos incluir, dentro de la cifra de 46.225 pesos asignados a Entre Ríos, el préstamo de 18.000 pactado con Buenos Aires en 1823. En los años posteriores reconstruidos por Halperin Donghi -1825 a 1834-

---

<sup>471</sup> Se encuentran datos disponibles para el período 1822-1828 según el estudio de Halperin sobre Guerra y Finanzas de Buenos Aires: Total a las provincias: 965.901. Total de gastos: 38.604.410 pesos. Porcentaje de remesas sobre el total de gastos: 2.5 % . Total de ingresos: 25.952.836 pesos. Porcentaje de remesas sobre el total de ingresos: 3.7 %. De este porcentaje, desdoblamos un trienio 1822 y 1824 en el que lo remitido a las provincias representa, de acuerdo a los ingresos: 1.6% pero en el cuatrienio 1825-1828 la carga se eleva porque coincide con la guerra contra el Brasil y los auxilios especiales a la Provincia Oriental: 2.7 % Si queremos reflejar las remesas en la masa de gastos pero discriminados en el trienio y luego en el cuatrienio tenemos el siguiente porcentaje: 1.3% por un lado y casi 5% por el otro.



no hay discriminación de los destinos de esas remesas porteñas por lo que esa fuente no nos proporciona datos sobre lo recibido por Entre Ríos. Sí sabemos por la investigación de José Carlos Chiaramonte que el total de la deuda externa entrerriana contabilizada entre 1825 y 1828 fue de 30.805 pesos. Chiaramonte J. C. 1986, p. 191).

Los préstamos internos en Entre Ríos no tienen procedencia eclesiástica a diferencia de los aportes del clero en el caso de Córdoba, suponiendo que éstos ya se efectuaran desde la creación de la provincia en 1820. Las solicitudes de préstamos y suplementos alcanzan no solo a los dos centros más importantes como las Villas luego ciudades del Paraná y del Uruguay sino también pequeños poblados del interior, más repartido entonces que en Santa Fe y posiblemente Corrientes, donde casi su totalidad procede de los vecinos de la ciudad capital. Los pagos de la deuda interna corren por dos vías predominantes: presentación de Letras de descuento en la Aduana -con lo cual los comerciantes eran los que podían recuperar rápida y fácilmente el dinero prestado- y pagos efectivos generalmente con intereses variables.

La importante cuestión de la Contribución Directa se presenta variable en los casos escogidos, mientras que la política fiscal de Córdoba y Corrientes procuró evitar explícitamente imposiciones sobre el capital propietario, en Santa Fe no hay menciones oficiales explícitas de ningún tipo. En cuanto a la Provincia Oriental, se sabe de la aprobación del proyecto para percibir la Contribución Directa pero no sobre su implementación y respuestas de los sujetos comprendidos en esa obligación; en el caso de Buenos Aires si bien hay un rubro con esa denominación, su recaudación es mínima en orden a los ingresos totales. Un estudio sobre las variaciones de la aplicación de la Contribución Directa en Buenos Aires desde 1821 hasta la caída de Rosas nos muestra: las resistencias al pago de este tributo, la dificultad de medir la riqueza de los propietarios, la poca confiabilidad de los censos existentes y su conversión finalmente a impuestos indirectos al consumidor.<sup>472</sup> En Entre Ríos no tenemos

---

<sup>472</sup> Gelman, Jorge y Santilli, Daniel "Los límites de un proceso modernizador. La contribución directa en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX" en Actas XIV Internacional Economic History Congress, Helsinki, Finland, 21-25 August, 2006. El libro coordinado por Luis Jáuregui *De riqueza e inequidad. El problema de las contribuciones directas en América Latina, siglo XIX*, Inst. Mora, México, 2006, discute sobre los erarios de las repúblicas iberoamericanas

rubros específicos referidos a ese tipo de recaudación en el período analizado, pero podemos pensar en que en el interés manifestado por conocer el giro anual de comerciantes, tenderos, pulperos y habilitados, existe una intención de evaluar las capacidades de cada uno a efectos de requerir, en todo caso, contribuciones directas embozadas dentro de la forma de empréstito forzoso o voluntario, que difiere del impuesto por la posibilidad de recuperar lo prestado o suplementado.

El volumen de gastos militares ocupa un primer lugar por las contiendas interprovinciales entabladas, mantenimiento del orden interno, campañas en las fronteras, gastos por la guerra contra el Brasil, excepto en la Provincia Oriental en que los gastos serían absorbidos por el llamado Gobierno Nacional en Buenos Aires para quien el compromiso de liberarla de los portugueses e incorporarla a las Provincias Unidas del Río de la Plata era primordial y por lo tanto, asumía los costos económicos. Otra excepción es el caso de la provincia de Buenos Aires: el rubro gastos militares es superado por el de pago a prestamistas internos y externos; ocurre que la reforma militar de 1821 había reducido a los cuadros militares, desplazándolos hacia la frontera sur y suroeste a fin de encarar un plan de expansión de tierras que incluía diversas tratativas con los indígenas pampas y ranqueles: acuerdos de paz e intercambios o bien las “entradas” violentas de sometimiento, al estilo de las implementadas en la colonia, que encaraba a veces en conjunto con otras provincias en la década de 1820. También Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Corrientes organizaron campañas militares comunes contra los abipones del Valle Calchaquí, que incursionaban frecuentemente en la frontera productiva común a todas ellas. Entre Ríos carecía de asentamientos indígenas organizados en su territorio, producto como ya vimos de las expediciones de Vera y Mujica a mediados del XVIII, no había reducciones ni pueblos de indios. Si bien en una ocasión el Gob. Mansilla fue alertado de posibles invasiones abiponas por el sur de Corrientes, la cuestión no trajo preocupación. Por lo tanto, las erogaciones militares se concentraron, en gran parte, en sofocar sublevaciones de contenido

---

tempranas, teniendo como hilo conductor a ese tipo de impuesto. El capítulo sobre Argentina es de autoría de María Alejandra Irigoin “Ilusoria equidad. La reforma de las contribuciones directas en Buenos Aires, 1850”.

político, focalizadas en la frontera del río Uruguay y por ende consolidar la jurisdicción; no estaban ausentes las partidas armadas para controlar el contrabando, los robos y la circulación de sujetos marginales, por ejemplo los “vagos, forajidos y ladrones” de las puntas del Feliciano o las costas del Guayquiraró al norte, que tanto preocupaban al Comandante León Solas en 1823.<sup>473</sup>

---

<sup>473</sup> AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta 5, fs. 1703, 1708.

## CONCLUSIONES FINALES

La ruptura del lazo colonial y el pasaje a un orden independiente inauguró una etapa de significativos cambios en la América española, caracterizada por un proceso extremadamente denso y conflictivo. Esta investigación ha tratado de recoger algunos de los grandes desafíos que tuvieron que enfrentar las llamadas jóvenes repúblicas luego de la independencia y observar sus manifestaciones en una región de América meridional, los Entre – ríos, situada en el Litoral fluvial rioplatense. En una sociedad casi en la periferia de los grandes centros políticos, demográficamente pequeña y bastante dispersa, en comparación con otras contemporáneas en el Río de la Plata, se concibió un proyecto de construcción estatal que estuvo signado por la antigua dependencia colonial, el despegue independiente y la defensa de derechos locales, por cierto muy difícil de sostener. Su conexión con otras configuraciones sociales regionales se tradujo en el impacto de influencias políticas externas, en las condiciones materiales en las que tuvo que desenvolverse, en el asedio fronterizo que tornaba difícil el dominio territorial y hasta su misma existencia estatal.

El proceso formativo del Estado entrerriano fue examinado en su desenvolvimiento interno, sin descuidar su inserción en un contexto regional particularmente conflictivo que proporcionó otras variables y actores sociales a la explicación. En ese tratamiento fue posible visualizar importantes problemas y rasgos propios de la vida social pos independiente: vigencia de la “antigua constitución”, innovaciones en el lenguaje político, coexistencia de distintas tradiciones jurídicas, tensiones entre ley y prácticas, el sujeto de imputación de soberanía y sus controversias (centralismo, autonomismo, confederacionismo), Constitución, República, representación política, legalidad y legitimidad, militarización y guerra, conflictividad política, fronteras litigiosas, reestructuración fiscal, creación de bases materiales, liberalismo y proteccionismo económicos, entre otros.

Los aspectos abordados intentaron poner en valor las pautas de configuración político-institucional de Entre Ríos, compartidas en general por la sociedad política rioplatense contemporánea. Si hablamos de cultura de la legalidad, es de notar que los marcos legales vigentes –aquellos heredados de la

colonia, de los gobiernos centrales y creados luego de 1820- fueron ponderados como instrumentos para administrar, para ejercer “un buen gobierno” y para recuperar el orden perdido. Las autoridades legalizaron sus atributos e invistieron legítimas facultades a través de esos instrumentos. Los impulsores, los creadores, las autoridades de aplicación y las que cumplían las leyes se manifestaron públicamente por la primacía de las leyes fundamentales, por su estricta observancia y por la necesidad de su información pública. La fuerza e inviolabilidad de la Ley, la salud del pueblo como suprema y sagrada ley, son nociones recurrentes en el discurso fundamentalmente oficial.

En una época donde se reconoció la *lengua constitucional* como una forma generalizada de organización y entendimiento, los reglamentos y textos constitucionales se transformaron en instrumentos imprescindibles para validar las acciones políticas internas y externas al Estado provincial. Los modelos constitucionales que, nutridos de distintas tradiciones y vertientes filosóficas, circularon en el Río de la Plata fueron adaptados y recreados según la situación social y política de Entre Ríos. Para dictar una constitución era necesario darle origen en un *poder constituyente*, misión que le fue asignada al primer Congreso conformado a fines de 1821. Junto a esa capacidad de formar un código, el Congreso se erigió en fuente de legitimidad del gobernante y en autoridad para el tratamiento de asuntos relativos a la administración interior. El Estatuto Provisorio Constitucional de 1822 y otras reglamentaciones complementarias fueron los resultados de una elaboración legislativa que reconocía aquellos antecedentes. Sus redactores y mentores justificaron su labor en lo consensuado y aceptado en la materia dentro de los círculos intelectuales, en los gobiernos revolucionarios y luego en los provinciales.

La calidad provisoria del cuerpo normativo, típico rasgo de época observable en otras constituciones americanas, marcó la expectación por arribar a alguna forma de organización política supraprovincial en el Río de la Plata y por ende, la advertencia de que no podía existir aún un proceso jurídico definitivo. Ese cuerpo establecía bases de constitución estatal a fin de formalizar un “Estado y Gobierno representativo independiente” con aspiraciones soberanas, con un vocabulario político entre lo antiguo y lo nuevo, principios liberales y del constitucionalismo republicano con fuertes permanencias de

nociones de la “antigua constitución” heredada. Justamente, un fuerte indicio de esa aspiración era la preeminencia del Estatuto y reglamentos complementarios por sobre toda otra normativa de origen colonial o revolucionario que no estuviera revocada o lo contradijera; esta salvedad fue extendida también a las disposiciones del Congreso General Constituyente en Buenos Aires.

El Manifiesto al pueblo es un documento que hace pública la intencionalidad de las nuevas formulaciones legales pero, por sobre todo, la vocación de restituir la autoridad política en contextos violentos de redefinición política, tanto en lo institucional como en los liderazgos luego de la revolución de 1821. La constitución es central para restaurar valores esenciales perdidos por situaciones anárquicas y como base de cohesión social.

El Estatuto determinó una forma de gobierno inspirada en el pensamiento republicano y que fuera reconocida en el concierto de las Provincias Unidas. La estructura de gobierno fue encabezada por el gobernador, titular del “Poder Ejecutivo” retomando rasgos del antiguo Teniente de Gobernador colonial. Los cargos de diputados mantuvieron signos corporativos en una nueva figura representativa como era el Congreso, con facultades legislativas. La Asamblea General con representación ampliada, creada de forma paralela al Congreso en 1831, fue un efímero pero novedoso dispositivo para destrabar agudos conflictos políticos. Por su parte, el área de Justicia conservó rasgos coloniales, siendo jerarquizada con la calidad de los requisitos de nombramiento de jueces equiparándolos a los representantes políticos y dotándolos de funciones específicas en los procesos electorales. Si bien se declama a la Justicia como tercer poder constituido, la misma coexiste con fueros de privilegio, está ligada al “Gobierno y Poder Ejecutivo” y su tarea tiene visos más bien de servicio público que de poder político. En este sistema político no existió el Cabildo, el que sí convivió con gobiernos y legislaturas de otras provincias en mayor o menor armonía hasta su extinción. Lo que advertimos es que, si bien no retornó el Cabildo como corporación, se crearon cargos con características concejiles incluyendo honores y prerrogativas, invocando las leyes antiguas. Tanto los resabios de instituciones inveteradas en ordenamientos de rasgos liberales y republicanos como la creación de instituciones *sui generis* con un fin determinado, nos indica la capacidad de los actores políticos para flexibilizar,

adaptar y recrear las normas y estructuras existentes a las necesidades del nuevo sistema político y administrativo.

En pos de una mayor eficiencia en la función y una mayor eficacia para evitar prácticas discrecionales, se procuró incorporar mecanismos y procedimientos sujetos a normas. La aplicación de esos criterios como valores instrumentales de la administración sentó bases de organización, aún cuando fueran jaqueados por las luchas políticas que afectaban el normal desenvolvimiento de las prácticas. Estas apreciaciones contrastan con la afirmación de la vieja y nueva historiografía acerca de que la racionalización, el saneamiento de las instituciones y el orden administrativo en Entre Ríos comenzaron con el gobierno de Pascual Echagüe. Es necesario destacar que las instituciones que se fundaron en esta etapa mantuvieron su vigencia hasta la Constitución de 1860, con lógicas adaptaciones y renovaciones.

Según ya planteamos la legitimidad, como fundamento jurídico de titularidad del poder y como requisito alcanzado por la existencia de consenso o adhesión por parte de la comunidad política, es un atributo de ese nuevo sistema. Las elecciones constituyeron la fuente de legitimidad de origen de la autoridad –diputados y gobernador- y de validación de las decisiones y acciones políticas con alcance en la administración interior y en el espacio de relaciones con entidades de distinta naturaleza política –provincias, confederación, imperio-. Las pautas y procedimientos electorales estatutarios fueron experimentando modificaciones y precisiones en función de distintas necesidades e intereses, pero nunca se puso en duda que la autoridad debía surgir de elecciones periódicas, ese principio no tenía retorno.

El sujeto de la representación, con la denominación de ciudadano, estaba habilitado para el voto activo con restricción etaria. El voto pasivo era restringido en edad y en condiciones económicas y sociales, en antigüedad de naturalización si correspondía. En los documentos electorales conviven los vocablos *ciudadano*, *vecino*, *vecino benemérito*, en una noción dual: entre la naturaleza corporativa y estamental de la sociedad y el nuevo sujeto de la representación declamado desde las ideas liberales. En este nuevo sistema político representativo se reproducían todavía concepciones restringidas del poder. Sin embargo, observamos que los requisitos fueron más bien inclusivos y

que los vecinos/ciudadanos sufragantes no solo eran los notables del lugar, lo que vendría a matizar esa imagen restrictiva de que solo la elite participaba de las elecciones.

En las elecciones para conformar el Congreso se pasó del voto directo –preestatutario- al indirecto –estatutario-, modalidad que implicó interponer distancia entre el titular de la soberanía y el que la ejercía en su nombre, creando un espacio de deliberación y tratativas sobre la base de un minúsculo grupo de electores. Cada diputado representaba al estamento *villa* o *pueblo* como cuerpo o comunidad política, o sea que la representación no tuvo en cuenta la densidad demográfica ni la moderna concepción de la soberanía del número sino que fijó un claro criterio corporativo. La organización de cada acto incluyó a funcionarios en una nueva función política –Comandantes y Alcaldes locales- que oficiaron de intermediarios entre el gobierno y la masa electoral. Las actas preestatutarias reproducen bastante bien el mecanismo asentado en el Estatuto, o sea que las modalidades adoptadas luego de revolución serían las bases de la nueva legalidad, formalizadas localmente. El Congreso se constituyó en última instancia legitimadora de la incorporación de diputados, siendo éste un claro rasgo de fortaleza institucional. Los recursos interpuestos por ilegalidad del nombramiento de diputados reflejan un ajustado proceder conforme al Estatuto y leyes accesorias. Existe una preocupación mayúscula de las autoridades por la formalización electoral, el cumplimiento de requisitos para los candidatos, una reglamentación cuidadosa de las distintas instancias y una recomendación recurrente sobre su observancia.

La legitimidad política radicaba en el principio de consentimiento que operaba como grado de consenso necesario para garantizar obediencia a los gobernantes por él ungidos. Este principio, contenido en el derecho natural, fue invocado para acceder legalmente a la gobernación y vehiculizado a través de la elección. Los mecanismos de acceso fueron comprobados en las elecciones preestatutarias y estatutarias de gobernador. Las diferencias entre ambas refieren a las bases electorales. En las primeras observamos dos modalidades simultáneas, cada una en diferente distrito: una por voto libre y directo de los habitantes en general y otra, a la que consideramos de transición hacia la norma estatutaria, que es indirecta a través de una asamblea de diputados electos para



tal fin. En las segundas, la elección es indirecta a través del Congreso de diputados ya con funciones legislativas. En las distintas instancias eleccionarias de la década, se fueron introduciendo modificaciones legales de ciertos requisitos y mecanismos que estaban relacionadas a la habilitación o restricción según tintes políticos o faccionales de los aspirantes al cargo.

En los tiempos en que arreciaban las disputas entre los grupos de Paraná y el Uruguay, las elecciones de gobernador no se ajustaron estrictamente a las disposiciones del Estatuto, sobre todo en lo referente al período de ejercicio del cargo. Los procesos conflictivos que desembocaron en las asonadas militares se resolvieron de distintas maneras: con gobiernos provisorios, con acuerdos tácitos de alternancia aunque no duraderos, con delegaciones transitorias permanentemente acosadas en nombre de la legalidad estatutaria. No obstante el derecho de rebelión o de legítima resistencia, justificado en la necesidad de poner fin a gobiernos tiranos, tuvo como acto seguido el respaldo del voto. En este sentido, la intervención del Congreso nunca fue omitida, si bien a veces sus resoluciones fueron producto de violentas presiones. Entonces lo que existe es una recusación de autoridad, utilizando distintas vías, pero no hay cuestionamiento al sistema prescripto por la ley fundamental de 1822.

El análisis del proceso electoral de gobernador que recayó en Pascual Echagüe revela la puesta en funcionamiento de mecanismos de ajuste y ampliación de la base legítima de la primera magistratura. En efecto, después de mucho tiempo de inestabilidad política e institucional ya no fue suficiente alcanzar el consentimiento en el interior de la provincia, sino que se necesitó de la aprobación y autorización de un poder foráneo para generar el orden, aplastar los disensos facciosos e iniciar una regeneración política. No era cualquier poder sino aquel caracterizado por un personalismo fuerte que había intervenido activamente durante más de diez años en la política interna entrerriana, aprobando o desaprobando gobiernos en nombre del respeto a las libertades públicas y defensa de un sistema confederal. Esa intervención de Estanislao López, más allá de sus condiciones indiscutidas de líder, fue posible por el importante posicionamiento político alcanzado por Santa Fe luego de 1820. En ella jugaron también otros intereses que incluyeron sus aspiraciones de dominio territorial y fortalecimiento del poder regional pero, fundamentalmente, no faltó el

respaldo de la coalición confederal que veía en el conflicto entrerriano una puerta de entrada de la oposición unitaria y junto con ella, las ambiciones expansionistas de la República Oriental del Uruguay. Los objetivos invocados para resolver la situación se orientaron a lograr el fin de las pasiones, la unidad de opinión y la paz interior -en suma, los fundamentos de la gobernabilidad en el pensamiento de los actores políticos de la época-, lo que nos remite a la defensa del ideal de unidad del cuerpo político como un signo de la “buena política” y a la condena de facciones o partidos que puedan dividirlo.

La representación política fue analizada desde la distinción entre mandato imperativo y mandato libre, con referentes en la “antigua constitución” y en ciertos patrones liberales, mostrando permanencias, adaptaciones y combinaciones sujetas mayormente a las coyunturas políticas. Según el uso del lenguaje político, se hallan nociones duales sobre la naturaleza de los diputados. “Comitentes”, “poderdantes”, “ciudadanos y apoderados de los pueblos” reflejan un campo conceptual referido al sujeto de la representación, alimentado por tradiciones y novedades.

Hemos comprobado que, en la relación entre el elector y el diputado o lo que llamamos representación política interna, existen indicios no lineales de la persistencia de una concepción contractual privada de la política y de cambios orientados hacia una cierta autonomía del representante. Las instrucciones al diputado otorgadas por sus electores departamentales -1826/1827- exponen una importante instancia de ejercicio de la soberanía popular que refuerza el interés por el orden institucional republicano, donde los electores asumieron la representación de intereses provinciales y no de intereses departamentales. En ellas sobresale la concesión de algunas modificaciones a lo mandado que inciden sobre la esencia misma del mandato imperativo, moderan la imposición y dan lugar a cierta libertad de deliberación. De modo que el diputado fue habilitado en su ejercicio con cierto margen de iniciativa y decisión autónoma, sin clausurar la discusión en el interior del Congreso como institución representativa. Estas instrucciones terminaron abogando por todo lo conducente al aumento y defensa de las producciones económicas, a la felicidad pública, a la amistad y respeto entre todas las provincias. Cuando se consideró que las obligaciones de los diputados no eran cumplidas, la revocación del mandato fue invocada en

virtud del uso de los derechos de los comitentes y en el marco de una ratificación de la legalidad estatutaria y los principios del gobierno representativo republicano. En esa apelación a “la voz de los Pueblos” se recuperó la figura del Apoderado y se defendió el carácter del poderdante como árbitro en la instancia de retiro o mantenimiento del mandato.

La representación política externa demostró, claramente, la vigencia del mandato imperativo como vínculo jurídico entre las autoridades como poderdantes y los comisionados de distinta jerarquía, los que podemos distinguir como: diputados a Congresos y Convenciones constituyentes y diputados para firma de Tratados y Pactos, Encargados de negocios. Las provincias se reconocieron como soberanas e independientes y por ende, sujetos de derecho internacional. Las relaciones interprovinciales se rigieron voluntariamente por el Derecho de Gentes, el cual respetaba y legalizaba esas soberanías. Un Derecho que regulaba las relaciones recíprocas entre los Estados del mundo occidental y al que adhirieron, como hemos visto, las autoridades imperiales ante la firma de convenios. En ese marco jurídico, los diputados y encargados fueron designados como agentes diplomáticos. En el caso de los diputados a Congresos y Convenciones, hubo dos procedimientos. Uno era directo: el Congreso provincial los nombraba otorgándoles poder e instrucciones por ley. El otro era indirecto y vinculante: comisiones eventuales por cada Villa o pueblo con representación, que se asemejaron a pequeños “cabildos abiertos”, dictaron instrucciones que fueron tomadas fielmente por el Congreso y otorgadas al representante externo. Aquellos asignados a la firma de Tratados y Pactos eran nombrados como plenipotenciarios por el Congreso, institución que tenía la función de ratificar lo concertado o sea prestar solemnemente su consentimiento. En cambio, los Encargados tenían como comitentes a los gobernadores; sus instrucciones daban un margen de negociación más flexible y, dependiendo de la importancia del negocio, debían someter el acuerdo ad referendum del gobernador y los diputados provinciales.

La distribución del poder político, enfocada en la concesión de facultades extraordinarias del Congreso provincial hacia los gobernantes, fue analizada en orden a sus acuerdos y tensiones. Los resultados indican que dichas facultades fueron un instrumento viable de naturaleza legal implícita, o sea que no figuraba

en el Estatuto ni en norma específica alguna. El tratamiento del tema en las sesiones legislativas da cuenta de un modo de habilitación de poder ampliado, con criterio pragmático, sujeto a una ley no escrita como rasgo de “antigua constitución” y según el contexto. Este dispositivo de excepción, que se organizó según antiguas pautas –como las de la dictadura romana en tanto magistratura de orden republicano y mediante las normas propias del derecho de gentes-, fue otorgado por consentimiento de los representantes con limitaciones de tiempo y atribuciones. En este período de prácticamente diez años, no tuvo vigencia ni permanente ni asidua sino de uso restringido, generalmente en situaciones de emergencia política y/o económica, con el funcionamiento simultáneo del Congreso o coincidiendo con sus períodos de receso legal. Sin que tengamos conocimiento de intentos de usurpación o auto entrega, cada gobernador beneficiado reconoció a la institución representativa como única fuente de autorización y validación de sus acciones políticas en un marco ampliado de poder. El Congreso, además de proveedor de facultades extraordinarias, fue cuerpo consulto, recibió los informes sobre el uso dado – requisito generalmente cumplido-, revisó medidas provisorias, las ajustó a su ratificación y procuró que los plazos de otorgamiento se cumplieran, cuestión que trajo alguna tensión hacia el final de la década del ’20.

Las reglas, status corporativo, estructura y funcionamiento de la organización militar provincial revelaron bases coloniales que contenían tradiciones jurídicas del derecho español y de aquellas, más generales, referidas a la teoría de la guerra y la defensa común propias del Derecho de Gentes. Esas bases recibieron la influencia de la experiencia revolucionaria y de independencia en varios órdenes: en nuevos códigos, en el arte de la guerra, en el perfeccionamiento profesional, en la relación mando-obediencia.

Las promociones militares demuestran un reconocimiento de la legitimidad de los cargos previos en la carrera de las armas, otorgados por las autoridades coloniales y sucesivos gobiernos centrales, los que configuraban la base de las jerarquías obtenidas en Entre Ríos con posterioridad. Las competencias de los Comandantes Principales y Subalternos concordaron, en general, con aquellas estipuladas para los antiguos Comandantes de Armas y de Frontera y reafirmadas por la administración de Francisco Ramírez en su

reestructuración departamental de 1820. En relación a los nuevos tiempos políticos y las necesidades de la nueva construcción estatal, fueron incorporados como funcionarios en los procesos electorales. A las Comandancias militares se les asignó un papel activo en la consolidación de la jurisdicción, en las defensas fronterizas, en el control del contrabando y del orden social para favorecer a las arcas fiscales y al desenvolvimiento de actividades económicas. Los servicios de infraestructura, guarnición, abastecimiento y paga estaban estructurados en las redes departamentales, controlados por una serie de mecanismos administrativos con distinto grado de eficacia y financiados por la Tesorería General y por las receptorías locales.

En cuanto a la justicia militar, los Consejos de Guerra siguieron funcionando para garantizar la subordinación al ejército bajo sistemas formales de sumario y proceso judicial, con la novedad de la ampliación de competencia a la esfera civil en situación de máxima gravedad institucional, como lo fue la conspiración contra el gobernador en 1823.

La dinámica de los conflictos, reflejada en el análisis de distintos movimientos de acción colectiva, dejó expuestas a las facciones antagónicas, sus intereses, pactos y coaliciones, instancias de negociación, acuerdos formales e informales, consensos. Trascendiendo al proceso interno provincial, esa dinámica aportó al conocimiento de los modelos estratégicos globales de cada entidad política que intervino, sea cual fuere su naturaleza y su proyecto – provincial, imperial, confederal-. La diplomacia, la guerra, las alianzas locales y regionales son variables constituyentes de esos modelos e incidieron, de distinta manera, en el desarrollo y resolución de los conflictos. Los gobiernos ungidos por los grupos de poder de Paraná fueron proclives a mantener alianzas y aceptar influencias de Santa Fe y Buenos Aires. Los líderes principales del Uruguay contaron con apoyos imperiales y orientales, capitalizando también los intereses de los exiliados unitarios; se inclinaron por una mayor autonomía provincial y una fuerte resistencia a los influjos porteños.

Los móviles tuvieron un hondo contenido político, aún aquellos de origen económico o fiscal. En general, tuvieron concurrencia con otros procesos conflictivos regionales: plan de desestabilización general de las provincias litorales, desarticulación de la naciente política pactista en el Río de la Plata,

guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil, puja por liderazgos regionales, lucha entre unitarios y federales. Las acciones se concretaron a través de distintas modalidades: los discursos en el Congreso, los petitorios del vecindario, los reclamos judiciales, la expresión tumultuaria, los alardes militares que emulaban a aquellos tan usuales en la colonia, la batalla, las mediaciones internas y externas.

Durante el desarrollo de los conflictos, tanto las fronteras del Este y el Oeste como la frontera interna mostraron una marcada concentración de actividad militar –estructura, recursos, enfrentamientos-. La guerra contra el Brasil reveló una mayor militarización del estratégico territorio entrerriano, como base operativa del llamado Ejército Nacional en despliegue hacia el territorio oriental e imperial. Los pasos fronterizos que comunicaban con Santa Fe y con la Banda Oriental/Cisplatina registraron una gran actividad: paso de tropas, circulación informativa, canal de fuga de proscriptos y emigrados políticos, de envío y/o intercambio de prisioneros, pasaje de comisionados, diplomáticos, espías y conspiradores. En ciertas circunstancias la selva de Montiel, como frontera interna, fue refugio de opositores al gobierno y significó un desplazamiento del objetivo militar hacia el centro de la jurisdicción.

Las redes sociales que intervinieron en los distintos movimientos de acción colectiva no operaron sobre un espacio fijo y homogéneo, sino que tuvieron distinto grado de expansión y desplazamiento en la región. Estas redes parcialmente reconstruidas, que merecen ahondarse en su densidad y composición, fueron cambiantes de acuerdo a cada conflicto; el factor de cambio no solo fue el realineamiento de alianzas sino la fuerte intervención de intereses regionales.

Las situaciones conflictivas habilitaron importantes espacios de acción política para los jefes militares. En las dos facciones internas existe un alto componente militar cuyos integrantes estarían operando por disciplina y lazos de solidaridad, por vínculos establecidos como miembros de la estructura militar revolucionaria, de las tropas que defendían proyectos autonómicos, o de redes político militares de alcance regional. Entonces, no solo el poder se dirime exclusivamente entre los actores políticos y entre los representantes institucionales sino que existe una participación clave del estamento militar,

nacido a la política con la revolución. La emergencia de nuevos líderes locales se da sobre la base de arraigo territorial y de estructuras previas familiares, económicas, profesionales. En esas figuras ascendentes, los campos de actuación combinan lo militar con lo político-institucional reconociendo el ámbito de la representación política como ineludible para intentar cambios e imponer proyectos. Habría, también, redes por fuera de las instituciones, actores sociales que pueden poner a disposición su capital propio entendido como recursos humanos y económicos, influencias, prestigio, solidaridad familiar. Tal como observó Tulio Halperin Donghi en cuanto a los rasgos nuevos que adquieren los vínculos primarios luego de la revolución, los conflictos analizados dieron cabida a divisiones y rivalidades extremas en el seno familiar.

El cambio en las adhesiones y estrategias estaría explicado por varias razones no excluyentes: reciprocidad o intercambio desigual de favores, posibilidad de ascenso militar, aprovechamiento de instancias de descompresión por parte del gobierno –amnistías, desembargos y compensaciones a emigrados-, obtención de beneficios económicos, mejor posicionamiento social y político. Es de notar que los emigrados amnistiados cambiaron su estrategia: retornaron a la provincia, aceptaron la vigencia del Estatuto y se colocaron en mejores condiciones para la disputa. Su vocabulario político acentuó las manifestaciones de apoyo y defensa de las leyes internas que referían, por ejemplo, a los mecanismos de acceso al gobierno. Las modificaciones que el grupo opositor a Paraná impulsó desde el Congreso es otro elemento importante para afirmar el cambio de estrategia. Luego de 1825, es notoria la composición del Congreso con diputados de la costa del Uruguay, involucrados en la facción de López Jordán, que permite desde esos lugares de representación política: fortalecer liderazgos, jerarquizar territorialmente al oriente entrerriano, vigorizar la oposición ante Buenos Aires, y capitalizar las necesidades de aquellas facciones de la Banda Oriental por captar adherentes a la liberación de la dominación imperial pero también, por encontrar apoyos a sus propios proyectos políticos. Tanto en los sucesos ocurridos en 1826 como en los de septiembre de 1827, demostraron un cambio de estrategia del grupo fuerte de Paraná que invirtió los mecanismos de acceso al poder político y retomó aquella estrategia que pretendían utilizar los emigrados a principios de los años '20: el asalto al

poder. Según el discurso de proclamas, petitorios y declaraciones la caracterización de anarquistas que correspondió a los emigrados de la primera etapa, se trasladó a aquellos del Paraná que no reconocían a los gobiernos ungidos por el Oriente.

El análisis de las finanzas públicas de Entre Ríos, pensado en un contexto militarizado y generalmente violento, ha mostrado las relaciones entre el comportamiento fiscal y las instancias de conflictos y/o acuerdos entre 1822 y 1832. Las finanzas públicas comenzaron su reestructuración a partir del Estatuto. En este instrumento legal se fijaron las atribuciones en materia fiscal tanto del Congreso como del gobernador. Esta novedad del Estado generador de las normas dentro de un sistema de rasgos republicanos no supuso la eliminación de los antiguos fundamentos, formas y contenidos de la fiscalidad vigentes desde la colonia española. Por el contrario, esa reestructuración conservó rasgos de la administración colonial sin desdeñar los avances administrativos y fiscales realizados durante la República de Entre Ríos. Entre esos rasgos destacamos la persistencia de la Antigua Constitución fundamentalmente en: normas contables generales, impuestos indirectos, instituciones recaudadoras, legislación antigua referida a cuestiones fiscales y justicia comercial –recordemos que los pleitos de comercio continuaban se regían todavía por cédulas del Consulado porteño de 1794, ordenanzas y leyes españolas como las de Bilbao, Indias y Castilla-. Estas y otras evidencias relacionadas a la previsión presupuestaria, el equilibrio fiscal y la matriz impositiva nos muestran que el sistema empleado en Entre Ríos estaba mucho de cumplir con los principios fiscales liberales de la época.

En cuanto a la organización fiscal, las autoridades recurrieron a ciertos criterios de racionalidad administrativa que revirtieran en una mejor recaudación y en un relativo orden fiscal relativo, efecto que ameritaría una comprobación más profunda. La distribución territorial de la cuestión fiscal nos da pautas de las marcadas asimetrías internas al sistema y la extrema polarización representada en las cabeceras de los dos Departamentos principales. El sistema administrativo y recaudador se apoyó visiblemente en dos pilares como las Cajas de Paraná y del Uruguay. Las Cajas menores aportaron muy poco, al menos



hasta 1831. La progresiva creación de receptorías y de puestos aduaneros con apoyo militar contribuyó a consolidar ciertos puntos débiles de la jurisdicción.

La reconstrucción de la contabilidad muestra una fluctuación de las finanzas públicas acorde con la conflictividad política interna y externa. A primera vista podríamos decir que las cuentas fiscales en todos los años estudiados fueron bastante equilibradas puesto que ni el estado superavitario ni el deficitario arrojaron saldos muy abultados. Pero esta afirmación oculta el papel predominante que tuvieron los préstamos en el sostén del fisco logrando aproximar las cifras de ingresos y egresos e incluso evitar el déficit. Los ingresos genuinos presentaron una recuperación y acrecentamiento a partir de la superación de los conflictos de los años '20 y '21 y del bloqueo marítimo imperial, sin que esto signifique una mayor producción exportable sino más bien una salida de productos acumulados. Luego de 1830 se evidencia el inicio de una lenta etapa de recuperación de la economía y las finanzas públicas.

Los ritmos de la dependencia financiera interna y externa fueron acordes con el grado de orden interior y estado de las relaciones interprovinciales. Los conflictos entre facciones internas ocasionaron, generalmente, una presión sobre sectores económicos de distinta fortaleza a fin de prestar al fisco o apurar el pago de deudas. En la respuesta a estas demandas de créditos internos podemos inferir que el grado de obediencia fiscal guardaba relación con el reconocimiento de la autoridad, con el grado de confianza en ese Estado que debía devolver capital y pagar los servicios de la deuda, con la capacidad de llegar a consensos para lograr el crédito interno a partir de invocaciones patrióticas. También la defensa de los derechos personales ejercida por los prestamistas podía anteponerse a la obligación con el Estado: el derecho de propiedad basado en el derecho natural estaba garantizado al menos en la letra del Estatuto. En cuanto al auxilio financiero externo, éste llegó por medio de acuerdos interprovinciales. Mayormente fue destinado a cubrir los gastos de movilización militar interna, aliviar a los prestamistas del común y acallar reclamos internos de los empleados impagos. Entre 1823 y 1826 la dependencia mayormente de la Caja porteña es significativa lo que podríamos explicar en el interés de Buenos Aires por apuntalar alianzas en el Litoral, complementando los ingresos con importantes préstamos y suplementos del común. Entre 1827 y

1832, la dependencia económica prácticamente se invierte pues se contrae a un solo préstamo con Corrientes y en cambio, ante las sucesivas convulsiones políticas internas, es el sector de comerciantes el que asume el peso de sostener al fisco. El gasto público se concentró en la estructura militar y su funcionamiento, en la estructura administrativa cada vez más compleja y en el pago a prestamistas cuyo cumplimiento dependió del estado de la lucha política y de la disponibilidad de recursos genuinos y de auxilios externos.

La política fiscal se correspondió con los vaivenes políticos, económicos y bélicos. Los lineamientos seguidos reflejaron una orientación proteccionista fluctuando en el grado de restricciones, según las estrategias de recaudación, el estado de las relaciones interprovinciales, el interés por estimular y afianzar ciertas producciones locales, aumentar excedente exportador, beneficiar a ciertos sectores económicos, entre otros. Podemos evaluar esa orientación señalando, en general, dos etapas. Una con un proteccionismo más acentuado entre 1822 y 1826, que supone la necesidad de recomponer las actividades económicas locales luego de años de guerra civil coincidiendo también con el desahogo financiero de los préstamos externos. Otra, más moderada, hasta 1832 en que finalizamos el análisis, sostenida en la opinión de que la baja de gravámenes a los productos importados aumentaría su volumen y por ende, el ingreso aduanero; mientras tanto se reforzaba el control en las fronteras para combatir al contrabando y se contaba con la dinamización de la franja costera del río Uruguay y el consecuente aumento de las exportaciones. En tiempos de relativa paz, se protegieron ciertas producciones domésticas urbanas y rurales, aplicándoles menores gravámenes en consonancia con un alza de impuestos a las importaciones de ultramar. Los hacendados y labradores como sectores económicos fueron favorecidos con alivios impositivos, previa evaluación de las condiciones de producción y de la necesidad de impulsar la ganadería y la agricultura; cabe pensar también que estos sectores representaban bases de poder del gobierno de turno, tal como lo plantean los estudios sobre Corrientes (Chiaramonte J.C., 1991a, pp. pp. 173-194.). En el caso del comercio de importación y atendiendo al contexto regional, los derechos de tránsito se rebajaron por cortos períodos, para no dificultar las transacciones ni provocar escasez. El estado de las relaciones interprovinciales era una variable

importante que incidía en el comercio. Cuando se pretendía reforzar un vínculo provincial, se liberaban ciertos derechos o bien, en tiempos de conflictos, se suspendía el tráfico, afectando al aporte de ingresos genuinos. La tendencia proteccionista se advirtió también en otros aspectos: -regulación de las relaciones económicas contractuales en contra del abuso y la especulación sobre productores menores; -impulso al establecimiento de colonias agrícolas; preocupación por recuperar el stock ganadero tanto en el fomento de cría como en las prohibiciones de matanzas o exportación.

La política monetaria reflejó enlaces entre la situación de demanda interna, la coyuntura guerrera con el Brasil y las resistencias a la influencia porteña que iba más allá de sus medidas financieras, alimentadas especialmente por el sentimiento antiporteño existente en la costa del Uruguay. Las discusiones y acciones en torno a la circulación de las monedas porteñas mostraron la capacidad de admitir o rechazar esos medios de pago, ponderando las necesidades del mercado o la buena o mala recepción que tenían en la población. Asimismo, reguló los pagos en Letras y prohibió la extracción de plata para asegurar el respaldo del metálico circulante.

\*\*

El análisis de la primera etapa de conformación estatal entrerriana nos ha permitido avanzar en la comprensión general de sus pretensiones soberanas, de la construcción del poder político, la formalización institucional, la representación política, la creación de bases materiales y, a la vez, cuestionar con más elementos ese período considerado anárquico y desprovisto de reglas, por parte de la historiografía tradicional. No se nos escapa que esta investigación significa un acceso parcial a los problemas tratados, problemas que merecen ahondarse con nuevos enfoques, mayores comprobaciones, revisiones críticas.

Como sabemos, ese Estado en formación estableció sus prerrogativas, como atribuciones de soberanía. De acuerdo a nuestra investigación, podemos afirmar que el grado de su ejercicio, en las distintas áreas de competencia, no fue uniforme ni completo. La inestabilidad política interna, la debilidad financiera, la situación bélica regional y los intereses externos de expansión territorial o de cooptación política instalaron fuertes condicionamientos, atentaron contra los

fundamentos de la gobernabilidad y lograron en ciertos momentos que esa condición soberana se pusiera en riesgo. No obstante, se comprobó el ejercicio efectivo de esos atributos soberanos: primero y principal el de darse sus propias leyes, ejecutarlas y aplicarlas, custodiar el orden a través de las normas y asociado a la justicia, usar la fuerza, defender el territorio, la jurisdicción, el desarrollo de la vida social y los derechos particulares de sus habitantes, ejercer el manejo propio de las relaciones exteriores, organizar su administración interior, dictar políticas proteccionistas, bregar por la autonomía monetaria, asumir el derecho de Patronato, entre otros. Podemos pensar también que la misma existencia de esos elementos de presión potenció el uso de las alternativas viables que le otorgaban sus cualidades soberanas.

Este estudio ha procurado restituir una experiencia de construcción estatal a la que se le presentaron varios caminos posibles. En las páginas introductorias dejamos en claro la importancia de contemplar no solo los proyectos llevados a cabo sino también aquellos proyectos truchos que son parte de esa construcción. Entre Ríos pudo ser integrada al Imperio del Brasil, volver a la antigua jurisdicción santafesina, anexarse a Buenos Aires, o incorporarse a la República Oriental del Uruguay, por vía del consenso o por la ocupación armada. Es decir que, en los años estudiados, su carácter declarado de estado soberano e independiente quedó abierto a varias posibilidades: consolidar ese carácter, retornar a una condición subordinada, ser un apéndice militarizado, formar parte de una entidad con raíz hispánica común pero de naturaleza política distinta. Si introducimos estos factores en la evaluación de su calidad estatal podemos concluir que Entre Ríos, pese al dispar e imperfecto cumplimiento de sus prerrogativas y al asedio constante de poderosos intereses externos, logró crear y mantener condiciones posibles de estatalidad que fueron base de las administraciones futuras. O sea que fue una experiencia con suficientes signos de fortaleza como para poder llevar adelante su construcción estatal en el Río de la Plata independiente y no ceder ante esos otros proyectos políticos.

\*\*\*

En los inicios del siglo XXI, las democracias latinoamericanas enfrentan profundos desafíos en torno a sus bases de organización política e institucional: crisis de representación, crisis de sistemas políticos, débil cultura de la legalidad, retorno a los personalismos, replanteo de la dimensión y función estatal, etc. En las páginas iniciales de esta investigación planteamos la necesidad de introducir, en la discusión política que generan estos desafíos, una dimensión integradora haciendo hincapié en la historicidad del proceso. Por ello la incorporación de análisis históricos, que atiendan a la instalación de esas bases en el siglo XIX y su evolución hasta el presente, puede lograr un marco con amplio significado histórico para pensar esa discusión y habilitar vías de salida que mejoren no solo el sistema político sino la vida social en su conjunto. En tal sentido y con pretensiones muy modestas, esta Tesis quiere constituir un aporte a ese marco histórico de referencia.



## APÉNDICE

### La historia que sigue...

#### **Un recorrido historiográfico sobre la localidad y la región: Entre Ríos entre 1832 y 1840.**

Una visión naturalizada de los inicios de la conformación provincial entrerriana puede sintetizarse en una frase: del desorden y la turbulencia política de los años '20 al orden y la quietud en la década de 1830. Un pasaje de la anarquía a la estabilidad interna, prácticamente instantáneo y sin matices, se desprende del conjunto de obras clásicas producidas en el siglo XX y consultadas a lo largo de esta investigación.

El objeto de este Apéndice es dejar planteadas algunas proyecciones sobre la construcción de conocimiento acerca de la etapa que dejamos abierta desde 1832. En primer lugar, porque uno de los supuestos que animó a esta investigación se originó en la crítica a dicha visión naturalizada, de contraste fuerte y contundente. Ese orden y esa estabilidad no podían partir de un punto cero sino que existía una trama político – institucional anterior, suficiente como para otorgarles bases con cierta consistencia; una trama cuyo estudio emprendimos a fin de contribuir a pensar ese tránsito social y lo posterior con otros elementos de análisis. En segundo lugar, porque constituyó una etapa de honda significación en el proceso de conformación de una unión confederal entre las provincias rioplatenses convenida en el Pacto Federal de 1831; fue una de las opciones de construcción estatal gestada como vimos en la década de 1820 y que permaneció, aún con sus debilidades, hasta la Confederación Argentina de 1853. En ese proceso se dieron intentos de organización estatal en el interior de esas provincias, con distintos grados de autonomía. Al mismo tiempo, se asistió a distintos desafíos internos y externos a la Confederación que condujeron a una grave situación bélica hacia el final de los años '30. Los conflictos que involucraron más directamente al estado confederal de Entre Ríos se relacionaron con el enfrentamiento regional entre unitarios y federales. Los más destacados por la virulencia de las acciones y los perjuicios ocasionados a la sociedad entrerriana fueron: la guerra contra la alianza de la República Oriental del Uruguay (R.O.U.) con Corrientes en 1839, la invasión de Juan Lavalle al

Litoral en 1840 para desestabilizar los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe y el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840.

## **Aportes historiográficos del siglo XX**

En un recorrido historiográfico, por cierto parcial y no excluyente, realizamos algunos ejercicios de interpretación sobre la escritura de la historia, las problemáticas históricas de los años '30 que han merecido mayor interés y la construcción de sentidos colectivos legados a la sociedad local. La orientación del análisis estuvo puesta en tres grandes temas: legalidad y legitimidad, organización provincial y orden interno, relaciones interprovinciales y peligro exterior.<sup>474</sup>

En general, la historia de la provincia se la presenta como encarnada en la figura de Pascual Echagüe, como cabeza de la administración y como rector de la estabilidad interna alcanzada. Los asuntos que sí distancian a los autores son la circunstancia de su llegada al poder y el pasaje de una posición crítica a un alineamiento prácticamente incondicional con la política rosista, tanto que Entre Ríos se convierte en una columna de orden para el régimen de Buenos Aires. Algunos autores como Bosch y Gianello valoran el ascenso al poder de Echagüe de manera positiva bajo el amparo del “Patriarca de la Federación”<sup>475</sup> y como solución necesaria para el fin de la agitación política y de los “jefezuelos tornadizos”. Otros como Calvento y Sagarna reparan en el alto costo de esa solución en tanto los legisladores entrerrianos habían entregado la provincia a un extraño tutoriado por Santa Fe, a un Teniente personero de López que declinará rápidamente sus reclamos de organización constitucional confederal y se transformará en un gobernador totalmente sumiso y adulator de Rosas.<sup>476</sup>

---

<sup>474</sup> Calvento M., 1940; Sagarna, 1946; Bosch, B. (1978, 1980, 1982); Urquiza Almandoz, O. 1978, Gianello L. 1951, Poenitz, E. 1986.

<sup>475</sup> En Santa Fe, la imagen de Estanislao López construida por la historiografía santafesina está resumida en una denominación de gran carga simbólica: el Patriarca de la Federación, inspirada en las definiciones que el gobernador hace de su actuación en el Manifiesto de presentación del Estatuto santafesino. Tedeschi, S. “El Estatuto provisorio de Santa Fe (1819). Un análisis desde la cultura política” en Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, No. LXVIII, 2010, pp. 195-209.

<sup>476</sup> Coincidente con estas últimas opiniones sobre Echagüe, una asociación reivindicativa de Justo José de Urquiza como el máximo caudillo provincial, sigue abrevando hoy en la memoria



### *Legalidad y legitimidad.*

Los atributos de legalidad y legitimidad están representados en la vigencia del Estatuto pero reformado en 1833 en forma sustancial con respecto a la representación política, algunos mecanismos del proceso electoral y la duración del mandato del “Poder Ejecutivo” –duplicación de los años de gobierno y reelección indefinida-. El otorgamiento y control de facultades extraordinarias al gobernador Echagüe, que siguió al parecer el mecanismo implementado en la década anterior, fue un atributo durante todos los años de su gobierno.

En 1833, el reconocimiento de autoridad de Echagüe por parte de los legisladores se tradujo en un mayor grado militar, 3000 pesos anuales para gastos reservados y de etiqueta y una medalla de oro con la leyenda “Al pacificador de la provincia. Su Representación”. Se sucedieron dos reelecciones: 1835 y 1837, mediando en cada una de ellas el tradicional ritual de la renuncia y los consecuentes pedidos de la Legislatura para que acepte las designaciones. En la última reelección, la Sala volvió a distinguirlo con el grado de Brigadier mayor y título de Ilustre Restaurador del sosiego público. La derrota militar en la campaña contra Corrientes, a manos de las fuerzas unitarias, lo hizo caer en el descrédito y por ende, no consiguió la tercera reelección en 1841.

### *Organización provincial y orden interno.*

Las evaluaciones historiográficas sobre la organización provincial y el orden interno oscilan entre la exaltación y la moderación, haciendo notar cierta influencia de las políticas de Santa Fe y de Buenos Aires en sus lineamientos. Todas refieren a las readecuaciones importantes dentro de la administración provincial, relativas a la dimensión estructural y funcionamiento de las instituciones.

Las Comandancias Departamentales fueron suprimidas en 1836, en su lugar se creó el cargo de Comandante general de la frontera con el Uruguay concentrando el poder militar en una frontera potencialmente conflictiva y reforzando las líneas de costa con más dotaciones armadas. La justicia y la

---

colectiva la figura del “extraño”, del blando militar derrotado en Cagancha, frente a la cual erige la del intachable y valiente jefe vencedor de Rosas en Caseros. Diario El Heraldo de Concordia, 8/9/2014.

policía fueron reglamentadas, se ampliaron las áreas de incumbencia desde lo comercial hasta las actividades de ocio y la persecución de “vagos y malhechores” y se endurecieron las penas por delitos, profundizando en la letra de las leyes las medidas de control social de la población aunque los autores se encargan de aclarar las dificultades de su implementación y la persistencia de prácticas anteriores.

El saneamiento de la economía y la fiscalidad junto con políticas de poblamiento son otros aspectos destacados. Algunas medidas de organización fueron consideradas clave para la consolidación provincial y algunas totalmente originales sin reconocer antecedentes anteriores: el reglamento de puertos de 1832 -coincidente con el dictado de uno similar en Santa Fe-, los controles de contrabando por parte de la Capitanía del Puerto y Resguardo, la ley de aduana de 1836 y la prohibición de salida de moneda metálica –siguiendo los rasgos proteccionistas de la política de Buenos Aires- y la habilitación del puerto de Concordia cuyo punto de partida poco reconocido es el Puesto de Resguardo creado en 1830. El poblamiento se estimuló en ciertas áreas territoriales como Punta Gorda, Diamante y Villa de La Paz en la costa del Paraná, la frontera interna de Montiel y el núcleo urbano de la Villa de la Concordia fundada en 1831, sobre el río Uruguay.

Las instituciones educativas se incrementaron respecto de las de la década anterior. A las Escuelas de Primeras Letras en Feliciano, San José, Victoria y Villaguay se le agregaron otras de nivel educativo más avanzado donde sobresalió Cátedra de Filosofía, Teología y Latinidad. En 1837, aprovechando el regreso de la Compañía de Jesús al Río de la Plata con anuencia de Rosas, se proyectó en Entre Ríos la creación de la Escuela de Estudios Superiores bajo dirección jesuita. Sin embargo, el intento fracasó por causas aún poco estudiadas.

#### *Entre Ríos Confederal. Relaciones interprovinciales y peligro exterior.*

La facción federal mantuvo fuertes diferencias internas acerca de la organización constitucional de las Provincias Unidas. En su articulado el Pacto de 1831 había previsto la posibilidad de reunión de un Congreso General Federativo, lo que podía derivar en una Constitución. Los constitucionalistas,

entre los que se encontraban López y Echagüe, fundamentaron la necesidad de una organización formal basada en un texto legal. Juan Manuel de Rosas fue el principal opositor al dictado constitucional, anteponiendo como primera necesidad la organización interior de cada provincia confederada. La inconveniencia de un Congreso y una Constitución en el pensamiento de Rosas estaba ligada a su interés por ser cabeza de las Relaciones Exteriores y seguir arbitrando los recursos económicos de la Aduana porteña. La Confederación, tal como estaba planteada en el Pacto, significaba que el Estado más poderoso tenía la chance de dominar al resto y ese Estado era Buenos Aires. En 1835, en medio de una máxima tensión, la diferencia se dirimió a favor de Rosas, indudablemente fortalecido por su designación como gobernador con la suma del poder público. Así, el dictado de Constitución se dilató por casi dos décadas.

Las obras consultadas coinciden en ver al bienio 1835-1836 como el punto de inflexión en la línea de política exterior de Echagüe, pasando de la convicción constitucionalista y la resistencia al alineamiento absoluto e incuestionable al régimen rosista. Obras que ofrecen ciertas diferencias de tratamiento: -meras descripciones de los acontecimientos sin conceder juicios de valor; -estudios que exaltan sus afanes de Constitución y organización nacional entre 1832 y 1836 tratando de eclipsar el giro posterior de su política; -ponderación totalmente negativa que tilda a Echagüe de sometido, incondicional y obediente a la que consideran “la dictadura de Rosas”. Esta última interpretación está íntimamente ligada a la antinomia “rosistas” y “antirosistas”, centrada en rígidos contrastes sobre la persona del “caudillo” de Buenos Aires y su acción política: era el dictador sangriento o era el defensor acérrimo de la soberanía nacional. En términos más o menos similares, la antinomia alcanzó a Pascual Echagüe en el campo siempre disputado de las conmemoraciones. En 1930 el historiador José María Funes, su bisnieto, contestó públicamente al concejal Alfredo Muñoz por votar en contra de un homenaje al político santafesino. Los dichos de Muñoz cuestionaban la actuación de Echagüe en la guerra de 1839: asesino del jefe correntino Berón de Astrada e impulsor de excesos salvajes en las batallas. Funes expuso que solo eran maledicencias, lo que había que valorar era la victoria final de la nación sobre las pretensiones de

anexión de las provincias del Litoral a la República Oriental del Uruguay.<sup>477</sup> Esas controversias, generalmente muy apasionadas, marcaron ciertos trayectos de la historiografía argentina del siglo XX según las variaciones del clima ideológico y político que se vivía en el país y que aún suelen aparecer en el persistente discurso nacionalista y militante de algunos sectores.

Retornando al proceso histórico, los desafíos internos y externos a la Confederación, tornaron más compleja la situación política. Como ya destacamos hubo tres conflictos regionales que afectaron directamente a Entre Ríos. En ellos se entramaron disputas de distinto origen. Por un lado, estaba la confrontación interna a la República Oriental del Uruguay con los bandos del presidente Manuel Oribe, aliado de Rosas y derrocado por Fructuoso Rivera, quien era apoyado por Juan Lavalle y los unitarios antirosistas, haciendo jugar también sus antiguos contactos con una fracción del ejército imperial brasileño. Por otro lado, estaban los franceses que buscaban recuperar posiciones en el mercado rioplatense y, para ejercer presión, iniciaron el bloqueo al puerto de Buenos Aires. Toda la región del Plata se convulsionó ante tamaños conflictos. Una vez más, la frontera con el Uruguay se tornó un área militarizada y teatro de batallas. Entre Ríos, en particular, retomó su condición de territorio absolutamente estratégico, constituyéndose en antemural de las provincias confederadas ante las posibles invasiones desde la República Oriental.

Las reconstrucciones acontecimentales de estos conflictos, desde el punto de vista de la participación entrerriana, muestran minuciosamente los avances y retrocesos de cada facción en el campo de batalla. Una intensa actividad en las áreas de frontera afirma la idea de una jurisdicción insuficientemente consolidada, vulnerable aún a las ambiciones expansionistas de las entidades políticas vecinas, en estos años representadas más por las facciones encontradas que discutían el poder en la República Oriental del Uruguay. Al trasluz de esa dinámica, se va descubriendo el estado de las relaciones entre Echagüe y Urquiza, que oscilan entre la cooperación y las tensiones por

---

<sup>477</sup> “En torno a la figura del Gral. Dr. Pascual Echague. Contrarréplica del Dr. José Ma. Funes al concejal D. Alfredo Muñoz”, Diario El Debate, 14 de enero de 1930.

diferencias en las tácticas militares y manejo de las alianzas. Las otras jefaturas locales están difuminadas por el énfasis puesto en la observación de esas relaciones de autoridad entre los dos jefes máximos. En algunos autores, el tratamiento de la década de 1830 está justificado en el fondo por el interés en demostrar la emergencia del otro caudillo convertido en prócer fundamentalmente local, Justo José de Urquiza, elevado a la categoría de “ilustre Organizador”.

El discurso historiográfico predominante en las obras disocia el análisis sobre el orden administrativo y las medidas consideradas progresistas de aquel que se instala en la vorágine guerrera. No hay una interpretación de convergencia de los dos análisis, por el contrario los procesos transcurren en paralelo sin profundizar en sus mutuas influencias ni asociarlos al problema de la gobernabilidad.

Varios historiadores santafesinos investigaron sobre la vida personal y pública de Pascual Echagüe.<sup>478</sup> Sus producciones, elaboradas mayormente entre 1930 y 1970, respondieron a un contexto académico local que no despegaba aún en historias de alcance regional y nacional. Sus ejes de trabajo giraron en torno a: su pertenencia a una familia santafesina de linaje resaltando su condición de “hijo de Santa Fe” como un honor para su tierra de origen; su formación intelectual evaluada en términos de cultura y moralidad; su actuación política y militar. En esas producciones, sus años como gobernador de Entre Ríos alimentan la misma visión de orden y estabilidad gestada en la historiografía entrerriana. Su larga actuación política y militar en la década de 1820 como pieza fundamental del gobierno de Estanislao López y su gobierno de signo federal en Santa Fe, entre 1842 y 1851, ocupan el mayor interés en las investigaciones. Ese discurso historiográfico resalta en calidad de virtudes a la medida, diplomacia, pacificación, ductilidad, sencillez y riqueza espiritual<sup>479</sup>, a su

---

<sup>478</sup> Funes J. M. “*En torno a la figura del Gral. Dr. Pascual Echagüe*”, Santa Fe, 1930, “Brigadier Gral. Pascual Echagüe”, Revista JPEH Santa Fe, 1950; Candioti, Luis *A un año del fallecimiento del Brig. Gral. Pascual Echagüe*, Revista JPEH Santa Fe, 1967; López Rosas, José Rafael López Rosas, 1969; Gianello L., 1951; Chizzini Melo, Luis E. “Brigadier Gral. Pascual Echagüe. Su perfil militar y político a la luz de su legajo personal”, III Congreso de Historiadores JPEH Santa Fe, 1999.

<sup>479</sup> Al discurso historiográfico se le agregó el periodístico. Es el caso del Canónigo Jacinto Viñas quien le dedicó a Pascual Echagüe una semblanza laudatoria en la que resaltaba su prudencia,

capacidad táctica y su valor en el campo de batalla, a sus principios democráticos y republicanos “pese a su origen hidalgo”. Estas valoraciones van construyendo la imagen de un jefe político militar en franco contraste con el discurso historiográfico de historiadores liberales de fines del siglo XIX. Este discurso asociaba a estos jefes con una generación bárbara y anárquica y formaba parte de las controversias historiográficas ya aludidas.

### **Aportes historiográficos del siglo XXI.**

Contribuciones más actuales sobre la historia posindependiente en el Río de la Plata introducen nuevos enfoques teóricos y metodológicos, renovaciones temáticas, abordaje interdisciplinar y perspectiva crítica. Contribuciones que son todavía escasas para el proceso abierto en 1832 en Entre Ríos. Entre ellas empiezan a aparecer nuevos aportes desde la historia política y la historia intelectual, la historia socio-económica, la cultura jurídica, que auguran un campo de interpretación más variado que el que ofrece la historia tradicional y sobre los que hacemos una sumaria referencia.<sup>480</sup>

Hasta hace poco más de dos décadas, la imagen predominante del caudillo del siglo XIX era la del jefe surgido en el marco de las guerras revolucionarias y de independencia de la América hispana, muy ligada al hecho militar y al desorden. No cabía en ella otra cosa que las conductas violentas de estos hombres, enfrentados con la legalidad y movidos solo para satisfacer intereses personales. En el Río de la Plata, la revisión historiográfica del

---

religión, bondad, clemencia y sabiduría para gobernar, modelo en su vida íntima, caballero sin tacha, excepción en una época de crueldades y venganzas, en *Diario Nueva Epoca*, Santa Fe, 17 de julio de 1917.

<sup>480</sup> Chiaramonte, J.C., 2010; Schmit, R. 2004, 2003; Pressel G., 2015; “Estructura, prácticas y actores de la justicia rural en el oriente entrerriano (1841-1854)”, Tesis Licenciatura inédita, 2005. Podemos mencionar también investigaciones en curso que se han propuesto estudiar sobre las transformaciones jurídicas de la propiedad de la tierra, el reconocimiento de antiguos derechos posesorios, relaciones de posesión y usufructo, conflictos sociales en torno a la tierra, marcos de negociación entre potenciales propietarios y autoridades locales, etcétera. Los mismos no contemplan especialmente la etapa 1832-1840 sino que la incluyen, de manera general, dentro de un análisis de mediano y largo plazo que todavía presenta resultados parciales. Por ejemplo: Levaggi, Abelardo “Régimen de la tierra pública en Entre Ríos en la época patria, 1820-1883” en *Revista de Historia USAL*, No. 3, Dic. 2010, pp. 29-40; Kosul, Pedro “La fuerza mesiánica de la preservación: abrazando la tierra ante el libre acceso y el despoblamiento, Entre Ríos 1823-1849” en *VI Congreso de Historia e Historiografía*, FHUC, UNL, 21 y 22/5/2015.

fenómeno del caudillismo y de las sociedades en las que se insertaron y ejercieron su acción pública<sup>481</sup>, ha permitido realizar mejores evaluaciones que suponen diversos resultados. Algunos autores refuerzan la validez del concepto mientras que otros lo siguen considerando tan débil y deformante que no deja ver con claridad las concepciones políticas, las prácticas y el funcionamiento social en su conjunto.

En el acercamiento a la historia de la primera mitad del siglo XIX desde un ángulo diferente, José Carlos Chiaramonte plantea un escenario pos independiente donde las entidades soberanas contaron con reglas ordenadoras de la sociedad, entre ellas las constitucionales que no tenían una naturaleza homogénea sino muy diversa. En efecto, junto a las innovaciones de corte liberal subsistían normas acordes con la “antigua constitución” que fueron las que guiaron las conductas de los gobernantes, incluso los denominados “caudillos”. Este ángulo del análisis indaga en la visión del mundo y en las grandes nociones que regían tanto lo colectivo como lo individual, recogido en parte para pensar varios temas abordados en esta tesis. Crítico de las categorías tradicionales de caudillo / caudillismos por su inconsistencia para explicar las formas y vicisitudes de la vida social, indaga otra faceta de ciertas figuras políticas rioplatenses: la formación intelectual. No los piensa como profesionales del campo intelectual sino como portadores de criterios provenientes de lo que entonces era la ciencia de la sociedad, es decir el conjunto de doctrinas del derecho natural y del derecho canónico recibido a través de los estudios superiores o medios que ellos habían realizado. Estos criterios eran transmitidos, implícita o explícitamente, en sus acciones políticas, en el dictado de normas, en la regulación de los acuerdos y conflictos y por supuesto en sus vidas privadas. Dentro de esas figuras destacadas de la época, el autor incluye a Pascual Echagüe recorriendo las instancias de su formación intelectual en las aulas de Latinidad de Santa Fe, en

---

<sup>481</sup> En la actualidad podemos hablar de un cierto consenso sobre la caracterización de esos jefes, con capacidad de liderazgo, de generación y desarrollo de proyectos, con cierto poder económico e influencia social. Se ha avanzado en varios aspectos: en algunas distinciones que refieren a trayectorias, cargos o puestos desde donde se ejerce el poder, alcance local o regional del mismo, acción urbana y/o rural, clientelas, relaciones informales, etc.; en la crítica al estudio exclusivo de los personalismos que obturan el conocimiento de la realidad histórica de su tiempo; en las bases formales de legalidad y legitimidad contempladas en el comportamiento político de estos líderes, dentro de las convenciones de época, etcétera.

Filosofía y Teología del Colegio de Monserrat y de la Universidad de Córdoba. Los títulos obtenidos fueron Maestro, Licenciado y Doctor en Teología.

Otro aporte significativo lo constituyen los estudios de Roberto Schmit sobre el oriente entrerriano. En un cambio de punto de vista, no centrado en la persona y la acción del gobernante, estudia las continuidades y cambios en una sociedad de frontera. En su mirada política del período, señala el nuevo equilibrio interno logrado después de 1832, basado en el otorgamiento de mayor autonomía y poder dentro de los elencos de la administración a los levantiscos líderes del oriente entrerriano, en particular a los Urquiza. Desde una perspectiva socio-económica, el autor explora distintas dimensiones en el área fronteriza de estudio como la demográfica, la económica en su nivel estructural, de producción y mercados, las finanzas públicas y la política monetaria, la consolidación de la notabilidad local. Los conflictos bélicos a los que aludimos anteriormente y los que le siguen en la década de 1840 motivaron varios interrogantes en el autor sobre cómo fue posible responder a las necesidades económicas de los estancieros, a la reproducción de los pastores – labradores, al sostén de los vínculos mercantiles ante tamaña movilización militar. Interrogantes que intenta responder reparando en la fuerte dinámica de intercambios que más allá del mercado, ligó a los pobladores, a los notables y a las autoridades locales a través de prácticas que permitían el acceso a los recursos productivos, al tránsito, al comercio o a peticionar ayudas diversas a cambio de sostener de manera permanente y sin paga los servicios públicos durante los tiempos de la guerra. Esa dinámica reconoce una combinación de legados coloniales junto con la presencia de algunos nuevos paradigmas, pero de ninguna manera, una rápida adopción de los patrones del capitalismo y el liberalismo.

Finalmente, Griselda Pressel estudia la cultura jurídica en Entre Ríos entre 1820 y 1850, con aportes teóricos y metodológicos de la antropología jurídica y la historia crítica del derecho. Con el mismo cambio de punto de vista que observamos en Schmit, la autora pone en cuestión la enunciada división republicana de poderes observando la ausencia de una justicia independiente, el vínculo entre la justicia y la esfera militar, la tipificación de los delitos y las prácticas urbanas y rurales. Un reglamento de justicia, que Pressel ha calificado de modernizador, fue presentado en 1836; en él se planteaba una estructura y



funcionamiento similar a lo estipulado en las reformas de Buenos Aires propiciadas durante el gobierno de Martín Rodríguez. En realidad, ese reglamento no surgió aislado sino que era parte de una reforma del Estatuto provisorio de 1822 en lo relativo a la organización de los Tribunales de justicia.<sup>482</sup> En uso de las Facultades Extraordinarias, Echagüe decreta la ley de reforma contemplando la distribución de los jueces en los Departamentos Principales I y II, formas de proceder en las diferentes instancias de juicios, interposición de recursos extraordinarios de injusticia notoria, dotaciones de jueces y comisionados, y la novedosa disposición de la inamovilidad de los jueces. El Reglamento no fue puesto en vigencia por una cuestión presupuestaria, que podemos pensar como una causa posible pero no única dado los significativos cambios que introducía, en particular su desarticulación de la esfera militar y la tendencia independiente. En los trabajos de Pressel, un análisis de las normas vigentes en las décadas de 1830 pero fundamentalmente en la de 1840 le da elementos para concluir que existe una fuerte persistencia de rasgos corporativos y una omisión de los desafueros, como garantía de igualdad ante la ley, hasta las reformas de 1849.

Como síntesis de este breve recorrido historiográfico podemos decir que la selección de aportes historiográficos tanto los del siglo XX como los más recientes destacan al menos dos rasgos puestos en contraste: -desde una personalización de la historia en los grandes jefes y prohombres a la perspectiva de una historia de la sociedad que pone en observación a una variedad de actores sociales en diversas escalas de contexto; -desde una reconstrucción acontecimental y minuciosamente documentada de los sucesos a un análisis interdisciplinar más complejo, en perspectiva cultural y en términos de proceso histórico. Historias construidas en tiempos y contextos académicos distintos que nos invitan a balances más amplios, a nuevas construcciones, a nuevas comprobaciones en esta *historia en marcha*.

---

<sup>482</sup> RLDAPER, T. III, Ley del 15 de marzo de 1836, pp. 232-245.



## ANEXO FINAL

### Contenido:

#### **ANEXO a la Introducción.**

Latinoamérica Siglo XXI: una reflexión preliminar acerca del rol de la historia en el tratamiento de los problemas del presente.

#### **ANEXO al Capítulo II.**

Cuadro No. 1 Informes administrativos y eclesiásticos entre 1745 y 1803.

Cuadro No. 2. Estimación de habitantes para la Gobernación Intendencia de Buenos Aires entre 1789 y 1801 realizada por Félix de Azara.

Gráfico No. 1. Matrimonios registrados en Santo Domingo Soriano (1795-1810)

Gráfico No. 2. Matrimonios registrados en Villa del Uruguay (1816-1832)

Gráfico No. 3. Matrimonios registrados en Santa Fe (1820-1822)

#### **ANEXO al Capítulo III.**

Manifiesto del Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos (1822)

#### **ANEXO al Capítulo IV.**

Tabla No. 1: Elecciones de 1821, 1825, 1827 y 1829.

#### **ANEXO al Capítulo VIII.**

Un recorrido por otras experiencias fiscales rioplatenses del período.

Fuentes de Cuadros y Gráficos

Cuadros A y A Bis: ENTRE RÍOS. Caja de Paraná y Caja del Uruguay – Ingresos y egresos Años 1822 a 1832.

Cuadros B y B Bis: ENTRE RÍOS. Caja de Paraná y Caja del Uruguay. Aduana, Préstamos y suplementos, Depósitos. Años 1822 a 1832.

Cuadros C y C Bis ENTRE RÍOS. Caja de Paraná y Caja del Uruguay. Gastos militares, sueldos civiles, políticos y Hacienda, pago a prestamistas. Años 1822 a 1832.



## ANEXO a la Introducción

### **LATINOAMÉRICA SIGLO XXI: una reflexión preliminar acerca del rol de la historia en el tratamiento de los problemas del presente**<sup>483</sup>

El propósito de reflexionar sobre la construcción del poder político y la cuestión ciudadana con perspectiva histórica en Latinoamérica a inicios del siglo XXI, implica sumergirnos en experiencias anteriores desde nuestra relación actual con el mundo, desde la conciencia de una realidad contemporánea que hunde sus raíces en un pasado signado por el hecho colonial y se reconoce, muchas veces perpleja, en una multitud de actitudes, representaciones, decisiones y formas de afrontar las exigencias de la vida social pretérita, vivas aún en el presente. Un proceso enigmático que tiene más posibilidades de explicación si se lo aborda desde una dimensión analítica integradora, atendiendo a su complejidad e historicidad.

En los últimos veinticinco años, la conformación del mosaico político latinoamericano ha suscitado importantes y renovados debates acerca de la relación entre la denominada globalización, la ciudadanía y el Estado nación, luego de haber dejado atrás los sombríos años de dictaduras militares.<sup>484</sup> Estas discusiones se instalaron más fuertemente desde los '90, con una progresiva mirada interdisciplinar y con una participación más abarcativa del conjunto social, alejándolas de las visiones parciales académico-formales o técnico-administrativas que se planteaban en distintos foros, con anterioridad a la recuperación democrática. El tratamiento del poder estatal y las formas que adquirió con la aplicación de las duras políticas neoliberales, se manifestó más críticamente a fines del siglo XX, complementándose luego con nuevos análisis sobre distintos ejes: vínculo Estado-ciudadanía-sociedad civil, procesos identitarios nacionales, combinaciones de ciudadanía con migración, mundo del trabajo y/o cosmovisión de pueblos originarios; también acerca de la creación y/o revitalización

---

<sup>483</sup> Texto que precedió al desarrollo de mi Tesina de Investigación "La construcción de los Estados provinciales en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX: Fiscalidad, militarización e inestabilidad política en Entre Ríos (1821-1824)", Sevilla, 2007, presentada en la UPO como requisito para obtener el Diploma de Estudios Avanzados y el título de Máster en Historia. Publicado en *Revista Clío & Asociados. La Historia enseñada*, Sección Debates, No. XII, Ediciones UNL, 2008, pp. 236-240.

<sup>484</sup> Las dictaduras militares se instalaron en Uruguay entre 1976 – 1981, en Chile 1973 – 1990, en Bolivia 1971 – 1978, en Paraguay 1954 – 1989, en Brasil 1979 – 1985, en Perú 1975. El Plan Cóndor como alianza regional entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia implicó la coordinación de los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de 1970 y 1980 para perseguir a los opositores políticos. En Argentina, el golpe de estado de 1966 instauró un gobierno militar de facto que duró hasta 1973, siguiéndole un breve período democrático que se vio interrumpido en 1976, al ponerse en marcha el denominado Proceso de reorganización nacional por parte de una Junta militar; en 1983 se recuperó el sistema democrático. Los gobiernos dictatoriales de turno emprendieron una persecución implacable y muchas veces sangrienta sobre sus opositores políticos, incluida una pléyade de intelectuales, entre ellos muchos historiadores, disgregando en consecuencia a los equipos de investigación por ellos conformados. El año 1966 es un hito para la comunidad científica argentina pues se producen tumultuosas intervenciones en los ámbitos universitarios, expulsando e incluso obligando al exilio a numerosos profesores e investigadores; luego de un corto interregno democrático se vuelve a repetir, pero esta vez con más fuerza, el proceso de recorte y/o eliminación de los núcleos de investigación, en particular aquellos pertenecientes al área de las ciencias sociales que se manifestaban críticos. En 1983 con el regreso de la democracia, volvieron al país muchos científicos, se impulsó nuevamente el trabajo colectivo desde distintas instituciones y se intensificó la red de cooperación con el exterior. Ese trabajo conjunto en medio de las sucesivas crisis integrales que ha conocido el país –la más grave en muchas décadas fue la de 2001– se sostiene hoy con gran esfuerzo, sin embargo no supera todavía el atraso ocasionado por las intervenciones militares en materia educativa y científica y presenta algunos déficit tanto en su organización institucional como en sus temáticas y perspectivas interdisciplinarias.

de bloques de integración regional, política y medioambiente, etc.<sup>485</sup> El fenómeno del nacionalismo y sus vicisitudes actuales, la transformación brutal de modelos culturales a partir de los acelerados cambios en la tecnología, la presencia de viejas y nuevas desigualdades, la fuerza negativa del “pensamiento único” radicado básicamente en la supremacía de la economía y el mercado en la vida social, y por ende, la falta de consideración de una diversidad real sustentada en la existencia de múltiples percepciones del mundo, son tópicos que atraviesan esta reflexión crítica atendiendo también a nivel teórico, a la polisemia de los términos que ofician como ejes para el análisis.

Dos de los retos más importantes para las democracias latinoamericanas además de una redistribución económica equitativa siempre postergada, son la falta de una cultura de la legalidad y la aparición de jefaturas políticas caracterizadas nuevamente por los personalismos. Esto conlleva a la necesidad de replantear la cultura política y de superar los aspectos formales de los sistemas de gobierno para profundizar en los verdaderos objetivos de la política en su relación a los requerimientos sociales, a una efectiva Representación armonizadora de intereses sectoriales y a la formación de una cultura cívica con estricto respeto a la Ley. Otro objetivo que persiguen los debates actuales es advertir sobre posibles regresos autoritarios, sesgados por posiciones extremas de distinto signo ideológico, que rehuyen controles y no aceptan disensos. La revisión del sujeto político como objeto inagotable de investigación permite arribar a distintas interpretaciones habida cuenta de las múltiples realidades locales y nacionales que conforman su contexto y de los abordajes interdisciplinarios y comparativos al problema de parte de historiadores, científicos políticos, teóricos sociales, economistas, antropólogos, sociólogos, juristas. Esta interpelación a nuestro presente debe incorporar profundos análisis históricos sobre la construcción del poder político y sus relaciones intrínsecas desarrollado luego de las Independencias, las formas básicas del Estado republicano y la evolución de la representación política y el estado de Derecho, registrando en ese largo camino recorrido los índices de conflictividad y acuerdos sostenidos en el interior de los sistemas implementados.

Cómo podemos esclarecer nuestros problemas y potenciar sus posibles soluciones sino nos reconocemos en nuestra propia historia de vida social? Sin ánimo de encontrar y aplicar fórmulas o modelos que fueron exitosos en otras épocas o bien,

---

<sup>485</sup> Algunos de los textos consultados para la elaboración de este ensayo son: Boletines de CIPCA/UAP, Nos. 120 y 158, La Paz, Bolivia, 2005/6. Nun, José (Comp.) *Debates de Mayo. Nación, cultura y política* Celtia – Gedisa, Sec. de Cultura de la Nación, Bs. As. 2005. Irurzqui Victoriano, Marta (Ed.) *La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador, Perú) Siglo XIX*, Introducción, Bibl. Historia de América, Madrid, CSIC, 2005. *Jornadas de Reflexión y Debate: Hacia una visión crítica de la Historia*, Recopilación de Ponencias, CERIDE, Santa Fe, 2004. Tandeter, Enrique “Tradición y Modernidad en América Latina. Aportes para una discusión” en Proceedings Actes 19 th International Congress of Historical Sciences, Oslo, Suecia, 6 – 13 August, 2000, Theme 17. Hobsbawm, Eric *Sobre la Historia*, Barcelona, Crítica, 1998. Nohlen, Dieter (Ed.) *Descentralización política y consolidación democrática. Europa-América*, Síntesis y Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1991: Presentación, pp. 11-14, Nohlen, Dieter “Descentralización política. Perspectivas comparadas”, pp. 357-379. Arocena, José “Algunas dimensiones del concepto de descentralización” pp. 17-22. Halperin Donghi, Tulio “Un cuarto de siglo de historiografía argentina (1960-1985) en *Desarrollo Económico*, v. 25, No. 100, 1986. Hobsbawm, Eric *El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera*, Crítica, Barcelona, 1987. Revistas electrónicas: *Escenarios alternativos*, Portal de análisis político. (Gil Lavedra, Ricardo “La cultura de la legalidad”, *La Nación*, Bs Aires, 19/ABR/06); *Circunstancia*, Revista de Cs Sociales; Instituto Ortega y Gasset No. 10, Mayo 2006 (Arango, Joaquín “Ciudadanía: la llamativa popularidad contemporánea de una vieja noción”)

desechar otros porque en su momento fueron notoriamente nocivos para el basamento social de cada país, el conocimiento de los antecedentes históricos proporciona elementos de comprensión de las situaciones presentes pasibles de utilizar en los variados espacios deliberativos y por ende, facilita y habilita a pensar, de manera creativa y sustentada, otras vías de salida alternativas a los nudos problemáticos más candentes. Esto pensado en ámbitos no solo nacionales sino en el de las relaciones internacionales y en consonancia con la “nueva reestructuración supranacional del globo” en palabras de Eric Hobsbawm, donde se suscitan conflictos y nuevas prácticas de resistencia y negociación, apelándose en algunos casos a las estrechas vinculaciones históricas entre las partes para hallar caminos de solución.<sup>486</sup>

El problema de la forma de gobierno se instaló tempranamente en Latinoamérica luego del vacío de poder instaurado por el colapso del orden colonial español. En el Río de la Plata, las tendencias centralistas y autonómicas se perfilaron ya en la década revolucionaria de 1810, en una puja de larga duración que se fue resolviendo dificultosamente a lo largo del siglo XIX a favor de una definición del estado nacional del tipo federal, hacia 1880. Pero como cuestión sustantiva siempre ha estado presente, adquiriendo nuevos planteamientos según las circunstancias y sus variables. La tensión entre las pretensiones de centralización político administrativa y las de descentralización que intentan redistribuir el poder y garantizar la autodeterminación, resurge periódicamente y a distintos niveles territoriales. En la última opción, la demanda participativa de la sociedad civil ha ido construyendo cimientos desde distintos lugares y formas de organización; esto se ha manifestado, particularmente desde el impacto neoliberal a fines del siglo XX, cuando fueron retirándose algunas funciones sociales de competencia del Estado, desprotegiendo en consecuencia áreas básicas de crecimiento y desarrollo como la educación, la salud, la seguridad social, la ciencia. A la vez, la burocratización de las instituciones en lugar de optimizar los mecanismos de acción estatales lo que ha hecho es reproducir y acrecentar formas de organización interna encriptadas que no contribuyen a facilitar la acción social. En este sentido hoy también se reclama una “nueva institucionalidad”, nuevas formas de regulación estatal y mayor organicidad en las prácticas sociales no gubernamentales a fin de dotar de efectividad real a las intervenciones civiles. Un reclamo estimulante para seguir explorando el pasado y, aún en la convicción de saber que ese pasado no es el presente, lograr un marco de referencia de amplio sentido histórico para pensar la actualidad.

---

<sup>486</sup> La instalación de plantas de celulosa por parte de empresas procedentes de Finlandia y España, a la vera del río Uruguay que constituye el límite entre las repúblicas de Argentina y Uruguay, ha traído un grave conflicto diplomático por el poder contaminante de estas industrias denunciado por la primera, con una instancia de arbitrio en la Corte Internacional de La Haya en julio de 2006. Las voces que instan a un diálogo efectivo entre los gobiernos que arriben a una solución y a un control pactado de ese desarrollo industrial entre ambas partes, aducen que las históricas y pacíficas relaciones entabladas entre ambas naciones deben ser recuperadas para no cortar una tradición de cooperación y proyectos comunes. Incluso llegan a invocar lazos tan antiguos que no por desaparecidos en la formalidad dejan de operar en la conciencia de los pueblos, concretamente la Liga de los Pueblos Libres liderada por Jose Gervasio Artigas desde la Banda Oriental –luego República Oriental del Uruguay- y que en 1815 logró su mayor expansión como propuesta confederal, aglutinando a esa provincia, a Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, las Misiones y Córdoba.

**ANEXO al Capítulo II.**

**CUADRO No. 1 Informes administrativos y eclesiásticos entre 1745 y 1803.  
Elaboración propia.**

Tipo de Registro y Año	Partido	Arroyo de la China	Guauguaychú	Guauguay	Bajada	Nogoyá
Padrón Eclesiástico. 1745 (1)					125 F.	
Informe admin. 1765. (2)	Sin pobladores	10 a 12 F.			3 o 4 estancias	
Informe admin. 1770 (3)	Unos 40 E.			20 E. aprox.		
Informe admin. 1771 (4)		23 F. entre Gchú y Arroyo Gato. Pasaron luego a A. de la China en busca de campos vacos				
Informe admin. 1778 (5)	30 F. E. aprox, algunas de Gchú. Otras tantas F. de naturales					
Petición. 1779 (6)				50 V. y 20 naturales.		
Informe admin. 1780 (7)	139 C.F. en el partido, solo V. establecidos. 354 hombres y mujeres.					
Padrón. 11 de agosto de 1782. (8)	81 C.R. (blancos)	48 C.R. (blancos)	108 C.R. (blancos)	308 C.R. (blancos)	83 C.R. (blancos)	
Informe eclesiástico. 1782 (9)						109 H. Total: 433 h.
Informe administrativo. 1786 (10)	200 F. en el partido.					
Padrón capitular. 1787 (11)		86 V. en la Villa. Total: 299 h. (Incluye 8 esclavos y 3 criados)				
Estadísticas. 1789-1801 (12)	3.500 h.	2.000 h.	1.600 h.	3.000 h.	1.500 h.	
Censo parroquial (1803) (13)				3.152 h.		
Censo parroquial (1803) (14)			1.408 h.			1.202 h.

Abreviaturas: E: españoles/as; F: familias; F.E.: familias de españoles; C.F.: cabezas de familia; C.R.: cabezas de rancho; H: hogares; h.: habitantes; V: vecinos.



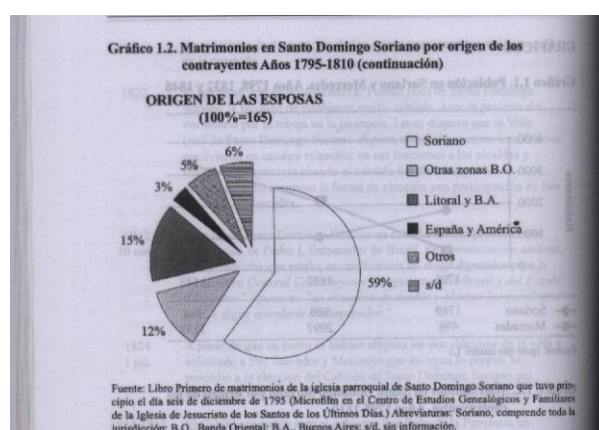
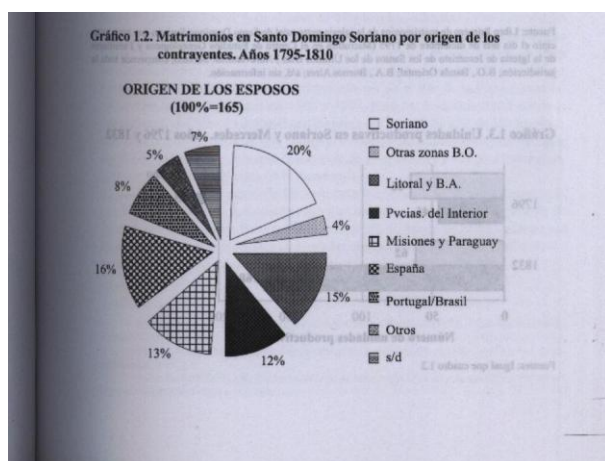
FUENTES: Pérez Colman, César *Historia de Entre Ríos, época colonial (1520-1810*, T. II, Cap. I y su Apéndice documental: (1) Fray Roque del Pino, Convento de Santa Fe. (2) (3) (4) Alcalde Broin de Osuna. Las 23 familias entre Gchú y Arroyo Gato pasaron luego a Arroyo de la China en busca de campos vacos. (5) Juez Comisionado Almirón. Algunas de las 30 familias provenían de Gualaguaychú. (6) Petición de Capilla de parte de 50 vecinos y 20 naturales. (7) Urquiza Almandoz, Oscar. op cit, Cap. I, p. 29. Comisionado Juan Colman (8) Ruiz Moreno, Martín *La provincia de Entre Ríos y sus leyes sobre tierras*, Paraná, 1896, T. I, Apéndice Doc. No. 1, pp. 37-44. Comisionado Tomás de Rocamora. Padrón de Entre Ríos. (9) Urquiza Almandoz, Oscar. 1978, Cap. I, p. 30. Cura Quiroga y Taboada (10) Urquiza Almandoz, Oscar. 1978, Cap. I, p. 29. Alcalde Juan del Mármol (11) Cabildo de Gualaguaychú, CD Actas del Cabildo, Obispado Gualaguaychú, Inst. Profesorado Sedes Sapientiae, Dpto. Investigación, 2010. "Padrón General de las familias que contiene la Villa de San José de Gualaguaychú", datos de elaboración propia. (12) Comisionado Azara, en Azara Félix *Viajes por la América del Sur*, Montevideo, Comercio del Plata, 1850, 2da. Ed, pp. 298- 299. (13) Pérez Colman C. op cit, T. II, Cap. XIX, pp. 321-361. Censo de la Parroquia del Paraná levantado por el párroco Dr. Luis Manuel Cabiedes el 2 de agosto de 1803. Se discriminó la cifra total por sexo de toda edad, resultando un 52% de mujeres y un 48% de varones. (14) Djenderedjian Julio "Trabajo y familia en una frontera que se transforma: el sur entrerriano a fines de la época colonial" en *Anuario* Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti, Vol. 6, No. 16, 2006, pp. 263-294.

**CUADRO No. 2. Estimación de habitantes para la Gobernación Intendencia de Buenos Aires entre 1789 y 1801 realizada por Félix de Azara. Elaboración propia.**

<b>Área estimada</b>		
<b>5 Partidos en los Entre-ríos</b>	<b>11.600</b>	
<b>Jurisdicción de Santa Fe menos La Bajada y Nogoyá</b>	<b>9.500</b>	
<b>Jurisdicción de Corrientes</b>	<b>8.046</b>	
<b>Subtotal</b>		<b>26.146</b>
<b>Buenos Aires más 14 Pueblos y 7 fuertes en área rural y de frontera</b>		<b>71.668</b>
<b>Montevideo y el resto de la Jurisdicción de la Banda Oriental</b>		<b>30.563</b>
<b>Misiones Guaraníes</b>	<b>37.055</b>	
<b>Reducciones en Santa Fe</b>	<b>3.102</b>	
<b>Reducciones en Bs. Aires</b>	<b>1.700</b>	
<b>Reducción en la B. O.</b>	<b>1.700</b>	
<b>Subtotal</b>		<b>43.557</b>
<b>Total estimado de habitantes</b>		<b>174.934</b>

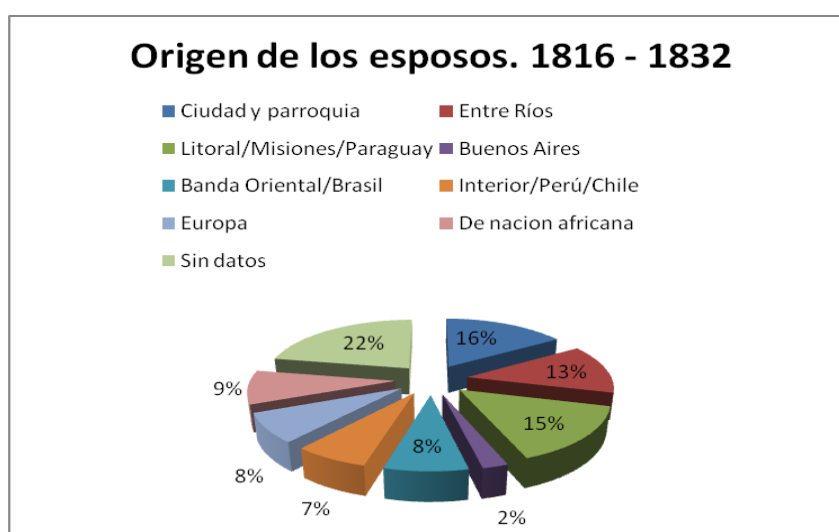
FUENTE: Azara Félix *Viajes por la América del Sur*, Montevideo, Comercio del Plata, 1850, 2da. Edición, p. 298-299.

## Gráfico No. 1. Matrimonios registrados en Santo Domingo Soriano (1795-1810)



Fuente: Frega, Ana *Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa*, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007, pp. 51-52.

## Gráfico No. 2 Matrimonios registrados en Villa del Uruguay (1816-1832)



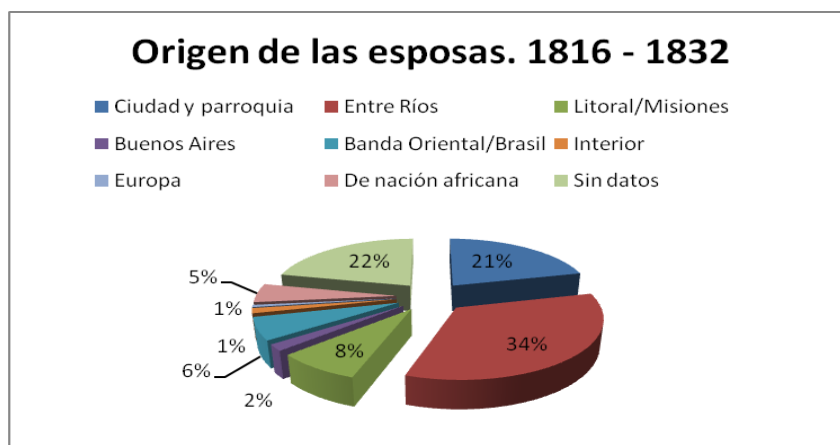


Gráfico de elaboración propia. Fuente: Libro II de Matrimonios 1815-1851. Villa de la Concepción del Uruguay. Acceso: [www.genealogiaentrerios.com/documentos-cd/archivos-parroquiales](http://www.genealogiaentrerios.com/documentos-cd/archivos-parroquiales)

**Gráfico No. 3. Matrimonios registrados en Santa Fe (1820-1822)**

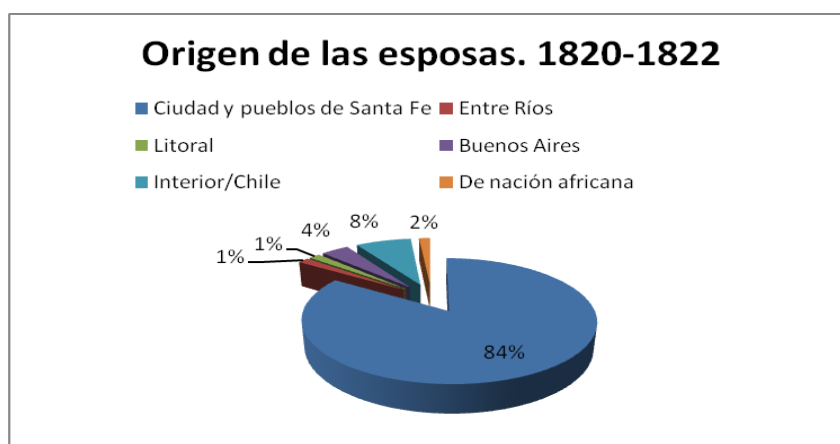
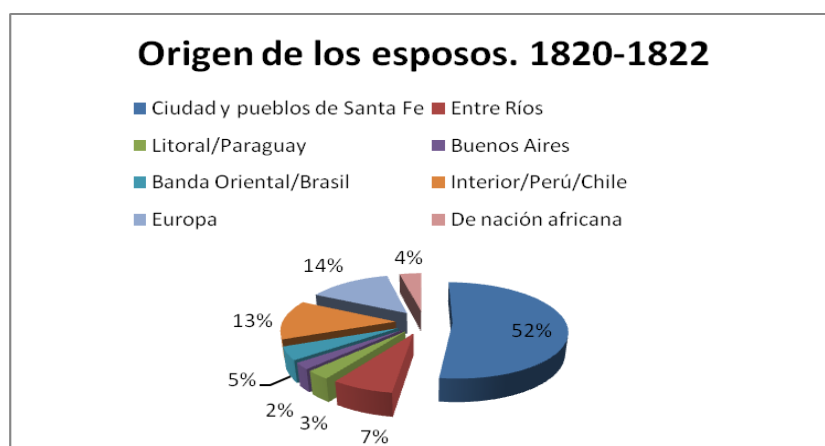


Gráfico de elaboración propia. Fuente: Archivo del Arzobispado de Santa Fe, Catedral de Todos los Santos, Libro de matrimonios Vol. 5, 1820 – 1838. Libro de Desposados que principia por febrero de 1820.

## **Anexo al Capítulo III.**

### **ESTATUTO PROVISORIO CONSTITUCIONAL DE ENTRE RÍOS (1822)**

#### **MANIFIESTO:**

A todos los que las presentes vieren, leyeren y entendieren, hago saber :—Que el Honorable Congreso de esta dicha Provincia ha decretado y sancionado el siguiente Estatuto Provisorio Constitucional, el cual con los Reglamentos y Decretos á que es referente y con el manifiesto con que el Honorable Cuerpo mencionado lo ha dirigido á los Pueblos, es como sigue:

El Congreso Provincial de Entre-Rios á los pueblos y habitantes de la Provincia.

Conciudadanos: al presentaros el Estatuto Provisorio Constitucional, Reglamentos y Decretos que hemos dado para la forma de nuestra Administración y restaurar el orden, la dignidad y libertad que habíamos perdido, nosotros os engañaríamos si nos lisonjésemos de presentaros un invento ó secreto particular en este orden. Con semejante propósito mas habríamos aspirado á hacernos vanamente espectables que á ser útiles y corresponder á vuestras confianzas; y ni nosotros tenemos talentos suficientes para ello, ni parece que hay ruta alguna nueva que descubrir en la materia, despues delo que se ha apurado por el espíritu constitución el tan generalizado en estos últimos tiempos.

Nosotros no hemos hecho mas que recoger y acomodar á nuestras exigencias y circunstancias el resultado principal de las meditaciones de hombres superiores á nosotros, que han sido sancionadas desde mucho antes de ahora, promovidas y respetadas por las naciones y pueblos, cuya opulencia y engrandecimiento emulamos.

Acaso no será todo lo bueno y todo lo mejor que pudiera presentarse; pero sí creemos que es lo suficiente en nuestro estado para ser felices, si lo cumplimos. No es á la verdad la multiplicacion inútil de las leyes la que hace la felicidad de los pueblos, sino el cumplimiento de aquellas principales, sin las que no puede haber sociedad alguna, orden, libertad ni adelantamiento; y estas se han recopilado en cuanto lo necesitamos, y en el verdadero sentido en que todos deben entenderlas para que no haya tropiezo en su cumplimiento por parte de los ciudadanos, ni capciosidad que autorice á los que mandan para burlarlas impunemente.

Hé aquí toda la recomendacion que hemos creído hacer de nuestros trabajos en la formacion del Estatuto Constitucional de la Provincia, y de todas las demás sanciones y declaraciones que le acompañan.

Nosotros estamos persuadidos de haber puesto con ellas las bases de una paz sucesiva inalterable dela libertad civil del territorio y de su prosperidad y adelantamiento.

Hagamos todos ahora la experiencia de cumplir las leyes, y no dudeis que aquellos serán los resultados.

Sala de Sesiones en el Paraná á 13 de Marzo de 1822. Fdo. Marcelino Peláez, Presidente. José Soler - José Francisco Taborda - Pantaleon Panelo—Casiano Calderon.  
Ignacio Luís Moreira, Secretario.

Fuente: RLDAPER, T. I, pp. 136-138.

## Anexo al Capítulo IV.

**TABLA No. 1: Elecciones de 1821, 1825, 1827 y 1829.**

### Elecciones preestatutarias

#### Año 1821: Elecciones de Diputados al Congreso Provincial de Entre Ríos

##### Villa del Uruguay

Día: 11 de noviembre de 1821.

Resultado: electo diputado por exceso o mayoría de votos el benemérito ciudadano Pantaleón PANELO.

#### Funcionarios

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico
Barrenechea, Pedro Comandante militar y político.	1820: Militar del ejército que combatió a Artigas en Avalos. MC, p. 20. Coronel y Comandante de Arroyo de la China nombrado por Ricardo López Jordán quien lo comisiona para firma de armisticio con Mansilla. Pasa junto con otros jefes del ejército de Ramírez a las filas de L. Mansilla y E. López, MC, p. 13. Jefe de Vanguardia de Mansilla, oct. 1821, MC, p. 15. Miembro de la Logia J. Washintgon (Lappas)	Natural de Santa Fe. Vínculos profesionales y de amistad con Gregorio Piris y Mariano Calvento, emigrados a Paysandú, MC, p. 20. 1823: Testigo de casamiento de José H. Fernández, natural del Tala, hijo de Maria Ignacia Barrenechea; figura como Teniente Coronel y Comandante General del II Principal. LMU, f. 121, p. 27. 1824: compra casa del Estado. AGPER, Tierras, Leg. 7, f. 29.
Fernández, Francisco Autoridad de mesa: Alcalde y Presidente del Acto	1823: 2º Recólega del Tribunal de Comercio por el Uruguay (Correo Ministerial, 6/6/23) 1827: Juez de Crimen en Uruguay, Hac IX 1, Leg. 30.	Natural del Montevideo, 40 años, comerciante. Censur 1820, p. 14. Casado con Gabina Almada, prima de Francisco Ramírez. II LMU, f. 227. 1827: contribución en dinero al Estado Hac IX 1, Leg. 31
Perea, Juan Florencio Autoridad de mesa: Secretario del Acto	1821: Coronel de Artillería Ejército de Entre Ríos. 1822: Secretario Comandancia Dpto. II Princ. Uruguay. Suscribe Tratado con F. Lecor, Barón de la Laguna, por orden de L. Mansilla. Miembro de la Logia J. Washintgon Lappas, p. 5	Natural de Montevideo, 1795. 1822. Vínculos de paisanaje con Cándido de San Martín, Dependiente de Dpto. de Rentas del Dpto. II Principal de quien es testigo de su casamiento. LUM, f. 98.

“Firmantes del Acta que certifica el resultado eleccionario y que es suficiente para servir de Poder e Instrucción al Diputado”. Total: 40

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico
Berdun, Lorenzo Diputado del Palmar		
Benítez, Domingo Diputado de Arroyo Grande	1824: Juez comisionado de Partidos de Arroyo Grande, Palmar y Perucho Verna, Hac IX 1, Leg. 10.	1826: casado con Maria del Tránsito Ayala, casamiento de su hijo con Eugenia Pedroso de Corrientes, LUM f. 206.
Ruidiaz, Domingo Diputado del Tala		Natural de Montevideo, 45 años, labrador, casado con Petrona Berdun. Censur, 1820. 1822: suegro del Capitán de Dragones Francisco Cortés; testigos de casamiento de su hija: Lucio Mansilla y Rafaela Calvento. LUM, f. 97.
Latorre, Andrés Vecino	1811-1820: Oficial, Capitán y Mayor del ejército artiguista. 1823: Diputado del CP por Dpto. Uruguay. Se decreta su expulsión del CP por la conspiración de abril. RLDAPER, T. I, p. 9.	Natural de Montevideo. Tío de Juan Antonio Lavalleja, Campos de Garabeli, Vol.II, p. 242.
Moreyra, Domingo	1822: Ternado 1º para Alcalde. Hac IX 1.	
Morón Diego. Vecino		Natural de Extremadura, 42 años, comerciante. Relación comercial con el Alcalde Francisco Fernández, Secretario del Acto. Integra ficha censal de Francisco Fernández, Censur, 1820, p. 14. Testigo de Poder Especial otorgado por comerciante español a Nicolás Jorge, Hac IX 1 Leg. 15. 1830: Testigo del matrimonio del oriental Isaguirre con Vicuña Zapiola de Apóstoles, Misiones; LUM, f. 253.
Suárez, Eugenio Diputado Costa de Guleguaychú		
Echeberría, Juan Visente. Diputado de Las Moscas		1828: suegro de Feliciano Córdova, de Buenos Aires; LUM, f. 221.
Calvento, Mariano Vecino	Comandante de Parque del ejército de Francisco Ramírez. Schmit, p. 257.	Hacendado y comerciante. Familia notable del Uruguay. Amigo personal de Francisco Ramírez, Schmit, p. 257. 1827: testifica casamiento de esclavo lobolo y china correntina junto con su hermana Norberta. LUM, f. 211. 1831: Se casa con Concepción, hija de Agustín Urdinarrain, familia notable, LUM, f. 256
Rivero, Antonio Vecino	1825: Alcalde del Uruguay, AGPER, Tierras, Leg. 15, f. 71.	Natural de Montaña (o montañés se le decía a los del norte de España, 38 años, vecino, Censur 1820 p. 11. 1828: Posee esclavos, LUM, f. 233.
Márques, Manuel Vecino		Natural de Oporto (Portugal), 25 años, peón.. Integra ficha censal del comerciante Mariano Sabala, votante en esta elección, Censur 1820, p. 13. 1821: Casado con Maria Antonia Godoy. 1823: testifican casamientos de su cuñado casado con

		Teresa Fernández y de Benancio Salazar Sgto de Dragones y Brígida Muga del pueblo de Mercedes (BOriental), LUM, fs. 75, 127, 128.
Berdun, José Antonio Vecino	1815: comandante en el ejército de José Artigas. UAlmandoz HCU I, p. 377. 1816: Comandante militar de la guarnición del Uruguay, LUM, f. 6, p. 3.	Natural de Montevideo 1816: casamiento con Petrona López, testifica Francisco Ramírez, comandante del Uruguay designado por Artigas. LUM, f. 11, p. 4. 1817-junio 1821: preso de los portugueses. 1821: Comerciante exportador a ultramar, AGPER, Hac., Serie V, Carp. 2, Leg. 4.
Panelo, Pantaleón Vecino  DIPUTADO ELECTO	1811: Síndico Procurador del Cabildo del Uruguay que adhiere a la causa patriota contra los españoles de Montevideo. UAlmandoz, HCU I, p. 332. 1821: Diputado al CP por el Uruguay. UAlmandoz HCU I, p. 441.	Natural de Buenos Aires, casado con Petrona Pérez de Montevideo, 37 años, comerciante, Censur 1820. Hacendado. 1824: compra estancia a la viuda de Pedro Prellezo residente en Paysandú, AGPER, Gob. Serie VIII, Caja 1A, Leg. 13. 1825: "Vecino y del comercio y del gremio de hacendados de la Villa del Uruguay, compra una estancia con ganado vacuno, caballar, lanar, casa, corrales, cercamientos, marca de ganado, al oeste del arroyo de Gualaguaychú" AGPER, Tierras, Leg. 15, f. 71. Compra terreno al Alcalde Mayor del Uruguay. AGPER, Gob. Serie VIII, Caja 2A, Leg. 15. 1828: casamiento de sus esclavos LUM, f. 231.
Peláez, Marcelino DIPUTADO ELECTO de Gualaguaychú (1821) pero vota en el Uruguay.	1821-1823: Diputado por Gualaguaychú en el CP.	Natural de Mendoza. Hacendado y comerciante. 4 peones. Cenichú, 1820, jpg 42. 1824: vende una estancia a Maria Pascuala de la Quintana, CCC, Caja 1, Expte 39.
González, José Sebastián. Diputado de Villaguay		
Urquiza, Justo José Vecino	1824: Comandante Cívicos. SM, p. 22. 1826-1827: Diputado al CP por el Uruguay 1826: Capitán de la 2º Cía. Batallón Cívicos del Uruguay. Anuario Bosch, pp.107-115. 1832: Comandante II Principal. Schmit, p. 253	Natural del Uruguay el 18 octubre 1801, 18 años, soltero, comerciante (al momento de la elección tenía 20 años). Censur 1820, p. 9. Hijo de Joseph y hermano de Cipriano. Estudios en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Tendero de Ramos Generales en su juventud. Hacendado. Schmit, pp. 250 y 252.
Monteros, Vicente Vecino	1824: Recólega del Trib. de Comercio del Uruguay, Hac IX 1, Leg. 11. 1826: 1er. Cólega interino del Trib. Comercio del Uruguay, Hac IX 1 Leg.22. 1826: escrutador electoral en la elección a diputado al CP por el Uruguay. UAlmandoz,	Natural de Galicia, 27 años, soltero, comerciante, Censur 1820, p. 7. 1824: sociedad por negocios de hacienda. con Justo José de Urquiza y Juan Barañao. UAlmandoz, HCU I, p. 462. Schmit, p. 253. Casado con Matilde Micaela Urquiza. Cuñado de Justo José y Cipriano de Urquiza, yerno de Joseph de Urquiza, Schmit, p. 253.

	HCU I p. 473.	
Sabala, Mariano		Natural de la Villa del Uruguay, 30 años, comerciante, Censur 1820 p. 13. 1817, 1824, 1825: testifica casamientos, LUM, fs. 26, 161, 177. 1828: testifica casamiento de Pedro Nolasco Cabrera de Coronda y Gabina Almada, prima de Francisco Ramírez, LUM, f. 227.
Lanús, Juan Vecino	1823: 1er. Cólega por Uruguay en el Tribunal de Comercio, Correo Ministerial, 6/7/23. 1824: Apoderado del porteño Pedro Trápani por negocios de tierras fiscales, AGPER, Tierras, Leg. 6, fs. 25-27 1826: Contador del Uruguay, RLDAPER II p. 181.	Francés, 26 años, comerciante, casado con Teresa Castro de Buenos Aires, 2 hijos, 1 esclavo y 1 esclava, 3 dependientes del comercio (1 inglés, 1 gallego y 1 irlandés), 2 agregadas, Censur 1820 p. 14. 1820: testifica casamiento de Narciso Parchapé, francés, LUM, f. 46. 1822: compra casa y fábrica del Estado en remate, AGPER, Tierras, Leg. 2, fs. 3-5. 1825: El HC Congreso le otorga Carta de ciudadanía (Libro 1 Bis, fs. 18-19)
Barceló, Salvador Vecino		Década de 1820: comerciante de importante giro. UAlmandoz HCU I, p. 499. Proveedor de carne a la guarnición del Uruguay, Gob. I, Carp. 16, Leg. 7, f. 209. 1826: posee estancias en Bergara y en Arroyo San Gregorio, Villa del Uruguay, AGPER, GOB: Serie VIII, Leg. 23. 1827: testifica casamiento de Manuel Cortés, Secretario de la elección de electores de 1829, LMU, f. 212. 1822 y 1830: casamiento de sus esclavos LUM, fs. 104 y 245.
Samuel, Julián Vecino		Irlandés, 34 años, sastre, Censur 1820, p. 11. 1823: casamiento con María Socorro la O de Buenos Aires, LUM, f. 131.
Rodríguez, Juan Diputado Mandisoví		Natural de Buenos Aires, 26 años, comerciante, Censur 1820, p. 16.
Burgos, Juan Luis		
Castañer, Juan José Cura de Arroyo de la China	1828: nombrado diputado por el Uruguay, renuncia por tener fuero eclesiástico y contrariar el Art 20 del Estatuto. RLDAPER II, p. 379-380.	Natural de Buenos Aires. Estudios en el Real Colegio de San Carlos, Doctor en Derecho Canónico en la Universidad de Sgo. de Chile. 1815-1816; 1820 a 1822; 1824-1828: Presbítero, Cura y Vicario del Uruguay. UAlmandoz HCU I, pp. 487-488; RLDAPER I. LMU, p. 20..
Espiro, Jorge	1823: Alcalde del Cuartel No 4 del Uruguay, Hac IX 1. 1826 Alcalde del Cuartel No 4 del Uruguay, Hac 1, Leg. 18.	Natural de Mitilivo, provincia de Iroya, Grecia, 40 años, comerciante, Censur 1820, p. 11. 1819: se casa con Nieves Fernández de Montevideo, testifica su matrimonio José María Urdinarraín, de familia notable; testifica matrimonio de Lucas Moscobiche con Justa Britos, LUM, f. 37 y 43. 1822: testifica matrimonio del griego Juan Demitre con Justa Lastra, de Soriano, LUM, f. 90. 1823: Litigio con Mateo Hermoso por propiedad de un criado, CCC Caja 1, expte 26. 1827: contribución en dinero al Estado,



		Hac IX 1, Leg. 31. 1838: matrimonio de su hija con el griego Miguel Damianovichi, LUM, f. 343.
Salbatella, Antonino	1814: Capítular en Cabildo del Uruguay. UAlmandoz, HCU I, p. 372. 1823: Alcalde de Hermandad del Uruguay, AGPER, Gob. f. 265. Gob. 5, 5 f. 1782. 1826: Alcalde de Cuartel No 2 Uruguay, Hac IX 1, Leg. 18.	Década de 1820: comerciante de importante giro. UAlmandoz, HCU I, p. 101. Cuñado de Luis Hermelo (votante en esta elección) 1824, 1825, 1831: testifica matrimonios. LUM, fs. 137, 165, 173, 260.
Díaz de la Fuente? De la Guere?, Juan		
Moscobiche, Lucas		Natural de Italia, 42 años, comerciante, Censur 1820. Casado con Justa Britos. 1826: Testifica matrimonio del Gral. Manuel Britos, Comandante de Dragones del Dpto. II Principal, con Rosario Espino, LUM, f. 199. 1827: contribución en dinero al Estado Hac IX 1, Leg. 31.
Gonzáles, Teodoro VAR		Radicado desde fines del Siglo XVIII en la Villa del Uruguay, UAlmandoz HCU I, p. 102.
Dalmaa? Salmaa?, Pedro Antonio		
Calvento, José Santos		1817: posee esclavos de Guinea, LUM, f. 25. De familia notable de hacendados y comerciantes, Schmit, p. 257
Britos, Félix Vecino	1823: 2º Cónlega del Tribunal de Comercio, Correo Ministerial, 6/7/23.	Natural de Lisboa, 60 años, casado con María Antonia Arias, 6 hijos, 2 esclavos y 2 esclavas con familia, comerciante, Censur 1820, p. 16; LUM, f. 371. 1820: suegro de Mariano López Jordán, hermano de Ricardo LJ. LUM, f. 48. 1826: vende terreno a Manuel Urdinarrain, AGPER, Tierras, Serie VIII, Leg. 34. 1832. Don Mariano Calvento en representación de Don Manuel Antonio Urdinarrain solicita legítima propiedad del terreno situado entre los arroyos Yuquerí y Hallén que le compró a don Félix Britos, Tierras, Serie VIII, Caja 3, Leg. 6.
Gorvea, Juan		
Benítez, Juan José		Natural de Coronda, 60 años, zapatero, Censur 1820, p. 4. 1826: suegro de José Vianqui, natural del puerto de Mauricio en el Reyno de Cerdeña en la Grecia, LUM f. 209, p. 42. 1835: suegro de Molinas Barú, matrimonio de su hija testificado por Juan José Irigoyen y Avelina Sagastume. LUM, f. 310, p. 69.
Hermelo, Luis de	1790 y 1793: Regidor Cabildo del Uruguay. 1799: Síndico Procurador. 1810:	Radicado desde fines del Siglo XVIII en la Villa del Uruguay, UAlmandoz HCU I, p. 102. Natural de Galicia, 65 años, comerciante,

	vecino asistente al Cabildo abierto del 30 de julio para elegir Diputado a la Junta Grande en Bs Aires. UAlmandoz HCU I, pp. 81. 82 y 275.	Censur 1820, p. 15. Cuñado de Antonino Salbatella (votante en esta elección)
Fernández, Agustín		1823: testifica matrimonio Castro (Coronda) y Lescano, LUM, F. 118. 1830: matrimonio de su hijo con Banegas Lencinas.
Rodrigues, José		Natural de Santiago, 36 años, vecino, Censur 1820, p. 17. 1824: testifica matrimonio Godoy (Santa Fe) y Gómez (Sto. Domingo Soriano) LUM, f. 149.
Urquiza, Joseph de Vecino	1801-1811: Alcalde, Cabildante, Tte. Cnel de Milicias, Comandante de Milicias, Schmit, p. 252.	Natural de Viscaya, 60 años, vecino, casado con Cándida García, 12 esclavas y 9 esclavos, Censur 1820, p. 9. Década de 1790: administrador de estancias de García de Zúñiga y Duval; luego instaló su propia Hacienda en San José. Emparentado con los Alzaga de Buenos Aires. Parentesco por matrimonio de sus hijos: López Jordán-Calvento-Elía-Sagastume, Schmit 252-253.
Sagastume, Ignacio	1796 y 1811: Cabildante. Schmit, p. 257.	Español. 1825: Hacendado con estancias que poseía hace treinta y cuatro años el oeste del arroyo Gualaguaychú., AGPER Tierras, Serie VIII, Leg. 19. Schmit, p. 257. Emparentado con los Urdinarrain, LUM, f. 330.
Fernández, Benito		Natural de Paraguay, 34 años, jornalero, Censur 1820.

Firmantes a ruego de otros.

Vidal, Juan		
Borches, Domingo	1823: Capitán de Cías. Veteranas del Uruguay RLDAPER I 19/8/23.	Natural de Montevideo, casado con Manuela Salazar, 36 años, militar, 4 hijos, 1 jornalero. Censur 1820.

Juan Vidal firma a ruego de: Juan Luis Burgos, Lucas Moscobiche, Teodoro González, Pedro Antonio Dalmao o Salmao, Juan Gorvea.

Domingo Borches firma el voto de Domingo Moreyra.

**Villa de San Antonio de Gualaguay**

Día: 8 de noviembre de 1821.

Resultado: electo diputado con toda la pluralidad de votos el ciudadano Casiano CALDERÓN.

Funcionarios

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Márques, Laureano Comandante	1813: Alferez de Milicias del Paraná destacado en Punta Gorda. AGPSF, Cont. 16, f.	

	282. 1823: nombrado Comandante del Dpto. 1ro. del I Principal. RLDAPER I pp. 289-290. 1826: separado de su empleo de Tnte. Coronel por sentencia del Consejo de Guerra, RLDAPER II, p. 153.	
Bengoechea, Juan Autoridad de mesa: Alcalde Interino*		
Pérez, Matías Autoridad de mesa: Administrador de Rentas *	Diciembre 1820: Secretario Comandancia de Gualeguay. Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 67. 1826: Propuesto para Alcalde de Gualeguay Hac IX 1, Leg. 20	

Votantes. Total: 30

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Bengoechea, Juan Alcalde Interino*		
Díaz, Antonio Cura y Vicario		
Pérez, Matías Administrador de Rentas *	Diciembre 1820: Secretario Comandancia de Gualeguay. Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 67. 1826: Propuesto para Alcalde de Gualeguay Hac IX 1, Leg. 20	
Mancilla, Lucas Antonio. Representa Partido de Nogoyá *	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 67. 1823: Diputado por Gualeguay en el C.P. 1825: Diputado por Gualeguay en el CP.	Casado con Isabel Gómes de Celis, 5 hijos, registrado en Dpto. Nogoyá, Cenguay 1803. Ghiano. 1822: rechaza nombramiento Alcalde de Hdad. del Tala; aduce ser labrador, indigente con varios hijos y no puede trasladar su residencia al Tala para ejercer su función. Hac. IX 1. 1827: Tiene terreno en la costa oriental de Nogoyá. Hac. IX Cuaderno.
González, Juan Simón Representa Partido de Las Raíces		Natural de Montevideo, 24 años, comerciante, Censur 1820, p. 4.
Mendieta, Miguel Gerónimo. Representa Partido del Tala *	1827: Síndico de la parroquia del Tala. SEGURA HE, p. 107. 1829: de abril a setiembre Diputado por Gualeguay al C.P.	Casado con Maria Pascuala Bardallo, registrado en Dpto. Desmochados, Sauce y Lagunas, Cenguay 1803. 1824: el Gobierno le otorga un terreno en el Paraje Los Paraísos. Gob. Serie VIII, C. 3, Leg. 10. 1829: Estancia con peones y Maestro de

		Postas del Uruguay. RLDAPER, T. III, pp. 32-33.
Gonzáles, Eduardo Representa Partido de las Biscachas *	1823: Alcalde Mayor Gualeguay. Hac. IX 1. 1826-1829: Diputado por Gualeguay al CP	
Reed, Juan *	1822: propuesto para Alcalde Mayor de Gualeguay por el Comandante Laureano Marques, por buen concepto y probidad. Hac. IX, 1.	1822: Americano de los Estados Unidos del Norte, con más de 30 años de domicilio en Entre Ríos, Hac. IX 1.
Coll, Cipriano * VAR		
Lezcano o Lascano, Félix *	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 67. 1825: Alcalde de Gualeguay, Hac IX 1, Leg. 17.	
Tixera, Juan Francisco *	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 68. 1827: Alcalde Mayor de Gualeguay, Hac IX 1, Leg. 32 y Cuaderno.	
Gómez, Nicolás		
Gorriti, Juan Vizente * FAR		
Hernández, Félix		Padre de Mariano Hernández
Hernández, Mariano	1826: Alcalde de Gualeguay Gob. Serie VIII, C. 2-A, Leg. 18.	Firma a ruego de su padre. 1825: denuncia de terreno heredado por la familia de su esposa Petrona Reynoso. Gob. Serie XVIII, C. 2-A, Leg. 18.
Rocha, Bernardo José *	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 68.	
Barrenechea, Juan Ignacio		
Azorín o Asorin, Antonio *	1783: vecino fundador de la Villa de Gualeguay. 1798: Capítular. Gob. I 6B. Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 68. 1824: Renuncia a Alcalde Mayor de Gualeguay "yo no me excusaría como no lo he hecho en mi juventud pero al a fecha me hallo enteramente inábil" Hac IX 1, Leg. 12.	Familia radicada en el Pueblo de Gualeguay ya en 1803, Cenguay, 1803.
Reed, Manuel Natalio *	Diciembre 1820: Firma	Americano de los Estados Unidos del Norte.

	Acta electoral Guauguay, Vázquez, p. 68. 1822-23: Alcalde de la Villa de Guauguay, Hac IX 1.	
Barragán, Cornelio VAR		Registro de José Cornelio Barragán en el Pueblo de Guauguay, con familia y un esclavo, Cenguay, 1803.
Urquía, Domingo de		
Godoy, Pedro Pablo *	Diciembre 1820: Alcalde Ordinario. Firma Acta electoral Guauguay, Vázquez, p. 67.	Familia radicada en el Pueblo de Guauguay ya en 1803, Cenguay 1803.
Benítez, José		
Sulibam, Pedro José *		
Hugo, Mariano	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Guauguay, Vázquez, p. 68.	1826: en Sociedad con Don Bernardo Antivero solicita título de propiedad sobre un terreno que prueban hace cuarenta años en la Villa de San Antonio de Guauguay. Vende con su socio una estancia en Arrecifes al Dr. Félix Frías. Gob. Serie VIII, C. 2-A, Legs. 20 y 25.
Rosas Lerman, Juan *	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Guauguay, Vázquez, p. 68.	
Cáserez, Pedro *		1823: abastecedor de ganado en la villa de Guauguay, Hac IX, 1, Leg. 6.
Alemán, Antonino	1831: cesa como Capitán de Dragones Ayudante de Guauguay, RLDAPER III, p. 261.	Familia radicada en el Pueblo de Guauguay ya en 1803, Cenguay 1803
Ballejos, Xavier		
Fernández, José		Natural de Montevideo, 43 años, físico (médico, Dicc RAE 1817), 2 hijas nacidas en Soriano, 3 criados, Cenchu 1820, jpg 044. ¿?

(\*) Votantes que firman el Poder.

Firmantes del otorgamiento del Poder que no han emitido voto. Total: 12

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Gómez, José		
Esparsa, Jacobo		
Lenman o Lerman, Mario.		
Sulibam, Pedro Juan		1825: Abastecedor de reses en el pueblo de Guauguay, Hac IX 1.
...zico, Juan Francisco		
Millán, Francisco		Familia radicada en el Pueblo de Guauguay ya en 1803, Cenguay 1803.
Moreno, Diego		Familia radicada en el Pueblo de Guauguay ya en 1803, Cenguay 1803.
Fernández, Felisiano		Familia radicada en el Pueblo de Guauguay ya en 1803, casado con Teodora Calzada, Cenguay 1803. Su hijo natural de Corrientes se casa en 1817,

		LMU, f. 28.
Hermoso, Matheo	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 68.	1823: Posee bienes en Gualeguay, por su trámite de divorcio se los resguarda para subsistencia de sus hijos, Hac IX 1. 1823: Litigio con Mateo Hermoso por propiedad de un criado, CCC Caja 1, expte 26.
Morchoso o Montoro, Francisco de Dios		
Sate, Juan		
Míguez, Félix	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 68.	

Firmante de voto a ruego (FAR). No emite voto propio. Total: 1

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Alonso José Manuel Esteban		

José Manuel Esteban Alonso firma el voto a ruego de Pedro Cáserez.

Juan Vicente Gorriti firma el voto a ruego de Cornelio Barragán.

Pedro José Sulibam firma el voto a ruego de Cipriano Coll.

Firmantes del poder a ruego. No refrendan el poder. Total: 4

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Lerman José		
Fernández, José		
Urdinarraín, Cornelio	Capitán que comanda las milicias de caballería de extramuros en diciembre de 1821.	
Silva, Manuel del Corazón		

José Lerman firma el poder a ruego de Juan Francisco ...zico.

José Fernández firma el poder a ruego de Felisiano Fernández.

Cornelio Urdinarraín firma el poder a ruego de Francisco de Dios Morchoso o Montoro.

Manuel del Corazón Silva firma el poder a ruego de Cipriano Coll.

### Villa de San José de Gualeguaychú

Día: 7 de noviembre de 1821. No se registran nombres ni firmas de votantes.

Resultado: electo diputado por exceso o mayoría de votos el benemérito ciudadano Dn. José

María LACUNSA. Renuncia al cargo. Electo diputado Dn. José Marcelino PELÁEZ.

### Funcionario

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
González, José Ignacio Alcalde Ordinario y Comandante interino		Natural de Gualeguaychú, 40 años, comerciante, Cenchu 1820 jpg 046 Homónimo, natural de Corrientes, 60 años, mozo de carretas, Cenchu 1820, jpg 043. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.

### Villa de Nogoyá

Día: 7 de noviembre de 1821. No se registran nombres ni firmas de votantes.

Resultado: electo diputado el benemérito ciudadano Dn. Josef Francisco TABORDA.

#### Funcionarios

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Ereñú, Justo	Capitán de milicias en Nogoyá en 1806, fue comandante de Nogoyá (1814-1817). Segura, p. 224.	Linaje santafesino. Bisnieto del Tnte de Gobernador de Santa Fe, Tomás de Hereñú Arteaga y Echevarría. Casado con su prima María del Carmen Ereñú, Cenguay 1803, registrado en Dpto. Nogoyá. Primo de Eusebio. Segura GEN. Según AGPER Gobierno Serie III, Carpeta 2, Legs. 11 A y B, 1823 (Sumario por conspiración) es natural de Santa Fe y vecino de Nogoyá, labrador.
Fernández, Juan José	1824-1825: Diputado al CP por Nogoyá RLDAPER I, pp 343-344	
Basaldúa, Manuel	1822: Ternado 3º para Alcalde de Nogoyá, Hac IX 1	1823: Abastecedor de ganado en al Villa de Nogoyá. GOB 5, 5, f. 1712.
Amarilla, Francisco	1830-1831: Comandante de Nogoyá, RLDAPER III pp. 239, 269. 1831: Alcalde Mayor de Nogoyá, Hac IX 2, Leg. 29.	Casado con Manuela Sánchez, 3 hijos. Cenguay 1803, registrado en Dpto. del Obispo y Altamirano

### Villa de Nuestra Sra. del Rosario del Paraná

Día: 3 de diciembre de 1821. No se registran nombres ni firmas de votantes.

Resultado: electo diputado por mayoría de votos Dn. José Ignacio de VERA. Renuncia al cargo.

#### Funcionarios

Apellido y Nombre	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Escobar, Juan Bautista Alcalde Mayor Ordinario	1824-1825: Diputado al CP	Natural de Santa Fe, 60 años, comerciante, casado con Casilda Rodríguez, 6 hijos, 1 esclavo, Cenpar 1824.
Quintana, Ciriaco Alcalde de Barrio Cuartel No. 2	1824-1826: Capitán de Puerto, Paraná, CCC, Caja 1, Expte 37. Hac IX 1, Leg. 18. 1830 Capital de puerto y Comandante Resguardo RLDAPER III, p. 230.	Natural de Santa Fe, casado con Teresa de la Torre, 30 años, 3 agregados, Cenpar 1820. Pulpero, Cenpar 1824. Rev. GEN No. 19, p. 17. En 1832 compra terreno en Paraná, PC III.
Pérez, José Alcalde de Barrio Cuartel No. 3	Alcalde del Cuartel No. 3 Paraná. Firma nombramiento de	Español, comerciante, 38 años, casado con Martiniana Querencio, Cenpar 1820. Tendero, Cenpar 1824. Tiene un solar en la

	Mansilla como Jefe de las Fuerzas Libertadoras de ER 28/9/21 RLDAPER p. 1.	ciudad de Paraná. Martiniana es hija del comerciante y hacendado oriental Antonio Querencio (PC III) 1823: Secretario del Tribunal de Comercio Hac IX 1, Leg. 4.
Juan Garrigó Secretario del Acto nombrado por los tres Alcaldes	1810:Alcalde Hermandad sustituto de la Bajada. FARce. Belgrano lo nombra Comisario de Guerra honorario y Comisionado especial en la bajada del Paraná (AGPSF, Tomo 14 1785-1814, 1804-1806, en Apéndice I) 1813: carta ciudadanía dada por Asamblea de 1813, RLDAPER I p. 182. Secretario del CP diciembre/21 RLDAPER p. 5. Firma decretos de amnistía a emigrados RLDAPER pp. 5 y 6. 1821: Secretario del CP. Miembro del Tribunal de Comercio. Correo Ministerial, 6/7/1823. en diciembre de 1823,?? encargado de recoger empréstitos de particulares junto con otro miembro Camilo Idoate, 22/12/23, RLDAPER, p. 35 (337) . 1827: Ministro de Hacienda de la Provincia. Cutolo, p. 275.	Catalán, casado en segundas nupcias con Gertrudis Robert, comerciante, 60 años, 2 agregados, 6 esclavos, Cenpar 1820. 1823: Casado en terceras nupcias con María Dolores de la Torre y Vera Mujica, familia notable de Santa Fe, Guzmán, p. 12. Colabora con la campaña de Belgrano al Paraguay y con la fortificación de Punta Gorda con recursos de su propiedad, miembro de Orden Tercera de Santo Domingo, FARce. Naturalizado por carta de la Asamblea del año XIII se lo habilita en junio de 1822 para el voto activo y pasivo como cualquier otro americano habiéndose cumplido los 10 años que prevé el Estatuto Provisional en el art. 114, sección 12, RLDAPER p. 27 (182). Poseía establecimiento calífero y de productos de la tierra, aprox. 50 trabajadores.

### Villa de Nuestra Sra. del Rosario del Paraná

Día: 27 de diciembre de 1821.

Resultado: electo diputado por exceso o mayoría de votos el benemérito ciudadano Dn. José SOLER.<sup>1</sup>

#### Funcionarios

Apellido y Nombres	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Escobar, Juan Bautista Alcalde Mayor Ordinario	1824-1825: Diputado al CP 1828: Diputado electo por Gualeguaychú, renuncia.	Natural de Santa Fe, 60 años, comerciante, casado con Casilda Rodríguez, 6 hijos, 1 esclavo, Cenpar 1824.
Quintana, Ciriaco Alcalde de Barrio		Natural de Santa Fe, casado con Teresa de la Torre, 30 años, 3 agregados, Cenpar



Cuartel No. 2		1820. Rev. GEN No. 19, p. 17. En 1832 compra terreno en Paraná, PC III.
Pérez, José Alcalde de Barrio Cuartel No. 3	Alcalde del Cuartel No. 3 Paraná. Firma nombramiento de Mansilla como Jefe de las Fuerzas Libertadoras de ER 28/9/21 RLDAPER p. 1.	Español, comerciante, 38 años, casado con Martiniana Querencio, Cenpar 1820. Tiene un solar en la ciudad de Paraná. Martiniana es hija del comerciante y hacendado oriental Antonio Querencio (PC III) 1830: Desobediencia fiscal del comercio de Paraná durante el gobierno provisorio de RLJordán, RLDAPER III, p. 220.
Soler, José Alc. de Barrio Cuartel No. 4  Benemérito ciudadano DIPUTADO ELECTO por exceso o mayoridad de votos.	1821: Paraná, Alcalde No. 4, Firma nombramiento de Mansilla como Jefe de las Fuerzas Libertadoras de ER 28/9/21 RLDAPER p. 1. 1821-1823: Diputado por Paraná al CP. 1828-1829: Diputado por Paraná al CP. 1826: Alcalde Mayor de Paraná Hac IX 1, Leg 18. 1828: Alcalde Mayor de Paraná, Hac IX 1, Leg 25.	Comerciante, soltero, 35 años, 1 agregada y 1 esclavo. Cenpar 1820. Sus hermanos Bentura y Francisco votan en esta elección. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P.
Melara, Juan Eugenio Secretario del Acto nombrado por los Alcaldes	Nombrado Escribano en abril de 1826, Hac IX Cuaderno.	49 años, 1 esclavo, Cenpar 1820. Tiene casa en Paraná (PC III)

Firmantes del Acta que “certifica el resultado eleccionario y que es suficiente para servir de Poder e Instrucción al Diputado” Total 108.

Apellido y Nombres	Desempeño institucional	Perfil social y económico.
Escobar, Juan Bautista Alcalde Mayor Ord.	1824-1825: Diputado al CP 1828: Diputado electo por Gualeguaychú, renuncia.	Natural de Santa Fe, 60 años, comerciante, casado con Casilda Rodríguez, 6 hijos, 1 esclavo, Cenpar 1824.
Quintana, Ciriaco Alc. Barrio No. 2		Natural de Santa Fe, casado con Teresa de la Torre, 30 años, 3 agregados, Cenpar 1820. Rev. GEN No. 19, p. 17. En 1832 compra terreno en Paraná, PC III.
Pérez, José Alc. Barrio No. 3	Alcalde del Cuartel No. 3 Paraná. Firma nombramiento de Mansilla como Jefe de las Fuerzas Libertadoras de ER 28/9/21 RLDAPER p. 1.	Español, comerciante, 38 años, casado con Martiniana Querencio, Cenpar 1820. Tiene un solar en la ciudad de Paraná. Martiniana es hija del comerciante y hacendado oriental Antonio Querencio (PC III) 1830: Desobediencia fiscal del comercio de Paraná durante el gobierno provisorio de RLJordán, RLDAPER III, p. 220.
Soler, José Alc. Barrio No. 4	1821: Paraná, Alcalde No. 4, Firma nombramiento de	Comerciante, soltero, 35 años, 1 agregada y 1 esclavo. Cenpar 1820. Sus hermanos Bentura y Francisco votan

	Mansilla como Jefe de las Fuerzas Libertadoras de ER 28/9/21 RLDAPER p. 1. 1826: Alcalde Mayor de Paraná Hac IX 1, Leg 18. 1828: Alcalde Mayor de Paraná, Hac IX 1, Leg 25	en esta elección. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P.
Melara, Juan Eugenio Secretario	Nombrado Escribano en abril de 1826, Hac IX Cuaderno.	49 años, 1 esclavo, Cenpar 1820. Tiene casa en Paraná (PC III) 1830: Desobediencia fiscal del comercio de Paraná durante el gobierno provisorio de RLJordán, RLDAPER III, p. 220.
Fuentes, Rafael		Comerciante, casado con Bárbara Benítez, 4 hijos, 1 agregada, 2 esclavas, 1 esclavo, 2 peones barraqueros, Cenpar 1820. 1817: Rafael Fuentes y Cía contra Domingo Cullen sobre la carga de la sumaca Camponesa, CCC Caja 1, Expte. 8.
Ezpeleta, Salvador de		Natural de Guipúzcoa, Comerciante, 46 años, casado con Juana J. Rodríguez, 6 hijos, 4 esclavos, 1 esclava, 1 comerciante (Camilo Idoate, 22 años) 1 jabonero, 2 peones carniceros, 4 peones quinteros, 2 peones albañiles, 1 agregado quintero, Cenpar 1820. Casado en segundas nupcias con Manuela Acosta, compra un solar en Paraná, tiene comercio e industria, flota de cabotaje. (PC III). 1830: Desobediencia fiscal del comercio de Paraná durante el gobierno provisorio de RLJordán, RLDAPER III, p. 220.
Zubelzu, Antonio María		Soltero, pulpero, 40 años, en unidad censal del comerciante Pedro Lecube que vota en esta elección, Cenpar 1820. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P.
Dávila, Manuel Antonio	1804: Alcalde de Hermandad de Paraná 1805: Alcalde sustituto de Paraná, AGPSF Actas. 1826: 2º Cólaga Tribunal de Comercio Paraná, Hac IX 1, Leg. 18.	Español con casa en Paraná (PC III) Comerciante, 65 años, casado con Manuela Braga, 2 esclavas. Cenpar 1820.
Franco, Pedro		Comerciante, 30 años, casado con Fernanda de los Ríos, 2 hijos, 1 esclava, Cenpar 1820.
Cejas, Hilario		Carpintero, 30 años, casado con Petrona Mendoza, 2 agregadas, Cenpar 1820. Cenpar 1824
Lecube, Pedro	1824: propuesto para Alcalde del Cuartel 1º de Paraná, Hac IX 1.	Comerciante, 40 años, casado con Juana Gálvez, 3 hijas, 1 esclava, 2 esclavos, 1 pulpero (Subelzu) 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P.
Cáceres, Fermín		Agregado, 30 años, en unidad censal del carnicero Pedro Guardia. Cenpar 1820.

Rams, Bentura	1831: Vista de Aduana de Paraná, RLDAPER III, p. 342.	Catalán, comerciante, 48 años, 7 esclavos, 2 comerciantes, 1 peón jabonero, 1 carrero Cenpar 1820. En 1822: casa y terreno en Paraná (PC III). 1824: Tienda en Paraná, Hac IX 1.
Ortiz, Toribio	1822: Alcalde del Cuartel 2º Paraná. 1823: tiene esclavos Hac IX 1. 1827-1830: Diputado por Paraná al CP. 1831: Ministro Secretario de Gobierno, RLDAPER III, p. 317.	Salteño, comerciante y hacendado, casado con Juliana de la Torre Iturri, (PC III) 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P.
García, Vicente		Comerciante, casado, 26 años Cenpar 1820.
Castillo, Manuel		
Rodríguez, Manuel		Cenpar 1824 (4 homónimos: pulpero, carpintero, quintero, labrador)
Pondal, Luis	1823: 2º Recólega del Tribunal de Comercio de Paraná. Correomin. 1826: Alcalde del Cuartel No 1 Paraná Hac IX 1, Leg. 18. 1832: Vista de Aduana de Paraná RLDAPER III p. 382.	Natural de Galicia, comerciante, 35 años, casado con María del Rosario González, 6 hijos, 2 criadas, 1 criado. Cenpar 1820; Cenpar 1824. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P.
Montoro, Plácido		
Cámara, Manuel		43 años, casado con Maria del Tránsito Romero, 2 sastres y dos agregados en su unidad censal, Cenpar 1820.
Hereñú, Miguel Gerónimo		Linaje santafesino. Bisnieto del Tnte de Gobernador de Santa Fe, Tomás de Hereñú Arteaga y Echevarría. Casado con Juana Pérez en 1793, 4 hijos, en 1803 tiene casa sobre el arroyo del Sauce. Primo de Justo Ereñú. Segura GEN.
Borches, Manuel		Comerciante, 29 años, soltero, 2 esclavos con su familia, Cenpar 1820.
Espinosa, Pedro Lucas		Comerciante, 38 años, casado con Francisca Castellón, 6 hijos, 1 peón carretero y 1 agregada, Cenpar 1820.
Cabrera, Félix		
Ramos, Joseph Antonio		Natural de Montevideo, 37 años, casado con Josefa de la Torre, pulpero, 4 conchabados, Cenpar 1824.
¿?, Antonio José		
Borel o Birel, Francisco		
Fernández de la Puente, Francisco		Natural de Santander, fabricante de cal, 45 años, casado con Maria Josefa de los Santos de familia notable santafesina, 6 hijos, 2 esclavos, 1 agregada. Casa y terrenos en Paraná. Cenpar 1820, Censo 1824 y PC III. 1830: Desobediencia fiscal del comercio de Paraná durante el gobierno provisorio de RLJordán, RLDAPER III, p. 220.
García, Manuel		

Reyes, Visente		Carpintero, 64 años, casado con Petrona Aguirre, 8 hijos, 2 esclavos carpinteros, 1 esclava.
Isnaudo, Luis		
Soler, Joseph		
Lazo o Laso, Bartolo		
Jiménez Pedro Celestino		Comerciante, 45 años, casado con Josefa Siri, 4 hijos, 2 esclavos, 2 esclavas. Cenpar 1820.
Clariá, Domingo	1824: propuesto para Alcalde del Cuartel 2º de Paraná, Hac IX 1	Catalán, comerciante, casado con Ángela Herrera, 5 hijos, 1 esclavo, Cenpar 1820. Hacendado y con casa en Paraná, PC III.
Comas, José (Comas Vilardebó)	1823: 1er Cóllega del Tribunal de Comercio de Paraná, Correomin. 1830: Procurador de Ciudad (PC III)	Europeo, 34 años, casado con Melchora Seguí, 2 hijas, 3 esclavas, 1 esclavo, 1 peón, 1 sirviente, Cenpar 1820. Catalán, ya en 1815 es propietario de una manzana céntrica en Paraná, PC III. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P. BB, carta ciudadanía entrerriana en 1824.
Colman, Mariano		
Arajil, Antonio		
Viana, Fernando		Natural de Portugal, 35 años, casado con Dolores Silva, pulpero, 2 hijos, 1 conchabado, Cenpar 1824.
Bamont, Joseph María Fernández, Joaquín		Comerciante, 28 años, casado con María del Tránsito Guardia y Castro, Cenpar 1820. 1828: dueño de un terreno, Tierras Serie VIII, C. 3, Leg. 5
Zamora, Valentín	1825: Fiel Ejecutor rentado con inspección de venta de carne en Paraná, RLDAPER II, p. 16-17. 1826: Designado Alcalde urbano por renuncia de José Soler, "habiéndose desempeñado ya en otras judicaturas". Hac IX Cuaderno.	Comerciante, 30 años, casado con Rafaela Ibañez, 1 hija, 1 agregado, 2 agregadas. Cenpar 1820.
Domínguez, Eduardo		Sastre, 30 años, casado con Maria Mercedes Aguirre, 3 hijos, Cenpar 1820. 1835: vive en Villaguay, su hija se casa con Leandro Velázquez, testifica Crispín Velázquez, Comandante de Villaguay, LMU f. 315. 1851: natural oriental y vecino de Villaguay, se casa en 2º nupcias, LMU f. 459.
Zubiaur, Joseph		Natural de Viscaya, comerciante, 53 años, casado con Sinforosa Andino, 2 hijos, 1 esclava, 2 esclavos, 1 conchabada, Cenpar 1820. Su esposa es hija de Manuel Ignacio Díez de Andino, importante hacendado santafesino, Colección Andino.
Otaño, Pedro	1827: Alcalde del Cuartel No 2 de Paraná, Hac IX 1, Leg. 26.	Natural de Viscaya, paisano de Salvador de Espeleta con quien había llegado de España. 1823: posee solar en Paraná. PC III.

Soler, Bentura		Comerciante, 22 años, soltero. Hermano de José y Francisco Soler, Cenpar 1820
Marnay, Pedro de		
Rodríguez, Antonio Luis		Comerciante, 30 años, casado con Salas, 1 agregada, 2 esclavos, 6 peones, Cenpar 1820. Portugués, industrial, capitán de milicia y comerciante con casa en Paraná, PC III.
Rams, José Ignacio de González, Francisco		Molinero, 65 años, casado con Maria Isabel Mármol hija del Alcalde Juan de Mármol, 3 hijos, 1 cuñada, 1 peón, Cenpar 1820. Suegro del comerciante español Luis Pondal (votante) y del estanciero y comerciante español José Antelo, PC III.
Vicens, Antonio		Europeo, 30 años, comerciante, casado con Rufina Ratós, 2 hijos, 1 agregada, Cenpar 1820.
Gómez, Agustín		Comerciante, 55 años, casado con Isabel Quiroga, 7 hijos, 5 de ellos sastres, Cenpar 1820.
Mayor, Joseph		Comerciante, 55 años, viudo, 1 agregado calafate, 3 agregadas, Cenpar 1820.
Soler, Francisco	1832: Vista de Aduana de Paraná RLDAPER III p. 382. 1832-1833? Diputado en el CP Verificar.	Comerciante, 20 años, soltero. Hermano de José y Bentura Soler, Cenpar 1820.
Núñez, Enrique	1824: Capitán de Puerto Paraná RLDAPER I p. 340 1825-1826: Secretario del CP. 1826: diputado al Congreso General Constituyente en Buenos Aires	1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P.
Caminos, Pedro Pascual		36 años, casado con Vicenta Reyes, 4 hijos, Cenpar 1820
Maramochiner, ¿?		
Villalba, Norberto		Natural de Paraguay, 31 años, casado con Felician La Pera, pulpero, Cenpar 1824.
Gómez, Francisco Antonio		Labrador, 54 años, casado con Maria Antonia Carrasco, 8 hijos, Cenpar 1820.
Zuárez, José		
Siburo, Tomás		1818: proveedor del Hospital militar. GOB I, C. 1, 5, f.85.
Argañaraz, Josef Thomas		
Alba, Francisco		Comerciante, 41 años, casado con María de las Nieves Almada, 7 hijos, 1 agregada, 1 esclavo carrero, Cenpar 1820.
Miranda, Diego de	1823: Administrador de Correos, UAlmendoz, p. 549. 1830: Diputado por Gualeguaychú al CP	Comerciante, 30 años, casado con Manuela Santos, 1 huérfano, 1 agregado, 1 esclava con hija, 1 conchabada con hija. Cenpar 1820.
Firmantes del Acta registrados con la firma de José Soler:		

Lobo, Joaquín		Zapatero, 28 años, soltero, Cenpar 1820.
Rodríguez, José		
Pereyra, Baltasar		Carrero, 60 años, casado con Petrona Aguilar, 5 hijos, 1 hijo carrero, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Luz, Antonio de la		Natural de Portugal, 42 años, casado con Maria Joaquina Acosta, labrador, Cenpar 1824.
Aguirre, Ramón		
Porrel, Anastasio		
Fleytas, Cayetano		Comerciante, 30 años, casado con Maria Francisca Marín, Cenpar 1820, Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Siburo, Pedro		Natural de Santa Fe, 24 años, soltero, pulpero, Cenpar 1824.
Ledesma, Mariano		
Mendoza, Eugenio		Labrador, 40 años, casada con Maria Josefa Pavón, 4 hijos, 1 agregada. Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Márques, Alonso		
Albarenque, Felipe		Carrero, 50 años, casado con Ana Izorral, 2 hijos, 1 agregado labrador, Cenpar 1820
Velázquez, Jasinto (Belázquez)		Labrador, 40 años, casado con Juliana Zarza, 3 hijos, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Acosta, Juan		
Barco, José		
Salasar, Esteban (Zalazar)		Labrador, 60 años, casado con Magalena Barreto, 3 hijos, 1 agregada, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Barrios, José		
Zeballos, Manuel (Ceballos)		Comerciante, 36 años, 2 agregados, 1 conchabada con hija. Cenpar 1820.
del Valle, Domingo		Carretero, 52 años, casado con Maria del Carmen Albarracín, 7 hijos, 1 hijo zapatero, 1 hijo lomillero, 2 esclavos, 1 conchabada, Cenpar 1820.
Maldonado, Cornelio		Quintero, 50 años, casado con Josefa Zapata, 4 hijos, Cenpar 1820.
Plaza, José Miguel (Miguel)		Carpintero, 66 años, casado con María Echagüe, Cenpar 1820.
López, Asensio		
Sejas, Juan		
Troncoso, Anacleto		
Gatica, Miguel		Comerciante, 38 años, soltero, en su unidad censal: 1 pulpero y esposa, 1 peón, 1viuda con 4 hijos, Cenpar 1820.
Rubio, Francisco		Natural de Asturias, 53 años, soltero, labrador, Cenpar 1824.
Reyes, José Manuel		Carrero, 25 años, casado con Felipa de la Pera, 1 hija, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Bergara, Antonio		Herrero, 30 años, casado con María Guardia, 4 hijos, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.

Segovia, Miguel		Carrero, 22 años, casado con María Castellón, 2 agregados, Cenpar 1820 Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Ramos, Antonio		Pulpero, 28 años, casado con Josefa Castellón, 1 hija, Cenpar 1820. Segovia y Ramos cuñados?
Velázquez, Santos (Belázquez)		Comerciante, 30 años, casado con Cecilia Rodríguez, 7 hijos, 1 hijo carrero, 1 agregado, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Álvarez, Antonio		Pulpero, 30 años, casado, casado, 4 hijos, 1 agregada, Cenpar 1820,
Machado, Domingo		Sombrerero, 40 años, soltero, en unidad censal del comerciante Mariano Ramos que posee 2 esclavos sombrereros, 2 peones, 1 esclavo, 1 conchabada, Cenpar 1820.
Cáserez, Vicente		Sastre, 28 años, soltero, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Soñez, Manuel		Zapatero, 26 años, casado con Juana García, 1 viudo oficial zapatero, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Bega, Alejandro		
Albornoz, Faustino		
Silva, Sebastián		Pulpero, 30 años, casado con Maria del Socorro Fernández, 3 hijas, 3 esclavos, 1 esclava, Cenpar 1820. Posee terreno y casa habitación en Paraná, PC III 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 P. 1830: Desobediencia fiscal del comercio de Paraná durante el gobierno provisorio de RLJordán, RLDAPER III, p. 220.
Bonoso, José Antonio	1826: Alcalde del Cuartel 3º Paraná, Hac IX 1, Leg. 18.	
Báez, Roque		Hospitalero, 40 años, casado con Maria de las Nieves Zárate, 6 hijos, Cenpar 1820. Censado en el Cuartel 4 bajo el Alcalde José Soler.
Andino, Pedro		
Fernández, Francisco		

De 42 votos a ruego que emite Soler y sobre 24 identificados, 11 corresponden a su propio cuartel.

Firmante de voto a ruego (FAR). No emite voto propio.

Garramuño, Gaspar		Mozo de la casa, 37 años, soltero, en unidad censal del comerciante Vicente Claro, Cenpar 1820, p. 5
-------------------	--	--

Gaspar Garramuño firma el voto a ruego de José Soler.

### **Elecciones Estatutarias**

#### **Elección de diputado por parte de los 5 electores**

##### **Villa de Gualeguay**

Día: 7 de noviembre de 1825. No se registran nombres ni firmas de votantes.

Resultado: electo diputado Dn. Eduardo GONZÁLEZ por mayoría con los votos de los 4 electores restantes.

##### **Funcionarios**

Apellido y Nombre	Cargos Institucionales	Perfil social y económico. Fuentes
Cáserez, Gerónimo Comandante Receptor del Acta		
Lascano o Lescano, Félix Alcalde Mayor Presidente del Acto	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 68.	
Gómez, José Secretario del Acto		

##### **Electores votantes**

Apellido y Nombre	Cargos Institucionales	Perfil social y económico. Fuentes
González Calderón, José	Diciembre 1820: Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez, p. 68.	1827: contribución en dinero al Estado, Hac IX 1 Leg. 32.
Real, Manuel		
Barragán, Cornelio		
Bustamante, Benancio		
González, Eduardo	1823: Alcalde Mayor en Gualeguay. Hac. IX 1.	

#### **Elección de Electores para designar diputado**

##### **Villa de San José de Gualeguaychú**

Día: 16 de noviembre de 1827. Total: 40 votantes.

Resultado: electores Dn. Francisco NADAL (32 votos), Dn. Leoncio Martínez (28 votos), Dn. Pablo GUTIÉRREZ (25 votos), Dn. Eugenio ECHASARRETA (25 votos), Dn. Bartolo ESPINOSA (23 votos)

##### **Funcionarios**

Apellido y Nombre	Cargos Institucionales	Perfil social y económico. Fuentes
Nadal, Facundo Comandante militar Certifica resultado electoral	Ternado 1º para Alcalde Mayor de 1er. Voto Gualeguaychú, "es nativo de este pueblo y afincado en él", Hac IX 1. Julio 1827: Sgto. Mayor de caballería nombrado Comandante de Dpto I	Natural de Gualeguaychú, 30 años, comerciante, junto con su hermano Francisco en la unidad censal de Teresa Nico, de Buenos Aires, 65 años, hacendada. Cenchú, 1820, jpg 039. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.



	del II Principal, RLDAPER II p. 299.	
Lacunza, José María Alcalde Mayor	Cabildo de Gualeguaychú 1807: 4º Regidor. 1810: Propuesto 2º y 4º Regidor. 1811: 3º Regidor, Fiel Ejecutor, Juez de Policía. Actas Gchú, pp. 276, 302, 319. 1821: Diputado electo al CP, renuncia. 1827: Alcalde Mayor de Gualeguaychú, Hac IX 1, Leg. 33. 1831: Administrador de Rentas de Gualeguaychú RLDAPER III, p. 280.	Natural de Buenos Aires, 39 años, casado con Maria Teresa Aguilar de León, comerciante, 2 criados y 1 mozo de pulpería. Cenchú, 1820, jpg 041. Socio comercial de su suegro Juan Aguilar (Votante), Aguilar J., p. 41. Vínculo de compadrazgo con la familia Mosquera Aguilar, Aguilar J., p. 91. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.
Martínez, Leoncio Vecino. Socio de la elección 28 votos		
González de Cossio, Juan. Vecino. Socio de la elección 1 voto		Español, 30 años, labrador, 1 esclavo. Cenchú 1820, jpg 046. Aguilar J. p. 46. 1824: casado con Maria Rufina Aguilar de León, su suegro es Juan Aguilar, con Lacunza son con cuñados. Aguilar J. p. 46. Vínculo de compadrazgo con la familia Mosquera Aguilar. Aguilar J. p. 81. 1834: muy importante hacendado con 5.518 vacas, 407 caballos y 307 ovejas en la Costa del Uruguay. Montañez, p. 5.

#### Votantes

Apellido y Nombre	Cargos Institucionales	Perfil social y económico. Fuentes
Lacunza, José María Alcalde Mayor	Cabildo de Gualeguaychú 1807: 4º Regidor 1810: Propuesto 2º y 4º Regidor. 1811: 3º Regidor Fiel Ejecutor, Juez de Policía. Actas Gchú, pp. 276, 302, 319. Aguilar J., p. 41. 1821: Diputado electo al CP, renuncia. 1827: Alcalde Mayor de Gualeguaychú, Hac IX 1, Leg. 33. 1831: Administrador de Rentas de Gualeguaychú RLDAPER III, p. 280.	Natural de Buenos Aires, 39 años, casado con Maria Teresa Aguilar de León, comerciante, 2 criados y 1 mozo de pulpería. Cenchú, 1820, jpg 041. Socio comercial de su suegro Juan Aguilar (Votante), Aguilar J., p. 41.
González de Cossio, Juan. Vecino. Socio de la elección		Español, 30 años, labrador, 1 esclavo. Cenchú 1820, jpg 046. 1824: casado con Maria Rufina Aguilar de

1 voto		León, su suegro es Juan Aguilar, con Lacunza son con cuñados. Aguilar J. p. 46. Vínculo de compadrazgo con la familia Mosquera Aguilar. Aguilar J. p. 81. 1834: muy importante hacendado con 5.518 vacas, 407 caballos y 307 ovejas en la Costa del Uruguay. Montañez, p. 5 y Aguilar J. p. 46
Marín Vizente (José Vicente)		Natural del Paraguay, 44 años, labrador, Cenchú 1820.
Díaz, José		
Aguilar, Antonio (Agear)		Natural de Galicia, 45 años, mozo de pulpería, en unidad censal de José María Lacunza, vota a los mismos 5 candidatos a electores. Cenchu 1820, jpg 041.
Talar, Guillermo		Natural de Dublín, 45 años, zapatero, Cenchu 1820 jpg 045. (Si bien el apellido no está claro coincide la escritura tanto en el acta electoral como en el censo)
Gómez, Juan Simón		1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.
Galeano, Pedro 4 votos		1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.
Martínez, Cipriano 5 votos		
Pereyra, José		
Ferreira, Gerónimo		
Subiaga, Simón		
Basabilbaso, Domingo 9 votos		1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.
Querencia, Francisco		Natural de Gualaguaychú, 48 años, labrador, casado con Eugenia Gómez, 5 hijos, Cenchu 1820, jpg 54
León, Gabino		Natural de Gualaguaychú, 22 años, postillón, en unidad censal del estanciero porteño José Aguilar, Partido Peguajó, Cenchu 1820, jpg 16. Yerno de José Aguilar, viudo, 9 hijos, con casa y ganado en arroyo Peguajó, hermano de Juan Aguilar. (Red Lacunza, Cossio, Aguilar, León, Lamas –vínculos de consanguinidad de 1, 2 y 3 grado en algunos casamientos-) Aguilar J. p. 80. 1834: 82 vacas y 51 caballos, Montañez, p. 5
Toledano, Manuel		Hijo de español europeo, 41 años, Familia establecida en Gualaguaychú ya en 1787, Actas Gchú, p. 338.
Oviedo, Juan		
Melgar, Juan 3 votos	Cabildo de Gualaguaychú 1794: Regidor 2º ; 1796 y 1798: Alcalde Ordinario; 1801: Admin. de Rentas de Correos; Regidor 2º. 1802: Decano Regidor; 1809: Alcalde	Natural de Castilla, 54 años, labrador, casado con Florencia Navarro, 1 mozo de servicio y 1 mozo en la estancia. Cenchu 1820 jpg 050. Tiene un esclavo africano de 70 años, Cenchu 1820, jpg 047. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.
Fredes, Gavino		1831: vecinos del Gená, casa a su hija con Lucas Antunes de Paraná, LMU, p. 258.

		1834: ganado en el Gená, 24 vacas y 115 caballos, Montañez, p. 2.
Gómez, Marcelo		2 homónimos en el Cenchu 1820: 1-natural de Gualaguaychú, 38 años, hacendado en Gualeayán, jpg 015. 2-Natural de Paraná, 60 años, estanciero, jpg 026.
Peñalva, Jorge		Natural de Gualaguaychú, 37 años, casado con Maria Gómez, 4 hijos, 4 agregados, estanciero Partido del Sauce. Cenchu 1820 jpg 024. 1834: 123 vacas y 132 caballos, Montañez, p. 6
Ortiz, Damacio		Natural de Buenos Aires, 58 años, comerciante, viudo, Cenchu 1820, jpg 034. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G.
Gómez, Hermenegildo		Natural de Gualaguaychú, hacendado de la costa del Gualeayán, casado con Bernarda Billagra, 4 hijos Cenchu 1820 jpg 014.
González, José Ignacio 4 votos		Natural de Gualaguaychú, 40 años, comerciante, Cenchu 1820, jpg 046. Homónimo, natural de Corrientes, 60 años, mozo de carretas, Cenchu 1820 jpg 043
Galindo, Antonio		Natural de Gualaguaychú, 24 años, comerciante, casado con Bernarda Andrés, 1 hijo, Cenchu 1820 jpg 047. Familia establecida ya en 1787, Actas Gchú, p. 339. 1834: 453 vacas, 116 caballos, 310 ovejas, Montañez, p. 2.
Cajes, Salvador		
Lomeg? Antonio		
Cavallero, Julián		
Mosquera, Pedro Pascual		Natural de Buenos Aires, 46 años, labrador , 4 peones, Cenchu 1820 jpg 049. 1806: tiene terreno poblado, Actas Gchú, p. 269.
Galindo, Ignacio		
Fernández, José		Natural de Montevideo, 43 años, físico (médico, Dicc RAE 1817), 2 hijas nacidas en Soriano, 3 criados, Cenchu 1820, jpg 044.
Mosquera, Polinario		Natural de Gualaguaychú, hijo de la viuda hacendada Ana María García, 12 años en noviembre de 1820, Cenchu 1820 jpg 038. 1834: 693 vacas, 91 caballos, 206 ovejas, Montañez, p. 3.
Mosquera, Pedro (Juan Pedro)		Natural de Gualaguaychú, hijo de la viuda hacendada Ana María García, 25 años Cenchu 1820, jpg 038. 1834: 254 vacas, Montañez, p. 3.
Nadal, Francisco 32 votos	1823: Contador de la Receptoría Gualaguaychú RLDAPER I, p. 233.	Natural de Gualaguaychú, 28 años, comerciante, hermano de Facundo Nadal Comandante de Gualaguaychú en 1827, Cenchu jpg 039
Vela, Ambrosio		1834: en el Partido de Pehuajó estancia con 4.448 vacas, 102 caballos, 134 ovejas, Montañez, p. 2.
Aguilar, Juan 9 votos	Cabildo de Gualaguaychú	Natural de Buenos Aires, comerciante, 57 años, casado con Eusebia de León, 6 hijos,

	1789: Regidor 2º ; 1791-2: Regidor 3º ; 1796-07-1811: Regidor Decano; 1806-07: Alcalde. Actas Gchú y Aguilar J. p. 40.	Cenchu 1820, jpg 041. Desde 1785 en Gualeguaychú, propietario de dos manzanas céntricas en el pueblo y estancia con ganado, Aguilar J., pp. 36 y 40-41. Suegro de José María Lacunza y Juan González de Cossio funcionarios y votantes de esta elección; suegro de Miguel Lamas votante en esta elección. Aguilar J, p. 30. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G. 1834: 938 vacas, 103 caballos, 306 ovejas, Montañez, p. 2.
Crespo, Ramón 19 votos		Natural de Santa Fe, 36 años, estanciero, 2 esclavos con 3 hijos, Padrón de la Estancia del Carmen., Cenchu 1820, jpg 031 y 032. 1819: Testifica matrimonio de José Ramirez y Margarita González, padrinos: Pedro López Jordán y Librada López, LMU, F. 35. ¿1811 a 1826: Mayordomo de la hacienda de Campo Florido, propiedad de Mateo García de Zúñiga? (Archivo MGZ, 19) 1834: ganado en campos del Gualeyán, 668 vacas, 82 caballos, 262 ovejas, Montañez, p. 1.
Quiroga, Guillermo		
Texeira, Francisco		
Martínez, Leoncio Socio de la elección. 28 votos		

Personas que reciben votos para elector pero que no emiten voto propio

Gutiérrez, Pablo 25 votos	Cabildo Gualeguaychú. 1795: Alcalde interino y Regidor Decano. 1806 Regidor Decano. 1811: Alguacil Mayor Actas Gchú.	Natural de Buenos Aires, 62 años, casado con Eugenia León, 7 hijos, 1 criada, labrador, Censur 1820 jpg 53. Vínculo por matrimonio de su hija con la rama Aguilar. Aguilar J. p. 115. Vínculo de compadrazgo con las familias Aguilar, León y Mosquera García, Aguilar J. pp. 81 y 107.
Espinosa, Bartolo 23 votos		
Echazarreta, Eugenio 25 votos	1822: ternado para Alcalde de Hermandad de Gualeguaychú, Hac IX 1.	Natural de Buenos Aires, 48 años, casado con Andrea Alvarez de Buenos Aires, 7 hijos, 1 esclavo y 1 peón, estanciero de la costa del Gualeyán, Censur 1820, jpg 14. 1822: prestamista del Estado, Hac 5, 5 G. 1834: ganado en el Gualeyán, 2.545 vacas, 307 caballos, 307 ovejas, Montañez, p. 1.
Villagra, Eduardo 6 votos	1824: Alcalde de Hdad. 1828: Comandante militar de Gualeguaychú	Natural de Gualeguaychú, 31 años, labrador, casado con Justa Aguilar, sobrina de Juan Aguilar, 1 hija, 5 criados, Cenchu 1820. Jpg 035. Separado de Justa, se casa con Tomasa de León Mosquera, Aguilar J. pp. 118-119. 1834: ganado en la costa del río Gualeguay: 820 vacas, 274 caballos, 163 ovejas, Montañez, p. 3.
Zeballos, Pedro 2 votos	Cabildo de Gualeguaychú 1803:	Natural de las Conchas (Buenos Aires), 54 años, casado con Ramona Pérez, 2 hijos, 1

	Regidor Decano, Actas Gchú.	esclava con su hija liberta, hacendado, registrado en el partido del Gualeayán, Cenchu 1820 jpg 018. 1834: ganado en el Gualeayán 309 vacas, 204 caballos, 105 ovejas, Montañez, p. 3.
Rivas, Benito 1 voto		Natural de Salta, 43 años, casado, 6 hijos, Cenchu 1820 jpg 038.
Lamas, Miguel 1 voto		Natural de Buenos Aires, 21 años en 1820, casado con María Camila Aguilar de León, 2 hijos, 1 oficial zapatero. Cenchu 1820 jpg 042. Estancia en Sauce Chico, Aguilar J. p. 120. 1834: ganado en el Sauce, 319 vacas y 102 caballos. Montañez, p. 6.
Vera, Mariano 1 voto		1833. Apoderado de Mateo García de Zúñiga para negocios de arrendamiento de tierras. Archivo MGZ, 19.

## Elección de cinco Electores para conformar una Comisión Eventual

### Ciudad de Concepción del Uruguay

Día: 10 de mayo de 1829. Total: 67 votantes

#### Funcionarios

Apellido y Nombre	Cargos Institucionales	Perfil social y económico. Fuentes
Calvo, Domingo Fructuoso Alc. Mayor Ordinario Presidente del Acto	14/6/ 1828: Secretario de la Junta Electoral reunida para elección de diputado por el Uruguay al CP. 17/6/1828: ternado en primer lugar para Alcalde Mayor del Uruguay. AGPER, Gob I, Serie I, Carp. 15, Leg. 13, fs. 139-140, 144. 1831: Alcalde Mayor HCU II, p. 34.	
Cortés, Manuel Secretario del Acto		1827: Natural de Montevideo se casa con Damiana Cortés, testifica Salvador Barceló, LMU , f. 212.

#### Votantes

Apellido y Nombre	Cargos Institucionales	Perfil social y económico. Fuentes
López, Pedro (1er. Voto es importante) (Pedro Mártir López Jordán??)	14/6/1828: Presidente de la Junta Electoral reunida para elección de diputado por el Uruguay al CP. AGPER, Gob I, Serie I, Carp. 15, Leg. 13, fs. 139-140	Natural de Uruguay, 23 años, hacendado, en unidad censal de Tadea Jordán, Censur 1820. P. 6. Hermanastro de Francisco Ramírez y de Ricardo López Jordán. Cuñado de Cipriano de Urquiza. 1834: se casa con Petrona Montas, LMU, f. 301. 1836: testifican casamiento de Silverio Sagastume. LMU f. 330.
Urquiza, Justo José	1824: Comandante Cívicos. SM, p. 22. 1826-1827: Diputado al CP por el Uruguay 1826: Capitán de la 2º Cía. Batallón Cívicos del Uruguay. Anuario Bosch, pp.107-115. 1832: Comandante II Principal. Schmit, p. 253	Natural del Uruguay, 18 años, soltero, comerciante. Censur 1820, p. 9. Hijo de Joseph y hermano de Cipriano. Estudios en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Tendero de Ramos Generales en su juventud. Hacendado. Schmit, pp. 250 y 252.
Palacios, José Joaquín	1822: Fray mercedario a cargo de Parroquia de Gualaguaychú, SEGURA HE, p. 108. 1823 y 1828: Fray Palacios, a cargo de la parroquia de ciudad del Uruguay. UAlmandoz HCU I, p.	Presbítero. 1827 Hac IX, 1, Leg. 26 Fraile secularizado

	487; HCU II, p. 217.	
Sagastume, José Joaquín	Varios años como Juez de Villa del Uruguay. Schmit 258 1824 y 1831: Admin. de Rentas del Uruguay RLDAPER I p. 452 y III, p. 262.	1822: estanciero, solicita mensura de tierras propiedad de su padre, ubicadas sobre el arroyo Gualaguaychú., Tierras Serie VIII 2-B Leg. 31. Comerciante, hacendado Schmit p. 258. Emparentado con los Urdinarraín, LMU f. 330.
Irigoyen, Juan José	1823: Alcalde Mayor del Uruguay Hac IX 1 1826: Alcalde Cuartel 1º del Uruguay, Hac IX1, Leg. 18. 1826: Administrador de Rentas del Uruguay, RLDAPER II, p. 196. Encargado de la Caja 1831: Receptora del Uruguay, UAlmandoz UCU II, p. 29	1821: Natural de Buenos Aires, se casa con María Avelina Sagastume. 1828, 1834, 1835: testifica casamientos junto con miembros de la familia notable Sagastume. LMU fs 310,
Larrachau, Santiago	1831: Administrador de Rentas del Uruguay RLDAPER III, p. 280.	1827: Pulpero en Paysandú. PPulperías 1827.
Muñoz, Feliciano		1827: Pulpero en Paysandú. PPulperías 1827. 1824 y 1829: testifica casamientos, LMU fs. 146 y 240.
Rodríguez, José		Natural de Santiago del Estero, 36 años, condición vecino, Censur 1820, p. 17. 1824: testifica casamiento LMU, f. 149.
Urquiza, Cipriano	1814: Cabildante 1818: Administrador Gral. de Entre Ríos. 1826: Diputado al Congreso en Bs. Aires.	Natural del Uruguay, 25 años, soltero, empleado, Censur 1820, p. 9. Estudios en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires; administrador de la estancia familiar. Schmit, p. 252. Fuerte comerciante de cueros década 1810, Djenderedjian. 1829: se casa con Teresa López Jordán, hermana de Ricardo. LUM, f. 236.
Jorge, Nicolás	Servicios navales para el ejército revolucionario y en la guerra contra el Brasil. UAlmandoz HCU I, p. 359. Pérez Calvo, pp. 2-3	Natural de la Isla de Hydra, Grecia, nacido en 1786, casado con Bibiana Arretégui. Pérez Calvo, pp. 2-3. Década de 1820: comerciante de importante giro, dispone de onzas de oro. UAlmandoz, HCU I, p. 499, Hac IX 1, Leg. 15. 1827: contribución al Estado con establecimiento de campaña y giro comercial, Hac IX 1, Leg. 31. 1824 y 1826:: testifica casamientos, LMU fs. 159, 201.
Britos, Félix	1823: 2º Cónlega del Tribunal de Comercio, Correo Ministerial, 6/7/23.	Natural de Lisboa, 60 años, casado con María Antonia Arias, 6 hijos, 2 esclavos y 2 esclavas con familia, comerciante, Censur 1820, p. 16; LUM, f. 371. 1820: suegro de Mariano López Jordán, hermano de Ricardo LJ. LUM, f. 48. 1826: vende terreno a Manuel Urdinarraín, AGPER, Tierras, Serie VIII, Leg. 34. 1832. Don Mariano Calvento en

		representación de Don Manuel Antonio Urdinarrain solicita legítima propiedad del terreno situado entre los arroyos Yuquerí y Hallén que le compró a don Félix Britos, Tierras, Serie VIII, Caja 3, Leg. 6.
Barú, José María		Natural de Buenos Aires, 15 años en 1820, comercio, en unidad censal del vecino Antonio Rivero, Censur 1820, p. 11. 1835: testifica casamiento Galván – Santa Cruz, LMU, f.294.
Ares, Antonio		
Guerra, Juan		Natural de Buenos Aires, 38 años, sombrerero, Censur 1820. 1822: se casa con Concepción Taboada LMU f. 108.
Moscobiche, Lucas		Natural de Italia, 42 años, comerciante, Censur 1820. Casado con Justa Britos. 1826: Testifica matrimonio del Gral. Manuel Britos, Comandante de Dragones del Dpto. II Principal, con Rosario Espino, LUM, f. 199. 1827: contribución en dinero al Estado Hac IX 1, Leg. 31.
Gutiérrez, Blas	1830: Secretario del Tribunal de Comercio Uruguay, Hac IX 2, Leg 21.	Natural de Galicia, 30 años, dependiente del comercio, en unidad censal del comerciante Pantaleón Panelo. Censur 1820, p. 6. 1827: contribución en dinero al Estado según su giro mercantil, Hac IX 1, Leg. 31.
Ayala, Francisco		1824: casado en 2das. nupcias con Florencia Barrios, LMU f. 210. 1828: testifican casamiento de vecinos naturales de Villaguay y Corrientes, LMU f. 229.
Asoca , Francisco		Natural de Buenos Aires, 30 años, casado con Rosario Martínez, 3 hijos, 4 agregados, Censur 1820, p. 4.
Segovia, Cornelio		Natural del Uruguay, 24 a., casado, labrador, Censur 1820, p. 24.
Reynoso, Pedro		1825: suerte de estancia. Alferez de milicias patrióticas, Tierras, Leg. 17, f. 76.
Avalos, Justo		
Rodríguez, Miguel	Dependiente interino de Rentas de la Provincia por haber renunciado Miguel Ravelo, 28/7/23. RLDAPER p. 31 (292).	
Contreras, Ponciano		Araqueño, 48 años, labrador, Censur 1820. 1825: natural de Arica, Perú, se casa con Pascuala Rearte de Buenos Aires. Testifican su casamiento Lucas Moscobiche y Justa Britos. Testigo de casamientos en 1825, 1832, 1838 LMU fs. 188, 190
Melgarejo, Pedro Juan		Natural del Paraguay, 50 años, comerciante, 1 esclavo, Censur 1820, p. 8.
Aranda, Miguel		
Barrios, León		
Ximénez, Vizente		
Martínez, José Antonio		



Luna, José		
Page, Daniel		1827: Irlandés se casa con Manuela Alviso Vilches, LMU, f. 212.
Zeballos, Juan (Seballos, Zavallos)		
Morón, Diego		Natural de Extremadura, 42 años, viudo, comerciante, Censur 1820, p. 14.
Ortiz, Manuel		1825, 1826, 1828: testifica casamientos, LMU fs. 191, 198, 233.
Alva, Juan	1800 y 1806: Regidor del Cabildo del Uruguay. UAlmandoz HCU I, p. 82.	1824: Vende suertes de estancia situadas en Bergara y Arroyo San Gregorio, Villa del Uruguay a Salvador Barceló, Tierras, Leg. 23.
Segovia, José		Natural del Paraguay, LMU f. 378. 1818: se casa con Cecilia Ceballos LUM f.31. 1823 y 1827: testifican casamientos de los paraguayos Francisco Molina (Militar) y Francisco Palacios, LMU, fs. 124 y 214.
Núñez, José Atanasio Acosta, Juan Bautista		1830: casado con Magdalena Cano, testifican casamiento de su hija con José Segobia del Paraguay, LMU f. 265.
de Silva, Manuel Cavallero, Claro		1819: se casa con Martina Benítez, LMU, f. 36. 1820: natural de Gualaguaychú, casado con Martina Benítez, 39 años, mozo de pulpería, Cenchu 1820 jpg 039. 1828: testifican casamiento, LMU, f. 221.
Romero, Juan Ramón		
Nicolás, Juan		
Laules, Jayme		Irlandés, 40 años, casado con Maria Justa Albizu, se indica condición de Vecino. Censur 1820, p. 11.
del Río, Tomás	1825: Recólega del Tribunal de Comercio del Uruguay, Hac IX 1, Leg. 16.	Español, casado con Carmen Espino (de El Palmar) Comerciante y propietario. Pérez Calvo, p. 6. 1822: testigo de casamiento, LMU, f. 106. 1831: sus hijas se casan con Nicolás Jorge Mabragain natural de Grecia y con Juan Damianovich, hijo de Juan Damianovich y Angela Jorge naturales del Imperio de Alemania LMU f. 263.
Penayo, Pedro Nolasco		Natural del Paraguay, 42 años, casado con Juana López Camelo, hacendado, 4 hijos, 2 agregadas, 2 peones, Cenchu 1820 1826-1829: Litigio por terrenos, Tierras, Serie VIII, Caja 2-A, Leg. 36.
Espiro, Jorge	1823: Alcalde del Cuartel No 4 del Uruguay, Hac IX 1. 1826 Alcalde del Cuartel No 4 del Uruguay, Hac 1, Leg. 18.	Natural de Mitilivo, provincia de Iroya, Grecia, 40 años, comerciante, Censur 1820, p. 11. 1819: se casa con Nieves Fernández de Montevideo, testifica su matrimonio José María Urdinarrain, de familia notable; testifica matrimonio de Lucas Moscobiche con Justa Britos, LUM, f. 37 y 43. 1822: testifica matrimonio del griego Juan Demitre con Justa Lastra, de Soriano, LUM,

		f. 90. 1823: Litigio con Mateo Hermoso por propiedad de un criado, CCC Caja 1, expte 26. 1827: contribución en dinero al Estado, tiene establecimiento de campaña y capital en giro comercial, Hac IX 1, Leg. 31. 1838: matrimonio de su hija con el griego Miguel Damianovich, LUM, f. 343.
Rivero, Cándido		
Buch, Mariano	1825: Alcalde de Cuartel en el Uruguay, Hac IX 1, Leg. 15.	
Urdinarrain, Agustín	1823: Secretario de Contaduría General del Uruguay. RLDAPER I p. 333.	
Olivera, Ramón	1826: Alcalde de Cuartel No 3 del Uruguay, Hac IX 1, Leg. 18.	1823: conspiración contra Lucio Mansilla. Sumario AGPER Gobierno Serie III, Carpeta 2, Leg. 11 A y B. 1827: natural de Montevideo y criado en esta provincia, se casa con Concepción López vinculándose con las familias Sagastume y Urdinarrain, LMU fs. 214. 1826: apoderado de herederos de la familia Larrazabal. Tierras, Serie VIII, Leg. 27.
Troncoso, Mariano		
Carrascosa, Francisco		Natural de San Clemente, Roma. 1828: testifica casamiento de Francisco Almada primo de Francisco Ramírez, LMU f. 234. 1832: se casa con Natividad Riquelme, testifica Juan Nicola, natural de Venecia. LMU f. 224.
Leyva, Manuel	1828: Secretario del CP 6/1828: renuncia como Secretario y pasa al cargo de Secretario Hacienda y Guerra. RLDAPER II, p. 165. 1828: Secretario de Gob, Hacienda y Guerra RLDAPER II p. 403	
Benítez, Juan Carlos		1823: natural de Santa Fe se casa con Juana Ventura Alba, LMU f. 220.
Ruiz Díaz, Francisco		
Benítez, José León		1818: se casa con Dorotea Jordán LMU, f. 31. 1830: testifican casamiento de Manuel Rodríguez Machado natural de San Pablo en el Imperio del Brasil con Josefa Banegas, LMU, f. 247.
Castro, Isidro		Casado con Calixta Larrazabal. LMU f. 322. Testifica dos casamientos en 1822 y 1823, fs. 104 y 134.
Banegas, Victoriano		1830: natural de Nogoyá, hijo de Juana Banegas, se casa con María Florencia Díaz de Santo Domingo Soriano. Testifica Manuel Rodríguez Machado. LMU, f. 252.
Roxas, José	1823: Soldado de Dragones, natural de	

	Corpus Misiones, LMU, f. 117.	
Fernández, Luciano		
Mareco o Maneco, Manuel		
Falcón, Sotelo		
Muñoz, Bernardino		
Mota, José		
Bogado, Basilio		
de San Martín, Cándido	Agosto 1822: Secretario Comandancia Gualeguay RLDAPER I, p. 195. 1822: Dependiente de Rentas Dpto. II Principal. 1826-1827: Oficial de Contaduría de la Villa Gualeguay, Hac IX Cuaderno. RLDAPER II, p. 154.	Natural de Montevideo. 1822. Se casa en 2das nupcias con Prudencia Martínez, testifica Sgto. Mayor Juan Florencio Perea, natural de Montevideo. LUM, f. 98.
Cortés, Manuel		
Calvo, Domingo Fructuoso	14/6/1828: Secretario de la Junta Electoral reunida para elección de diputado por el Uruguay al CP. 17/6/1828: ternado en primer lugar para Alcalde Mayor del Uruguay. AGPER, Gob I, Serie I, Carp. 15, Leg. 13, fs. 139-140, 144.	

Personas que reciben votos para conformar la Comisión Eventual pero que no emiten voto propio

Calvento, Mariano	1820: Comandante del Uruguay nombrado por Ricardo López Jordán, MC, p. 15.	AGPER, Serie VIII Tierras, Carp. 2, leg. 2, fs. 3-4: compra en remate por 635 pesos una casa del Estado que fue de Dn. José Antonio Pose de Leyes en la Villa del Uruguay, 16 de diciembre de 1822.
Salvatella, Antonino		
López, Ricardo	1810-1820: Comandante de milicias del Uruguay. 1820: Gob. Delegado de Francisco Ramírez. 1824: Comandante del II Principal y Coronel Graduado. Tnte Coronel de Caballería 1825 electo Gobernador de Entre Ríos. 1826: Coronel de Caballería. BM 178. Archivo RLJ, fs. 3-6, 10.	Natural del Uruguay, casado con Josefa Delgado Cardoso de Nogoyá. Cuñado de Cipriano de Urquiza.
López, Mariano (José Mariano de la		Natural del Uruguay, 19 años, panadero, casado con Brígida Britos, hija de Félix

Concepción López Jordán??)		Britos votante en esta elección, LUM f. 48. En unidad censal de Tadea Jordán, Cenchu 1820, p. 6. Cuñado de Cipriano de Urquiza. 1827: contribución al Estado por su importante giro comercial, Hac IX 1, Leg. 31.
Barú, Francisco	1826: Teniente Cía 1º de Cívicos Hac IX 1, Leg.21.	Natural de Buenos Aires, 20 años en 1820, comercio, 1 peón, Censur 1820, p. 15. 1827: contribución al Estado, con establecimiento en la campaña y giro comercial, Hac IX 1, Leg. 31. 1820 y 1827: testifica casamientos, LMU fs. 62 y 214. 1831: comerciante de cueros, RLDAPER III, p. 310-311.
Jurado, Anselmo	1822: Alcalde del Uruguay. Pérez Calvo, p. 4. 1823-1825: Diputado al CP. 1829-1831: Defensor de Menores en el Uruguay, RLDAPER III, p. 276. UAlmandoz UCU II, p. 29	Natural de Mendoza, 37 años, vecino, casado con Paula Melo de Chile, 1 dependiente del comercio, 2 esclavas con familia, 2 comerciantes, 1 peón, Censur 1820, p. 8
López, Ramón		
López, Manuel (Manuel de la Paz López Jordán???)		Natural del Uruguay, 22 años, soltero, comerciante, en unidad censal de Tadea Jordán, Cenchu 1820, p. 6. Cuñado de Cipriano de Urquiza. 1827: contribución al Estado, con establecimiento en la campaña y giro comercial, Hac IX 1, Leg. 31.
Rivero, Miguel		
Romero, Manuel		1821: se casa con Alejandra Pérez Maciel, LMU f. 76.

Nota: en todas las elecciones se ha respetado el orden del registro de firma.

#### Fuentes de las Actas Electorales:

Elecciones preestatutarias de 1821: AGPER, Libro del Congreso 1º de Entre Ríos, 1821-1824 (LC1º ER) fs. 5-10, 13-16, 17-18, 21-22, 25-26, 37-42.

Elecciones estatutarias de 1825: AGPER, Gobierno, Serie V, Caja No. 1, Leg. 15, f. 469.

Elecciones estatutarias de 1827: AGPER, Gobierno, Serie V, Caja No. 1, Leg. 13, f. 424 y ss.

Elección para Comisión Eventual de 1829: AGPER, Gobierno Serie I, Caja No. 17, Leg. 6, fs. 206-222.

#### Fuentes documentales.

Padrón General de Familias 1787, en Libro de Acuerdos del Cabildo de la Villa de San José de Gualeguaychú, Obispado Gualeguaychú, Instituto del Profesorado Sedes Sapientiae, Dpto. de Investigación, 2010. CD: Libro 1º 1787-1811. (Actas Gchú).

Censo de la Parroquia del Paraná levantado por el párroco Dr. Luis Manuel Cabiedes el 2 de agosto de 1803 en Pérez Colman, César *Historia de Entre Ríos, época colonial (1520-1810)*, T. II, Cap. XIX, pp. 321-361, (Cenpar 1803)

Censo Eclesiástico Gualeguay 1803 en Barnes Almeyra, Héctor Rubén, *Revista Genealogía de Entre Ríos*, No. II, Buenos Aires, 2004. (Cenguay 1803)

Libro 2do. Matrimonios del Uruguay (1815-1851) en González del Solar, Ema; Oliver Muro, Eduardo; Espina Rawson, Mariano, Revista Genealogía de Entre Ríos, No. 5, Buenos Aires, 2007, (LMU)

Censo de Paraná 1820 en [www.familiasparana.blogspot.com.ar](http://www.familiasparana.blogspot.com.ar), (Cenpar 1820)

Censo de Gualeguaychú 1820 en

<http://genealogiaentrieros.com/documentos/censo1820/gualeguaychu/index.html> (Cenchú, 1820)

Censo de Concepción del Uruguay 1820, en Eguiguren, María Selva Ruth, , Revista Genealogía de Entre Ríos, No. I, Buenos Aires, 2003 (Censur 1820)

Censo de Paraná 1824 en Archivo General de la Provincia de Entre Ríos (AGPER), Gobierno, Serie VII, Carp. 1, 1823-1844, Legajo 2 (Cenpar 1824)

Archivo General de la Provincia de Entre Ríos, (AGPER), Gobierno Serie VIII, Catálogo y Caja 2-A (Tierras)

AGPER, Hacienda Serie I, Carpeta No. 5, Leg. 5. Lista Paraná. Lista Gualeguaychú (Hac 5, 5 P; Hac 5, 5 G)

AGPER, Hacienda Serie IX, Subserie A, Carp. 1 y Cuaderno de "Comunicaciones de toda clase dirigidas a las justicias ordinarias por el Gobierno de la provincia, Leg. 24, abril 1826 a abril 1828; Carp. 2. (Hac IX 1) (Hac IX Cuaderno) (Hac IX 2).

AGPER, Causas civiles y comerciales, Caja 1. (CCC)

AGPER Gobierno Serie I, Carpeta No. 5, Legajo 5; Carpeta No. 15, Legs 12 y 13; Caja 1, Leg. 5, Leg. 6B; (GOB I 5, No. de legajo)

AGPER, Gobierno Serie XI C, Asuntos militares (1820-1896), Lista de revistas militares por Departamento, Cajas 8 y 9 (GOB XI C, No. de Caja y folio). Caja 8, Legajo 1 a 5, 1818 a 1821: NO se encontraron registros coincidentes con los nombres y apellidos de los participantes en las elecciones analizadas; se revisó especialmente el cuadro de oficiales y en cuanto a los soldados, son mencionados a veces por solo uno o dos nombres o bien se apellidan Cautibo, Uruguay, el Chico, La Patria.

AGPER, Recopilación de Leyes, Decretos y Acuerdos de la provincia de Entre Ríos, Uruguay, Imprenta de la Voz del Pueblo, 1875. Tomo I, 1821 a 1824 (RLDAPER I); Tomo II, 1825 a 1828 (RLDAPER II); Tomo III, 1829 a 1832 (RLDAPER III) Se terminó el registro a partir del gobierno de Pascual Echagüe en 1832.

AGPER, Libro 1 Bis del Congreso de Entre Ríos, 1824-1827 (Libro 2 Bis)

Archivo General de la Provincia de Santa Fe (AGPSF), Actas capitulares, Tomo XVII A, XVII f 158 v a 159 v y Tomo XVII A, XVII f 241 a 242 v, Consulta 22/05/2013:

<http://www.santafe.gob.ar/actascabildo/default/lasactas> (AGPSF Actas)

AGPSF, Archivo privado Colección Diez de Andino, carpeta L. (Colección Andino)

AGPSF, Contaduría, Tomo 16 (1810-1815) (AGPSF Cont. 16)

Archivo General de la Nación, República Oriental del Uruguay (AGN ROU), Archivo General Administrativo (AGA), Padrón de habitantes Paysandú 1827. (PPadrón 1827)

AGN ROU, AGA, Pulperías en Paysandú, 1827 (PPulperías 1827)

Instituto Osvaldo Magnasco Archivo Privado de Mateo García de Zúñiga, Gualeguaychú, Entre Ríos. Carpeta No. 19. (Archivo MGZ)

Museo Histórico Martiniano Leguizamón, Archivo Ricardo López Jordán, Carpeta 1. Legajo 1. (Archivo RLJ)

Hemeroteca de la Universidad Nacional de La Plata, Periódico Correo Ministerial, 1823. (Correomin)

### **Bibliografía:**

Aguilar, Julio Alberto "Los Aguilar en Gualeguaychú", Revista Genealogía de Entre Ríos, No. VIII, Buenos Aires, 2010, (Aguilar J.)

Arce, Facundo, Don Juan Garrigó en Investigaciones y Ensayos, No. 6-7, ANH, 1969, pp. 89-97. (FARce)

Bosch, Beatriz, Justo José de Urquiza, Diputado Provincial (1826 y 1827) Anuario de Historia Argentina 1943-1945, Sociedad de Historia Argentina, Vol. 5, Bs. As., 1947 (Anuario Bosch)

Calvento, Mariano "Estudios de la Historia de Entre Ríos" Tomo II, Imprenta de la provincia, Paraná, 1940 (MC)

Cutolo, Vicente, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino, en CD (Cutolo)

Domínguez Soler, Susana de, Familias Zorraquín, Robinson, Siburu, Revista Genealogía de Entre Ríos, No IV, (DSoler)

Djenderedjian, Julio "Buenos negocios en tiempo de guerra: el comercio de cueros en el Litoral según las cuentas de Cipriano de Urquiza, 1816-1820" en Anuario del IHES, No. 17, 2002, pp. 241-259. (Djenderedjian)

Ghiano, Juan Bautista Historia de Nogoyá, disponible en <http://www.sgsnet.com.ar/nogoyaweb/libro.htm> (Ghiano)

Guzmán, Carlos Alberto "Los Vera Muxica. Las raíces navarro-aragonesas", Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos, Prov. de Buenos Aires, Argentina, 2003 en [www.menendezbehety.com.ar/genealogia/doc/veramuxica.doc](http://www.menendezbehety.com.ar/genealogia/doc/veramuxica.doc) (Guzmán)

Martínez, Benigno Teijeiro "Historia de Entre Ríos" Tomo II, Tercer Período 1822-1860. La organización provincial. Paraná, 1910. (BM)

Montañez, Guillermo, "Padrón General de los establecimientos de Estancia, Dpto. Gualeguaychú, 1834" Original en Arch. Histórico, Fondo Documental Juan C. Borques, Inst. Magnasco, Gualeguaychú, Entre Ríos, Revista Genealogía de Entre Ríos, No. VI, Bs As, 2008. (Montañez)

Moritán, Santiago Mansilla, Memorias Inéditas, Buenos Aires, 1945 (SM)

Pérez Calvo, Lucio "Jorge y Damianovich", Revista del Centro de Genealogía de Entre Ríos, No. IV, Buenos Aires, 2006, disponible en [http://www.genealogiaentrierios.com/articulos/jorge\\_damianovich.swf](http://www.genealogiaentrierios.com/articulos/jorge_damianovich.swf) (Pérez Calvo)

Pérez Colman, César "Vecinos propietarios de Paraná siglos XVIII y XIX", Revista del Centro de Genealogía de Entre Ríos, No. III, Buenos Aires, 2005.pp. 263-274. (PC III)

Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, No. 19, 1981.

Schmit, Roberto. Ruina y resurrección en tiempos de guerra. Sociedad, economía y poder en el Oriente entrerriano posrevolucionario, 1810-1852, Prometeo, Bs.As. 2004 (Schmit)

Segura, Juan José A., La familia Hereñú, Revista Genealogía de Entre Ríos, No I, Bs. As. 2003. (Segura GEN)

Segura, Juan José, Historia de Nogoyá, Tomo I, Paraná, 1972 (Segura)

Segura, Juan José, Historia Eclesiástica de Entre Ríos, Nogoyá, 1964. (SEGURA HE)

Vázquez, Aníbal, La República de Entre Ríos, Predassi, Paraná, 1950. Firmantes del Acta electoral de Gualeguay para elegir con voto directo al Jefe Supremo de la República de Entre Ríos, elección que recayó en Francisco Ramírez. (Firma Acta electoral Gualeguay, Vázquez)

Urquiza Almandoz, Oscar, Historia Económica y Social de Entre Ríos (1600-1854), Banco Unido del Litoral, 1978. (UAlmandoz)

Urquiza Almandoz, Oscar, Historia de Concepción del Uruguay, Tomo I, 1783-1826 (UAlmandoz HCU I) y Tomo II, 1826-1870 (UAlmandoz HCU II). Disponible en <http://www.logiawashington.org.ar/016.htm>

## **ANEXO al Capítulo VIII.**

### **Un recorrido por otras experiencias fiscales rioplatenses del período.**

Desde 1820, según muestran estudios realizados para otras provincias, las finanzas públicas de sus administraciones se sostuvieron con rentas originadas básicamente en impuestos indirectos y préstamos, que tuvieron como principal destino a los gastos militares. Sin embargo, cabe puntualizar que el caso de Buenos Aires tiene rasgos más excepcionales. Para establecer comparaciones entre otras situaciones fiscales y el caso que nos ocupa hemos considerado, de manera puntual, investigaciones realizadas sobre Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Provincia Oriental y Buenos Aires para el lapso 1820 y 1852<sup>487</sup>; este recorrido es útil para conocer tanto las vicisitudes como la tendencia general de los números públicos en tiempos de construcción estatal provincial. En qué se fundamenta la elección de estos cinco ejemplos? Los mismos remiten a experiencias político-sociales posicionadas de distinta manera en el concierto rioplatense aún compartiendo el mismo pasado colonial, con semejanzas pero también con particularidades respecto a la organización política, los recursos materiales, las relaciones de poder interiores y exteriores, entre otros aspectos. De los cinco casos, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires importan especialmente dada la vinculación estrecha que gobiernos y sectores socio-económicos mantuvieron con Entre Ríos.

Qué nos muestran las finanzas públicas de Córdoba? La investigación escogida en primer lugar efectúa el análisis entre 1830 y 1855. La misma será complementada con otro estudio comparativo entre gastos militares de Córdoba y Santa Fe para el lapso 1820-1852, del que tomaremos los datos e interpretaciones por casos separados, a fin de facilitar el análisis comparativo del período seleccionado para Entre Ríos y porque, además, el otro estudio

---

<sup>487</sup> Bibliografía consultada para el análisis de estos cinco ejemplos: Halperin Donghi, Tulio "Incidencia de los gastos militares en Córdoba y Santa Fe (1820-1852)" en *Homenaje al Doctor Ceferino Garzón Maceda*, Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, 1968, pp. 253-265; *Revolución y Guerra*, 1979, Caps. I y II.; *Guerra y Finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850)*, 1982, Capítulo III y IV; "De la revolución de independencia a la revolución rosista" en *Historia Argentina*, 1989 4ta. reimpresión. Chiaramonte, José Carlos "Finanzas Públicas de las provincias del Litoral, 1821-1841", 1986, 159-198; Romano, Silvia "Finanzas públicas de la provincia de Córdoba, 1830-1855" en *BIHAAER*, Tercera Serie, Núm. 5, 2do. Semestre de 1992, pp. 99-147; Chiaramonte J.C. Cussianovich G., Tedeschi S., 1993, pp. 77-116. Cuadro Cawen, Inés, 2007.

mencionado parte recién desde 1830.<sup>488</sup> Es necesario destacar aquí que no se contó con Ley de Presupuesto sino hasta 1855.<sup>489</sup> El rubro Ingresos comprendía dos tipos: el ordinario o corriente, en su mayoría provenientes de recaudaciones impositivas al comercio, siendo la principal fuente los referidos a aduana, representando, en el balance de los 26 años estudiados, un 55% del total. En cuanto al tipo extraordinario incluía básicamente empréstitos, donaciones, venta de tierras públicas y otros bienes del Estado. Otros ingresos provenían de administración de justicia, depósito de bienes intestados y de embargos por razones políticas. Por otra parte, hay indicios de que los intentos de aplicación de contribuciones directas al patrimonio particular habrían traído polémicas de distinto tipo, por lo que se evitó realizar este tipo de gravámenes y sustituirlos por contribuciones indirectas para el sostén fiscal.<sup>490</sup> Entonces ¿quiénes sostuvieron el aparato tributario en Córdoba? Siendo las contribuciones de tipo indirecto, la mayoría de la población fue la que soportó el peso, sobre todo los habitantes de ciudad en virtud de los gravámenes municipales existentes.

Veamos ahora los gastos. Una parte de ellos estaba compuesta por devolución de préstamos y pagos de intereses a comunidades religiosas y particulares, sueldos políticos –del “Poder Ejecutivo” y de empleados judiciales, sueldos de Hacienda y agasajo a delegaciones indígenas. Siempre fueron muy escasos los fondos dedicados a obras públicas, salud y educación. Los llamados

---

<sup>488</sup> En esa investigación comparativa entre Córdoba y Santa Fe, se seleccionaron cuatro años cada diez para realizar proyecciones acerca de la cuestión militar: 1822, 1832, 1842, 1852. Se comprobó que las cifras totales de Cargo y Data se corresponden absolutamente con las manejadas por Silvia Romano o sea que podemos tomar ambos estudios como un todo contable homogéneo. Halperin Donghi, T. art cit. 1968, pp. 255-256, 259-261.

<sup>489</sup> De manera excepcional, para 1839 se presentó un presupuesto ante la Legislatura por un total de 179.033 pesos fuertes, documento que permitió conocer la distribución de gastos al menos como referencia. Los gastos militares y de Policía representan cerca del 77,6 % del total presupuestado –agrupándose los correspondientes a fuerzas de ciudad y de campaña–; para educación, un 1,3 %; obras públicas, un 2,2 %; pago de pensiones, réditos (intereses de deudas contraídas con comunidades religiosas), jubilaciones e inválidos, un 2,8 %.

<sup>490</sup> En los considerandos de la Ley de Aduanas de 1829 se señaló lo siguiente: “La Sala (de Representantes) en el deber de proporcionar al Gobierno los fondos necesarios para los gastos ordinarios y extraordinarios que son necesarios en el estado actual de la Provincia, y plenamente convencida de que las contribuciones directas no sólo son más ruinosas, sino también de que su efecto no es seguro, alienta la escasez de numerario; ha estado ocupada desde sesiones anteriores en arreglar una contribución indirecta, que por esta cualidad no sea tan sensible a la fortuna de los particulares, y que al mismo tiempo produzca los fondos que se necesitan para los objetos expresados...” Política que fue seguida en todo el período analizado según la autora. En Romano, S. art cit. 1992, pp. 115-156.



Gastos extraordinarios del Gobierno autorizados por la Legislatura, consignaban aquellos imprevistos o urgencias presentadas de variado tipo. Los gastos militares asentados correspondían a remuneraciones de oficiales y soldados, a manutención, vestuario y armamentos. Los cálculos para visualizar el peso de estos gastos en el total general entre 1830 y 1855 dan como resultado un 70 % que podría aumentarse si se desagregaran otras cifras que supuestamente incluirían insumos a la tropa como Gastos extraordinarios y Hacienda en Común.

El año 1822 escogido en el estudio comparativo entre dos provincias, nos presenta algunas precisiones sobre la composición de los gastos militares. En 1822, el estudio comparativo entre las dos provincias nos muestra en el ramo de Guerra un 84 % -67.440 pesos- sobre el total de gastos de la masa común de Hacienda -80.723 pesos-, esto es el conjunto de gastos políticos, de hacienda y militares; tomando el total de gastos -99.424 pesos, representa un 68%. La mayoría de estos fondos se destinan a sueldos militares y retribuciones a la tropa, un 47% pero se observa que de este porcentaje, los oficiales se llevan casi un 70%; para alimentos y ganado de consumo y monturas de tropas, un 35%; el 2% restante destinado a pago de peones y artesanos, compostura de armas, traslado, transporte y gratificaciones a “indios amigos”.

Por último, nos interesa particularmente la Deuda Pública cordobesa. Retornando a la investigación entre 1830 y 1855, el déficit habitual por insuficientes ingresos genuinos y crecientes obligaciones militares fue cubierto por préstamos voluntarios y forzosos en dinero y en especie -consignados como créditos pasivos-, obtenidos primordialmente de comerciantes de ciudad y campaña y canalizados a través del Consulado, corporación formada por los comerciantes locales. En menor medida, fueron solicitados créditos y préstamos forzosos al clero secular y regular. Como remesa enviada desde Buenos Aires se consigna solo una suma de 3.399 pesos para el año 1835.

Los registros por “créditos pasivos” representaron un promedio del 19 % sobre los ingresos totales; en dos años críticos por los conflictos interprovinciales se observan porcentajes más elevados: 1831 con 51% y 1840 con 31 %. La amortización de los empréstitos se efectuó, en general, con el descuento de parte de los derechos de aduana. Para dar un cálculo de referencia, tomamos los años 1831 y 1840 de mayor endeudamiento y sacamos sus porcentajes de

deudas redimidas sobre cada total de la deuda contraída: un 8,8% (7.038 pesos) y un 6,2% (3.322 pesos) respectivamente.<sup>491</sup> Si este ejercicio lo hacemos sobre el total de gastos, corresponde porcentajes bajos: 5,8% y 3,6% por cada uno de esos dos años. En la década de 1830, la tasa generalmente abonada por préstamos a corto plazo fue del 2% mensual. Pese a esta medida atractiva por parte del Gobierno, no siempre los préstamos se cumplieron en montos y plazos exigidos. Está claro, además, que había una lista de acreedores preferente para efectuar los pagos por parte del Gobierno, con criterios que incluían relaciones personales e igual signo político.

Las características de las finanzas públicas de Santa Fe dan cuenta de su debilidad fiscal subsanada por la entrada de varios empréstitos. La estructura administrativa de Hacienda se conformaba por una Tesorería en la ciudad capital y 3 receptorías departamentales, las que absorbían gastos de sus propias jurisdicciones; la información contable disponible se presenta en dos formas: por un lado, registro oficial de ingresos y egresos y por otro, rendiciones paralelas de gastos afrontados con subsidios informales de la provincia de Buenos Aires, recibidos durante la década de 1820. Luego de 1830 con la formalización de dichos subsidios, esas rendiciones desaparecen como paralelas y pasan a integrar el registro oficial. En cuanto a Presupuestos no hay evidencias de su presentación y tratamiento en el lapso que comprende el estudio.

Las variaciones de la política fiscal nos muestran diferentes etapas. Durante las luchas por el control del poder regional contra la República de Entre Ríos, la necesidad de recursos obligó a subir los impuestos comerciales, en especial, todas las cargas procedentes del otro lado del río Paraná y a cobrar deudas internas atrasadas. Luego de 1822, con la vigencia de tratados de paz y amistad con otras provincias se disminuyeron los aranceles en el orden de un 40 %, a fin de aumentar el comercio y su giro. En 1825 una nueva planilla de impuestos decretó una reducción impositiva del 50 % sobre productos de

---

<sup>491</sup> Hemos trabajado con las cifras presentadas por la autora Silvia Romano. Para 1831 se tomó deuda por 80.751 pesos y para 1840, la suma de 53.548 pesos. Para el primer año se compone de una suma fija de créditos eclesiásticos por 18.525 pesos y 62.226 de particulares; y para el segundo consignado, otra vez 18.525 pesos y 35.023 de particulares. Los totales de ingresos y egresos son: 122.271 pesos y 121.946 pesos para 1831 y con respecto a 1840 tenemos: 113.572 y 93.020 pesos respectivamente.

importante circulación como yerba mate y tabaco. Esta baja en la presión impositiva tiene su explicación en el beneficio que supuso la llegada de auxilios de Buenos Aires en dinero y artículos de guerra que se hizo más regular desde 1830, sin dudas un punto de inflexión en la contabilidad fiscal santafesina.

Los ingresos se originaron a través de predominantes gravámenes al comercio, crédito público “del común” y subvenciones porteñas cada vez más regulares. Se conservaron impuestos coloniales como la alcabala y el diezmo, en tanto los Derechos Municipales fueron percibidos por la Tesorería provincial luego de la disolución del Cabildo desde 1833. Los préstamos voluntarios o forzosos solicitados al comercio local fueron devueltos, básicamente, por medio de la presentación de las letras para pagar tributos aduaneros. Las remesas de dinero provenientes de Buenos Aires tuvieron el objetivo de sostener una estratégica alianza con Santa Fe y lograr un estado asociado para defender a la frontera común de las invasiones de indios pampas y ranqueles. Dichas entregas reconocen dos etapas. La década de 1820 muestra convenios puntuales y entregas irregulares de metálico. Luego de 1830 y hasta 1852 con la plena vigencia del Pacto Federal, Buenos Aires dispuso el envío de mensualidades de metálico a varias provincias, las que en Santa Fe contribuyeron a cubrir el déficit público y lo que es muy importante, aliviaron a sus vecinos de la demanda estatal de empréstitos, un indicio del propósito oficial de beneficiar al sector propietario y productivo santafesino. Para ejemplificar veamos algunos porcentajes sobre el registro oficial. En el caso de 1824, total de Ingresos 20.229 pesos, por Aduana 54,7%, crédito interno 12,6%, subvenciones 11,4 %; para 1833, total de Ingresos 57.293 pesos, por Aduana 18 %, crédito interno 0,7%, subvenciones 57,4%. Comprobación elocuente del impacto de los subsidios recibidos sobre la masa de recursos fiscales. (Chiaramonte J.C., Cussianovich G., Tedeschi S., 1993:. p. 85)

Los gastos militares fueron los más importantes en el período que abarca la investigación consultada: 1824 a 1836. La guerra contra el Brasil, los conflictos interprovinciales y la defensa de fronteras consumían gran parte de los recursos financieros. Los mismos comprenden sueldos a oficiales y tropa, alimentos, vestuario, armamentos, transporte y hospital militar, añadiéndose el abastecimiento y defensa de las reducciones de indígenas localizadas en el

norte provincial, que constituían barrera defensiva contra los malones de indígenas guaycurúes no sometidos.

Otro rubro importante era el de sueldos civiles, políticos y de Hacienda, entre un 13 y un 27 % del total egresado durante el citado período. Con la extinción del Cabildo en 1833, la estructura judicial sufrió cambios importantes, entre ellos el aumento del número de jueces y alcaldes lo que engrosó las erogaciones por sueldos y mantenimiento de la justicia. Los montos destinados a obras públicas nunca superaron el 5 % del total de la Data. Escogiendo los mismos años tomados en el contraste anual de Ingresos, calculamos porcentajes de erogaciones. Para 1824 con un total de 18.792 pesos: gastos militares 43,5%<sup>492</sup>, pago de crédito interno 29,5%, sueldos civiles, políticos y de Hacienda 15,2 %. Para 1833, total de 57.073 pesos: gastos militares 75,4%, pago de crédito interno 3,2%, sueldos civiles, políticos y de Hacienda 13,7%.<sup>493</sup>

Si nos detenemos en los resultados anuales de la contabilidad oficial santafesina, prácticamente todos los años presentan superávit. Ahora bien, si a los ingresos se les restan los créditos internos y subvenciones de Buenos Aires, el superávit desaparece en la mayoría de los años y se traduce en pronunciado déficit, confirmando la afirmación inicial sobre la debilidad fiscal de Santa Fe.

El estudio de Corrientes nos revela un cuadro rentístico con fuertes ingresos genuinos basados en impuestos indirectos, principalmente sobre el movimiento aduanero; desde la base del Reglamento de Derechos Aduaneros de 1822 y el Reglamento de Cuentas fiscales de 1825, la política fiscal del período investigado, 1821-1841, repitió los mismos cuidados con el sector propietario que ya hicimos notar en el caso de Córdoba, a fin de no perjudicarlo con la carga fiscal. De manera excepcional, se recurrió solo dos veces a préstamos públicos para solventar urgencias del Estado.<sup>494</sup> Además, los

---

<sup>492</sup> Es importante destacar que, si sumamos los gastos militares de las rendiciones paralelas (20.090 pesos) al total oficial (18.792 pesos) nos da 40.318 pesos, el porcentaje correspondiente sobre el total de Gastos entonces se convierte en un 71 %.

<sup>493</sup> Este último dato, al parecer disminuido de años anteriores, significa más si tomamos la suma efectiva -7.843 pesos- que en el porcentaje pues ese año de 1833 los gastos triplicaron el total del año 1830. Para este último año el rubro que tratamos suma 3.364 pesos, un 53% menos que 1833. Chiaramonte J.C., Cussianovich G., Tedeschi S., 1993, p. 95.

<sup>494</sup> En 1828 el préstamo, de entre 20 y 30.000 pesos se contrajo en circunstancias de la guerra contra el Brasil. El segundo, en 1834, totalizó 40.000 pesos. La cancelación de ambos se realizó

hacendados que se vieron afectados por entregas de ganado, en circunstancias de confrontaciones armadas, fueron rápidamente resarcidos. Por su parte, la composición de los gastos comprendía el pago de sueldos e insumos para una planta burocrática más bien pequeña y un abultado rubro de Guerra formado por sueldos a la tropa permanente y a las milicias activas, gastos extraordinarios como armamento, caballos de monta y alimentos; las gratificaciones a los militares también constituyeron una erogación importante, particularmente en ocasiones en las que estaba en juego la lealtad al gobierno. El cálculo de porcentaje en los gastos militares se aproxima al 85 sobre el conjunto de Salidas para el período; hay que recordar, según ya planteamos, las áreas fronterizas del Sur y Sur Oeste generaron muchas dificultades para el control del Gobierno por lo que el aparato militar debía estar permanentemente movilizado. En cuanto a obras públicas, si bien no hay cifras precisas en la investigación consultada, se afirma que fue un rubro de inversión permanente tanto en la ciudad capital como en zonas interiores. Reparando ahora en las cifras totales de 1822 y 1823, a modo de referencia para nuestro análisis para el mismo lapso en Entre Ríos tenemos: para el primero, Entradas 41.658 y Salidas 22.707, superávit 18.951; para el segundo año, Entradas 38.549 y Salidas 43.731, déficit 5.182.

Para finalizar, es importante destacar una de las apreciaciones del estudio sobre Corrientes: la eficacia de sus finanzas radicó evidentemente en los esfuerzos por sostener un equilibrio entre rentas percibidas y gastos efectuados, si bien no hay mención a Presupuestos presentados que hubieran podido complementar esta afirmación; el déficit real en algunos años son de pequeños montos y si se valora el conjunto de las cuentas entre 1821 y 1838, los montos superavitarios superan a los deficitarios. A partir de 1839, el conflicto armado contra Buenos Aires, sus políticas filobritánicas y su manejo considerado arbitrario de las Relaciones Exteriores, hará que la Caja provincial incurra en fuerte déficit, representando en 1841 casi un 45% de sus egresos.

---

en el corto plazo utilizando los ingresos ordinarios según documentos de la Legislatura. Chiaramonte, J C, 1986a, pp. 174-178. Por el momento no contamos con discriminación mayor de rubros de Cargo y Data

Las finanzas de la Provincia Oriental, en su corto desenvolvimiento entre 1825 y 1828, presentaron ciertas pautas formales estructuradas por un Presupuesto aunque el desorden administrativo y la falta de personal idóneo, hicieron muy difícil la recaudación de impuestos a la que estaba sujeta la ejecución de los gastos. Las rentas de la provincia eran casi nulas por lo cual dejaba un déficit casi igual a la totalidad de los gastos. Los nuevos cargos creados en lo político, judicial y policial constituían la mayoría de los gastos. En particular la implementación de un cuerpo policial independiente, fiel al gobierno provincial y ajeno a las fuerzas milicianas implicó un esfuerzo económico importante para la provincia. Ante estas necesidades el gobierno solicitó a la Legislatura la creación de la Contribución Directa aplicado a todo capital superior a los 2.000 pesos y los sucesivos proyectos tributarios que se enviarían sobre la materia. Los más afectados eran los comerciantes y mercaderes que debían pagar por su “capital en giro” la tasa anual más alta, le seguían los fabricantes, los hacendados y por último labradores o dueños de capitales empleados en otros rubros. Otros impuestos implementados fueron las patentes para almacenes y tiendas y el impuesto al abasto, no contándose con las rentas de aduanas pues los puertos de Montevideo y Colonia continuaban en poder de las fuerzas brasileñas.

La autora, Cuadro Cawen, evalúa la estrecha vinculación –y dependencia- económica que existía entre la Provincia Oriental y Buenos Aires; el poder ejecutivo nacional instalado por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas otorgó un respaldo de 5.000 pesos mensuales para atender costos de la reforma administrativa propuesta en la Provincia Oriental; por otra parte designó un Colector General de Rentas Nacionales en la Provincia o la agencia del Banco Nacional establecida en la Provincia Oriental quienes se encargaran de administrar los fondos públicos. Esta dependencia explica la ausencia de dos rubros como los gastos militares y pago de deuda pública pues fue ese Gobierno nacional el que debió asumirlos, aunque no sistemáticamente.,

El último caso, Buenos Aires, representa un mayor volumen fiscal respecto a los casos tratados con anterioridad. El texto sobre el cual apoyamos esta síntesis comprende un proceso largo de 60 años, tomándose en cuenta al Estado que gobierna la economía pero también qué lugar ocupa en esa

economía. Escogimos el trienio 1822 a 1824 que se presenta sin desagregar, luego trabajamos sobre los cuadros contables elaborados a efectos de ulteriores comparaciones con nuestra investigación. No se menciona la existencia de planillas presupuestarias correspondientes pero sabemos que en las reformas de 1821, apenas instalado Martín Rodríguez en el gobierno, se dispuso que el Ministerio de Hacienda presentara presupuestos anuales. Esta normativa tuvo un cumplimiento más regular durante los gobiernos de Rosas.

Una de las razones de la elección de ese corto lapso para Buenos Aires radica en que se corresponde con un momento de transformaciones profundas en su nueva constitución como provincia: un aparato institucional renovado, con una Legislatura en funcionamiento, supresión del Cabildo, fortalecimiento económico reteniendo el control y beneficios de la Aduana como si fuera todavía Capital del Virreinato, reorganización militar y campañas contra los indígenas en la frontera sur, reforma de la justicia, creación de una Universidad y otros institutos educativos, reforma eclesiástica con abolición del Diezmo, cierre de conventos y secularización de los sacerdotes regulares. Además, nos interesa porque coincide con el gobierno de Martín Rodríguez y sus ministros mentores de las reformas mencionadas, Manuel García y Bernardino Rivadavia, justamente tres de las figuras políticas que auxiliaron y procuraron mantener a Entre Ríos como aliada, atendiendo las peticiones y consultas de Lucio Mansilla.

Los ingresos para el trienio 1822- 1824 se sostienen fundamentalmente de las rentas aduaneras. Sobre un total de Ingresos de 8.575.087,6 pesos plata, la Aduana aporta 6.026.086,6.- un 70%. En este total aduanero, la entrada marítima representa casi el 90 %. Otros rubros importantes lo constituyen préstamos internos y externos con 1.510.413,4.- un 25%; el aporte de los particulares es de un 85% y el externo estaba conformado mayoritariamente por adelantos de un empréstito tomado en Inglaterra a la banca Baring Brothers por la cantidad de 1.000.000 de libras esterlinas y con el fin de afrontar gastos de nuevas infraestructuras portuarias pero, en realidad, se emplearon en el funcionamiento administrativo general y en la financiación de campañas militares contra los indígenas para expandir la frontera Sur. El resto estaba dividido entre ventas de propiedades del Estado, impuestos al capital, producción y comercio, servicios del Estado y otros ínfimos por multas, juegos de azar e impuestos a

herencias. En Buenos Aires se cobraba la contribución directa al capital, representando 81.768,5 pesos plata, realmente una suma casi insignificante respecto del total de tres años.

La distribución de los gastos refleja cuestiones muy interesantes relativas a las políticas interprovinciales de Buenos Aires y al costo de la expansión y consolidación de la jurisdicción interna. Sobre un total de Egresos de 7.241.593,7 pesos plata, las Salidas por operaciones financieras constituyen 1.384.111,2 o sea un 19 %, compuesto por servicios de la deuda pública y descuento de Letras; como rubro registrado separadamente está la Devolución a particulares con un 17 % por devolución de derechos, de depósitos y de préstamos. Por considerar que ambos rubros corresponden a pagos por préstamos y a los efectos de nuestro análisis comparativo, optamos por unir ambos porcentajes lo que resulta un 36 %, colocándose así en las erogaciones más abultadas. Luego de este cálculo, le sigue el ramo de Guerra con un 28 %; sueldos no militares un 15 %; establecimientos asistenciales, educativos, de correo y de Policía con un 11%; compra de bienes que incluye gastos de frontera: 4,7%; pago de servicios (comisiones, edificaciones, imprenta, etc.) con 4,3. Las remesas a las provincias solo un 1,6%.<sup>495</sup>

---

<sup>495</sup> Entre Ríos ocupa el primer lugar en la lista de provincias beneficiadas con 46.225 pesos plata; le sigue Salta con 41.456,3, por último Santa Fe con 29.638,2



## Fuentes de Cuadros y Gráficos

Todos los Cuadros y Gráficos del Cap. VIII son de construcción y elaboración propia a partir de documentación oficial relevada en el Archivo General de la Provincia de Entre Ríos (AGPER), Hacienda, Series I y II A.

### Caja de Paraná: Ingresos y egresos.

Año 1822: Hac. I, Carpeta 6, Legajo 1, Libro Mayor del Ministro Celedonio del Castillo (enero-junio) y Libro Mayor del Ministro Contador Casiano Calderón (junio-diciembre).

Año 1823: Hac. I, Carpeta 10, Legajo 4, nueve estados mensuales y un estado trimestral.

Año 1824: Hac. I, Carpeta 13, Legajo 13, Libro Mayor.

Año 1825: Hac. I, Carpeta 17, Legajo 10, Libro Mayor.

Año 1826: Hac. I, Carpeta 21, Legajo 8, Libro Mayor.

Año 1827: Hac. I, Carpeta 25, Legajo 6, dos Libros Mayores (enero-abril y abril-diciembre)

Año 1828: Hac. I, Carpeta 30, Legajo 2, Libro Mayor.

Año 1829: Hac. I, Carpeta 33, Legajo 7, Libro Mayor.

Año 1830: Hac. I, Carpeta 38, Legajo 2, Libro Mayor.

Año 1831: Hac. I, Carpeta 43, Legajo 2, Libro Mayor.

Año 1832: Hac. I, Carpeta 48, Legajo 6, Libro Mayor.

### Caja del Uruguay: Ingresos y egresos.

Año 1822: Hac. II A, Carpeta 1, Legajos 3 y 8, estados mensuales y Libro Manual del Receptor.

Año 1823: Hac. II A, Carpeta 2, Legajo 4, dos estados trimestrales y seis estados mensuales.

Año 1824: Hac. II A, Carpeta 3, Legajo 3, un balance general cotejado con estados mensuales.

Año 1825: Hac. I, Carpeta 17, Legajo 8, tres estados cuatrimestrales de la Tesorería del Paraná y Hac. II A, Carpeta 4, Legajo 4, estados mensuales.

Año 1826: Hac. I, Carpeta 21, Legajos 6 y 7, tres estados cuatrimestrales de la Tesorería del Paraná y Hac. II A, Carpeta 5, Legajo 3, Libro Mayor (dos meses) y diez estados mensuales.

Año 1827: Hac. II A, Carpeta 5, Legajo 3, Libro Mayor.

Año 1828: Hac. II A, Carpeta 7, Legajo 4, Libro Mayor.

Año 1829: Hac. II A, Carpeta 8, Legajo 3, Libro Mayor.

Año 1830: Hac. II A, Carpeta 9, Legajo 4, Libro Mayor.

Año 1831: Hac. I, Carpeta 43, Legajo 4, tres estados cuatrimestrales del Paraná y Hac. II A, Carpeta 10, Legajo 2, estados mensuales.

Año 1832: Hac. I, Carpeta 48, Legajo 5, tres estados cuatrimestrales del Paraná y Hac. II A, Carpeta 11, Legajo 4, estados mensuales.

**Cuadro No. A. ENTRE RÍOS. CAJA DE PARANÁ – INGRESOS y EGRESOS. Años 1822 a 1832 en cifras redondeadas.**<sup>496</sup>

AÑOS	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
<b>INGRESOS</b>	64.171	63.905	49.459	46.350	40.052	41.656	36.880	55.758	34.418	36.737	40.711
<b>EGRESOS</b>	62.527	62.728	50.830	43.867	39.835	41.588	37.036	55.499	34.353	36.550	40.496
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>1.644</b>	<b>1.177</b>	<b>1.371</b>	<b>2.483</b>	<b>217</b>	<b>68</b>	<b>156</b>	<b>259</b>	<b>65</b>	<b>187</b>	<b>215</b>

**Cuadro No. A Bis. ENTRE RÍOS. CAJA DEL URUGUAY – INGRESOS y EGRESOS. Años 1822 a 1832 en cifras redondeadas**

AÑOS	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
<b>INGRESOS</b>	36.814	33.382	22.705	17.823	14.027	5.526	4.411	11.965	9.929	8.863	9.069
<b>EGRESOS</b>	29.753	32.303	17.400	17.962	7.673	5.168	4.043	11.875	9.909	8.714	8.586
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>7.061</b>	<b>1.086,0</b>	<b>1.079</b>	<b>139</b>	<b>6.354</b>	<b>358</b>	<b>368</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>149</b>	<b>483</b>

<sup>496</sup> Se han tomado los totales redondeados de los Cuadros de Ingresos y Gastos de las dos Cajas principales entre 1822 y 1832. Criterio de redondeo: de 1 a 4 reales queda la misma cifra. De 5 a 7 reales se aumenta 1 peso fuerte o plata.

**Cuadro No. B. ENTRE RÍOS. CAJA DE PARANÁ. Aduana, Préstamos y suplementos, Depósitos. Años 1822 a 1832.**

	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
Aduana	31.606,0	22.718,3	19.862,0	18.640,3	14.966,5	13.408,0	12.950,1	36.040,5	17.530,0	20.274,2	25.359,3
Préstamos y Suplementos	---	13.601,0	16.046,7	17.464,4	11.972,6	18.784,5	16.227,6	2.171,6	12.135,2	11.216,0	282,5
Depósitos	24.205,2	18.312,3	7.674,2	4.830,0	9.061,7	5.700,6	4.197,4	12.476,0	2.267,3	2.425,2	11.950,6
<b>TOTAL</b>	<b>55.271,2</b>	<b>54.091,3</b>	<b>43.583,1</b>	<b>40.934,7</b>	<b>36.002,2</b>	<b>37.892,3</b>	<b>33.375,3</b>	<b>50.689,3</b>	<b>31.932,5</b>	<b>33.915,4</b>	<b>37.593,6</b>

**Cuadro No. B Bis. ENTRE RÍOS. CAJA DEL URUGUAY. Aduana, Préstamos y suplementos, Depósitos. Años 1822 a 1832.**

	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
Aduana	20.994,3	12.884,7	9.450,3	8.429,8	4.065,3	3.235,2	1.477,0	9.520,6	4.714,7	4.821,3	6.612,5
Préstamos y Suplementos	6.346,0	5.281,0	4.134,0	658,4	780,3	680,0	1.206,4	200,0	50,2	1.499,3	7,0
Depósitos	1.172,2	481,2	289,0	---	348,0	---	---	10,6	29,6	---	67,0
<b>TOTAL</b>	<b>28.512,5</b>	<b>18.647,1</b>	<b>13.873,3</b>	<b>9.088,4</b>	<b>5.193,6</b>	<b>3.915,2</b>	<b>2.683,4</b>	<b>9.731,4</b>	<b>4.796,7</b>	<b>6.320,6</b>	<b>6.686,5</b>

**Cuadro No. C. ENTRE RÍOS. CAJA DE PARANÁ. Gastos militares, sueldos civiles, políticos y Hacienda, pago a prestamistas. Años 1822 a 1832.**

	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
<b>Gastos militares</b>	18.958,5	34.133,0	25.219,2	26.166,6	20.946,3	25.772,3	22.895,1	26.334,0	26.653,0	17.992,4	22.674,4
<b>Sueldos civil-políticos y Hacienda</b>	7.596,1	7.697,6	11.184,0	10.164,4	9.435,0	9.123,1	6.694,6	15.171,3	6.097,4	6.325,1	10.033,5
<b>Pago a prestamistas</b>	1.435,2	12.248,3	11.348,1	5.317,2	6.352,1	5.138,1	5.515,2	12.440,3	1.257,5	4.204,3	5.581,6
<b>TOTAL</b>	<b>27.990,0</b>	<b>54.079,1</b>	<b>47.751,3</b>	<b>41.648,4</b>	<b>36.733,7</b>	<b>40.033,5</b>	<b>35.105,1</b>	<b>53.945,6</b>	<b>34.008,1</b>	<b>28.522,0</b>	<b>38.289,7</b>

**Cuadro No. C Bis. ENTRE RÍOS. CAJA DEL URUGUAY. Gastos militares, sueldos civiles y políticos y Hacienda, pago a prestamistas. Años 1822 a 1832.**

	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832
<b>Gastos militares</b>	13.359,1	19.175,6	9.310,1	7.534,2	3.877,0	2.647,6	2.685,3	7.831,3	6.614,1	6.427,6	3.229,1
<b>Sueldos civil-políticos y Hacienda</b>	1.924,0	3.796,0	208,3	3.886,4	2.932,4	1.683,4	998,6	1.962,1	1.323,4	1.331,1	1.662,5
<b>Pago a prestamistas</b>	3.338,2	3.269,7	6.117,6	5.221,0	791,4	405,6	159,2	1.128,5	----	882,5	2.208,3
<b>TOTAL</b>	<b>18.621,3</b>	<b>26.241,5</b>	<b>15.636,2</b>	<b>16.641,6</b>	<b>7.601,0</b>	<b>4.737,0</b>	<b>3.843,3</b>	<b>10.922,1</b>	<b>7.937,5</b>	<b>8.641,4</b>	<b>7.100,1</b>

## FUENTES

### **Fuentes editas**

Archivo Artigas, Comisión Nacional, Montevideo, Monteverde, MCMXCII, Tomos 6 y 25. Acceso: <http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas>

Barreto, Félix (Org.) *Papeles de Rosas (1821-1850)*, AGPSF, Santa Fe, Ed. Oficial, 1928.

Funes, José María (Dir), *Papeles de Echagüe*, Edición Oficial del Archivo Histórico de la Provincia, Santa Fe, 1950, Tomo I, (1796-1826).

*Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe*, Tomo II, Documentos del Tomo I “Tratados, Convenciones y Constituciones”, Comisión Redactora, Santa Fe, Imprenta Oficial, 1969.

Libro del Cabildo de la Villa de San José de Gualeguaychú 1787–1811, Obispado de Gualeguaychú, Inst. de Profesorado “Sedes Sapientiae”, Dpto de Investigación, Gualeguaychú. DVD Transcripción del Libro de Acuerdos, 2010.

Montañez, Guillermo, “Padrón General de los establecimientos de Estancia, Dpto. Gualeguaychú, 1834” Original en Arch. Histórico, Fondo Documental Juan C. Borques, Inst. Magnasco, Gualeguaychú, Entre Ríos, *Revista Genealogía de Entre Ríos*, No. VI, Bs As, 2008.

*Papeles de López*, AGPSF, Santa Fe, Imprenta Oficial. Volúmenes I (1804-1819), II (1820-1822), 1976 y III (1823-1831), 1992.

*Partes oficiales y documentos relativos a la guerra de la independencia argentina* (campana del Brasil), Buenos Aires, Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1903, T. IV. Acceso: [https://archive.org/stream/partesoficiales00arggoog/partesoficiales00arggoog\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/partesoficiales00arggoog/partesoficiales00arggoog_djvu.txt)

Recopilación de Leyes, Decretos y Circulares de la Provincia de Entre Ríos, (RLDAPER), 1821 – 1838, Uruguay, La voz del Pueblo, 1875. Tomo I, 1821 a 1824; Tomo II, 1825 a 1828; Tomo III, 1829 a 1832; Tomo IV, 1833-1841.

Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, Corrientes, Imprenta del Estado, 1929, T. I 1821-1825.

Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe (ROPSF), Santa Fe, La Revolución, 1888, T. I, 1815-1847.

Representación Nacional en Santa Fe, 1828-1829, Actas y otros documentos, Santa Fe, 1928.

### **Fuentes inéditas**

#### **Archivo General de la Nación Argentina (AGNA)**

Div. Nacional, Sección Gobierno, Sala V, Cuerpo X. Tomo 5-4-5  
Sala IX, 31-3-38, leg. 11, Fondo Justicia  
Sala X, 5-4-5  
Sala X, 5-9-9 Gobierno de Santa Fe.

#### **Archivo General de la Nación – Uruguay (AGNU)**

Archivo General Administrativo, Padrón Paysandú 1821-1823-1827

Archivo Judicial, Juzgado Letrado Santo Domingo Soriano, Caja 6  
Libros del ex Archivo General Administrativo.  
Fondo Ex Archivo y Museo Histórico Nacional: 1820-1832

**Arquivo Historico do Estado, Porto Alegre, Río Grande del Sur – Brasil (APOA)**  
Autoridades militares, Parte I, Correspondencia

**Archivo Histórico de la provincia de Santa Fe (AGPSF)**

Actas del Cabildo de Santa Fe. Disponible en <http://www.santafe.gob.ar/actascabildo>  
Notas y Comunicaciones del Cabildo, Tomo IV, 1819-1832  
Archivo Privado Colección Diez de Andino  
Sección Contaduría, Tomos Nos. 7, 8, 9, 16, 21, 33, 36, 39, 45, 47, 134.  
Sección Gobierno, Tomo I (1573 – 1830) y Tomo 2 ½  
Notas y Comunicaciones del Cabildo, Tomo IV, 1819-1832  
Tomo Documentos Varios (1824-1877). Entre Ríos.  
Tomo 1 – A Varios Documentos.

**Archivo Histórico de la Provincia de Entre Ríos (AGPER)**

Libros de Leyes, Acuerdos y Decretos (LAD) Nos. 1, 1 Bis, 2, 2 Bis y 4 del Congreso de Entre Ríos.  
Gobierno Serie I, 1788-1869. Carpetas Nos. 1 a 17.  
Gobierno Serie III, Caja 4 y Carpeta 2–A, Legs. 1 a 10 (1821-1823). Caja 2-B.  
Gobierno Serie V, Caja 1.  
Gobierno Serie VI “A”, Leyes y Decretos 1821 a 1910, Caja 7.  
Gobierno Serie VIII, Caja 1 A, 1 B, 2, 2 A  
Gobierno Serie IX, Mazo 1. Libros Toma razón de despachos, patentes y providencias militares, civiles y políticas 1824 – 1830.  
Gobierno Serie XI, Cajas 10 y 11, varios legajos.  
Gobierno Serie XI (A), Carpeta 1, Solicitudes militares.  
Gobierno Serie XI C, Asuntos militares (1820-1896), Lista de revistas militares por Departamento, 1822-1832, Cajas 8 y 9.  
Hacienda Serie I, 1822-1832, Carpetas 5, 6, 10, 13, 17, 21, 25, 30, 33, 38, 43, 48.  
Hacienda Serie II A, 1822-1832, Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 10, 11. Subserie F.  
Hacienda Serie IV, Carpeta 1 y Solicitudes.  
Hacienda Serie IX, Subserie A, Carp. 1 y Cuaderno de “Comunicaciones de toda clase dirigidas a las justicias ordinarias por el Gobierno de la provincia” Tribunal de Comercio, Leg. 24, abril 1826 a abril 1828; Carp. 2. 1821-1827.  
Hacienda Serie XI C, Asuntos militares 1820-1896, Carpetas 8 a 15 (1822-1832)  
Hacienda, Causas civiles y comerciales, Caja 1.  
Libro Copiador de correspondencia del Poder Ejecutivo a la Legislatura. (1826-1828)

**Museo Histórico Martiniano Leguizamón, Paraná, Entre Ríos**

Archivo Ricardo López Jordán, Carpeta 1.

**Instituto Osvaldo Magnasco – Gualeguaychú, Entre Ríos.**

Archivo privado de Mateo García de Zúñiga.

**Reglamentos y constituciones**

Reglamento Provisorio, Buenos Aires, 1811.  
Estatuto Provisorio dictado por la Junta de Observación, Buenos Aires, 1815.  
Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado, dictado para las Prov. Unidas de Sudamérica por el Congreso Constituyente, Tucumán, 1817.

Manifiesto y Estatuto Provisorio de Santa Fe de 1819.  
Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica el 22 de abril de 1819.  
Constitución de Córdoba, 1821.  
Estatuto Provisional Constitucional de Entre Ríos, 1822.  
Reglamentos Provisorios Constitucionales de Corrientes, 1821 y 1824  
Emilio Ravignani (Ed.), *Asambleas Constituyentes Argentinas*, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1937-1939, Tomos 3ro. y 6to.

### **Prensa**

Diario *El Federal. Lex Populi, Lex Dei*, Santa Fe, 1831. Periódicos de Provincias 1826-1862, Armario 5, Diario No. 43, Hemeroteca de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

*El Correo Ministerial del Paraná*, Imprenta provincial de Entre Ríos, 1821-1823. Periódicos de Provincias 1826-1862, Armario 5, Diario No. 77, Hemeroteca de la UNLP.

*El Correo de las Provincias* en Biblioteca de Mayo, Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina, Periodismo, Buenos Aires, 1960. Tomo X. Reproducción simil – tipográfica, Bs As, Imp. de los Expósitos, Periódico quincenal).

Zinny, Antonio, *La Gaceta Mercantil de Buenos Aires*, 1823 – 1852, Buenos Aires, Imprenta Americana, 1875, Vol. I.

### **Diccionarios históricos – Cuerpos legales.**

Canga Argüelles, José, *Diccionario de Hacienda*, Madrid, BAE, 1968, Tomo I.

Diccionarios académicos históricos de la Real Academia Española. Acceso <http://www.rae.es>

Novísima Recopilación de las Leyes de Indias, Códigos españoles, Madrid, 1872.

Patricio de la Escosura. *Diccionario Universal de Derecho Español* constituido, Tomo IV, Madrid, Mata González, 1853. Acceso:

[http://books.google.com.ar/books/about/Diccionario\\_universal\\_del\\_derecho\\_espa%C3%B1ol.html?id=dEkfsduRyX8C](http://books.google.com.ar/books/about/Diccionario_universal_del_derecho_espa%C3%B1ol.html?id=dEkfsduRyX8C)

### **Literatura de viajes, Memorias**

Azara Félix *Viajes por la América del Sur*, Montevideo, Comercio del Plata, 1850, 2da. Edic.

Beaumont J. A. B. *Travels in Buenos Ayres, and the adjacent provinces of the Rio de la Plata*. With observations, intended for the use of persons who contemplate emigrating to that country; or embarking capital in its affairs. London, J. Ridgway, 1828. Acceso:

<http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/libros-digitalizados-de-viajeros-al-rio-de-la-plata-siglo-xix>

Diez de Andino, Manuel I. *Diario de Don Manuel Ignacio Diez de Andino. Crónica santafecina 1815-1822*, Santa Fe, UNL, 2008.

Morítan, Santiago, *Mansilla, Memorias Inéditas*, Buenos Aires, 1945.

J.P. y W.P. Robertson *Cartas de Sudamérica*, Bs. As. Emecé, 2000 Vol. I.

### **Documentación eclesiástica**

Catedral de Todos los Santos de Santa Fe, Libro de matrimonios Vol. 5, 1820 – 1838. Libro de Desposados que principia por febrero de 1820. Fondo Archivo del Arzobispado de Santa Fe.

Catedral de Todos los Santos de Santa Fe. Libro de Bautismos 1814 a 1832, Fondo Documental microfilmado disponible en la Biblioteca Genealógica de la “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, Santa Fe.

Censo de la Parroquia del Paraná, 1803 en Pérez Colman, César *Historia de Entre Ríos, época colonial (1520-1810)*, T. II, Cap. XIX, pp. 321-361.

Censo Eclesiástico Gualeguay 1803 en Barnes Almeyra, Héctor Rubén, *Revista Genealogía de Entre Ríos*, No. II, Buenos Aires, 2004.

Libro 2do. Matrimonios del Uruguay (1815-1851) en González del Solar, Ema; Oliver Muro, Eduardo; Espina Rawson, Mariano, *Revista Genealogía de Entre Ríos*, No. 5, Bs Aires, 2007. Acceso: [www.genealogiaentrerios.com/documentos-cd/archivos-parroquiales](http://www.genealogiaentrerios.com/documentos-cd/archivos-parroquiales)

### **Censos oficiales**

Concepción del Uruguay 1820, en Eguiguren, María Selva Ruth, *Revista Genealogía de Entre Ríos*, No. I, Bs As, 2003

Gualeguaychú, Matanza,-Corrales-del Ceibo-Laguna del Pescado-Rincón del Nogoyá, 1820.

<http://genealogiaentrerios.com/documentos/censo1820>

Paraná, 1820 en [www.familiasparana.blogspot.com.ar](http://www.familiasparana.blogspot.com.ar)

Paraná 1824 en AGPER, Gobierno, Serie VII, Carp. 1, 1823-1844, Legajo 2.



## BIBLIOGRAFÍA

### Teoría – metodología

AAVV. *Diez Textos Básicos de Ciencia Política*. Editorial Ariel, Barcelona, 1992.

Annino, Antonio (2003) “El voto y el XIX desconocido” *ISTOR*, No. 17. Dossier. Año V, Verano de 2004. Disponible en <http://www.istor.cide.edu/>

Areces, Nidia “Regiones y fronteras: apuntes para una historia” en Revista ANDES, CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, 1999, Núm. 10, pp. 19-32.

Barriera, Darío (Director) *Instituciones, gobierno y territorio. Rosario, de la Capilla al Municipio (1725-1930)* Rosario, ISHIR CONICET, 2010.

----- “Por el camino de la historia política: hacia una historia política configuracional” en *Secuencia*, Revista de Historia y Ciencias Sociales, Instituto Mora, No. 53, México, 2002.

Bobbio Norberto y Mateucci Nicola *Diccionario de Política*. A-J, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Edit., 1976.

Bonaudo, Marta, Reguera, Andrea y Zeberio, Blanca (Coords) *Las escalas de la historia comparada*. Buenos Aires. Miño y Dávila, 2008. Tomo 1: Dinámicas sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos.

Bragoni, Beatriz *Microanálisis. Ensayos de historiografía argentina.*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004.

Carré de Malberg, Raymond *Teoría General del Estado*, México, Fondo de Cultura Económica, 1948.

Chiaramonte, José Carlos “La antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852” en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, No. 199, vol. 50, octubre-diciembre 2010, pp. 331-361. Primera versión en inglés publicada en “*Hispanic American Historical Review* 90:3, Duke University Press, 2010.

----- “El principio de consentimiento en la gestación de las independencias ibero y norteamericanas” en *Anuario del IHES*, No. 17, 2002. pp. 21-43.

----- “Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia”, *BIHAAER*, 3da. Serie, No. 22, 2do. Sem. 2000, pp. 33-71.

Cuesta Vélez, Cecilia “La cartografía y los mapas como documento social en la Colonia”, *Procesos históricos*, Mérida, Universidad de los Andes, No. 7, 2005.

Fernández Sandra, Dalla Corte Gabriela (Comps.) *Lugares para la Historia. Espacio, Historia Regional e Historia Local en los Estudios contemporáneos*, Rosario, UNR Editora, 2001.

Goldman, Noemí (Editora) *Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.

Guerra, Francois X. “El análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate crítico” en *Anuario del IHES*, No. 15, 2000, pp. 117-122.

Grimson, Alejandro (Compilador) *Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro*, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, La Crujía, 2000.

Herrera, Claudia Elina *Élites de poder en Argentina y España en la segunda mitad del siglo XIX*, Universidad Complutense de Madrid, 2003. Versión electrónica. . ISBN 84-669-1993-7.

Imizcoz, José María "Actores sociales y redes de relaciones en las sociedades de Antiguo Régimen. Propuestas de análisis en historia social y política" en Barros, Carlos (Editor) *Historia a Debate*, Actas del Congreso Internacional HaD 1993, Santiago de Compostela, 1995, Tomo II, Retorno del sujeto, pp. 341-353.

Keating Michael "La importancia recurrente del territorio. Las regiones y la historia del Estado europeo" en *Revista de Historia Contemporánea*, *Alcores*, No. 2, 2006

Kocka, Jürgen. "Comparison and beyond" en *History and Theory*, Wesleyan University 2003, No 42, February 2003, pp. 39-44.

----- *Historia social y conciencia histórica*, Madrid, Marcial Pons, 2002

Levi, Giovanni "Sobre microhistoria", en Burke P. (ed.), *Formas de hacer historia*, Madrid, Alianza, 1994

Manin, Bernard, *Los principios del gobierno representativo*, Madrid, Alianza, 1998.

Moutoukias, Zacarías "Lazos débiles/lazos fuertes y la organización espacial de los negocios en Hispanoamérica colonial (2da. Mitad del siglo XVIII), 2000, inédito.

Nordman, Daniel "La frontera: nociones y problemas en Francia, siglos XVI-XVIII" en *Historia Crítica* No. 32, Bogotá, julio-diciembre 2006, pp. 154-171

Passerin D'entreves, Alessandro *La noción de Estado. Una introducción a la Teoría Política*. 2da Parte, Barcelona, Ariel, 2001. Págs. 95-268.

Rosanvallon, Pierre, "Para una historia conceptual de lo político", (nota de trabajo)" en *PRISMAS*, Vol. 6, Universidad Nacional de Quilmes, 2002 (Original en *Revue de Synthèse*, 4, 1986), pp. 123-133.

Rus Rufini, Salvador "Historia de las historias sobre Derecho Natural (Siglos XVII y XVIII) en el Apartado Análisis Temático, *Revista Anthropos*. Huellas del conocimiento, Barcelona, No. 223, 2009, pp. 168-184.

Sabatini, Gaetano "Entre la Hacienda Real y poderes locales: los intentos de reformar las finanzas municipales del Reino de Nápoles en los siglos XVI y XVIII" en *Studia Histórica*, *Historia Moderna*, No. 27, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005, 223-239.

Sahlins, Peter "Natural frontiers revisited: France's boundaries since the seventeenth century" en *American Historical Review*, vol. 95, 1990, pp. 1423-1451.

Sartori, Giovanni *Elementos de teoría política*, Buenos Aires, Alianza Singular, 1992.

Stopani, Antonio "La memoria dei confini: giurisdizione e diritti comunitari in Toscana (XVI-XVIII Sécolo)" en *Quaderni Storici*, Nuova Serie, No. 118, Mulino, Aprile 2005, pp. 73-96.

Vilar, Pierre "Penser historiquement", conferencia de clausura de los cursos de verano de la Fundación Sánchez Albornoz, Ávila, 30 de julio de 1987. Traducción a español: Arón Cohen

[http://atelierpierrevilar.net/assets/files/PVILAR\\_conferencia\\_pensar\\_historicamente.pdf](http://atelierpierrevilar.net/assets/files/PVILAR_conferencia_pensar_historicamente.pdf)

Yun Casalilla, Bartolomé (Dir.) *Las Redes del Imperio: Elites sociales en la articulación de la monarquía hispánica, 1492 – 1714.*, Madrid, Marcial Pons y UPO 2009, Introducción.

### *Tratados del Derecho natural y de gentes*

Bello, Andrés, *Obras Completas*, Vol. X, *Derecho Internacional*, Santiago. de Chile, Imp. Pedro Ramírez, 1886. Acceso: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-completas-de-don-andres-bello-volumen-10-derecho-internacional/>

Marín y Mendoza, Joaquín, *Historia del derecho natural y de Gentes*, Edición y prólogo de Manuel García Pelayo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1950.

Puffendorf, Samuel von *De la obligación del hombre y el ciudadano según la Ley Natural en dos Libros*, Tomo II, Cap. XVI, Córdoba, UNC, 1980, p. 262 (1ra. edición, Cambridge, 1682).

Sáenz, Antonio, *Instituciones elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes* (curso dictado en la Universidad de Buenos Aires en los años 1822-23) Bs Aires, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, Inst. de Historia del Derecho Argentino, 1939. Libro Segundo. Del Derecho de Gentes. Tratado 1º. De las Sociedades en General, de sus atribuciones y diferencias.

Vattel, Emmer de. *El Derecho de Gentes ó principios de la Ley Natural, aplicados a la conducta, y a los negocios de las naciones y de los soberanos*, Madrid, 1834, Tomo II. Traducción al español por el Lic. Manuel M. P. Hernández. Acceso: <https://archive.org/stream/elderechodegente02vatt#page/n3/mode/2up>

Wheaton, Enrique Historia de los progresos del Derecho de Gentes en Europa y América, desde la paz de Westfalia hasta nuestros días. Con una introducción sobre los progresos del derecho de gentes en Europa antes de la paz de Westfalia. Traducida y aumentada con un apéndice por Carlos Calvo. Besanzon, Imprenta de José Jacquin, 1861.

### **Historia iberoamericana**

Annino Antonio, Castro Leiva Luis, Guerra, Francois (Coord..) *De los Imperios a las naciones: Iberoamérica*, Ibercaja, Zaragoza, 1994.

Annino, Antonio (Coord..) *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, Montevideo, Fondo de Cultura Económica, 1995.

Annino, Antonio ""Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial. El 29 de noviembre de 1812 en ciudad de México", BIHAAR, Tercera Serie, No. 6, Segundo semestre de 1992.

Ansaldi Waldo y Giordano Verónica (Coords.) *América Latina. Tiempos de violencias*, Buenos Aires, Ariel, 2014.

Bandieri, Susana (Comp.) *La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010.

Bragoni Beatriz, Mata Sara (Comps.) *Entre la Colonia y la República. Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.

Carmagnani Marcello, Hernández Chávez Alicia, Romano Ruggiero (Coord.) *Para una Historia de América Latina. Las estructuras*. El Colegio de México/FCE, México, 1999.

Carmagnani Marcello (Coord.) *Federalismos latinoamericanos: México / Brasil/ Argentina*, El Colegio de México/FCE, México, 1993.

Chiaromonte José Carlos. *Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias*, Buenos Aires, Sudamericana, 2004.

----- "El mito de los orígenes en la historiografía latinoamericana" en *Cuadernos del Instituto Ravignani*, Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", FFyL, UBA, Bs As, 1991, Núm. 2.

Coatsworth, John *Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica de México en los siglos XVIII y XIX*, Alianza Editorial Mexicana, 1990.

Di Meglio, Gabriel "Introducción" en Dossier Lo "revolucionario" en las revoluciones de independencia, *Nuevo Topo Revista de Historia y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Manuel Suárez Editor, 2008.

Fontana, Josep "La crisis colonial en la crisis del Antiguo Régimen español" en Bonilla, Heraclio (Editor) *El sistema colonial en la América española*, Barcelona, Crítica, 1991.

Gallego, José Andrés *Quince revoluciones y algunas cosas más*, Madrid, MAPFRE, 1992.

Garavaglia, Juan Carlos; Pro Ruiz, Juan; Zimmermann, Eduardo. *Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado: América Latina, Siglo XIX*, Rosario: Prohistoria Edic.; State Building in Latin América, Univ. Pompeu Fabra. 2012.

González Bernaldo de Quirós, Pilar (Dir.) *Independencias iberoamericanas: nuevos problemas y aproximaciones*. Buenos Aires, FCE, 2015.

Guerra, Francois X. *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. Colección Relaciones entre España y América, Madrid, MAPFRE, 1992, Caps. V y IX.

Guimerá, Agustín (Editor) *El reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar*, Alianza Editorial, CSIC, MAPFRE América, Madrid, 1996.

Iran Ribeiro, José *Quando o serviço os chamava. Milicianos e Guardas Nacionais no Rio Grande do Sul (1825-1845)*, Santa María, Editorial UFSM, 2005.

Irigoin María Alejandra, Schmit Roberto (Ed.) *La desintegración de la economía colonial: comercio y moneda en el interior del espacio colonial 1800-1860*, Buenos Aires, Biblos, 2003.

Jáuregui, Luis "Vino viejo y odres nuevos. La historia fiscal en México, *Historia Mexicana*, México, El Colegio de México, Vol. LII Núm.3, enero-marzo 2003, pp. 725-771. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60052304>

Kaceff, Osvaldo y Gerchunoff, Pablo (Comps.) *Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina*, Colección Documentos de Proyectos, Sgo. de Chile, CEPAL, 2011.

Lynch, John *Caudillos en Hispanoamérica (1800-1850)*, MAPFRE, Madrid, 1993.

Millot Julio, Bertino Magdalena, *Historia económica del Uruguay*, 1991, FCV, Montevideo. Tomo I.

Pérez Herrero, Pedro "La conformación política y social de las nuevas repúblicas hispanoamericanas (1810-1834). Caracteres generales del proceso" en Jover, José María (ed.) *Historia de España Menéndez Pidal: la España de Fernando VII. La posición europea y la emancipación americana*. Vol. XXXII, Espasa Calpe, Madrid, 2001, pp. 325-364.

Pimenta, João Paulo G "La independencia de Brasil como revolución" en Dossier Lo "revolucionario" en las revoluciones de independencia, *Nuevo Topo Revista de Historia y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Manuel Suárez Editor, 2008.

Pimenta, João Paulo G. *Estado e Nação no fim dos impérios ibéricos no Prata (1808-1828)*, HUCITEC, São Paulo, 2002.

Prados de la Escosura, Leandro "Hispanoamérica tras la Independencia: un balance de su evolución económica (1820-1870)" en Marco Palacios (Coord.) *Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después*, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2009, pp. 389-407.

Sábato, Hilda (Coord.) *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, El Colegio de México/FCE, México, 1999.

Silva, Hernán (Director General) *Historia Económica del Cono Sur de América. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La era de las revoluciones y la independencia*, México, IPGH, OEA, 2010.

Tesio, Maria Eugenia *Evolución del proceso electoral en Brasil y Chile hasta la implementación del sufragio universal como elemento clave en la consolidación democrática*, Disertación. Buenos Aires, Instituto de Sociología Política, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2007.

Thibaud, Clément "Formas de guerra y mutación del Ejército durante la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela" en Rodríguez O., Jaime. *Revolución, independencia y las nuevas naciones de América*, México, MAPFRE, 2005, pp. 339-364, <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/thibaud.pdf>

### **Historia rioplatense**

Abásolo, Ezequiel *El derecho penal militar en la historia argentina*, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Vol. XXXV, Córdoba, 2002.

Areces Nidia y Suárez Teresa (Comps.) *Estudios históricos regionales en el espacio rioplatense. De la colonia a mediados del siglo XIX*, Cuadernos de Cátedra, Santa Fe, Ediciones UNL, 2004

Areces, Nidia (Comp.) *Poder y Sociedad. Santa Fe la Vieja, 1573-1660*, Rosario, M. Suárez Ed. y Prohistoria, U.N.R 1999.

Barrios Pintos, Aníbal *Paysandú: historia general*, Montevideo, Intendencia Municipal de Paysandú, 1989, Caps. VII y IX.

Bransboin, Hernán *Mendoza Confederal. El ejercicio de la soberanía mendocina en torno a la Confederación Argentina. 1831 – 1852*, Tesis Doctoral, UBA, 2012 (Inédita) Gentileza del autor.

Buchbinder, Pablo *Caudillos de pluma y hombres de acción. Estado y política en Corrientes en tiempos de la organización nacional*, Buenos Aires, Universidad Nacional General Sarmiento y Prometeo Libros, 2004.

Burgin, Miron, *Aspectos económicos del federalismo argentino*, Buenos Aires, Solar, 1975 (2da. Reimpresión, Edición original en inglés 1946)

Campos de Garabelli, Martha *La revolución Oriental de 1822-1823: su génesis*, Montevideo, Junta Departamental, Biblioteca "José Artigas", Montevideo, Vol. I, 1972 y Vol. II, 1978.

Cervera, Manuel *"Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe"* Santa Fe, UNL, Vol. II 1980 y Vol. III, 1981(1ra. Edición 1907).

Chiaramonte José Carlos, Cussianovich Guillermo E., Tedeschi Sonia "Finanzas públicas y política interprovincial: Santa Fe y su dependencia de Buenos Aires en tiempos de Estanislao López" en *BIHAAER*, 3ra Serie, Número 8, 2do. semestre de 1993, pp. 77-116.

Chiaramonte, José Carlos *Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, Buenos Aires, Ariel Historia, 1997.

----- "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX", en Carmagnani M. (Coord.), 1993.

----- *Mercaderes del Litoral, Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX*, Bs Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991a.

----- "Finanzas públicas de las provincias del Litoral, 1821-1841" en *Anuario del IHES*, I, UNICEN, Tandil, 1986a.



----- “Legalidad Constitucional o Caudillismo: El problema del orden social en el surgimiento de los estados autónomos del Litoral Argentino en la primera mitad del siglo XIX” en *Desarrollo Económico*, v. 26, No. 102, 1986b.

Cuadro Cawen, Inés “Viejas y nuevas prácticas políticas en la Provincia Oriental durante las guerras de independencia del Imperio del Brasil 1825-1828”, 1<sup>er</sup> Congreso Latinoamericano y 4<sup>as</sup> Cuartas Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, 5 - 7 de Diciembre de 2007.

Di Stéfano Roberto, Zanatta Loris *Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Grijalbo/Mondadori, 2000.

Djenderedjian, Julio *Historia del capitalismo agrario pampeano: la agricultura pampeana en la primera mitad del siglo XIX*, 1<sup>a</sup>. Edición Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2008a.

Ferreira, Fábio “Comerciantes e estancieiros: a participação dos segmentos econômicos orientais na expansão da fronteira luso-brasileira em direção ao Prata” 1er Congreso Latinoamericano y 4as Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, 2007.

Frega, Ana (Coord) *Historia regional e independencia del Uruguay. Proceso histórico y revisión crítica de sus relatos*, Montevideo, Edic. de la Banda Oriental, 2009.

----- “Después de la derrota. Apuntes sobre la recomposición de liderazgos rurales en la campaña oriental a comienzos de la década de 1820” en Fradkin R. y Gelman J. (Comps.) *Desafíos al orden. Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia*, Rosario, Prehistoria, 2008, pp. 131-152.

----- *Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa*, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007.

----- “Guerras de independencia y conflictos sociales en la formación del Estado Oriental del Uruguay (1810-1830)” en *Dimensión Antropológica*, Año 12, Vol. 35, setiembre-diciembre 2005, pp. 25-58.

Galmarini Hugo *Negocios y política en la época de Rivadavia. Braulio Costa y la burguesía comercial porteña (1820-1830)*, Buenos Aires, Platero, 1974.

Garavaglia, Juan Carlos “Crecimiento económico y diferenciaciones regionales en el Río de la Plata a fines del siglo XVIII” en *Economía, sociedad y regiones*, Buenos Aires, Edic. de la Flor, 1987.

Gelman, Jorge (Coord y Dir.) *Argentina*, Colección América Latina en la Historia Contemporánea, Lima, MAPFRE y Taurus, 2010, Tomo I Crisis imperial e independencia (1808/1830).

----- (Comp.) *La historia económica argentina en la encrucijada. Balances y perspectivas*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006.

Gianello, Leoncio. *Historia de Santa Fe*, Plus Ultra, Lanús, 1978.

Goldman Noemí, Salvatore Ricardo (Comp.) *Caudillismos Rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Buenos Aires, EUDEBA, 2005. (1ra. Ed. 1998)

Goldman Noemí, Tedeschi Sonia “Los tejidos formales del poder: Caudillos en el Interior y el Litoral rioplatenses” en Goldman N., Salvatore R. (Comp.), 2da. Ed. 2005, pp. 135-158.

Goldman, Noemí (Dir. de tomo), *Nueva Historia Argentina*, Tomo III, Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

Guazzelli, Cesar. *O Horizonte da Provincia: a República Rio-Grandense e os Caudilhos do Rio da Prata (1835-1845)*, Porto Alegre, Linus, 2013 (Base Tese Doutorado, Rio de Janeiro: UFRJ, 1998).

Halperin Donghi, Tulio *Historia Argentina*, Tomo 3 “De la revolución de Independencia a la Confederación rosista”, Buenos Aires, Paidós, 1989.

----- *Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850)*, Buenos Aires, EUDEBA, 1982.

----- *Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla*, México, Siglo XXI, 1979.

Islas, Ariadna “En búsqueda de fronteras perdidas. Algunas notas sobre la construcción política de las “fronteras naturales” en la región platense sobre la lectura de viejos mapas (1600 ca.-1853). Ponencia *II Jornadas Historia Regional Comparada*, Porto Alegre, 6/OCT/2005.

Lafforgue, Jorge (Edición y prólogo) *Historia de los caudillos argentinos*, Buenos Aires, Alfaguara, 1999.

López D’Alesandro, Fernando “1825: Guerra y ganado” en *La construcción de las independencias: La guerra de independencia de España y el levantamiento hispanoamericano*. Actas VI Jornadas de Historia y Cultura de América, Congreso Internacional y Primer Encuentro de Jóvenes Americanistas, Facultad de Humanidades, Universidad de Montevideo, 2011, pp. 217-244.

López Rosas, José Rafael. *El pronunciamiento federal de Santa Fe*, Santa Fe, Extensión Universitaria, Universidad Nacional del Litoral, 1968.

Lorenz, Federico (Comp.) *Guerras de la historia argentina*, Buenos Aires, Ariel, 2015.

Macías, Flavia “Poder ejecutivo, militarización y organización del Estado Provincial. Tucumán en los inicios de la Confederación Rosista” en *BIHAAER*, No. 32, Buenos Aires, ene/jun 2010.

Ottolenghi, Mauricio “La función judicial en las primeras épocas de la Independencia (A propósito de la obra del Dr. Luis Méndez Calzada)” en *Revista del Colegio de Abogados*, Buenos Aires, 1945, T. XXIII, pp. 53-56.

Paz, Gustavo, *Las guerras civiles (1820-1870)*, Colección Historia Argentina, Buenos Aires, EUDEBA, 2007.

Pressel Griselda, Suárez Teresa, Tedeschi Sonia “Cultura legal e interdisciplinariedad: consideraciones teóricas y experiencias de investigación sobre problemas de la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata” en Crolla, Adriana (Directora) *Memoria cultural y territorialidad. Perspectivas comparadas desde la localidad*, Santa Fe, Ediciones UNL, 2015.

Quirici, Gabriel “Economía y población de Paysandú en la región (1770-1822): los orígenes de su dinámica social y la situación luego de la revolución” en Ponencia *II Jornadas Historia Regional Comparada*, PUCRS, Porto Alegre, 6/OCT/2005.

Rabinovich, Alejandro “El fenómeno de la desertión en las guerras de la revolución y la independencia en el Río de la Plata, (1810-1829)” en Revista *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*. Identidad y actores subalternos en las guerras de Independencia, Universidad de Tel Aviv, Instituto Sverdlin de Historia y Cultura de América Latina, 2011. Acceso: <http://www.academia.edu/4222233>

Romano, Silvia *Economía, sociedad y poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX*, Córdoba, Ferreyra, 2002.

Rosal, Miguel Angel "El Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Las relaciones comerciales entre el Interior y Buenos Aires 1831-1835", *BIHAAER*, Tercera Serie, No. 5, Primer semestre de 1992

Sábato Hilda, Lettieri Alberto (Comp.) *La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces*, Buenos Aires, FEC, 2003.

Sábato Hilda, Ternavasio Marcela, De Privitellio Luciano, Persello Ana Virginia. *Historia de las elecciones en la Argentina 1805-2011*, Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 2011.

Sábato, Hilda y Ternavasio, Marcela "De las Repúblicas rioplatenses a la República Argentina. Debates y dilemas sobre la cuestión republicana en el siglo XIX" en González Bernaldo de Quirós, Pilar (Dir.) *Independencias iberoamericanas: nuevos problemas y aproximaciones*. Buenos Aires, FCE, 2015, 4ta. Parte, Cap. X.

Schmit, Roberto "Las consecuencias económicas de la Revolución en el Río de la Plata" en Bandieri, Susana (Comp.) *La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, pp. 101-104.

Tandeter, E. (Dir. de tomo); *Nueva Historia Argentina*. Tomo II La sociedad Colonial, Buenos Aires, Sudamericana. 2000.

Tau Anzoátegui, Víctor "La administración de la justicia en las provincias argentinas 1820 – 1853", *Revista de historia del derecho Instituto de investigaciones de Historia del derecho*, Nº 1, 1973.

----- "Las Facultades Extraordinarias y la Suma del Poder Público en el Derecho provincial argentino (1820-1853)" en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Fac. de Derecho y Cs. Sociales, UBA, No. 12, 1961.

Tedeschi, Sonia "Caudillo e Instituciones en el Río de la Plata. Santa Fe entre 1819 y 1838" Publicado en <http://www.historiapolitica.com>, Programa Buenos Aires de Historia política Siglo XX. Dossier "La representación política en sus orígenes" coordinado por la Dra. Marcela Ternavasio, 2011.

----- "Política, prácticas y relaciones interétnicas en la frontera rioplatense (Santa Fe, 1820-1840)", *RILA - Revista de Integração Latino-americana*, Número especial "História e Fronteiras", Universidad Federal de Santa María, Brasil, 2008.

----- *Política e instituciones en el Río de la Plata. El caso de Santa Fe entre 1819 y 1838*, Tesis Maestría en Historia Latinoamericana, Universidad Internacional de Andalucía, Sede La Rábida, 2003

Ternavasio, Marcela Conferencia magistral "Las prácticas electorales y sus diferentes escenarios. Balances y perspectivas para los estudios del temprano siglo XIX", Coloquio Internacional: Prácticas electorales en el México del siglo XIX, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Col. San José Mixcoac, México, 21 y 22/5/2014. (Inédita) Gentileza de la autora.

----- (Dir. de Tomo) *Historia de la provincia de Buenos Aires: de la organización provincial a la federalización de Buenos Aires: 1821-1880*, Buenos Aires. Edhasa Gonnet UNIPe, Edición Universitaria, 2013, Tomo 3.

----- (Coord) Dossier: La representación política en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX, en <http://historiapolitica.com>, 2011.

----- *Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2007.

----- *La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires 1810-1852*, Buenos Aires, Siglo XXI, Editores Argentina, 2002.



Tío Vallejo, Gabriela *Antiguo Régimen y Liberalismo. Tucumán, 1770-1830*, Tucumán, Cuadernos de HUMANITAS, FFyL, Universidad Nacional de Tucumán, 2001.

Verdo, Geneviève “El dilema constitucional en las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1819)” *Historia Contemporánea*, No. 33, 2006.

Vidaurreta de Tjarks, Alicia “Tres intentos separatistas del General Rivera: las misiones Carriego, Aberasturi y Lecoq (1831-1832) en *Anuario del Departamento de Historia*, Universidad Nacional de Córdoba, 1963, Año I, No. 1, 507-555.

Wentzel, Claudia “El comercio del Litoral de los Ríos con Buenos Aires: el área del Paraná. 1783-1821” en *Anuario del IHES*, UNICEN, Tandil, Vol. 3, 1988, pp. 161-209.

### **Historia de la provincia de Entre Ríos**

AAVV. *Enciclopedia de Entre Ríos*, Paraná, Arozena Editores, 1978.

AAVV. *Revistas del Centro de Genealogía de Entre Ríos*, Buenos Aires. No. III, 2005; IV, 2006; VI, 2008; VIII, 2010.

Andreeto, Miguel Ángel, “El periodismo de Entre Ríos, *Historia del periodismo argentino*, Vol. IV, Academia Nacional de Periodismo, Bs As, 2009.

Bascourleguy, Graciela (Coord.) *Federales olvidados*, Paraná, Archivo General de Entre Ríos, Ediciones del Clé, 2007.

Bosch, Beatriz *Urquiza y su tiempo: la visión de sus contemporáneos*, Historia testimonial argentina, CEAL, 1984, Prólogo y selección documental.

----- “El gobernador Pascual Echagüe y la Organización Nacional, 1834-1836” en *Investigaciones y Ensayos*, No. 33, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, julio-diciembre 1982.

----- *Urquiza y su tiempo*. Buenos Aires, Eudeba, 1980 (1ra. Edición 1971).

----- *Historia de Entre Ríos*, Colección Historia de nuestras provincias, Paraná, Plus Ultra, 1978 (2da. Edición 1991)

----- “La misión Escalada en Entre Ríos” en Revista *Universidad*, No. 30, Universidad Nacional del Litoral, 1956, pp. 43-52.

----- Justo José de Urquiza, Diputado Provincial (1826 y 1827) *Anuario de Historia Argentina 1943-1945*, Sociedad de Historia Argentina, Vol. 5, Bs. As., 1947

----- *Gobierno del Coronel Mansilla*, Buenos Aires, Imprenta López, 1942.

Calvento, Mariano *Estudios de la historia de Entre Ríos*, Paraná, 1940.

Chianelli, Trinidad “Vicisitudes de unos colonos ingleses” en Revista *Todo es Historia*, Buenos Aires, Septiembre 1980, Año XIII, No. 160, pp. 44-65.

----- “La Sociedad Entrerriana y el primer levantamiento rural argentino” en Revista *Todo es Historia*, Buenos Aires, julio 1977, No. 122, pp. 82-95.

Chiara, Graciela “Comercio y comerciantes italianos en La Victoria, 1833-1843”, Seminario de Historia Argentina, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, 1988. (Inédito).

Djenderedjian, Julio “Roots of Revolution: Frontier Settlement Policy and the Emergence of New Spaces of Power in the Río de la Plata Borderlands, 1777 – 1810”, en *Hispanic American Historical Review* 88:4, Duke University Press, 2008, pp. 639-668.

-----“*Da Locum melioribus*. Política imperial, procesos de poblamiento y conformación de nuevos espacios de poder en las fronteras rioplatenses tardocoloniales como raíces de la insurgencia revolucionaria” Ponencia II Jornadas Historia Regional Comparada, Porto Alegre, Brasil, 2005.

----- “Buenos negocios en tiempo de guerra: el comercio de cueros en el Litoral según las Cuentas de Cipriano de Urquiza, 1816-1820” en *Anuario del IHES*, UNICEN, No. 17, 2002, pp. 243-259.

Gianello, Leoncio *Historia de Entre Ríos*, Paraná, 1951.

Pérez Colman, César *Historia de Entre-Ríos, 1520-1810*, Tomos I, II, III, Imprenta Oficial, Paraná, 1936.

Poenitz, Erich L. W. E. “Entre Ríos durante la época de Estanislao López” Conferencia, *Jornadas Nacionales de Historia del Federalismo*, Conmemoración del Bicentenario del nacimiento del Brig. Gral. Estanislao López, Gobierno de Santa Fe, Secretaría de Planeamiento, Santa Fe, 1986.

Pressel, Griselda “Hacia un sistema republicano. La justicia en el paso del Antiguo Régimen a la Modernidad. Entre Ríos a mediados del siglo XIX” en Barriera D. (comp.) *La Justicia y las formas de la autoridad. Organización política y justicias locales en territorios de frontera. El Río de la Plata, Córdoba, Cuyo y Tucumán, siglos XVIII – XIX*, Rosario, ISHIR-CONICET, Red Columnaria, 2010, pp. 193 a 207.

Reula, Filiberto *Historia de Entre Ríos. Política, étnica, económica, social, cultural y moral*, Santa Fe, Castellví, 1963.

Ruiz Moreno, Martín *La provincia de Entre Ríos y sus leyes sobre tierras*, Paraná, Guttemberg, 1896, Tomo I.

Sagarna, Antonio “Entre Ríos (1820-1862)” en *Historia de la Nación Argentina, Academia Nacional de la Historia*, Vol. IX, Ateneo, Bs. Aires, 1946.

Schmit, Roberto y Djenderedjian Julio. “Sociedad y economía de Entre Ríos entre el orden colonial, la Revolución y la República” en Silva, Hernán (Director Gral.) *Los caminos del MERCOSUR. Historia Económica del Cono Sur de América. La era de las revoluciones y la independencia (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Vol. II*, IPGH-OEA, México, 2010, pp. 653–695.

Schmit, Roberto *Los límites del progreso: expansión rural en los orígenes del capitalismo rioplatense. Entre Ríos, 1852-1872*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2008.

----- *Ruina y resurrección en tiempos de guerra. Sociedad, economía y poder en el Oriente entrerriano posrevolucionario, 1810-1852*, Prometeo, Buenos Aires. 2004.

-----“Enlaces conflictivos: comercio, fiscalidad y medios de pago en Entre Ríos durante la primera mitad del siglo XIX” en Irigoin María Alejandra, Schmit Roberto (Eds.) *La desintegración de la Economía Colonial. Comercio y moneda en el interior del espacio colonial (1800-1860)*, Buenos Aires, Biblos, 2003.

Segura, Juan José. *Historia eclesiástica de Entre Ríos*, Nogoyá, 1969.

Teijeiro Martínez, Benigno. *Historia de Entre Ríos*, Tomo 2, Paraná, 1910.

Urquiza Almandoz, Oscar. *Historia Económica y Social de Entre Ríos*, Buenos Aires, Banco Unidos del Litoral, 1978.

----- *Historia de Concepción del Uruguay*, Tomo I, 1783-1826 y Tomo II, 1826-1870. Acceso: <http://www.logiawashington.org.ar/016.htm>

Vázquez, Aníbal *Del pasado entrerriano*, Colección Nuevo Mundo, Santa Fe, Ediciones Colmegna, 1946.

----- *La República de Entre Ríos*, Paraná, 1930.